

DOCTORADO EN CIENCIA POLÍTICA
ESCUELA DE POLÍTICA Y GOBIERNO
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTÍN (UNSAM)

***“LOS LIDERAZGOS PRESIDENCIALES DE HUGO CHÁVEZ Y
ÁLVARO URIBE: ¿DOS CARAS DE UN MISMO MODELO DE
EJERCICIO DEL PODER?”***

AUTOR: MARIANO FRASCHINI

DIRECTORA DE TESIS: DRA. MARÍA MATILDE OLLIER

TESIS PARA OPTAR POR EL TÍTULO DE DR. EN CIENCIA POLÍTICA

BUENOS AIRES, JUNIO DE 2013

A Lorena.
Por ayer y hoy

Agradecimientos

Sin lugar a dudas, esta investigación no hubiese sido posible y no hubiese llegado a su concreción de no ser por personas que han colaborado directa o indirectamente con la misma. Luego de cinco años de estudio e investigación sobre los liderazgos de Chávez y Uribe, muchos fueron los docentes, colegas y amigos que me acompañaron en este tránsito académico. A ellos les agradezco infinitamente.

En primer lugar, a María Matilde Ollier por su generosidad, su contención y su apoyo. El haber trabajado junto a ella, me ayudó a ser mejor politólogo y me permitió conocer una persona de una gran calidad humana y desprendimiento. La agradezco fundamentalmente el haber estado siempre presente, aún en los momentos de mayores dudas.

En segundo lugar a mis colegas y compañeros del Doctorado, Lucía Vincent y Lisandro Galucci, por haber leído la tesis y haber aportado con ideas y sugerencias en la investigación durante el inicio de la misma, y en los momentos de mayor incertidumbre. Espero retribuírselo cuando sea el tiempo de sus tesis.

A mis entrevistados que se prestaron generosamente a mis inquietudes y preguntas, en especial a la periodista colombiana Ángela Pinzón, al profesor Norberto Bacher y al analista venezolano Modesto Guerrero. En ellos concentro el agradecimiento a todas las personas que me permitieron conocer más sobre las sociedades venezolana y colombiana.

A los miembros de la Escuela de Política y Gobierno de la UNSAM, a la dirección del Doctorado, a los docentes y a los compañeros de ruta en el camino a convertirnos en doctores, en especial a Carlos Varetto, Santiago Rotman, Federico Quilici, Erica Lanzini, Erica Francescon y Deborah Praghier.

A mis amigos Mauro Dueña, Nicolás Tereschuk, Manuel Halperín, Rubén Guzzetti, Guillermo Telch, Norman Garvie y Juan Manuel Nadalini, por estimularme con sus opiniones en los aspectos formales e informales de esta investigación.

A mis viejos por alentarme desde chico al perfeccionamiento académico y al crecimiento profesional en base al esfuerzo, la constancia y el estudio sistemático.

RESUMEN

Esta tesis aborda en perspectiva comparada los liderazgos presidenciales (LP) de Hugo Chávez Frías en Venezuela y de Álvaro Uribe Vélez en Colombia, entre los años 1999-2010, prestando atención al modo en que ambos han gobernado a partir de la generación y utilización de los recursos de poder (RP) que ostentan por y desde el cargo que ocupan.

En la mayoría de los estudios que examinan los LP de la primera década del siglo XXI, Chávez y Uribe fueron considerados como dos casos opuestos y los situaron en dos cuadrantes diferentes. El líder venezolano ha sido ubicado, sin excepciones, en el extremo izquierdo del espectro ideológico frente al resto de las experiencias de los gobiernos de la región, mientras que el líder colombiano emergía como un exponente de las políticas neoliberales y más cercano a las orientaciones más conservadores. En ese marco, esta investigación se concentra en un tipo de LP que puede tener su origen en la izquierda o en la derecha, que gestiona el Estado desde diferentes posiciones políticas, que tiene disímiles bases de apoyo y aliados nacionales e internacionales, pero que tiene particulares características comunes: intentos desde diferentes posiciones ideológicas de sentar las bases de cambios estructurales en sus países, que gozan de una importante popularidad y que se desarrollan en un tiempo y espacio comunes. Es decir, esta tesis se aparta de las investigaciones que escinden los liderazgos a partir de sus afinidades ideológicas y analiza a ambos presidente desde el punto de vista del ejercicio del poder. Esta investigación, entonces, se interroga sobre cuáles fueron los RP que generaron y utilizaron Chávez y Uribe a lo largo de sus dos presidencias y si pueden encontrarse similitudes en la utilización de estos recursos durante sus años de gobierno.

INDICE

<u>INTRODUCCION</u>	4
<u>CONTEXTO DE LLEGADA</u>	
<u>CAPÍTULO I: EL ASCENSO: HUGO CHAVEZ Y ALVARO URIBE</u>	
Introducción.....	23
1.1. El contexto económico, político y social previo al ascenso de Chávez.....	25
1.2. Hacia Miraflores con los recursos de poder militar y de apoyo popular.....	33
1.3. Contexto Económico, político, social e internacional previo a la asunción de Uribe...	47
1.4. Hacia la Casa del Nariño con los de recursos de poder de un outsider.....	56
Conclusión.....	69
<u>LAS PRIMERAS PRESIDENCIAS</u>	
<u>CAPÍTULO II: LOS RECURSOS DE PODER CHAVISTAS Y EL CAMBIO DE ESTRUCTURAS INSTITUCIONALES (1999-2002)</u>	
Introducción.....	72
1.1. La generación de recursos institucionales para consolidar la revolución bolivariana...	74
1.2. La relegitimación de Chávez y el aumento de los recursos de poder.....	83
1.3. Los días de abril de 2002: la consolidación de los recursos de poder históricos.....	91
Conclusión.....	102
<u>CAPÍTULO III: LA CONSOLIDACIÓN DEL LIDERAZGO DE CHÁVEZ: RUMBO AL SOCIALISMO DEL SIGLO XXI (2003-2006)</u>	
Introducción.....	104
3.1. Las Misiones y Aló presidente, dos recursos de poder típicamente chavistas.....	106
3.2. El referéndum revocatorio, un hito para la reafirmación del LP de Chávez.....	117
3.3. El socialismo del siglo XXI, un nuevo RP marca chavista.....	125
Conclusión.....	136
<u>CAPITULO IV: URIBE Y LA GENERACION DE RECURSOS FRENTE A LOS GRUPOS ILEGALES (2002-2004)</u>	
Introducción.....	138
4.1. La generación de recursos de poder en el primer año de gobierno.....	140
4.2. Un presidente peculiar en la historia colombiana: la construcción de un LP Innovador.....	153
4.3. El RP de la Seguridad Democrática comienza a mostrar resultados.....	163
Conclusión.....	174
<u>CAPÍTULO V: LA REELECCIÓN CON EL RECURSO DEL PARTIDO PROPIO (2005-2006)</u>	
Introducción.....	176
5.1. Los recursos de poder de Uribe en el contexto de crecimiento económico.....	178
5.2. La creación de un nuevo RP: el Partido de la U (ribe).....	187

5.3. La reelección de Uribe: un nuevo RP para la continuidad.....	194
Conclusión.....	201

LAS SEGUNDAS PRESIDENCIAS

CAPÍTULO VI: EL PSUV: UN RP PARA LOS NUEVOS TIEMPOS (2007-2008)	
Introducción.....	203
6.1. La revolución bolivariana se institucionaliza.....	204
6.2. Un nuevo RP: nace el PSUV, el Partido más grande de Sudamérica.....	212
6.3. Los recursos de poder históricos le dan la espalda a Chávez.....	221
Conclusión.....	229
CAPÍTULO VII: RECUPERANDO LOS RECURSOS DE PODER HISTÓRICOS (2008-2010)	
Introducción.....	231
7.1. Las nacionalizaciones chavistas, mayores recursos de poder para el presidente.....	232
7.2. La generación de recursos chavistas ante la crisis internacional.....	241
7.3. Luego de 12 años de chavismo.....	254
Conclusión.....	265
CAPÍTULO VIII: ENTRE TROPIEZOS Y TRIUNFOS POLÍTICOS (2006- 2008)	
Introducción.....	267
8.1. La Parapolítica, pone a prueba los recursos de poder uribista.....	268
8.2. Uribe hace jugar sus recursos: triunfos frente a las FARC y elección regional.....	280
8.3. La PSD, un RP que consolida la estrategia militar de Uribe.....	291
Conclusión.....	303
CAPÍTULO IX: UN LP CON RECURSOS, PERO SIN RE- REELECCION (2009-2010)	
Introducción.....	305
9.1. Los cuestionamientos hacia los recursos de poder uribista.....	307
9.2. Un presidente con abundantes recursos de poder pero sin re-re.....	316
9.3. Luego de ocho años de uribismo.....	327
Conclusión.....	340
<u>CONCLUSION</u>	342
<u>ANEXOS</u>	372

INTRODUCCIÓN

“Antes de Chávez
yo era invisible”

Una mujer caraqueña al autor
durante un acto en Caracas

“Papá, papá, apúrate, ven que
empieza la película de guerra
(mi hijo en los noventa me avisaba que
estaba por comenzar el noticiero de las 7)”

Anécdota contada al autor
en una calle de Santa Marta

En las últimas décadas se observa en Sudamérica un proceso de cambio en el interior de los gobiernos de la región que ha suscitado un intenso debate en el interior del mundo académico y político. Una de las principales características de este proceso es la emergencia de distintos liderazgos presidenciales, que desde disímiles posiciones ideológicas han revelado una nueva modalidad de intervención en la política de sus naciones. En la mayoría de estos países surge una miríada de nuevos líderes provenientes de diferentes ámbitos políticos, académicos, religiosos y sociales, que implementan variadas políticas gubernamentales en el marco de un sostenido crecimiento de las economías del continente. En un contexto de crisis del esquema neoliberal que imperó en la mayoría de los países sudamericanos durante la década del noventa, estos líderes llevan adelante diferentes políticas de gobierno en el interior de un diseño que se presenta como no homogéneo en su implementación y que evidencia continuidades y rupturas con la década anterior.

Una de las características salientes de este fenómeno es la continuidad electoral de los procesos de selección de autoridades. Los distintos líderes sudamericanos validan, y en algunos casos revalidan, sus mandatos presidenciales a partir de este diseño democrático, respetando la fuente de legitimidad del voto popular. Durante la década anterior habían tenido lugar episodios de salidas anticipadas de distintos presidentes sudamericanos por intermedio del instituto legal del juicio político, aunque el mismo no implicó la caída del propio régimen presidencial. Es decir, la evidencia empírica mostraba que la inestabilidad se encontraba en el presidente y no en el sistema presidencialista (Ollier, 2008 y 2010,

Pérez Liñan 2008 y 2009), lo que permitió concentrar la mirada sobre los liderazgos presidenciales más que en el diseño institucional en el que éstos se desenvuelven. Si el presidencialismo per se no dio lugar a la caída de presidentes, la lupa se dirigió hacia la actividad del primer mandatario y a los recursos de poder que el mismo ostentaba o controlaba durante el ejercicio del poder. Es decir, a lo largo de sus mandatos los líderes sudamericanos cuentan con recursos para llevar adelante sus planes de gobierno en un contexto institucional determinado. En este sentido, y esto se explicitará con más detalles en los párrafos sucesivos, el ejercicio del poder de los presidentes se basa en el uso de recursos de poder que los líderes ponen en juego y logran generar a lo largo de su gobierno mediante diferentes estrategias.

El objetivo general de esta tesis apunta a explorar la relevancia del estudio del liderazgo presidencial (LP) en Sudamérica con el fin de entender la dinámica política que se desarrolla en estas democracias. En ese marco, esta investigación aborda en perspectiva comparada los liderazgos presidenciales de Hugo Chávez Frías en Venezuela y de Álvaro Uribe Vélez en Colombia, prestando atención al modo en que ambos gobiernan a partir de la generación y utilización de los recursos de poder que ostentan por el cargo que ocupan. En este sentido, esta investigación se aparta del esquema predominante que escinde a los liderazgos a partir de sus afinidades ideológicas (de la que más tarde daré cuenta), y se concentra en cómo ambos presidentes se desempeñan en el ejercicio del poder.

En los estudios sobre Sudamérica, el LP es un tema que ha sido escasamente estudiado por los investigadores y académicos. A pesar de que su relevancia ha sido destacada en los estudios del presidencialismo y en los análisis sobre la región (Linz, 1990; O'Donnell, 1997; Mainwaring, 2002; Valenzuela, 2004 y Hakim, 2003), se ha procedido muy pocas veces a su sistematización (Ollier, 2008: 76). En este sentido, fue en los países centrales en donde el estudio de los liderazgos presidenciales ha tenido mayores exponentes y donde ha generado las mayores investigaciones en esta área. En Sudamérica encontró mayor difusión a partir de su vinculación con la crisis de representación que durante la década del noventa y en el contexto de las reformas estructurales acaeció en la mayoría de los países de esa región. Asimismo, durante esa década los estudios académicos recuperaron el concepto de populismo, en la modalidad de “neopopulismo” (Weyland, Kurt, 1996; Robert

Kenneth, 1995; Novaro, 1994 y 1998 De la Torre, 1996 y 1999), para captar este nuevo vínculo que se estableció entre el líder y sus seguidores. En ese sentido, la denominación populista mantiene un vínculo inmediato con el liderazgo, y en la mayoría de los estudios sobre populismo se considera al líder como un elemento esencial del concepto (Panizza, 2009: 31). Desde allí que a pesar de no mencionarse el concepto liderazgo, el mismo estuvo presente en los análisis por intermedio de otras denominaciones.

La literatura académica, en su mayoría estadounidense, que ha procedido al estudio del LP ha incursionado en dos tópicos para abordarlo (Masi, 2011: 21). En primer lugar, ubicamos a los estudiosos del liderazgo presidencial que entienden al líder como un sujeto singular dotado de un saliente poder de decisión, exaltando las dimensiones subjetivas que contribuyen a la construcción del propio liderazgo (visión subjetivista del liderazgo). En segundo término, encontramos aquellos que estudian al líder dentro de un marco institucional e histórico que lo determina y condiciona en el ejercicio de su poder y con el que interactúa en forma dinámica (visión relacional del liderazgo).

El primer grupo de académicos entiende al LP desde la propia destreza, aptitud y características personales del líder. Algunos autores destacan la capacidad de negociación, influencia y fundamentalmente de persuasión (Neustadt, 1960) como pilares de la centralidad política que tiene el presidente en esa escena institucional en su finalidad de conservación de su poder. En ese sentido, cuando un presidente persuade a otros actores aumenta su poder de negociación, el cual constituye uno de los indicadores del éxito de su liderazgo. En la misma línea se expresa Barber (1977) al ubicar la personalidad del presidente como determinante de la capacidad de su liderazgo. Los indicadores que este autor toma en cuenta para sistematizar su estudio descansan en el carácter del líder (sea este activo-pasivo o positivo-negativo) y en la manera de relacionarse con el resto de los actores políticos, y que resultan definitivos para advertir su comportamiento. Asimismo, Rockman (1997) resalta la función de liderazgo en el objetivo de producir procesos de innovación e implementación de políticas públicas, que amplían la representación, la legitimación y la estabilidad política. Por otro lado, Greenstein (1997), desde esta misma perspectiva, edifica otros indicadores que permiten estudiar la capacidad de acción del primer mandatario. La habilidad como comunicador público (las destrezas retóricas) configura un dispositivo de acción presidencial en el objetivo de mantener importantes grados de popularidad. La

habilidad del líder (en tanto pericia y emocionalidad) para construir y mantener un respaldo público, junto a su poder de persuasión y su capacidad para organizar un equipo de apoyo, constituyen los módulos que este autor resalta como los salientes para una eficaz acción de gobierno.

Por último, Hargrove (1998) asevera que son los líderes que ostentan cargos ejecutivos quienes deben utilizar sus habilidades personales a los efectos de alcanzar objetivos adecuados con el contexto histórico. La acción de los presidentes, según este autor, radica en ligar los ideales históricos con los valores colectivos de la nación. Es decir, aquí el acento está ubicado en que el éxito se encuentra en la habilidad presidencial para identificarse con esos valores. En tanto, Renshon (1998) resalta la aptitud de los presidentes (psicológicas y emocionales) para comprometerse con el ejercicio del poder. Los recursos psicológicos que debe ostentar un líder en la función de gobierno son elementos para comprender cómo opera con éxito el presidente a la hora de tomar decisiones políticas. La destreza personal para moverse en un contexto de incertidumbre configura un indicador de efectividad de ese LP.

Por otra parte, dentro de los estudiosos que entienden el LP como una relación que se desarrolla entre el presidente y el resto de los actores en un contexto institucional dado, hay una variedad de autores que enfatiza la importancia de la relación entre el líder y el parlamento (Herring, 1940; Bond y Fleisher, 1990), entre el líder y la justicia (Yates y Whitford, 1998 y Yates, 2000), entre el líder y el entorno social (Elgie, 1995) y entre el líder y el partido (Seligman, 1956). Es decir, estos autores intentan encontrar variables de éxito presidencial, buceando en la relación entre el LP y los distintos componentes del sistema político en su conjunto.

Otros autores, alrededor de esta línea “relacional”, insisten en que son los determinantes de naturaleza institucional los que permiten entender la efectividad del líder en la acción de gobierno. En ese esquema, autores como Amorim Neto (1998) insisten en ubicar la capacidad presidencial para la conformación de los gabinetes (partidarios o no partidarios son sus indicadores) como una de las variables relevantes para el éxito de los liderazgos presidenciales. Mainwaring y Shugart (2002: 12-15) enfatizan que los poderes formales del presidente y el apoyo partidario surgen como elementos clave para medir el éxito del Ejecutivo. Los poderes presidenciales que más interesan a estos autores son los

poderes legislativos del presidente (poderes proactivos y reactivos), los cuales emergen como determinantes para observar la capacidad de los gobernantes para lograr efectividad en la acción política. Por último, tanto Simone Diniz (2005) como Cheibub (2007) enfocan sus análisis en la estructura política institucional y en la capacidad de negociación para la formación de acuerdos institucionales duraderos.

Durante los noventa, la literatura académica sudamericana vinculó la importancia de los liderazgos con la crisis de los partidos políticos, los cuales se vieron debilitados en la capacidad de articular y agregar demandas sociales y/o formular proyectos y alternativas políticas (Bosoer y Leiras, 1999). Esto dio lugar al surgimiento de un nuevo vínculo entre la sociedad y la política basado en un lazo directo de los representantes con sus electores, caracterizado por la “representación personalizada” (Novaro, 1995: 150). Esta nueva relación de los liderazgos con el sistema político en los noventa incrementó, según esta mirada, la capacidad de la gestión pública y de la estabilidad política. Para otros autores, estos nuevos liderazgos “noventistas” contribuyeron pobremente a una politización de la sociedad, al favorecer al poder ejecutivo y a su capacidad “delegativa” (O’Donnell, 1997) para tomar decisiones, relegando a los ciudadanos al lugar de espectadores que no debían intervenir en el proceso político (D’Alessandro, 2004). En ese marco delegativo, entonces, la fragilidad de las reglas colocaba al primer mandatario en el lugar de responsable máximo del proceso de toma de decisiones, frente a un contexto institucional (parlamento y poder judicial) con escasa capacidad de incidencia.

El liderazgo político, concepto central para entender la política sudamericana, será definido, siguiendo a Sergio Fabbrini, como una actividad que supone “una relación que se activa para resolver determinado problema; o para poner en marcha un determinado proceso decisional [...] es una actividad que se desarrolla en un contexto institucional y en un tiempo histórico”¹. Es decir, Fabbrini diferencia al líder, al cual define como un individuo investido de un poder decisional, y por lo tanto constituido como un actor político, del liderazgo, al cual ubica siempre en una relación con un contexto histórico determinado, en el cual se encuentra y condiciona. Es decir, esta actividad se liga con la forma de gobernar

¹ Fabbrini (2009: 24).

del presidente, la cual implica las relaciones que éste establece con los distintos actores que se mueven en la escena institucional y no formal.

En ese sentido, Ollier ajusta la noción de liderazgo propuesta por Fabbrini al caso presidencial. Definirá entonces LP como “la actividad que entraña la forma de gobernar del presidente, la cual implica los vínculos que el jefe de Estado entabla con los partidos, con los otros poderes del Estado y con la sociedad entendida de modo amplio”². Esos vínculos que el presidente pone en juego, a través de diversos mecanismos y circunstancias, tienen como uno de sus objetivos centrales que el primer mandatario resuelva determinados problemas, económicos políticos y sociales, y que produzca resultados que vayan por el mismo sendero que los anhelos de la sociedad en el tiempo concreto en el que dura su mandato.

A partir de este encuadre conceptual, el objetivo central de esta investigación es analizar la gestión presidencial de los liderazgos de Hugo Chávez en Venezuela y Álvaro Uribe en Colombia, en perspectiva comparada. Con esa finalidad, utilizaré la perspectiva teórica propuesta por María Matilde Ollier (2008: 76-77) para analizar las caídas presidenciales sin cambio de régimen en Sudamérica. A pesar de que esta investigación aborda LP que han tenido experiencias estables de gobierno, el esquema utilizado para analizar a los presidentes sudamericanos de Ollier me provee el marco adecuado para analizar el modo en que ejercitan el poder ambos mandatarios. En este sentido, debemos indicar que el contexto similar (Sudamérica, democracias representativas presidencialistas de baja institucionalización³, escasas rupturas de régimen a lo largo de su vida política, países limítrofes con historias comunes, etc.), en que se aplica este marco conceptual ofrece la posibilidad de observar el despliegue de estos liderazgos, que no sufren inestabilidad presidencial y presentan una fortaleza en el ejercicio del poder, como los que aquí intentaremos describir y analizar⁴. Según esta visión, la variable que permanece constante

² Ollier (2008: 76).

³ Ollier (2010a), tomando como punto de partida el concepto de democracia delegativa acuñada por O'Donnell, intenta descifrar las democracias representativas presidencialistas de baja institucionalización como las que aquí se intentarán analizar, a partir de dos rasgos que la definen en toda su dimensión: “la centralidad, entendida como preponderancia, del liderazgo presidencial y la baja institucionalización (formal e informal) de las relaciones políticas”.

⁴ En un texto posterior, Ollier (2010b: 4) extiende su estudio a los liderazgos presidenciales que denomina de concentración presidencial (es decir presidentes con alto grado de concentración del poder), para analizarlos junto a los primeros mandatarios que han sufrido crisis de inestabilidad presidencial. La premisa de la cual parte la autora es “que la frágil institucionalización de las relaciones políticas constituye el campo fértil en los

en este estudio es el régimen político, mientras que el LP es la variable explicativa para entender la debilidad o fortaleza de la posición presidencial. Desde esa lógica es que se debe prestar mayor atención al LP, y, en consecuencia, a los recursos de poder que éste posee y genera en el ejercicio del poder.

Esta perspectiva teórica descansa en el análisis de los recursos objetivos y subjetivos que un presidente ostenta o es capaz de concebir en el ejercicio de sus mandatos presidenciales (Ollier, 2008: 77). Los recursos objetivos de un presidente se extienden en el marco político-institucional; esto es: el partido político o la coalición de partidos que forma parte del gobierno, las diversas instituciones y dimensiones donde se expresa y los distintos actores e instituciones sobre los que goza de algún tipo de control (es decir, sindicatos, indígenas, fuerzas armadas, movimientos sociales, gobernadores, paramilitares, etc.). Los recursos subjetivos, por otro lado, se definen a partir del uso que el presidente hace de estos recursos objetivos y de su capacidad para generar nuevos por intermedio de sus propias acciones o de la gestión de gobierno (aquí se presta atención al discurso presidencial y a los distintos vínculos que establece con la sociedad). En ese sentido, el presidente cuenta a su favor con instrumentos como son las políticas públicas, el discurso, las maniobras políticas y su relación con la opinión pública para incrementar su popularidad y apoyo. Sin embargo, en tanto estos recursos se desenvuelven en un contexto socioeconómico, éste impacta de forma positiva o negativa a la acción de dichos liderazgos. Ese contexto, en el esquema teórico que guiará esta tesis, se denomina factor externo a la dinámica política (Ollier, 2008: 77).

Se debe aclarar que desde este marco teórico se observan, también, los recursos de la oposición y del resto de los actores intervinientes desde una perspectiva que se aleja del análisis estático de quienes se enfrentan al primer mandatario enfatizando, de ese manera, la dinámica política en la que acontece y se desarrollan ambos LP. A su vez, se aclara que la ausencia de una variable constituida en soledad por un “contexto internacional” en dicho esquema teórico obedece a que la elucidación de la fortaleza o debilidad de los presidentes sudamericanos se explica, fundamentalmente, por la primacía que tienen razones endógenas. Sin embargo, en el contexto socioeconómico que opera como factor externo a la

cuales crecen estos casos extremos de LP. Es decir, centralización e inestabilidad presidenciales resultan dos caras de un mismo patrón democrático”.

dinámica política y en los recursos de poder presidencial se encuentran dimensiones que toman en cuenta el marco internacional y cómo juegan los actores dentro del mismo.

El marco teórico propuesto por Ollier se adecua perfectamente a la problemática de los LP de Sudamérica y resulta ser el más rico para entenderlo en toda su magnitud. A pesar de que el estudio del LP, como se observó en forma precedente, ha sido abordado con mayor sistematicidad en los estudios europeos y estadounidense, este esquema conceptual resulta ser el más adecuado para la comprensión de los LP en nuestra región ya que logra captar en toda su dimensión los avatares y particularidades de la dinámica política sudamericana. Es decir, este marco teórico, al familiarizarse con las experiencias de la región, se acopla de manera inmediata con la temática de los LP del Cono Sur evitando, de esa manera, transportar en forma mecánica encuadres teóricos fabricados en otras latitudes y ajenos a la problemática del continente.

En esta investigación, sin embargo, ajustaremos la distinción teórica de Ollier de recursos objetivos y subjetivos, proponiendo en su lugar el concepto de Recursos de Poder (RP). La lógica de esta decisión analítica se justifica a partir de entender que la división de los recursos que un presidente puede ostentar o generar (sean objetivos o subjetivos) puede dificultar la comprensión ya que muchos de los recursos que un presidente consigue a partir de la propia habilidad como gobernante (subjetivos) luego pueden convertirse en objetivos. Teniendo en cuenta que el propósito principal de esta investigación es mostrar cómo los presidentes ejercen el poder, resulta pertinente adecuar la conceptualización analítica a los intereses que esta tesis persigue, que es demostrar cómo estos líderes gobiernan sus sistemas políticos. A partir de la utilización de los RP, se evita comprimir en celdas diferentes a los distintos recursos de poder que los presidentes utilizan y generan durante su acción de gobierno, priorizando dar cuenta de qué recursos ponen en juego y de qué forma crean nuevos, durante el ejercicio del poder presidencial, más que de su ubicación en cuadrantes excluyentes. De esta manera, y mediante este esquema, se captura en toda su dimensión los RP, lo cual permite comprender de manera cabal la forma de gobernar de ambos mandatarios.

Por las razones expuestas, dividiremos a los RP en institucionales, sociales, financieros, de estrategia política y de apoyo popular/ ciudadano. Los *RP institucionales* serán definidos a partir del control que el presidente ejerza sobre: a) el parlamento

(mediante una mayoría legislativa propia o en alianza de partidos) y los gobernadores (sean estos del propio partido o coalición de otros partidos aliados al presidente), b) a la influencia que el primer mandatario posea sobre el poder judicial (ya sea a partir de la designación de jueces propios o la ampliación de los cuerpos judiciales), c) a la ascendencia o la conducción de actores centrales para estos países como son las Fuerzas Armadas, d) al control del presidente despliegue sobre un partido político (puede ser una agrupación preexistente o creada) o de una alianza o movimiento de partidos en el cual el primer mandatario posea una importante injerencia en la conducción política, entre los más importantes. Los *RP sociales* refieren al control del presidente sobre actores sociales como son los empresarios, los sindicatos, los distintos movimientos sociales, estudiantiles o de grupos paramilitares. Los *RP financieros* hacen alusión al control que el presidente ostenta sobre beneficios económicos provenientes de distintas organizaciones, empresas del Estado, ayuda del exterior u otra forma de financiamiento, sea esta generada por el propio líder o preexistente a su emergencia política, y que el primer mandatario puede utilizar para sus planes de gobierno. En cuanto a los *RP de estrategia política* remite a la construcción que realizan ambos presidentes del propio LP a partir del estilo de ejercer el poder y cómo son visualizados por la propia población. Los mismos serán definidos a partir de: a) la habilidad y destreza del líder para crear nuevos escenarios institucionales, b) la capacidad de imaginar herramientas para resolver problemas de gobierno, c) la creación de nuevos recursos de poder para fortalecer su propio LP o su posición institucional, d) la generación de maniobras políticas para mantenerse en el gobierno, e) la utilización o generación de canales de comunicación que los presidentes exhiban como espacios de relación directa con la ciudadanía o que posean algún control sobre los mismos que eviten la crítica a la acción gubernamental y f) las cualidades personales y políticas del líder (personalidad política) que son valoradas por la población y que se miden en estudios de opinión. Por último, el *apoyo popular / ciudadano* es otro de los RP, el cual se observará a partir de tres ejes: a) el respaldo electoral en los distintos comicios del periodo, b) la movilización política de sus bases de apoyo y c) la popularidad presidencial medida en estudios de opinión. Denomino a estos recursos apoyo popular/ ciudadano debido a que entiendo al pueblo como un actor que vota en elecciones, que se moviliza y que tiene derechos ciudadanos.

La adopción de este marco teórico supone un salto de calidad en lo que hace al análisis del LP. Esta novedosa perspectiva teórica sintetiza los marcos teóricos expuestos en base a las dos orientaciones predominantes en el análisis del LP: el líder entendido como un sujeto singular conferido de un poder de decisión (visión subjetivista) y quienes entienden al liderazgo dentro de un marco institucional e histórico con el que interactúa dinámicamente en el ejercicio de su poder (visión relacional). La propuesta teórica planteada por Ollier incorpora elementos de ambas perspectivas desde una mirada mucho más abarcativa. En ese sentido, en cuanto a síntesis, incorpora, a partir de nuevas categorías, unidades temáticas presentes en el estudio histórico del liderazgo presidencial.

El concepto “recurso objetivo” planteado en el marco teórico de Ollier recupera de otros autores la capacidad del poder ejecutivo para relacionarse con otros actores del sistema político, como así también su relación con los partidos y el control que pueda ejercer el mismo sobre los otros poderes del Estado. En cuanto a la noción de recurso subjetivo, la perspectiva que utilizaré rescata los elementos analizados por distintos autores que hace a las habilidades presidenciales para construir poder, articular coaliciones estables, coordinar acciones de gobierno, neutralizar oposiciones antisistema, consolidar regímenes democráticos, etc. Es decir, el esquema teórico planteado por Ollier recobra varios de los tópicos establecidos por los autores expuestos en forma precedente, que son sintetizados a partir de los conceptos de recurso objetivo y subjetivo y que aquí denominaré recursos de poder. Esta perspectiva, por otro lado, incorpora elementos de la economía al prestarle especial atención al papel que juega el contexto externo a la dinámica política en la formación de los líderes. En ese sentido, sobresalen los problemas socioeconómicos que el primer mandatario debe resolver y que impactan de manera positiva o negativa sobre los recursos de los que dispone a la hora de ejercer el poder en un contexto específico.

Abordar los LP desde esta posición teórica garantiza incorporar elementos que son centrales para entender la eficacia de los presidentes. Me refiero, específicamente, a los recursos que un presidente puede ostentar y que no están presentes en el marco institucional, como son los llamados poderes informales. Estos poderes no se encuentran enmarcados constitucionalmente, por lo que no prestarle atención a su existencia resulta insuficiente para medir en toda su dimensión los recursos reales con los que cuentan los presidentes dentro del sistema político. Las categorías provenientes de este marco teórico

(los que aquí llamaremos recursos de poder) logran captar en toda su magnitud esta clase de poder, que una mirada enfocada solo en el diseño constitucional puede no aprehender. Es decir, una mirada institucionalista del proceso carece de la potencia necesaria para poder comprender en totalidad los poderes presidenciales en el marco del sistema presidencialista sudamericano. Esta perspectiva teórica permite comprender aspectos salientes de la dinámica política de la región, como son el marco político-institucional, las relaciones del primer mandatario con los actores político-sociales del sistema, los recursos de poder que ostenta o genera en la acción de gobierno (formales e informales), el contexto socioeconómico en el que se inscribe, los recursos de la oposición, entre otras dimensiones explicativas. En esta interacción entre la estructura política y la singularidad del liderazgo presidencial, pueden percibirse de forma más abarcativa los avatares de un contexto político tan particular como el sudamericano.

¿Por qué comparar a Chávez y Uribe?

Los estudios académicos que abordaron la problemática de los nuevos gobiernos en la región durante la última década insisten en visualizar la existencia de una homogeneidad ideológica y proclive al cambio, la que denominaron “giro a la izquierda” (Lanzano, 2006; Paramio, 2006; Cheresky, 2007; Arditi, 2008; Roberts, 2008; Sader, 2008) y que otros, con menor precisión, designaron simplemente como posneoliberal (Natanson, 2010). Este giro ideológico, el cual no tiene precedentes en la historia sudamericana (Levitsky y Robert, 2011), muestra la presencia de una mayoría de gobiernos con ese color político que aplican políticas de izquierda en diferentes contextos y con disímiles contenidos, pero que tienen un núcleo común que es el abandono de las políticas neoliberales que fueron predominantes en la región durante la década del noventa. Entre 1999 y 2006 seis de los diez países sudamericanos⁵ cambiaron la tonalidad política regional dando lugar al predominio de gobiernos que dejaron atrás las políticas implementadas en la década anterior.

Sin embargo, los analistas de este “giro a la izquierda” destacaron la escasa uniformidad entre las políticas de estado aplicadas durante estos últimos años en

⁵ A los efectos del análisis, no tomo en cuenta Surinam y Guyana, que integran la región por considerarlos países portadores de otro recorrido histórico, otras raíces culturales, etc.

Sudamérica, lo que los llevó a ubicar a los diferentes líderes que emergieron durante estos años en diferentes cuadrantes y encuadres teóricos. En ese marco, y en base a cómo se caracterizó la personalidad del liderazgo y las políticas económicas implementadas por dichos gobiernos, se diferenció dentro de este “giro a la izquierda” sudamericano a dos grandes bloques denominados con diferentes conceptos: moderada y radical (Weiland, 2008 y 2009), socialdemócrata y populista (Panizza, 2005; Lynch, 2007; Alcántara Saez, 2008), moderna pragmática y demagógica populista (Castañeda, 2006) liderazgo personalizado versus liderazgo de los partidos (Garretón, 2005), reformista versus borbónica (Petkoff, 2005), entre las más importantes.

Dentro de esta misma línea, otros autores visualizaron la existencia de más de dos bloques dentro de los gobiernos de izquierda de la región que presentan una marcada heterogeneidad en las trayectorias, la composición organizativa y las agendas programáticas (Ramírez Gallego Franklin, 2006), o diferenciaron entre una izquierda fundamentalista, una izquierda populista y una izquierda reformadora (Lozano, 2005). Por otro lado, Levitsky y Robert (2011) construyeron una tipología de estos gobiernos a partir de la concentración y dispersión de la autoridad y de organizaciones partidarias sólidas y nuevos movimientos sociales que dio lugar a cuatro diferentes rutas alrededor de las distintas administraciones de orientación ideológica de izquierda.

Sin embargo, algunos analistas resaltaron el clima de cambio de época que dio lugar al nacimiento de una “nueva izquierda (Natanson, 2009; Rodríguez Garavito y Barrett, 2005 y Boersner, 2005) con particulares características, de las cuales dieron cuenta en sus análisis de caso. Por último, otros autores que analizaron el cambio de época en la región reconocen la existencia de tres gobiernos predominantes: conservadores, centro izquierda y radicales (Borón, 2007 y Katz, 2008).

En la mayoría de los estudios que abordan los LP de la primera década del siglo XXI, Chávez y Uribe son considerados como dos casos polares y fueron situados en dos cuadrantes diferentes. En el contexto político del giro a la izquierda en Sudamérica, el líder venezolano ha sido ubicado, sin excepciones, en uno de los extremos de este espectro ideológico frente al resto de las experiencias de los gobiernos de la región. Para la mayoría de estos autores mencionados, Chávez se ubica en el cuadrante más vinculado a la izquierda populista, radical, demagógica y que conduce un régimen político que mantiene

elementos autoritarios. En ese sentido, académicos como Levitsky (2004, 2010 y 2011) y Mainwaring (2012) han definido como “autoritarismo competitivo” al régimen liderado por Chávez, y el primero de los autores define como “populismo de derecha” al liderazgo de Uribe. La posición política frente a EEUU también muestra la polaridad entre ambos países, ya que Colombia establece alianzas estratégicas estrechas y Venezuela asume una confrontación abierta (Serbín, 2008). Para otros autores, sin embargo, tanto Colombia como Venezuela tienen sistemas políticos que se insertan en una zona gris entre la democracia delegativa y el autoritarismo competitivo (Uribe López, 2010), en ambos casos alejados de la democracia liberal.

La literatura académica y política ha examinado en mayor medida el liderazgo de Chávez a partir del “giro a la izquierda” de los países de la región, y ha sido colocado en uno de los polos de esta nueva izquierda, que el de Uribe, el cual ha sido poco examinado en los estudios sobre presidentes sudamericanos, ya que ha sido ubicado en un cuadrante distinto, como es evidente, a la izquierda regional. Es decir, los estudios se abocaron en forma predominante al análisis de estos cambios en el color político de los gobiernos sudamericanos, intentando descifrar los nuevos retos que implicaron estas transformaciones en el continente. Es en ese sentido que los gobiernos de Chávez han recibido una mayor atención por parte de los estudiosos, ya que dicho LP formó parte de uno de los primeros eslabones que enhebraron este “giro a la izquierda” regional que predominó en los análisis que mencioné en forma precedente. En escasas investigaciones, los LP de Chávez y Uribe emergieron como figuras sujetas a comparación, ya que para la mayoría de los analistas dichos LP germinaron como dos casos polares en el interior de la región, ubicándose al venezolano en el cuadrante más intransigente en el espacio ideológico de izquierda y al colombiano en el de los gobiernos neoliberales ajenos al “giro a la izquierda” sudamericana.

Esta investigación se concentra en un tipo de LP que puede tener su origen en la izquierda o en la derecha, que gestiona el Estado desde diferentes posiciones políticas, que tiene disímiles bases de apoyo y aliados nacionales e internacionales, pero que tiene particulares características comunes: intentos desde diferentes posiciones ideológicas de sentar las bases de cambios estructurales en sus países, que gozan de gran popularidad y que se desarrollan en un tiempo y espacio comunes. Es decir, esta tesis se aparta de las

investigaciones que escinden los liderazgos a partir de sus afinidades ideológicas y analiza a ambos presidentes desde el punto de vista del ejercicio del poder.

La elección de estos dos casos se sustenta en que ambos liderazgos emergieron en un contexto de regímenes políticos democráticos de larga duración basados en sistemas bipartidistas. En ambos países, dos partidos dominaban el escenario político sin haber sufrido interrupciones institucionales durante décadas, como sí ha acontecido en la totalidad de los regímenes políticos de Sudamérica. En este sentido, Venezuela y Colombia se convierten en los dos únicos casos de la región donde el régimen democrático se mantuvo inalterable sin intervenciones directas de las Fuerzas Armadas. La particularidad de ambos regímenes fue la permanencia de este marco institucional, el cual contrastó con la experiencia del resto de los países sudamericanos, quienes sufrieron golpes de estado en las variantes cívico-militar y militar⁶.

La permanencia de este régimen democrático en ambos países se basó, fundamentalmente, en los grandes acuerdos institucionales alcanzados por los dos partidos más importantes a partir de pactos que dotaron de estabilidad al sistema político durante más de cuatro décadas. En Venezuela, el pacto de “Punto Fijo” implicó el acuerdo entre los partidos más importantes, Acción Democrática (AD) y el Comité de Organización Política Electoral Independiente (COPEI), de respetar los resultados electorales para evitar rupturas institucionales. La hegemonía de ambos partidos se extendía al campo social, ya que AD ha tenido, desde siempre, un dominio de la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV), la máxima confederación obrera del país. En este sentido, AD y COPEI habían sido los exclusivos canales mediadores entre el gobierno y la ciudadanía, al tiempo que constituían una democracia donde los partidos políticos monopolizaban el proceso político formal y politizaron la sociedad por las líneas partidistas (Lalander, 2004: 33). En el caso colombiano, los acuerdos partidarios dieron como resultado el denominado “Frente Nacional”, entre los partidos Liberal (PL) y Conservador (PC), que se comprometieron a alternar en forma equitativa el poder ejecutivo y legislativo (acuerdo que se extendió por 16 años) para luego dominar la escena política sin intervención de terceros partidos que

⁶ Por otro lado, Venezuela y Colombia han formado durante una década parte de un mismo país (la Gran Colombia 1819-1930) y comparten historias y tradiciones comunes desde sus independencias. A su vez, en el interior del continente, se trata de dos países con similares poblaciones y superficies.

podieran desafiar con posibilidades concretas la hegemonía política electoral de ambos partidos.

A pesar de la estabilidad democrática alcanzada en estos países, dichos acuerdos partidarios, que nacieron ambos en el año 1958, no pudieron resolver las crisis económicas, políticas y sociales que generaron, dando lugar a situaciones de emergencia (económica en Venezuela y de seguridad en Colombia) que pusieron en tensión la legitimidad del régimen democrático. En el caso venezolano, el “Caracazo” en 1989 y el posterior fallido golpe militar de Hugo Chávez, tres años después, significaron el final de un modelo político basado en grandes acuerdos de partidos. En el caso colombiano, el fracasado proceso de paz con las FARC encabezado por el presidente conservador Andrés Pastrana, durante los años 1999 y 2001, y la presencia amenazante e incontrolable de los paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y la misma guerrilla, brindaron el escenario para una crisis política de grandes dimensiones.

En consecuencia, tanto Chávez como Uribe comparten un similar contexto de asunción caracterizado por crisis económica, política y social de magnitud en regímenes democráticos de larga duración basados en sistemas bipartidistas y pactos entre partidos. Sin embargo, los LP de Chávez y Uribe muestran diferencias sustanciales en lo relativo a los modelos económicos que implementaron, en el tipo de políticas públicas que llevaron adelante, en el posicionamiento ideológico al cual adscriben, en el universo político en el cual se posicionan y en las disímiles bases de apoyo y aliados nacionales e internacionales que los sustentan. La trayectoria política de ambos líderes también muestra diferencias en lo relativo a las instituciones por las cuales transitaron, como así también la procedencia social en la que desarrollaron y construyeron su liderazgo. Sin embargo, a pesar de estas diferencias, ambos presidentes promovieron reformas constitucionales con el fin de mantenerse en el cargo por más de dos periodos, impulsaron una fuerte personalización del poder en torno a sus figuras, generaron particulares mecanismos de comunicación con sus sociedades y contaron con un importante respaldo electoral en las distintas elecciones que se realizaron durante los años de estudio. La pregunta de esta investigación, entonces, apunta a responder, en primer lugar, ¿cuáles fueron los recursos de poder (RP) que generaron y utilizaron Chávez y Uribe a lo largo de sus dos presidencias? En segundo término, y teniendo en consideración que ambos líderes se presentan e inscriben en dos

universos teóricos y políticos tan diferentes, pero parecen presentar elementos comunes en la forma de gobernar, ¿pueden encontrarse similitudes en la utilización de recursos de poder durante el ejercicio de su poder?

Esta tesis utiliza el método de investigación provista por el Análisis Histórico Comparado (AHC) para comparar los LP de Chávez y Uribe. Esta elección se sustenta a la luz de que dicha metodología apunta a la comparación sistemática en un contexto histórico delimitado de casos. Es decir, el elemento contextual y específico se revela como dos puntos centrales para los intereses de esta tesis, ya que ubican el objeto de estudio en un espacio y un tiempo determinados. A su vez, al tomar en cuenta pocos casos, los cuales presentan una similitud suficiente para ser significativamente comparados entre sí, se puede arribar a explicaciones y resultados sustancialmente importantes (Mahoney y Rueschemeyer, 2003). El AHC es una método comparativo con el que cuenta las Ciencias Sociales, sobre todo para tomar largos periodos de tiempo en consideración y abordar “grandes preguntas” (Rovira Kaltwasser, 2011: 11); es decir, preguntas que estimulan a pensar en torno a temas que usualmente son planteados por no especialistas y que hacen referencia a desarrollos históricos con importantes consecuencias. Vale decir, esta metodología no apunta a una comprensión universal y ahistórica de casos, sino que circunscribe contextual y temporalmente su objeto de estudio, ganando, de esta manera, en profundidad y conocimiento teórico.

A su vez, y al centrarse en un pequeño número de casos, puede moverse hacia atrás y adelante entre la teoría y la historia en muchas interacciones de análisis, ya que su objetivo es formular nuevos conceptos, descubrir nuevas explicaciones, y refinar expectativas teóricas preexistentes a la luz de la evidencia detallada de casos (Mahoney y Rueschemeyer, 2003). Esta aproximación, por sobre todas las cosas, hace posible un diálogo entre la teoría y la evidencia de una intensidad poco común en la investigación social cuantitativa. La brecha entre la teoría y la historia en los trabajos académicos puede ser subsanada, en ese sentido, a partir de la aplicación de este método, el cual debe advertirse que no se presenta como sustituto de la teoría. Siguiendo a Sckopkol (1984: 76), el AHC sólo puede aplicarse con la ayuda indispensable de conceptos o hipótesis teóricas, ya que por sí solo este método no puede definir al fenómeno que debe estudiar, ni puede aportar las hipótesis causales que se explorarán. Todo esto debe proceder de la imaginación

macrosociológica, informada por los debates teóricos de la época, y sensible a las pautas de evidencias para conjuntos de casos históricos, en tanto que los casos deben ser minuciosamente elegidos y debe quedar explícito el criterio empleado al reunirlos.

La “comparación por pares” (Whitehead, 2011) que esta investigación desarrolla posee como propósito central profundizar el conocimiento de dos procesos individuales y únicos (los LP de Chávez y Uribe), más que revelar verdades generales universalmente aplicables. La ventaja de aplicar este método, entonces, se sostiene a partir de que “cuando solo se consideran dos casos en profundidad, las categorías de clasificación y las teorizaciones prefabricadas del analista general pueden estar sujetas a un examen crítico más riguroso (y a posibles ajustes a la luz de la evidencia) que cuando se procesan a la vez demasiados ejemplos o cuando se considera un único ejemplo que requiere ser tratado como “excepción” (2011: 278).

En ese marco, la elección del AHC me provee de los elementos para entender los procesos políticos a partir del dinamismo y la temporalidad que en ellos habita, superando, de esta forma, el análisis estático que ofrecen las perspectivas “instantáneas” (Pierson, 2004: 1). En ese sentido, el AHC contrapone la fotografía (estática) con una película que nos cuenta la historia de cómo arribó cada actor a una posición determinada. Si se toma en cuenta la película, se puede observar la dirección del movimiento de cada uno de los actores analizados, como así también los patrones de interacción entre ellos, resaltando la dimensión temporal y dinámica. Asimismo, los científicos sociales, bajo esta metodología, logran situar sistemáticamente momentos particulares (en los cuales se incluye el presente) en una secuencia temporal de eventos y procesos que se extienden a través de extensos períodos, como el que aquí pretendemos estudiar⁷. En este sentido, al ubicar la política en un tiempo histórico determinado se enriquece enormemente nuestra comprensión de dinámicas sociales complejas.

⁷ “Cuando las personas con un conocimiento amplio de las ciencias sociales acusan a quienes practican las comparaciones en par de tener “sesgos de selección” en su elección de casos, se les puede contestar con la contraacusación de “sesgos de interpretación” debidos a la elección prefabricada de categorías y cadenas causales pronosticadas que estructuran la mayoría de los estudios que se basan en muestras grandes... Pero las comparaciones pareadas pueden mejorar la precisión del análisis comparativo más amplio, por ejemplo, especificando subtipos y aclarando su alcance y limitaciones” (Whitehead, 2011: 279).

Esta tesis se compone de tres partes y una conclusión. La Primera Parte de esta investigación, titulada “El contexto de asunción de Hugo Chávez y Álvaro Uribe” aborda en sus dos capítulos, por un lado, las condiciones económicas, sociales y políticas en las que se encontraba Venezuela y Colombia con anterioridad al arribo al gobierno de ambos líderes; y por otro, detalla la trayectoria política e institucional de Chávez y Uribe y las acciones e iniciativas adoptadas por ambos para construir poder en torno a su liderazgo. En este sentido, se describe la generación de recursos de poder por parte de ambos líderes en la oposición y de qué forma van edificando su liderazgo de ruptura frente a la institucionalidad precedente.

La Segunda Parte denominada “Las primeras presidencias de Chávez y Uribe” contiene seis capítulos. Los tres primeros están dedicados al LP del venezolano y los tres últimos al primer mandatario colombiano. El capítulo I describe las transformaciones institucionales de Chávez durante los años 1999 y 2000 y que derivan en la relegitimación de su cargo y en la generación de nuevos recursos de poder en un contexto de una profunda escisión en el interior de la sociedad venezolana. El capítulo II se concentra en los años 2002 y 2003 y analiza las intensas luchas alrededor del fallido golpe militar de abril de 2002 y el paro petrolero de 2003, y cómo estos hechos impactan en la consolidación del LP del primer mandatario venezolano. Por otro lado, se describen los recursos de poder construidos por el Chávez desde el año 2003: las Misiones Bolivarianas y *Aló, Presidente*. El capítulo III examina los años 2004 y 2006 deteniéndose en el triunfo de Chávez en el referendo revocatorio de agosto de 2004, en el anuncio del primer mandatario de la orientación socialista de su gobierno, y en la reelección presidencial de finales de 2006. Estos nuevos recursos de poder (de apoyo popular y de estrategia política) generados por el líder bolivariano le van a permitir continuar en el gobierno por un nuevo periodo. El capítulo IV, se analiza los primeros años de gobierno de Uribe en los que se destacan la implementación de la política de “Seguridad Democrática” y los procesos electorales del referendo “antipolítica” y de las elecciones regionales. Allí se observa como el líder colombiano comienza a generar recursos de poder que le permitirá avanzar los sobre los grupos irregulares. El capítulo V se concentra en los años 2003 y 2004 y examina los primeros triunfos del gobierno contra las FARC y el inicio del proceso de negociación frente a las AUC, en un contexto de incremento de los recursos de poder de Uribe. Por último, en el

capítulo VI, se abordan los dos recursos de poder (partidario y de estrategia política) generados por el primer mandatario colombiano entre los años 2005 y 2006: el Partido de la “U” y la reforma constitucional que habilitó la reelección presidencial.

La tercera parte compuesta de seis capítulos, aborda en el primero el proceso de constitución partidaria del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), el nuevo RP generado por Chávez luego del triunfo electoral de diciembre de 2006. El capítulo II, analiza el primer traspie electoral del presidente venezolano y cómo impacta esta derrota en el interior de su gobierno. A su vez se examina la creación de nuevos recursos de poder de estrategia política por parte de Chávez a partir de un proceso de nacionalizaciones y expropiaciones de empresas privadas y la posterior recuperación electoral en las elecciones de 2008 y 2009, en esta última conquistando un nuevo recurso: la reelección indefinida. El capítulo III analiza en su primera parte la generación de nuevos recursos de poder por parte de Chávez en el contexto de crisis internacional y las elecciones parlamentarias de septiembre de 2010; en la segunda se examinan los índices económicos y sociales luego de doce años de gobierno chavista. El capítulo IV estudia el fenómeno de la “Parapolítica” al inicio del segundo gobierno y sus efectos sobre el LP de Uribe y sus recursos de poder. El capítulo V analiza en totalidad el año 2008 observando los triunfos militares del gobierno frente a las FARC y los cuestionamientos que sufren dos de los recursos de poder de Uribe: la “Yidispolítica” y los “falsos positivos”. El capítulo VI, examina, por un lado, el proceso de reforma constitucional planteada por Uribe para obtener un nuevo mandato a partir del análisis de los recursos de poder puestos en juego por el primer mandatario; y por el otro, estudia los índices económicos y sociales de los ocho años de gobierno uribista.

Por último, esta investigación culmina con una conclusión en la que se responde a los interrogantes planteados al inicio.

CONTEXTO DE LLEGADA

CAPÍTULO I

EL ASCENSO: HUGO CHÁVEZ Y ALVARO URIBE

“Para ustedes y para el mundo entero:
Si llámenme golpista. Yo le di un golpe
a Carlos Andrés Pérez. Pero el golpe
de Chávez es el golpe del pueblo”

Hugo Chávez (2002)

“Los líderes tienen que aprender a enfrentar
procesos de desgaste. Uno no puede pretender
en países con tantas dificultades como
Colombia, conseguir ese apoyo nadando
siempre del lado de la corriente.
Muchas veces hay que nadar
un rato contra la corriente”

Álvaro Uribe (Medellín, 2008)

Introducción

En este capítulo se examina y se describen dos aspectos centrales: por un lado el contexto económico político y social venezolano anterior a la llegada Chávez al gobierno y los primeros años del líder bolivariano desde el fallido golpe militar de febrero de 1992 hasta la victoria electoral de diciembre de 1998; por el otro, el contexto económico, político y social previo a la asunción de Uribe, tomando como referencia la crisis por la cual transitaba el país hacia fines de la década del noventa, y la trayectoria del líder colombiano desde principios de los ochenta hasta su ascenso al gobierno en agosto de 2002.

Dentro de ese marco, en los dos primeros ítems en primer término se examinan las décadas previas a la irrupción de Chávez en la política, haciendo foco en las condiciones económicas y sociales en las que se encontraba el país. En ese sentido, se analizan los acuerdos entre AD y COPEI que dieron origen al denominado Pacto de “Punto Fijo” y su impronta en el interior de la sociedad venezolana. De esta manera, se observa el rol desempeñado por los actores políticos y sociales en el mantenimiento de dicho compromiso institucional y de qué forma el “Caracazo” determinó su perdurabilidad.

Por otro lado, se describe el itinerario de Chávez hacia el Palacio de Miraflores; para ello se especifican los recursos de poder con los que contó el líder bolivariano y cómo fueron utilizados para hacerlo crecer en las encuestas electorales y ganar la elección presidencial. En este sentido, se analiza la importancia de su primera alocución pública luego del fallido golpe de estado para su posterior instalación pública (recurso de estrategia política comunicacional) y se describe cómo Chávez, una vez liberado, fue construyendo su camino hacia la primera magistratura a partir de la bandera del llamado a una “Asamblea Constituyente”. En ese trayecto se visualiza con qué recursos de poder el líder bolivariano fue conformando su alianza de partidos (recurso institucional partidario) y cómo fueron los resultados electorales en las dos compulsas del año 1998 (recurso de apoyo popular/ciudadano).

En los últimos dos ítem dedicados a Uribe, se describen, en primer lugar, el frustrado proceso de paz con la guerrilla encabezado por el gobierno conservador de Pastrana, la crisis económica que hará eclosión en el país durante 1998 y 1999 y la configuración de un nuevo orden internacional, luego de los ataques terroristas en suelo norteamericano, que tendrá una consecuencia directa en el conflicto interno. La conjunción de estos tres episodios irá configurando un escenario crítico para el sistema político colombiano y permitirá la emergencia de salidas novedosas como la encarnada por Uribe a principios del 2002.

En segundo lugar, se examina el recorrido del antioqueño en los distintos estamentos de la función pública y en el interregno previo a su asunción a la presidencia. En ese marco se observa el periplo que conduce a Uribe a la primera magistratura, desde sus primeros pasos en la gestión municipal hasta sus dos mandatos legislativos en el senado y su gobernación en el departamento de Antioquia. Más tarde se analizan los cuatro años que median entre el abandono de la gestión política y su éxito electoral a partir de los recursos de poder que va adquiriendo al compás de su posicionamiento frente al fenómeno guerrillero y a su habilidad para lograr convertirse en una alternativa viable para el sistema político colombiano. A su vez, se examina la importancia que tuvieron para el país los sucesos del 11 de septiembre de 2001 y de qué manera este episodio se convirtió en un escenario favorable para los intereses de Uribe al inicio de la campaña electoral para la presidencia de 2002.

1.1. El contexto económico, político y social previo al ascenso de Chávez

Este ítem describe el contexto económico, político y social (como factor externo a la dinámica política) que configura el escenario del ascenso de Chávez al Palacio de Miraflores. En ese sentido, se exponen las condiciones de arribo al poder del líder venezolano con un especial énfasis puesto en los años ochenta y noventa, y sobre todo en un hecho clave para la historia venezolana: la protesta social conocida como “Caracazo”.

El contexto de descomposición de “Punto Fijo como puerta de ingreso de Chávez

El contexto político, económico y social no podía ser más propicio para las aspiraciones de Chávez. La crisis definitiva en la que se encontraba el sistema partidario venezolano dejaba entrever que las soluciones podían llegar a transitar senderos no tradicionales.

Desde el año 1958 se había conformado en Venezuela un acuerdo entre los principales partidos políticos, los empresarios, los trabajadores, las Fuerzas Armadas y la Iglesia denominado “Pacto de Punto Fijo”. La idea central de este modelo era establecer un sistema informal de consulta y participación que dotara de estabilidad política a la nación luego de la experiencia autoritaria de Marcos Pérez Jiménez; estaba basado en las reglas de la unanimidad, la negociación y la conciliación de intereses⁸. Este pacto, que quedó institucionalizado en la Constitución de 1961⁹, fue capitaneado en lo político por las grandes agrupaciones partidarias Acción Democrática (AD), Comité de Organización Política Electoral Independiente (COPEI) y la Unión Republicana Democrática (un partido menor que luego sería absorbido por los dos partidos mayoritarios).

Para su eficaz funcionamiento, este acuerdo requirió de una serie de condiciones que le permitieron perdurar durante décadas. Entre ellas se destacaban: la existencia de recursos suficientes para el Estado y obtenidos a partir de la renta petrolera y destinados a satisfacer de un nivel relativamente bajo de demandas populares; un número reducido de

⁸ El Pacto, según Bonilla y El Troudi (2004: 34) establecía “que los firmantes, independientemente de que cualquiera de ellos saliera derrotado en los comicios presidenciales, apoyarían al ganador de las elecciones para cerrarle el paso a una nueva dictadura y al peligro comunista”

⁹ “El mismo día en que se firmó la Constitución de 1961 se suspendieron las garantías constitucionales, tomando como excusa la lucha guerrillera que ya se insinuaba, liderada por el PCV y el MIR” (Aznárez, p. 50). Debe advertirse que el PCV, que había sido protagonista de las luchas por derribar el gobierno militar, fue excluido del Pacto.

actores y un alto grado de homogeneidad entre ellos; y la existencia de grandes y sólidas organizaciones, que -como los partidos políticos y los grupos de presión- se caracterizaran por un alto grado de agregación y articulación de intereses (Biderbost y Cruz Hermida, 2008: 29). Es decir, el funcionamiento exitoso de este gran acuerdo político y social dependía de varios pilares. Entre los más importantes estaban la renta petrolera como factor de ingreso de divisas internacionales y el encauzamiento de los conflictos sociales por un único canal político- institucional.

A partir de ese momento y hasta la caída del “adeco” Carlos Andrés Pérez, en 1993, ambas agrupaciones políticas lograron capturar entre el 80% y el 90 % de los votos en las elecciones presidenciales¹⁰. Esta preeminencia se extendía al campo social, ya que Acción Democrática había tenido una posición casi hegemónica en su dominio de la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV), la máxima confederación obrera del país. La AD y COPEI, en ese sentido, habían sido los exclusivos canales mediadores entre el gobierno y la ciudadanía, al tiempo que constituían “una democracia donde los partidos políticos monopolizan el proceso político formal y politizaban la sociedad por las líneas partidistas”¹¹. Se tornaba evidente que una crisis en el interior de este formato partidario terminaría hiriendo el conducto principal desde donde se sostenía la democracia pactada venezolana.

Este “exitoso” modelo de conciliación de las élites comenzó a mostrar señales de agotamiento en su capacidad para dar respuesta a las demandas populares a partir de finales de los años setenta y principios de los ochenta. El año 1983 representa el punto de declive del acuerdo de “Punto Fijo” luego de que la devaluación del bolívar introdujera un cuadro que dislocaba la lógica consensual en que se basaban las reglas del juego político y social. A partir de ese momento, se iniciaría un conjunto de protestas populares que no encontraría canales alternativos a los ofrecidos por los tradicionales partidos eje de la democracia pactista.

En ese contexto, en el año 1989 asumía la primera magistratura Carlos Andrés Pérez (que había gobernado con éxito en los años setenta¹²), quien impulsó un conjunto de

¹⁰ Datos obtenidos en base al Consejo Nacional Electoral, en línea en: <www.cne.gov.ve>.

¹¹ Lalander, (2004: 33).

¹² La primera presidencia de Pérez se desarrolló en un contexto de auge económico producto del aumento de los precios del petróleo acordado por los Países Exportadores de Petróleo (OPEP). Esto dio lugar al

reformas económicas que se inscribían en un programa conocido como el “Gran Viraje”. El mismo consistía en la aplicación de políticas económicas en consonancia con el Fondo Monetario Internacional (FMI) que implicaba la liberación de las tasas de interés, la unificación cambiaria con la eliminación del tipo de cambio preferencial, la supresión de los antiguos precios subsidiados, el adelgazamiento del aparato estatal, la apertura de los mercados, la determinación del tipo de cambio en el mercado libre de divisas y el incremento gradual de las tarifas de los servicios públicos (Biderbost y Cruz Hermida, 2008: 95).

Este cambio abrupto en las reglas del juego de la economía fue resistido por la sociedad venezolana en lo que se conoció como la protesta del “Caracazo”, ocurrida el 27 de febrero de 1989. Para ese día estaban pactadas varias convocatorias populares entre las que se destacaban una protesta estudiantil en la capital en contra del aumento de la gasolina y otra en Guarenas, Estado de Miranda, convocada por usuarios del transporte público en oposición al aumento de las tarifas decretado por el gobierno los días anteriores. Parecían tratarse de dos movilizaciones corrientes en el marco del sistema democrático, pero terminaron convirtiéndose en una gigantesca explosión popular.

Según el estudio de los hechos del “Caracazo”, Iturriza López (2007: 24), el 27 de febrero puede dividirse en tres fases. Una primera, caracterizada por una espontánea expresión popular de protesta frente al aumento generalizado de los precios y tarifas públicas (en especial gasolina y transporte), de la que formaron parte “gente de los barrios y algunos sectores medios, que durante horas estuvo en la calle como una marejada sin rumbo... no estaba en el propósito de las masas, desbordadas hasta el atolondramiento, la conquista del poder político”¹³. En ese sentido, esta primera fase se desarrolló desde el lunes 27 hasta el martes 28 y su característica principal consistió en rebelarse de forma violenta ante el desmedido aumento de precios pero sin un plan político más allá de la propia protesta. De allí que la revuelta se centrara en arrojar basura por las calles, quemar algunos cauchos y asaltar diversos comercios.

La segunda fase adviene luego de la retirada a los barrios y casas de los protagonistas de la primera fase. Las calles, entonces, fueron tomadas por grupos más

florecimiento de la economía venezolana sobre todo a partir de la nacionalización de la totalidad de los yacimientos petroleros dictada por el presidente de AD.

¹³ Iturriza López (2007: 24).

audaces compuestos “por individuos vinculados al narcotráfico barrial y restos ideologizados de ultraizquierdismo... provocando daños a personas y bienes sin control”¹⁴. Esta segunda parte de la protesta fue realizada por otros actores, ajenos a los propósitos populares de la primera fase, los cuales tenía un objetivo manifiesto.

Por último, la tercera fase se abrirá cuando el gobierno, quien se encontraba desbordado ante el caos social reinante, decidiera suspender las garantías constitucionales y ceder a las Fuerzas Armadas la responsabilidad de restituir el orden público y la normalidad ciudadana. Esta decisión, tomada por el presidente Pérez, contó con el respaldo inmediato de los partidos eje del bipartidismo quien visualizaba que, de extenderse el caos reinante, se pondría en juego la supervivencia de las instituciones del país. Sin embargo, el primer mandatario consideró, desde un principio, que las movilizaciones acaecidas en la capital formaban parte de una reacción social, la cual no tenía una naturaleza política ya que “podía haber tres o cuatro establecimientos asaltados o saqueados y en el centro de ellos una casa de AD y COPEI intacta, con sus emblemas por fuera. Eso no tuvo un sesgo propiamente político, fue como dije una explosión social”¹⁵.

Las Fuerzas Armadas, finalmente, debieron intervenir una vez aprobada la suspensión de garantías constitucionales ante el desborde en que se encontraban las otras fuerzas de seguridad. La policía y la Guardia Nacional, que en un primer momento habían intentado apaciguar la protesta ya sea participando y colaborando con ella en la toma de establecimientos comerciales y manteniendo en orden o moderando la ola popular (Iturriza López, 2007: 25), debieron ceder su lugar al verse superadas durante la segunda fase de explosión social en el centro del país¹⁶.

¹⁴ Iturriza López (2007: 25).

¹⁵ *Ibíd.* (2007: 32).

¹⁶ Sin embargo, dentro de las Fuerzas Armadas varios de sus integrantes se negaron a reprimir al pueblo mostrando una faceta particular de los militares venezolanos en relación con la utilización de las armas frente a la ciudadanía. Según Guerrero (2013: 103) “entre el 27 y el 28 febrero de 1989 fueron recluidos y sometidos a Reglamento más de 1.200 soldados y suboficiales, por haber desobedecido de disparar al pueblo pobre y desarmado”.

De acuerdo al Coronel Gustavo Insua: “Los militares no estábamos de acuerdo con lo que estaba pasando, durante el puntofijismo los muchachos como yo que venimos de barrios humildes no nos gustaba eso de andar reprimiendo al pueblo. Nosotros fuimos formados por un altísimo respeto patriótico, respeto grandísimo con las ideas bolivarianas y de lo que al pueblo le corresponde. Y bueno, allí nace la revolución que nace del el MBR- 200, MVR y que termina en el PSUV. El Comandante Chávez revivió en nosotros lo que sentíamos la mayoría de los soldados venezolanos”. Coronel Gustavo Insua. Entrevista con el autor.

En el próximo ítem me ocupo en mayor medida de las características distintivas de los militares venezolanos en comparación con el resto de la región.

El estallido social en la capital venezolana fue la respuesta popular al programa neoliberal aplicado por el presidente de AD; dejó un saldo de más de tres mil muertos¹⁷ y la suspensión de las garantías constitucionales. El clima de repudio al gobierno y a la clase política venezolana continuó desde esa fecha hasta la rebelión militar de 1992 y se contabilizó en un total de 2094 protestas sociales¹⁸.

La década del noventa comenzaba con enormes dificultades para los partidos del “Pacto” y los niveles de rechazo se manifestaron en las distintas elecciones del periodo. Entre los años 1958- 1983 la abstención nunca había superado el 15%, en tanto que la compulsión electoral de 1993 arrojó una cifra superior al 35%¹⁹. En consecuencia, con la crisis económica los partidos hegemónicos fueron percibidos por los ciudadanos como los principales responsables de la paupérrima performance económico- social. En este marco, el mandato de Pérez, navegaba en aguas peligrosas y las acusaciones de corrupción formaban parte de la cotidianidad política. Para el año 1992 la imagen positiva del presidente alcanzaba el 21% (Ollier, 2008: 93) y el intento de golpe militar en febrero y luego en noviembre del mismo año, marcaban la declinación del ciclo político del acuerdo de “Punto Fijo”. En diciembre, luego de las elecciones municipales que resultaron un fracaso para su partido, surgieron algunas alternativas al bipartidismo, entre ellas, agrupaciones políticas como el Movimiento al Socialismo (MAS) y Causa Radical (CR).

En ese contexto de crisis institucional, la Corte Suprema de Justicia inició un juicio político contra el presidente como consecuencia de las acusaciones sobre su accionar respecto de la transferencia irregular de dinero a sus aliados políticos nicaragüenses; como resultado, fue destituido en mayo de 1993. La sucesión presidencial recayó en el “adeco” Ramón Velásquez, con el acuerdo del Congreso, y dio lugar a un nuevo llamado a elecciones en donde resultaría vencedor un candidato que no se presentaba bajo las siglas de AD ni de COPEI. Fue el ex presidente, Rafael Caldera (1969- 74), quien desafió con éxito por primera vez al predominante bipartidismo venezolano. A pesar de provenir de las filas de una de las agrupaciones políticas centrales de la democracia venezolana, Caldera

¹⁷ Según Aznárez (2000: 35), “la cifra oficial habla solamente de 277 fallecidos civiles, pero las investigaciones de distintas organizaciones de derechos humanos e informaciones privadas hacen ascender la cifra hasta nada menos que 10.000”.

¹⁸ “Del total de protestas, disturbios, huelgas, cortes de vías, saqueos, enfrentamientos con la policía ocurridos entre 1989 y 1998, casi el 30 por ciento acontecieron entre el Caracazo y la rebelión militar del 4 de febrero de 1992” (Guerrero, Modesto, 2007:224).

¹⁹ Datos obtenidos en base al Consejo Nacional Electoral, en línea en: <www.cne.gov.ve>.

conformó su propia agrupación partidaria y venció en las elecciones de 1994, derrotando a los hasta ese momento imbatibles partidos del sistema. A su vez, el presidente electo resultó un fuerte crítico de las políticas económicas neoliberales de Pérez, respaldó el “Caracazo” y fue ambiguo frente al golpe militar de Chávez (Ollier, 2008: 94)²⁰. El hecho evidenciaba el agotamiento del modelo político del puntofijismo, que no encontró la fórmula para reproducir su histórico poder en un contexto de fuerte cuestionamiento social.

Si bien los lineamientos económicos de Caldera permitieron estabilizar la institucionalidad política, la debilidad de su mandato y la fragmentación de los partidos otrora ejes del bipartidismo exitoso, jugaron un papel estelar en la gestión de su gobierno. A pesar de la evolución del PBI, la contención de la inflación y el ingreso del capital extranjero, los indicadores del salario real, desempleo y pobreza exhibieron resultados preocupantes y se convirtieron en una de las causas principales de la posterior victoria de Hugo Chávez. En la esfera económica, los resultados traducían el desempeño político. El “Caracazo” reflejaba un malestar creciente en vastos sectores de la población. Los efectos sociales de las medidas tomadas en el marco del “Gran Viraje” eran elocuentes al respecto. Las personas que percibían un ingreso por debajo de la línea de la pobreza representaban en 1975 un total del 33% de la población; para el año 1988 la cifra había trepado al 53,5%, para volver a aumentar a principios de 1990 a 64,2% (Mascareño, 2000: 30). Por otro lado, la pobreza crítica marcaba para 1975 el 13,1% mientras que para 1990 era del 30,4% (Ibíd., 2000: 30).

Durante toda la década del noventa resultó imposible controlar la inflación que se mantuvo siempre en dos dígitos (alcanzó el punto máximo en 1996 con un 99%). Esto afectó de manera directa el poder adquisitivo de la sociedad venezolana y dio lugar a una fuerte caída en el valor real del salario mínimo urbano (a precios de 1984) desde 1052 bolívares por mes en 1989, hasta 733 bolívares en 1998²¹. La tasa de desempleo urbano, por otra parte, también se vio conmovida a principios de los noventa luego del inicio del “Gran Viraje” alcanzando el 10,4%²², producto del dismantelamiento de la estructura de subsidios

²⁰ Luego del fallido golpe militar de Chávez, Caldera declaraba que “es difícil pedirle al pueblo que se inmole por la libertad y por la democracia no son capaces darle de comer y de impedir el alza exorbitante en los costos de la subsistencia” (Aznárez, 2000: 138).

²¹ Datos obtenidos en base a estudios de la CEPAL, Base de Estadísticas e Indicadores Sociales. En línea en: <<http://www.eclac.cl>>.

²² Ibid.

que el Estado venezolano concedía a numerosas empresas locales, a la permanencia en el tiempo del proceso inflacionario y a la reducción de la actividad económica en un contexto de convulsión social. Según datos de la CEPAL el desempleo continuó su curva ascendente y recién bajó de los dos dígitos una vez iniciado el gobierno de Chávez.

A partir de octubre de 1997 los precios del petróleo cayeron en forma abrupta. Según datos del Banco Central venezolano, bajaron un 34,1% con relación al año anterior, obligando a sucesivos ajustes del precio promedio de realización del crudo venezolano. A efectos de los cálculos fiscales, desde un estimado inicial en la Ley de Presupuesto de 15,50 dólares por barril la caída llegó a 11,50. A partir de esta fuerte reducción se produjo una disminución en los ingresos fiscales petroleros del orden de los 7.000 millones de dólares, lo que terminó generando un déficit fiscal de al menos 5% del PIB (Lander y López Maya, 1999: 7).

El deterioro de los indicadores sociales acompañó los años finales del gobierno de Caldera. Para junio de 1997, del total de 4.740.250 hogares, 2.122.016 se encontraban en situación de pobreza; de ellos, 895.542 en situación de pobreza extrema. Es decir, el 44,76% de los hogares venezolanos no contaba con ingresos para satisfacer sus necesidades básicas, y el 18,89% no llegaba a cubrir sus necesidades alimentarias (Lander y López Maya, 1999: 7). Según la misma fuente, el mercado laboral venezolano, evidenciaba para 1998 “una tasa de desempleo por encima del 10% y la mitad de la población económicamente activa trabajando en el sector informal de la economía...En las zonas donde se ubica la población más pobre, la tasa de mortalidad infantil es 2,5 veces más alta que las tasas nacionales; la esperanza de vida al nacer del estrato más pobre, es 12 años menor que el de los estratos más ricos...Todo esto revela un cuadro de exclusión, así como un marco poco propicio para abrigar expectativas de mejoría hacia el futuro”²³. Estos valores se mantuvieron a lo largo de la década del noventa y la amplitud del problema podía detectarse en la elevada deserción escolar (35,1% en 1998) y la insuficiencia nutricional evidenciada en vastos sectores de la población (Biderbost y Cruz Hermida, 2008:104)

En ese marco, otro de los sectores perjudicados durante esta década, fue el de las clases medias ya que la misma se redujo aceleradamente y de 44% que representaba en

²³ Lander y López Maya (1999: 7).

1988, descendió al 31,3% para 1997 (Mascareño, 2000: 32). De esta forma se evidenciaba que la mayor parte de la sociedad venezolana se vio empobrecida durante estos años y se convirtió en la principal impugnadora del sistema de partidos basado en los acuerdos en torno al Pacto de “Punto Fijo”.

Resumiendo, la protesta social del “Caracazo” se convirtió en un acontecimiento determinante para el posterior resquebrajamiento del denominado Pacto de “Punto Fijo”. El acuerdo partidocrático que dotó de estabilidad política a Venezuela durante décadas se desmembraba al compás de un proceso de deterioro de las condiciones económicas y sociales imperante en el país luego de las protestas en la capital. Los datos eran elocuentes al respecto y permitían comprender este proceso de cambio en el que se encontraba la sociedad venezolana. Los altos índices de desempleo, pobreza, marginalidad e indigencia (desconocidos hasta entonces) se transformaron en elementos salientes que coadyuvaban a comprender la disponibilidad al cambio en que se encontraba una gran parte de la sociedad golpeada luego de años de crisis.

En ese marco proclive al cambio, entonces, se iniciaba la campaña electoral que finalmente unguirá a Hugo Chávez Frías a la presidencia de Venezuela, tema que se ocupa el siguiente ítem del capítulo.

1.2. Hacia Miraflores con los recursos de poder militar y de apoyo popular

Este ítem se concentra en el itinerario de Hugo Chávez hacia el gobierno. En ese marco, se describen el frustrado (pero a la postre victorioso) golpe de estado de febrero de 1992 por el cual el líder bolivariano fue conocido por la opinión pública, los años posteriores a su salida de la cárcel y el inicio de la campaña electoral para las elecciones de diciembre de 1998. En este proceso, se analizan los recursos de poder que fue obteniendo y creando entre 1994 y 1998 y que le permitieron contar con fuertes bases de apoyo una vez iniciado el primer gobierno.

De la derrota militar a la victoria popular: la construcción del LP de Hugo Chávez

“Primero que nada quiero dar buenos días a todo el pueblo de Venezuela, y este mensaje bolivariano va dirigido a los valientes soldados que se encuentran en el Regimiento de Paracaidista de Aragua y en la Brigada Blindada de Valencia. Compañeros: lamentablemente, por ahora, los objetivos que nos planteamos no fueron logrados en la ciudad capital. Es decir, nosotros, acá en Caracas, no logramos controlar el poder. Ustedes lo hicieron muy bien allá, pero ya es tiempo de reflexionar y vendrán nuevas situaciones y el país tiene que enrumbarse definitivamente hacia un destino mejor.... Compañeros: oigan este mensaje solidario. Les agradezco su lealtad, les agradezco su valentía, su desprendimiento y yo, ante el país y ante ustedes, asumo toda la responsabilidad de este movimiento militar bolivariano”²⁴.

Con esas palabras ingresaba en la historia venezolana el Teniente coronel Hugo Chávez Frías. Era 4 de febrero de 1992 y el líder de la asonada militar explicitaba, televisión mediante, las principales razones del “por ahora” fracaso y demandaba a sus camaradas la rendición. A su vez, asumía la plena responsabilidad del intento fallido, actitud que contrastaba, como se observó en el capítulo precedente, con una clase política cuestionada por no hacerse cargo de sus responsabilidades. La alocución televisiva²⁵, del

²⁴ Marcano y Barrera (2005: 125- 126).

²⁵ La transmisión del discurso se realizó en vivo y según Chávez “ahí fue naciendo el mito pues; el mito no lo alimenté yo. Lo alimentaron, bueno, la situación, y todos los análisis después. Que era indio, que era llanero. Ah, después empiezan ¡que el abuelo era guerrillero! ¡Maisanta!. ¡Mira, te das cuenta, es la continuación del

hasta entonces ignoto militar, de escasos setenta y dos segundos, configuró el primer peldaño en la carrera política de Hugo Chávez y el principal RP de estrategia política comunicacional con el que contó desde el inicio de su vida política.

La intentona militar había comenzado la noche del domingo 3 de febrero, cuando el líder bolivariano partiendo desde Maracay, el Estado de Aragua, al mando de 460 efectivos se dirigió hacia la capital del país con la finalidad de tomar el estratégico Museo Histórico Militar a escasos dos kilómetros del Palacio de Miraflores, la morada presidencial. La “Operación Zamora”, que tenía como fin la detención del presidente que arribaba esa noche al país del exterior, a efectos de crear un “vacío de poder”²⁶, daba inicio sin grandes sobresaltos. Pérez, quien había comenzado su gestión de la peor manera luego de los sucesos del “Caracazo”²⁷, iba erosionando su legitimidad de origen y contaba, para los días del golpe, con un nivel de confianza que no alcanzaba el 19% (Marcano y Barrera, 2005:113). A su vez, un significativo tercio de la población, según encuestas de opinión, se encontraba en condiciones de apoyar un golpe de estado (la mitad lo rechazaría) y más de un tercio de los encuestados creía en la posibilidad concreta de una intentona militar (Ibíd.:113)

Según Chávez el plan de operaciones del 4 de febrero, “fue concebido sobre la base de varios principios de guerra. Uno de ellos la sorpresa... La sorpresa, la maniobra, la movilidad y la concentración de fuerzas sobre puntos neurálgicos. Ese era el plan estratégico”²⁸. Sin embargo, la sorpresa no fue tal, y la rapidez de reflejos de las Fuerzas Armadas (alertadas por una delación interna al grupo golpista) y del presidente, que lejos de amainarse jugó fuerte en pos de la institucionalidad, abortaron la intentona militar en forma expeditiva.

abuelo! Y todas las historias que uno ve en el llano; empiezan a echar cuentos de quién era Chávez” (Bilbao, 2002: 46). “Pocas semanas después, nadie ha precisado el momento exacto, alguien escribió una oración que comenzó “a rodar”entre varios vecinos del Barrio 23 de enero. Se trataba del “Chávez nuestro” cuyos versos son los siguientes: “...que estás en la cárcel/ santificado sea tu golpe/ venga a nosotros, tu pueblo, hágase su voluntad.../... danos hoy confianza ya perdida/ y no perdones a los traidores.../... Sálvanos de tanta corrupción/ y líbranos de Carlos Andrés Pérez” (Guerrero, Modesto, 2007: 250).

²⁶ De acuerdo a Chávez, “esa era la concepción, crear el vacío de poder y nosotros llenarlo” (Blanco Muñoz, 1998: 148).

²⁷ Según Haiman El Troudi: “los sucesos del Caracazo, en los cuales las Fuerzas Armadas Nacionales fueron obligadas a reprimir a su propio pueblo del que mayormente provenía, generó una fuerte crisis de identidad en los mandos militares intermedios, que son el sector que más se radicaliza”

²⁸ Ibid (1998: 479).

Cuando el primer mandatario apareció en cadena nacional a la 1.15 de la madrugada, los rebeldes contaban con espacios estratégicos de control, pero el principal de ellos, Caracas, aún permanecía en manos del gobierno. El comandante Francisco Arias Cárdenas²⁹ controlaba la guarnición de Zulia, mientras los comandantes Jesús Urdaneta Hernández³⁰ y José Ortiz daban la batalla en el eje industrial Maracay- Valencia. En Caracas, el comandante Yoel Acosta Chirinos había tomado La Carlota y detenido al jefe de la Fuerza Aérea; un tanque rebelde trepaba por las escaleras del Palacio de Miraflores con la intención de derribar la puerta principal.

A pesar de que las condiciones emergían como propicias para el triunfo militar, las líneas de comunicación aún no se encontraban en manos del grupo rebelde. De allí que cuando Chávez y sus hombres se dirigieron confiados hacia la puerta del Museo fueron recibidos con ráfagas de metrallera. “Nos apoderamos a las 2 de la mañana del Museo. Ya la acción inicial sobre Miraflores había fracasado. Los muchachos hicieron lo que pudieron. Ahí empezó la incertidumbre”³¹ declaró el jefe de la asonada tiempo después.

En Caracas, mientras tanto, la cobertura civil del golpe (unos trescientos hombres y mujeres ligados a varios grupos de izquierda, en especial a La Causa R y Bandera Roja) estuvo a la espera por 48 horas para entrar en acción antes del día esperado³². Aguardaron inútilmente la contraseña en clave pero la llamada telefónica nunca se produjo. La clave de la derrota radicó en la falta de comunicación entre los rebeldes, en especial en la capital venezolana, centro neurálgico del éxito de la operación. El mensaje que para esas horas

²⁹ Francisco Arias Cárdenas fue uno de los principales lugartenientes de Chávez. A la salida de la cárcel, se presentó como candidato a gobernador de Zulia en el año 1995 por el partido Causa R, triunfando por primera vez en el distrito un espacio político no tradicional. En esos años se fue alejando de Chávez al que llegó a enfrentar en el 2000 en la elección presidencial y acusó de ser responsable de las matanzas de abril de 2002. A partir de 2005 volvió a tomar posturas más cercanas al oficialismo, para luego ser nombrado por el presidente como embajador de Venezuela en la ONU. En la actualidad es gobernador del Estado de Zulia.

³⁰ Jesús Urdaneta participa del fallido golpe militar y luego es encarcelado junto al resto de los cabecillas. En mayo de 1994 sale junto a Chávez de prisión y acepta el cargo de cónsul en España que le ofrece el gobierno de Caldera. En el año 1999 retorna al país y participa del gobierno de Chávez como director de la Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención (DISIP) cargo al que renuncia en el año 2000 por disidencias con el presidente. En el año 2003 Agustín Blanco Muñoz publica una biografía titulada “Habla Jesús Urdaneta Hernández. El Comandante irreducible” en donde el ex golpista manifiesta su férrea oposición del gobierno de Chávez.

³¹ Aznárez (2000: 103).

³² El antiguo dirigente de Bandera Roja, el sociólogo y político Carlos Rivero señaló al respecto: “Yo participé de la intontona militar La concepción era muy militarista. `Esta acción no es de los civiles es de los militares` pensaba Chávez... Había un discurso anticorrupción, muy anti adeco y copeyano, pero no trascendía de eso. No había homogeneidad” (Carlos Rivero. Entrevista con el autor).

tenía previsto dar Chávez ideado para lograr que el pueblo se uniera al golpe militar, no pudo realizarse. Quien sí habló fue el presidente, que no había podido ser retenido.

Alrededor de las 3 de la madrugada, Chávez se encontraba rodeado, incomunicado y el intento por tomar el Palacio presidencial había fracasado. A partir de ese momento, para el líder bolivariano “comenzó a desmoronarse el plan de operaciones, incomunicados, rodeados, la gente de Miraflores no concretó... las comunicaciones no funcionaban ya que utilizaron los equipos de guerra electrónica contra nosotros barriendo la frecuencias de las radios, no se instaló la infantería que esperaba, ni la reserva, ni los cañones de artillería, jamás llegó a haber control sobre el Palacio”³³. Finalmente, frente a la situación adversa de Caracas, y a pesar de que las condiciones en el resto del país eran mejores, el líder de la asonada militar se rindió a las 7.45. La única demanda que negoció por la rendición fue que se garantizara su vida y la de los soldados.

A partir de ese momento comenzaba la historia pública del Movimiento Bolivariano Revolucionario 200³⁴ (MBR-200), la organización militar que operó en los cuarteles durante más de una década y que tuvo como figura estelar a Hugo Chávez. El hecho configuraba una novedad en el ámbito castrense ya que por primera vez se rompía el monopolio del uso de las Fuerzas Armadas hacia lo interno. La tradición histórica marcaba que la estructura militar en Venezuela había sido utilizada para ser la última reserva de la estabilidad del sistema sellando, de esta manera, una ruptura del sistema de comportamiento interno de la democracia y del papel de los militares en ella (Romero Jiménez, 2003: 25). Por primera vez los militares atentaban contra el sistema democrático y rompían con las reglas enmarcadas en torno al pacto puntofijista.

³³ Blanco Muñoz (1998: 119).

³⁴ Su nombre le viene de los deseos de emular la conducta y acción de Bolívar y el número 200 se refiere al bicentenario del nacimiento del prócer, celebrado en 1983, fecha en la cual ellos dicen haber comenzado sus actividades (Lander y López Maya, 1999: 10). El antecedente inmediato de esta formación militar fue el Ejército Bolivariano Revolucionario (EBR). La sigla EBR- 200 venía a significar, según Chávez “la trilogía del árbol de las tres raíces (Ezequiel Zamora, Bolívar y Rodríguez – Simón)... Y además el 200 por el marco del bicentenario de Bolívar, que se extendió desde el 24 de julio de 1982 hasta el 24 de julio de 1983. Nosotros fundamos el movimiento el 17 de diciembre” (Aznárez, 2000: 79).

A mediados de 1989, el EBR- 200 pasa a llamarse MRB- 200 y otra instancia cívico militar empieza a desplegarse paralelamente a los movimientos clandestinos que estaban ocurriendo en los cuarteles. Sin embargo, de acuerdo a Chávez “La trocha (el camino) mía comenzó 15 años antes del 4 de febrero, fue en 1977 cuando nació la primera célula (podríamos llamarla así) de la que luego fue el Ejército Bolivariano Revolucionario- 200, eso nació por allá en un lindo y alegre pueblo llamado San Mateo en el Estado de Anzoátegui, allá nació la primera célula de lo que luego se hizo huracán; de allá venimos para no olvidarlo nunca jamás” (Chávez, 2007: 24)

Las Fuerzas Armadas venezolanas presentan características singulares que las diferencian del resto de los militares de la región. A principios del setenta, bajo el gobierno socialcristiano, se realizó una profunda reforma militar conocida como “Plan Andrés Bello” destinado principalmente a que los oficiales tuvieran acceso a las universidades públicas para terminar su especialización. Esta modernización en el interior del mundo militar les permitió a los oficiales venezolanos (como en el caso de Chávez) insertarse plenamente en la sociedad y sus problemáticas. El propósito del gobierno de ese momento fue dotar a los militares de un perfil más profesional y académico lo que generó un proceso de cambio en el interior de las filas castrenses que se orientaba a objetivos de desarrollo social y nacional, relegando a un segundo plano la lucha contrainsurgente y los conflictos internacionales, que en ese momento el país no padecía. En el mediano plazo dicho experimento habilitó la conformación de un núcleo militar mucho más inserto en las problemáticas políticas local e internacional y preocupado por el devenir de la sociedad venezolana. Este elemento, sumado al hecho de que la mayoría de los cadetes prevenían de los sectores medios y bajos, le daba al caso venezolano una singularidad específica en el contexto sudamericano³⁵.

En ese sentido, Chávez, que formaba parte de las primeras generaciones “modernizadas” entendía a la mencionada reforma como un ensayo con efectos “indeseados” ya que en el mediano plazo dicha inserción social politizó aún más a los cuadros militares³⁶. El líder bolivariano expresaba que “nosotros éramos vistos como

³⁵ Según su biógrafo, Modesto Guerrero “Chávez es heredero de una tradición militar nacionalista en las Fuerzas Armadas venezolanas que se remonta a tres generaciones. Sus referencias inmediatas fueron los Generales Hugo Trejo y Jacinto Pérez Arcay ambos militares fueron figuras de la revolución social de enero 1958. Las guerrillas venezolanas que fueron fuertes entre 1963 y 1965 fueron adiestradas por las Fuerzas Armadas en los fenómenos del Portañazo (en Puerto Cabello) y en el Capuranazo, ambas rebeliones cívico militares. Hay una conexión biopolítica con su herencia militar. Chávez se inspira en Bolívar y otros héroes naciones de una manera que yo no encontré en ningún líder de su tipo... Chávez, en ese sentido, es un heredero de una tradición de militares nacionalistas” (Modesto Guerrero. Entrevista con el autor.). A su vez, Bonilla y El Troudi (2004: 57) insisten en esta característica distintiva del caso venezolano al expresar que “existe una razón para que se sientan diferentes, la promoción de oficiales de la cual formaba parte Chávez fue la primera que egresó con rango de profesional universitario, es decir, no sólo les dio las herramientas, sino la creencia de que eran distintos a los restantes oficiales”

³⁶ De acuerdo con el Coronel Gustavo Insua “ese es el punto de partida para el cambio del diseño curricular, las materias... Además de contar con militares como en mi caso, con la capacidad de explicar por qué es tan necesario el proceso de cambio... además acá nosotros no somos ricos de cuna, nuestros padres eran trabajadores, por lo tanto no venimos a defender nuestra riqueza, como sucede con otras fuerzas armadas de la región. Los oficiales aquí se nutren del pueblo y hay un criterio lógico desde donde se viene. Eso se pone de manifiesto el 11 y 12 abril (Estos hechos se relatan en la próximo capítulo) donde los militares decimos “estos que quieren traer un imperio para aquí, no por favor, fuera de aquí y mi Comandante viene otra vez, más fuerte” Coronel Gustavo Insua. Entrevista con el autor.

conejillas de indias” (Blanco Muñoz: 41) que a partir este proceso de modernización militar pudieron acceder a lecturas y experiencias de militares nacionalistas que dieron lugar a una formación militar más politizada y con un fuerte compromiso social. Esto se pudo observar durante los sucesos del “Caracazo”, donde se produjeron disidencias entre los militares a la hora de reprimir y en el fallido golpe militar de 1992.

Desde ese frustrado episodio, la popularidad de Chávez comenzó a ascender de manera vertiginosa (RP de apoyo popular/ ciudadano). La legitimidad popular que habían obtenido los militares del fallido golpe era consecuencia directa de un clima de malestar social que tres años atrás había dado muestras claras en la capital venezolana. La utilización estratégica de esta nueva corriente de opinión favorable, se trataba de uno de los recursos de poder que vertebró la carrera política de Hugo Chávez desde su génesis. El incremento de su popularidad, junto con la instalación política de su figura, acreditaba como recursos indispensables en su camino hacia el Palacio de Miraflores.

Durante los dos años que el líder militar estuvo en prisión, generó una corriente de simpatía que lo convirtió en un fenómeno particular en el interior del agotado sistema político venezolano. Hasta la cárcel llegaban cientos de personas de diferentes zonas del país, mayormente de sectores populares, con comida y todo tipo de regalos para los militares alzados. Se tornaba evidente que el apoyo obtenido era un resultado directo de la acción política del líder bolivariano y de la singularidad de su propio liderazgo.

La salida de la cárcel, luego del indulto del presidente Caldera, el 26 de marzo de 1994, puso a Chávez en condiciones de poder reconstituir una organización política de composición cívico-militar con el objetivo declarado de aspirar a la presidencia. Para las elecciones regionales y municipales de 1995, Hugo Chávez y el MBR-200 realizaron una campaña con la bandera del “Por ahora, por ninguno”, recomendando la abstención electoral. La idea que subyacía en esta campaña abstencionista tenía como horizonte inmediato generar conciencia y motivación entre la ciudadanía. En el mismo sentido, se continuaba la prédica anti sistema político, extendiendo en el tiempo la continuidad histórica de la intentona militar de 1992. El “por ahora”, que sería una marca registrada del chavismo durante toda su carrera política, adicionaba el componente “revolucionario” del 4 de febrero.

La campaña tuvo sus frutos, ya que la abstención electoral alcanzó el nivel más alto en la historia democrática del país hasta esa fecha³⁷. Las declaraciones de Chávez, en ese momento, negaban la viabilidad de recomponer el sistema mediante la vía electoral y sin participación de las Fuerzas Armadas ya que “un gobierno o régimen especial no puede ser un gobierno producto de elecciones y con acuerdo entre los poderes. Nada que intente superar ese modelo de democracia liberal, que para nosotros ya murió, puede provenir de elecciones. Sin este proyecto de gobierno de transición y sin una organización popular, incluyendo el sector militar, que para nosotros es de suma importancia, no podrá nunca cumplirse el objetivo deseado”³⁸.

Hasta ese momento, la posición del líder venezolano se orientaba a conformar una estructura política que combinara lo militar y lo civil para superar violentamente el régimen del puntofijismo. Así lo declaraba en mayo de 1996 “Yo creo que la salida va a ser violenta... creo en la constituyente popular revolucionaria...un proceso revolucionario para destruir este sistema, no para rehacerlo, como procuran otros proyectos”³⁹. Desde Cuba, cuando Chávez emprendió una gira por Latinoamérica, se expresaba en un sentido similar: “Nosotros no deseamos la vía de las armas en Venezuela. Nosotros seguimos teniendo – y lo dicen las encuestas del mismo gobierno- más del 80% de opinión favorable en los militares venezolanos. Tenemos una fuerza allí y la alimentamos, porque los muchachos, por supuesto, andan perseguidos por todos lados, y hoy en día si un oficial nombra a Bolívar en su discurso, es considerado sospechoso” (Aznárez, 2000: 165).

Durante los años 1995 y 1997, Chávez dedicó gran parte de sus esfuerzos a recorrer el país. Lo hizo viajando a la mayoría de los pueblos y ciudades de Venezuela priorizando el contacto “cara a cara” con la ciudadanía. Según el líder militar, “el único camino era hablar con la gente, enterarnos de sus penurias con ojos críticos, para que de esa manera nuestro accionar no se convierta en un populismo de vanguardias establecidas, donde nosotros decidiéramos todo, sin importarnos los demás. Había que convertir el Movimiento en una avalancha de abajo hacia arriba”⁴⁰. A su vez, insistía con la propuesta que sería el epicentro de su filosofía política de cambio: la modificación institucional de las estructuras

³⁷ La abstención electoral fue de 53% constituyendo el mayor porcentaje hasta ese tiempo histórico (Lissidini: 2009). Datos obtenidos en base al Consejo Nacional Electoral, en <www.cne.gov.ve>.

³⁸ Blanco Muñoz (1998: 168).

³⁹ Blanco Muñoz (1998: 287).

⁴⁰ Aznárez (2000:161).

del puntofijismo, “no debe quedar un venezolano ni una venezolana que no se entere de nuestra propuesta: convocar a un referéndum para una Asamblea Nacional Constituyente. Los partidos tradicionales sólo bajan al pueblo cuando necesitan su voto, nosotros no queremos votos, ni ofrecemos limosna, sino que queremos organización popular y sacrificio para construir un país distinto”⁴¹. El éxito obtenido en las convocatorias y el recibimiento en las distintas ciudades en donde Chávez se hacía presente persuadieron al líder bolivariano de priorizar el armado de una estructura político- electoral que viniera a complementar al MBR-200. Este RP asociado a la popularidad de su figura, le permitió avanzar en la generación de nuevos recursos de poder como era la construcción partidaria.

El crecimiento de su figura y el desgaste de los partidos eje del bipartidismo venezolano le advertían a Chávez sobre sus posibilidades de triunfo en la arena electoral. A pesar de que hasta ese momento la ecuación electoral no formaba parte del menú de posibilidades políticas, para el segundo semestre de 1996 la posición irá mutando hacia una lógica participativa. El 17 de diciembre en una asamblea realizada en Valencia, Estado de Carabobo, se aprobó la participación en las elecciones de diciembre de 1998, dejando para abril de 1997 el lanzamiento de la candidatura presidencial de Chávez. Hasta esa fecha, el líder bolivariano había recorrido más de doscientos pueblos y ciudades y poblados de todos los estados del país, con una camioneta⁴², “lanzado por los caminos, como arrastrado por un huracán”⁴³.

La conformación de la estructura político-electoral del MVR, RP institucional partidario, fue el resultado inmediato de la nueva estrategia⁴⁴. En los hechos esta modificación implicaba cambiar el nombre de Movimiento Bolivariano Revolucionario a Movimiento Quinta República, pero manteniendo la misma fonética. La decisión de participar en la arena electoral, sin embargo, no estuvo exenta de críticas y llegó luego de

⁴¹ *Ibíd.* (2000: 165).

⁴² “Un buen día, en mi cumpleaños del año ‘94, unos amigos me trajeron una torta y me hicieron salir a la calle: “Mira Hugo, ven a ver el regalo que te trajimos”. Y era una camioneta usada, una Toyota de esas Samurai, pero buena, ¿no? Empecé a recorrer el país con esa camioneta, como siempre fortalecido” (Entrevista a Hugo Chávez de Miguel Bonasso, *Página 12*, 1 de junio de 2003).

⁴³ Guerrero, Modesto (2007: 361).

⁴⁴ Para un análisis del desarrollo histórico y su proceso de transformaciones internas, véase el texto de Carolina Nahon “Hugo Chávez Frías entre los Círculos Bolivarianos y la Quinta República” en Abal Medina (2006).

un fuerte debate interno⁴⁵. Este cambio de orientación estratégica, lógicamente, produjo descontento en las filas del movimiento y el retiro de algunos cuadros de importancia que habían acompañado al líder bolivariano desde los primeros años de lucha, fue compensando con la llegada de nuevos militantes.

En el seno del movimiento, el debate interno incluyó la realización de tres asambleas nacionales y de una encuesta, que según Chávez “más que encuesta fue un referéndum: hicimos doscientas mil consultas... Pedimos ayuda a profesionales... Dos preguntas: primero: ¿Usted estaría de acuerdo en que Chávez sea candidato a la presidencia? ¿Sí o no? Sí casi el 80%. No, un poco más del 20%. Segundo ¿Votaría por él? Eso fue a finales del 96 y principios del 97... y lo que es más impresionante es el porcentaje del sí: casi exactamente el resultado de 1998: un poco más de 57%”⁴⁶. El 19 de abril de 1997, tras un complicado plenario de cuadros del MBR-200, se decidió por ajustada mayoría, en palabras de su líder, “salir del camino de la insurrección y presentarse a elecciones”⁴⁷.

Para postularse como partido político para las elecciones de 1998 se tuvo que modificar el nombre, pues en Venezuela los símbolos patrios, y Bolívar es el principal de ellos, no pueden ser usados como identificación de organizaciones políticas. La creación de esta herramienta política oficiaba como otro RP generado por el líder bolivariano en su travesía hacia el gobierno. Era evidente que el sinuoso contexto económico, político y social que vivía Venezuela (contexto externo a la dinámica política) configuraba un escenario oportuno para las aspiraciones de un candidato que propiciaba un importante cambio político. Sin embargo, fueron también (y en algunos momentos, en mayor medida) los recursos de poder sustentados en una particular estrategia política llevada a cabo por Chávez, los que lo ubicaron como una alternativa viable y eficaz ante el derrumbe del pacto “puntofijista”. Es decir, a pesar de que las condiciones en las que se encontraba el país resultaban propicias para la emergencia de un liderazgo no tradicional, fueron los recursos

⁴⁵ “Mira, yo no dormía, recorría el país, viajaba de noche, amanecía en un pueblo, en otro, asambleas donde trescientas personas me decían “No”; donde me llegaban a llamar traidor, electoralista” (Le Monde Diplomatic, (2002: 25). Según Chávez, el MBR-200 “era una sumatoria de corrientes de izquierda, derecha, ex guerrilleros, militares retirados de varias épocas, muy heterogéneo, con corrientes radicales, unas de izquierda y otras de derecha, era algo muy difícil de articular” (Díaz Rangel, 2006: 97).

⁴⁶ Bilbao (2002, 49).

⁴⁷ Guerrero (2007: 363).

de poder generados por el líder venezolano (sobre todo de estrategia política) los que lo convirtieron en una alternativa viable al status quo vigente.

El camino de Hugo Chávez hacia la primera magistratura, sin embargo, no fue un tránsito lineal y a priori allanado. En el mes de enero de 1998, a un año de la compulsa presidencial, el líder bolivariano contaba con una intención de voto que rondaba los 9 puntos (Marcano y Barrera, 2005: 47). Durante todo ese año, Chávez recorrió pueblos y ciudades con un discurso confrontativo y basado en la promesa que de al llegar al gobierno realizaría una Asamblea Constituyente que refundaría el poder político en Venezuela. Su discurso se abocó durante esos meses a denostar a los partidos eje del bipartidismo tradicional, haciendo alusión en uno de esos actos a que “barrería a Acción Democrática de la faz de la tierra”, y que, en caso de triunfar, la cabeza de “los adecos (por la AD) y copeyanos (por COPEI) serían fritas”⁴⁸. Sus declaraciones irían por el mismo sendero cuando expresaba que quienes se opusiesen a la convocatoria a la Asamblea Constituyente irían a la cárcel.

Sin embargo, lejos de ahuyentar partidarios por sus declaraciones explosivas, el líder bolivariano continuaba creciendo en las encuestas previas a la elección. Estos discursos constituían una particular lectura política del momento que vivía Venezuela. La oratoria del candidato opositor, al estar inserta en un contexto de desgaste de las propuestas tradicionales, resultó para el líder bolivariano durante toda la campaña electoral un RP de estrategia política comunicacional que le permitió aumentar el caudal de votos en un corto tiempo. En ese marco, insistía en dejar en claro que la campaña electoral que se avecinaba iba a encontrar un Chávez “al natural”. Y de ese modo lo expresaba públicamente, “No pienso someterme a ningún análisis de imagen para ser un producto que se venda. A diferencia de un jabón yo soy un ser humano. A diferencia de una toalla, soy un ser humano que piensa, actúa tengo autonomía, en ese sentido”⁴⁹. La puesta en escena de este RP de estrategia política tanto comunicacional y de personalidad política le permitió al líder bolivariano aumentar en forma sistemática su intención de voto. En definitiva: se había convertido en un candidato confiable para vastos sectores de la población que demandaban con urgencia un cambio político.

⁴⁸ Marcano y Barrera (2005: 48).

⁴⁹ Aznárez (2000: 176).

Sin embargo, una vez que el candidato opositor comenzó a disputar los primeros lugares en las encuestas, su oratoria dejó de cargar el tono castrense de los primeros meses del año. La moderación de su discurso militarista daba lugar a interrogantes sobre mutaciones en la personalidad del líder bolivariano. De todos modos, Chávez atribuía esa transformación a la proximidad electoral y al avance en las encuestas previas. Según sus palabras la orientación ideológica impresa desde sus inicios no variará en su esencia “algunas personas dicen que el crecimiento que se registra en las encuestas es producto de que Chávez no es el mismo. Soy el mismo. Ahora, que para ir a televisión, uno se pone corbata que el discurso está madurado, es algo lógico. Pero las ideas no cambian. No cambiarán... Para decir lo que realmente somos: nacionalistas, bolivarianos, revolucionarios, antiimperialistas, no necesitamos asesores, ni grandes campañas de imagen”⁵⁰.

A treinta días de las elecciones, que debían realizarse en forma simultánea para los cargos ejecutivos y legislativos en todo el país, los partidos tradicionales, aprovechando su mayoría en el Congreso, lograron una separación de fechas entre las presidenciales y las regionales. El objetivo manifiesto de dicha escisión fue hacer pesar las maquinarias electorales de ambos partidos en las diferentes regiones que gobernaban para la compulsa de noviembre y, con ello, crear un clima de triunfo para las elecciones presidenciales de diciembre de 1998. Vale decir, la oposición a Chávez hacía uso de un RP institucional -su mayoría parlamentaria- con el fin de generar una atmósfera triunfalista para las reñidas elecciones que se avecinaban.

El armado electoral de Chávez para las elecciones legislativas de noviembre y las presidenciales de diciembre de 1998 puso en evidencia la necesidad de conformar una alianza que superara al núcleo original del MVR. En ese sentido, se conformó el Polo Patriótico (PP), una coalición de partidos que incluía al MVR, el Movimiento al Socialismo (MAS) y Patria Para Todos (PPT), un espacio que se había escindido de Causa R, todas agrupaciones partidarias que se encontraban a la izquierda ideológica del sistema de partidos venezolano. También se agregarían nuevos grupos como Gente Emergente (GE), Solidaridad Independiente (SI) y Asociación Agropecuaria (AA). La necesidad de ampliar el grupo original partidario resultaba vital para aumentar la cantidad de electores y la

⁵⁰ Ibid. (2000: 176).

militancia de los partidos que se incorporaban al frente electoral. Se trataba de otro de los recursos de poder institucional partidario generados por Chávez en esta coyuntura, el cual le permitió ampliar el abanico de voluntades en torno a su figura.

Para septiembre, el candidato del Polo Patriótico contaba, según la encuestadora Datanálisis, con el 41,6% de las preferencias del electorado, y para octubre la intención de voto había ascendido a 44,8% (Lander y López Maya, 1999: 11). Frente al avance del candidato opositor al sistema, los partidos tradicionales intentaron convertir las elecciones regionales del 8 de noviembre en una virtual primera vuelta electoral. En consecuencia, apostaron a la fortaleza electoral en dichas regiones y a la falta de arraigo de los partidos que constituían el Polo Patriótico en las provinciales que eran gobernadas por AD y COPEI para obtener una gran ventaja sobre las huestes de Chávez. Ante la evidencia de la mayor fuerza de los partidos eje del bipartidismo en las distintas zonas del país, las agrupaciones políticas del PP lograron acordar candidatos comunes. Esta estrategia opositora afinada en la capacidad de pensar más en el conjunto que en los intereses particulares de cada fuerza (RP de estrategia política) dio posteriormente sus frutos. A pesar de perder las elecciones generales por un margen mucho menor al esperado, la oposición se alzó con ocho gobernaciones. Además de estas victorias, “que los igualaron en número de gobernaciones con el partido AD, la alianza llegó en segundo lugar en diez de las trece gobernaciones restantes”⁵¹. En cuanto a las elecciones de senadores y diputados, el MVR, el partido eje del PP, resultó ser la segunda fuerza luego de AD⁵².

Los resultados de las elecciones reflejaron un evidente crecimiento de las fuerzas del PP en detrimento de las de los partidos tradicionales, aventurando una evolución electoral aún mayor para las elecciones presidenciales de diciembre. Sin embargo, la composición futura de las cámaras legislativas, de ganar la elección principal, no le permitiría al líder bolivariano nadar en aguas amistosas para llevar adelante la principal oferta electoral de su alianza de partidos, como era la Asamblea Constituyente. Hasta ese

⁵¹ Lander y López Maya (1999: 14). El total de votos de los gobernadores electos del PP fue de 1.096.116, mientras que los de AD obtuvieron 564.391, lo cual ya mostraba un resultado favorable para el PP. Datos obtenidos en base al Consejo Nacional Electoral: en <www.cne.gov.ve>.

⁵² El porcentaje de votos para el Senado resultó por partido, de la siguiente forma: AD 24,36 MVR 19,76 y para diputados AD 24,05%, MVR, 19,88%. Datos obtenidos en base al Consejo Nacional Electoral: en <www.cne.gov.ve>.

momento, Chávez no contaba con los recursos de poder institucionales necesarios ya que carecía de una mayoría parlamentaria y no gozaba de un conjunto importante de gobernadores propios. Los recursos de poder con los que contaba antes de la elección presidencial descansaban en el apoyo popular/ ciudadano y de un importante sector de las Fuerzas Armadas que veían en el futuro presidente a un par que los representaba. Esto, como se observará en la segunda parte de esta investigación, será revertido a partir del llamado a la Asamblea Constituyente formulada por Chávez luego de asumir la primera magistratura.

La exigua ventaja obtenida por los partidos tradicionales en las elecciones legislativas y de gobernadores, dio lugar a la elaboración de una nueva estrategia electoral que contemplara una alianza entre los partidos opositores a Chávez. A pesar de salir derrotado, para fines de noviembre, éste contaba con una intención de votos del 49,6% (El Universal, 27/11/98, pp. 1-12) y los partidos tradicionales recién lograron acordar un candidato común a escasas dos semanas de la compulsa. La dificultad de AD y COPEI para “bajar” a sus candidatos en pos de la candidatura del independiente Henrique Salas Römer evidenciaba el clima de derrota que embargaba a las elites políticas de los partidos otrora ejes del sistema político venezolano. Esta alianza de última hora, lejos de poner en peligro el triunfo del candidato del PP, pareció consolidarlo ya que el porcentaje de votos fue superior a lo que vaticinaban las encuestas. A su vez, dicho acuerdo mostraba a la opinión pública que el único objetivo que tenía el creado “Polo Democrático” era vencer a Chávez, quien pudo capitalizar, ahondando el clivaje “partidocracia tradicional corrupta vs. Asamblea fundacional Constituyente”, los errores tácticos de las fuerzas oficialistas.

La victoria de Chávez fue aplastante, no sólo por la diferencia ante el segundo (más del 16%), sino también por que se impuso en 18 de las 24 gobernaciones. El candidato del PP obtuvo 3.673.685, lo que equivalía al 56,2% de los votos, en segundo lugar se ubicó el candidato independiente apoyado por los dos partidos tradicionales, Salas Römer con 2.613.161 de votos - es decir, el 39,97%- y muy por atrás de ambos, Irene Sáez Conde con 184.568 sufragios (2,82%) y Luis Alfaro Ucero con 27.586 (0,42%). La abstención en esta elección fue inferior a la de noviembre y se encontró en el 36,24%⁵³.

⁵³ Datos obtenidos en base al Consejo Nacional Electoral, en línea en: <www.cne.gov.ve>.

La evidencia que el 96,17% de los votos se repartiera entre las dos primeras alianzas indicaba la fuerte polarización que se desarrolló en dicha elección. El aumento de la participación electoral, por su parte, fue otra muestra evidente de la importancia de la compulsa por la presidencia. Los datos indicaban, además, el aumento de la cantidad de votos del candidato del PP, en comparación con los votos obtenidos por sus candidatos en la elección regional, ya que el líder bolivariano aumentó la performance electoral en 1.900.000 votos, mientras que la alianza de los partidos tradicionales nucleados en torno al Polo Democrático lo hizo en 100.000. Por último, del análisis numérico de las preferencias electorales se desprendería que la disminución en la abstención de votos se volcó mayoritariamente por Chávez (Lander y López Maya, 1999: 16).

Recapitulando, el fallido golpe militar de 1992 ofició como un eslabón indispensable y determinante en la carrera política de Hugo Chávez. La derrota en el campo militar se convirtió en escasos dos minutos en una impensada victoria política. El principal RP de estrategia política de comunicación del líder bolivariano emergía en un contexto crucial para la intentona golpista.

A partir de ese momento, la popularidad del líder golpista (RP de apoyo popular/ciudadano) creció a pasos agigantados. La salida de la cárcel y su inmediato involucramiento en la arena política lo llevaron a la conformación de un Movimiento (RP institucional partidario) que le permitió a Chávez contar con una estructura política para competir con la maquinaria de los partidos tradicionales.

Los recursos de poder con los que contó Chávez desde su salida de la cárcel descansaron en su fuerte ascendencia sobre las Fuerzas Armadas y en el apoyo popular brindado desde la derrota militar. Estos recursos, que cimentaron el inicio de la carrera política del líder bolivariano, se mantuvieron vigentes a lo largo de una década.

1.3. Contexto económico, político, social e internacional previo a la asunción de Uribe

Este ítem describe el contexto económico, político, social e internacional que conforma el camino de Uribe hacia la Casa del Nariño. En ese marco, se presta especial atención al escenario de crisis de seguridad por el cual transitaba Colombia a partir de los noventa que desemboca en el frustrado proceso de paz del Caguán, en el año 2002 y el impacto social de la crisis internacional de finales de los noventa sobre la economía colombiana. En ese contexto de crisis económica y social, también se describe el resquebrajamiento que irá sufriendo el bipartidismo histórico colombiano a partir de no poder dar respuestas a las históricas demandas de seguridad de la ciudadanía.

El agotamiento de un ciclo: paramilitares y guerrillas abren la puerta de Uribe

El contexto que configura el ascenso de Álvaro Uribe a la primera magistratura estuvo signado por una aguda crisis económica, política, social y sobre todo de seguridad, que evidenciaba un hastío social que alcanzó a niveles históricos. La sociedad colombiana lidió durante mediados de la década del noventa y principios de 2000 con dos presidencias que culminaron en fracasos políticos y erosionaron la legitimidad que por décadas habían tenido los dos partidos centrales del bipartidismo nacional: el partido Liberal (PL) y el partido Conservador (PC).

El acuerdo entre ambas fuerzas comenzó con el denominado “Frente Nacional”, designación que corporizó al pacto entre los partidos tradicionales entre los años 1958-1974⁵⁴. Por medio de esta alianza, ambas agrupaciones políticas se comprometieron a alternar en forma equitativa el poder ejecutivo y legislativo dominando la escena política sin intervención de terceros partidos con posibilidades concretas de disputar su hegemonía electoral. Luego de esa fecha el predominio del PL y el PC en la política colombiana continuó sin grandes sobresaltos hasta la aparición de Álvaro Uribe.

En 1994, tras el triunfo del liberal Ernesto Samper, el candidato del PL fue acusado de recibir financiamiento para su campaña electoral de parte de los Carteles de la droga,

⁵⁴ Durante ese lapso gobernaron: entre 1958-62 el liberal Alberto Lleras Camargo, entre 1962-66 el conservador Guillermo León Valencia, entre 1966-70 el liberal Carlos Lleras Restrepo, y para culminar entre 1970-1974 el conservador Misael Pastrana Borrero.

específicamente del de Cali. Este episodio, deslegitimó desde un primero momento al gobierno liberal y proyectó la imagen de un Estado y de una dirigencia política en descomposición que no merecían confianza ni apoyo internacional (Socorro, Ramírez: 145). En efecto, y luego de conocidos algunos detalles de la operación, la Justicia inició el denominado “Proceso 8000” en contra de Samper, de algunos de sus ministros y de los principales dirigentes políticos de ambos partidos. La Casa Blanca llegó a hablar de “narcodemocracia” para definir al régimen político colombiano y redujo sus vínculos diplomáticos con el país al trato de director de la Policía en torno del tema del narcotráfico (Restrepo: 47). Esta crisis de representación de los partidos tradicionales desató entre los electores y la opinión pública un clima de desconfianza y de rechazo a la clase política, al gobierno de turno y a las instituciones (Patiño y Cardona, 2009: 165) que ponía en tensión los propios cimientos de la democracia representativa colombiana.

En ese marco de deslegitimación gubernamental, los grupos armados que durante años había ejercido su violencia en gran parte del país, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC)⁵⁵ y el paramilitarismo de las Autodefensas Unidad de Colombia (AUC), aprovecharon la debilidad en la que había caído el gobierno para aumentar su poder militar, logístico y de control territorial. El poder de ambos grupos ilegales comenzará a crecer durante la década del noventa, como nunca antes en la historia reciente del país.

La guerrilla lanzó una ofensiva entre los años 1995 y 1998 denominada “Plan Estratégico” (Pecaut, 2008: 115), que consistió en una guerra de movimientos y de desgaste que consiguió triunfos hasta entonces impensados, como la toma generalizada de bases militares y la destrucción de tropas de elite del Ejército. En esta ofensiva, la guerrilla comprometió en sus planificados operativos a varios centenares de combatientes, los cuales se afirmaron en una artillería artesanal pero mortífera⁵⁶. Estas acciones de las FARC, que se

⁵⁵ A lo largo de esta investigación solo tomaré en cuenta a las FARC cuando haga mención a la guerrilla por tratarse de la formación militar hegemónica en el país. Sin embargo, debo aclarar que a pesar de que las FARC protagonizaron este proceso de resistencia militar al sistema político colombiano, también durante este tiempo histórico actuaron el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) con una incidencia muchísimo menor a la mencionada.

⁵⁶ Según el estudio de la guerrilla Daniel Pecaut (2008: 114), el balance de esta ofensiva es espectacular: “En 1996, toma de la base de Las Delicias (Putumayo), 27 muertos y más de 60 secuestrados. En 1997, toma de la base de Patascoy (Nariño), alrededor de veinte minutos y varios secuestrados. En 1998, destrucción de una unidad en El Billar (sobre el río Caguán), 65 militares muertos y 43 secuestrados; ataque a Miraflores (Guaviare), treinta muertos y 127 secuestrados; ataque a La Uribe, 33 muertos y ocho secuestrados; ataque a

desarrollaron en todo el país, evidenciaron que la capacidad de la guerrilla no se limitaba a las ya dominadas zonas del sur, sino que se extendía militarmente hacia otras regiones. Durante los años de la ofensiva, se tornó nítida su estrategia de apoderarse de las grandes ciudades, sobre todo de Bogotá y Medellín, sus principales objetivos de extensión geográfica. En este sentido, el crecimiento territorial de la guerrilla amenazaba con convertirse en un problema insoluble para los gobiernos colombianos.

Las Fuerzas Armadas, por su parte, parecían incapaces de reaccionar ante tamaña ofensiva guerrillera, lo que dará lugar a la emergencia de fenómenos originados en los estamentos privilegiados de la sociedad civil, en especial en los grandes y medianos ganaderos de las zonas rurales colombianas, conocidos como “paramilitarismo”. El fenómeno paramilitar surgió en Colombia en la década del ochenta a partir de los asesinatos selectivos y de la guerra sucia que se llevó a cabo contra la guerrilla⁵⁷. Pero será a partir de la década del noventa cuando estos grupos obtendrán un importante crecimiento en cuanto a cantidad combatientes y equipos de guerra. El origen de los paramilitares tendrá como centro neurálgico las regiones del noroeste del país, Córdoba y Urabá (que es donde se fundaron las primeras asociaciones), las que fueron conocidas en un primer momento como “autodefensas”.

Estos grupos se reproducirán al calor de la ofensiva guerrillera y de la autorización, por parte del debilitado gobierno de Samper, de nuevas asociaciones de seguridad conocidas bajo el nombre de “Cooperativas de Vigilancia y Seguridad Privada” (Convivir). Es decir, la pobre capacidad de represión de la guerrilla por parte del Estado dio lugar y vía libre a la inauguración de asociaciones civiles que ejercían la práctica armada y que contaban con estatuto legal para su desarrollo. Pensadas desde un principio como servicios especiales de seguridad privada, se fueron convirtiendo a lo largo de los años en grupos con una fuerte presencia territorial, y llegaron a ser actores de peso en un contexto de erosión y deslegitimación de la autoridad estatal

Mitú, capital de Vaupés, en la frontera con Brasil, cuarenta muertos y decenas de secuestrados. Es así que en poco tiempo las FARC capturan a más de quinientos militares y policías”.

⁵⁷ “Entre 1980 y 1993, en Córdoba se cometieron por lo menos cuarenta masacres y cerca de 200 crímenes. Los autores eran grupos armados que se hacía llamar “autodefensas”, y que luego se conocieron como paramilitares. Su conformación en Córdoba y Antioquia se originó en reuniones que ganaderos y miembros del Ejército nacional tuvieron en 1982” (Cepeda y Rojas, 2009: 40).

Este fenómeno armado adquirirá una dimensión regional a partir de los años noventa, con la creación de una primera estructura común denominada Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU). Más tarde, en abril de 1997, estos grupos aumentarán su capacidad de inserción regional creando las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), que tuvo como propósito capital el desarrollo de un proyecto a escala nacional⁵⁸. A partir de un crecimiento sostenido en otras partes del país, los paramilitares se convirtieron en un factor de poder con el que los políticos colombianos debieron contar en los años sucesivos.

El fenómeno contrainsurgente se extendió durante la década del noventa desde el epicentro original de la zona de Urabá y Córdoba hacia el Valle de Magdalena Medio. En esta ramificación, fueron logrando conquistar bastiones de las FARC en Meta y Arauca y en el sur amazónico, llegando a disputar zonas de cultivo de coca en los departamentos del Norte de Santander, Putumayo, Caquetá y Nariño (Pecaut, 2008: 122). El avance de estos grupos se desplegó, al contrario de las FARC -que fueron de sur a norte-, por el camino inverso: de norte a sur. Su como propósito principal era la creación de una confederación nacional con un claro perfil antiguerrillero.

Sin embargo, y a pesar del crecimiento durante esta etapa y la voluntad de unificación de algunos líderes, la unidad del paramilitarismo siempre fue muy precaria. La ausencia de unión en torno a la constitución de un dispositivo mayor fue la característica principal de su desarrollo. Dicha fragmentación, sin embargo, les permitió a estos grupos adaptarse en mejores condiciones a las realidades locales y ser utilizados por la fuerza pública para hacer el “trabajo sucio” en algunas regiones dominadas por la guerrilla. La legitimidad social obtenida por las autodefensas, producto del hastío que generaba la presencia de las FARC, les permitió contar, en un primer momento, con un apoyo tácito por parte de la población. Sin embargo, la utilización del terror y las masacres contra la población civil como principal método de acción les restó, en el largo plazo, dicha

⁵⁸ Un excelente trabajo que bucea sobre los orígenes del paramilitarismo, su expansión y su relación con el narcotráfico es la investigación desarrollada por Gustavo Duncan (2006: 30) en “Los señores de la guerra. De paramilitares, mafiosos y autodefensas en Colombia”. El concepto de Señores de la Guerra emerge, según la definición del autor, “cuando la coerción y protección de una sociedad por parte de facciones armadas al servicio de intereses patrimonialistas, es superior a la capacidad del estado democrático de ejercer un grado mínimo de monopolio de la violencia, y al ser facciones armadas la principal herramienta de coerción, extracción de recursos y protección del orden social en una comunidad es posible concluir que se constituyen en un Estado en la práctica”.

legitimidad para convertirse en un actor con presencia institucional en el interior del sistema político colombiano. A pesar de las intenciones de sus principales cabecillas por integrarse a la institucionalidad, la misma lógica de funcionamiento les impedía blanquear sus acciones y constituirse en una formación legal.

Como consecuencia de esta situación crítica, durante la década del noventa la violencia política, según datos de Juan Gabriel Tokatlian, “se expresó con casi 10 muertos por día, teniendo entre los años 1998-2000 más de 500 masacres (asesinato colectivo de cuatro o más personas indefensas), en su gran mayoría cometidas por el paramilitarismo... Entre 1995 y 2000, se han llevado a cabo unos 12 mil secuestros a manos de los actores armados, de la criminalidad común y hasta de los cuerpos de seguridad del Estado. En toda la década del noventa, la cifra de homicidios superó los 250 mil. Desde 1996 se ha manifestado un éxodo al exterior de casi 350 mil colombianos. En los últimos tres lustros se ha producido el desplazamiento interno forzado de más de 1.800.000 de personas”⁵⁹.

A pesar del incontrolado avance de la guerrilla y de los grupos paramilitares, la economía colombiana gozó, entre 1992 y 1996, de tasas de crecimiento promedio superiores al 5%, dentro del paradigma latinoamericano de apertura económica, desregulación del mercado y privatizaciones. Sin embargo, en el año 1998 y como consecuencia de la crisis internacional del año anterior que afectó principalmente a los países del sudeste asiático, se inició un proceso de deterioro de las principales variables económicas del país de una magnitud como no se sentía desde la Gran Depresión de la década del treinta. El sobreendeudamiento de los agentes económicos y el auge de una economía especulativa, producto de una política sustentada en la liberación financiera y en una política monetaria procíclica, generaron las condiciones para la desaceleración progresiva de la economía desde 1996 y su declive definitivo entre 1998 y 1999 (Giraldo Isaza, 2007: 101). El desempleo alcanzó índices cercanos al 18%, y la economía se estancó en los dos primeros años⁶⁰. El año 1999 implicó la desaceleración de la economía local: por primera vez en décadas, el PBI cayó en un 4,2%. Con ello, el deterioro de las cuentas del Estado, el aumento de la deuda y la contracción de la demanda interna (de 13%) emergieron como consecuencia inmediata del quebranto de la economía interna. A su vez,

⁵⁹ Tokatlian (2002: 177).

⁶⁰ La información de los datos de la economía colombiana proviene del Departamento Nacional de Planeación (DNP), en línea en: <<http://www.dnp.gov.co>>.

la producción manufacturera sufrió una fuerte disminución como consecuencia de la caída del consumo y el alza de la tasa de interés, que alcanzó el 25% (Kalmanovitz, 2004: 99).

Esta crisis económica, que tuvo un fuerte impacto regional, se desarrollará en paralelo a la asunción presidencial de Andrés Pastrana, dirigente del Partido Conservador. Este recambio de mando le devolvía el gobierno a este partido tradicional (no estaba al frente desde 1982, cuando Belisario Betancourt había derrotado al liberal López Michelsen), evidenciando que el Partido Liberal había sufrido un voto castigo como consecuencia del conflictivo gobierno de Samper y de su relación con el narcotráfico. A pesar de asumir con una importante legitimidad de origen, al obtener el 51,9% en la segunda vuelta electoral⁶¹, Pastrana se mostró incapaz de lidiar con los grandes conflictos económicos sociales en los que se encontraba el país.

En ese marco, el intento de Pastrana por lograr un acuerdo con las FARC resultó un esfuerzo en vano y terminó en un rotundo fracaso. La oferta del gobierno a la guerrilla para iniciar el proceso de paz (oficialmente comenzado el 7 de enero de 1999) fue la desmilitarización de cuatro municipios en la zona del Caguán, base de la llamada Zona de Distensión, un área de 42.000 km² en el departamento de Caquetá, en el sur del país. El área había sido evacuada por el Ejército y entregada a la guerrilla unos meses antes, para generar un espacio de negociación que incluyó la iniciativa del presidente de ir a conversar en forma personal con el líder de la guerrilla Manuel Marulanda (alias “Tirofijo”)⁶², y la organización de una gira por Europa para dotar de una legitimidad continental al acuerdo. Los gestos del presidente colisionaron contra la falta de interés real de las FARC por alcanzar la paz, y derivaron en el fracaso del proceso en febrero de 2002 y en el aumento general de la violencia junto a la frustración de la sociedad colombiana, que veía en ese posible acuerdo el fin de los enfrentamientos armados.

Según Pecaú (2008: 59), por desmilitarización las FARC entendieron mucho más que la salida de militares y policías. Al poco tiempo expulsaron a todos los demás

⁶¹ A partir de la Reforma Constitucional de 1991 se impuso en el sistema electoral colombiano el instituto de la Segunda Vuelta. En la primera vuelta de esta elección de 1998, Pastrana había ocupado el segundo lugar con el 34,7% de los votos frente al candidato del PL que consiguió el 35% de los mismos. Datos obtenidos en base a la Registraduría Nacional del Estado Civil, en línea en: <<http://www.registraduria.gov.co>>.

⁶² “Durante la apertura oficial de las conversaciones en presencia del cuerpo diplomático, Marulanda lo desaira al no acudir a la ceremonia y delegar en un comandante guerrillero la lectura de su discurso. La silla que permanece vacía pronto se convierte en el símbolo de una negociación que no produce resultado alguno” (Pecaú, 2008: 60).

representantes del Estado, jueces, funcionarios, etc. Es decir, no sólo mantuvieron a sus combatientes en la zona, sino que convirtieron la región en una base de entrenamiento, en punto de salida o de repliegue de algunos de sus operativos de guerra. Por último, la misma guerrilla demostró su voluntad de continuar la guerra 48 horas después de roto el proceso de paz, secuestrando a la candidata presidencial Ingrid Betancourt.

A pesar del fracaso, el gobierno pudo reconstruir la legitimidad política interna e internacional al restablecer las relaciones con Europa y EEUU, e inició, en forma paralela, un importante fortalecimiento del aparato militar. La administración Pastrana logró involucrar en ese fallido proceso de paz a los países vecinos y a grupos de países amigos (sentando en las reuniones de Madrid y de Bogotá a quienes se comprometieron a firmar acuerdos de cooperación), obtuvo “aire político” para los últimos meses del mandato y preparó el terreno para que el próximo presidente pudiera seguir la línea de acecho frente a la guerrilla. En simultáneo, las FARC se vieron deslegitimadas en el ámbito internacional tras el fiasco, lo que le provocó un sostenido retroceso frente a los países europeos en los que aún contaba con una importante presencia mediática. El principal acierto de Pastrana en esa coyuntura fue imponer un relato en el cual la guerrilla quedaba como la principal responsable del frustrado proceso de paz y dejaba en evidencia la escasa voluntad política de este grupo por alcanzar un acuerdo pacífico. Los gestos del líder conservador fortalecieron, según Carlos Nasi, “la idea de que el gobierno cedió en todo a cambio de nada... a los ojos de la opinión pública, las FARC fueron las únicas responsables del fracaso de las negociaciones del Caguán, lo que reforzó su imagen de grupo enteramente criminal y sin banderas políticas”⁶³.

Debido a la crisis local, el presidente Pastrana se vio compelido a buscar apoyo financiero en el exterior. Los EEUU se mostraron menos reticentes que con el gobierno anterior de Samper a la colaboración económica, y en el marco de la guerra al terrorismo internacional el gobierno de George Bush (h) utilizó el Plan Colombia como una herramienta militar contra la producción de coca y contra la guerrilla. El 11 de septiembre de 2001, en ese sentido, implica un antes y un después en la política internacional y en la articulación económico- militar entre EEUU y Colombia alrededor de las temáticas del narcotráfico y las FARC. Los atentados terroristas de Al Qaeda en Nueva York y

⁶³ Nasi (2007: 174- 175).

Washington gestaron de un clima mundial de “tolerancia cero” hacia las formas armadas de acción política subversiva orden mundial hegemónico. Esta nueva coyuntura internacional de guerra global contra el terrorismo permitió reconfigurar la definición en torno a las FARC, y el presidente conservador incluyó, luego del atentado, como grupo terrorista a los mismos actores que durante los últimos años había reconocido como rebeldes políticos.

El Plan Colombia, en ese marco, oficiaba para la administración Bush como una herramienta ideal para trasladar la hipótesis de conflicto hacia el exterior de los EEUU. Según Juan Gabriel Tokatlian, el Plan Colombia tenía en lo interno “por objeto reducir los efectos negativos de la crisis que vive el país mediante medidas de acercamiento del Estado hacia las áreas más afectadas por la violencia [y] apunta [ba] a fortalecer la presencia institucional en el territorio nacional... A su vez, implica la ayuda de Estados Unidos en asistencia antidrogas y de seguridad. [Siendo] el ejército el receptor principal y no la policía como lo fue en la década de los noventa”⁶⁴. La lógica que subyacía a este proyecto multimillonario financiado por el tesoro norteamericano era que sólo dotando de más armamento militar y poder de fuego sería posible derrotar completamente a la guerrilla colombiana y limitar con ello la enorme influencia regional del narcotráfico⁶⁵. Por imperio de la lucha frente al narcotráfico, también era objeto de persecución otro de los actores ligados a las drogas: los paramilitares. En este caso, la amenaza de extradición a EEUU configuraba la principal causa de conflicto en el interior del sistema político colombiano, y la tensión en torno a esta posibilidad establecía la lógica de negociación de estos actores.

En este contexto nacional e internacional caracterizado por una crisis sin precedentes, y frente a una erosión paulatina de la legitimidad del orden político colombiano, se iniciaba la campaña electoral que daría el triunfo en primera vuelta al candidato independiente, Álvaro Uribe. La pérdida de credibilidad de la política y de los políticos frente a la sociedad, una profunda desconfianza en los partidos políticos, un

⁶⁴ Tokatlian (2002: 178).

⁶⁵ Como país procesador y exportador de drogas, Colombia vivió, durante los años noventa, una intensa guerra dirigida por el Estado contra las organizaciones del narcotráfico asentadas en las principales ciudades. Estos hechos se suscitaron con altos niveles de violencia a raíz de la exigencia de EEUU de extraditar a los jefes de las estructuras conocidas internacionalmente como “Carteles”. Este proceso culminó con la desaparición del cabecilla de los grupos de Medellín, Pablo Escobar, en 1993, y el encarcelamiento de los hermanos Rodríguez Orejuela, dirigentes del grupo de Cali, en 1994, sucesos con directa repercusión en las zonas cocaleras de Perú y Bolivia, que suministraban la materia prima procesada luego en suelo colombiano y exportada a los mercados internacionales... Hasta entrado el Siglo XXI Colombia sigue siendo el principal productor mundial de coca (Vargas Meza, 2005: 120).

Estado que parecía impotente frente al poder de grupos ilegales que controlaban vastos territorios, una economía en crisis luego de los impactos negativos internacionales y una situación social con indicadores sumamente preocupantes a nivel desempleo y pobreza formaban parte del escenario económico, político y social colombiano. A su vez, se advertía “un creciente autoritarismo interiorizado en importantes sectores de la sociedad, que crea [ba] un entorno favorable a proyectos político-militares de tipo contrainsurgentes en el ámbito local, regional o nacional, y que alimenta [ba] comportamientos excluyentes y de tendencia antidemocrática”⁶⁶.

En ese marco, emergía un candidato que tenía como principal eslogan “la lucha sin cuartel frente a la guerrilla” y contra la “corrupción y la politiquería” (los principales actores políticos del periodo), y que ayudado por este ambiente desalentador y con una imagen de político serio, incorruptible, trabajador y outsider a la misma política que defenestraba, se instalaba en el corazón del quehacer político colombiano. Pero la realidad sugería una pregunta: ¿Quién era, en realidad, Álvaro Uribe?

Recapitulando, como se observó a lo largo de este ítem, el contexto de crisis económico, político, social e internacional configuró un elemento clave para entender de qué manera el liderazgo de Uribe se instaló en el centro del debate político nacional. El precario y luego frustrado acuerdo de paz de Caguán, la crisis internacional que impactó de manera directa en la economía colombiana y el aumento de la inseguridad social producto del accionar de los grupos ilegales y de la incapacidad del Estado para neutralizarlos, se convirtieron en un menú explosivo del que el líder antioqueño se sirvió para consolidar su estrategia de poder.

Esta coyuntura crítica (desempleo record, aumento de la pobreza e incapacidad del Estado para frenar la violencia) desmembró los escasos recursos de poder institucionales de los partidos tradicionales generando un desprestigio en la clase política colombiana que emergía como incapaz ante el desarrollo de la crisis. En ese marco, el líder colombiano cabalgó sobre dicha coyuntura obteniendo recursos significativos que le permitieron aumentar sus posibilidades de convertirse en una alternativa concreta de recambio en el interior del sistema político. De eso trata el siguiente ítem.

⁶⁶ Vargas Velásquez (2005: 86).

1.4. Hacia la Casa del Nariño con los recursos de poder de un outsider

Este ítem se concentra en el recorrido político de Álvaro Uribe desde su primera experiencia en la gestión municipal en la Alcaldía de Medellín en 1980 hasta su llegada en el año 2002 a la presidencia de Colombia. En este trayecto por la función pública (sus dos mandatos en el senado y su experiencia en la gobernación de Antioquia) se observan los recursos de poder que va adquiriendo y creando a partir de su histórica posición política en relación a la guerrilla, los paramilitares y el vínculo entre el Estado y la ciudadanía.

Un duro para los tiempos difíciles: la construcción del LP de Álvaro Uribe

La vida política de Álvaro Uribe se inició en enero de 1980, cuando el presidente Julio César Turbay (PL) lo designó como director del Departamento de Aeronáutica Civil en la Alcaldía de Medellín, cargo que dejó en agosto de 1982,⁶⁷ días antes del final del periodo del mandatario liberal. Durante dicho año se realizaron las elecciones presidenciales y el candidato del PL, López Michelsen, fue vencido por el conservador Belisario Betancur, continuando con el recambio partidario en el que se venía desarrollando la democracia bipartidista colombiana.

A pesar del cambio del color político, el liberal Uribe, con sólo 30 años, fue designado por el mandatario conservador en la alcaldía de Medellín⁶⁸ cumpliendo con su propuesta electoral de unidad nacional⁶⁹. En los cinco meses que gobernó la ciudad, Uribe impulsó importantes obras de acondicionamiento urbano y dotó de más medios a las fuerzas del orden, algo que resultará una constante a lo largo de su carrera política. Su

⁶⁷ Según sus biógrafas, Carolina Escamilla y Paula Holguín “ese fue un momento especialmente difícil por el crecimiento significativo del narcotráfico en el país y por que por su oficina pasaban las licencias de vuelos y autorizaciones de utilización de pistas de aterrizaje. Su gestión ha sido, sin duda, muy polémica” (En Escamilla y Holguín, 2009: 70).

⁶⁸ Hasta el año 1988 la elección de los Alcaldes era una potestad del gobernador del Departamento. Constituyendo de ese modo para el presidente una suerte de recurso de patronazgo indirecto. Luego de esa fecha, la elección de los mismos, proviene del voto popular. En cuanto a los gobernadores, luego de la Reforma Constitucional del año 1991 son elegidos también por voto popular.

⁶⁹ Según María Jimena Duzán (2004: 108) “Uribe representaba en ese momento el liberalismo renovador, el “sector democrático”, en oposición al que representaba su contrincante mayor, Bernardo Guerra Serna, dueño y señor de la política liberal en Antioquia. El nombramiento de Álvaro Uribe fue entendido como un intento por parte del Partido Conservador en el poder, de dividir al liberalismo”.

pronta renuncia, se debió, según el joven liberal, a discrepancias con el gobernador del distrito, Juan Felipe Gaviria.

El 14 de junio de 1983 marca un antes y un después en la vida personal y política de Uribe ya que es día su padre fue asesinado por un comando de las FARC cuando estaba a punto de ser secuestrado⁷⁰. Este hecho sellará de raíz su carrera política y legitimará ante la opinión pública su accionar frente a la guerrilla y su inflexible posicionamiento frente al fenómeno de la insurgencia. Este se convertirá en el primer RP (de estrategia política) que Uribe hará jugar en diferentes coyunturas políticas para justificar su posición militarista frente a la guerrilla una vez que asuma la presidencia.

El periplo político de Uribe, luego de su salida de la alcaldía, continuó en el ámbito legislativo. Entre los años 1984 y 1986 ocupó un escaño como concejal en la ciudad de Medellín. Más tarde, en las elecciones parlamentarias del 9 de marzo de 1986, obtuvo una banca de senador por el Partido Liberal, para renovar el cargo legislativo por otros cuatro años el 11 de marzo de 1990. Los mandatos legislativos fueron simultáneos a las presidencias de los liberales Virgilio Barco Vargas (1986-1990) y César Gaviria Trujillo (1990-1994).

En este ámbito, Uribe fue el principal promotor de la Leyes 71/1988 (Reforma Pensional), la 50/1990 (Reforma Laboral) y la 100/1993 (Reforma del Sistema de Seguridad Social). Estas leyes impulsadas por el legislador liberal no estuvieron exentas de polémica, ya que en su esencia afectaron de manera directa a los sectores sociales más vulnerables. La ley 71 tuvo por finalidad aumentar la edad y el tiempo de jubilación de millones de colombianos y permitió, según Contreras, que “los grandes grupos económicos se apoderaran de los fondos privados de pensiones y de cesantías, que en 1995 sumaban 708 mil millones de pesos, y los convirtieron en vehículos de especulación financiera”⁷¹. La ley 50 complementó la anterior, ya que intentaba reformar el mercado de trabajo para generar mayor empleo, lo cual lo enfrentó en forma directa con los sindicatos, a quienes esa reforma afectaba de manera inmediata. Esta ley implicó fuertes modificaciones en la

⁷⁰ “Mi padre fue asesinado durante un intento de secuestro. Le dispararon dos veces; una en la garganta y otro en el pecho, el disparo que lo mató. Tenía cincuenta y tres años. De acuerdo con los testimonios de nuestros vecinos y trabajadores de Guacharacas, el crimen fue cometido por cerca de doce hombres del llamado Frente 36 de las FARC. Amaba a mi padre y lo extraño todos los días. La tragedia de Guacharacas marcó en mi vida personal y profesional un quiebre cuya influencia tal vez sea inconmensurable. Pero no en la forma en que algunas personas afirman” (Uribe, 2012: 31)

⁷¹ Contreras (2002- 71).

estabilidad laboral de los trabajadores, eliminando el derecho de huelga en las empresas de servicios públicos y favoreciendo el empleo temporal para activar la economía. Por último, la ley 100 tuvo como objetivo central modificar la cobertura de la seguridad social afectando intereses dentro del mundo gremial. Estas tres leyes, que le permitieron al político antioqueño instalarse en la opinión pública local, encontraban sustento y contenido en la política económica neoliberal que fue aplicada, durante esa década, en distintos grados y avances en la mayoría de los países sudamericanos⁷².

La intervención en el ámbito legislativo le reportó jugosos dividendos a Uribe: fue elegido por sus compañeros de bancada como uno de los cinco mejores senadores y se convirtió en el “niño mimado” de los medios de comunicación de cuño liberal que lo catalogaron como “el senador de mejores iniciativas” (Holguín y Escamilla, 2009: 210). Aquí comienzan a emerger los primeros recursos de poder que irá conquistando el senador liberal a lo largo de su carrera, como fueron su buena relación con los medios de comunicación y su eficaz llegada a la opinión pública (recursos de poder de estrategia política de comunicación). Estos dos recursos, que serán desplegados de manera cotidiana a lo largo de sus dos presidencias, como veremos en los siguientes capítulos, encontraban aquí el antecedente inmediato.

La buena performance legislativa le permitió a Uribe presentarse como candidato a gobernador en el departamento de su Antioquia natal. El 30 de octubre de 1994 venció al conservador Alfonso Núñez Lapeira, por 4585 votos (Escamilla y Holguín, 2009: 82), lo que le permitió acceder al ejecutivo antioqueño con mandato desde el 2 de enero de 1995 hasta el 31 de diciembre de 1997⁷³. Desde la gobernación de Antioquia, Uribe pudo poner en práctica el flamante modelo de “Estado Comunitario” (recurso de estrategia política), cuya especificidad residía en el involucramiento de la sociedad en la ejecución de las decisiones del Gobierno, principalmente en el área de seguridad del departamento. Esta participación ciudadana incluía -entre sus principales objetivos- la estrategia de

⁷² También la aprobación de esas leyes le valieron a Uribe dos intentos de asesinato por parte de las FARC. A pesar que el líder colombiano pudo evitar ambos atentados, en el primero fue secuestrado el co- patrocinator de la Ley 50, el senador Iván de Jesús Gómez Oroscó (días más tarde se aseguró que el mismo fue un error de la guerrilla que lo confundió con Uribe) y en el segundo se salvó de milagro de una bomba que explotó en el piso de abajo del Hotel Orquídea Real donde Uribe se encontraba, ambos hechos demostraba que para la guerrilla el entonces senador se convirtió desde principios de los noventa en un objetivo a eliminar.

⁷³ Hasta el año 2004 el mandato de gobernador tenía una duración de tres años. Luego de esa fecha se amplió a cuatro.

intervención directa de la población en la lucha contra la subversión guerrillera de las FARC.

Este proyecto se materializó en el fuerte apoyo brindado por el gobierno a la creación de las Asociaciones Comunitarias de Vigilancia y Seguridad Privada denominadas “Convivir”⁷⁴. El propósito central de estas entidades, según el gobernador, era la participación directa de la ciudadanía en temas de seguridad, lo que incluía, como condición para su eficacia, la portación civil de armas. En este sentido, Uribe señalaba que “en ninguna ciudad del mundo industrializado se ha logrado un nivel aceptable de seguridad cotidiana sin comprometer a la totalidad de la comunidad... [Las Convivir] son una asociación de particulares, aprobada y vigilada por el Estado, que entra a darle información, a ayudarle básicamente con inteligencia a las tareas que cumplen jueces, las autoridades militares y la policía”⁷⁵.

En el departamento de Antioquia se crearon más de sesenta Convivir, lo que representaba un 15% de las que operaban en el país (Holguín y Escamilla, 2009: 90). A pesar del éxito pregonado por el gobernador de Antioquia, para los críticos de estas asociaciones las Convivir sirvieron de pantalla para el crecimiento de grupos paramilitares y narcotraficantes. Según Cepeda y Rojas (2008: 70), en los hechos, las Convivir se convirtieron en la base de la estructura nacional del paramilitarismo que surgió, como observamos en el ítem precedente, en 1997 con el nombre de Autodefensas Unidas de Colombia.

Estas experiencias conformaron el primer experimento de gestión de Uribe, y más tarde se extenderían a la esfera nacional. En ese sentido, su posición intransigente de no negociar con la guerrilla, junto a su estrategia de mano dura contra la violencia, tuvo consecuencias directas en su persona. Durante el tiempo que duró su mandato fue asesinado

⁷⁴ La creación de estas Asociaciones de servicios especiales de seguridad privada fue aprobada mediante Decreto 356 de 1994 por el presidente César Gaviria y su ministro de defensa Rafael Pardo. La misma fue reglamentada por el entrante ministro de defensa del gobierno de Samper, Fernando Botero Zea, en abril de 1995.

⁷⁵ Tabares (2006- 109). Ante la andanadas de críticas por parte de la oposición y asociaciones de derechos humanos, acusando al gobernador de promover con esto el crecimiento de los grupos paramilitares, Uribe defendía su proyecto de Convivir declarando que “no se trata de grupos de bandoleros armados: son grupos de gente de bien. Que mal le hace a cualquier región que la ciudadanía se una, que compre radiecitos, que se comuniquen entre ellos con el ejército y la policía, que denuncien con responsabilidad cualquier anomalía... No defendiendo a las Convivir por defenderlas: defendiendo el derecho de los colombianos a su protección” (Ibid., 2006: 111).

su mayordomo, sufrió el incendio de la finca familiar y se salvó de ser herido en un ataque guerrillero en uno de los Concejos Comunales realizados en el municipio de Vegachi. Este posicionamiento frente al fenómeno insurgente, le reportará en el futuro al líder antioqueño beneficiosos recursos de poder (estrategia política) para instalarse como alternativa de gobierno luego del frustrado proceso de paz con las FARC.

Luego de culminar su mandato como gobernador, sin un destino político inmediato y con su partido en la cuerda floja tras la alicaída presidencia de Samper, Uribe marchó al extranjero a perfeccionar sus estudios. Por intermedio de la beca Simón Bolívar del British Council de Bogotá, fue nombrado *senior associate member* del Saint Anthonys College de la Universidad de Oxford. En el 2000 regresó a su tierra natal con la intención de sumarse a la campaña del candidato del Partido Liberal para las presidenciales de 2002, el ex ministro de Samper, Horacio Serpa Uribe, quien en 1998 había sido el candidato oficial derrotado por Andrés Pastrana. Sin embargo, la postura de Serpa de apoyo a la zona de distensión a la guerrilla de las FARC, propuesta por Pastrana, inició el divorcio entre aquél y el ex gobernador de Antioquia.

La estrategia de lucha frontal por la vía armada contra la guerrilla fue desde el inicio de su carrera política el principal argumento (y RP) de Uribe para lograr la paz definitiva en Colombia. El inicio del proceso de paz de 1998 encontró en el ex gobernador de Antioquia a un acérrimo opositor, frente a la mayor parte de la dirigencia del PL y del PC, que avalaba lo actuado por el presidente conservador. En ese sentido, se debe marcar la coherencia del futuro presidente, quien no se moverá políticamente al calor de la mayor parte de la dirigencia del país, incomodando con su discurso a un buen número de ciudadanos deseosos de una paz inmediata con la guerrilla. Aun a costa de perder credibilidad frente a la opinión pública que apoyaba el proceso, Uribe continuó con su prédica militarista, afianzando su posicionamiento político en torno a este clivaje y convirtiéndolo en un RP sostenido en una estrategia política invariable, la cual más tarde le reportaría importantes beneficios.

Ya el año anterior el líder antioqueño había dado muestras claras de su estrategia de guerra frontal contra las FARC, aun a costa de ser sospechado de defender a represores de la guerrilla. El 29 de abril de 1999, por ejemplo, el futuro candidato presidencial le rindió homenaje a los generales Fernando Millán y Rito Alejo del Río, llamados a “calificar

servicios” (ser dados de baja). Estos militares estaban acusados de tener nexos con grupos paramilitares, imputación que para Uribe carecía de asidero si no se la igualaba con aquellos que tenían vínculos con la guerrilla. En este sentido, “pidió que se dialogara de igual a igual con las guerrillas y con los paramilitares, y precisó que respetaba el fuero presidencial para remover a los oficiales de las Fuerzas Armadas, pero discrepaba de que esa prerrogativa se le traspasara a las fuerzas insurgentes”⁷⁶. La simpatía hacia esos generales, en especial hacia Del Río⁷⁷, fue evidente al entender que “Urabá lleva 30 años de guerrilla y varios de paramilitares. Se acusó al general Del Río, que jugó a favor de la paz. Aceptar la violencia no era motivo para cuestionar gobernadores, pero enfrentarla, como en mi caso, prendió el botón crítico y también trajo apoyo”⁷⁸. Se mostraba nítida la opción del futuro presidente por su estrategia de lucha directa contra los grupos insurgentes aun a costa de perder puntos porcentuales ante la opinión pública en la defensa de militares acusados de connivencia con el paramilitarismo.

El discurso de Uribe, como RP de estrategia política, se instalaba en medio de un proceso de paz que avanzaba con idas y vueltas y colisionaba contra la opción mayoritaria de la dirigencia tradicional. En ese marco, a mediados de 2001 lanzó su candidatura presidencial por afuera de la estructura del Partido Liberal y declaró: “Mi candidatura es liberal y multipartidista. Hoy encarno la disidencia liberal que será triunfante”⁷⁹. Al compás del progreso negativo del proceso de paz de Pastrana, la candidatura de Uribe avanzaba en las encuestas. Sus críticas a la zona de distensión se reiteraban sistemáticamente y eran valoradas en forma proporcional al desarrollo esquivo del proceso, ya que “después de dos años del despeje militar de 42 mil kilómetros cuadrados y del abandono de 100 mil ciudadanos, el resultado es desastroso: en lugar de un laboratorio de paz se ha permitido la consolidación de un paraíso de la delincuencia”⁸⁰. De igual manera se expresaba en Cartagena frente a un grupo de ganaderos cuando apoyaba la creación de milicias nacionales contempladas en la Constitución de 1886, ya que dicha propuesta, en palabras

⁷⁶ Contreras (2002: 56). Según las biógrafas Holguín y Escamilla (2009: 105): “El general Rito Alejo del Río había sido un oficial clave en la implementación de la estrategia de seguridad y recuperación de Urabá durante la gobernación de Uribe, quien consideraba injusto e inmerecido su llamado a calificar servicios”.

⁷⁷ El general Del Río fue nombrado asesor para asuntos de seguridad, luego del ascenso de Uribe al gobierno.

⁷⁸ Cepeda y Rojas (2008: 76).

⁷⁹ Tabares (2006: 25).

⁸⁰ Ibid (2006: 62).

de Uribe, expresaba “el sentimiento del 50% de los colombianos que quiere que este país sea menos permisivo con los bandoleros” (Cepeda y Rojas, 2008: 79).

A lo largo de todo el 2001, Uribe disertó sobre sus propuestas de cambio de rumbo frente al problema de la guerrilla, atacando con más ahínco a quienes defendían la polémica zona de distensión. A su vez, se desmarcaba de la dirigencia tradicional al proponer la participación de tropas extranjeras para combatir el narcotráfico. En este sentido, en diciembre de 2001 expresaba que no descartaba “la posibilidad de que en algún momento tengamos la presencia internacional de una fuerza de cooperación que tuviera como objetivo proteger a la población civil en zonas críticas”⁸¹. Estas audaces propuestas le reportaban a Uribe una corriente de opinión favorable a medida que el proceso de paz se truncaba. Asimismo, insistía sobre el beneficio social de incorporar, en el ámbito nacional, a las controvertidas Asociaciones Convivir de Antioquia como mecanismo participativo para destruir a las guerrillas.

Los opositores a Uribe, al observar su ascenso en la carrera presidencial, comenzaron a denunciar las relaciones que la familia del candidato tenía con el narcotráfico y con los paramilitares, volviendo a instalar en la opinión pública las acusaciones que pesaban sobre su figura por su polémica actuación en el Departamento de Aeronáutica Civil y durante de la gobernación de Antioquia. Durante los años en los que Uribe formó parte de la gestión pública, fue acusado de actuar a favor de los intereses del jefe narcotraficante Pablo Escobar, y de favorecer, durante su gobernación, la expansión de los paramilitares al dar aliento al proyecto de las empresas Convivir. El decidido apoyo brindado por el líder colombiano a estas organizaciones, le granjeó la sospecha de connivencia frente a estos grupos ilegales. En este sentido, y frente a la pregunta de un periodista del *Newsweek* sobre sus relaciones con los paramilitares, Uribe contestó: “Nunca me he reunido con ningún miembro ni de las fuerzas paramilitares ni de la guerrilla. [El jefe paramilitar] Carlos Castaño ha dicho claramente que no me conoce. Una vez, hace muchos años, me reuní con [el jefe militar de las AUC, Salvatore] Mancuso, cuando era un ganadero, pero no he vuelto a hablar con él desde que se unió a los paramilitares”. Y frente a la insistencia del

⁸¹ Revista *Semana*, en línea en: <<http://www.semana.com/nacion/articulo/help/48828-3>>.

periodista, afirmó: “No voy a responderle a eso. Si tengo vínculos con los grupos paramilitares, ponga una demanda ante las autoridades que correspondan”⁸².

En otra entrevista al tradicional diario colombiano *El Tiempo*, Uribe explicitaba que esa postura de lucha frontal frente a la guerrilla no implicaba una adscripción ideológica neoliberal, ya que “no soy de extrema derecha ni de derecha. Soy un demócrata que cree en la autoridad. Participo de los objetivos de la socialdemocracia: crear empleo productivo, profundizar la descentralización y avanzar en la seguridad social. Soy amigo de la intervención del Estado, no para obstruir, sino para garantizar equidad. Por eso, y porque no acepto importaciones desbocadas que arruinen nuestros sectores productivos, rechazo el neoliberalismo. Creo en el Estado comunitario, con creciente participación ciudadana”⁸³. Sin embargo, ninguna sospecha o acusación de complicidad con los grupos ilegales parecía afectar a Uribe, quien se presentaba como un candidato apoyado por una amplia coalición multipartidaria e independiente, en donde habitaban personalidades provenientes de los partidos tradicionales y se daba cabida a los reinsertados de grupos armados (Cepeda y Rojas, 2008: 83).

El crecimiento en las encuestas le señaló al ex gobernador de Antioquia el camino hacia el divorcio de su Partido, y en septiembre del 2001 anunció formalmente que se presentaría como candidato independiente contra Serpa, el candidato oficial del PL, generando un terremoto al interior de las filas del liberalismo. A pesar de partir, a comienzo de ese año, con una intención de voto del 4% y un escaso conocimiento del electorado, casi al finalizar el mismo y con los pobres resultados del proceso de paz con la guerrilla, Uribe tenía un reconocimiento del 78% (Holguín y Escamilla, 2009, 110).

Al inicio del año 2002, Uribe ya aventajaba a Serpa en la intención de voto, pero el abrupto final de las negociaciones con la guerrilla decidida por Pastrana aumentó en forma sideral las acciones del candidato de la “mano dura”. El ex ministro de Samper padeció el efecto declinante del truncado proceso de paz y el nuevo escenario post 11 de septiembre de 2001 creó las condiciones de triunfo para las candidaturas que se expresaran en forma intransigente frente a este clivaje. Para marzo de 2002, la intención de voto de Uribe superaba el 50% (Holguín y Escamilla, 2009, 111), al igual que su estrategia de

⁸² Contreras (2002: 63). Un excelente estudio sobre las relaciones entre Uribe y los paramilitares lo constituye el libro de Cepeda y Rojas (2009).

⁸³ Diario *El Tiempo*, 21/04/02.

recuperación por parte del Estado de las zonas en manos guerrilleras. Así, Uribe insistía durante su campaña electoral que el conflicto colombiano “tiene el potencial de desestabilizar América del Sur... puede destruir la selva amazónica... es más grave que el mismo conflicto de Irak”⁸⁴.

En todas sus alocuciones públicas brindadas en esos años, Uribe insistía en que el objetivo de aniquilar a la guerrilla iba por el mismo andarivel que el de dotar de seguridad al país. Según su concepción estratégica, no iba a existir desarrollo económico si el Estado no volvía a ejercer la autoridad sobre los grupos violentos. En ese marco, insistía en su propuesta de “Seguridad Democrática”, la cual se afincaba en la protección de la ciudadanía, ya que “el país necesita recuperar la autoridad, no cambiar de bando. Mi política de seguridad será tan firme para disuadir a los violentos como comprometida para restablecer los derechos humanos”⁸⁵. En un debate previo a las elecciones con el candidato liberal Horacio Serpa, ampliaba el concepto: “Mi propuesta de seguridad es democrática. ¿Cuál es su objetivo? Proteger a todos los ciudadanos, independientemente que sean empresarios o sindicalistas, propietarios del campo o campesinos trabajadores, de izquierda o de derecha. Es una propuesta de seguridad democrática, para recuperar esa protección efectiva. A la ciudadanía hay que protegerla frente a la agresión del guerrillero y del paramilitar”⁸⁶.

Como se señaló en el capítulo precedente, las condiciones económicas, políticas y sociales del país le permitieron a Uribe posicionarse como máximo candidato en las elecciones de mayo de 2002. El contexto externo a la dinámica política, al igual que en el caso de Chávez, le auguró circunstancias excepcionales para su irrupción, pero fueron también sus destrezas políticas (sus recursos de poder de estrategia política) quienes le permitieron exhibirse como el candidato ideal para reemplazar al bipartidismo menguante. Su decisión de enfrentar a los partidos tradicionales y crear una estructura partidaria propia (RP institucional) fungía como la estrategia adecuada para el momento histórico en el que se desarrollaba la vida política del país.

⁸⁴ Ramírez (2005: 148).

⁸⁵ Contreras (2002: 80).

⁸⁶ *Ibíd.* (2002: 83).

Su slogan de campaña, que apuntaba a “derrotar a la politiquería y la corrupción” y “garantizar la seguridad democrática frente a cualquier agresor”⁸⁷, caló hondo en una sociedad, como la colombiana, hastiada de la violencia, la descomposición política y el frustrado proceso de paz con la guerrilla. Por último, el líder antioqueño se presentará ante el gran público como un candidato *outsider* al sistema político, adicionando el componente fundacional a su futura presidencia. La edificación de un liderazgo originario de un proceso de transformación fue desde el comienzo uno de los recursos de poder que Uribe construyó durante los años previos a su arribo al gobierno. En ese sentido, debió constituirse como un líder ajeno a la “politiquería” que defenestraba y de la cual formó parte durante más de quince años, durante los cuales ocupó diferentes cargos en los distintos niveles del Estado.

Para el líder antioqueño la campaña electoral de 2002 fue novedosa por varios sentidos: “A veces cuando las campañas comienzan en grande, los candidatos sólo piensan lo que dicen y no asimilan por completo lo que se les dice a ellos. Nosotros vivimos la experiencia contraria. Recorrí todo el país, desde Pasto hasta las llanuras costeras de Santa Marta. Participé en numerosos programas radiales sin importarme que algunos tuvieran una cobertura de solo unos pocos kilómetros en algún lugar aislado, pues sabía que estas zonas eran, por lo general, las que más ayuda necesitan. Recibía todo tipo de preguntas sin el menor filtro y sin selección previa; en algunos casos la gente solo llamaba para insultarme o criticarme, pero la gran mayoría eran personas serias, con problemas, sueños y expectativas reales. Muchas veces terminaba haciéndoles más preguntas de las que ellas me hacían a mí”⁸⁸

Como es tradicional en Colombia, los comicios parlamentarios anteceden en dos meses al presidencial, en una suerte de primer test electoral. La evolución de Uribe en las encuestas condicionó la estrategia de los principales candidatos para la elección legislativa, quienes ante la evidencia de un triunfo casi seguro del ex gobernador de Antioquia “procuraron evitar que se los asociara con los partidos tradicionales y registraron sus

⁸⁷ *Ibíd.* (2002: 23).

⁸⁸ Uribe (2012: 127). E insistía “Hablar con la gente de la comunidad resultó, casi siempre, más ilustrativo que responder a las preguntas de los periodistas, quienes por lo general llegaban a las entrevistas con un sesgo, o se concentraban en el último chisme político o intriga parroquial de las grandes ciudades. La gente “real”, por el contrario, tendía a centrarse en sus necesidades, en los aspectos importantes y sustanciales del momento” (Uribe, 2012: 127)

candidaturas bajo otros nombres. Así, todos los que fueron elegidos como independientes se presentaron como potenciales socios de coalición con Uribe”⁸⁹.

Los partidos tradicionales, por otra parte, comenzaron a sentir el desgaste al que se encontraban sometidos desde los últimos años y sólo obtuvieron el 40 por ciento de los votos, el nivel más bajo conseguido en una elección parlamentaria⁹⁰. El PC era el primero de los partidos tradicionales que iba a sufrir el impacto negativo de la gestión de gobierno, en especial en el trato frente a la guerrilla. Dos días después de la derrota en las elecciones legislativas frente al Partido Liberal, el candidato oficialista, el ex ministro de Hacienda Juan Camilo Restrepo Salazar, anunció que se bajaba de la candidatura quedando huérfana la oferta electoral del partido de gobierno, por primera vez en los últimos treinta años. Resultaba lógico, entonces, que el apoyo partidario, ante la evidencia de las nulas chances de triunfo, se inclinara hacia una candidatura que avanzaba en forma arrolladora como la que expresaba Álvaro Uribe.

Con el aval de un millón de firmas y el respaldo del movimiento “Primero Colombia”, constituido para la elección presidencial, Uribe inscribió su candidatura a principios de abril. A pesar de no tener un bloque propio en el Congreso, contaba con la adhesión de varios ediles (55 de los 102 senadores elegidos el 10 de marzo en las listas del PL, el PC) y un conjunto de partidos pequeños y con ideologías variadas⁹¹ que confluían en el apoyo al candidato que desafiaba con grandes chances de triunfo a los partidos tradicionales. Estos apoyos parlamentarios emergían en forma previa al triunfo electoral y se convertían recursos de poder institucionales clave para los próximos años de gobierno.

Las propuestas del candidato de Primero Colombia podían sintetizarse en tres grandes ejes. El primero apuntaba al centro de gravedad del conflicto interno en Colombia: la violencia y la inseguridad. El antídoto frente a este tema, era su política de Seguridad Democrática que, en los hechos, implicaba la movilización de cerca de un millón de voluntarios en tareas de resistencia civil, asistencia humanitaria y auxilio a las fuerzas del

⁸⁹ Crisis Group (2005: 7).

⁹⁰ Datos obtenidos en base a la Registraduría Nacional del Estado Civil en <<http://www.registraduria.gov.co>>. Este descenso de los partidos tradicionales se evidenciaba en las encuestas realizadas por aquél entonces, en donde la adhesión al Partido Liberal disminuyó del 44% de la población en 1993 a 31% en el 2002 y los adherentes al Partido Conservador pasaron del 17% al 12% en el mismo periodo (Rodríguez Garavito, 2002: 199).

⁹¹ Los partidos que apoyaban a Uribe eran: Cambio Radical, Equipo Colombia, Colombia Siempre, Somos Colombia, Conservatismo Independiente, el Movimiento de Salvación Nacional y el Movimiento de Integración Popular (Mipol).

orden (Manifiesto Democrático 100 puntos). El segundo eje apuntaba a la realización de una profunda reforma política, para atender contra los intereses de la “politiquería y la corrupción”. Su propuesta principal era crear un Congreso unicameral de 150 miembros, eliminar el Consejo Superior de la Judicatura y dotar de independencia a los departamentos para que se fusionaran y formaran regiones a las que se concedería autonomía, tanto para la esfera gubernamental como para la legislativa (Manifiesto Democrático 100 puntos). El tercer eje descansaba en una reconversión de la economía con la prioridad puesta en la producción, lo que daría el puntapié inicial para la recuperación de la economía, que en 2001 sólo había crecido un 1,5%. Entre críticas al modelo neoliberal (“porque abandona lo social a la suerte del mercado”) y al “cuento” de las privatizaciones que esgrimían “los politiqueros”⁹², Uribe apostaba a conferir más recursos al rico tejido productivo de cooperativas, microempresas y demás asociaciones laborales, prometiendo préstamos blandos, exenciones tributarias y el mantenimiento de créditos a los productores agropecuarios (Manifiesto Democrático 100 puntos).

Las elecciones presidenciales se realizaron el 26 de mayo de 2002 y el triunfo de Uribe fue inobjetable. Sin necesidad de acudir a una segunda vuelta, y con el 53,04% de los sufragios, el candidato de Primero Colombia aventajó en más de 20 puntos a su antiguo compañero de Partido, Serpa. Muy atrás, en 3° lugar, se ubicó el centroizquierdista Luis Eduardo Garzón, representante del Frente Social y Político, con el 6,2%⁹³. La abstención electoral fue del 53,5%, 5% más que la realizada en el año 1998⁹⁴.

A dos meses de cumplir sus 50 años, luego de efectuar un gran periplo político, que incluía la Alcaldía y Gobernación de Antioquia, dos mandatos de senador y estudios de perfeccionamiento en el exterior, finalmente la perseverancia de Álvaro Uribe lo había colocado en la puerta de entrada de la Casa del Nariño listo para cumplir el sueño de “una Colombia con predominio de una clase media democrática, tolerante, solidaria y respetuosa con el medio ambiente”⁹⁵

⁹²Página de la Presidencia de la Nación, en línea en:

<http://www.presidencia.gov.co/prensa_new/documentos/agosto/07/documen.htm>.

⁹³ Datos obtenidos en base a la Registraduría Nacional del Estado Civil en línea en: <<http://www.registraduria.gov.co>>.

⁹⁴ Debe advertirse que en Colombia, al igual que en Venezuela, el voto es optativo y en general las elecciones se realizan en una atmósfera de violencia e intimidación en varios puntos del país debido a la presión ejercida por los grupos armados.

⁹⁵ Tabares, (2006:28).

Resumiendo, a lo largo de este ítem se observó el trayecto político de Uribe desde sus primeras experiencias a nivel municipal hasta su llegada a la Casa del Nariño.

La posición histórica de enfrentamiento frontal contra la guerrilla (que estuvo marcado a nivel personal por la muerte de su padre), sostenida durante décadas por Uribe, se convirtió en uno de los primeros recursos de poder de estrategia política con los que contó el líder colombiano para legitimar su posición política intransigente. Luego del atentado en territorio norteamericano en 2001 y del frustrado proceso de paz con las FARC, el líder colombiano se despegó de su Partido y construyó su candidatura presidencial por fuera de los partidos tradicionales y con una agrupación política propia (RP institucional). Es decir, el incremento de los recursos de poder (de estrategia política) por parte de Uribe provino de la constitución de un espacio partidario amplio, de su histórico posicionamiento frente al fenómeno guerrillero y de su cuestionamiento a una clase política desgastada en sus cimientos e incapaz de recomponerse. En ese contexto, el líder antioqueño también conquistó dos recursos de poder institucionales clave como por ejemplo, el del apoyo empresarial deseoso de un orden estable basado en la clausura del ciclo de violencia en el cual se desarrollaba la vida institucional colombiana, y un conjunto de parlamentarios de nuevos y antiguos partidos que le garantizarían un sostén en ese ámbito desde el inicio de su futuro gobierno.

Conclusión

La credencial de presentación de Hugo Chávez en el escenario político venezolano se produce a partir del fallido golpe militar de febrero de 1992. Éste oficia como una huella indeleble y se ofrece como uno de los grandes factores explicativos de los años por venir.

La crisis económica que había hecho eclosión en febrero de 1989 con la explosión social del “Caracazo”, los alarmantes índices sociales que verificaban una pobreza que alcanzaba a la mitad de la población venezolana y la crisis del sistema de partidos se conjugaban en un escenario apto para salidas políticas por fuera de los partidos tradicionales.

Los recursos de poder que Chávez pudo poner en juego durante esta primera parte de su vida política emergieron, paradójicamente, del fracaso de su intento de sublevación militar. Los recursos principales con los que contó Chávez desde antes de su asunción a la primera magistratura fueron las Fuerzas Armadas y el apoyo popular, en especial de los sectores pobres, mayoritarios en la Venezuela del “Punto Fijo”. A su vez, la alianza de partidos Polo Patriótico que lo acompañó hacia el poder se constituyó a partir de un eje central, el MVR, la herramienta partidaria creada por Chávez para dar batalla en la arena electoral y el partido que poseía el mayor potencial de movilización y de performance electoral de la coalición⁹⁶. Estos recursos de poder institucionales (MVR y PP) generado por el líder bolivariano sentaron las bases para una convocatoria amplia y resultaron un pilar institucional vital para la unidad del campo de la oposición al “puntofijismo”.

El discurso confrontativo de Chávez se convirtió en otro RP de estrategia política (que el venezolano hará jugar en sus gestiones de gobierno) que le permitió ganar adeptos en paralelo a la descomposición de un sistema político que observaba como los partidos históricos venezolanos se marchitaban al compás del avance del “Huracán Hugo”.

Las estrategias de los partidos tradicionales por truncar las posibilidades concretas de triunfo opositor no resultaron exitosas y su última maniobra de unificar en una candidatura a la totalidad de apoyos oficiales tampoco obtuvo réditos electorales. La

⁹⁶ El MVR en todas las elecciones del periodo obtenía un porcentaje superior al 80% de los votos del PP. Datos obtenidos sobre la base de: <www.cne.gov.ve>.

victoria de Chávez fue rotunda e implicó un cambio sustancial en la política venezolana de la próxima década

El contexto político, económico, social e internacional que da la bienvenida a Álvaro Uribe será la de un sistema político agotado desde sus cimientos. El fracaso del proceso de paz con la guerrilla, una situación económica acuciante luego de la crisis del año 1999, un tejido social deteriorado, una sociedad desilusionada con la actuación de una clase política desgastada luego de décadas de pactos bipartidistas sin soluciones concretas a sus demandas de seguridad y un contexto internacional signado por la guerra frente al terrorismo, configuraban el escenario en el cual dará comienzo la gestión presidencial del líder de la alianza “Primero Colombia”. La pérdida de recursos de poder de apoyo popular/ ciudadano e institucional de los partidos tradicionales colombianos, en este contexto, se convirtió en una carta de poder en manos de Uribe y en detrimento de la posibilidad de reconstruir dicho sistema por parte del PL y PC.

La trayectoria política de Álvaro Uribe mostró, desde su inicio en la Alcaldía de Medellín hasta el arribo a la Casa del Nariño, un itinerario recto y coherente. Su posición histórica frente al conflicto armado (RP de estrategia política) lo encontró siempre a favor de la derrota de la guerrilla por la vía de las armas. Las Asociaciones Convivir, su propuesta del Estado Comunitario y sus múltiples declaraciones permitían observar que la seguridad era el primer peldaño que debía recorrer la sociedad para encontrar la paz definitiva.

Los recursos de poder que Uribe consiguió con anterioridad a la llegada al gobierno derivaban de presentarse como la cara antagónica al bipartidismo tradicional en crisis, asociado a la “corrupción y al politiquería”, y el apoyo popular/ ciudadano logrado a partir de su posicionamiento frente a la guerrilla en el contexto del fracasado proceso de paz del Caguán.

Por otro lado, la buena relación con la clase empresarial colombiana, que veía con buenos ojos la llegada al poder de un candidato con capacidad de dotar de un orden para realizar sus negocios, le aseguró otro RP institucional vital para comenzar su mandato presidencial con el apoyo de grupos poderosos indispensable en la búsqueda de un orden estable en el convulsionado país. La estructura política que lo ungió como presidente, a su

vez, fue la creada por el propio Uribe luego de abandonar las filas del tradicional Partido Liberal, lo que le permitió contar con otro recurso institucional esencial en vistas a abastecerse de una disciplina partidaria acorde a los tiempos por venir.

Por último, las credenciales de presentación del líder antioqueño ante la opinión pública se afincaban en que Uribe emergía como un *outsider* a la política (la construcción de otro RP de estrategia política) en un contexto en el que la crisis de representación y el aumento de la violencia social formaban parte de la cotidianidad del país.

LAS PRIMERAS PRESIDENCIAS

CAPÍTULO II

LOS RECURSOS DE PODER CHAVISTAS Y EL CAMBIO DE ESTRUCTURAS INSTITUCIONALES (1999-2002)

Son tiranías disfrazadas de democracia lo que hemos
tenido en estas tierras durante mucho tiempo.
Hay que echar abajo las bases del estado colonial
y construir un nuevo Estado Social, una república
nueva que sea expresión del poder constituyente”

Hugo Chávez (Caracas, 2005)

Introducción

Este capítulo describe el proceso político que llevó adelante Hugo Chávez a partir de su asunción presidencial en febrero de 1999 hasta el fallido intento de golpe militar opositor en abril de 2002. En ese marco, se observa cómo el líder bolivariano produjo, por intermedio de diferentes recursos de poder, el cambio de estructuras institucionales más importante del último cuarto del siglo XX en Venezuela.

En este sentido, el capítulo analiza, en primer término, de qué forma el andamiaje político institucional del pacto de “Punto Fijo” será sustituido por la nueva Constitución Bolivariana a través de un proceso electoral inédito basado en plebiscitos y compuesto de tres elecciones consecutivas a lo largo de 1999. Como consecuencia de ese proceso de transformación, durante el año 2000 se realizó la relegitimación de la totalidad de los cargos nacionales y provinciales en el marco del nuevo texto constitucional. Aquí se prestará vital importancia a cómo Chávez logra modificar, a partir de este nuevo esquema, los recursos de poder institucionales previamente en manos de la oposición.

Asimismo, el apartado describe, en un segundo momento, el incipiente conflicto con la oposición a partir de las nuevas leyes promulgadas por el presidente en diciembre de 2001 que atacaban aspectos neurálgicos de la composición propietaria de la tenencia de la tierra en el país. En ese sentido, se observa cómo la oposición política venezolana resiste

estas medidas y de qué manera esta estrategia opositora se transforma en la modalidad habitual de protesta frente al gobierno del presidente Chávez.

Por último, el capítulo analiza el fallido golpe de estado de abril de 2002 y la inmediata reposición en el poder de Chávez, prestando atención a los movimientos en el interior de las Fuerzas Armadas, como así también las modificaciones acaecidas en ese sector luego de que el líder bolivariano retomara el control del gobierno. En ese sentido, se observa de qué manera se van desarrollando los sucesos de abril de 2002, qué rol cumplieron los medios de comunicación, qué lugar ocuparon las fuerzas de la oposición y cómo fueron los movimientos en el interior de los sectores oficialistas que defendían el gobierno.

2.1. La generación de recursos institucionales para consolidar la revolución bolivariana

En este ítem se describe el proceso de transformación institucional del sistema político venezolano a partir del llamado a la Asamblea Constituyente por parte del flamante presidente, observando la totalidad de las elecciones realizadas durante el año 1999 (momentos imprescindibles para la reforma), que darán lugar a las “megaelecciones” del año siguiente con un nuevo formato constitucional. En ese marco, se analizan los cambios impuestos en la nueva Constitución Bolivariana, prestando atención a los nuevos poderes adquiridos por el primer mandatario en este proceso de transformación institucional.

La Asamblea Constituyente, la primera estación hacia la institucionalización chavista

“Juro delante de Dios, juro delante de la Patria, juro delante de mi pueblo, que sobre esta moribunda constitución, haré cumplir e impulsaré las transformaciones democráticas necesarias para que la República nueva tenga una Carta magna adecuada a los tiempos. Lo Juro”⁹⁷. El mismo día de la asunción, y bajo una asamblea con mayoría opositora, Chávez juraba sobre la “moribunda” constitución y acto seguido, por intermedio de un decreto, convocaba a una Asamblea Nacional Constituyente como medio para refundar la República.

El llamado a una reforma constitucional formó, desde los inicios, uno de los ejes fundamentales del discurso originario de Chávez, tanto desde los años de prisión como así también de los años posteriores⁹⁸. Su asunción, el 4 de febrero de 1999, a siete años del golpe militar fallido, simbolizaba la derrota del sistema político venezolano afincado en un bipartidismo con escaso espacio para terceras opciones y el triunfo de un movimiento que venía a cuestionar las bases estructurales de una forma de enhebrar la relación entre el Estado y la sociedad agotada y desgastada en sus cimientos. El líder bolivariano así lo

⁹⁷ Narvaja de Arnoux (2008: 126).

⁹⁸ Así se expresaba Hugo Chávez al respecto: “Casi nadie sabía lo que era una constituyente. Nosotros mismos tampoco lo habíamos desarrollado bien, así que fue en la cárcel (la cárcel fue, en verdad, una cárcel fecunda, una escuela). Siempre he dicho que agradezco a Dios haber pasado por esa cárcel, por que fue una escuela, un posgrado de dos años y un poco más, un estudio a fondo de lo que habíamos hecho y el impacto que había causado nuestra rebelión, que jamás lo habíamos soñado” (Bilbao, 2002: 27).

entendía, y la convocatoria a la Asamblea Constituyente tenía por “objetivo fundamental la transformación de las bases del Estado y la creación de una nueva República, la refundación de la República, la relegitimación de la democracia. Ese es el objetivo fundamental de la Asamblea Constituyente. Es político, es macropolítico pero no es económico ni es social en lo inmediato y el gobierno que yo hoy comenzaré a dirigir y he comenzado ya, tiene que enfrentar una situación heredada, terrible, un déficit de casi 9 puntos del PBI”⁹⁹.

A los 44 años, todo un record en cuanto a la edad de los presidentes venezolanos, Chávez asumía a la primera magistratura con un 80 por ciento de aceptación (Marcano y Barrera, 2005: 49) y un apoyo popular sin precedentes, un RP que el primer mandatario hará jugar en lo inmediato. A la altura de las circunstancias, y ubicando su persona en el contexto histórico, el líder bolivariano expresaba: “Mi vida, en lo adelante, dedicada estará, como Presidente de Venezuela, como uno más de la batalla, como primer soldado de esta batalla, dedicada de lleno... en la tarea hermosa que ustedes me han asignado. Porque, queridos amigos, yo estoy aquí, con esta banda tricolor en el pecho, y con esta majestad presidencial, no por mí mismo, no, yo soy producto de unas circunstancias; yo apenas soy, diría Bolívar, una débil paja arrastrado por el huracán revolucionario... yo desde hoy me convierto en instrumento de ustedes (pueblo de Venezuela); yo apenas soy y cumpliré el mandato que ustedes me han dado”¹⁰⁰.

Para que la nueva constitución fuera aprobada, requería de una serie de elecciones que se desarrollarían durante todo el año 1999. Los pasos que darían génesis al nuevo texto constitucional serían, en primer lugar, para el mes de abril la realización de un referendo para aprobar la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente; en segundo término, para junio, se debían elegir los convencionales constituyente que redactarían la nueva constitución y, por último, para diciembre, se realizaría el referendo para aprobar la Constitución Bolivariana. Esta ingeniería electoral tendría como puerto final las “megaelecciones” de junio del 2000, en las cuales se elegirían nuevamente, y bajo el formato del nuevo texto constitucional, presidente, gobernadores, alcaldes, Asamblea Nacional, juntas parroquiales y asambleas legislativas.

⁹⁹ Díaz Rangel (2006: 231).

¹⁰⁰ *Ibíd.* (2006: 241).

El 25 de abril de 1999 se realizó el primer test electoral y el referéndum se aprobó con el 87,75% (3.630.666 de votos) para la convocatoria a la Asamblea, y con el 81,74% (3.382.075 de votos) para las bases relativas a la composición y competencia de la misma¹⁰¹. A pesar de la amplia victoria obtenida en el referendo de reforma constitucional, la alta abstención (62,35%)¹⁰² matizaba en parte el abultado triunfo del líder bolivariano en la contienda. Hay que recordar que en Venezuela el voto es optativo, y que la modificación de dicha modalidad electoral no formó parte del menú transformador de la reforma.

El triunfo electoral de abril permitió que en el mes de junio se realizaran las elecciones de convencionales constituyentes. Durante el mes de mayo el líder bolivariano iba a ser ungido presidente del partido MVR (RP institucional), rompiendo la costumbre histórica según la cual los gobernantes no se ocupan de las tareas partidarias. Una vez más, Chávez se apartaba de las tradiciones que formaban parte del sistema político del puntofijismo, y dirigía todos sus esfuerzos para las elecciones de convencionales que tendrían la tarea de reformar la constitución. En ese sentido, el presidente le puso cuerpo a la campaña en un contexto signado por la conflictividad con la vieja elite política. El 25 de julio, más de un millar de candidatos se disputaron los 128 cargos en juego. El Polo Patriótico obtuvo 122 (95,3%) y los 6 restantes no formaban parte de las listas de los partidos tradicionales (Abal Medina, 2006: 123). El triunfo chavista fue arrollador, y los convencionales constituyente elegidos trabajarían a destajo con la finalidad de que en tres meses se redactara un nuevo texto constitucional.

Durante esos meses, los conflictos principales se originaron acerca del rol que debían ejercer los poderes Legislativo y Judicial en esa coyuntura frente al poder que representaba la Asamblea Constitucional (AC). Es decir, el debate giraba en torno a si la AC debía ser el órgano supremo, con capacidad para disolver las otras instituciones hasta la aprobación de la nueva Carta magna, o si, por el contrario, dichos poderes debían “convivir” con la Asamblea. La oposición defendía la autonomía institucional del Congreso

¹⁰¹ Datos obtenidos en base al Consejo Nacional Electoral: en <www.cne.gov.ve>. Las preguntas del referendo fueron las siguientes: 1) ¿Convoca usted una Asamblea Nacional Constituyente con el propósito de transformar el Estado y crear un Nuevo Ordenamiento Jurídico que permita el funcionamiento efectivo de una Democracia Social y Participativa? 2) ¿Está Usted de acuerdo con las bases propuestas por el Ejecutivo Nacional para la convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente, examinadas y modificadas parcialmente por el Consejo Nacional Electoral en sesión de fecha Marzo 24, 1999 y publicadas en su texto íntegro, en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela Número 36.669 de fecha Marzo 25 1999? (Abal Medina, 2006: 123).

¹⁰² Datos obtenidos en base al Consejo Nacional Electoral, en línea en: <www.cne.gov.ve>.

(en el cual contaba, como se dijo, con una compacta mayoría en ambas cámaras) y se enfrentaba a las pretensiones del oficialismo de eliminarlo. Según Chávez, la AC debía ser plenipotenciaria: es decir, “puede disolver el Congreso, puede disolver la Corte e incluso nos pueden sacar de aquí. Y yo estoy dispuesto a correr ese riesgo. No le tengo miedo que la asamblea sea plenipotenciaria. Esa es la vía política. Eso lleva su ritmo. Claro, hay mucha fuerza en la calle y si jugamos muy bien la estrategia, ellos no van a poder”¹⁰³. Es decir, la puja de poderes existentes derivaba de la resistencia opositora a perder una de los recursos de poder institucional, como era la mayoría en las cámaras parlamentarias.

Finalmente, a principios de septiembre, con la mediación de la Iglesia, el Congreso reinició sus sesiones con una agenda consensuada con la AC, hasta que el 7 de octubre la Corte Suprema de Justicia dictó un fallo en que indicaba que la AC era “supraconstitucional” y no se encontraba sometida a la regulación de la Constitución vigente a la fecha (Abal Medina, 2006: 124). En ese sentido, la Corte le hacía un guiño a los intereses del primer mandatario y le otorgaba un poder saliente a la AC encargada de redactar una nueva legislación constitucional.

Para el líder bolivariano, la aprobación del nuevo texto constitucional y la posterior relegitimación de todos los cargos era la condición indispensable y primaria de cualquier proyecto económico, político y social con garantía de durabilidad y éxito. En este sentido, Chávez suponía que el piso necesario para emprender cualquier proyecto de transformación económico y social requería, como primer paso, la aprobación de un nuevo texto constitucional que oficiaría de pacto social entre los venezolanos y marca fundante de un nuevo vínculo entre el Estado y la sociedad. A su vez, estas modificaciones institucionales le otorgarían los recursos de poder necesarios para llevar adelante dicho proceso transformador y modificar la relación de fuerzas en el ámbito legislativo y en los poderes presidenciales. En este sentido, el líder expresaba: “aquí se rompió el lazo ético del que hablaba Rousseau. El contrato social no existe. No hay estado de derecho, no hay marco, no hay base sobre la cual construir un modelo económico estable. Entonces lo más importante es transformar el modelo político, refundar la República y echar unas bases. Sólo así podremos entonces impulsar un modelo económico”¹⁰⁴.

¹⁰³ Dieterich (1999: 25).

¹⁰⁴ Dieterich (1999: 25).

En tiempo record (como se dijo, tres meses), y mucho antes de los 180 días preestablecidos para su final, la AC parió una nueva Constitución. El 19 de noviembre de 1999 fue presentado el proyecto ante el presidente y el Consejo Nacional Electoral (CNE), para que un nuevo referéndum otorgara la aprobación final al texto que entraría en vigencia a principios de 2000. Este se llevó a cabo el 15 de diciembre con la victoria del Sí, por 71,78% (3.301.475 de votos) frente al 28,22% (1.298.105) que votó por el No. La abstención alcanzó el 55,63%¹⁰⁵.

Esta maratónica y victoriosa carrera electoral venía a demostrar, sin dudas, que la popularidad de Chávez (RP de apoyo popular/ ciudadano) se mantenía inalterable a pesar de los altos índices de abstención¹⁰⁶. A su vez, la sucesión de actos electorales creó un clima de movilización, participación y disputa como hacía décadas no ocurría en Venezuela, siendo la misma sociedad, por intermedio del ejercicio democrático, quien decidía la dirección que tomaban los hechos políticos. En ese sentido, Chávez - al sumergir a la democracia venezolana en un clima de enfrentamiento con las viejas elites políticas, con la Iglesia, con los sectores económicos- transformaba las perspectivas de lo público asumiendo la democracia un espacio de conflicto”¹⁰⁷.

Las modificaciones más importantes en el nuevo texto constitucional fueron que se le otorgaba rango constitucional a los convenios internacionales relativos a los derechos humanos, por primera vez se reconocían e incorporaban los derechos de los pueblos indígenas y se creaba el Poder Ciudadano (Fiscalía General, Defensoría del Pueblo y Contraloría General de la República) con el fin de cuidar los intereses ciudadanos y el

¹⁰⁵ Datos obtenidos en base al Consejo Nacional Electoral. En línea en: <www.cne.gov.ve>.

¹⁰⁶ Considero que este índice no puede ser tomado como de rechazo a la figura de Chávez, como así tampoco, como es evidente, de apoyo. Al no ser obligatorias las elecciones en Venezuela, y teniendo en cuenta que este fenómeno ya se encontraba presente previo a la asunción de Chávez, los 3.000.000 de votos que siempre acompañaron al primer mandatario evidencian el carácter mayoritario de este proceso. Según Carmen Pérez Baralt (2000), desde finales de los años 80 la abstención comienza a aparecer con gran fuerza, primero en los procesos regionales, donde la abstención se ubica alrededor del 50%. En las elecciones nacionales, el primer aumento significativo de la abstención se produce entre 1988 y 1993, cuando pasa del 18% al 40%... Es a partir de 1993 que este “desencanto político” comienza profundizarse, y no se trata solamente de una evaluación negativa de los gobiernos democráticos, sino de la democracia misma. La insatisfacción con la democracia comienza entonces a fomentar el abstencionismo. En 1998 la abstención registrada en la elección presidencial retrocede unos puntos, para colocarse en 36,2% (contrarrestada por la participación de quienes encontraron en Chávez una vía para la expresión de su desencanto)... En resumen, la abstención se mantuvo en el mismo nivel por dos tendencias que se equilibraron: la erosión de las lealtades partidistas (sobre todo las de los partidos tradicionales y la escasa movilización partidista) y el voto voluntario que tuvieron como efecto reducir la participación electoral. La abstención se consolida como elemento permanente del comportamiento electoral venezolano en las elecciones de 2000, cuando alcanza el 43,5% de la población inscrita”.

¹⁰⁷ Romero Jiménez (2003: 28).

Poder Electoral (Consejo Nacional Electoral y Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia). En cuanto a los artículos que profundizaban la democracia en el sistema político venezolano, se incorporaban los que hacen a la revocatoria de mandato de todos los poderes, incluido el del presidente (única en Sudamérica), como así también serían vinculantes los medios de participación como el referendo, la consulta popular, la iniciativa legislativa, constitucional y constituyente, el cabildo abierto y la asamblea de ciudadanos y ciudadanas (Lissidini, 2009: 2).

El periodo presidencial se fijaba en seis años, con la posibilidad de una reelección inmediata (antes era de cinco y sin reelección), por una sola vez¹⁰⁸. El presidente tiene como potestad la elección del vicepresidente y de su gabinete y ostenta los cargos de Jefe de Estado como Jefe de Gobierno, además de constituirse como Comandante en Jefe de Fuerzas Armadas Nacionales y Jefe directo de la Milicia. El primer mandatario, a su vez, posee la facultad de disolver la Asamblea Nacional cuando el vicepresidente ejecutivo fuera relevado de su cargo en tres ocasiones dentro de un mismo periodo constitucional. Entre sus atribuciones, el presidente cuenta -luego de esta reforma- con la facultad de emitir decretos con fuerza de ley, de fijar cantidad, organización y competencia de los ministerios, de convocar a referendos, de iniciativa legislativa, de la posibilidad, si contase con la mayoría especial de la Asamblea (dos tercios), de aprobar leyes orgánicas con amplios poderes¹⁰⁹ y de la posibilidad de disolver la Asamblea en casos excepcionales. Es decir, se trata de atribuciones potentes concentradas en manos del presidente y de fuerte injerencia en el ámbito legislativo. Estos recursos institucionales conquistados por el primer mandatario luego de la reforma resultarán vitales para la transformación social que el líder bolivariano llevará adelante los años siguientes.

¹⁰⁸ Como se observará más tarde, a partir de febrero de 2009 con el triunfo en el plebiscito la reelección presidencial es indefinida.

¹⁰⁹ “Son leyes orgánicas las que así denomina esta Constitución; las que se dicten para organizar los poderes públicos o para desarrollar los derechos constitucionales y las que sirvan de marco normativo a otras leyes. Todo proyecto de ley orgánica, salvo aquel que esta Constitución califique como tal, será previamente admitido por la Asamblea Nacional, por el voto de las dos terceras partes de los o las integrantes presentes antes de iniciarse la discusión del respectivo proyecto de ley. Esta votación calificada se aplicará también para la modificación de las leyes orgánicas” (Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, artículo N° 203). Las dos terceras partes de la Asamblea también son requeridas para: autorizar al Ejecutivo Nacional para crear, modificar o suspender servicios públicos en caso de urgencia comprobada. Someter a referendo los tratados, convenios o acuerdos internacionales que pudieren comprometer la soberanía nacional o transferir competencias a órganos supranacionales y la iniciativa de convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente, entre los más importantes. Chávez ha gozado de la mayoría calificada (las 2/3 partes de los integrantes de la Asamblea) durante el periodo 2006- 2011.

Al desaparecer la Cámara de Senadores, la Asamblea Nacional pasó a ser un órgano unicameral. Para el mejor y más fluido funcionamiento del Poder Ejecutivo, se creó la figura del vicepresidente ejecutivo (quien por medio de un voto de censura puede ser depuesto de su cargo al igual que los ministros por las 3/5 partes de la Asamblea), colaborador inmediato del presidente y coordinador de la administración pública nacional. Por último, se modificó el nombre del país, que pasó a llamarse República Bolivariana de Venezuela.

En cuanto a la relación entre el presidente y los militares, uno de los principales sostenes y recursos de poder del primer mandatario se advertía en la institucionalización de una nueva relación que implicaba la delegación de los ascensos militares a la propia fuerza (a excepción de los grados mayores, en la que interviene el presidente), la sustitución del sistema de negociaciones entre los partidos representados en la Comisión de Defensa del Senado, las Fuerzas Armadas y el Ejecutivo, por otro en el cual sólo el presidente tiene la potestad y responsabilidad de ascender a los oficiales (Lissidini, 2009: 15). Luego de dichas modificaciones en el ámbito castrense, el presidente posee la autoridad de promover a sus oficiales a partir del grado de coronel o capitán y nombrarlos para los cargos que les son privativos. Aquí se observa la fuerte preeminencia que tendrá el Ejecutivo sobre un actor clave en el proceso político venezolano: las Fuerzas Armadas¹¹⁰.

Para algunos autores, estas modificaciones constitucionales, en especial las que amplían la participación ciudadana en la arena electoral, eran positivas, ya que permitían extender los marcos de la democracia representativa (Pérez Jiménez: 2003), en tanto que para otros se trataba de un texto constitucional que fortalecía la figura del primer mandatario acrecentando el poder presidencial y debilitando el legislativo (Márquez Trino: 2004)¹¹¹.

En cuanto a las elecciones regionales, éstas no sufrieron modificaciones. Desde agosto de 1988, con la aprobación de la Ley de Elección y Remoción de Gobernadores

¹¹⁰ Luego del fallido golpe de estado de la oposición en abril de 2002, Chávez hará un uso sistemático de esta herramienta.

¹¹¹ Según Norberto Bacher, otro de los aportes de este proceso “fue poner a debatir política al pueblo, justamente alrededor de los contenidos de la nueva Constitución. Eso fue un hecho inédito en la política venezolana. El pueblo dejó de ser un mero receptor de ofertas electorales para pasar a constituirse en un interlocutor, un protagonista del debate político. La politización se reforzó creando mecanismos directos de intercambio entre Chávez y el pueblo, como en sus orígenes fue el programa *Aló Presidente*, en su formato radial”. Norberto Bacher. Entrevista con el autor.

(reformada en abril de 1989), la selección de los ejecutivos regionales se realiza bajo el sufragio popular, dejando al presidente sin la potestad de su nombramiento. La reforma de la Ley Orgánica de Régimen Municipal, en junio de 1989, consagró la figura del Alcalde, elegido en forma directa, y en diciembre de 1989 se promulgó la Ley Orgánica de Descentralización, Delimitación y Transferencia de Competencias del Poder Público, que permitía una mayor autonomía regional en un contexto de crisis política posterior al “Caracazo”. En ese sentido, según Mascareño (2000: 23), Venezuela decidió transitar un camino en el cual la transferencia hacia los estados tendría un carácter gradual, a partir del cual las negociaciones entre niveles de gobierno transcurren en función de las capacidades y voluntades de cada nivel, dentro del marco que pauta el arreglo institucional. Esto diferencia al país de otras experiencias sudamericanas que, como la colombiana, optaron por una transferencia total y obligatoria de plazos de tiempo predeterminados lo que obligaba a los gobiernos territoriales a apurar la marcha. Es decir, en el caso colombiano, la fortaleza y autonomía de los gobiernos subnacionales fue mayor que en el caso venezolano¹¹². Estas reformas dotaron a los ejecutivos provinciales de la legitimación popular que carecía previamente a las modificaciones de 1989. Venezuela está constituida por 24 provincias denominadas Estados, de los cuales 23 son federales y uno, Caracas, distrito capital¹¹³. Sin lugar a dudas, los recursos de poder que obtenía el presidente con anterioridad a estas reformas le otorgaba un importante poder financiero e institucional, superior, en cuanto a la capacidad de intervenir en los asuntos provinciales, al actual.

Durante este periodo de cambio, los sectores partidarios del presidente adoptaron el concepto de “democracia participativa”, para entender la participación directa del pueblo en la toma de decisiones, con el fin de esquivar el poder de las elites político-partidistas. La nueva Constitución estableció la obligación del Estado para promover la participación ciudadana en la toma de decisiones (artículo 62). De la misma forma, “puso fin a los subsidios a los partidos políticos y los obligó a celebrar elecciones internas para la

¹¹² Para un estudio particular del caso colombiano analizado en comparación con otras reformas en el ámbito sudamericano, véase: Falleti (2006).

¹¹³ A partir de la reforma de 1999 los cargos definidos son: Presidente de la República, Representantes a los Parlamentos Andino y Latinoamericano, Diputados a la Asamblea Nacional, Gobernadores de Estado, Diputados a los Consejos Legislativos Estadales, Alcaldes Municipales, Concejos Municipales, Miembros de Juntas Parroquiales, Alcalde Metropolitano (y Alcaldes de los Municipios que integran el Distrito Metropolitano) y Concejo Metropolitano. Datos obtenidos en base al Consejo Nacional Electoral. En línea en: <www.cne.gov.ve>.

escogencia de los candidatos a cargos de elección popular y para sus organismos de dirección (artículo 67). La democracia participativa quedó ejemplificada en el papel que desempeñaron los movimientos sociales al presentar 642 propuestas a la Asamblea Constituyente, más de la mitad de las cuales fueron incorporadas en la nueva Constitución”¹¹⁴.

Recapitulando, durante el año 1999 se produjo en Venezuela un proceso de transformación institucional sin precedentes. Entre los meses de abril y diciembre se celebraron en forma consecutiva tres elecciones (dos plebiscitos y una de convencionales) que dieron por resultado un nuevo texto constitucional legitimado por la ciudadanía. La nueva constitución introdujo cambios sustantivos en lo referido a los poderes presidenciales, incrementando los recursos de poder institucionales del primer mandatario, en especial en la relación con el legislativo (posibilidades de decretos de acuerdo a las distintas mayorías), su influencia en los ascensos en el ámbito castrense y las facultades excepcionales con que gozará en este nuevo escenario institucional. La aprobación de este texto constitucional permitió un nuevo llamado a elecciones que será la génesis de una nueva configuración institucional y política favorable al presidente, y traerá nuevos recursos de poder en la arena parlamentaria y regional.

¹¹⁴ Ellner (2010: 79)

2.2. La relegitimación de Chávez y el aumento de los recursos de poder

Este ítem se concentra en el análisis de las “megaelecciones” de la totalidad de los cargos electivos bajo la nueva constitución, e intenta explicar cuáles fueron los recursos institucionales que el líder bolivariano consiguió luego de estos comicios. En ese esquema, se observa de qué forma Chávez vuelve a legitimarse en la presidencia y de qué manera aumenta los recursos de poder que le serán indispensables para asegurar los cambios económicos y sociales proyectados para esta nueva etapa.

Un nuevo mandato con mayores recursos institucionales

El 30 de julio de 2000 se desarrollaron las “megaelecciones” de presidente, gobernadores, alcaldes, Asamblea Nacional, juntas parroquiales y asambleas legislativas. Es decir, producto de la aprobación del nuevo texto constitucional y tal como estaba estipulado legalmente, se eligieron la totalidad de los cargos electivos. Nuevamente, Hugo Chávez venció en forma contundente. Esta vez, su rival fue Francisco Arias Cárdenas (su ex compañero de ruta en la intentona militar de 1992) apoyado por Causa R y por partidos pequeños, a los cuales se sumaron “adecos” y “copeyanos”, ya que ambos partidos, al igual que en la elección de 1998, no presentaron candidatura a presidente. Esta ausencia evidenciaba la crisis terminal de los partidos tradicionales ya que la disputa por el cargo mayor se definió entre los dos principales protagonistas del fallido golpe militar de febrero de 1992.

El líder bolivariano obtuvo 3.757.773 de votos (59,76%) frente a los 2.359.459 (37,52%) de Arias Cárdenas, aumentando su performance electoral en 3 puntos en comparación a las anteriores contiendas¹¹⁵. La composición de la Asamblea Nacional, ahora convertida en unicameral, reflejaba al máximo la hegemonía que iba alcanzando el proyecto chavista, ya que el Polo Patriótico obtuvo 99 escaños (93 del MVR y 6 aliados) sobre el total de 165, asegurándose, de esa manera, una amplia mayoría parlamentaria (2/3 del total) en vista a profundizar los aspectos más importantes del proceso bolivariano. La

¹¹⁵ Datos obtenidos en base al Consejo Nacional Electoral. En línea en: <www.cne.gov.ve>.

nueva constitución le ofrecía al presidente herramientas legales que, en muchos casos, podrían ser utilizadas cuando existiera una mayoría de esta naturaleza.

En cuanto a las gobernaciones, el PP consiguió 16 de las 23 en disputa, aumentando en siete los cargos ejecutivos provinciales (Lalander: 2004) si los comparamos con los resultados de las elecciones regionales de noviembre de 1998. La relegitimación de todos los cargos bajo la égida de la nueva constitución favoreció en forma notable al líder bolivariano y le permitió incrementar los recursos de poder institucionales para avanzar en su proyecto de transformación del país.

El dominio del parlamento, junto con la obtención de la mayor parte de las gobernaciones, le aseguraba a Chávez impulsar los cambios en la arena de lo económico social. En este sentido, así se expresaba el presidente en relación con el cambio en la composición institucional de los cargos electivos: “En esos momentos era urgentemente necesario transformar el mapa político para poder continuar impulsando el proyecto revolucionario... teníamos solo tres gobernadores afectos al proceso y el Congreso Nacional estaba en manos de ellos: éramos minoría”¹¹⁶.

Los recursos de poder con los que contó Chávez para encarar el proceso de refundación del sistema político venezolano se asentaban principalmente en dos pilares: las Fuerzas Armadas y el importante apoyo popular/ ciudadano, que implicaba no sólo la aceptación pasiva de ese liderazgo, sino que incluía un importante grado de movilización que el primer mandatario utilizó en diferentes coyunturas. Estos dos factores se convirtieron en el principal sostén de Chávez en la primera parte del gobierno, ya que por su intermedio el líder bolivariano pudo llevar adelante este proceso de cambios institucionales con la garantía de éxito en su implementación.

En cuanto a los militares, el hecho de provenir de esas filas y de haber logrado una hegemonía latente dentro de ellas, le permitió al primer mandatario avanzar sobre el andamiaje institucional en el que se asentaban los acuerdos de “Punto Fijo”. El desmontaje de las estructuras tradicionales del sistema político venezolano pudo llevarse adelante, principalmente, por el apoyo brindado por las Fuerzas Armadas durante todo el proceso electoral, ya que, según el presidente, “si no es por la actitud de los militares este proceso se hubiera quebrado. Ellos cuidaron el fraude; cuidaron los votos de las mesas, custodiaron

¹¹⁶ Marcano y Barrera (2004: 190).

las máquinas electorales, se metieron en el Código Electoral a manejar las computadoras, ellos, o una parte de ellos evitaron el golpe de estado”¹¹⁷.

Otra pata clave del proyecto chavista fue el apoyo popular movilizado, ya que este soporte, anclado fundamentalmente en los estratos populares, le permitió a Chávez llevar adelante cambios estructurales por la vía electoral. El alto porcentaje de pobreza previo a la asunción del líder del PP, junto con una sociedad hastiada de un sistema político carente de representatividad y que excluía a una gran parte de la población de los avatares de la gestión del Estado, creó las condiciones para el triunfo del otrora “popular” golpista. En los hechos, su discurso confrontativo sintonizaba de manera evidente con los anhelos populares.

Luego de la victoria electoral de diciembre de 1998, los recursos de poder de Chávez (excepto el de las Fuerzas Armadas y el apoyo popular/ ciudadano) eran escasos a nivel institucional. En ese sentido, la convocatoria a la Asamblea Constituyente y la posterior relegitimación de todos los cargos se orientó a conseguir esos recursos institucionales ausentes en la primera etapa. Es decir, la constitución del parlamento anterior a la elección presidencial de 1998 determinó que el PP no contara con la mayoría absoluta en dicho ámbito, y en el caso de las gobernaciones, el oficialismo se encontraba en minoría. Lo que era un RP institucional en manos de la oposición (que además tenía la mayoría de las gobernaciones) pasó, luego de este proceso de elecciones durante 1999, a manos del líder bolivariano. Es decir, los recursos de poder de estrategia política (conquistados por este proceso de reforma y convertidos en institucionales) que generó el líder bolivariano en todo el proceso de la constituyente le permitió obtener los apoyos indispensables en el terreno político.

Otro de los recursos de poder institucionales que Chávez conquistó en este proceso fue el partidario. Rompiendo la tradición que le indicaba al presidente no intervenir en cuestiones partidarias, el líder bolivariano asumió la presidencia del principal eje de la alianza que lo llevó al gobierno, el MVR. Es decir, este RP debe contarse en el haber de Chávez, ya que el MVR, principal beneficiario del fervor popular en todas las elecciones, fue la agrupación política más votada y con mayor capacidad de movilización de la alianza PP, el cual le permitió fortalecer este polo transformador. Es decir, dentro de la coalición

¹¹⁷ Bilbao (2002: 29).

oficialista, Chávez conducía al principal partido y al de mayor convocatoria en la arena electoral.

Durante este proceso de transformación, la oposición contó con recursos de poder que se diluyeron con el paso de las reformas emprendidas por la administración chavista. La mayoría parlamentaria perdida durante 1999 y el 2000 dejó en minoría a los partidos tradicionales y las nuevas fuerzas opositoras al PP. Los continuados traspies electorales le restaron recursos institucionales a una oposición carente de oxigenación interna y con un fuerte desgaste de cara a la sociedad. Los recursos de poder que la oposición pudo poner en juego en esos años se centraron en los medios de comunicación, que evidenciaron una posición antichavista desde el inicio de la gestión del primer mandatario¹¹⁸.

Según Díaz Rangel (2003: 139), los grandes medios, que fueron durante esos años los principales adalides de una democracia amenazada por el líder militar, fueron derrotados por una realidad aplastante compuesta por una gran mayoría silenciosa que no se dejó influir por dichos canales de comunicación. Es decir, ese RP, indispensable como canal de comunicación y orientador de la opinión pública, se presentó débil frente al espíritu social arrollador proclive al cambio que expresaba Hugo Chávez, y los recursos institucionales que incrementó a partir de la sucesión electoral de los años 1999 y 2000 evidenciaban ese clima epocal contestatario con los poderes tradicionales.

Refiriéndose a los apoyos propios, y resaltando una vez más a los recursos históricos, los militares y el apoyo popular/ ciudadano, el presidente expresaba: “Del lado nuestro, en el orden interno, nosotros tenemos un arma muy fuerte a la que Mao se refería con mucha precisión.... Un gran fuerza moral, que no es nuestra pues es colectiva. Es una fuerza moral en movimiento, desatada. El adversario no tiene fuerza moral. Pero también tenemos fuerzas concretas, fuerzas en movimiento que no son meramente político

¹¹⁸ Los medios impresos más importantes del país y que tuvieron una fuerte oposición a Chávez son “*El Universal*” “*Ultimas Noticias*” y “*El Nacional*”. En cuanto a los medios audiovisuales Globovisión, Venevisión y Radio Caracas Televisión (RCTV) son los más significativos. Se debe aclarar que los dueños de estas empresas son de grupos económicos y mediáticos diferentes que comulgan en su oposición al líder bolivariano. Los medios de comunicación venezolanos, hasta el fallido golpe de estado de abril de 2002, se encontraban mayoritariamente en manos de influyentes personajes que integraban la oposición al primer mandatario. Siguiendo a Becerra y Lacunza (2012: 221): “Ante el dominio de los medios antichavistas, los oficialistas remaban hasta 2002 en franca minoría. Además de las entonces debilitadas señales estatales Venezolana de Televisión, Radio Nacional de Venezuela e YVKE Mundial, que no estaba bajo una coordinación de comunicación pública y fueron boicoteadas los días del golpe, apenas se podían contar en un registro menos crítico a la cadena cristiana Fe y Alegría, canales comunitarios como Catia TV y periódicos de alcance limitado”.

partidarias, de una inmensa fuerza desatada, que es el pueblo en movimiento y en fase organizativa. Y ahí hay que hacer un gran esfuerzo nada fácil, porque aquí se generó un movimiento que me llevó al gobierno... La otra fuerza sin duda es el ejército. Lo que yo decía hoy. Allende tenía una fuerza popular, sin duda, pero no tenía el ejército. Nosotros, en cambio, tenemos el apoyo de los sectores militares para este proyecto”¹¹⁹.

Con el triunfo en las “megaselecciones”, Chávez contó con un camino sin ripios hacia la radicalización de las medidas económicas. A finales de 2001, el líder bolivariano anunció un paquete de 49 leyes especiales que atentaban contra la estructura neoliberal impuesta durante los años noventa. Estas leyes implicaron el comienzo de la radicalización en la esfera económica y social del gobierno de Chávez, y tuvo como principal argumento desmontar el andamiaje privatista de la década anterior. En ese sentido, se creaba una nueva Ley de Hidrocarburos que establecía la propiedad mayoritaria del Estado de todas las compañías mixtas a cargo de operaciones petroleras, a fin de revertir el programa neoliberal de la “Apertura Petrolera” de la administración Caldera. Otra de las leyes del paquete mantenía el control del Estado sobre la seguridad social, descartando así los intentos de privatizar el sistema (Ellner: 2006).

Sin embargo, la ley que despertó las mayores polémicas fue la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, destinada a someter a parcelamiento las tierras subutilizadas, y que el líder bolivariano calificó de “candela pura”: “La trabajé personal y directamente”, aclaró, y agregó que se trataba de una ley “revolucionaria, moderna que no atropella a nadie, solo está cumpliendo con el mandato constitucional de acabar con el latifundio, de establecer un impuesto, de regularizar la tenencia de la tierra, de subordinar la tenencia de la tierra a la productividad y al interés nacional de lograr niveles altos de autoabastecimiento agroalimentario”¹²⁰.

Este conjunto de leyes conocido como “Ley habilitante” implicaba cambios sustanciales en el interior del aparato productivo y afectaba de manera directa los intereses económicos de los actores más significativos del ámbito empresarial¹²¹. En consecuencia, la

¹¹⁹ Bilbao (2002: 30-31).

¹²⁰ Marcano y Barrera (2004: 213).

¹²¹ De acuerdo al ex vice ministro de economía el sociólogo Calos Rivero, estas leyes marcan un antes y un después en la política económica del gobierno. En ese sentido explicitaba que “entre 1999-2001 es una etapa que podríamos denominar de democracia burguesa (una alianza con fuerzas de la burguesía). Inclusive Chávez hablaba de Tercera vía. A partir de allí esto cambia y esa alianza se rompe. Yo me reúno con Chávez

reacción de las principales organizaciones empresariales, sindicales y de los medios de comunicación (recursos de poder de la oposición) fue inmediata, y acusaron al gobierno de actuar en forma arbitraria al no ser consultados en temáticas que afectaban sus propios intereses.

Los medios masivos de comunicación estimularon la protesta social y continuaron provocando al gobierno transmitiendo proclamas de militares que abjuraban de la administración chavista. Los rumores de golpe eran negados por los militares afines al gobierno, pero la agitación social comenzaba a emerger en un contexto en el que el gobierno avanzaba seriamente frente a los sectores más concentrados del poder económico.

Los cacerolazos de protesta realizados en zonas donde residían mayoritariamente los sectores medios y altos, en algunos casos mientras Chávez hacía uso de la cadena nacional, preanunciaban un escenario novedoso de resistencia al gobierno. En ese sentido, el líder bolivariano se expresaba acerca de los reclamos aclarando que “es también una manera de dialogar. Con alguna excepción sigue sonando desde siempre. ¿En los sectores populares, donde está nuestro pueblo humilde y conciente? No. Para nada”¹²².

Para el gobierno, esa protesta legítima formaba parte del paisaje político venezolano y era emprendida por los sectores opositores (en especial de los medios y altos), que intentaban frenar el proceso de radicalización chavista. Sin embargo, desde el primer mandatario, la estrategia continuaba siendo la de una “revolución pacífica... lo más importante no es cómo se llame, sino hacer la revolución: un cambio de estructuras sociales, económicas y políticas”¹²³.

La respuesta política de los afectados por este paquete de medidas fue la realización de un paro cívico por primera vez desde el arribo de Chávez al gobierno, en el que convergieron la corporación empresarial venezolana Fedecamáras y la Central de

a mediados del 2000 (yo lo conozco desde la década del noventa, tuve muchos encuentros y desencuentros) y él se puso a llorar delante mío y de quien más tarde sería su vicepresidente Elías Jaua (en una escena impactante) porque el ministro del interior y justicia estaba reprimiendo a los pobres como delincuentes. “¿A quien ya mataste este fin de semana? Esos son los mimos pobres que la cuarta república” le gritaba al teléfono. Tenía un compromiso personal con los pobres (él venía de allí). Y ese compromiso con los pobres se dio durante todas sus presidencias. Y ese compromiso es el que lo lleva a romper con la clase empresarial. Después del paro petrolero de 2003 ya definitivamente Chávez toma en cuenta que con esa burguesía no hay posibilidades de ningún tipo de acuerdo. Y continúa gobernando sin ella”. Carlos Rivero. Entrevista con el autor.

¹²² Villegas Poljak, (2010: 31).

¹²³ *Ibíd.* (2010: 32).

Trabajadores de Venezuela (CTV). El presidente de la organización empresarial, Pedro Carmona, advertía acerca del riesgo institucional que podría entrañar la aprobación de este conjunto de medidas y señalaba la necesidad de rectificar urgentemente las leyes que habían sido aprobadas de forma inconsulta. La respuesta opositora, por lo tanto, fue una masiva movilización de protesta que demostraba el poder de reacción que iban adquiriendo los grupos enfrentados a Chávez. En ese sentido, comenzaba a configurarse el escenario de los próximos años, asentado en una oposición que se afincaba en derredor de las organizaciones sociales y que contaba con los medios de comunicación como aliados en la instalación de la agenda opositora y se alejaba del mundo partidario. Es decir, la crisis de los partidos tradicionales daba lugar a una oposición novedosa que operaba en el campo de lo social y se enfrentaba al gobierno de Chávez a partir del clivaje democracia/autoritarismo, algo nunca visto hasta ese momento en la historia política venezolana de las últimas décadas.

Los años por venir serán testigos de la profundización de este clivaje y de las luchas entre una oposición que no terminaba de aceptar las sucesivas victorias electorales de Chávez y de un líder que avanzaba, con un fuerte sesgo personalista y poco conciliador, en la modificación de las estructuras económico sociales en nombre de la revolución bolivariana.

Resumiendo, los comicios del año 2000 configuraron el último peldaño electoral del maratónico cronograma ideado con el fin de modificar los resortes institucionales de los acuerdos del “puntofijismo”. Estas elecciones le permitieron a Chávez adquirir recursos de poder ausentes desde su arribo a Miraflores. Es decir, mediante esta ingeniería electoral, Chávez pudo obtener recursos institucionales indispensables: la mayoría absoluta en la Asamblea Nacional, el crecimiento del número de gobernadores oficialistas y una nueva constitución afín a los intereses del primer mandatario, en donde se incrementaban los poderes del ejecutivo. Los recursos de poder obtenidos en esa coyuntura le reportaron dividendos esenciales para consolidar el rumbo político y para profundizar el rumbo económico por intermedio de un conjunto de leyes de fuerte contenido transformador de la estructura económica venezolana. Por otro lado, la oposición, que perdió vastos recursos de poder institucionales durante este proceso, salió de su largo letargo reaccionando en el

ámbito social. Los partidos, otrora canalizadores de la protesta, fueron reemplazados en la vanguardia contestataria por actores empresariales y sindicales, que junto a los medios de comunicación se convirtieron en los principales antagonistas del gobierno bolivariano.

2.3. Los días de abril de 2002: la consolidación de los recursos de poder históricos

Este ítem se concentra en los sucesos acaecidos entre los días 11 y 13 de abril de 2002, que dieron lugar a la salida de Chávez del gobierno, el comienzo de un proceso de transición comandada por los opositores al líder bolivariano y que un día después de haber tomado juramento debieron dejar el poder dando lugar al retorno triunfal del presidente saliente. En ese sentido, se intenta dar cuenta de las movilizaciones desarrolladas por la oposición y el oficialismo durante el 11 de abril, de qué manera cada uno de los sectores en pugna hace jugar sus propios recursos de poder, el rol que jugaron los medios de comunicación en ese contexto y los movimientos en el interior de las Fuerzas Armadas durante los tres días que mantuvieron en vilo a la democracia venezolana.

Los tres días que marcaron la Venezuela Chavista: los militares y el pueblo un solo corazón

El año 2001, como se observó en el ítem anterior, terminaba convulsionado en el ámbito político. Las movilizaciones opositoras, que tenían como primordiales columnas a los empresarios nucleados en Fedecamáras y a la principal organización sindical del país, la CTV, se convirtieron en destacados referentes de la oposición al chavismo. El año 2002 comenzó bajo la misma tónica que el anterior, y abril fue el mes clave para comprender la pervivencia del liderazgo de Chávez hasta nuestros días.

Los “sucesos de abril” se desarrollaron en un lapso de dos semanas de una efervescencia inusitada. El día 6, la CTV convocó a una huelga por 24 horas por motivos salariales. Al día siguiente, Chávez, en forma pública durante una alocución en el programa *Aló, Presidente*¹²⁴, destituyó de sus cargos a siete altos ejecutivos de la empresa estatal Petróleos de Venezuela Sociedad Anónima (PDVSA), la principal fuente de divisas del país y RP financiero. Esta iniciativa será más tarde explicitada por el líder bolivariano como una maniobra para generar una crisis dentro de la propia empresa (recurso de estrategia política)

¹²⁴ El *Aló Presidente* del 7 de abril de 2002 se realizó en la plaza José María Vargas del Palacio de Miraflores. En línea en: <http://alopresidente.gob.ve/multimedia/23/4077/alupresidente_101.html>. En el siguiente apartado se analiza con más detalle este RP de estrategia política generado por Chávez durante su primera presidencia.

y, de esa manera, modificar su directorio (Marcaro y Barrera: 2004: 241)¹²⁵ con el fin de alinearlos con las políticas oficiales.

La crispación alrededor de la dirigencia venezolana avizoraba días de inminente convulsión social. Según comentan dos biografías de Chávez (Marcano y Barrera, 2005: 242- 243, y Modesto Guerrero: 2007), las reuniones entre civiles y militares complotados para derribar al presidente se produjeron el día 9 y contaron con la presencia de uno de sus principales arietes: Monseñor Ignacio Velasco. La Iglesia católica, que hasta ese momento había tenido una posición equidistante durante el conflicto, comenzó a jugar sus cartas en favor de una salida antichavista.

El nivel de antagonismo que se iba desplegando en el interior de la sociedad venezolana permitió que el día 11 de abril dos marchas coincidieran en la capital del país. La marcha opositora “en solidaridad con los despedidos de PDVSA” partiría desde Parque del Este hacia Chuao, sede de la empresa petrolera, en tanto que la marcha oficialista se reuniría en los alrededores del Palacio de Miraflores y tendría como finalidad la defensa del gobierno ante la embestida opositora.

La gran concentración opositora, que en un principio se pensaba como una más de las que se desarrollaron durante esos meses, comenzó a virar su dirección original a instancias de los principales dirigentes antichavistas que la conducían y se trasladó hacia el Palacio de Miraflores. La multitud que se dirigía hacia la morada presidencial cantaba consignas que excedían largamente las originales, y tenían en el pedido de renuncia del presidente su principal estandarte. Es decir, envalentonada por la concurrida asistencia, la movilización opositora modificó su plan inicial hacia la casa de gobierno para demandar la salida de Chávez.

El alcalde oficialista del Municipio de la capital, Freddy Bernal, ante la inminencia de la avanzada opositora, comenzó a llamar a los partidarios chavistas con el fin de defender al gobierno constitucional. El Alcalde de Distrito de Caracas (el gobernador) y opositor a Chávez, por otro lado, utilizó a la Policía Metropolitana para dispersar a los manifestantes del presidente. Es decir, este antagonismo social también se daba cita en el interior de los ejecutivos de la capital venezolana.

¹²⁵ El presidente Chávez despidió a dichas autoridades “haciendo sonar el pito cada vez que mencionaba un nombre y acotando: Muchas gracias por sus servicios” (Villegas Poljak, 2010: 46).

En ese contexto de alta conflictividad y en el cual dominaba la incertidumbre, los oficiales de la Guardia Nacional, que respondían al gobierno nacional, impidieron el arribo de la marcha opositora al Palacio de Miraflores para evitar un seguro choque entre ambas movilizaciones. Sin embargo, y a pesar de las previsiones, los disturbios finalmente se produjeron y comenzaron a registrarse heridos y muertos entre los seguidores de ambos bandos, al tiempo que el desorden se convirtió en el denominador común de esas horas en la capital venezolana. La presencia de francotiradores, apostados en edificios públicos, le agregaba un condimento explosivo a los acontecimientos.

Ante tal situación de caos en la capital, a las 15.45 Chávez decidió hablarle al país por cadena nacional (haciendo jugar el recurso de estrategia política comunicacional) para denunciar las intenciones golpistas de la marcha opositora. En medio del mensaje, los medios de comunicación privados, un recurso de la oposición chavista, decidieron dividir la pantalla: de un lado, el presidente durante su discurso; del otro, las imágenes de los sangrientos enfrentamientos que en esos momentos se estaban produciendo en la capital. El gobierno, alertado sobre la ilegal maniobra, suspendió las señales de las televisoras, avizorando el golpe cívico militar con apoyo mediático que se avecinaba e intentando mantener la figura del presidente como única imagen televisiva en un contexto de cruentos disturbios en las calles de Caracas.

Durante la transmisión en cadena, Chávez denunciaba el golpe en marcha y las interferencias que estaba sufriendo la cadena por el sabotaje a la señal en su lugar de origen. En ese sentido, el primer mandatario denunciaba “ante Venezuela y ante todo el mundo... un plan insurreccional. Un plan que no va a tener éxito, un plan que sin embargo es riesgoso, porque repito, esta marcha la convocan engañando a la gente”¹²⁶. En la misma alocución que se desarrollaba mientras la Capital se veía inundada de violencia, Chávez volvía a cargar contra los enemigos históricos del proyecto bolivariano, a los que denominaba “pequeños grupos”, los que tuvieron “más de 40 años para tratar de hacer un país pero no fueron capaces, casi lo destrozaron. Dejaron ahí los restos que estamos recogiendo a pedazos”. Asimismo, en el momento de mayor incertidumbre política desde que asumió la presidencia, volvía a reafirmar su origen: “Soy el primero en manifestar mi voluntad para buscar los senderos políticos, soy un soldado, fui entrenado para la guerra

¹²⁶ Chávez, Discursos presidenciales 2002 (2005: 259).

pero odio la guerra”¹²⁷. Por último, arremetía frente a los medios de comunicación, que para ese momento ya tenían una posición tomada a favor del golpe: “El principal problema que tenemos hoy, sepan los venezolanos, son los medios de comunicación social, especialmente, las televisoras privadas. En este momento casi todas se han alineado en una gran cadena, ellos critican las cadenas, pero hacen sus cadenas”¹²⁸.

Durante toda la jornada, la iconografía que mostraban los medios privados repetía hasta el hartazgo imágenes de los disparos provenientes de las huestes chavistas, dando cuenta de un clima en que “los Círculos Bolivarianos disparan a mansalva contra la marcha pacífica de civiles opositores”¹²⁹. La creación de una realidad distorsionada, mediante una sutil manipulación de los hechos, en la que incurrieron los medios opositores, se basaba en la transmisión de sucesos en tiempos distintos en los cuales ocurrieron y en la veracidad de las imágenes registradas¹³⁰. Es decir, los medios venezolanos transforman una realidad, de por sí compleja y crítica, con una clara orientación política a favor del golpe militar.

Desde ese momento, y hasta las 5 de la mañana del día 12 de abril, Chávez se mantuvo a la vigilia en el Palacio de Miraflores. En el transcurso de la tarde, según relatan Marcano y Barrera (2005: 245), el presidente decidió activar el Plan Ávila, que implicaba la utilización de las Fuerzas Armadas como instrumento represivo para recobrar el orden civil. La decisión de Chávez venía acompañada de un gesto simbólico: cambiarse la ropa civil por el traje militar de campaña (La Fuente y Meza, 2004: 23). Según su ministro de Defensa, hasta ese momento el presidente “no se ha reunido con sus ministros, sólo lo ha hecho con los militares en quien confía”¹³¹.

¹²⁷ Chávez, Discursos presidenciales 2002 (2005: 255).

¹²⁸ *Ibíd.* (2005: 256).

¹²⁹ Guerrero (2007: 387).

¹³⁰ Un excelente estudio documental sobre los hechos del 11 de abril es el realizado por el director venezolano Ángel Palacio titulado “El puente Llaguno. Claves de una masacre”. El título hace mención al puente que se encuentra a 200 metros del Palacio de Miraflores desde donde activistas chavistas dispararon, según los medios, a una “supuesta multitud opositora”. El documental muestra que, evidentemente, los disparos existieron pero no se dirigieron hacia civiles, sino hacia la policía metropolitana, que también descargaba balas de plomo. Según el film, las balas que provocaron los muertos de ese jornada provinieron, en su mayoría, de los francotiradores apostados en la azotea de los edificios, ya que la mayoría de los hombres y mujeres que las recibieron tenían disparos en sus rostros muestra cabal de la existencia de ese tipo de tiradores. De acuerdo al estudio realizado por Néstor Francia (2013: 129- 133) en esas refriegas murieron 31 venezolanos (23 personas en las adyacencias de Miraflores, en manifestaciones pro- gobierno, 5 personas que venían de la marcha opositora, 1 reportero gráfico y 2 personas que no integraban ninguna manifestación). En tanto que el 80% de los fallecidos recibieron disparos en su cabeza, 10% en el tórax, 6% en la columna vertebral y 4% en el cuello.

¹³¹ Guerrero (2007: 385).

Instalado el clima de desconcierto y caos en el país, las Fuerzas Armadas, uno de los principales recursos de poder institucional de Chávez, comenzaban a inclinar la balanza hacia la salida presidencial. El Comandante del Ejército Efraín Vázquez se pronunciaba públicamente “Hasta hoy le fui fiel, Presidente”¹³². Más tarde, el coronel sublevado Julio Rodríguez Salas expresaría en televisión: “Desde hace nueve meses comenzó a organizarse un movimiento en firme, un movimiento serio, que afortunadamente se ha materializado el día de hoy”¹³³. Las imágenes de los incidentes que la televisión transmitía en forma reiterada (“militantes chavista disparando a la multitud opositora”) repercutían en forma desfavorable para los intereses de Chávez en el interior del mundo militar.

Desde el Fuerte Tiuna, la principal plaza militar del país, los sublevados enviaban mensajes al Palacio de Miraflores que tenían como principal “oferta” la renuncia indeclinable del presidente y la pronta salida del país. Ante la negativa de Chávez, los golpistas amenazaron con un ataque “quirúrgico”¹³⁴ al Palacio de Miraflores. La relación de fuerzas en el interior de las Fuerzas Armadas parecía, hasta ese momento, serle esquivo a Chávez, quien decidió, según todas las fuentes, comenzar a negociar su renuncia intentando una salida decorosa. Para ello, demandaba “que lo dejaran irse con su familia entera, que respetaran la sucesión del Vicepresidente, de la Asamblea Nacional y que se mantuviera la constitución Bolivariana”¹³⁵.

En medio de las idas y vueltas, las indecisiones de ambos bandos, que incluyeron llamados telefónicos, faxes entre el Palacio y el Fuerte, el General Lucas Rincón, mano derecha del Presidente y negociador entre él y los sublevados, resolvió hablar por televisión anunciando que “ante tales hechos, se le solicitó al presidente de la República la renuncia de su cargo, la cual aceptó”¹³⁶. La indefinición de los actores puso en manos militares el destino de los sucesos e inclinó, en forma momentánea, la balanza a favor de los opositores al presidente en un contexto en el cual los medios de comunicación privados jugaron un rol decisivo, creando una sensación de anarquía institucional a partir de repetición sistemática

¹³² Marcano y Barrera (2005: 246).

¹³³ La Fuente y Meza (2004: 80).

¹³⁴ Villegas Poljak (2010: 76).

¹³⁵ Guerrero (2007: 387- 388).

¹³⁶ Rosas (2005: 66). En una investigación sobre los sucesos de abril, Rincón niega un acto de deslealtad hacia Chávez, ya que “eso fue algo conversado por teléfono, en dos o tres oportunidades. Fui testigo de lo que estaba ocurriendo en Miraflores, por que estuve allí hasta la madrugada, y fui al Fuerte Tiuna cumpliendo órdenes del Comandante en Jefe... para ver cómo estaba la situación allá y reportarla” (Villegas Poljak, 2010: 90).

de la “violencia chavista”. A pesar de que Chávez nunca renunció a la presidencia¹³⁷, y la negociación continuaba, Rincón se adelantaba a los hechos y obligaba a que el despedido presidente se dirigiera por la madrugada hacia Fuerte Tiuna quedando como detenido¹³⁸. El comportamiento del militar en esa coyuntura y su posterior aval por parte del presidente para que continuara en su cargo luego de la vuelta al gobierno, agregaba un condimento inexplicable a la tumultuosa situación política de aquellos años.

En la mañana del 12 de abril, el presidente de Fedecámaras, Pedro Carmona, informaba al país que asumía la primera magistratura al frente de un conglomerado cívico-militar. Los medios de comunicación anunciaban al país con títulos rimbombantes la “caída- renuncia” de Chávez, al tiempo que arengaban a la población con el lema “Ni un paso atrás”¹³⁹. A las 17.30 horas en el palacio de Miraflores, Carmona se ungía como presidente de la Nación y cometía uno de los principales errores de su efímero gobierno al disolver todos los poderes públicos, acto que inclinó la balanza hacia el lado del presidente secuestrado. Según Teodoro Petkoff intelectual y dirigente político opositor al chavismo, “ese decreto fue fundamentalísimo para producir un cambio en la correlación de fuerzas en la Fuerza Armada, fue lo que determinó el viraje para reestablecer a Chávez en el gobierno. Y la actitud de la Fuerza Armada nos hace ver claramente que los 40 años de vida democrática no pasaron en balde: cuando se encontró con un golpe de Estado, percibió que

¹³⁷ Según la extensa evidencia disponible, el presidente Chávez nunca renunció a su cargo. Hubo amagos, idas y vueltas, presiones, pero el líder bolivariano se negó a renunciar “Me colocan una hoja con una renuncia ya redactada y me dicen: Tienes que firmar aquí. Yo les contesto: No, ustedes se equivocan. Los miro a todos y les digo cuatro cosas: Yo no voy a firmar ese papel, ustedes parece que no me conocen a mí. Tantos años juntos en este camino y ustedes no me conocen. Yo no voy a firmar eso. Ustedes con eso podrán hacer lo que quieran. Eran como las cuatro de la mañana del 12 de abril y entonces les dije: Ustedes como que no se dan cuenta de lo que están haciendo, cuando salga el sol dentro de poco, van a tener que explicarle a este país qué es lo que están haciendo. Ellos vuelven a insistir en que tengo que firmar la renuncia. Les digo que ni siquiera me muestren esa hoja. Entonces uno de ellos dijo “bueno, eso no importa”, agarró el papel y se lo llevó” (Entrevista a Hugo Chávez de Miguel Bonasso en el diario *Página 12*, 1 de junio de 2003).

¹³⁸ Durante esas extensas horas, Chávez, como lo reiteró en muchas ocasiones temió por su vida. “Me iban a fusilar, pero los soldados se negaron a matarme... Estaba listo para morir y en esa oscuridad y al filo de la medianoche salieron unos soldados que no sabían que era Chávez el que estaba ahí, entonces se acercan y un hombre dijo: “Si matan a este hombre aquí nos matamos todos”. Ahí resucité, yo estaba muerto ya. Mi muerte estaba escrita. Se escribió en Washington” (Filmus, 2010: 217).

¹³⁹ El diario *El Nacional* tituló “Renunció Chávez”, el vespertino opositor 2001 no dejaría lugar a dudas “Cayó Chávez. Acción de las Fuerzas Armadas Nacionales, la prensa y la sociedad civil lo obliga a dejar la presidencia”. Para mayor información sobre los sucesos de abril y su relación con los medios véase Becerra y Lacunza (2012).

el país estaba internacionalmente aislado y que no se podía salir de un gobierno al que se acusa de toda clase de perversiones antidemocráticas con un régimen dictatorial”¹⁴⁰.

El Comandante del Ejército, el general Efraín Vázquez, que se había negado a aplicar el Plan Ávila, desconocía ahora los decretos de Carmona demandando cambios en el Acta de Constitución del nuevo gobierno. Esa misma tarde, el Fiscal General de la República, Isaías Rodríguez, denunciaba públicamente el golpe de Estado en marcha y la balanza comenzaba tímidamente a virar hacia el chavismo.

Los días de Carmona en el gobierno estaban contados. Los recursos de poder que poseía para solidificar su posición se fueron evaporando al compás de las horas. El error garrafal de cortar el hilo constitucional al disolver la Asamblea y la Constitución Bolivariana (inclusive se quitó este nombre de la denominación del país), tocando aristas institucionales sensibles para el mundo castrense, fue la principal equivocación en un contexto de incertidumbres. Los años de vida democrática jugaron en las mentes militares, en este caso a favor de Hugo Chávez. La expulsión del líder bolivariano pero manteniendo la constitución vigente y los poderes públicos parecía ser la ecuación que los militares veían como la más viable, ya que el cambio de la estructura institucional emergía como la más antipática de las definiciones políticas.

Las movilizaciones populares (RP de apoyo popular/ ciudadano) por el restablecimiento del presidente constitucional se dieron durante los días 12 y 13. Este último día el reclamo tuvo mayor fuerza, e incluso se sumó un amplio sector de las Fuerzas Armadas venezolanas. El diseño del Plan de Restitución de la Dignidad Nacional, elaborado por el General leal Raúl Baduel, y apoyado por los generales Vázquez y por el Inspector General de la Guardia Nacional, Carlos Alfonso Martínez, iría en esa dirección y volcaría el resto de los apoyos castrense en esa dirección legalista. Asimismo, la mayoría de los oficiales militares, que en un primer momento ante la incertidumbre de esa jornada había quedado en una posición equidistante, jugaron abiertamente por el retorno de Chávez.

Los golpistas, acechados en esos momentos por una correlación de fuerzas adversas, intentaron revocar el decreto de disolución de la Asamblea y le prometieron a Chávez la salida pacífica del país (que no le aseguraban anteriormente y que impedía la firma de la renuncia), pero ya era demasiado tarde. El mismo líder venezolano, que había sido

¹⁴⁰ Marcano y Barrera (2005: 254).

trasladado desde Fuerte Tiuna hasta la bahía de Turiamo, lograba visualizar que “la situación ha comenzado a cambiar porque el mismo almirante que era el jefe de mis captores en esa isla viene de repente a hablar conmigo, se para firme y me dice ‘señor presidente’”¹⁴¹.

En el interior de los cuarteles y en las movilizaciones populares (dos recursos de poder históricos del presidente) que se multiplicaban en esas horas, se comenzaba a percibir el cambio en las relaciones de fuerzas. Los oficiales leales a Chávez tomaron la iniciativa y provocaron un doble movimiento: en el interior del Palacio de Miraflores y en Turiamo, donde aún seguía confinado el presidente depuesto. Horas más tarde, las Fuerzas Armadas leales retomaron el control en ambos espacios y restituyeron a Chávez en el gobierno. En menos de 48 horas, el presidente volvía a Miraflores. El saldo que dejaron las jornadas fatídicas fue de 20 muertos y más de 110 heridos (Marcano y Barrera, 2005: 239).

Por la madrugada del 14 de abril, el presidente retomaba el gobierno, y desde Miraflores se dirigía al pueblo por cadena nacional. Sus primeras palabras fueron: “A Dios lo que es de Dios, al César lo que es del César y al pueblo lo que es del pueblo”¹⁴². A continuación, ubicó de manera nítida a los principales protagonistas de su regreso al poder, los recursos de poder que ostentaba Chávez desde el inicio de mandato: “el pueblo venezolano y sus verdaderos soldados, el pueblo venezolano y su Fuerza Armada. Esos soldados del pueblo han escrito y esto no es grandilocuencia es una verdad, es una nueva página, que gran página para la historia venezolano, de América Latina y también pudiera ser del mundo”¹⁴³.

Luego de mencionar a los principales sostenes de este proceso de cambio, dirigió sus dardos hacia la oposición política y social que venía enfrentando las últimas medidas de gobierno y que habían sido los precursores, en mayor o menor medida, del fallido golpe:

¹⁴¹ Entrevista a Hugo Chávez de Miguel Bonasso en el Diario *Página 12*, 1 de junio de 2003. Durante ese proceso, Chávez escribió una carta en un pequeño papel en el que daba cuenta sobre su decisión de no renunciar en el que se podía leer: “Turiamo 13 de abril de 2002. A las 14.45 hrs. Al pueblo venezolano (y a quién pueda interesar) Yo, Hugo Chávez Frías, venezolano, Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, declaro: No he renunciado al poder legítimo que el pueblo me dio. ¡¡Para siempre!! Hugo Chávez Frías” (Discursos Presidenciales 2002 (2005: 284).

¹⁴² Chávez, Discursos presidenciales 2002 (2005: 277).

¹⁴³ Ibid (2005: 277). Y agregó: “así que mi reconocimiento a esos dos entes a los que siempre me he referido, y que constituyen la fuerza más poderosa -después de Dios- de esta Venezuela de hoy, de este proceso de cambio indetenible. Esos dos elementos que en el fondo son el mismo, el pueblo y los militares; el pueblo y la Fuerza Armada”.

“Hago un llamado a la Iglesia Católica Apostólica Romana, a la Iglesia Evangélica, a las religiones. Hago un llamado a los empresarios del sector privado, hago un llamado a los partidos políticos, a todos. Hago un llamado a los dirigentes de esos partidos políticos, a los dirigentes sindicales, hago un llamado a los dirigentes empresariales, hago un llamado sobre todo y agarro la cruz hago un llamado a los medios de comunicación. ¡Por Dios! Reflexionen pero de una vez, este país también es de ustedes, yo también tengo que reflexionar muchas cosas... Así que vengo dispuesto a rectificar donde tenga que rectificar, pero no solo debo ser yo el rectificador, todos tenemos que rectificar muchas cosas para que volvamos a la calma, al trabajo, al empuje y a la construcción de una Venezuela bolivariana”¹⁴⁴.

Luego del pedido de reflexión a la oposición y su promesa de rectificación, el presidente dirigía sus últimas palabras a los funcionarios de la empresa estatal petrolera PDVSA (vital RP financiero), principal excusa que utilizó la oposición para el golpe de estado luego de la expulsión de su directiva. Allí, Chávez indicó el camino por el cual iba a transitar los próximos meses y que sería el inicio de una lucha interna por el control de la empresa, “así que hago un llamado a todos los trabajadores de la nómina mayor, de los demás sectores, técnicos medios y los trabajadores, no se atropellará a nadie, pero hago un llamado a que trabajemos, que depongamos algunas actitudes y vamos a trabajar; para producir, refinar, para exportar, para vender petróleo y sus derivados y para poner en el tope de la eficiencia y eficacia esa empresa que es de todos los venezolanos”¹⁴⁵.

El fallido golpe militar completó un proceso de reestructuración en el interior de las Fuerzas Armadas, en donde los leales al proceso bolivariano pasaron a lugares protagónicos. En ese sentido, se debe prestar atención a cómo a partir de este episodio el presidente incrementó su dominio en el interior del actor militar, mediante una eficaz utilización de los recursos de poder que tuvieron como principal resorte su lucha por el manejo interno de la compañía y por ende la potestad de la estrategia petrolera. A su vez, la intentona golpista prestigió la figura de Chávez a nivel internacional y le dio vastos argumentos políticos para endilgarle a la oposición su actitud golpista y antidemocrática.

¹⁴⁴ Chávez, Discursos presidenciales 2002 (2005: 288).

¹⁴⁵ Ibid. (2005: 289).

Según los aliados del presidente, “el 11 de abril nos hicieron un gran favor, porque provocó una purga necesaria que sacó a los traidores”¹⁴⁶.

Sin embargo, y a pesar del proceso de purgas llevado adelante por el presidente Chávez, al interior de las Fuerzas Armadas los conflictos no se evaporaban. En agosto de 2002, el Tribunal Supremo de Justicia liberó sin culpa a los comprometidos con el golpe de abril, generando un fuerte descontento en las filas chavistas. Para octubre, a escasos seis meses del fallido golpe de estado, un grupo de militares involucrados en los sucesos de abril tomaron la plaza Francia de Altamira, en el este de Caracas, pronunciándose en desobediencia legítima contra el gobierno y declarando la zona territorio liberado. Según López Maya (2004: 34), los sublevados anunciaron que sólo abandonarían la Plaza cuando renunciara Chávez, y llamaban a sus compañeros de armas a alzarse contra el gobierno.

Para noviembre las tensiones en derredor de la Plaza Altamira continuaban y el gobierno carecía de una estrategia correcta para controlar la situación, aunque los amotinados tampoco lograban inclinar la balanza a su favor. A su vez, a mediados de ese mes se produjo una balacera en la plaza Bolívar de Caracas entre policías metropolitanos y la Guardia Nacional, motivada por la politización que habían venido sufriendo los cuerpos de seguridad, que dejó un saldo de tres muertos. En forma seguida, el Poder Ejecutivo Nacional intervino la Policía Metropolitana, subordinando a la opositora Alcaldía Mayor y ordenando la salida a la calle de la Guardia Nacional, para controlar la situación y recuperar un RP institucional con capacidad de fuego. Durante el mismo convulsionado mes también estalló una crisis en el Consejo Nacional Electoral (CNE), que puso de relieve la politización y polarización de esa institución luego de cuatro años de mandato chavista.

A pesar de que los intentos de desestabilización de los grupos opositores en los diferentes espacios sociales fueron neutralizados, la alarma continuaba sonando en el gobierno, y a pesar del fortalecimiento de la figura de Chávez luego de los “sucesos de abril” aún no se observaba una solidez institucional en la filas del gobierno. Este hecho, así como otros violentos y de gran confrontación, serían permanentemente transmitidos y/o difundidos por los medios de comunicación privados, “con lo cual estos mostraban no sólo su apoyo a estas estrategias, sino que también contribuían a sostener e incrementar un clima

¹⁴⁶ Marcano y Barrera (2005: 260).

de alta tensión y conflictividad política¹⁴⁷. Sin lugar a dudas, los medios continuaron siendo desde el inicio de mandato el principal RP de la oposición, quien en forma cotidiana alcanzaba a millones de venezolanos.

Luego de un año movido en hechos políticos, se presagiaba un 2003 más calmo y con menos tensiones. Sin embargo, la tónica de enfrentamientos violentos se mantuvo, teniendo como escenario la empresa PDVSA.

Recapitulando, el año 2002 significó un antes y un después para el proyecto político chavista. Los sucesos de abril permitieron al gobierno de Hugo Chávez consolidar su poder (aumentando recursos) y encontrarse en condiciones de avanzar hacia una mayor radicalización política. Durante todo el primer trimestre de ese año, la tensión política se encontraba latente y a principios de abril estalló. Las fuerzas opositoras, entre las cuales sobresalieron los militares ajenos al proyecto bolivariano y las corporaciones empresarias y sindicales, entablaron una lucha sin cuartel contra Chávez y lograron desestabilizar el orden a partir de una multitudinaria marcha que se coaligó con una inteligente construcción mediática, y posterior interpretación, de los sucesos de abril.

Los dos recursos de poder más importantes de Chávez jugaron en esa coyuntura como un salvoconducto de su gobierno y lo fortalecieron en el poder. Los militares, con sus idas y vueltas, y la movilización popular de los días 12 y 13 determinaron el retorno del primer mandatario al gobierno. La oposición, por otro lado, no logró capitalizar su momento político entre los días 12 y 13 y dilapidó las posibilidades concretas de expulsar definitivamente a Chávez del gobierno. Los recursos de poder con los que contó para esa coyuntura no le alcanzaron para consolidar su proyecto ante la ausencia de un liderazgo claro y por sus medidas erróneas (disolver la Constitución, no negociar con Chávez, entre otras), que alejaron a sus posibles aliados de un apoyo indispensable en el comienzo de la transición política.

¹⁴⁷ López Maya (2006: 34).

Conclusión

Durante el periodo histórico comprendido entre los años 1999 y 2000 Hugo Chávez realizó un proceso de transformación de estructuras institucionales y de relegitimación de cargos inédito para la historia venezolana. Mediante estas modificaciones, el líder bolivariano logró llevar adelante el principal eslogan de su campaña presidencial, como era la convocatoria a una Asamblea Constituyente (RP de estrategia política) e iniciar, con ello, una vuelta de página en el ordenamiento constitucional legado del Pacto de “Punto Fijo”. Durante el primer año de gobierno se realizaron tres elecciones en forma sucesiva lo que permitió llegar a diciembre de 1999 con un nuevo texto constitucional aprobado en forma mayoritaria por el pueblo venezolano.

Durante el año 2000 se realizaron las “megaelecciones” bajo el nuevo formato institucional, lo que le permitió al líder bolivariano reelegirse con un porcentaje de votos superior al de 1998. Antes de estas elecciones, el presidente contaba con una composición parlamentaria adversa y una minoría de las gobernaciones, que pasó a cambiar de color político luego del proceso de relegitimación del año 2000. De esta forma, el líder bolivariano pudo aumentar la cantidad de recursos de poder institucionales al mismo tiempo que vigorizaba su autoridad política en un contexto de fuertes movilizaciones. A su vez, la nueva constitución le dio a Chávez la posibilidad de contar con herramientas institucionales en poder del ejecutivo (recursos de poder) para llevar adelante transformaciones profundas en el entramado productivo y que facilitará la emergencia de una nueva oposición política alejada de lo partidario y enraizada en lo social.

El paquete de 49 leyes especiales será el prolegómeno de un proceso de resistencia opositora que dará lugar a un paisaje social turbulento y que dejará huellas en el principal antagonismo que tendrá la sociedad venezolana en los próximos años: la división chavismo versus antichavismo. Lo original del proceso fue que esta oposición al gobierno provino de sectores sociales ajenos a lo partidario, como eran los empresarios y los sindicatos que reemplazaban a los agotados partidos políticos eje del tradicional bipartidismo venezolano.

El lapso histórico que se extiende desde diciembre de 2001 hasta fines de 2002 resulta ser el más rico en términos de intensidad y acciones políticas. Aquí pudo visualizarse de qué forma el presidente hizo jugar sus principales recursos de poder

institucional (Fuerzas Armadas) de movilización (apoyo popular/ ciudadano) durante la coyuntura,

Las movilizaciones cruzadas de oficialismo y oposición de principios de 2002 le permitieron al antichavismo generar un clima de inestabilidad propicio para medidas enérgicas en contra del presidente. En ese marco, los medios de comunicación, uno de los principales recursos con que contó la oposición desde el inicio del mandato presidencial, jugaron un papel crucial al permitir crear una imagen de desgobierno en el país. El resultado de esta incómoda situación para la administración chavista fue la pérdida de apoyo (momentáneo y condicionado por una eficaz política comunicacional opositora) por parte de las Fuerzas Armadas y la posterior detención del presidente en ejercicio, en un giro inesperado frente a una coyuntura caracterizada por las idas y vueltas de los principales actores involucrados en dichos sucesos.

La imagen televisiva de los militantes chavistas disparando a una supuesta multitud opositora inclinó la balanza castrense hacia una salida sin Chávez, pero sin acuerdos más allá de esa ecuación política. La posterior indefinición en cuanto al esquema institucional que reemplazaría al presidente, evidenciaba que dentro de las fuerzas opositoras (y armadas) no se encontraba aún claro cuál debía ser el marco constitucional de sucesión de Chávez. En ese contexto, los vaivenes de la propia fuerza militar y la movilización chavista (recursos de poder del primer mandatario) demandando la vuelta de su líder al gobierno, configuraron las condiciones políticas para el retorno del presidente constitucional al gobierno. En escasos tres días de iniciada la gesta golpista, el líder bolivariano retornaba al poder fortalecido y con mayores recursos de poder en sus manos.

Durante los meses posteriores al regreso, Chávez se encargó de reorganizar la fuerza militar y de realizar un proceso de oxigenación dentro de los cuarteles, algo que le reportó sólidas ganancias y la consolidación de un recurso institucional vital para vigorizar su gobierno. Cada avance opositor en el terreno político y militar será respondido, durante este tiempo histórico, con mayor fuerza desde el gobierno.

CAPÍTULO III

LA CONSOLIDACIÓN DEL LIDERAZGO DE CHÁVEZ: RUMBO AL SOCIALISMO DEL SIGLO XXI (2003-2006)

“En Venezuela se acabó la
falsa democracia de las elites,
tenemos que enterrarla definitivamente
y terminar de construir la democracia
socialista, participativa, protagónica”

Hugo Chávez (Lara, 2006)

Introducción

Este capítulo concentra su atención en el lapso comprendido entre los años 2003 y 2006, caracterizados por la consolidación del liderazgo presidencial de Hugo Chávez, luego de sortear el último de los intentos desestabilizadores de la oposición en enero de 2003. En este tiempo histórico se producen tres hechos de singular importancia: el inicio de las Misiones Bolivarianas, la victoria en el referendo revocatorio que había llamado la oposición para desplazar del gobierno al líder bolivariano y el anuncio público, realizado por el propio líder bolivariano, del carácter socialista que iba a tomar la revolución bolivariana.

En ese marco, se analiza en primer lugar el significado del sabotaje petrolero y la recuperación de PDVSA (RP financiero determinante de la política económica de Chávez) que permitirá el inicio de las Misiones Bolivarianas, un recurso de estrategia política creado por el presidente. Asimismo, se examina la importancia de los canales de comunicación creados por Chávez, en especial su programa dominical “*Alo Presidente*”, otro de los recursos de poder de estrategia política, en este caso comunicacional, que utiliza el presidente de cara a consolidar un vínculo directo con la sociedad. En este sentido, se observa de qué manera el líder bolivariano conduce el programa y cuál es la forma de transmitir sus acciones de gobierno en el interior de un formato de comunicación accesible y popular.

En segundo lugar, el apartado describe el proceso que dio lugar al fracaso del referendo revocatorio del mandato de Chávez propuesto por la oposición en agosto de 2004, del cual el presidente salió airoso y ratificado. En ese sentido, se relatan las

estrategias oficialistas y opositoras de cara a tan trascendental compulsiva (cómo hacen jugar sus propios recursos de poder), como así también se analiza el resultado electoral de la contienda a partir de las bases de sustentación de Chávez y sus adversarios.

Por último, el capítulo aborda el llamado del presidente a construir el socialismo del siglo XXI, la generación de un nuevo RP de estrategia política. En ese sentido, se observa cómo Chávez caracterizará al socialismo del siglo XXI en esta primera etapa (más tarde ampliará el contenido de la definición), y de qué manera el líder venezolano posesionará dicho concepto en la arena Sudamericana en momentos en que se está produciendo un giro a la izquierda en los principales países de la región. Los años 2005 y 2006 representan el momento en el cual el líder bolivariano afianza su posición antinorteamericana y orienta su política internacional a la construcción de nuevos aliados en América Latina y en el mundo. La instalación mundial de su liderazgo (RP de estrategia política) es otro de los ejes del capítulo y permite captar en toda su dimensión el proceso de engrandecimiento de la figura de Chávez como líder de un país con juego internacional propio.

3.1. Las Misiones y Aló presidente, dos recursos de poder típicamente chavistas

Este ítem se detiene en los dos recursos de poder de estrategia política que el presidente Chávez creó durante los años 2002-2003, como fueron el proceso de transformación social en el marco de una serie de iniciativas denominadas Misiones Bolivarianas (MB) y el programa de televisión *Aló Presidente* (AP) respectivamente. Ambos recursos le permitirán al líder bolivariano llevar adelante, por un lado y mediante las MB, una ampliación de derechos sociales inédita para la historia venezolana, y por el otro, por intermedio de AP consolidar un canal de comunicación sin mediaciones entre el Poder Ejecutivo y la sociedad.

La generación de recursos para la transformación social de la Revolución Bolivariana

El conflicto social y político en Venezuela instalado a partir de finales de 2001 (y que incluyó la salida y el retorno del presidente en los “sucesos de abril” de 2002), recrudeció de manera vertiginosa durante el final del año 2002 y principios de 2003, y tuvo por escenario la empresa estatal de petróleo PDVSA, un RP financiero indispensable para la consolidación de cualquier proyecto político en el país¹⁴⁸.

Para principios de diciembre Fedecámaras anunció un paro de 24 horas que finalmente se extendió por tiempo indeterminado. Al paro patronal le brindaron su apoyo el sindicalismo ligado a la CTV, los directivos y los empleados a nivel gerencial de PDVSA y los sectores del comercio y la industria. El país quedó prácticamente paralizado. Sólo continuaron trabajando algunas empresas del Estado, el transporte público terrestre y aéreo, los servicios de agua, luz y teléfono, y los medios de comunicación públicos y privados, aunque estos últimos decidieron suspender la programación habitual y la emisión de publicidad, sustituyéndola por programación política e informativa las 24 horas del día.

Nuevamente se ponía en escena el clivaje principal que dividió en dos polos antagónicos al país, y la oposición volvía a pedir la renuncia del primer mandatario. Al

¹⁴⁸ Según Modesto Guerrero, el control de PDVSA es uno de los principales recursos y fortaleza del liderazgo presidencial de Chávez. En este sentido, expresaba que se trataba de “dirigir una república petrolera, la más importante del continente, la segunda del hemisferio occidental y la quinta del planeta. Y lo más importante la más grande reserva de crudo del planeta. Eso le da centralidad geopolítica y presupuesto permanente”. Modesto Guerrero. Entrevista con el autor.

cuarto día de huelga, el conflicto se agravó luego de que la tripulación del buque petrolero Pilín León se declaró en rebeldía y amarró en el canal de navegación del lago de Maracaibo. Más tarde, otras embarcaciones que se encargaban del transporte del petróleo también se sumaron a la protesta, dejando al gobierno en la obligación de tener que importar petróleo de otros países latinoamericanos.

A medida que el conflicto se acrecentaba, el escenario mostraba la escisión social y política de la sociedad venezolana. Mientras la oposición se congregaba en torno a la Plaza Francia de Altamira y en la sede de PDVSA en Chuao, el oficialismo lo hacía en el Palacio de Miraflores, la Plaza Bolívar y la sede principal de PDVSA en la Campiña. El mayor momento de tensión se vivió el 6 de diciembre (el quinto día del paro), cuando un hombre disparó sobre la multitud que se reunía alrededor de la Plaza Francia, dejando como saldo tres muertos y la generación de un conflicto que durante los días posteriores parecía dar lugar a un nuevo golpe de estado. Los medios de comunicación privados volvieron a jugar un rol saliente en esos días, repitiendo en sus programas las escenas violentas de esas horas inciertas evidenciando un desenlace inminente.

Mientras que el gobierno resistía la intentona golpista, los opositores a Chávez no lograban avanzar hacia una crisis definitiva del régimen chavista. El presidente de PDVSA, Rodríguez Araque, denunció el paro como un sabotaje criminal, convocando “al pueblo a salir a la calle y rodear edificios, instalaciones y otros bienes de la empresa, a fin de apoyar al gobierno en su esfuerzo por presionar a la gerencia a levantar la paralización”¹⁴⁹. El 21 de diciembre, el gobierno retomó la iniciativa y logró recuperar el buque tanquero Pilín León, lo que implicó un giro en la situación y dio lugar a una ofensiva oficialista en lo que puede considerarse la parte inicial del fin del paro. A pesar de las marchas y “cacerolazos” de los sectores medios y altos opositores al presidente pidiendo su renuncia, el oficialismo pudo resistir la embestida.

El 23 de enero de 2003, las fuerzas del gobierno llamaron a una marcha que fue multitudinaria (RP de apoyo popular/ ciudadano) evidenciando, por lo rotundo del mensaje, la derrota opositora. Este RP movilizó, con el cual contó Chávez desde el inicio de su gobierno, volvía a su auxilio. Para febrero de 2003, el chavismo recuperó el control de la empresa estatal PDVSA gracias al apoyo de empleados que no habían formado parte de la

¹⁴⁹ López Maya (2006: 35).

protesta, y a principios del mismo mes llegaba a su fin el paro opositor. Una vez más, Chávez volvía a consolidar su gobierno a partir de sus dos pilares históricos: la movilización popular y el reaseguro militar, que para este conflicto no abdicó de su posición legalista.

Las consecuencias de la medida opositora fueron aciagas para la población y para los intereses económicos del país por la escasez de alimentos y gasolina durante y después del paro. El aumento del desempleo, que en cuatro meses pasó del 15,4 al 20,3% y la caída del PBI, que se derrumbó en el primer trimestre de 2003 en un 27% (López Maya, 2006: 37) fueron algunas de las secuelas que dejaron las semanas de inactividad económica.

El triunfo del gobierno le permitió poder reorganizar y reestructurar la empresa estatal PDVSA al asumir el control de este RP financiero y despedir cerca de 18 mil empleados y gerentes que participaron en la protesta por “abandono de trabajo”, pasando la empresa a ser un ente bajo el control y la tutela del Ministerio de Energía y Petróleo. En ese sentido, se debe indicar que a diferencia del fallido golpe militar de abril, el desenlace de este conflicto tuvo un resultado político más nítido en cuanto a los beneficios inmediatos obtenidos por parte del gobierno.

Este control sobre la empresa le permitió a Chávez hacerse parte de un activo fundamental¹⁵⁰ para encarar un proceso de reformas sociales que apuntaba a extender la educación y la salud a las poblaciones más vulnerables. Esta ayuda se realizó en el marco de las llamadas “Misiones Bolivarianas” donde el Estado venezolano (desde la propia presidencia) se involucraba en forma directa, no mediada por la administración pública, considerada ineficiente y corrupta por el primer mandatario, con la prestación de servicios básicos. Es decir, estas iniciativas (RP de estrategia política) configuran una política social que se desarrollaba por afuera de los ministerios tradicionales, ligando en forma inmediata

¹⁵⁰ De acuerdo a Norberto Bacher, la historia de la empresa PDVSA muestra un camino de recuperación de un activo fundamental por parte del estado venezolano. En este sentido, observa que “las grandes multinacionales (Exxon, Chevron, BP, etc.) controlaron directamente la producción y la comercialización petrolera hasta 1976, año en el que se produce una nacionalización formal de la industria porque prolongaron indirectamente ese dominio a través de la dirigencia tecnocrática de PDVSA, alineada con los intereses privados, hasta el momento en que, tras dura lucha, el gobierno revolucionario logra descabezarla... el control de PDVSA facilita no sólo el del principal recurso productivo del país sino también de la principal fuente de ingreso de divisas, con lo cual el gobierno tiene en sus manos la llave maestra de la economía y de las finanzas nacionales, incluidas las cuentas externas. Este doble control estatal, de la principal fuente productiva y de la generadora de divisas, le da al gobierno un margen de maniobra mucho mayor del que disponen por ejemplo otros gobiernos progresistas de la región”.

al presidente como propulsor de estas iniciativas con las comunidades que las gestionan en forma directa.

Estas MB tienen un alcance nacional y se constituyen en torno a las organizaciones sociales, que son las encargadas, junto al presidente, de desarrollar estas iniciativas sociales. En la mayoría de estas Misiones participan las Fuerzas Armadas venezolana, el RP que el líder bolivariano hizo partícipe de todos los frentes del gobierno. Desde el año 2003 se crearon fondos especiales para financiar estas MB que, según López Maya (2008), se situaron durante los años posteriores en el orden de 4.500 millones de dólares (es decir, el 3% del PIB y 10% del presupuesto ordinario).

La primera de las Misiones llevadas a cabo por el gobierno de Chávez fue el Plan de Alfabetización “Misión Robinson: Yo sí puedo”¹⁵¹, cuya finalidad fue alfabetizar a jóvenes y adultos de todo el país. A partir de esta iniciativa, y en el lapso de dos años, Venezuela logró para octubre de 2005 ser declarada por la Unesco “Territorio Libre de Analfabetismo” al alcanzar la cifra de un millón 500 mil venezolanos alfabetizados. Según Chávez, “la Misión Robinson es la misión madre, la misión primigenia. De ella nacieron, luego, Robinson II, Ribas, Sucre, Vuelvan Caras, Barrio Adentro I, Barrio Adentro II”¹⁵².

El éxito en la implementación de esta Misión dio lugar a una segunda fase denominada “Misión Robinson. Yo sí puedo seguir estudiando”, que tenía como finalidad complementar la iniciativa de alfabetización. La idea de este programa educativo era la aprobación del último nivel de la escuela primaria por parte de todos los participantes. Los resultados de esta implementación fueron importantes, teniendo en cuenta que más de 1.300.000 personas (hasta febrero de 2007) se graduaron durante esta iniciativa educativa¹⁵³.

En abril de 2003, el presidente anunció la puesta en marcha de un plan de atención de la salud para los sectores más vulnerables denominado “Barrio Adentro”, que tenía por objetivo dar respuestas a las necesidades sociales de la población, especialmente la excluida

¹⁵¹ El antecedente principal de estas misiones es la “Misión Zamora”, que se desarrolló en el marco de las famosas 49 leyes de diciembre de 2001 y tuvo como objetivo “reorganizar la tenencia y uso de las tierras ociosas, con vocación agrícola, para erradicar el latifundio. Es así que incorpora al pequeño productor a un sistema de producción y comercialización, permitiendo avances en la seguridad y soberanía alimentaria, revirtiendo progresivamente el problema de la propiedad y la falta de productividad del campo” (Misiones Bolivarianas p. 36).

¹⁵² Misiones Bolivarianas (2007: 16).

¹⁵³ *Ibíd.* (2007: 18).

de los servicios básicos de atención primaria. En ese marco, arribó al país un contingente de médicos cubanos con la finalidad de llevar adelante dicha iniciativa gubernamental. Luego de los primeros años de implementación, los médicos venezolanos se fueron sumando a dicho programa que tuvo un impacto decisivo en las distintas comunidades en la que se ejecutó¹⁵⁴. El éxito de esta Misión permitió la instalación de 1.600 consultorios populares en todo el país en su primer nivel de atención, “el cual, gracias a su éxito, ha diversificado su radio de acción con la edificación de nuevas estructuras como los centros de atención integral, salas de rehabilitación y centros de alta tecnología, para convertirse entonces en Barrio Adentro II”¹⁵⁵.

Luego del paro y sabotaje en la empresa PDVSA, y como respuesta a las consecuencias negativas que generó en cuanto a la mercantilización de los alimentos, se lanzó desde la presidencia, en abril de 2003, la “Misión Alimentación” (Mercal). El objetivo de dicha iniciativa era la comercialización de productos alimenticios y otros de primera necesidad por intermedio de mercados y centros de venta fijos o móviles. Lo esencial de esta Misión era mantener abastecida a la población, especialmente la de escasos recursos económicos, conservando la calidad, los bajos precios y el fácil acceso. En un principio, Mercal estaba dirigido solamente a ocho millones de venezolanos de muy bajos recursos económicos; sin embargo, en junio de 2005, con el inicio de la segunda fase, amplió sus horizontes para beneficiar a toda la población (Misiones Bolivarianas, 2007: 40).

En septiembre del mismo año 2003, se lanzó la Misión Sucre, con el objetivo primario de brindar educación superior a los jóvenes que no pudieron ingresar a las universidades nacionales. El propósito de esta iniciativa fue la de incorporar a todos aquellos hombres y mujeres al sistema nacional de educación superior, algo que, antes del arribo de Chávez al gobierno, era potestad privilegiada de los estudiantes que provenían de las altas elites políticas y económicas del país. Esta Misión, que apuntaba a ampliar el conjunto de individuos escolarizados, era fundamentada por Chávez como una iniciativa de carácter inclusivo y reparador luego de años de una política que no priorizó la incorporación al mundo educativo de decenas de miles de ciudadanos. Luego de tres años

¹⁵⁴ Un excelente estudio de esta iniciativa se encuentra en Santana Elizabeth (2007).

¹⁵⁵ Misiones Bolivarianas (2007: 27).

de desarrollo, el presidente expresaba que “hay que masificar la universidad para que obedezcamos a los derechos del pueblo. Hoy, en la Misión Sucre, hay más estudiantes que en las cinco universidades más viejas de nuestro país. Les pedimos a las instituciones de educación superior que obedezcan a los derechos de los ciudadanos. Queremos una educación superior de calidad, oportuna, pertinente, progresista y equitativa”¹⁵⁶.

Con el propósito de complementar la Misión Sucre, un mes después se lanzó la “Misión Ribas”, que tenía como premisa fundamental incentivar la culminación de los estudios de bachillerato para luego incorporarse a la Educación Superior. Para diciembre de 2006, esta Misión contaba con 168.253 graduados (Misiones Bolivarianas, 2007: 62), marcando niveles históricos de incorporación al espacio educativo por parte de un gobierno democrático en Venezuela.

Otra de las iniciativas más relevantes del periodo fue la “Misión Miranda”, conocida también como “El pueblo en armas”, que tenía como objetivo fundante “la organización, captación y reentrenamiento de la reserva de la Fuerza Armada, mediante la defensa militar, la cooperación en el orden interno y la participación activa en el desarrollo de la nación” (Misiones Bolivarianas, 2007: 55). Esta iniciativa nació al calor de los dos intentos fallidos de la oposición por adueñarse nuevamente del poder en Venezuela, y representaba una iniciativa no exenta de polémica que ha generado no sólo la crítica opositora.

Para el año 2004, las MB continuarían y se profundizaría el proceso de reformas sociales que había comenzado el año anterior. En ese marco, en enero se inauguraba la “Misión Cristo”, que tenía como propósito primario acabar con la pobreza para 2021, una fecha simbólica para la liturgia chavista, ya que ese año se cumplirán los doscientos años del fallecimiento del padre de la patria, Simón Bolívar. Un mes más tarde daría comienzo la “Misión Identidad”, una iniciativa que tenía por finalidad un proceso de registración general de la ciudadanía que apuntaba, básicamente, a integrar a los sectores excluidos y jurídicamente en estado de indefensión. Se creaba un sistema automatizado que permitía la impresión del documento en el corto plazo, revirtiendo una deficiencia histórica del Estado venezolano. En el mismo mes se fundaba la misión “Vuelvan Caras”, que buscaba incorporar a más de un millón de desempleados a las tareas productivas para desarrollar la

¹⁵⁶ Misiones Bolivarianas (2007: 62).

agricultura, pesca, ganadería, siembra, industria y turismo”¹⁵⁷. Es decir, el propósito central era incorporar al aparato productivo a grandes masas de población impulsando un nuevo modelo de desarrollo nacional anclado en la participación directa de los trabajadores.

Para julio de 2004 se lanzaba, por intermedio de los acuerdos firmados entre Venezuela y Cuba, la “Misión Milagro”, que tenía como objetivo brindar salud visual a toda la población. Esta Misión tuvo desde el comienzo el apoyo de los médicos provenientes de Cuba (en lo que hace a la atención y a la capacitación), y fueron atendidos más de 500 mil casos de optometría en las 457 ópticas distribuidas en todo el país (Misiones Bolivarianas, 2007: 34). En forma complementaria con el lanzamiento de esta iniciativa, dos años después, se puso en funcionamiento la “Misión Sonrisa”, que tenía como finalidad primaria la asistencia odontológica rápida, periódica y permanente, y que incluía en el servicio la adquisición de una prótesis dental en forma gratuita.

Las MB continuaron durante los años siguientes y se convirtieron en uno de los principales recursos de poder con los que contó el presidente durante ambos mandatos. En 2006 se lanzaron la “Misión Árbol” (el socialismo ecológico) para despertar en los habitantes el interés por los bosques, favorecer el equilibrio ecológico y la recuperación de espacios degradados, y la “Misión Madres de Barrio”, que buscaba realizar un aporte monetario a las mujeres en pobreza extrema y a sus familias para poder incorporarse a actividades productivas. Esta última iniciativa se dirigía a las mujeres sin empleo que tenían personas bajo su dependencia y cuya familia no recibía ingresos de ningún tipo o percibía ingresos inferiores al costo de la canasta alimentaria.

Las Misiones lanzadas durante los años 2003 y 2004 constituyeron un activo permanente y determinante del gobierno en su objetivo de generar derechos sociales. Estas iniciativas, debe resaltarse, dependían de manera directa de la presidencia de la Nación. Es decir, las MB se ejecutaron desde la pirámide de gobierno y fueron controladas en persona por el propio Chávez, sin recurrir en su aplicación a los ministerios tradicionales, convirtiéndose en uno de los RP más potentes creados por el líder bolivariano en el ejercicio de su mandato.

La recuperación de PDVSA como RP financiero, en ese marco, le permitió al presidente orientar la acción gubernamental hacia las demandas de su principal base de

¹⁵⁷ Castellanos (2010: 115).

apoyo como eran los sectores más humildes e históricamente postergados por las políticas del Pacto “puntofijista”. Como se viene observando a lo largo de estas páginas, el RP más importante, junto a las Fuerzas Armada, lo constituyen los sectores más postergados de la sociedad venezolana, y es hacia allí donde Chávez conduce la mayor parte de los recursos políticos y económicos del Estado. Las MB, en ese sentido, se convirtieron en el principal vehículo de política estatal de ampliación de derechos sociales para el gobierno chavista. Esta ampliación de derechos que, como se observará más tarde, nadaba por el mismo andarivel que la restricción de otros derechos, se convirtió en el principal apoyo social del proceso bolivariano¹⁵⁸. Esta conquista de derechos por parte de los sectores populares venezolanos incrementó, sin lugar a dudas, la popularidad del primer mandatario (RP de apoyo popular/ ciudadano) y vigorizó su gobierno luego de superados los picos de crisis del año anterior.

El otro de los recursos de poder que generó Chávez durante esta etapa, además de las MB descritas, fue su programa televisivo “*Aló, Presidente*”. Estas dos iniciativas tuvieron un lugar central en la estrategia de poder y transformación del presidente Chávez. La comunicación siempre fue un área sensible para su gobierno, ya que en ese campo la oposición ocupó un espacio significativo en la construcción de la realidad venezolana. Luego del fallido golpe cívico militar de abril de 2002, el primer mandatario comenzó a construir un bloque mediático oficialista para desafiar el predominio de la oposición en esa arena.

La creación del sitio web <www.aporrea.org> el 14 de mayo de 2002, a días de la intentona militar, fue la primera respuesta del gobierno, a la que luego se sumó la potenciación de los medios públicos en manos del gobierno, que hasta ese momento tenían una incidencia reducida, como Venezolana de Televisión y Radio Nacional. A su vez, durante los años siguientes se crearon nuevos canales de comunicación, como el canal cultural Vive, la Agencia Venezolana de Noticias y Telesur. Todas estas iniciativas oficiales se enmarcaban en la estrategia política del primer mandatario por crear recursos de

¹⁵⁸ Según Modesto Guerrero, “en Venezuela nunca durante el siglo XX existió medicina gratis en los barrios con acceso las 24 horas. Las Misiones en educación permitieron que Venezuela sea el primer productor de egresados universitarios del hemisferio occidental según la Unesco. Además todo ciudadano mayor de 60 años dentro del marco de la Misión Amor Mayor tenía derecho universal a la jubilación aunque nunca haya aportado. Se trata de derechos históricos adquiridos por la población durante los años de Chávez”. (Modesto Guerrero. Entrevista con el autor).

poder comunicacionales para contrarrestar los medios de comunicación privados que contaban con una importante presencia pública e incidencia en la sociedad venezolana.

Sin embargo, el programa *AP* constituyó el principal canal de comunicación de Chávez con la sociedad. Allí, el primer mandatario conducía en soledad el evento, que se realizaba los días domingos y no tenía un lugar fijo de emisión. La transmisión se efectuaba en vivo por el canal oficial; comenzaba a las 11 de la mañana, pero no contaba con un horario estipulado de finalización. Es decir, dicho canal operaba como un espacio libre: el presidente transmitía -en un lenguaje llano y coloquial- sus impresiones sobre la realidad política del país y el mundo, y muchas veces ha tomado medidas de gobierno que se implementaron en el corto plazo.

El primer programa se realizó el 23 de mayo de 1999 (es decir a escasos días de la asunción), y se convirtió en un canal de comunicación entre el presidente y la población. La idea central de este proyecto fue el de “crear un programa donde él, como jefe de Estado, pudiera interactuar con la gente e informarles sobre los programas, planes y estrategias de gobierno”¹⁵⁹. Sin lugar a dudas, la impronta general del programa la imponía el propio presidente, quien con un estilo particular lograba cautivar por largas horas la atención de los televidentes (recurso de estrategia de personalidad política). Aunque en sus comienzos el formato tuvo una duración estipulada de sesenta minutos, Chávez ha superado holgadamente el tiempo determinado y los programas se extendieron, en muchos casos, por varias horas. El record fue la edición N° 295, realizada el 23 de septiembre de 2007, en el Complejo Petroquímico “El Tablazo”, en el estado Zulia, que duró 8 horas y 7 minutos.

Durante esos días y ante la pregunta sobre la extensión cada vez mayor del programa, Chávez indicó que “a mí me gusta que sea así. Sé que a otros no les gusta. He hecho el esfuerzo por reducirlo, pero la tendencia -que la impongo yo al final- ha sido la de alargarlo”¹⁶⁰. Por otra parte, dentro de la dinámica del programa, el presidente conversaba con sus televidentes y siempre compartía la mesa con un invitado que podía ser cualquier figura del ámbito nacional e internacional. A su vez, durante estas transmisiones la tensión en el interior del universo chavista era notable. Muchas de las decisiones del primer mandatario se realizaban durante la emisión del programa y eso obligaba a sus ministros y

¹⁵⁹ Página web de *Aló Presidente* en línea en <<http://www.alopresidente.gob.ve>>.

¹⁶⁰ Marcano y Barrera, (2005: 270).

secretarios a poner en marcha sus maquinarias a partir de sus palabras. Muchas veces la puesta en práctica de las decisiones políticas no constituía un camino marcado por el propio presidente, ya que implicaba la habilidad y la pericia de sus colaboradores¹⁶¹. Según uno de sus biógrafos, “el que trabaja con Hugo Chávez sabe que debe estar siempre listo, como los bomberos, y si no, se le incendia la casa”¹⁶². Sin lugar a dudas, este RP de estrategia política de índole comunicacional que generó el presidente en su acción de gobierno le permitió continuar siendo un faro de atracción para la sociedad venezolana y mantenerse en el centro de la dinámica política de su país.

La oposición, por otro lado, cuestionaba la transmisión de *AP* a partir del gasto que causaba para las arcas estatales y por la fuerte intervención como gobierno en el interior del mundo mediático público. Sin dudas, la presencia mediática del presidente generaba rechazos muy fuertes por parte del universo opositor. Las horas de programa constituían, para quienes se oponían a sus políticas de gobierno, un espacio de irritación colectiva que continuaba generando fuertes rechazos y alimentaba el espiral de antagonismo entre las dos fuerzas que configuraban el paisaje societal venezolano.

Resumiendo, como se observó a lo largo de este ítem, el gobierno de Hugo Chávez debió resistir el fuerte y violento embate opositor en la principal empresa estatal de Venezuela, PDVSA, lo que constituyó un nuevo desafío a la capacidad de resistencia del gobierno y del cual salió airoso y con mayores recursos de poder. Luego de que los sectores oficiales lograran retomar el control de la empresa petrolera, el primer mandatario obtuvo un recurso clave para generar una política de ampliación de derechos sociales. A partir de la recuperación de PDVSA (como RP financiero) y de la consolidación de una efectiva relación de fuerzas en el plano militar (como RP institucional), el gobierno se encontró en condiciones de avanzar en el plano social a partir de iniciativas enmarcadas en las MB. El

¹⁶¹ Según el ex funcionario Carlos Rivero, “cuando me asignó viceministro, yo le dije que no era chavista, que era socialista. Pero presidente ese cargo no me lo de a mí, sino a alguien de más confianza. ‘No’, me contesto, ‘yo necesito a alguien como tú, que me diga las cosas’. Por eso me río que él no escuchaba a nadie o no dejaba hablar, era mentira, al contrario, escuchaba mucho, después él decidía... El gran problema era que el presidente tenía una forma muy particular de gobernar, el no tenía un plan cuando te nombraba, él te colocaba, te dejaba que hicieras y te dejaba, te observaba y si no le gustaba lo que hacías, te apartaba, te aislaba y te echaba y ponía otro”. Carlos Rivero. Entrevista con el autor.

¹⁶² Guerrero (2007: 269). Y agrega citando a uno de los colaboradores del presidente que “uno está trabajando normalmente en una vaina (tarea), en una agenda, y aparece una declaración del Comandante y ahí entramos en estado de locura, todo el mundo se pone en marcha como si fuera una máquina de guerra” (Ibid, 2007:269)

otro de los recursos concebidos por el primer mandatario durante esta etapa es el del programa, primero de radio y luego televisivo, *Aló, presidente*. Este fue pensado, desde un comienzo, como un canal de transmisión directo entre el presidente y la población para enfrentar en el campo mediático a los medios tradicionales de comunicación venezolanos, uno de los recursos de poder de la oposición chavista.

3.2. El referéndum revocatorio, un hito para la reafirmación del LP de Chávez

Este ítem tiene por objetivo describir y analizar el proceso electoral de revocatoria de mandato del presidente Hugo Chávez que se desarrolló el 15 de agosto de 2004, prestando atención a las acciones realizadas por la oposición política al chavismo y a la puesta en juego de los recursos de poder en cuanto a estrategias de acción y comunicacional del presidente Chávez de cara a la histórica contienda electoral. Luego, se analizan los resultados electorales del referendo y se explicita, por intermedio de la evidencia empírica que provee los datos, la fractura social en la que se encontraba la sociedad venezolana.

¡Uh, ah y Chávez no se va!

El 2004 representó para el gobierno el año de la consolidación, en la arena electoral, del proceso de transformación económico social conducido por el presidente Chávez. Para la oposición, por otro lado, significó el año en el cual concentró sus esfuerzos en el proceso (finalmente fallido) de la revocatoria de mandato del primer mandatario. Todos los empeños opositores, en ese sentido, se dirigieron a juntar la cantidad de firmas legales requeridas para arribar al referendo revocatorio que por la nueva Constitución venezolana se podía realizar pasada la mitad del mandato presidencial.

En ese contexto de enfrentamiento, a principios del año 2004 la Asamblea Nacional decidió aumentar de 20 a 32 el número de magistrados del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), medida que fue duramente criticada por la oposición ya que implicaba en los hechos el “copamiento” del Tribunal por integrantes en su mayoría chavistas. El gobierno siguió adelante con la medida y a finales de año la hizo efectiva. El argumento principal que esgrimieron los partidarios del oficialismo en la Asamblea tuvo que ver con los polémicos fallos dictados por el TSJ que permitieron la absolución de militares involucrados en la intentona militar de abril de 2002. De esta manera, el oficialismo contaría para el futuro con un nuevo RP institucional, esta vez en el marco del poder judicial.

En ese contexto de avance del gobierno sobre la justicia y de ampliación de recursos de poder, el antichavismo concentró sus energías en la recolección de firma con el fin de dar viabilidad al referéndum revocatorio para someter a escrutinio popular el mandato de

Chávez. Para principios de junio, el CNE reconoció que la oposición había accedido a la cantidad de firmas necesarias para llevarlo a cabo. Es decir, habían superado el mínimo requerido, que era de 2.436.083. Por lo tanto, la oposición se encontraba en condiciones de llevar adelante el proceso revocatorio que extendía en el plano electoral el implacable enfrentamiento con Chávez.

En el oficialismo también calentaban los motores para la carrera por la continuidad del primer mandatario. El 9 de junio, se realizó en el teatro municipal de Caracas el acto de juramento del Comando Nacional de Campaña Maisanta como respuesta al inminente referendo. Allí Chávez se dirigió a sus seguidores y marcó la importancia de la compulsa para el proceso bolivariano, al tiempo que la denominó “Batalla de Santa Inés”. En el transcurso de su alocución pública, envió un mensaje claro a sus partidarios al advertirles sobre la importancia de la histórica elección y al señalar las características del poder al que debían enfrentarse: “Las fuerzas que se oponen a nosotros, a nuestro proyecto, son minoría, es cierto, pero tienen un gran fuerza económica, un gran poder económico, tienen una gran fuerza mediática, tienen, oigan bien y anótenlo y no olviden un solo segundo, de todos los minutos y todos los días que nos quedan por delante, que nadie lo olvide, estamos enfrentando una fuerza que va más allá de nuestra propia patria de nuestros propios límites territoriales”¹⁶³.

Una vez más, el presidente insistía, durante la exposición, en identificar a esa minoría opositora, pero potente, con las energías del retraso, y proponía enfrentarlas con la “unidad” de todas las fuerzas simpatizantes del régimen. A su vez, advertía sobre la necesidad de ir en búsqueda de los indecisos, ya que, según Chávez, esa coyuntura se convertía en la instancia de “hacer mayores esfuerzos por avanzar hacia la unión con otros importantes sectores de la vida nacional algunos de los actuales nos han adversado, alguno de los cuales incluso todavía nos adversa, alguno de los cuales están allí dudando y confundidos, no saben cuál es el camino, dudan de este proceso por que aún le temen, de tanta campaña mediática, de tanta mentira... el proyecto de la clase media no puede ser el proyecto apátrida de esta dirigencia opositora que pretende entregar de nuevo al país a los poderes del mundo”¹⁶⁴. Luego volvería a extender los brazos hacia las clases sociales

¹⁶³ Chávez, Discursos presidenciales 2004, (2005: 343).

¹⁶⁴ Chávez, Discursos presidenciales 2004 (2005: 348).

históricamente contrarias al proyecto chavista, exhortando a “las clases medias y a las clases altas habría que llamarles para que vengan con nosotros a construir un mundo de iguales en justicia, no somos enemigos de ellos, los han convencido que lo somos, pero no somos enemigos, es la dirigencia apátrida que lograron crear fantasmas en la mente de los venezolanos”¹⁶⁵.

Este discurso de campaña, en el que Chávez marcó las grandes directrices de la histórica votación que se avecinaba, sirvió también para invitar a las clases sociales más reacias a su gobierno a formar parte del proyecto bolivariano. La estrategia presidencial apuntaba a encapsular en los grupos minoritarios, otrora privilegiados, a los verdaderos enemigos de la nación. Sin embargo, y a pesar de este llamado a la confluencia en un colectivo mayor, los acontecimientos seguirían el curso de los últimos años, y el clivaje político, económico y social se ahondaría aún más, sin lugar para terceras posiciones intermedias entre el chavismo y antichavismo. A partir de ese momento, y como una copia calcada del último lustro, los dos sectores en los que se encontraba dividida Venezuela salían a la cancha a jugar un nuevo partido. Era evidente que el oficialismo partía con la ventaja de haber derrotado a la oposición en todos los terrenos lidiados, pero el referéndum emergía como la pieza más importante de las disputadas hasta ese momento, ya que involucraba en forma directa el destino del presidente Chávez y de todo el proceso de transformación política, económica y social acaecido en los últimos años. Una derrota chavista hubiese significado la salida anticipada del presidente a través del voto popular, una experiencia inédita para las democracias sudamericanas.

Los temas conflictivos con anterioridad a la realización del referendo, según Lissidini (2009), fueron cinco: la fecha de desarrollo (la oposición quería el 8 de agosto, el oficialismo, el 15 del mismo mes), el método de auditoría de las máquinas que se emplearían para la elección (ya que la se realizaría por medio del voto electrónico), el criterio para depurar el Registro Electoral, la forma de distribución de los centros de votación y la normativa para los observadores internacionales. Luego de un extenso proceso de discusión y de idas y vueltas entre oficialismo y oposición, finalmente los actores en pugna decidieron llevar adelante el proceso electoral que definiría la suerte de Hugo Chávez el domingo 15 de agosto.

¹⁶⁵ *Ibíd.* . (2005: 350).

Las semanas anteriores a la votación mostraban un escenario de fuerte antagonismo. Las acusaciones provenientes de ambos bandos replicaban las simpatías y las bases de sustentación en las cuales se acomodaban. Por un lado, las manifestaciones públicas del presidente de EEUU, George W. Bush y sus funcionarios, las cuales revelaban su desconfianza respecto a la intención de Chávez de llevar adelante el referendo. Por el otro, la presencia de los gobiernos, afines al chavismo, de Argentina y Brasil (otro RP conseguido por Chávez en esta etapa), que emergían como virtuales fiscales internacionales de la materialización de la compulsa electoral. En ese marco de antagonismo, que incorporaba lateralmente a los países de la región y a los EEUU, el presidente acusó al gobierno norteamericano de financiar en forma ilegítima a las múltiples organizaciones opositoras¹⁶⁶. Este enfrentamiento verbal con la principal potencia mundial aumentará los decibeles durante los años sucesivos y se convertirá en otro RP de estrategia política generado por Chávez para instalar su figura a nivel continental.

A pesar de la desconfianza de los opositores promotores del SÍ, un relevamiento realizado las semanas previas al comicio indicaban que un 37% se consideraba chavista, frente a un 16% que se suponía opositor, mientras que los indecisos alcanzaban un 47%. El estudio destacaba, asimismo, que el líder bolivariano tenía su principal base de apoyo en los sectores socioeconómico más bajos (55-64%), mientras que en los sectores más altos sólo contaba con un 14% de apoyo (Lissidini, 2009: 23). Según la misma fuente, otra encuesta (North American Opinión Research INC, realizada entre el 15 y el 25 de julio) halló “un fuerte crecimiento del apoyo a Chávez que habría alcanzado un 60%, mientras que la revocatoria solo era apoyada por un 35%”¹⁶⁷.

A una semana del referendo, el 8 de agosto se realizó en la Avenida Bolívar, en la capital venezolana, la “Marcha de la Victoria”, una gran concentración en la que Chávez se dirigió a la multitud resaltando, una vez más, la importancia de la contienda electoral que se avecinaba: “Aquí hay una lucha entre dos concepciones de la vida, hay una lucha entre dos concepciones de la humanidad, hay una lucha entre dos caminos que pujan y por eso, les decía compatriotas que ese ‘NO’ y ese ‘Uh, Ah, Chávez no se va’ recoge 500 años de lucha

¹⁶⁶ En este sentido, los libros de la periodista y abogada Eva Golinger (2005; 2006) son muy ilustrativos al respecto. Allí se devela de forma nítida los vínculos económicos y políticos entre varias organizaciones como la Fundación Nacional para la Democracia (NED) con los líderes opositores a Chávez.

¹⁶⁷ Lissidini (2009: 23).

al menos y recorre el mundo entero hoy día”¹⁶⁸. A su vez, resaltaba la importancia que tendría en el día del comicio la organización interna de los partidarios del “NO”. En ese sentido, expresaba que “tenemos que ajustar bien la organización, tenemos que ajustar la movilización para ese día, la logística. El 14 de agosto hay que acostarse temprano... y debe haber alegría en todos los barrios, música venezolana, música sabrosa, merengue, debe sonar desde las 3 de la mañana en punto, ya amaneciendo el 15 de agosto con alegría, deben salir por todas partes las banderas ese día, serán un gran día, saben”¹⁶⁹.

Finalmente, el 15 de agosto se realizó el Referendo Revocatorio con un presentismo del 70%¹⁷⁰, record para las elecciones durante la etapa Chávez. La importancia de la elección dio lugar a una votación masiva por parte del electorado venezolano, y las largas filas en los centros de votación, junto a las reiteradas extensiones del horario tope de votación¹⁷¹, certificaban que se trataba de un momento crucial para la historia del país.

Ante la pregunta que debía responderse con un SÍ o un NO (“¿Está usted de acuerdo con dejar sin efecto el mandato popular, otorgado mediante elecciones democráticas legítimas al ciudadano Hugo Rafael Chávez Frías, como presidente de la República Bolivariana de Venezuela para el actual periodo presidencial?”), la negativa venció por 5.800.629 de votos (59,1) a 3.989.008 (40,6)¹⁷². El resultado evidenciaba que el poderío electoral de Chávez, un RP de apoyo popular determinante del proceso, se mantenía intacto. El “NO” triunfó en 23 de los 24 estados del país¹⁷³.

La geografía electoral volvía a cuantificar el peso decisivo de los sectores más bajos en la composición del voto del líder bolivariano. Es oportuno señalar que el comportamiento polarizado en esta elección no resultaba un hecho novedoso en la historia

¹⁶⁸ Chávez, Discursos presidenciales 2004 (2005: 452).

¹⁶⁹ Ibíd. (2005: 472). Y agregaba: “Ahora vamos a suponer que llueva, estamos en invierno, no es extraño que llueva, hay personas que van a tener que moverse y caminar imagínense las colas que se van a formar en esos megacentros...hay que estar preparados, organizados para esas peripecias... hay que organizarse por oleadas, no hace falta que todo el mundo se vaya a las cuatro de la mañana a hacer la cola” (Chávez, Discursos presidenciales 2004 (2005: 452).

¹⁷⁰ Datos obtenidos en base al Consejo Nacional Electoral, en: <www.cne.gov.ve>.

¹⁷¹ “En dos oportunidades el CNE prorrogó el cierre de los centros de votación ante la magnitud de las colas. Finalmente el cierre oficial ocurrió a medianoche, aunque algunos centros, sobre todo en sectores populares, continuaron votando gracias a la automatización de la mayoría de los centros, a las 4 de la madrugada del día 16” (Lander y López Maya (2005: 47).

¹⁷² Datos obtenidos en base al Consejo Nacional Electoral, en: <www.cne.gov.ve>.

¹⁷³ Sólo fue derrotado en el estado de Nueva Esparta por 113 votos (0,1 del padrón). Datos obtenidos en base al Consejo Nacional Electoral, en: <www.cne.gov.ve>.

electoral del chavismo. Es decir, el clivaje chavismo-antichavismo se sostiene, en esencia, en una fractura social de características estructurales. La escisión social en la que se encontraba inmersa la sociedad venezolana volvía a ratificarse en esta histórica votación. Desde las elecciones presidenciales de 1998, la conducta electoral de los venezolanos ha estado fuertemente determinada por la condición socioeconómica. Las características sociales del voto también formaron parte de la explicación del triunfo de Chávez en la elección del 15 de agosto, ya que siguiendo a Lander y López Maya (2005) podemos observar que “los resultados del referendo nos mostraron una sociedad fragmentada en dos pedazos, cuyos límites económicos, sociales, espaciales, culturales y políticos se trazan principalmente desde una lógica de clase. Quien es pobre es chavista, pues allí tiene la esperanza de un cambio para él o para sus hijos; el discurso y el proyecto bolivariano lo incluyen, le dan una identidad y una pertenencia desde la cual puede moverse en un planeta cada vez más globalizado por el capital financiero transnacional. Si es de la clase alta o ‘rico’, es antichavista, pues allí le prometen un imaginario ‘occidental’ y ‘moderno’ que es fundamentalmente blanco, anglosajón y con el cual se identifica plenamente. La democracia que comparte es la ‘liberal’. Los dirigentes de la oposición son sus pares, confía en que ellos resguardarán sus propiedades y libertades ante las amenazas de las ‘turbas’. Las clases medias se inclinan por uno u otro polo, pero sus organizaciones más visibles y poderosas tomaron el camino de la oposición. Los sectores medios y altos, conformados en los últimos veinticinco años en sus territorios urbanos incomunicados con los sectores populares, educados en sus colegios privados, buena parte de ellos católicos, graduados en universidades que hoy atienden, aun las públicas, pocos estudiantes de origen humilde. Rodeados por un entorno familiar y de trabajo afín, donde los pobres son cada vez más una especie remota, terminan por confundir su realidad con la realidad, su país con el país”¹⁷⁴.

La extensa y certera cita describe una sociedad fragmentada a partir del advenimiento de un movimiento contestatario y representativo de sectores y grupos sociales otrora excluidos de las grandes decisiones. A su vez, la presencia de una geografía electoral que evidenciaba esta profunda polarización política es un elemento esencial para comprender dónde se registra el voto chavista y la dificultad de la oposición para volver a ser mayoría electoral.

¹⁷⁴ Lander y López Maya (2005: 55).

A la madrugada del 16 de agosto, el presidente relegitimado en las urnas salía al balcón del Palacio de Miraflores para dirigirse a sus seguidores. Luego de resaltar el triunfo de la Constitución Bolivariana y el proceso inédito de revocatoria de un primer mandatario a mitad de su mandato, Chávez subrayó el record de asistencia a la votación y por ende la puntuación electoral más alta desde que era gobernante. Luego invitó nuevamente a la oposición, como lo hizo después del fallido golpe militar, a formar parte del nuevo proyecto de país y a cesar con las prácticas antidemocráticas al anunciar el comienzo de una nueva etapa que denominó como de transformación y consolidación del nuevo modelo económico. Es decir, el líder bolivariano declaraba que “comienza una nueva etapa de la Revolución Bolivariana, pudiéramos decir que se ha demostrado, oigan bien esta idea, estamos en una transición desde hace varios años, con este contundente triunfo nacional, para comenzar la nueva etapa de la revolución que Venezuela, grábense esa frase ‘Cambio para siempre’, esto no tiene vuelta atrás, ya no hay retorno al pasado, la Cuarta República ha muerto”¹⁷⁵.

Una vez más la identificación del clivaje histórico que dio vida a la revolución bolivariana se encontraba presente en el discurso de Chávez, junto al anuncio del comienzo de una nueva etapa que implicaba la profundización del proceso convertido luego en un “salto hacia adelante” con la propuesta del socialismo del siglo XXI, que luego observaremos en el apartado siguiente. Al final del discurso, el presidente volvía a agradecer a los pilares básicos y sostenes del proceso de cambio en Venezuela: los militares y el pueblo (sus principales recursos de poder), al reconocer “a la Fuerza Armada nacional, a los soldados venezolanos, desde el Ministro de Defensa, el Jefe del Comando unificado de la Fuerza Armada Nacional, a todos los comandantes del Alto Mando militar, a los oficiales, a los soldados que no son otra cosa que el pueblo venezolano en uniforme salvaguardando la Constitución y los intereses supremos del pueblo de Bolívar”¹⁷⁶.

Luego de la derrota en el referéndum, la dirigencia opositora reaccionó denunciando fraude, demostrando su poca disposición a aceptar las reglas del juego democrático. Las críticas más importantes fueron las acusaciones sobre la alteración de los datos, la

¹⁷⁵ Chávez, Discursos Presidenciales 2004 (2005: 507).

¹⁷⁶ *Ibíd.* (2005: 504).

manipulación del Registro Electoral y el tardío cierre¹⁷⁷. Sin embargo, los resultados fueron respaldados por todos los observadores internacionales, entre los que se encontraban el Centro Carter y la OEA¹⁷⁸. A su vez, el apoyo brindado por el “grupo de países amigos”, entre los que se destacaban los líderes de la región, Brasil y Argentina, a los resultados definitivos, rubricaba el triunfo del “NO” por actores de prestigio internacional ajenos al oficialismo venezolano.

Recapitulando, el año 2004 representó para Hugo Chávez la consolidación de su liderazgo presidencial tras vencer en el referendo revocatorio de agosto. El gobierno chavista consideró a esta elección como la “madre de todas las batallas”, y motorizó la movilización de todos los recursos de poder políticos (institucionales y de estrategia política) con el fin de enfrentar el desafío opositor. El 15 de agosto las dos fuerzas políticas midieron sus apoyos sociales y nuevamente el presidente volvió a triunfar en la contienda por un porcentaje superior a los anteriores y con una abstención de las más bajas de la historia.

El análisis de la elección y el desagregado de los datos de la composición social del voto del referendo venían a confirmar el clivaje en el que se encontraba la sociedad venezolana, ya que se observaba de manera nítida que los apoyos al presidente provenían, principalmente (pero no sólo) de los sectores populares, en tanto que los de la oposición estaban ligados a los grupos medios y altos, históricos opositores al proceso político chavista. En el discurso luego del triunfo, Chávez comenzó a insinuar la transformación del proyecto de gobierno hacia una “nueva etapa” que implicaría un “salto hacia adelante”. De eso tratará el próximo ítem.

¹⁷⁷ Algunos de los argumentos esgrimidos por la oposición se encuentran en el estudio de Febres Cordero y Márquez (2006).

¹⁷⁸ “La Organización de Estados Americanos (OEA) se pronunció el 26 de agosto, avalando la realización del referendo (Resolución 869). El Centro Carter, en su informe final sobre Venezuela reconoció la legalidad del proceso, aunque recomendó mayor transparencia a la CNE, así como la necesidad de mejorar los mecanismos de recolección, verificación y reparo de firmas, y reclamó una mayor ‘receptividad’ para la participación de los observadores internacionales y la oposición, así como establecer mecanismos de auditoría del Registro electoral y de la votación misma” Lissidini, (2009: 23).

3.3. El socialismo del siglo XXI, un nuevo RP marca chavista

Este ítem concentra su atención en la instalación internacional de Chávez, la enunciación del nuevo horizonte político encarnado en el socialismo del siglo XXI y las distintas elecciones que se sucedieron en el período de análisis. En ese sentido, por un lado, se observará de qué forma irá definiendo el presidente a este nuevo socialismo que propugnaba para su país y de qué forma se produce la instalación internacional del primer mandatario a partir de un proceso de enfrentamiento con la principal potencia mundial; por otro lado, se examinan los resultados electorales de las elecciones regionales de 2004, las parlamentarias de 2005 y la presidencial del año siguiente, todas con victoria chavista.

Hacia la reelección presidencial con la bandera del socialismo del siglo XXI

El triunfo del líder bolivariano en la compulsa electoral de agosto confirmó el argumento que indicaba que era poco probable desalojar al líder bolivariano del Palacio de Miraflores en el corto plazo. Las elecciones regionales de octubre serían una nueva estación triunfal en el viaje por el planeta Chávez. De las 22 gobernaciones puestas en juego, el chavismo se alzó con 20 (perdió los estados de Zulia y Yaracuy). En cuanto a las alcaldías, obtuvo 231 sobre un total de 335 (Ramos Jiménez: 2006). Sin embargo, según la misma fuente, la abstención fue superior al 50%, por lo que volvía a aumentar el caudal de ciudadanos que prefería no ejercer su derecho político¹⁷⁹.

La aritmética electoral no podía ser mejor para Chávez. Relegitimado a nivel nacional y con la mayoría de las gobernaciones en manos de su partido (recursos de poder institucional), el líder bolivariano volvió a exponer, en la opinión pública, lo que él mismo denominó luego de la victoria en el referendo como “el salto hacia adelante”. Para noviembre de 2004, Chávez presentó el “Nuevo Mapa Estratégico”, que implicaba en los hechos una guía para la radicalización del proceso revolucionario bolivariano. Este “salto adelante” se asentaba en determinados objetivos estratégicos entre los que se encontraban, la creación de un nuevo modelo democrático de participación popular, la lucha contra la

¹⁷⁹ Una hipótesis plausible que se desprende del análisis histórico de los resultados electorales (<www.cne.gov.ve>) es que la abstención aumenta cuando el presidente no es candidato y disminuye cuando Chávez se presenta en forma personal en la elección.

corrupción y la erradicación de la pobreza (Viciano y Martínez, 2008: 104). El aval electoral proporcionado por el pueblo en las últimas elecciones implicaba, para el primer mandatario, la oportunidad de un “salto de calidad” en la gestión de gobierno.

A partir de ese momento, los viajes al exterior se irán multiplicando al calor de un proceso de radicalización política que ubicará a Chávez en el centro de la mirada política regional. Dos elementos serán las huellas en las que el líder bolivariano hundirá su proyecto político. Por un lado, sus incesantes peleas mediáticas con el presidente norteamericano George Bush; por el otro, el lanzamiento de una idea filosófico-política que cubrirá a partir de ese instante el proceso bolivariano: el socialismo del siglo XXI. A partir de ambos hechos, Chávez se irá convirtiendo en una de las principales referencias para algunos sectores de la izquierda tradicional que encontraban en el nuevo socialismo el reverdecir de una ideología política que parecía una pieza de museo más cercana a la momificación que a ser bandera de un proyecto emancipador. Aquí se encontraba otro de los recursos de poder de estrategia política generados por Chávez durante su gestión de gobierno y que harán del líder bolivariano un referente a nivel mundial aumentando, de esa forma, su estatura política en el interior de su propio país.

Las relaciones bilaterales con los EEUU, especialmente luego del fallido golpe militar de abril de 2002, se deterioraron de manera vertiginosa¹⁸⁰. El líder bolivariano, durante varias de sus alocuciones, ha insultado a su presidente (bajo el lema de “Venezuela se respeta” de febrero de 2004) durante todos esos años con epítetos como “pendejo”, “terrorista”, “borracho” y “asesino”, entre otras ofensas. En septiembre de 2006, durante su intervención en la Asamblea General de Naciones Unidas expresó sin tapujos: “Ayer –dijo pausado y medio risueño en la tribuna más respetada por los dueños del planeta– vino el diablo aquí, ayer estuvo el diablo aquí, en este mismo lugar. Huele a azufre todavía en esta mesa donde me ha tocado hablar. Ayer señoras, señores, desde esta misma tribuna el señor presidente de los EEUU a quien yo llamo ‘el diablo’ vino aquí hablando como dueño del

¹⁸⁰ Según Modesto Guerrero, el deterioro de la relación con EEUU comienza con la oposición de Chávez a las guerras lideradas por el país del norte luego del atentado sufrido en su propio territorio, el 11 de septiembre de 2001, “sin la cual no se comprendería el rol internacional jugado desde el año 2002 que es el haberse enfrentado con los EEUU en dos guerras mundiales (único en el mundo) y a las Naciones Unidas, cuando el resto de los gobiernos se alineaban con la coalición de los aliados norteamericanos o a las resoluciones del organismo internacional. Como consecuencia de esa posición, en el año 2003 el gobierno expulsó de Venezuela a la misión internacional norteamericana” (Modesto Guerrero. Entrevista con el autor.).

mundo. Un psiquiatra no estaría de más para analizar el discurso de ayer del presidente de los EEUU”¹⁸¹.

Esta confrontación verbal con la principal potencia del mundo le permitió a Chávez, según Arenas (2006: 141), consolidar el apoyo de gran parte del electorado venezolano, ya que “frente a miles de sus adeptos no puede ser leído por parte de éstos sino como una hazaña de su máximo líder: él, nuestro presidente, uno igual a nosotros, se atreve como nadie a desafiar al representante mayor del gran imperio”¹⁸². Como se dijo en forma precedente, este enfrentamiento operaba como otro de los recursos (en este caso de estrategia política de personalidad política) que hacía jugar el primer mandatario venezolano a nivel nacional e internacional.

Este conflicto bilateral fue aumentando a medida que el gobierno de Chávez fue radicalizando sus medidas en el ámbito de lo económico social y por la posición que fue tomando el líder bolivariano en el ámbito internacional a partir de las invasiones estadounidense a Irak y Afganistán, luego del atentado terrorista sufrido en suelo norteamericano. A su vez, la apertura comercial de Venezuela a países del mundo islámico, considerados por EEUU como parte del eje de mal, fue creciendo al compás del nivel de antagonismo entre ambos países. El apoyo brindado por EEUU a distintas organizaciones sociales no gubernamentales en Venezuela continuó ampliando las grietas entre ambos países, llegando a un nivel de confrontación, en este caso político y no de palabras, desconocido para la histórica relación bilateral.

En ese contexto, Chávez exacerbaba el discurso antiimperialista estableciendo vínculos comerciales y políticos con Rusia, Irán, China, Bielorrusia y ampliando las iniciativas enmarcadas en la Alternativa Bolivariana de las Américas (ALBA)¹⁸³, una propuesta de integración económica opuesta al ALCA, promovida por EEUU. La utilización del RP financiero petrolero¹⁸⁴ le permitió al líder bolivariano aumentar su

¹⁸¹ Guerrero (2007: 273).

¹⁸² Arenas (2006: 141).

¹⁸³ EL ALBA nace en diciembre de 2004 y contó desde su génesis con cuatro socios: Venezuela, Cuba, Bolivia y Nicaragua. Luego se incorporaron Ecuador, República Dominicana y Honduras (hasta el golpe de estado a Zelaya). Según José Natanson (2009: 103), el objetivo de esta iniciativa regional “es recuperar el espíritu de unidad bolivariano mediante un mecanismo de articulación regional que no se apoye en las cifras desalmadas del comercio sino en la sintonía política y que enfatice la dimensión social de la integración hasta convertirla en una forma de luchar contra la exclusión y la pobreza”.

¹⁸⁴ Según Norberto Bacher debe resaltarse que a partir de la recuperación del control de PDVSA, en 2003, “el gobierno puso en práctica una serie de medidas que permitieron afrontar la coyuntura crítica posterior en

influencia a nivel latinoamericano (RP de estrategia política) por intermedio de diferentes iniciativas como la compra de bonos (en Argentina y Ecuador), la venta del crudo a precios subsidiados (Nicaragua, Cuba, Bolivia) y el financiamiento de diversos proyectos y programas sociales (Uruguay, República Dominicana, Ecuador, entre otros). Los lazos con Cuba, durante estos años, se ampliaron de manera notable dando un paso más allá de la colaboración energética hacia convenios de cooperación en diversas materias como la salud, la educación y la seguridad, como se observó en el apartado en donde se describieron las Misiones Bolivarianas. En ese sentido, el gobierno de Chávez hacía uso de uno de los recursos financieros como era el de la renta petrolera, en la búsqueda de instalar su protagonismo ante la opinión pública internacional, dándole fuerza y contenido a la integración latinoamericana y reafirmando una relación de hermandad ideológica con Cuba, ante los ataques norteamericanos. Para abril de 2005, Chávez acusó a los EEUU de estar gestando una invasión a Venezuela y advirtió que “cualquier agresión imperialista a uno de nosotros (Venezuela y Cuba) será al mismo tiempo contra los dos. Las revoluciones cubanas y venezolanas ya son una sola”¹⁸⁵.

Los EEUU respondieron durante esos años en términos muy duros, y los portavoces centrales de la Casa Blanca expusieron la posición del principal país del mundo hacia Venezuela. En declaraciones a la prensa, Condoleezza Rice expresaba que “Hugo Chávez es una fuerza negativa en la región”. El ex Secretario de Defensa, Donald Rumsfeld, se pronunciaba en igual sentido al advertir que “Venezuela está comenzando una carrera armamentista peligrosa que amenaza la estabilidad regional... Venezuela y Cuba están promoviendo el radicalismo en la región... Venezuela trata de subvertir los gobiernos democráticos en la región”. El secretario de Estado, Thomas Shannon, por el mismo andarivel, atizaba el fuego al declarar que “el asalto a las instituciones democráticas en

mejores condiciones. Entre esas medidas deben destacarse: a) el control cambiario, lo cual disminuyó en forma importante la fuga de divisas y permitió aumentar las reservas del Banco Central de Venezuela (BCV) de menos de 10.000 millones de dólares a principios de 2002 a más de 30.000 millones en corto plazo; b) la modificación de la ley del BCV, obligando a éste a alinearse con la política macroeconómica del gobierno y a derivar divisas excedentarias, según una nivel que se establece mediante una fórmula diseñada al respecto, a un fondo para ser utilizado en políticas públicas; c) acentuar el papel de la OPEP para sostener los precios petroleros, regulando las cuotas de producción de los países productores asociados (cartelización del mercado); d) acuerdos directos con otros Estados, como China, Brasil, Irán y Rusia, para desarrollos económicos específicos con financiamiento de esos países; e) cancelación de la deuda pública con el FMI”. Norberto Bacher. Entrevista con el autor.

¹⁸⁵ Garrido (2008: 74).

Venezuela continúa y el sistema se encuentra en grave peligro”. Hasta que, finalmente, el presidente de EEUU enunciaría en forma personal a la prensa que “en Venezuela, un demagogo repleto de dinero proveniente del petróleo está socavando la democracia e intentando desestabilizar la región”¹⁸⁶.

En un acto realizado en la ciudad de Mar del Plata, a raíz del intento norteamericano de avanzar con el ALCA a nivel continental, el líder bolivariano fustigó nuevamente la política del país del norte hacia Sudamérica y al grito de “ALCA, ALCA, al carajo”, agregaba: “Cuánto daño le hizo a los pueblos de América Latina aquella iniciativa de las Américas, el neoliberalismo, el Consenso de Washington y el así conocido paquete de medidas del Fondo Monetario Internacional y en este continente casi todos los gobiernos se arrodillaron, hay que decirlo así, se arrodillaron indignamente las elites de estos pueblos”¹⁸⁷.

Los años 2005 y 2006 representaron los tiempos en los que el presidente bolivariano se instaló en la opinión pública internacional de forma decisiva (recurso de estrategia política). Sus discursos en los foros internacionales, la aparición cada vez más persistente en los medios de prensa mundial, junto a su posición antiimperialista y a favor de la integración latinoamericana, configuraban el principal escenario en el que Chávez dejará su impronta bolivariana y revolucionaria. Su discurso redentor y lleno de consignas grandilocuentes emergió en todas las tonalidades: “Nuestra tarea es salvar el mundo, al planeta Tierra. Nuestra tarea es mucho más grande que la asumida por Bolívar, mucho más comprometida”¹⁸⁸.

Para febrero de 2005, por primera vez, el líder bolivariano haría alusión al socialismo del siglo XXI¹⁸⁹. En el acto de inauguración de la IV Cumbre de la Deuda

¹⁸⁶ Todas las declaraciones de funcionarios y del presidente de los EEUU se encuentra en Golinger (2009).

¹⁸⁷ Chávez, Discursos Presidenciales 2005 (2005: 609).

¹⁸⁸ Ramos Jiménez (2007: 10).

¹⁸⁹ Consultado por el autor de esta investigación sobre la “necesidad” del socialismo del siglo XXI (si emanaba del pueblo o era el propio Chávez quien la generó), Norberto Bacher declaró que “en su carácter de intelectual orgánico de este proceso, Chávez pronto se encontró con la necesidad práctica de resolver el problema que enfrentan todas las revoluciones políticas: la democratización radical de la superestructura política (que aquí se llama democracia participativa y protagónica) más temprano que tarde resulta inconciliable con el principio de una economía cuyo prioridad se centra en la necesidad de la rentabilidad del capital, la ganancia como su fundamento y fuerza impulsora. Por eso tampoco podría afirmarse que Chávez “inventó” el socialismo...Hasta entonces esa perspectiva sólo era defendida abiertamente dentro del campo bolivariano por un sector numéricamente reducido y sin mayor incidencia de poder. A partir de ese planteamiento y de ser eje de la campaña de 2006 se expande a sectores muchos más amplios, aunque

Social y Carta Social de las Américas, Chávez le va a poner nombre y apellido a ese “salto adelante” postulado luego de las elecciones del año anterior. En este sentido, expresará que “hay que inventar el socialismo del siglo XXI y habrá que ver por qué vías”¹⁹⁰. El presidente venezolano marcaba el horizonte socialista de la Revolución Bolivariana, brincando las barreras ideológicas nacionalistas y latinoamericanas en torno al encuadre de las “tres raíces” (Guerrero: 2007) y proponiendo la radicalización del modelo económico, político y social desarrollado hasta la fecha.

En una entrevista con el periodista chileno Manuel Cabieses, realizada en abril de 2005, el presidente amplió el concepto presentado dos meses atrás, al expresar que este socialismo “debe ser un socialismo nuevo, con planteamientos frescos, acoplado con una nueva era que apenas está comenzando. Por eso me atreví a llamarlo «socialismo del siglo XXI», como proyecto... Yo quiero aportar algunas ideas. Una es afirmar que el primer socialista de nuestra era fue Cristo. Soy cristiano y pienso que el socialismo debe nutrirse de las corrientes más auténticas del cristianismo”¹⁹¹. Dejando en evidencia que este planteamiento aún no tenía un contenido preciso, sino que habría que ir definiéndolo en la articulación entre la teoría y la praxis, Chávez aceptaba que la vía al socialismo se trataba de un proyecto que no estaba pensado desde la certeza, sino que su orientación devendría de la propia dinámica que había tomado el proceso en Venezuela. En este sentido, declaraba: “Si hace cuatro años me hubieras preguntado: ‘¿Chávez, hacia dónde vamos?’, quizás mi respuesta no habría sido tan precisa, aún cuando a la que estoy dándote todavía le falta muchísima precisión. Te habría dicho, como tantas veces lo dije: ‘Aquí está la Constitución Bolivariana, este es el proyecto’. Ahora creo que vamos rumbo al socialismo. La democracia revolucionaria hay que ir la orientando hacia el socialismo”¹⁹²

Por último, y en referencia a los elementos que podían llegar a definir este socialismo aplicado al siglo XXI, Chávez esbozaba lo siguiente: “Yo diría que el primer rasgo es el moral. Hay que comenzar por ahí, por la conciencia, por la ética. Sin duda lo que digo tiene mucho de cristianismo... El socialismo debe defender la ética, la

tampoco podría aún generalizarse y decirse que el pueblo la toma como bandera”. (Norberto Bacher. Entrevista con el autor).

¹⁹⁰ Chávez, Discursos presidenciales 2005 (2005: 161).

¹⁹¹ Entrevista con Manuel Cabieses, abril de 2005. En Altermedia Info, en línea en: <http://es.altermedia.info/general/hacia-donde-va-usted-presidente-chavez_1477.html>.

¹⁹² *Ibíd.*

generosidad. Bolívar fue un ejemplo: abandonó todo por ser útil a su país... En la línea política uno de los factores determinantes del socialismo del siglo XXI debe ser la democracia participativa y protagónica. El poder popular. Esto es un elemento político definitorio que contrasta con aquello del partido único o centrar todas las decisiones en el partido. Hay que centrar todo en el pueblo, el partido debe estar subordinado al pueblo. No al revés... En lo social, el socialismo debe conjugar igualdad con libertad. Una sociedad de incluidos, de iguales, sin privilegios, sin esta abismal diferencia entre extrema riqueza y extrema pobreza... En lo económico: un cambio del sistema de funcionamiento metabólico del capital. Se trata de dejar atrás la lógica de funcionamiento perverso del capitalismo. Son válidas muchas experiencias como la autogestión y cogestión, la propiedad cooperativa y colectiva, etc. Estamos poniendo en marcha un ensayo de empresas de producción social y unidades de producción comunitaria. Eso está recién naciendo pero ayudará a definir un modelo teórico”¹⁹³.

En el marco de una convocatoria a la construcción de un nuevo recurso de estrategia política como era el socialismo del siglo XXI, el primer mandatario tenía en su horizonte las próximas elecciones nacionales (parlamentarias en diciembre y las presidenciales del siguiente año), y continuaba generando recursos de poder de índole comunicacional para la acción de gobierno. A finales de julio de 2005, el gobierno bolivariano lanzaba la señal “la Nueva Televisora del Sur”, conocida como Telesur, que junto a otras iniciativas como Petrosur configuraban las acciones más importantes que desde Venezuela intentaban acortar las distancia con Sudamérica, dejando en un lugar de relevancia el liderazgo de Hugo Chávez. Es decir, dichas iniciativas estatales (recursos de poder de estrategia política) tenían como finalidad, por un lado, mostrar una realidad alternativa a la que ofrecían las cadenas mediáticas internacionales con centro en los EEUU, y por otro lado instalar la imagen del presidente en el ámbito mundial. La constitución de Telesur estaba ligada a la estrategia presidencial de desafiar, en ese ámbito, a las construcciones mediáticas adversas

¹⁹³ Ibíd. En el año 2010, en una entrevista con Daniel Filmus (2010: 213- 214), el líder bolivariano amplió el concepto al declarar que “el socialismo del siglo XXI es una creación, pero que hay que crear en base a una doctrina y a elementos científicos... Entonces veo cinco frentes de batalla; el primero creo el más importante, es el frente moral, espiritual...Otro frente político es la democracia. Pero no la democracia burguesa liberal, sino la democracia protagónica, el poder popular... luego viene el frente económico. El poder económico hay que democratizarlo. Al pueblo hay que transferirle el poder económico... El cuarto frente sería el social. La sociedad de iguales en el sentido marxista... Y en quinto lugar yo ubico algo que quizá cuesta un poco explicarlo. Es el territorial, el territorio... Hay que conectar las tierras agrícolas con la potencia industrial para impulsar la revolución agroindustrial. Es decir, es la visión del territorio”.

en el plano local e internacional y que tuvieron su génesis, como se comentó en el capítulo anterior, luego del fallido golpe cívico militar de abril de 2002.

Mientras el primer mandatario generaba recursos de poder en la arena comunicacional para instalar su figura en el mundo, la realidad local le permitía continuar fortaleciendo su LP en un plano en el que resultaba imbatible: el electoral (RP de apoyo popular/ ciudadano). La renovación legislativa de finales de año mantendría la tónica de las últimas votaciones, y la oposición se encargaría de continuar perdiendo recursos de poder institucionales en ese ámbito. Las elecciones parlamentarias de diciembre de 2005 tuvieron un resultado fuera de lo común. Una semana antes de la contienda, la oposición política venezolana anunció que no se presentaría a la elección legislativa (retiró a todos sus candidatos) por desconfiar del sistema automatizado de emisión del voto, como así también de los directivos del CNE, órgano encargado de aplicar la justicia electoral en el país bolivariano. A su vez, daba por descontado “la inasistencia de su electorado, aparentemente convencido del control unilateral y fraudulento del proceso por parte del chavismo en el poder”¹⁹⁴. La oposición intentaba, con esta acción, deslegitimar el proceso electoral y con ello al propio gobierno. Sin embargo, el contexto nacional de ese momento se tornaba poco propicio para habilitar con éxito sanciones “morales” a un gobierno fortalecido luego de los fracasos opositores de los últimos tres años.

Las elecciones finalmente se realizaron sin el concurso de la oposición, y el chavismo y sus aliados obtuvieron la totalidad de los escaños en la Asamblea Nacional. El objetivo político de la oposición, como se indicó, fue deslegitimar con su ausencia el proceso electoral, llamando la atención sobre el posible fraude y favoritismo de los encargados de generar justicia. Se trataba de una nueva estrategia (fallida) opositora que observaba sin dar crédito la imbatibilidad en el terreno electoral del líder bolivariano. Otro de los propósitos del antichavismo era intentar sacar provecho de la alta abstención electoral que se avizoraba, para de esa manera generar una nueva presión internacional para continuar la deslegitimación política del proyecto bolivariano. Es decir, el esquema articulado en torno a este objetivo se asentaba en unificar, a modo de denuncia, el fraude electoral de 2004, la conformación ilegítima de la CNE y la imposibilidad de una “verdadera” democracia representativa.

¹⁹⁴ Ramos Jiménez, (2007: 10).

El marco institucional luego de las elecciones de diciembre de 2005 estaba empapado de color rojo, ya que la Asamblea Nacional mostraba un croquis monocolor: 114 escaños sobre un total de 165 eran del partido MVR, y el resto era de aliados al chavismo. Las fuerzas de la oposición, alineadas en las filas de la “abstención deslegitimadora”, perdieron la posibilidad de ocupar espacios en la Asamblea y dejaron al presidente con un RP institucional indispensable como era el órgano unicameral parlamentario. Más allá de que se preveía un triunfo de las fuerzas oficialistas en la elección legislativa, la nula presencia opositora aseguró que en ese espacio institucional no se alzarán voces en contra del gobierno y el chavismo contara con mayorías especiales para delegar en el poder ejecutivo su capacidad legislativa.

En ese contexto de hegemonía presidencial, con recursos de poder consolidados y con una oposición política en “retirada estratégica”, Chávez consolidó su frente interno y dedicó parte del año 2006 a exhibir una actitud triunfalista y de menosprecio hacia la oposición, considerada “minoritaria y al servicio del imperialismo” (Ramos Jiménez, 2007: 10) y a preparar el siguiente turno electoral, que involucraba la reelección presidencial con la certeza casi absoluta del triunfo. A su vez, el clima político de tranquilidad institucional que se avizoraba le permitió al líder bolivariano, como se comentó en los párrafos precedentes, extender su liderazgo hacia otras latitudes.

Las dificultades de la oposición política venezolana, carente de recursos de poder relevantes, de conformar una candidatura unificada de cara a las elecciones presidenciales, dificultó la viabilidad de instalar una alternativa al chavismo con posibilidades concretas de una disputa competitiva. Los críticos del presidente, sin embargo, insistían en que el desequilibrio estructural en el que se encontraba la oposición política venezolana remitía a un marco institucional adverso. En ese sentido, esgrimían que “la campaña a favor del presidente mediante la utilización abusiva de los recursos del Estado por una parte, y la contaminación del Registro Electoral por otra, anunciaban la presencia de un dilema crucial para el creciente movimiento de la oposición, que debía hacer frente a la orientación abstencionista de buena parte de su electorado natural”¹⁹⁵. A pesar de las dificultades finalmente, la oposición pudo presentar una candidatura unificada en torno al gobernador del tradicional distrito opositor de Zulia, Manuel Rosales.

¹⁹⁵ Ramos Jiménez (2007: 11).

El resultado final deparó pocas sorpresas, ya que la victoria de Chávez fue arrolladora y superior a las otras contiendas presidenciales. El líder bolivariano obtuvo 7.309.080 (62,8%) de votos frente a 4.292.466 (36,9%)¹⁹⁶ del candidato de la oposición. La ventaja era inobjetable y contundente, dejando en evidencia que la mayoría del país apoyaba, por intermedio del voto popular (RP), el proyecto encarnado por Hugo Chávez. El triunfo electoral fue en todos los estados, inclusive en el distrito de Zulia, de donde provenía el candidato opositor. La abstención volvió a bajar en relación con otras contiendas electorales y alcanzó el 25,3%¹⁹⁷, coincidiendo con la hipótesis -planteada por este autor- de que la misma disminuye cuando el presidente participa, en forma directa de candidato.

La jura presidencial del 10 de enero de 2007 (al igual que la del 4 de febrero de 1999) reflejaba los próximos pasos políticos del presidente Chávez. Allí exponía: “Juro delante de esta Constitución, de esta maravillosa Constitución... que entregaré mis días y mis noches y mi vida entera a la construcción del socialismo venezolano, a la construcción de un nuevo modelo político, de un nuevo sistema social, de un nuevo sistema económico. Juro por Cristo el más grande socialista de la historia, juro por todos ellos... que haré cumplir, que cumpliré con los mandatos supremos de esta Constitución, con los mandatos supremos del pueblo venezolano, aún a costa de mi propia vida, aún a costa de mi propia tranquilidad. ¡Patria y socialismo o muerte! ¡Lo juro!”¹⁹⁸. La meta será, según las palabras del presidente, la construcción del socialismo del siglo XXI, y en ese esquema el apoyo social brindado en esos años se convertirá en el RP por medio del cual el líder bolivariano producirá dicha reforma económica, política y social trascendente para la historia venezolana. Su alta popularidad (RP de apoyo popular/ ciudadano) provenía de generar iniciativas de fuerte impacto social como las Misiones Bolivarianas, cristalizadas en nuevos recursos que le permitieron consolidar su gobierno luego de años de intensa lucha política.

A su vez, la poca incidencia política de la oposición en el marco institucional radicaba en la escasa lucha presentada en el terreno electoral, y en el hecho de haberse jugado casi todas las fichas en la destitución de Chávez por medio de la fuerza, del sabotaje o del referendo (que no fue visto como una competencia electoral, sino que formó parte de

¹⁹⁶ Datos obtenidos en base al Consejo Nacional Electoral, en línea en: <www.cne.gov.ve>.

¹⁹⁷ *Ibíd.*

¹⁹⁸ Narvaja de Arnoux (2008: 127-128).

una iniciativa común a las anteriores ya que tuvo como único fin destituir en forma inmediata al presidente). Las elecciones parlamentarias de 2005 fueron otra muestra palmaria de esa desatención en ese campo por parte de la oposición, lo que le permitió a Chávez seguir contando con un RP institucional privilegiado (mayoría especial en la Asamblea) con el que pudo continuar gobernando por intermedio de instrumentos delegados y decretos presidenciales provistos por el propio legislativo.

Resumiendo, luego de la victoria electoral en el referendo revocatorio y del triunfo en la elección de octubre del mismo año 2004, el líder bolivariano se encontró en condiciones de darle un mayor impulso a la política exterior venezolana, la cual se sustentó en dos pilares: un fuerte enfrentamiento verbal y político con los EEUU y la propuesta del socialismo del siglo XXI. En forma paralela, Chávez generó, en el plano de las ideas, un nuevo RP de estrategia política como fue la enunciación de un novedoso horizonte ideológico a construir en Venezuela y en el mundo: el socialismo del siglo XXI. A pesar de lo lúbil de su definición, el hecho de introducir en el plano nacional e internacional un concepto novedoso y conocido para la historia de las luchas emancipadoras, generó en los sectores intelectuales y políticos asociados a la izquierda ideológica un gran debate, el cual dio lugar a una corriente de apoyo en el plano internacional.

Por último, las victorias oficialistas (RP de apoyo popular/ ciudadano) en las parlamentarias de 2005, sin asistencia opositora, y en las presidenciales de 2006, donde Chávez logró su reelección de manera categórica evidenciaban la imbatibilidad del líder bolivariano en la arena electoral. En los hechos, dichos triunfos significaron el incremento de los recursos de poder institucionales del primer mandatario, que se encontraba en condiciones de descansar en el ámbito local y proyectar su liderazgo a escala internacional.

Conclusión

Para enero de 2003, la situación política venezolana volvió a tornarse inestable luego del paro con medidas de sabotaje en la empresa estatal PDVSA por parte de grupos opositores. La situación, en un primer momento, desbordó al gobierno, quien pudo controlarla luego de un mes de tensiones que incluyeron desbordes sociales en todos los aspectos. Si la recuperación de la ascendencia sobre la Fuerzas Armadas luego del fallido golpe de Estado de abril de 2002 fue un RP estratégico recobrado por el presidente para consolidar la defensa de su gobierno, restablecer el control de Pdvsa (RP financiero) significó, también, fortalecer otro de los aspectos hasta ese momento flaco de la administración chavista, como era la ampliación de derechos sociales. Las MB (recurso de estrategia política) se desarrollaron durante los años 2003 y 2004 e implicaron una estrategia de inclusión social inédita para el sistema político venezolano.

Otro de los recursos de poder de estrategia política generado por el presidente durante esta etapa fue su programa radial y luego televisivo *Aló, Presidente*. Desde allí, Chávez, una vez a la semana, se dirigía a la sociedad forjando un vínculo directo con sus televidentes sin ninguna clase de intermediación. Estas transmisiones, que ocuparían un espacio importante dentro de la programación de la TV los días domingo, configuraban otro de los recursos generados por el presidente para contactarse con la ciudadanía, creando por su intermedio, un lazo inmediato con el público propio.

La oposición intentó, una vez más, ir por la renuncia del presidente, pero esta vez lo hizo en el marco de la CB a través de la herramienta institucional de la revocatoria de mandato. El 15 agosto de 2004 se puso a prueba la fortaleza del LP de Chávez y el 60% de apoyo y una abstención menor a otras contiendas, fueron las muestras palpables de un liderazgo consolidado con un sólido RP como era el apoyo popular/ ciudadano. Esta elección constituía el último de los intentos de la oposición por derrocar al líder bolivariano antes del lapso estipulado constitucionalmente, y aleccionaba a los partidarios opositores que el LP de Chávez continuaba teniendo una importante legitimación popular. Esta vino nuevamente en su apoyo en las elecciones regionales, a escasos meses del referendo, en la que los partidarios del líder bolivariano triunfaron en la mayoría de los distritos, consolidando recursos de poder institucionales a nivel provincial.

Con los triunfos electorales de agosto y octubre de 2004, el presidente entendió que una nueva etapa se abría en el horizonte político. Desde allí que a meses de la victoria haya denominado a esta nueva fase como de “salto hacia adelante”. Para principios de 2005, este brinco tendría nombre y apellido: socialismo del siglo XXI. La recuperación del socialismo como una ideología aún vigente en el discurso de la praxis política latinoamericana se daba junto al estrechamiento de las relaciones con Cuba. La importancia del gobierno de la isla en la generación de las condiciones de provisión de médicos y docentes significó un importante apoyo para consolidar los logros en la arena social. Este RP basado en la estrategia política presidencial operará como un elemento indispensable en el apoyo de los sectores más vulnerables al proyecto del presidente.

En el plano internacional, la prédica antinorteamericana del líder bolivariano aumentó sus decibeles desde el año 2005. Los insultos al presidente Bush fueron parte del paisaje cotidiano de esos años, al calor de la constitución del ALBA y de la apertura de la economía venezolana a otros mercados, como el ruso, el chino y el iraní. La generación de estos nuevos recursos de estrategia política producto de la acción del gobierno le permitió al presidente bolivariano consolidar los apoyos internos que le dieron en diciembre de 2006 la reelección presidencial. Es decir, la constante generación de recursos de poder por parte del presidente Chávez le aportó insumos institucionales y no institucionales estratégicos para instalar su figura a nivel mundial. El canal de noticias Telesur, otro de estos recursos de poder creado por el ejecutivo, le permitía agigantar su estatura política a nivel mediático y proyectar una realidad diferente a las tradicionales cadenas informativas norteamericanas. La contundente mayoría parlamentaria producto de la ausencia opositora en las elecciones legislativas de 2005, le reportó mayores recursos de poder institucionales para gobernar sin grandes límites.

Con recursos de poder de estrategia política, de apoyo popular/ ciudadano e institucionales trascendentales, el paso siguiente del líder bolivariano fue la búsqueda de la reelección indefinida. La Constitución Bolivariana aprobada en el año 1999 vedaba tal posibilidad, por lo tanto desde los sectores del gobierno se proyectaría una reforma de algunos artículos que permitirían cristalizar el salto “hacia adelante” en el marco del socialismo del siglo XXI a través de una reelección presidencial sin límites.

CAPITULO IV
**URIBE Y LA GENERACION DE RECURSOS FRENTE A LOS GRUPOS
ILEGALES (2002-2004)**

Tenemos que definir:
¿es un país serio, con un gobierno serio y
adherido a los principios
o nos ponemos juguetones con las FARC?
Eso de haber sido juguetones fue lo que
llevó a Colombia a tantos años de violencia,
que tanta dificultad nos da para superarla”

Álvaro Uribe (Barranquilla, 2005)

Introducción

Este capítulo tiene por objetivo analizar los primeros dos años de gobierno de Álvaro Uribe. En la primera parte, se analizan los diferentes intentos del primer mandatario por realizar un proceso de reformas en el campo jurídico que tuvo por propósito la creación de instrumentos legales para llevar adelante el principal objetivo de guerra frente a las FARC. Estas modificaciones, que obtuvieron resultados dispares, se desarrollaron en el marco de una estrategia política que llevó el nombre de “Seguridad Democrática” y que implicaba la transformación de los principales resortes institucionales del Estado colombiano y la creación de nuevas herramientas de poder presidencial para combatir a la guerrilla. En ese sentido, se observa de qué forma Uribe logra instalar este RP de estrategia política en el marco del “Estado Comunitario”, la propuesta del primer mandatario para hacer partícipe a la comunidad en la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo.

En segundo lugar, el capítulo detiene su atención en el estilo de gobierno de Uribe en su relación con la sociedad. Aquí se analiza su rol durante los Concejos Comunitarios (uno de los principales recursos de poder de estrategia política comunicacional creados por el primer mandatario) que se realizaron por todo el país y que le permitieron a Uribe conocer en forma directa y sin mediaciones institucionales las demandas de los ciudadanos.

Por último, el tercer ítem analiza las estrategias y los principales resultados del avance del Estado sobre los grupos ilegales FARC y AUC y de qué manera el gobierno se enfrentó a la problemática del secuestro, el intercambio de prisioneros y el acuerdo

humanitario en el contexto del Plan Patriota. En este sentido, se repasa en las acciones estatales (recursos de estrategia política) y sus principales éxitos en el contexto de crecimiento de los recursos humanos y de modernización de los equipos de inteligencia y armamento. El proceso de desmovilización de los paramilitares, es otro de los tópicos de análisis de esta última parte de este capítulo. Allí se realiza un recorrido histórico por el plan de desarme y desmilitarización de las AUC en el marco del Proyecto de “Paz y Justicia” (RP de estrategia política), el vehículo legal que propuso el gobierno para llevar adelante la desmovilización paramilitar, desde el punto de vista de sus resultados.

4.1. La generación de recursos de poder en el primer año de gobierno

Este ítem concentra su atención en el primer año del gobierno de Uribe y describe los primeros intentos de reformas institucionales propuestas por el presidente. En este sentido, se analiza el discurso del primer mandatario en torno a su política de “Seguridad Democrática” y los principales ejes en que se inscribe la estrategia presidencial (RP) en el campo de la seguridad. A su vez, se estudia la fundamentación que Uribe les imprime a estos cambios en el marco del “Estado comunitario” (RP de estrategia política) y de qué manera se comienza a delinear un estilo particular de gestión basado en la relación sin mediaciones entre el presidente y la ciudadanía.

La creación de recursos de poder al servicio de la legalidad estatal y la guerra a las FARC

En el tiempo que se extiende entre el triunfo electoral de mayo y la asunción del 7 de agosto de 2002 suceden dos hechos de vital importancia para la inminente administración Uribe. En junio, la Unión Europea incluyó en su “lista negra” de grupos terroristas a las FARC, y un mes después las AUC decidían, en boca de su principal líder Carlos Castaño, emprender el camino de la disolución. Ambas novedades jugarán claramente a favor de la estrategia de gobierno del flamante presidente, ya que implicaban, por un lado, un duro golpe a la política diplomática de las FARC, y por el otro la autoexclusión de un histórico actor de veto para el sistema político colombiano: los paramilitares. Es decir, previamente a la posesión de mandato, Uribe fortalecía su posición frente a la guerrilla y se le allanaba el camino para negociar con las AUC una salida pacífica.

La “bienvenida” que realizó la guerrilla al primer mandatario el mismo día de la asunción fue el lanzamiento de morteros de granadas de dinamita sobre el Palacio presidencial y en el Congreso, lo que dejó un saldo de 27 muertos y 13 heridos. A pesar del fortísimo estruendo en el interior del parlamento, el presidente estoicamente soportó el incidente y juró minutos después. Este tipo de acciones no hacían más que aumentar el nivel de legitimidad del flamante presidente en su política de aniquilación, vía armada, de la guerrilla marxista. A su vez, le mostraba al primer mandatario “el estado en que se

hallaban nuestros servicios de inteligencia: ni siquiera en la capital del país sabíamos lo que planeaban las FARC para un evento tan importante”¹⁹⁹.

El mandato popular dado al presidente, en ese sentido, implicaba no sólo un aval a la lucha contrainsurgente frente a las FARC, quienes se habían visto deslegitimadas en el interior del país luego de los sucesos del Caguán, sino también un crédito en la lucha contra “la politiquería y la corrupción”, promesa de campaña de Uribe. Es decir, la oxigenación del sistema político colombiano, mediante una victoria militar sobre las FARC y la moralidad en la administración del país, se convertía en la principal demanda social hacia el nuevo presidente. Según Gutiérrez Sanín (2004: 61), los dos últimos presidentes fueron elegidos en nombre de propuestas anticorrupción, y la evidencia histórica permitía indicar que la ciudadanía estaba más interesada en que Uribe “moralizara”, y no tanto en que “reprimiera”²⁰⁰.

A pesar de no contar con una mayoría compacta en el congreso bicameral colombiano, ciertos hechos -su continua prédica frente a la “politiquería” (RP de estrategia política), los dividendos obtenidos en cuanto a la popularidad presidencial (recurso de apoyo popular/ ciudadano) y la amenaza de reformas políticas que incluía eliminar una de las cámaras legislativas- le permitieron a Uribe aumentar los apoyos en el poder legislativo. Al iniciar su mandato, 12 de 28 senadores liberales y 18 de 47 del mismo espacio político abandonaron el partido para unirse a su coalición de gobierno. La alta imagen del presidente funcionó como un capital político para alinear a la mayoría de los congresistas. De tal modo, durante el primer período de gobierno dispuso de un Congreso altamente subordinado²⁰¹.

¹⁹⁹ Uribe (2012: 142)

²⁰⁰ Según este autor, buena parte del apoyo a Uribe provenía de una fuerte pulsión moralizadora de la mayoría del electorado. “Las razones subyacentes son varias. En primer lugar, frisando la década de los 90 la corrupción de la política colombiana alcanzó niveles espectaculares... las acusaciones penales contra congresistas en esa década, los vínculos con el narcotráfico, también hay peculado, crímenes contra la administración pública, y homicidio simple y múltiple. En segundo lugar, el episodio Samper mostró que si la corrupción se salía de madre ello podía poner en cuestión algunos de los parámetros sobre los que estaba construida la estabilidad del sistema político, en particular la alianza estratégica con EEUU (Gutiérrez Sanín, 2005: 61).

²⁰¹ Según la periodista Ángela Pinzón, “Uribe no tuvo una oposición férrea durante su primer mandato, sí en el segundo. En esta primera legislatura la oposición más fuerte provino del Polo Patriótico (PP) y de los restos del Partido Liberal. El Partido Conservador siempre fue una oposición de “aguas tibias” (Ángela María Pinzón. Entrevista con el autor).

La fuerte popularidad que Uribe mantuvo durante gran parte de su primera presidencia le permitió contar con un RP institucional como era el parlamento. Según Jaime Bermúdez “Uribe llegó ‘sin Congreso’, él decide largarse por fuera del Partido Liberal, concita voluntades antes de las parlamentarias de marzo que luego lo apoyan en la presidencial. Estos se plegaron a Uribe con mucha autonomía frente al parlamento. Eso fue una ventaja durante su primer mandato, aunque también una desventaja ya que se trataba de una frágil e inestable coalición de gobierno. La aprobación de leyes siempre dependió de coaliciones *ad-hoc*”²⁰²

En ese marco, y con un parlamento que no le traería grandes dificultades, durante los primeros días de gobierno Uribe enfocó su lupa en transformar la arquitectura jurídica de la Constitución colombiana (recursos de estrategia política). Las innovaciones en esta área resultaban vitales para que el presidente contara con herramientas institucionales adecuadas para emprender su objetivo de derrotar a la guerrilla con los resortes legales. En este sentido, el 11 de agosto, a días de la asunción, el primer mandatario –frente a la intensificación de los ataques de la guerrilla- declaró mediante el decreto 1837 el “Estado de Excepción” y el “Estado de Conmoción Interior”²⁰³ por un periodo de noventa días²⁰⁴. De esta manera, se facultó al Poder ejecutivo para legislar en aquellas materias tendientes a recuperar el orden público. En forma complementaria, se aprobó el Acto Legislativo N° 3 de diciembre de 2002, conocido como “estatuto antiterrorista”, por el cual se reformaron los artículos 116, 250 y 251 de la Constitución Nacional, con el fin de acelerar los procesos de instrucción y acusación, incrementando, de esa manera, la politización de la justicia. A su vez, mediante esa herramienta jurídica se dotaba de un mayor control al ejecutivo y a las Fuerzas Armadas con el objetivo de enfrentar en mejores condiciones legales al terrorismo. La aprobación legislativa de esa enmienda constitucional confería a los militares potestades

²⁰² Jaime Bermúdez. Entrevista con el autor.

²⁰³ El Estado de Conmoción Interna (conocido como estado de sitio, presente en el artículo 213 de la Constitución colombiana) es uno de los poderes de emergencia, junto al de emergencia económica que tiene el presidente entre sus potestades. Siguiendo a Ronald Archer y Matthew Shugart, “desde el retorno al orden civil en 1958 y hasta la abrogación de la antigua constitución en julio de 1991, Colombia estuvo bajo estado de sitio, en promedio, durante el 75% en esos treinta y tres años. Los poderes reconocidos al presidente durante el estado de sitio son tales que el presidente, si tiene inclinación, puede aparecer como un virtual “dictador constitucional” (en Manwaring y Shugart, 2002: 138).

²⁰⁴ En medio de tensiones con esa decisión del Ejecutivo, la Corte Constitucional declaró exequible el decreto con la excepción del artículo 3°, con el que el gobierno pretendía eludir el control constitucional de la Corte sobre el contenido de los decretos que expediría en el desarrollo de la conmoción interior.

judiciales permanentes para ejercer tareas de policía judicial. Según Gutiérrez Sanín (2004), “con esta norma se permitía interceptar y registrar comunicaciones, realizar detenciones y registros domiciliarios sin orden judicial y la creación de unidades especiales para investigar los delitos o acusar a los presuntos infractores de la ley, otorgando así funciones policiales a las Fuerzas Armadas”²⁰⁵.

Estas reformas, que se realizaron en nombre de la defensa de los derechos ciudadanos amenazados por la presencia del “narcoterrorismo”, atentaban también contra los cimientos de la Constitución modificada en el año 1991 y contra los derechos en ella existentes. La estrategia política del presidente Uribe se basaba en la utilización de todas las herramientas constitucionales vigentes y en la creación de otras nuevas con el propósito de derrotar a la guerrilla de las FARC. Este fue, desde su génesis, el objetivo principal del primer mandatario. En ese sentido, las reformas en la esfera judicial promovían la “militarización de la justicia”, ya que se les permitía a los militares obtener funciones judiciales que desafiaban, en algunos aspectos, el derecho internacional, pero eran invocadas por Uribe como estrategias adecuadas al fin propuesto²⁰⁶. Por otro lado, el presidente Uribe intentó mantener el “Estado de conmoción” en forma permanente a partir de reformas que incluyeron limitar poderes a la Corte Constitucional²⁰⁷. Las razones esgrimidas para extender dicho plazo estaban en el decreto que, entre sus párrafos más importantes, señalaba que la sociedad se encontraba “sometida a un régimen de terror en el que naufraga la autoridad democrática y hace cada vez más difícil y azarosa la actividad productiva, multiplicando el desempleo y la miseria de millones de compatriotas”²⁰⁸.

Desde el inicio de su gobierno, y luego de las primeras medidas adoptadas por el ejecutivo, las relaciones entre el presidente y el poder judicial resultaron espinosas. La

²⁰⁵ Gutiérrez Sanín, 2005: 73. Según la periodista Paola Holguín, “en Colombia hay una clara división de poderes y la Corte Constitucional que es la que vela por el cumplimiento de la Carta Fundamental, operó con todas las garantías durante el Gobierno. Las reformas que se hicieron se adelantaron en el marco del estado de derecho. Creo que si algo se debe destacar del Gobierno, fue el respeto y fortalecimiento a las instituciones que conforman el Estado” (Paola Holguín. Entrevista con el autor).

²⁰⁶ Para los críticos de estas medidas (Garay, 2003: 34), estas sanciones “van en contravía de las recomendaciones de diferentes instancias de la ONU y la OEA que en diversos informes y recomendaciones exigen que no se otorgue atribuciones militares a las fuerzas armadas”.

²⁰⁷ Para un estudio de las reformas frustradas encaradas por el presidente Uribe, véanse “El embrujo Autoritario. Primer año de gobierno de Álvaro Uribe Vélez” y “Reelección. El embrujo continúa. Segundo año de gobierno de Álvaro Uribe”, ambos editados por la organización Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, democracia y Desarrollo.

²⁰⁸ Congreso de la República de Colombia. “Decreto 1837 de 2002”, 2002. Documento Electrónico.

unificación de los ministerios de interior y justicia²⁰⁹ realizada por el líder antioqueño permitía comprender la modalidad de tratamiento que Uribe pensaba darle a su proyecto de “Seguridad Democrática”. La evidencia de que para el líder colombiano las cuestiones judiciales debían tener un abordaje desde el plano de la seguridad se tornaba nítida y revelaba que dicha conjunción formaba parte de un par indivisible.

Por el mismo andarivel nadaban el fallido proyecto de eliminar el Consejo Superior de la Judicatura y la propuesta de instalar en su lugar un nuevo cuerpo que tendría a cargo la administración de la rama judicial con integrantes del ejecutivo y del legislativo. En el mismo proyecto se intentaba limitar las facultades de la Corte Constitucional como garante de la supremacía de la Constitución al abrir la alternativa de impugnar la constitucionalidad de una ley dentro de los dos años posteriores a su expedición. La idea que subyacía en este propósito reformista era establecer una legislación que quedara al servicio de la lucha frente a la guerrilla. Esta política de concentración del poder, tanto de la esfera judicial como legislativa en la figura del presidente, fue la estrategia política (RP) de Uribe para encarar el proceso de guerra frontal contra la guerrilla.

El presidente, por otro lado, solicitó al Congreso facultades extraordinarias para llevar a cabo la supresión, fusión y transformación de ministerios y otras entidades del Estado. A su vez, y en un rasgo que caracterizó su figura poco atada a principios ideológicos rígidos, Uribe impuso un impuesto de seguridad a los ciudadanos con un patrimonio superior a los 150 millones de pesos, que correspondía al 1,2% de la renta declarada, afectando a los sectores más pudientes de la sociedad colombiana. La finalidad del impuesto era “para la expansión de nuestro Ejército y de las fuerzas policiales... para el mejoramiento de nuestra seguridad, sin tener que sacar dinero de otras áreas importante como la salud y la educación”²¹⁰. Este conjunto de medidas dispuestas por el primer mandatario colombiano se inscribían en su política de Seguridad Democrática (PSD), el

²⁰⁹ Al respecto se puede observar la Directiva Presidencial Número 10 de agosto de 2002, en la cual el presidente consagra los principios rectores de su Programa de Renovación de la Administración Pública; el documento Conpes 3248 de 2003 “Renovación de la Administración Pública”, en el que se establecen de manera definitiva las medidas para lograr el Estado Gerencial por medio de la austeridad, eficacia y eficiencia en los procesos, gestión por resultados y la flexibilidad administrativa; y la Ley 790 de 2002, con la que se expiden algunas disposiciones para adelantar el programa de renovación de la administración pública, entre las que se destacan la fusión del Ministerio del Interior con el de Justicia, el de Comercio Exterior con el de Desarrollo Económico y el de Trabajo y Seguridad Social con el de Salud. (Rodríguez Carrera, 2009: 45).

²¹⁰ Uribe (2012: 175)

principal puntal de su proyecto político junto a la confianza inversionista y la cohesión social.

La implementación de la PSD tenía por propósito el reestablecimiento del orden en el territorio nacional a través de un proceso de relegitimación del Estado que buscaba recuperar territorio en manos de los grupos irregulares²¹¹. Las acciones gubernamentales se enmarcaban dentro del proyecto de guerra contra las FARC, la cual era presentada, con el aval del 11 de septiembre de 2001, como un grupo terrorista al margen de la ley, extirpando de connotaciones políticas a la lucha histórica de la guerrilla. El marco geopolítico jugaba un rol central en este nuevo escenario de guerra frontal contra este grupo armado, que también afectaba, aunque en menor medida como veremos más tarde, a los grupos paramilitares.

Los ejes capitales de la PSD apuntaban, a partir del despliegue de la fuerza del Estado sobre la totalidad del territorio, a la protección de las fronteras y a la eliminación del comercio de las drogas ilícitas, fuente de la que bebían los grupos ilegales de las FARC y el paramilitarismo. El gobierno, en ese sentido, propuso denominarlas “narcoguerrilla” o “narcoterrorismo”, con la finalidad de igualar las acciones guerrilleras con el narcotráfico y el terrorismo internacional. De esa forma, Uribe obtenía importantes réditos políticos y una legitimación social que le sirvió para incrementar su imagen en el país. Esta simpatía social por un presidente que se enfrentaba a la guerrilla y a su fuente de financiamiento, en pos de la defensa de las instituciones y de la seguridad pública, le permitía comenzar su gobierno con un importante RP como era el apoyo popular/ ciudadano. Con la implementación, el gobierno pudo cumplir dos importantes objetivos: por un lado, aumentar la capacidad coactiva y la legitimidad del propio Estado al controlar mayor territorio nacional y mejorar con ello los niveles de seguridad de los ciudadanos; por el otro, golpear a las fuentes más importantes de financiación de los grupos armados irregulares, “cambiando el discurso en el sentido de considerar que no existe un conflicto interno armado, sino la presencia de ‘grupos terroristas’ que atacan a la sociedad y el Estado”²¹². Es decir, los beneficios sociales subyacentes se dirigían a extender la legitimidad del poder del Estado con la

²¹¹ Según un estudio de Pecauc (2008: 111), en el año 2002 existían 172 municipios que carecían de presencia militar como consecuencia de los repetidos ataques contra sus instalaciones, 12 alcaldes y 60 concejales asesinados y 322 pedían ser relevados de sus puestos.

²¹² Vargas Velásquez (2005: 90).

finalidad de controlar las rutas (y con ello el derecho a circular de sus habitantes) y a liquidar de raíz el tránsito de la droga por el territorio colombiano²¹³.

Desde allí que el gobierno planteara desde su propia génesis el propósito de implantar el orden social como una condición necesaria para poder avanzar con un proyecto económico, político y social. Así se expresaba Uribe al respecto al precisar esta estrategia gubernamental: “Defino la política de seguridad democrática como la brega por recuperar el orden, que es presupuesto ineludible para la vigencia real de las libertades”²¹⁴. En la misma dirección iba el siguiente discurso brindado por el presidente a escasos tres meses de asunción: “Después de décadas de difusión de cierta ideología anarquista, que predicaba el debilitamiento y marchitamiento del monopolio de la fuerza del Estado, la sociedad colombiana está hoy más convencida que nunca de que la libertad solo es posible una vez establecido el orden. Que la vida sin el monopolio de la fuerza por parte del Estado es, como predica la teoría política, solitaria, triste, sórdida, bestial y breve”²¹⁵.

Para poder materializarse, este proceso de recuperación territorial del Estado al que aspiraba el gobierno de Uribe, requería de la modernización y el aumento de la cantidad de miembros en las Fuerzas Armadas. En ese sentido, durante sus dos gobiernos el primer mandatario priorizó el aumento del presupuesto militar y con ello la renovación de equipamiento y la innovación en el campo de la inteligencia, que resultó fundamental para provocar derrotas significativas a la guerrilla en los años siguientes. Según Pecaut (2003: 76), la modernización de la fuerza pública comenzó bajo el gobierno de Pastrana con un aumento sustancial del presupuesto militar, que permitió multiplicar los efectivos profesionales. Sin embargo, fue durante la administración Uribe que la misma prosiguió “creando nuevas unidades de elite especializadas y móviles, implementando la fuerza pública en los 200 municipios donde estaba ausente, fijando metas. Esta política se tradujo

²¹³ Según Uribe: “Cuando empezamos la política de seguridad fuimos conscientes de que no podíamos llegar a las regiones solamente con los soldados. Entonces hemos tenido algo que se llama acompañamiento integral, acción integral. Es llegar con los soldados pero también con la educación, con el mejoramiento de la energía eléctrica, del acueducto, con las familias en acción, con los programas nutricionales, con el microcrédito” (Filmus, 2010: 103- 104).

²¹⁴ Rodríguez Carrera (2009: 22).

²¹⁵ *Ibid.*, (2009: 22). En la misma dirección, Uribe insistía en que “recuperar el orden y la seguridad –requisito cardinal para la vigencia real de las libertades y los derechos humanos- es preocupación sustancial de este Gobierno. Esto es lo que se requiere para que todos los colombianos puedan disfrutar de sus derechos, para que el Estado proteja a todos por igual y sin ninguna distinción [...] Este va a ser un esfuerzo de todo el Estado, de todos los colombianos [...] Del imperio de la ley dependen el desarrollo y la prosperidad económica” (Rodríguez Carrera, 2009: 33).

enseguida por medidas de destrucción a gran escala de los cultivos de coca y de amapola, con la ayuda de compañías privadas norteamericanas y con el propósito de lograr su eliminación total en cuatro años”²¹⁶.

La disminución de soldados regulares y el incremento de soldados profesionales ha significado, en el mismo sentido, un mayor aumento del presupuesto en gastos de personal. De esta inversión da cuenta el estudio de Vargas Velásquez y García Pinzón (2008: 46) cuando señala que entre los años 2002 y 2005 se sustituyeron 30.000 soldados regulares por profesionales, lo que implicó un gasto mayor, ya que la inversión en un soldado regular implicaba 10 millones de pesos por año (alrededor de 5.000 dólares), en tanto que un soldado profesional suponía un costo de alrededor de 20 millones de pesos (alrededor de 10.000 dólares) para el mismo período. Es decir, esta inversión en la fuerza pública abarcaba tanto la infraestructura, el armamento como la logística y los recursos humanos.

La creación de “zonas de rehabilitación y consolidación del orden público” en algunas regiones del país operaba en la misma lógica de “empoderar” al núcleo castrense, ya que permitió continuar la lucha contra los violentos con un paraguas legal. En el marco del “Estado de conmoción interior”, Uribe, por intermedio del decreto 2002, apoyó el establecimiento de esas zonas con la finalidad de imponer estrictas medidas de control y vigilancia en manos militares. En los hechos, en esas zonas el poder civil quedaba supeditado al militar, lo que constituía otro ejemplo de la estrategia del presidente de dotar de herramientas legales a uno de sus principales recursos de poder institucional, como eran las Fuerzas Armadas.

Estas polémicas decisiones le brindaron a Uribe un apoyo importante de los ciudadanos²¹⁷ (RP de apoyo popular/ ciudadano), y la crítica por parte de otros sectores, fundamentalmente los vinculados a los derechos humanos por el abuso que, a la postre, cometían las fuerzas militares en ese escenario. Es decir, el aliento ciudadano provenía de la incapacidad de vastos sectores sociales de poder circular libremente a lo largo del territorio y de encontrarse sometidos a la incertidumbre que provocaba el contexto de

²¹⁶ Pecaute (2003: 76).

²¹⁷ Para el año 2003, Uribe tenía, según Latinobarómetro de 2011, el 64% de apoyo popular. En línea en: <<http://es.scribd.com/doc/70688598/INFORME-DE-LATINOBAROMETRO-2011>>.

inseguridad, en tanto que la oposición cuestionaba esta estrategia presidencial porque entendía que lesionaba los derechos constitucionales.

En consonancia con la PSD y la modernización de las Fuerzas Armadas, el otro eje al que apostó la política de gobierno fue el involucramiento de la sociedad en la lucha contra la guerrilla. En este sentido, Uribe, reeditando la experiencia de su gobernación en Antioquia, apostó al proyecto de “Estado Comunitario” (RP de estrategia política) como mecanismo para encauzar la participación ciudadana como nervio cooperativo vital frente a la insurgencia guerrillera. El primer mandatario, en este sentido, bregaba por “la cooperación voluntaria y patriótica” de los ciudadanos con el fin de contribuir, mediante el suministro de información relacionada con la guerrilla, a la prevención del terrorismo y la delincuencia. El compromiso ciudadano de apoyar la lucha del Estado frente a los grupos insurgentes era alimentado por el presidente a partir de un llamado: “La gente tiene que romper vínculos y romper indiferencia.... El apoyo ciudadano a la fuerza pública es garantía para la fuerza pública no sentirse aislada en los cuarteles sino apoyada por una ciudadanía”²¹⁸. Desde la esfera gubernamental se fomentaba este accionar y se atizaba a la población acerca de las bondades de participar: “Si 44 millones de colombianos acompañan al Estado y se sienten apoyados por él, fracasará el terrorismo... [Habrá] recompensas para aquellas personas que, como informantes de los organismos de seguridad del Estado, den a conocer información que conduzca a la prevención de atentados terroristas o a la captura de los integrantes de las organizaciones armadas ilegales”²¹⁹.

El llamado a la sociedad para acompañar, de manera directa, el proyecto político uribista, se convirtió en otro de los aciertos del primer mandatario y generó una corriente de opinión favorable a su figura. En esa línea se expresaba la periodista Paola Holguín al resaltar que “bajo el concepto de Estado Comunitario, generó una forma de administración pública que abrió espacios a la comunidad para participar en el diseño, implementación y evaluación de las políticas públicas de seguridad. La permanente rendición de cuentas y el contacto diario con los colombianos fueron claves para entender su popularidad”²²⁰. En consecuencia, el presidente sostenía la necesidad del involucramiento popular para vencer a

²¹⁸ Rodríguez Carrera (2009: 23).

²¹⁹ Galindo Hernández (2007: 153). En ese sentido, insistía Uribe en que “el gobierno formalizó un esquema para que los civiles participen de la guerra en una red de informantes y civiles armados” (Ramírez Niño, 2011: 42).

²²⁰ Paola Holguín. Entrevista con el autor.

la guerrilla como una de las aristas que acompañarían al proceso de modernización militar y la recuperación del monopolio de la legalidad estatal, conformando un trípode indivisible que aseguraría la disolución de los grupos ilegales en territorio colombiano.

Para Uribe, la implementación del Estado Comunitario no sólo implicaba la guerra frontal contra la guerrilla, sino también un modo de relación entre el Estado y la ciudadanía que el primer mandatario definía como “un esquema de Estado al servicio del pueblo y no de la politiquería, donde se busca que los recursos públicos lleguen a la comunidad y no a los grupos de interés. Es todo lo contrario al estado burocrático y al estado neoliberal... Nosotros buscamos siempre el balance entre democracia representativa y participativa, y gobernamos bajo el modelo de Estado Comunitario, que es un esquema de Gobierno gerencial, descentralizado y participativo. Gerencial porque administra lo público con eficacia, eficiencia, transparencia, por resultados y rindiendo cuentas. Descentralizado, porque es administrativamente más cercano al ciudadano, delegando funciones y competencias en el orden local y eliminando duplicidades. Participativo, porque tiene en cuenta las demandas de la comunidad y la involucra en el diseño, implementación y evaluación de las políticas públicas, permitiéndonos construir mayor legitimidad y gobernabilidad”²²¹.

El primer año de aplicación de la política de Seguridad Democrática no tuvo los resultados esperados. La capacidad operativa de la guerrilla continuó golpeando sobre las fuerzas de seguridad. Los atentados con coches bomba perpetrados en Bogotá y Neiva el 7 y el 14 de febrero de 2003, en los que fueron asesinadas 53 personas, mostraron que la guerrilla era capaz de mantener su poderío militar en las ciudades, aunque significaba un importante retroceso desde una mirada evolutiva comparada con los años anteriores. Es decir, a pesar de que se mantenía su capacidad de operación, el repliegue de la guerrilla por el avance de las Fuerzas Armadas era innegable. A partir de la asunción al gobierno de Uribe, las FARC se encontrarán sometidas a un acoso continuado y su táctica será confinarse hacia sus seguros territorios.

²²¹ Álvaro Uribe. Entrevista con el autor. Y agregaba: “Sobre el vínculo con la sociedad, como ya dije, nuestro gobierno trabajó por la consolidación del Estado Comunitario, incentivando la participación ciudadana a través de todas las formas posibles y legítimas de organización -gremios, sindicatos, agrupaciones religiosas, organizaciones no gubernamentales, o asociaciones en general- porque esto es lo único que garantiza que los recursos lleguen directamente a la gente, que se construya equidad, que haya transparencia y que se pueda asignar responsabilidad política a quienes fallen en el proceso de conducción del Estado nacional y local”.

La violencia de las FARC golpeó de cerca al presidente el 5 de mayo de 2003, cuando fueron asesinados el gobernador del departamento de Antioquia, Guillermo Gaviria Correa, el ex gobernador y ex ministro de Defensa, Gilberto Etcheverry Mejía y ocho oficiales y suboficiales compañeros de cautiverio que desde hacía un año se encontraban en manos de la guerrilla. El intento de rescate por parte de la fuerza pública culminó en el asesinato de los secuestrados y conminó a la administración Uribe a modificar, en el futuro, la estrategia de recuperación de rehenes por intermedio de la fuerza. El golpe había sido duro para el presidente, ya que se trataba de políticos históricos de su provincia natal y el arriesgado plan de rescate significó una carta que jugaba el presidente a menos de un año de la inauguración de su gobierno.

Al enterarse de la noticia, Uribe exclamó: “Nos vamos para Medellín; vamos a decirle la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad al pueblo colombiano y se la vamos a decir hoy”²²². Durante esa tarde, y luego de varias horas sin noticias del presidente, Uribe finalmente dio una conferencia de prensa desde el Aeropuerto de Medellín. Allí se hizo cargo de la responsabilidad política del operativo fallido, lo que le generó una corriente de simpatía por parte de la opinión pública, que veía a un primer mandatario que mostraba firmeza en la lucha contra el terrorismo y que no huía de la responsabilidad personal con la malograda operación militar²²³. En este sentido, el buen manejo de los medios de comunicación, para transformar las crisis en situaciones de éxito (Duzán, 2004: 123) se convirtió durante sus dos presidencias en un RP (de estrategia política) a su favor.

El 17 de agosto de 2003 las FARC intentaron derribar el helicóptero que transportaba al presidente hacia la localidad antioqueña de Granada mediante ráfagas de ametralladora disparadas desde las montañas, en una nueva intentona que no hizo más que fortalecer y aumentar la popularidad de Uribe²²⁴. Es decir, lejos de amilanar la estrategia

²²² Duzán (2004: 112).

²²³ El presidente Uribe se expresaba de la siguiente manera: “Tan pronto conocimos el asesinato de tantos y tan apreciados colombianos tomamos la decisión de proceder de la siguiente manera: Primero, que se le diga toda la verdad al país y de una vez. Nada de verdades a traguito. Segundo, que tengamos todo el respeto por la crítica. Y tercero que mantengamos toda la firmeza y convoquemos a los colombianos para templarnos más en la fortaleza necesaria para derrotar al terrorismo que tanto maltrato le ha causado a nuestra patria” (Botero Campuzano, 2008: 60). Según Jaime Bermúdez, “el asesinato del ex gobernador, del que Uribe pagó un costo político importante, se trató de uno de los momentos más difíciles del primer gobierno” (Jaime Bermúdez. Entrevista con el autor).

²²⁴ A un año de la asunción, Uribe contaba, según una encuesta de la empresa Gallup, con una opinión favorable del 70% tanto en aceptación como en la aprobación del manejo en temas como la corrupción, el narcotráfico y la guerrilla (Vélez López, 2007: 82).

de guerra frontal a las FARC, el presidente aumentaba sus índices de apoyo popular/ ciudadana a la cruzada (RP) y continuaba su prédica militarista. Como se ha observado en la primera parte, la guerrilla, a pesar de mantener un importante grado de iniciativa militar, carecía de un apoyo similar en el ámbito de la opinión pública, y Uribe aprovechó este recurso para hostigar a estos grupos alineando su lucha histórica con el sentir de una gran parte de la sociedad colombiana.

El primer año de gobierno no fue para Uribe rico en resultados. La capacidad operativa de las FARC, a pesar de sus derrotas en el campo de la opinión pública, continuaba siendo un poder de fuego importante para vetar las transformaciones políticas del presidente. Aún no se encontraban las condiciones propicias para avanzar en este campo, como sí sucedería luego del año siguiente en el cual Uribe pudo demostrar resultados más alentadores. De acuerdo al presidente “el primer año de nuestra presidencia fue como una pelea de boxeo: lanzábamos dos golpes, y los narcoterroristas respondían con otro. Era claro que si queríamos avanzar, necesitaríamos más ayuda material”²²⁵.

Para el último trimestre de 2003, el presidente encaró otra de sus luchas por la oxigenación del sistema político colombiano llamando a un referéndum que tenía por misión modificar aspectos centrales de la arquitectura institucional del país. La guerra frente a “la politiquería y la corrupción” se ponía a prueba en octubre de 2003, y como se observará en el siguiente ítem, la derrota en el campo electoral se convertirá en victoria en el de la opinión pública. Al igual que en su estrategia de guerra frontal frente a las FARC, pobre aún en resultados, Uribe concentró sus esfuerzos en esta batalla, y a pesar de la derrota posterior se vio favorecido con un aumento de los recursos de poder de apoyo popular/ ciudadano.

Resumiendo, Uribe iniciaba su mandato presidencial proponiendo una serie de reformas constitucionales con la finalidad de dotar de mayores herramientas a las fuerzas de seguridad en su lucha contra la guerrilla (recurso de estrategia política). La unificación de ministerios (en especial los de seguridad y justicia), las modificaciones al “estado de excepción”, la aplicación del “Estado de conmoción interna” configuraban los primeros peldaños de una reforma en el interior de las instituciones que tenía como principal

²²⁵ Uribe (2012: 181).

propósito otorgar mayores poderes al Ejecutivo y a las Fuerzas Armadas para actuar en forma veloz frente a la inseguridad que imperaba en el país.

Los recursos de poder del presidente en esta etapa se sostenían en el fuerte apoyo popular/ ciudadano y en las Fuerzas Armadas. A estos RP se sumaban, como se indicó en el primer capítulo, el de los medios masivos de comunicación y el de los empresarios (RP social), que veían en el presidente a un “duro” al que debían patrocinar en sus acciones militares frente a las FARC. Durante este período, Uribe consiguió un importante sustento popular para su política de “Seguridad Democrática” (recurso de estrategia política), a la par que el grupo guerrillero siguió asestando golpes militares sin una traducción directa en el plano del apoyo ciudadano a sus iniciativas. En ese sentido, el presidente mantuvo intacto su índice de popularidad (recurso de apoyo popular/ ciudadano) y generó un proceso de simpatía popular en base a su particular estilo de conducción (recurso de estrategia política).

4.2. Un presidente peculiar en la historia colombiana: la construcción de un LP innovador

En este ítem se analizan el estilo de gobierno de Uribe como RP de estrategia política (comunicación y personalidad política) a partir de su actuación en los Concejos Comunitarios (CC), y las dos elecciones del periodo que lo tienen como protagonista. En este sentido, se observa, en primer lugar, de qué manera el presidente genera una estructura política que lo relaciona con la ciudadanía sin mediaciones partidarias, como son los CC, y cómo la dinámica de funcionamiento de los mismos permite advertir un estilo de liderazgo particular. En segundo lugar, se analizan los resultados electorales del referéndum de octubre de 2003 y de las elecciones regionales del mismo año.

La guerra a la politiquería y la corrupción. ¿Una derrota estratégica?

Los altos índices de popularidad del presidente Uribe como RP (apoyo popular/ ciudadano), sin lugar a dudas, provenían de su personalidad y de su particular estilo de gobierno algo nunca visto en los anteriores mandatarios colombianos. Según Pecaut (2003: 79), este “nuevo estilo” como RP de estrategia política (personalidad política) se inscribía dentro de una lógica que descansaba en la recuperación de la soberanía del Estado caracterizada por cierta “prisa”. La mínima delegación de atribuciones, la intervención directa en los asuntos públicos en las diferentes esferas gubernamentales, un meticuloso seguimiento sobre el curso de sus decisiones y de su ejecución eran algunas de las características principales de la gestión de gobierno de Uribe. Este ritmo administrativo vertiginoso y obsesivo lo presentaban como un presidente atípico para la historia colombiana. Su consigna “trabajar, trabajar y trabajar”²²⁶ explicaba, en buena parte según Galindo Hernández (2007:152), el hecho de que su popularidad haya llegado a niveles que oscilaron entre un 60% y un 80% (como veremos más tarde), a pesar de las polémicas que pudiesen generar sus políticas de seguridad democrática y de reinserción de los paramilitares.

²²⁶ Según Ángela Pinzón, como presidente Uribe se tomaba una semana de vacaciones al año, pero inclusive durante la misma, podía hacer una conferencia de prensa desde su finca. Un 24 de diciembre era capaz de trabajar hasta las 6 de la tarde. (Ángela Pinzón. Entrevista con el autor).

El estilo particular de Uribe, a su vez, se encontraba presente en su aparato discursivo. El lenguaje empleado tanto en sus discursos políticos oficiales como en el trato directo con la población, se caracterizó por el uso de una locución fuerte contra los grupos armados y de un carácter paternalista²²⁷ con los sectores de la población más vulnerables. El uso reiterado de diminutivos y de calificativos despectivos “ha logrado generar una mayor aceptación de la figura del presidente en la medida en que se presenta como un mandatario cercano al sentir de las necesidades y del ethos del pueblo colombiano”²²⁸.

Esto se advierte en los Concejos Comunitarios (CC), uno de los principales recursos de poder de estrategia política (comunicacional) ejercidos por el presidente: durante sus gestiones de gobierno, una vez por semana (en general los días sábados) Uribe se presentaba en forma directa y sin mediaciones frente a la comunidad. En el despliegue del “Estado Comunitario”, los CC ocupaban un lugar central en su estrategia de acercamiento a la sociedad. Estos espacios fueron ideados cuando Uribe era gobernador de Antioquia y se plasmaron a nivel nacional en el primer Consejo de su gobierno presidencial en la ciudad de Pasto, en el departamento del Nariño, a escasos tres días de la asunción.

El objetivo central de estos eventos era que el primer mandatario pudiera conocer, de primera mano, las principales demandas, quejas y peticiones de los habitantes de cada una de las ciudades que visitaba por lo general en compañía de algunos de sus ministros, el gobernador, el alcalde, la autoridad eclesiástica de la región y de las fuerzas de seguridad como los comandantes del Ejército y de la Policía. Allí el presidente se movía como un pez en el agua y exhibía lo que él denominaba “capacidad de manejo y liderazgo” (Duzán, 2004: 86). A su vez, los CC cumplían un papel vital en el propósito del presidente de unificar a “las distintas partes del territorio nacional, con el fin de que áreas periféricas tuvieran una noción de la existencia del Estado”²²⁹. En ese sentido, el presidente pretendía, con esa estrategia, asegurar que los arreglos institucionales comenzaran con la presencia

²²⁷ La excelente biografía de María Jimena Duzán (2004) le dedica un apartado al “Uribe patriarcal”. Allí sostiene que ese estilo queda marcado en su relación con los pobres: “Si bien se interesa por sus trabajadores y vela por que tengan lo necesario, no pretende mayores cambios” Además “Uribe tiende más a persuadir a los pobres de que son unos privilegiados porque no son unos miserables, antes que a propender a una equitativa distribución del ingreso” Por último, Duzán advierte que “su atuendo, el sombrero y la ruana terciada con que los administradores de fincas pasan revista al terreno de las propiedades, ya tan característica en él cuando va por todo el país, reafirma la simbología definitivamente agraria, y hasta cierto punto premoderna, con que el presidente enarbola el arte de gobernar” (Duzán, 2004: 74- 75).

²²⁸ Galindo Hernández (2007: 157).

²²⁹ Ramírez Niño (2011: 47).

misma del Estado a lo largo y ancho del país y con ello garantizar que el brazo estatal conectara el poder central con el resto de los pueblos.

Durante las largas horas (algunos podían durar más de doce) en las que desarrollaban los CC, el presidente tomaba medidas, comprometía a los funcionarios locales y respondía una a una las preguntas del público en tono coloquial. En ese marco, según la periodista Ángela Pinzón, el presidente Uribe “le daba la palabra a todo el mundo (nunca se mantenía un orden). Había un protocolo pero nunca se cumplía... La idea de los CC era solucionar cualquier tema, ya sea menor o de entrecasa. Desde el arreglo de una vereda, hasta una sequía... Y podía finalizar abruptamente, ya sea por la inseguridad del lugar o por otro tema de seguridad. Iba siempre, aunque sea dos horitas, salvo si ocurriese un desastre natural o desorden público, que podía retirarse”²³⁰. Por otro lado, la televisación del evento por el canal institucional público (también lo hacía la Radio Nacional) le aseguraba al presidente la llegada a toda la población lo que producía un espectáculo que restablecía “un vínculo de confianza entre gobernante y ciudadanos, importante en medio de un conflicto como el que vive Colombia y al mismo tiempo, que debilitaba partidos e instituciones en favor de la figura presidencial”²³¹.

Durante estos encuentros, de los que participaban mayormente los sectores sociales más vulnerables, Uribe se encargaba en forma personal de repartir los “chequecitos” para los microcréditos y de fustigar o aleccionar a sus ministros o a los gobernantes locales por sus acciones o por sus faltas, logrando crear un aura que unía las necesidades del pueblo colombiano y un mandatario atento y activo frente a la problemática regional y social. En ese sentido, se trataba “del presidente de la República diciéndole a doña Rosa ya le arreglo el problema de su lavarropas. Era hacerle sentir al pueblo que él era uno más de ellos... Daba datos de todo y a veces hacía anuncios de gobierno. Podía comunicar cosas sobre las FARC. En muchos CC se dieron noticias importantes”²³². En ese sentido, el propio presidente, consultado por el autor de esta investigación acerca de la importancia de los CC en su política comunicacional, respondía: “Nuestro interlocutor a lo largo del gobierno, fue

²³⁰ Ángela Pinzón. Entrevista con el autor.

²³¹ Restrepo (2005: 54). En el mismo sentido se expresaba Ramírez Niño (2011: 85): “Los consejos comunitarios fueron para Álvaro Uribe el sello específico que su gobierno estableció en su relación con las clases populares. Rompieron el esquema de un gobierno central que tomaba sus decisiones desde la capital del país, rodeado del gabinete y de puerta cerrada hacia el pueblo”.

²³² Ángela María Pinzón. Entrevista con el autor.

el pueblo colombiano, con quien mantuvimos un diálogo permanente y positivo. Muestra de ello fueron los más de 300 Consejos Comunitarios e igual número de Consejos de Seguridad, además de las reuniones sectoriales, con gremios y sindicalistas”²³³.

En palabras de Galindo Hernández (2007: 157), el presidente se hacía cargo, a título personal, de los reclamos y demandas realizados por los diferentes sectores sociales en estos CC, consolidando así la imagen de un presidente que trabajaba sin descanso y que era capaz de asumir todos los frentes. En el mismo sentido, Jaime Bermúdez sostenía que “las jornadas de trabajo del presidente eran incansables, sudaba la camiseta como decimos acá. Además su cercanía con la gente la utilizó mucho para conocer de primera mano sus problemas. Su gestión por resultados implicó una nueva metodología. Cuando había crisis el ponía la cara, el siempre asumía la responsabilidad”²³⁴. Para la media de los colombianos, esa imagen contrastaba con “la corrupción y la politiquería” que había gobernado al país en los años anteriores y a las que Uribe tenía reservadas sus próximas acciones.

Desde el inicio de su mandato, y cumpliendo con la promesa electoral de luchar contra la corrupción política, Uribe llamó a un referéndum popular (recurso de estrategia política) con el fin de realizar modificaciones en el sistema político colombiano. A partir de 18 preguntas que auscultaban a la población sobre diversos temas relativos al funcionamiento de las instituciones gubernamentales, el presidente intentó aplastar lo que consideraba los “peores males de la práctica política”. El referéndum se realizaría a escasos días de las elecciones regionales para cargos ejecutivos departamentales, legislativos provinciales y locales, y constituía una apuesta fuerte del presidente para modificar un diseño institucional antiguo y afincado en el sistema político durante décadas.

Debido a la tenaz oposición de los parlamentarios de las diferentes bancadas, que veían en el referéndum un ataque hacia dicho órgano de representación y a sus propios intereses corporativos, el presidente debió reformular algunas de las preguntas originales. En ese sentido, y en vista a obtener el mayor número de voluntades que le garantizara el triunfo en la totalidad de las preguntas, el primer mandatario terminó sacrificando los principales puntos de su proyecto inicial (como la reducción del tamaño del Congreso, entre

²³³ Álvaro Uribe. Entrevista con el autor.

²³⁴ Jaime Bermúdez. Entrevista con el autor.

otros) a cambio de incorporar cuestiones ligadas al congelamiento del gasto público que permitirían abordar algunos problemas estructurales de la economía colombiana.

El apoyo empresarial, otro de los recursos de poder sociales con los que contó el presidente desde el inicio de su primer mandato, se hizo presente, como así también el los principales medios de comunicación²³⁵, que apostaron fuertemente por la aprobación del mismo. Es decir, los apoyos provenían desde afuera del propio recinto legislativo y partidario, y la oposición procedía de la mayoría de los partidos políticos parlamentarios. Sin embargo, a pesar de los apoyos obtenidos, los cambios realizados a las preguntas del referéndum atentaron contra las posibilidades concretas de aprobación del mismo. Según Jaime Bermúdez, “cuando Uribe comienza el proceso del referéndum, generó mucha tensión con el parlamento. A pesar de que más tarde acordó con el legislativo fue un desastre lo que salió. Además, como las preguntas dependían del Padrón y el censo no estaba depurado (aparecían personas fallecidas, militares, etc.) todo resultó complicado”²³⁶.

En ese marco, lo que había motorizado en un principio el interés popular (una reforma que terminara de raíz con los “males” de la clase política tradicional) de a poco se fue apagando, y con el ello, las chances de que el referéndum triunfara de forma holgada. Para obtener la aprobación, las 15 preguntas de la consulta (de las 18 propuestas a priori) debían obtener un mínimo de 6.267.443 de votos (el 25% del padrón electoral), convirtiéndose esa cifra en el umbral a alcanzar para poder ser aprobada²³⁷. Se trataba, sin dudas, de una barrera alta; superior, inclusive, a la cantidad de votos obtenidos por el mismo Uribe en la elección presidencial de mayo de 2002.

El resultado final del referéndum arrojó consecuencias agridulces para el presidente Uribe. A pesar de que triunfó en la totalidad de las preguntas, con porcentajes superiores al 90%, sólo en la primera pudo superar el umbral²³⁸. Esta pregunta²³⁹ apuntaba, en lo central,

²³⁵ Debe aclararse que los principales medios de comunicación en Colombia son propiedad de familias poderosas con intereses en variados rubros económicos. Según Becerra y Lacunza (2012: 121): “A los apellidos históricos de la prensa gráfica colombiana como Santos o Cano, y de medios audiovisuales, como Ardina Lulle y Santo Domingo, se sumaron en la última década capitales españoles y del mundo financiero”.

²³⁶ Jaime Bermúdez. Entrevista con el autor.

²³⁷ No alcanzaba que la pregunta fuese aprobada por mayoría absoluta si no se superaba el umbral de los 6.267.443 de los votos.

²³⁸ La pregunta fue aprobada por 6.293.803 de votos, es decir por un 93,3% de los votos afirmativos. Datos obtenidos en base a: <http://www.registraduria.gov.co/2003RE_escrut/e/vre0.htm?1>.

²³⁹ Esta pregunta estaba formulada de la siguiente manera: “El quinto inciso del artículo 122 de la Constitución Política quedará así: Sin perjuicio de las demás sanciones que establezca la ley, no podrán ser inscritos como candidatos a cargos de elección popular, ni elegidos, ni designados como servidores públicos,

a las cualidades que debían cumplir los candidatos para presentarse a cargos electivos. Se trataba de la pregunta más general y más laxa de todas las realizadas, por lo que no tuvo grandes inconvenientes para alcanzar el umbral requerido. Las otras 14 preguntas no alcanzaron el umbral mínimo, aunque el Sí fue ampliamente superior al No²⁴⁰.

La victoria en todas las preguntas no consiguió, sin embargo, el exigente porcentaje de votos, pero significó en los hechos un “triumfo moral” del primer mandatario, ya que logró instalar y movilizar adhesiones de un número importante de voluntades: Uribe quedó situado ante la opinión pública como un líder que se despegaba de la clase política tradicional (recurso de estrategia política de personalidad política). A su vez, este poder de movilización (recurso de apoyo popular/ ciudadano) se tornaba doblemente trascendental, ya que el referéndum no tenía carácter obligatorio y dependía de la voluntad de los votantes.

La oposición trabajó activamente por la abstención, que fue la que permitió que el referéndum no triunfara en todas sus preguntas. De todas maneras, y a pesar de tratarse de una derrota electoral para Uribe, la cantidad de votos obtenidos, que en su mayoría superaron los votos obtenidos un año antes en la elección presidencial²⁴¹, demostraba que la fortaleza del liderazgo del ex gobernador de Antioquia se mantenía intacta. Luego de un año de gestión, el presidente mantenía un grado de aceptación electoral importante, que a pesar del fracaso evidenciaba la capacidad de convocatoria que Uribe concitaba en la sociedad y reafirmaba uno de los principales recursos de poder presidencial.

A pesar de la gran performance electoral, el presidente no aceptó fácilmente su derrota, e intentó por todos los medios obtener una rectificación del resultado adjudicando errores en el empadronamiento electoral. La derrota en el referéndum, a pesar de agigantar la figura de Uribe, marcó un límite a sus ansias reformistas y lo conminó a modificar su estrategia política con el parlamento (de confrontación a negociación) para los años venideros.

ni celebrar personalmente, o por interpuesta persona, contratos con el Estado, quienes hayan sido condenados, en cualquier tiempo, por la comisión de delitos que afecten el patrimonio del Estado. Tampoco quien haya dado lugar, como servidor público, con su conducta dolosa o gravemente culposa, así calificada por sentencia judicial ejecutoriada, a que el Estado sea condenado a una reparación patrimonial, salvo que asuma con cargo a su patrimonio el valor del daño”.

²⁴⁰ Para obtener los datos finales de cada pregunta consultar en Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia en línea <http://www.registraduria.gov.co/2003RE_escrut/e/vre0.htm?1>.

²⁴¹ *Ibíd.*

Al día siguiente, como estaba estipulado, se realizaron las elecciones regionales de gobernador, alcalde y de los legislativos locales. Estos comicios, conviene aclararlo, fueron los primeros que se realizaron luego de la reforma electoral de mediados del año 2003²⁴². Estas modificaciones en la arena electoral fueron aprobadas mediante una reforma constitucional que apuntaba a fortalecer a los partidos políticos a partir de la implementación de tres institutos: las listas únicas, la alternativa del voto personalizado (voto preferente) y el umbral electoral. Con las listas únicas se establecía que los partidos políticos podían avalar una sola lista partidaria; con el voto preferente se instituía a los partidos a abrir la lista partidaria al elector, para que éste seleccionase el orden de los candidatos, y por último, el umbral que se establecía en el 2% para el senado y en las demás categorías, equivalía al 50% del cociente electoral²⁴³.

La idea central de estos cambios era intentar evitar los fenómenos de atomización partidaria y microempresas electorales (Cardozo y Hernández, 2006: 169) de las décadas anteriores a esta reforma, que por su flexibilidad condujeron a la multiplicación de partidos y a las escisiones internas en los mismos. Es decir, la crítica por elevación a la Constitución de 1991 que por su elasticidad para la formación de partidos (al reducir los requisitos de creación) permitió, y en algunos casos estimuló, este fenómeno. En este sentido, según Ramírez Peñaloza, “la preocupación central de la constituyente de 1991 no fue la institucionalización de los partidos sino la apertura política”²⁴⁴ que, lógicamente, tuvo como consecuencia la dispersión de las preferencias electorales, y con ello, la disminución del peso electoral de los partidos tradicionales.

Estas innovaciones en el ámbito electoral afectaban las estrategias de los partidos ya que, a partir de esta reforma, se encontraron compelidos a evitar la fragmentación interna en aras del triunfo en los cargos ejecutivos y en la representación política en los ámbitos colegiados. Los partidos que se beneficiaron con dicha reforma fueron, sin lugar a dudas, los tradicionales. Fue en esas estructuras partidarias donde ese proceso se desarrolló de manera asidua (el caso de Uribe también es hijo de ese fenómeno de división interna), y

²⁴² Esta reforma, conocida como Acto Legislativo 01, se aprobó en junio de 2003 tras varios debates en el Congreso e implicó la modificación de los artículos 107, 108, 109, 161, 258, 263, 264, 266, y 299 de la Constitución.

²⁴³ El cual, según corresponde, a su vez, al resultado de dividir el total de votos válidos emitidos para la elección sobre el número de escaños a proveer (López Jiménez, 2007: 73- 74).

²⁴⁴ Ramírez Peñaloza (2010: 26).

desde allí que el presidente contara para la aprobación de esta reforma del concurso de los Partidos Conservador y Liberal.

Las elecciones regionales trajeron resultados dispares para el gobierno. A pesar de que los candidatos del oficialismo triunfaron en la mayoría de los departamentos, la oposición también lo hizo en la alcaldía de Bogotá (el segundo cargo más importante del país) de la mano de Luis Eduardo Garzón, un ex dirigente sindical y líder de la alianza de izquierda legal, el Polo Democrático Independiente²⁴⁵. A su vez, los candidatos independientes y de izquierda opositores al presidente ganaron las alcaldías de Medellín, Cali, Barrancabermeja, Barranquilla, Bucaramanga y Pasto²⁴⁶.

El triunfo general de Uribe en estas elecciones, evidentemente, no implicaba un cheque en blanco para sus acciones de gobierno, ya que vino precedido por la derrota del referendo y acompañado de los triunfos opositores en las alcaldías mencionadas. En este sentido, el “huracán” Uribe sufrió los primeros percances electorales en un contexto de alta imagen pública que dejaron un mensaje nítido en cuanto a que dicho apoyo no era sinónimo de unanimismo (Alejo Vargas Velásquez, 2004: 94). Los partidos Liberal y Conservador triunfaron en sus terrenos tradicionales, pero no gravitaron en los centros políticos de la elección, en donde los candidatos independientes (en su mayoría uribistas) y de la izquierda democrática llevaron la delantera, mostrando que su declive electoral era una vía sin retorno que los años posteriores ratificarán.

La composición parlamentaria de apoyo al presidente Uribe estuvo integrada por un variopinto color partidario. Más allá del apoyo de los legisladores que confluían en torno a

²⁴⁵ El antecedente de la creación de la Alianza Polo Democrático Independiente fue el Frente Político y Social (FPS) fundado por distintas fuerzas provenientes de la izquierda democrática y de los movimientos sociales en el año 2000. Los éxitos en las elecciones parlamentarias de marzo de 2002 y el 6,16% obtenido por Garzón en las presidenciales del mismo año, alimentaron las posibilidades electorales de ese núcleo político ideológico. La reforma de 2003 permitió confluir en un frente electoral más numeroso y con grandes posibilidades de triunfo a nivel municipal. Para un recorrido histórico de la constitución del Polo Democrático Independiente, véase Rodríguez Gavarito César, Barrett Patrick y Chávez; Daniel (2007), “La nueva Izquierda en América Latina. Sus orígenes y trayectorias futura”, Buenos Aires, Norma.

²⁴⁶ Estas constituyen las primeras experiencias exitosas en el ámbito electoral de la izquierda colombiana. Los anteriores intentos fracasaron por su pobre desempeño electoral o porque fueron exterminados sus miembros como el caso del partido de las FARC, la Unión Patriótica (UP). La experiencia de la Alianza Democrática M-19 (los guerrilleros desmovilizados del M-19) fue particular, ya que experimentó un inicio muy promisorio en las elecciones constituyente de 1991 para luego evaporar su capital político hasta su desintegración. El debilitamiento de los partidos tradicionales dio lugar al avance de estas terceras fuerzas que sumado a la reforma electoral de 2003 que por intermedio de las listas únicas y el umbral favorecieron la unidad de estas fuerzas minúsculas convirtiéndolas en competitivas en la arena electoral.

“Primero Colombia” y de los aliados Cambio Radical (CR)²⁴⁷ y Patria Nueva (PN)²⁴⁸, ambos desprendimientos del PL, el presidente contó, para algunas leyes, con el apoyo de los parlamentarios de los partidos tradicionales liberal y conservador, en especial de este último²⁴⁹. Es decir, el apoyo legislativo del presidente no se estructuró a partir de una sólida bancada oficialista, sino que el sustento parlamentario provenía de acuerdos partidarios ad-hoc producto de la alta imagen positiva (RP de apoyo popular/ ciudadano) que tenía Uribe desde el inicio de su gestión. En este sentido, el primer mandatario usó su propio capital político para pasar de un primer momento de confrontación frente al parlamento, a otro sustentado en un esquema más negociador. El parlamento, por otra parte, acompañó al presidente en las principales leyes demandadas por el Ejecutivo, pero la composición orgánica de apoyo fue variando a lo largo de su primera presidencia. Es decir, los parlamentarios colombianos, producto de la ausencia de incentivos y sanciones para mantener la disciplina partidaria, negociaron con el ejecutivo las diferentes leyes y acompañaron, en muchos casos pragmáticamente, a un presidente con una alta imagen positiva y gran iniciativa política.

A partir de ese momento, y ante la evidencia de la derrota, Uribe comenzó a negociar con la clase política que meses antes había elegido como blanco predilecto de sus ataques. Luego de endilgarles ser el núcleo de la corrupción y el clientelismo, el primer mandatario se encaminaba a anudar acuerdos con el Congreso que le garantizaran la gobernabilidad. En este sentido, designó como nuevo ministro del interior y justicia a Sabas Pretelt de la Vega, en lugar del polémico dirigente conservador Fernando Londoño, a quien le pesaban casos de corrupción. El cambio implicó el advenimiento de un conciliador dirigente gremial, quien propuso un Acuerdo Político entre las distintas fuerzas para

²⁴⁷ Cambio Radical se fundó en 1998 y está dirigido por el senador Germán Vargas Lleras, nieto del presidente liberal Carlos Lleras Restrepo (1966-1970). Tiene nueve senadores y quince diputados (representantes).

²⁴⁸ El “Movimiento de Unidad Nacional Patria Nueva” (“Patria Nueva”) fue creado por el ex presidente liberal Julio César Turbay (1978-1982) y 40 ex ministros en agosto de 2004, como un derivado del Partido Liberal para apoyar la reelección del presidente Uribe.

²⁴⁹ Según Ramírez Peñaloza (2010), los acuerdos del presidente Uribe con el Partido Conservador se desarrollaron en distintos planos, ya que “estos acuerdos se vieron materializados, entre otros, con la Reforma Política del año 2003 y los nombramientos de conservadores en las carteras ministeriales e instituciones del Estado... en lo que se refiere a las coaliciones de nombramientos, las cuales son fundamentales a la hora de definir los miembros de comisiones, así como los puestos más importantes de organismos de control y cortes”.

concertar una agenda legislativa común que contemplara proyectos de reestructuración del sistema tributario, de reforma del sistema de pensiones, del estatuto antiterrorista y de la reforma al Código Penal, entre otros. Más tarde, este mismo esquema conciliador daría paso al proyecto de reforma constitucional para obtener un nuevo periodo presidencial (algo vedado, hasta ese momento, por la carta magna colombiana).

Recapitulando, en este ítem observamos cómo los Concejos Comunitarios (RP de estrategia política comunicacional) se convirtieron en una herramienta vital para el contacto directo entre el presidente y la sociedad. El primer mandatario consideró a los CC como el principal puntal en su lucha por devolverle al Estado su condición de fuerza monopólica en el territorio colombiano y un instrumento para acceder de primera mano a las demandas de los ciudadanos en los distintas partes del país.

Con el objetivo de transformar la relación entre el Estado y la sociedad, el presidente intentó desactivar, mediante un referéndum popular, lo que consideraba uno de los principales males del sistema: la “politiquería y la corrupción”. A pesar del resultado adverso en el plano cuantitativo, ya que la derrota electoral marcó límites al ansia reformista del presidente, el referendo permitió observar el poder de convocatoria del primer mandatario al lograr movilizar (RP de apoyo popular/ ciudadano) a más de seis millones de personas (más que los votos obtenidos un año atrás) a favor del cambio político. Al día siguiente del referéndum, se realizaron las elecciones regionales, en la que los candidatos de Uribe vencieron en la mayoría de los distritos, dotando de nuevos recursos de poder institucionales (en gobernadores, alcaldes y concejales) al presidente para poder continuar su gestión de gobierno a partir de uno de sus principales pilares como era la lucha frontal frente a la guerrilla.

4.3. El Recurso de poder de la PSD comienza a mostrar resultados

Este ítem se propone analizar los principales resultados del avance del Estado sobre los grupos ilegales de las FARC y las AUC. En relación con la guerrilla, se observa de qué forma el Estado colombiano se enfrentó a la problemática del secuestro, el intercambio de prisioneros y el acuerdo humanitario en el marco del Plan Patriota y de qué manera se incrementaron las acciones y los éxitos de la fuerza pública en ese contexto de avanzada del Estado. En relación a las AUC, se analiza el proceso de desmilitarización a través del plan de desarme y desmovilización paramilitar observando cómo se desarrolla y cuáles son las dificultades de su implementación.

La estrategia uribista en acción: Palos a la FARC, zanahoria a las AUC

A partir del año 2004, la PSD comenzó a dar sus frutos. En enero de ese año fue capturado Simón Trinidad (su verdadero nombre era Ricardo Palmera Pineda), el dirigente de mayor rango de la guerrilla detenido hasta entonces²⁵⁰, y un mes más tarde el alias Sonia, la jefa de finanzas del Bloque Sur de las FARC. Ambas acciones implicaban golpes militares sobre la guerrilla, especialmente en el trabajo de inteligencia y se dirigían al centro de gravedad de las FARC: su conducción política militar. Este objetivo se convertía en el pilar cardinal del Plan Patriota (PP) que descansaba, primordialmente, según Pecaú (2008: 127), en la caza de los principales dirigentes, incluidos los miembros del secretariado.

El PP, como complemento del Plan Colombia (que tenía como propósito la lucha contra las drogas), se inició en el año 2003 con la colaboración y coordinación del Comando Sur de los EEUU y tenía características eminentemente militares. El plan tuvo como centro de operaciones la zona sur del país, que era donde la guerrilla tenía, en mayor medida, consolidados sus territorios. En ese sentido, el PP, como antecedente inmediato del Plan Andino iniciado en el 2005, “negaba la existencia del conflicto armado interno y se implementó sobre la marcha, a medida que evolucionó la situación frente a las FARC, el eje de sus objetivos”²⁵¹. Dentro de la lógica de implementación de dicho plan estratégico, la

²⁵⁰ Con anterioridad a esa fecha, la captura más importante por parte de la fuerza pública fue la del comandante Rafael Rojas Zúñiga, entregado en abril de 2003.

²⁵¹ Leal Buitrago (2006: 12).

fuerza pública logró dismantelar varios de los frentes de las FARC en el noroccidente de Cundinamarca, tras cinco meses de actividades militares en la denominada Operación Libertad.

Luego de un año y medio de aplicación de la PSD empezaban a visualizarse resultados, aunque lejos se encontraba el gobierno de haber diezmado el poderío militar de la guerrilla. Sin embargo, la política de acoso permanente a la guerrilla implementada por el primer mandatario comenzaba a dar sus frutos en el terreno militar, y las FARC sentían el peso de la fuerza del Estado sobre sus propias líneas defensivas. Según Pecaú, “la creciente importancia de las acciones de hostigamiento y sabotaje revela a su manera, no obstante, la disminución del potencial ofensivo de las FARC. Por demás estas acciones tienden a concentrarse en 2004-2005 en zonas periféricas a lo largo de las fronteras con Venezuela y Ecuador y sobre la costa pacífica, y en general, en la zona de cultivos de coca y los corredores del narcotráfico”²⁵².

Los éxitos obtenidos por la fuerza militar en esos años, sumados a la estrategia oficial de persecución de sus principales dirigentes (RP), obligó a la guerrilla a replegarse hacia sus territorios para aferrarse a la estrategia del secuestro. El objetivo político de estas acciones, que no eran novedosas para la práctica política de las FARC, tenía apuntaba al intercambio de “prisioneros” y a la recuperación de combatientes. El repliegue guerrillero le permitió a Uribe mostrar que su política frente a la insurgencia comenzaba a mostrar resultados concretos e inmediatos. Según Jaime Bermúdez, “Uribe comenzó su gobierno con una propuesta que tenía amplio respaldo. El área de seguridad era un área sensible que la gente necesitaba solucionar pero que no veía que fuera fácil realizarlo. Sin embargo, su estilo de liderazgo, su convencimiento y los buenos resultados obtenidos de entrada dieron lugar a un apoyo sin precedentes en el país”²⁵³.

Durante los años de “distensión de Caguán” se efectivizaron algunos intercambios e inclusive la guerrilla liberó unilateralmente miembros de la fuerza pública. Sin embargo, a partir de la clausura de las negociaciones, la guerrilla amplió su estrategia de secuestros a los dirigentes políticos: incluso los ubicó en una categoría distintiva denominada “acuerdo

²⁵² Pecaú (2008: 127). Según Pizarro Leongómez (2004: 85), “Las FARC perdieron la iniciativa táctica y desde esa lejana fecha no han podido volver a llevar a cabo ninguna acción de significación estratégica. Por el contrario, ante la superioridad aérea, fluvial y terrestre de las FFAA se vieron obligadas a volver a la guerra de guerrillas, es decir, al método de lucha que han practicado durante cuatro décadas sin ningún éxito”.

²⁵³ Jaime Bermúdez. Entrevista con el autor.

oficial humanitario”, que en la mayoría de los casos, para efectivizarse, implicaba la desmilitarización de regiones. Es decir, se modificaba la estrategia guerrillera al pasar del “canje de prisioneros” al de despeje de territorios y acuerdos humanitarios con presencia internacional. La legitimidad internacional que le proveía a la guerrilla estas acciones (que en muchos casos implicaba el secuestro por décadas) era la de mantener en forma permanente contactos con organizaciones internacionales y líderes mundiales. De esta manera, las FARC continuaron teniendo durante esta etapa una presencia que, menguada en el campo militar pero significativa en el ámbito de la diplomacia con el extranjero, le dio visibilidad pública y obligó al poder ejecutivo a enhebrar una estrategia responsable ante esta problemática.

Frente a ello, Uribe se mantuvo incólume en su táctica de no negociar hasta que la guerrilla no cesara en esa práctica. La estrategia presidencial, que ya había sido la adoptada frente al fenómeno paramilitar, partía desde un esquema que ubicaba al cese de hostilidades como una condición *sine qua non* para comenzar la negociación. Es decir, el acuerdo humanitario para negociar la entrega de secuestrados, sin esta exigencia oficial, no ingresaba en el encuadre presidencial de guerra frente al terrorismo. La práctica del secuestro era duramente atacada por el primer mandatario, y desde esa intransigencia era imposible la posibilidad de negociación con la guerrilla. En este sentido se expresaba Uribe en octubre de 2004 ante el V Foro Iberoamericano: “Como candidato y en la semana de gobierno siempre dije: no hay acuerdo de canje, mientras no haya iniciación de un proceso de paz, que tiene que empezar con cese de hostilidades”. Y a la vez insistía que frente a la realización de este proceso “no puede haber zona desmilitarizada. Desmilitarizar zonas es darle un factor de desmotivación a la Fuerza Pública. En el pasado Colombia experimentó esos factores de desmotivación. Y un gobierno que ha ganado un nivel de gobernabilidad sobre la Fuerza Pública, no puede desmotivarla”²⁵⁴.

El proceso de paz, por lo tanto, debía estar precedido por el fin de la actividad militar por parte de las FARC. Unos meses más tarde, el líder antioqueño insistía en este encuadre al expresar que “las experiencias de ‘despeje’ de corta y larga duración en el

²⁵⁴ Botero Campuzano (2008: 79).

tiempo para facilitar liberaciones, todas, han sido malas, han fortalecido inmensamente al terrorismo y han debilitado la capacidad del estado para enfrentarlos”²⁵⁵.

La estrategia de Uribe frente a la guerrilla se tornaba nítida: enfrentamiento directo y frontal hasta su derrota. Los acuerdos de paz sólo serían posibles si la guerrilla resignaba su poder de fuego, lo que en los hechos implicaba que el conflicto continuaría, como en la realidad ocurrió, por varios años más. La lógica guerrillera de instalarse, por intermedio de los “acuerdos humanitarios”, como grupo combatiente a nivel internacional era negada por el presidente, que no se detendría en el jaqueo permanente a sus territorios y a sus principales dirigentes. En ese marco, Uribe intentó incorporar este conflicto con la guerrilla a la guerra global contra el terrorismo capitaneada por EEUU declarando el apoyo colombiano a la invasión de Irak, a contramano de la enorme movilización mundial que se oponía a la decisión unilateral del gobierno norteamericano y de sus pocos aliados. Esta decisión presidencial rompía la tradición nacional de seguir la línea de Naciones Unidas en sus políticas frente a los conflictos internacionales. Sin embargo, para el presidente, esta estrategia militar frente a las FARC no tenía un escenario fijo y se libraba en varios frentes.

Esta posición política de lucha frontal frente a la guerrilla era uno de los recursos de poder con los que contaba Uribe, por lo que la posibilidad de un convenio de paz (frente a una memoria social colectiva esquiva al mismo) debía realizarse mediante una previa desmilitarización guerrillera que mostrara la voluntad de este grupo ilegal por alcanzar acuerdos concretos mediante el cese de actividades. Los éxitos militares frente a la guerrilla de los años 2004 y 2005, a su vez, le indicaban al gobierno que el camino emprendido no se iba a desviar por senderos alternativos al oficial.

A principios de 2005, alias Simón Trinidad fue extraditado a los Estados Unidos luego de que las FARC se negaran a liberar a un grupo de secuestrados como prenda de cambio para evitar la entrega. La captura, en Caracas, de Rodrigo Granda, el canciller de las FARC en ese momento, se convirtió en otro duro golpe a la guerrilla y originó un delicado conflicto con Venezuela “que llevó a la suspensión del comercio entre los dos países, por decisión del presidente Chávez. El incidente fue solucionado por medios diplomáticos, en especial con la mediación del presidente de Cuba, Fidel Castro”²⁵⁶.

²⁵⁵ Botero Campuzano (2008: 85).

²⁵⁶ Leal Buitrago (2006: 20). La intervención del líder cubano fue descrita en detalle por el propio presidente colombiano en el libro de su autoría “No hay causa perdida” (Uribe: 2012: 207- 208).

Los golpes contra las FARC de aquellos años, no significaron, como se explicitó, la disminución de la capacidad militar de la guerrilla ni su derrota inminente por parte de la fuerza pública, ya que su resistencia armada se mantenía y continuaba operando²⁵⁷. Sin embargo, era indisimulable que los golpes oficiales a sus principales cabecillas y el apoyo brindado por parte de la ciudadanía al gobierno (dos recursos de poder presidencial de estrategia política y apoyo popular/ ciudadano) implicaron que la administración Uribe encaminaba en forma exitosa su plan de aniquilamiento del grupo insurgente. A su vez, la política basada en el reclutamiento de soldados campesinos, como la de estímulos a la desertión individual y las redes de informantes (recursos de poder de estrategia política), alimentó de triunfos oficiales a la lucha contrainsurgente.

Otro de los frentes en el que el presidente debió concentrar su atención fue en las Autodefensas Unidad de Colombia (AUC). Como se comentó en el apartado anterior, las AUC habían visto con simpatía la elección de Uribe a la primera magistratura, antes de su asunción habían declarado un unilateral cese de hostilidades. Luego de los combates del 29 de noviembre de 2002 entre los militares y la guerrilla en la Comuna 13 de Medellín, Carlos Castaño y Salvatore Mancuso Gómez, los máximos jefes de las AUC, decretaron una tregua indefinida. De todas formas, las divisiones que acaecían en el interior del paramilitarismo extendieron el tiempo de paz en varios años.

La jugada del paramilitarismo depositó la mirada en el presidente Uribe quien había sostenido que el cese de hostilidades era el requisito innegociable para entablar conversaciones con cualquiera de los grupos ilegales. Al mes de asumir, y en el que constituía el primer viaje oficial a los EEUU, Uribe debió sobrellevar un incómodo pedido de extradición de varios jefes paramilitares por narcotráfico a los que meses atrás se los había incluido, junto con las FARC en su lista de grupos terroristas. El gobierno, por lo

²⁵⁷La capacidad militar de las FARC se hacía sentir durante el año 2005 ya que “primero, debido a su ataque a una estación fluvial en el sur del Pacífico colombiano, que provocó la muerte a 15 infantes de marina y heridas a 25, y segundo, por un enfrentamiento con el Ejército en el Urabá antioqueño, que dejó un saldo de 17 militares muertos y ocho desaparecidos. Como en ocasiones anteriores, el general comandante de la Brigada en cuya jurisdicción se produjo el combate fue relevado de su cargo. Más tarde, en abril, las FARC volvieron a ser noticia con una emboscada al Ejército, en Arauca, que causó la muerte a 17 militares. Y en junio, en ataque a una base en Putumayo, frontera con Ecuador, esta guerrilla provocó la muerte a 19 militares, heridas a ocho y 19 desaparecidos, desatando además un incidente diplomático debido al comentario de autoridades de que la guerrilla había usado al vecino país para perpetrar el ataque. Sin duda, las FARC mostraron que quedaba mucho camino para su sometimiento” (Leal Buitrago, 2006: 21).

tanto, debió tomar decisiones en forma inmediata y se inició un proceso de desmilitarización de las AUC, quienes se comprometieron, en ese lapso, a no atacar contra la población civil. En consecuencia, el 23 de diciembre, a escasos tres meses de su asunción, Uribe creó una Comisión Exploratoria de Paz (recurso de estrategia política) para comenzar los contactos con la AUC. En la dirección designó al Alto Comisionado para la Paz, Luis Carlos Restrepo Ramírez.

Las conversaciones comenzaron el 22 de enero de 2003 en Santa Fe de Ralito, en el departamento de Córdoba, y se extendieron hasta el 15 de julio de ese año, en lo que fue considerada la “fase exploratoria” que daría lugar a la negociación oficial. El acuerdo se asentaba en que los paramilitares se comprometían a una desmovilización gradual de sus aproximadamente 10.000 hombres, desde finales del año 2003 hasta el 31 de diciembre 2005 como plazo máximo, y tomaban el compromiso de un cese de toda actividad militar y la inmediata suspensión de toda acción ilícita. El Estado, por otro lado, establecería “zonas de concentración”, a las cuales dotaría de garantías jurídicas temporales y procedería a enhebrar mecanismos de reinserción social de los ex combatientes. La verificación del proceso estaría a cargo de la OEA, como garante internacional. Asimismo, el gobierno de Uribe, debió reformar la ley que exigía un reconocimiento previo de un actor armado como actor político para poder ingresar en un proceso de negociación²⁵⁸.

La misteriosa desaparición de uno de los jefes de las AUC, Carlos Castaño²⁵⁹, a mediados de abril, no les impidió a los paramilitares suscribir el 13 de mayo de 2004 el “Acuerdo de Fátima” para la creación de la Zona de Ubicación Temporal, con una extensión de 369 km², en el Municipio de Tierralta, Córdoba. Los paramilitares habían consolidado su poder en los territorios de Córdoba, Urabá, Antioquia, Magdalena Medio, Sucre, Cesar, Bolívar, Cauca, Putumayo, Meta, Casanare y Caquetá, y tenían presencia en las ciudades, por lo que representaba para el Estado la recuperación de un gran espacio territorial en donde volvía a ejercer el monopolio de la fuerza. Es decir, para el gobierno de

²⁵⁸ El Artículo 3 (parágrafo 1) de la Ley 782 de 2002 dice, al respecto, lo siguiente: “De conformidad con las normas del Derecho Internacional Humanitario, y para los efectos de la presente ley, se entiende por grupo armado al margen de la ley aquel que, bajo la dirección de un mando responsable, ejerza sobre una parte del territorio un control tal que le permita realizar operaciones militares sostenidas y concertadas” (Pizarro Leongómez, 2004: 82).

²⁵⁹ Luego se supo que Castaño había sido asesinado por orden de su propio hermano, Vicente, reacio a la desmovilización. A su vez, la disposición del líder de las AUC de negociar con las autoridades antidroga de Estados Unidos fue otro de los elementos que disparó el conflicto interno y culminó con su asesinato.

Uribe se trataba de la adquisición de un RP institucional central como era el control estatal de una vasta geografía anteriormente en manos del paramilitarismo.

El proceso de desmovilización continuó en julio de 2004 con el diálogo oficial sobre los temas en conflicto: el desarme, la reinserción, la sustitución de los cultivos de coca y los aspectos judiciales que se abrirían luego de estas negociaciones. Sin lugar a dudas, el principal de ellos era el proceso de extradición que los tribunales norteamericanos exigían en su lucha contra el narcotráfico. Luego de los sucesos de septiembre de 2001, la prioridad para Washington fue la lucha contra el narcoterrorismo, y los paramilitares, como fenómeno ligado a ambas problemáticas, se convirtieron en un objetivo predilecto para la Casa Blanca.

Del “laboratorio de paz de Córdoba”, como se denominó a este proceso, participaron más de 600 invitados nacionales e internacionales, entre los que se encontraban líderes sindicales, diputados, senadores, periodistas y representantes de la iglesia, entre otros. Luego de la instalación de la “zona de ubicación” que el Estado cedía a los paramilitares para la desmovilización, los representantes de la AUC visitaron el Congreso.

Finalmente, el 25 de noviembre de 2004 depusieron las armas los 452 integrantes del Bloque Bananero al mando de Ever Veloza García, y también bajo su conducción, semanas más tarde, lo haría el Bloque Calima. El 10 de diciembre les siguieron Mancuso, jefe del Bloque Catatumbo y los 1.400 hombres a sus órdenes. Este último bloque era tal vez el que más violaciones al cese de hostilidades había cometido. Hasta esa fecha, Uribe había autorizado 240 extradiciones, más que todos sus antecesores juntos²⁶⁰.

En los siguientes meses, más grupos paramilitares continuaron el proceso de desarme y el debate giró en torno a las penas que debían cumplir por los crímenes y violaciones acaecidas en los años previos. La preocupación de las organizaciones de derechos humanos se orientó a limitar la impunidad que podrían generar los acuerdos entre las AUC y el gobierno. Es decir, estas organizaciones llamaban la atención sobre la ambigüedad de las normas fijadas, la labilidad existente entre la confesión de los delitos frente a la incapacidad de la justicia para acusar y procesar a los implicados en el tiempo estipulado, las penas leves que contemplaba, los indefinidos sitios de reclusión y el enorme

²⁶⁰ Leal Biutrago (2006: 19).

vacío en la reparación a las innumerables víctimas, que se convertían en algunos de los cuestionamientos de un arreglo institucional que contemplaba, por primera vez, algún tipo de castigo (Leal Buitrago, 2006: 21). Frente a esta incertidumbre que generaba una virtual impunidad ante la violación de los derechos humanos por parte de estos grupos, el Congreso aprobó el 22 de junio de 2005 el marco jurídico del proceso de desmovilización de los paramilitares conocida como “Ley de Justicia y Paz”. La misma instituía las penas máximas para los acusados de los delitos más graves que variaban entre los cinco y ocho años de prisión, siempre y cuando fueran los propios desmovilizados quienes confesaran los crímenes. Los requisitos estatuidos se convertían en la pantalla legal que evitaba que los paramilitares acusados fueran extraditados a los EEUU, lo que representaba el mayor peligro para los activistas de esta organización.

La desmovilización de las AUC era una de las respuestas a la modernización y fortalecimiento de las Fuerzas Armadas. El valor estratégico que tenían los paramilitares, como fuerza de choque frente al poder de la guerrilla, mermaba al compás del aumento de poder de armamento, logística, infraestructura y recursos humanos por parte de la fuerza pública. Por lo tanto, la presencia de la contrainsurgencia de la AUC en este escenario, se convertía más en un costo que en un beneficio. Por otro lado, la presencia de un gobierno que priorizaba la lucha frontal frente a las FARC y que contaba con generosos recursos de poder (financiero, institucional y de apoyo popular/ ciudadano) para dicho objetivo, vaciaba de contenido y razón de existencia a este grupo irregular. El aumento del control territorial por parte del Estado colombiano permitía a las AUC liberar las zonas bajo su égida y negociar la impunidad para los crímenes del pasado.

La desmovilización también operaba a nivel internacional y permitía al gobierno mostrar resultados en cuanto al aumento de la extensión de la legalidad estatal sobre regiones que anteriormente no dominaba. El aumento de recursos institucionales para el presidente Uribe, significaba un aliciente para que el propio primer mandatario corporizara este proceso de negociación que le brindaría, a la postre, un incremento significativo de recursos de poder. De acuerdo a Gustavo Duncan (2006), el mérito de esa política se encontraba en que “estos objetivos se alcanzaron sin que la Corte Constitucional hubiera dictado el fallo definitivo sobre la aplicación de la Ley de Justicia y Paz con los riesgos

implícitos que los magistrados endurecieran los parámetros de juzgamiento de los comandantes y combatientes de las autodefensas, tal como efectivamente sucedió”²⁶¹.

Como resultado de estas políticas frente a los grupos ilegales, Restrepo (2005: 55) indica que, de acuerdo con cifras oficiales, entre el inicio de la administración Uribe, en agosto de 2002, y el 31 de diciembre de 2003, “la fuerza pública capturó a más de 8.900 integrantes de los grupos subversivos. El número de bajas se incrementó en un 39%. Durante el mismo periodo se han desmovilizado 4.310 integrantes de los distintos grupos armados al margen de la ley. El número total de secuestros disminuyó en 22,4%. La estrategia de seguridad en las carreteras logró que el número de secuestros en retenes ilegales disminuya en 50%, y las víctimas de ese tipo de secuestro en 43%. En 2003, el número de desplazados disminuyó en 40% con respecto a 2002. Para febrero de ese año, la Policía los había regresado a los 157 municipios de donde tiempo atrás habían sido desalojados por la guerrilla”²⁶². Los secuestros practicados por estas organizaciones, a su vez, disminuyeron en forma evidente: de los 2.882 del año 2002, se redujeron a 2121 en 2003 y a 1.440 en el 2004 (Yamhure, 2009: 23). En cuanto a los “atentados terroristas”, los datos oficiales indicaban que disminuyeron de los 1.645 del año 2002 a los 724 del 2004. La misma fuente indica que durante esos dos primeros años de gobierno también disminuyó el número de asesinatos de políticos y sindicalistas (Ibíd.: 24- 25)²⁶³. El incremento de la fuerza militar, como así también el destino de dinero a fortalecer esa capacidad, aumentó durante esos años. El gasto militar que representaba para 2004 el 3,5% del PBI pasó a 2005 a ser del 5,3%²⁶⁴.

Sin embargo, debemos indicar que para octubre del 2004, ya bien entradas las negociaciones con el gobierno, las AUC aún contaban con 49 frentes en 382 de los 1.098 municipios del país, y en 26 de sus 32 departamentos. A su vez, el control de estos grupos sobre los departamentos de la costa atlántica en el norte y de los departamentos de la región

²⁶¹ Duncan (2006: 349). Sin embargo, dicho autor sopesa los resultados de las políticas de Uribe y de las negociaciones de Santa Fe de Ralito al afirmar que esto no implicaba la desaparición del fenómeno paramilitar, ya que dicho proceso “constituyó el final de las grandes estructuras de señores de la guerra y dio paso a una situación propicia para la construcción de nuevas formas de ejércitos privados enfocados hacia el objetivo de siempre, el control del Estado y el orden social de las comunidades” (Ibíd., 2006: 352).

²⁶² Restrepo (2005: 55).

²⁶³ Según la misma fuente (Yamhure, 2009) en cuanto a los asesinatos de sindicalistas la cifra disminuyó de los 99 de 2002 a 42 del 2004. Los homicidios de alcaldes y concejales descendieron de los 77 de 2002 a 18 de 2004.

²⁶⁴ Fuente Ministerio de Defensa en Vargas Velázquez y García Pinzón (2008: 45).

del Magdalena Medio era innegable, como también lo era el control sobre un vasto grupo de parlamentarios²⁶⁵. En el mismo sentido, según Leal Buitrago (2006: 24), cerca de 4.000 de los paramilitares desmovilizados no habían entregado sus armas, lo que hacía presumir que continuarían con actividades delictivas. Este conflicto, que incluía también a más de 8.000 desertores, según cifras oficiales, que lo hicieron en forma individual y que mayoritariamente provenían de las FARC, eran las carencias económicas, de organización y de la planificación de programas para incorporar de manera estable a esa cantidad de personas en el circuito productivo legal.

La problemática de la reinserción de estos combatientes fue reconocida por el propio gobierno a fines de 2005, pero el aval de la Unión Europea y de los EEUU al proceso, ofició como un aliciente para que la administración Uribe continuara por el mismo sendero. Para ese momento, una fracción de cerca de 2.000 combatientes del Bloque Central Bolívar, el más numeroso y poderoso de todos los que constituyen esta federación de grupos ilegales de la AUC protagonizó la desmovilización adicional con la que culminó el año 2005.

Resumiendo, a partir del año 2004 comenzaron a visualizarse los primeros éxitos de la política de seguridad del presidente Uribe frente a los grupos ilegales. El avance del Estado sobre la guerrilla fue significativo durante esta etapa y fue donde se produjeron las mayores ofensivas militares (RP de estrategia política), obligando a la guerrilla a guarecerse en sus territorios y priorizar la táctica del secuestro, el canje de prisioneros y “los acuerdos humanitarios”.

En cuanto a la política del gobierno frente al fenómeno paramilitar el principal conflicto resultó los pedidos de extradición formulados por el gobierno norteamericano, que pusieron en tensión los acuerdos y retrasaron algunos años los compromisos asumidos por estos grupos, los cuales mostraban las contradicciones internas de una fuerza débil en su unidad. A pesar de los vaivenes a los que fue sometido el acuerdo “de Justicia y Paz”, la Comisión avanzó con su cometido y varios de los jefes paramilitares fueron extraditados, aunque quedaron pendientes varios aspectos ligados a las penas y a la reparación de las

²⁶⁵ “El líder paramilitar Salvatore Mancuso dijo que controlaban el 30 por ciento del Congreso, una afirmación que varios congresistas le han repetido a Crisis Group” (Crisis Group, 2005: 19).

víctimas. En este sentido, el primer mandatario aumentó los recursos de poder institucional luego de que varias de las zonas dominadas por las AUC retornaron al poder del Estado, por lo que la presencia de la fuerza pública se hizo efectiva y con ello el monopolio legítimo estatal.

Conclusión

Los primeros dos años del presidente Uribe a cargo del poder ejecutivo tienen como denominador común un proceso reformista que abarcará a las diferentes áreas del sistema de gobierno colombiano: judicial, seguridad y político. En estos tres campos, el primer mandatario produjo reformas (recursos de poder de estrategia política) de fuerte contenido que tendrán resultados dispares, pero que arrojarán sobre el escenario político la instalación de un LP sin dudas innovador para la historia política del país.

El objetivo de “guerra frontal a la guerrilla” trajo aparejada una serie de propuestas de reformas (la unificación de los ministerios de seguridad y justicia, las reformas en el “Estado de excepción” y la aplicación, desde las primeras horas de su gobierno, del “Estado de conmoción interna”) que tuvieron como propósito principal la “militarización de la justicia”. Estas estrategias políticas presidenciales en el campo jurídico y de seguridad se enmarcaban en el proyecto de “Seguridad Democrática” que el primer mandatario proponía como el remedio para lograr la paz definitiva en Colombia. El pilar principal de esta propuesta era devolverle al Estado el monopolio de la fuerza legítima en el territorio y la extensión de su brazo armado a todas las regiones del país, que en ese momento se encontraban en manos de grupos irregulares. El presidente, en ese sentido, hizo jugar los recursos de poder obtenidos durante su campaña, como eran el apoyo popular/ ciudadano, las Fuerzas Armadas y los grupos empresariales para continuar con su prédica antiguerrillera y a favor de la recuperación de la legalidad del Estado en el interior del país. Otro de los recursos de poder generados por el presidente inmediatamente después de la jura de gobierno, fue la puesta en funcionamiento de los Concejos Comunitarios (RP de estrategia política comunicacional), que le brindaron a Uribe un conocimiento de la problemática de todas las regiones del país y le permitieron conectar al Estado con pueblos que con anterioridad no figuraron en la lista de visitas de los antecesores en su cargo.

El segundo campo en donde el proyecto reformista de Uribe se hizo presente fue en el político. Con la bandera de la lucha contra “la politiquería y la corrupción”, el primer mandatario llevó adelante un referéndum constitucional (RP de estrategia política) con la finalidad de “oxigenar el sistema político colombiano”. A pesar que el mismo representó un fracaso para el presidente en el aspecto cuantitativo de los votos (sólo una pregunta de las quince propuestas pudo aprobarse), no lo fue desde el punto de vista cualitativo, ya que

implicó la movilización popular para ir a votar (ya que no era obligatorio, al igual que las elecciones generales) y la instalación del liderazgo del primer mandatario, que pudo erigirse como la figura central de la política colombiana en ese contexto histórico. Días más tarde, se realizó la segunda elección del periodo -los comicios regionales-, en donde los partidarios del presidente lograron triunfar en la mayoría de los departamentos del país, aumentando los recursos de poder de Uribe.

A pesar de que la eficacia del gobierno de Uribe durante el primer año de implementación de su PSD tuvo pobres resultados, la estrategia de enfrentamiento frontal a las FARC formaba parte de uno de los principales recursos de poder del primer mandatario, por lo que el apoyo brindado por la sociedad al presidente no varió durante esa etapa a pesar de los escasa performance obtenida. Durante los años 2004 y 2005 el gobierno sí pudo mostrar mejores resultados en este campo, y la aplicación del Plan Patriota, proyecto específicamente militar que complementaba al Plan Colombia, brindó frutos de manera inmediata, ya que fueron atrapados durante esta etapa varios jefes guerrilleros.

El segundo frente con el que debió lidiar el presidente en esta etapa fue con los paramilitares. Luego de los sucesos de Medellín de fines de 2002, las AUC anunciaron el cese del fuego y un inminente proceso de desmovilización. Luego de varias idas y vueltas, el gobierno inició con estos grupos un acuerdo basado en la entrega de combatientes que se acogían a un proceso de negociación que implicaba que los paramilitares se comprometían a una desmovilización gradual y a culminar con toda actividad militar e ilícita.

Para el imaginario social, Uribe lograba comprometerse en toda su dimensión con los dos problemas de seguridad que afectaban a la población, y la presencia que el Estado iba adquiriendo a medida que se despejaban los caminos, las rutas y los municipios (ya fuera por la entrega por parte de las AUC o por la recuperación de manos de las FARC), aumentaba los recursos de poder presidenciales. A pesar de que aún no se observaba en el horizonte un final a corto plazo para la violencia, la dirección que emprendía la administración Uribe frente a los grupos ilegales contaba con el apoyo de grandes segmentos de la población (RP de apoyo popular/ ciudadana), y la habilidad del presidente para posesionarse como el líder que conducía esa lucha (RP de estrategia de personalidad política) le generaba jugosos recursos que supo aprovechar para concentrar su poder e instalar su figura a nivel nacional e internacional.

CAPÍTULO V
LA REELECCIÓN CON EL RECURSO DEL PARTIDO PROPIO
(2005-2006)

“Ha sido muy importante el contacto permanente del
Gobierno con la comunidad, porque los equipos
de gobierno nos reunimos en una sala,
nos proyectan cifras en un power point
y creemos que todo va muy bien.
Yo digo: más que apelar al power point
hay que mirar el power people;
hay que reunirse permanentemente con la gente”

Álvaro Uribe (Florida, 2004)

Introducción

El objetivo central del capítulo es analizar la conformación de la herramienta partidaria creada por el presidente Uribe en la parte final de su primer mandato y todo el proceso de reforma constitucional que tuvo como resultado final la habilitación de la reelección inmediata del primer mandatario, dos recursos de poder (institucional el primero y de estrategia política el segundo) generados por el presidente para consolidar su LP, en un contexto de crecimiento económico del país. Previamente se analiza la relación del primer mandatario con los principales actores internacionales en el marco de la implementación de la PSD.

En la primera parte del capítulo, entonces, se estudia el rol de los organismos internacionales, los EEUU y la Unión Europea en relación al gobierno de Uribe y su PSD. En ese marco, se examinan cuáles fueron los apoyos y críticas que recibió el primer mandatario en su accionar gubernamental por parte de la comunidad internacional. A su vez se analizan los recursos de poder generados por Uribe en el contexto de crecimiento económico que experimentó Colombia en los primeros años del mandato.

En la segunda parte del capítulo se observa el proceso de creación del Partido Social de la Unidad Nacional (PU). En coincidencia con la generación de este nuevo RP, se analiza el proceso de reforma constitucional que dio lugar a la reelección presidencial, y se estudia también la coalición parlamentaria de apoyo que le permitió avanzar este proyecto y la posterior convalidación constitucional.

Por último, el capítulo analiza los dos procesos electorales acaecidos durante el año 2006. Aquí se examinan los comicios parlamentarios de marzo (senadores y diputados) a partir de los datos electorales, y la composición legislativa resultante y se analizan los datos electorales de la elección presidencial de mayo de 2006 que le permitió a Uribe convertirse en el segundo presidente colombiano en sucederse a sí mismo en el poder ejecutivo.

5.1. Los recursos de poder de Uribe en el contexto de crecimiento económico

Este ítem se concentra en el análisis de los recursos de poder conquistados por el presidente colombiano en un contexto económico de crecimiento. En este sentido se examina con qué recursos contó Uribe para llevar adelante su PSD y cuáles fueron los apoyos nacionales e internacionales en su cruzada contra los grupos irregulares. Aquí se observa la relación del primer mandatario con las principales organizaciones internacionales, los EEUU y la Comunidad Europea. Por otro lado, este apartado repasa los principales datos socioeconómicos del primer periodo de gobierno y de qué forma influye la economía nacional en la fortaleza del liderazgo presidencial de Álvaro Uribe.

El aumento de los recursos de poder y el fortalecimiento del LP de Uribe

Durante sus tres primeros años de gobierno, Uribe contó con importantes recursos de poder institucionales, de apoyo popular/ ciudadano, comunicacionales (mediante estrategia política) y financieros y a través de su destreza en el ejercicio del poder logró generar nuevos para consolidar su gobierno y poder con ello enhebrar acuerdos institucionales para lograr su reelección.

Los recursos de poder de Uribe fueron principalmente el fuerte apoyo popular/ ciudadano, las Fuerzas Armadas (actor clave en la lucha contra las FARC), el sostén parlamentario obtenido en base a la popularidad del primer mandatario, los grandes medios de comunicación (en manos de empresarios urgido de paz y tranquilidad) y, a pesar de no tratarse de un RP, la cordial relación con el grupo irregular de las Autodefensas. En el plano internacional, la relación con EEUU era otro de los recursos de poder de Uribe que le permitía contar con un importante financiamiento (Plan Colombia, Plan Patriota y Plan Andino) para su lucha contra la guerrilla y el narcotráfico.

Los RP generados durante el propio ejercicio del poder derivaron de su capacidad política para encarar la lucha contra la guerrilla (una de las principales demandas populares), de sus altos índices de aceptación en la sociedad y de un estilo propio de gobierno que le permitió al primer mandatario enhebrar acuerdos partidocráticos en el seno del parlamento y en los ejecutivos provinciales. Estos apoyos le permitieron sortear con

éxito las barreras legislativas existentes para llevar adelante los proyectos más polémicos y con ello avanzar hacia la propuesta de reelección.

El LP de Álvaro Uribe representa un caso atípico para la historia de Colombia. Su historia personal, su talante de político comprometido y trabajador, su oratoria y el modo de construcción de poder, junto el nivel de adhesión y rechazo que concitaba su figura, demostraban una cualidad única como recurso de personalidad política (RP de estrategia política), en comparación con los políticos tradicionales del país. La utilización de los medios de comunicación, uno de los recursos de poder de estrategia política del presidente, reflejaban al máximo las características positivas del primer mandatario. En este sentido, según Leal Buitrago, “la relación que se ha dado entre Álvaro Uribe Vélez y los medios de comunicación no tiene antecedentes en la historia política colombiana. Concedor de los efectos que tienen los medios en la creación de símbolos de identidad, Álvaro Uribe explotó al máximo su relación con ellos, consolidándola como un importante puente para afianzar sus vínculos con la ciudadanía. Los medios se convirtieron en los espacios donde se construyó y se proyectó cuidadosamente la imagen de Álvaro Uribe como ‘El Presidente’”²⁶⁶. En el mismo sentido se expresaba Omar Rincón para quien “Uribe parece Presidente porque ha sabido representar al héroe de pantalla, que genera identificación y credibilidad por la manera como se pone en escena: fuerte, pero coloquial; con autoridad pero paternal; directo pero conciliador; sabio pero afectivo.”²⁶⁷.

De acuerdo con Ángela Pinzón, periodista acreditada en la Casa del Nariño, Uribe “se levantaba bien temprano a las 4 y realizaba meditación. A las 7, ya en el Palacio, pedía el reporte de seguridad y comenzaba, casi siempre, con reuniones de naturaleza económica. Su agenda era exhaustiva, no había día que no fueran a verse con él actores políticos y sociales, en especial, empresarios. La forma de gobernar de Uribe era muy nítida: no le gustaba delegar”²⁶⁸.

²⁶⁶ Leal Buitrago (2006:72- 73).

²⁶⁷ Rincón (2006: 15).

²⁶⁸ Ángela Pinzón. Entrevista con el autor. En el mismo sentido se expresaba Paola Holguín “el Presidente tenía claro que el arte de gobernar es en buena medida el arte de comunicar, por eso siempre evitó la dispersión y contradicción en los mensajes, y mantuvo consistencia y coordinación en la comunicación. Además, partiendo de que gobernar es educar, nunca evadió temas, ni debates y siempre hizo una labor pedagógica importante, entregando a los ciudadanos toda la información necesaria para que tomaran posturas... Otro elemento fundamental es que independientemente del auditorio el discurso era uno, eso le dio consistencia y credibilidad (Paola Holguín. Entrevista con el autor).

Desde allí que Uribe pudo generar recursos de poder suficientes para emprender un proceso de cambio estructural en Colombia. Los CC, un discurso político claro que tiene efecto en sus interlocutores, su eficaz utilización de los medios masivos de comunicación, se convirtieron en recursos de poder que inclinaron la balanza a favor del primer mandatario en su lucha contra los grupos ilegales y apagaron las voces críticas que señalaban los abusos de la fuerza pública y el retroceso en la garantía de los derechos civiles. A su vez, estos recursos le permitieron al primer mandatario ampliar su base de apoyo parlamentaria con el incremento de diputados y senadores de nuevos partidos o producto de las disidencias en el interior de los partidos tradicionales. Consultado por esta investigación sobre la importancia de su discurso político en la generación de recursos de poder, Uribe contestó que “frente al discurso político lo más importante es la congruencia. Nosotros tuvimos un solo discurso, sin cálculo político ni de encuestas. Un discurso basado en la verdad, porque el pueblo perdona el error, pero no perdona el ocultamiento ni el engaño. El nuestro fue un discurso que buscó siempre hacer pedagogía sobre los elementos fundamentales para guiar el devenir de la nación”²⁶⁹.

La oposición, representada en el área parlamentaria por el Partido Liberal y el Polo Democrático, se enfrentó a un LP con una suma de recursos de poder suficientes para llevar adelante un proceso de transformación en el ámbito económico, político y social, y por lo tanto fue escasa la resistencia a un líder que avanzaba hacia una “nueva Colombia”. Internamente, los recursos de poder de Uribe aumentaron al calor de las victorias frente a las FARC y del proceso de desmovilización paramilitar, aunque en el plano internacional la cosecha se mostró escasa de apoyos.

La política exterior del gobierno de Uribe estuvo centrada en la búsqueda de sostén internacional a su PSD. El principal respaldo a su estrategia de seguridad provenía de los EEUU, país con el cual, a partir de los años finales del gobierno de Pastrana, se habían rehabilitado las relaciones fisuradas durante la administración de Samper. En ese marco, Uribe apoyó sin reservas la guerra contra Irak, y se convirtió en uno de los principales aliados del gobierno de Bush en la región.

En cuanto a los resultados de su política de seducción hacia la Unión Europea, los dividendos no fueron los deseados. La resistencia del viejo mundo a suscribir los tratados

²⁶⁹ Álvaro Uribe. Entrevista con el autor.

de libre comercio con Colombia, y su apoyo a su política de seguridad, se convirtieron en un fuerte escollo que el ex gobernador de Antioquia no pudo superar. El papel predominante desempeñado por distintas las ONG europeas en su campañas de desprestigio del gobierno colombiano por la situación de los derechos humanos en el país impidieron que esos acuerdos se realizaran de manera inmediata. Para julio de 2003, en su visita a Londres, el presidente obtuvo de los gobiernos europeos una declaración de apoyo a su política, aunque éstos la condicionaron al cumplimiento de las 27 recomendaciones de la oficina de derechos humanos de la ONU en Bogotá (Restrepo, 2005: 50)²⁷⁰. De todas formas, debe recordarse que en el año 2002 la Unión Europea habían declarado terroristas a las FARC y los paramilitares, quitándole a estos grupos el reconocimiento político, dificultando su libre circulación y diplomacia de sus miembros y permitiendo el bloqueo de sus cuentas bancarias como las principales sanciones legales.

A pesar de los esfuerzos de Uribe, la Comunidad Europea siempre se mostró reacia a un apoyo incondicional. El presidente buscó disímiles estrategias para convencer a los dirigentes europeos de las bondades de su PSD, e inclusive llegó a realizar conferencias de prensa en horarios de madrugada de Colombia para poder llegar en vivo y en directo en la mañana europea²⁷¹. Donde sí encontró un eco importante para su lucha contra el terrorismo fue en los gobiernos aliados de EEUU en el continente. En ese sentido, tanto Tony Blair, en Inglaterra, como José María Aznar en España, le ofrecieron a Uribe un respaldo efectivo a su estrategia de seguridad en Colombia.

Las relaciones del gobierno de Uribe con la ONU fueron aún más tensas que las que mantenía en ese momento histórico con la Unión Europea. La PSD hacía dificultoso arribar a acuerdos con organizaciones que, por su propia razón de ser, tienden a buscar soluciones pacíficas. A su vez, la ONU, a través del Alto Comisionado, ha denunciado el incremento de graves violaciones a los derechos humanos como consecuencia de la aplicación de “las políticas gubernamentales de seguridad por parte de la fuerza pública y de las facultades que algunas normas otorgaron a las Fuerzas Militares, para actuar restringiendo derechos

²⁷⁰ Durante el año 2003, el gobierno colombiano cumplió con 18 de las 27 recomendaciones formuladas por los órganos autorizados y los expertos designados de Naciones Unidas, en particular las realizadas por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la Comisión de Derechos humanos durante los periodos 59° y 60° de sesiones (Restrepo, 2005:196).

²⁷¹ “Podía hacer una conferencia de prensa a las 2 de mañana. Las conferencias de prensa muchas veces las hacía a la medianoche para que surtiera efecto a la mañana en Europa. Su objetivo siempre fue desenmascarar a las FARC, ‘Les dije que eran facinerosos’ solía expresar”. Ángela Pinzón. Entrevista con el autor.

humanos y libertades fundamentales sin orden judicial”²⁷². La tirante relación con el organismo ha llevado al presidente a criticar en diferentes tonos el accionar de dicha organización y de otras vinculadas a la defensa de los derechos humanos, al acusarlas de “voceras del terrorismo”, “traficantes de los derechos humanos” y “cómplices culposos del terrorismo”²⁷³. De igual forma se desarrollaba la relación con las ONG de derechos humanos en el país, las cuales fueron durante mucho tiempo objeto de las críticas de Uribe: les endilgaba la falta de reconocimiento de los logros en la política de seguridad.

En cambio, en su relación con la OEA el gobierno colombiano ha obtenido mayores beneficios. Por un lado, la condena de los actos terroristas cometidos por las organizaciones ilegales ha sido una fuerte señal de apoyo a su política de seguridad, como así también lo fue el aval político y el apoyo en las negociaciones con las AUC.

Al compás del avance sobre los grupos ilegales y las peripecias frente a las distintas organizaciones de derechos humanos, la economía local comenzaba a resurgir de la crisis de fin de milenio, que fue analizada en la primera parte de esta investigación, e iniciaba un camino de recuperación. A partir de la asunción de Uribe en el año 2002, la economía colombiana experimentó una tasa de crecimiento sostenida, que partió del exiguo 1,6% en el año electoral y ascendió al 3,7% en el primer año de gobierno (el promedio regional fue 1,5%), para trepar en el año 2005 a 4,7%²⁷⁴. Es decir, se trató de un ciclo ascendente de la economía colombiana en el cual la mayoría de los indicadores tuvieron resultados auspiciosos.

La recuperación económica de estos primeros años obedeció a distintos factores, como fueron el alza en los precios internacionales del petróleo, el carbón, el oro y el café, la recuperación del comercio con Venezuela y Ecuador, el aumento de las exportaciones a EEUU y el ingreso de los empresarios a nuevos mercados en Centroamérica y el Caribe. Pero, sin lugar a dudas, ha influido en ella la confianza suscitada en el LP de Uribe y su política de seguridad (Restrepo, 2005: 52), que permitió crear un ambiente apto para la inversión y el desarrollo de los factores productivos en el país. La generación de este RP de estrategia política dio como resultado un impulso al comercio internacional que permitió

²⁷²CCEEU- Coordinación Colombia (2004: 188).

²⁷³Ibíd. (2004: 194).

²⁷⁴Datos obtenidos en base a la Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas de Colombia (DANE) <<http://www.dane.gov.co>>.

que los índices de inversión pública y privada y de exportación ascendieran de forma notable. A su vez, la tasa inflacionaria tuvo una curva descendente que la situó en 4,9% en el año 2005²⁷⁵.

En cuanto a los datos sobre el nivel de empleo de los primeros años de gestión, se observaba un descenso del desempleo y un aumento de la tasa de ocupados. Según datos oficiales, el desempleo bajó del 17,4% del año 2002 al 14,6% de 2004, para situarse en 12,9% en el año de la reelección de Uribe. En cuanto a la pobreza y la indigencia, el gobierno de Uribe implementó los programas “Hogares Comunitarios” y “Familias en Acción”, dirigidos a los sectores más vulnerables para ampliar la cobertura en salud, educación y protección a la infancia. La pobreza disminuyó, en ese mismo periodo, del 57% en el 2002 al 49,2%, y la indigencia de 21,6% a 19%²⁷⁶. Sin embargo, cabe resaltar que a pesar de estos datos alentadores en cuanto a los índices de ocupación y pobreza, la participación en el ingreso nacional de los trabajadores se redujo ligeramente en el mismo periodo de 12,3% a 12,1%, mientras que el 10% más rico se incrementó del 38,8% al 41% (Cabrera Galvis, 2009: 45)²⁷⁷. El subempleo, por otro lado, aumentó del 33,1% en el año 2002 al 36,1% cuatro años más tarde, lo que en los hechos implicaba un incremento de 729 mil trabajadores en estas condiciones precarias (Giraldo Isaza, 2007: 5).

En el ámbito de la producción, a partir del año 2003 el gobierno concedió incentivos tributarios a la inversión, descontando el 30% de la inversión ejecutada del impuesto a la renta, favoreciendo a los sectores del capital económico con la intención de que ese dinero fuera destinado a la inversión y a la generación de empleo. Según Kalmanovitz (2005: 105), esta política de incentivo al sector empresarial era uno de los factores más alentadores de la recuperación del crecimiento en los primeros años de mandato, ya que mostraba que las expectativas de los agentes económicos son positivas de cara al futuro.

²⁷⁵ Para mayores datos consultar Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE). En línea en: <<http://www.dane.gov.co>>.

²⁷⁶ Datos obtenidos en base a la Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas de Colombia (DANE). En línea en: <<http://www.dane.gov.co>>.

²⁷⁷ Según Acosta Medina (2009: 79): “A diferencia de lo que pasó en Latinoamérica, Colombia no sólo no mejoró la distribución del ingreso en estos últimos años de bienandanza de la economía, sino que empeoró, al pasar de un Índice de Gini, en el que 1 es la máxima concentración y 0 es la igualdad completa, de 0,572 en el 2000- 2002, a 0,584 en el 2002- 2005, pasando del nivel de desigualdad alto a muy alto en la estratificación según el coeficiente Gini de la distribución del ingreso”.

La visión económica del presidente Uribe descansaba en el fomento de la inversión por la vía del incentivo económico basado en exenciones, para de esa manera crear un ambiente propicio para que los agentes económicos decidieran destinar sus ganancias a la producción. Desde esta perspectiva macroeconómica, el gobierno entendía que un paquete de incentivos a la clase empresarial ofrecía las herramientas necesarias para promover la inversión en áreas sensibles de la economía. En este sentido, “las exenciones tributarias a la gran empresa privada, a través de zonas francas y contratos de seguridad jurídica; la legislación petrolera entre otros”²⁷⁸ implicaron un costo fiscal al erario público, que la administración Uribe sostuvo, evidenciando un espíritu heterodoxo, aun en detrimento del equilibrio de las cuentas estatales.

La confianza inversionista, el segundo pilar entre la PSD y la cohesión social, el tercero, formó parte, desde el inicio, del núcleo central de ideas del gobierno. Desde allí que el primer mandatario asumiera que “por ello, nos propusimos construir y fortalecer la confianza, soportada en tres pilares: la seguridad con valores democráticos, la promoción de la inversión con responsabilidad social y el avance en la cohesión social desde las libertades, teniendo como primer componente una revolución educativa permanente. Estos tres pilares están profundamente relacionados. La seguridad es un presupuesto necesario para promover la inversión que permite que la cohesión social; y a su vez, la inversión con responsabilidad social y la cohesión social, son legitimadoras de la seguridad”²⁷⁹.

Luego de la brutal caída en 1999, desde el año 2000 la economía colombiana continuó en un lento y sostenido proceso de recuperación del que también forman parte las economías sudamericanas. A medida que los triunfos en el campo de la seguridad se hacían presentes, los resultados en el área económica se mantenían por el mismo andarivel de éxito, generando un círculo virtuoso que redundaba en un aumento de la popularidad del primer mandatario (RP de apoyo popular/ ciudadano). La seguridad y el orden como factor primario, y antecedente de un estable crecimiento económico, fue -desde el inicio del gobierno- la filosofía practicada por Uribe para legitimar su lucha frontal frente a la guerrilla.

²⁷⁸ Acosta Medina (2009: 80).

²⁷⁹ Álvaro Uribe. Entrevista con el autor.

En el aspecto social era en donde el gobierno mostraba los peores indicadores. Como senador, Uribe ya había sido promotor de distintas leyes que afectaban los derechos laborales y la seguridad social. Su política de focalización temporal, a través de subsidios a los sectores más vulnerables, continuó aplicándose dentro del recetario tradicional del Fondo Monetario Internacional. Su concepción neoliberal de la política económica, en algunas áreas y pragmática en otras, sin embargo, no pudo aplicarse de forma total, ya que el gasto social para los sectores más desprotegidos se encontraba normado alrededor de la Constitución reformada en 1991, y aumentan progresivamente cada año.

La combinación de elementos ortodoxos en el área macroeconómica, junto con la inversión social destinada a los sectores vulnerables, hacía de Colombia, un caso particular en el archipiélago de las economías sudamericanas. En este sentido, según Nasi (2007: 172), las rigideces en el terreno social hacían que cualquiera que hubiese sido elegido presidente no hubiera podido modificar en mayor medida este estado de situación. Es decir, siguiendo a Giraldo Isaza (2007: 95) se puede caracterizar la economía de este primer periodo de Uribe como “mixta”, teniendo en cuenta que se trata de una combinación de estrategias monetaristas y keynesianas. En cuanto a lo primero, era evidente que el gobierno implementó, desde una lógica ortodoxa, una agenda neoliberal alimentada en los acuerdos con el FMI y en el decálogo del libre mercado: reducción del tamaño del Estado, fomento de la inversión en consonancia con la “teoría del derrame” y privatización, total o parcial de varias empresas públicas como Adpostal, Ecopetrol, Telecom y Ecogas, entre otras. Este proceso de privatización le aportó al fisco 5,8 billones de pesos (Giraldo Isaza, 2007: 6), y le permitió a la clase empresarial adquirir empresas del sector público, alrededor de una política que ha sido aplicada en mayor o menor grado en los noventa en la mayoría de los países de Sudamérica.

Por otro lado, y he aquí su momento heterodoxo, este programa económico se combinaba con el carácter keynesiano que le imprimía la propia Constitución de 1991, la cual estableció la orientación social del Estado colombiano. El texto constitucional, en los artículos que se extienden desde el 42 al 77²⁸⁰, apunta a mantener una mayor integración y cohesión social (Giraldo Isaza, 2007: 96) asumiendo un rol activo en la lucha contra la

²⁸⁰ Corresponde al Capítulo 2 de la Constitución de Colombia, que se titula “De los derechos sociales, económicos y culturales” (Constitución Política de Colombia, 2008: 14- 27).

pobreza, y a favor de la distribución del ingreso, el empleo, la salud, la educación y la vivienda. Por lo tanto, la política económica de Uribe tuvo fuertes condicionantes sociales que limitaron la acción de gobierno dotando de una mixtura particular a la economía colombiana.

Los últimos éxitos militares contra las FARC, la desmovilización paramilitar y una economía en franco crecimiento, junto al apoyo a los sectores más vulnerables, constituyeron elementos que se retroalimentaron y le permitieron a Uribe pensar que un solo mandato no sería suficiente para culminar su obra de gobierno. La creación del partido propio y la reforma constitucional para habilitar la reelección serán los siguientes pasos del líder antioqueño. De eso trata el próximo ítem.

Recapitulando, los recursos de poder con los que contó Álvaro Uribe durante la primera parte de su presidencia fueron numerosos y le permitieron avanzar sin grandes obstáculos hacia una ofensiva frente a los grupos irregulares (la principal demanda ciudadana) ya fuera en la variante armada o negociadora. En este sentido, el presidente contó con un sólido apoyo parlamentario, basado en una coalición constituida por varios partidos menores y que atravesaba a la casi totalidad de los partidos tradicionales. Parte de ese apoyo provenía de la alta popularidad de Uribe (RP de apoyo popular/ ciudadano), la cual se mantuvo en forma sostenida durante sus tres primeros años de gobierno²⁸¹, y de los recursos de poder que generó durante el ejercicio del poder.

El contexto socioeconómico como factor externo a la dinámica política colaboró con el éxito presidencial en esta etapa. El crecimiento del PBI y de la inversión, sumado a los escasos pero auspiciosos índices de ocupación, le dio a Uribe un importante plafón económico para mostrar a nivel nacional e internacional como éxito de su política de seguridad. Sin embargo, los datos sociales, asociados a la distribución del ingreso, no mostraron cambios significativos en esta etapa y se convirtieron en el gran déficit de su primera presidencia.

²⁸¹ Según Latinobarómetro, los índices de aprobación de Uribe fueron de 64% para el 2003, 75% para el 2004 y 69% para el 2005 (En Corporación Latinobarómetro, Informe 2011. En línea en: <<http://es.scribd.com/doc/70688598/INFORME-DE-LATINOBAROMETRO-2011>>.

5.2. La creación de un nuevo RP: el Partido de la U (ribe)

Este ítem analiza la creación de la agrupación política del presidente Uribe, Partido Social de Unidad Nacional, más conocido como Partido de la U (PU). Aquí se describen los pasos previos a la constitución de este RP institucional de tipo partidario y la necesidad del primer mandatario de contar con una estructura propia y centralizada. Por otro lado, se observa el proceso de reforma constitucional, un RP de estrategia política, que habilitó la reelección presidencial y los tímidos acuerdos de paz explorados con la guerrilla en el contexto de la futura elección nacional.

El PU un recurso de unidad en torno del LP de Uribe

La candidatura de Uribe para las elecciones presidenciales de 2002 se realizó en el marco del Movimiento “Primero Colombia”. A pesar de contar con el apoyo de diversos parlamentarios de los partidos tradicionales y de las nuevas agrupaciones políticas conformadas alrededor de las disidencias del PL y el PC, el líder antioqueño no contaba con un partido propio unificado en torno a su liderazgo y a escala nacional. Los apoyos obtenidos en la arena legislativa provenían de su acción en el gobierno y de la popularidad cosechada por el primer mandatario durante el ejercicio del poder.

Para el año 2003 diferentes dirigentes políticos, provenientes de distintas agrupaciones que compartían su militancia y el apoyo al presidente, se unieron bajo la denominación de “Nuevo Partido” (NP), lo que sería el embrión del PU. El NP fue una creación de parlamentarios como Rafael Pardo, Oscar Zuluaga y Luis Velazco, entre otros, que tenía como finalidad la construcción de una herramienta partidaria que apoyara las políticas del presidente Uribe. Luego de aprobada, a mediados del año 2003, la reforma política que proponía un umbral superior para ingresar en las Cámaras, estos legisladores plantearon la necesidad de la unidad en torno al liderazgo de Uribe y constituyeron el primer experimento partidario de apoyo al primer mandatario.

A pesar de que Uribe no respaldó oficialmente el armado de esta organización partidaria, la necesidad de unificar los apoyos parlamentarios en torno a una estructura superior continuó siendo una demanda y una necesidad para el presidente. Luego del anuncio de que Juan Manuel Santos, un hasta poco tiempo atrás parlamentario liberal, sería

el líder de la bancada oficialista, se inició un proceso de unificación que daría como producto el armado de un RP institucional de apoyo al presidente.

Para finales de agosto de 2005, luego de la Asamblea Nacional estatutaria realizada en la capital del país se creaba el Partido Social de Unidad Nacional, más conocido como el Partido de la U²⁸² (sigla que hacía referencia a la inicial del apellido del presidente colombiano) y estructura política que responderá a las necesidades del primer mandatario de contar con un apoyo legislativo y partidario unificado. Sin embargo, Uribe pensó esta agrupación política como un espacio que se incorporaría a los anteriores, ya que su estrategia era sumar la mayor cantidad de apoyos detrás de su figura. En ese sentido, expresaba: “No va a ser el único partido con el que voy a trabajar, no voy a pedir que los otros partidos se fusionen en el mío y que con ello pierdan su identidad”²⁸³. Sin dudas, el presidente se mostraría flexible frente a los partidos que se negaban a disolverse en el PU, ya que su objetivo fue siempre conservar el apoyo a su proyecto, aunque el mismo se realizase por afuera de su propia estructura política.

El apoyo parlamentario del presidente, como se comentó en el capítulo precedente, tenía su principal sustento en un conglomerado de partidos menores y de los legisladores provenientes de los partidos tradicionales. La débil institucionalización de esos soportes, sumada a la inexistencia de una estructura organizada de dichos apoyos políticos y a la inminencia de las próximas elecciones parlamentaria y presidencial del año 2006, conspiraban contra la unidad interna necesaria para solidificar el proyecto político uribista. Es decir, la voluntad política de Uribe por mantener los apoyos a su gobierno desde una lógica más “movimientista” le permitía seguir siendo el punto de unión de los múltiples soportes partidarios, aunque la necesidad de unidad en torno al proyecto de gobierno requería de un piso importante de confluencia partidaria.

²⁸² Entre los fundadores del Partido de la U se encuentran Juan Manuel Santos Calderón, Luís Guillermo Vélez Trujillo (q.e.p.d), Oscar Iván Zuluaga Escobar, Aurelio Iragorri Hormaza, Carlos García Orjuela, DÍlian Francisca Toro Torres, Eduardo Benítez Maldonado, Darío Angarita Medellín, Sergio Díaz Granados, José Name Terán, Miguel Amín Escaf, Carlos Enrique Soto Jaramillo, Zulema Jattin Corrales, Luís Antonio Serrano Morales, Ricardo Arias Mora, Manuel Enríquez Rosero, Piedad Zucardi de García, Carlos Augusto Celis Gutiérrez y María Isabel Mejía Marulanda, entre otros. La denominación de la "U" fue idea del senador Luis Guillermo Vélez Trujillo para significar la Unidad. Los colores del logotipo representan la composición social y plural del Partido y el fondo blanco destaca la paz que necesita Colombia. (En línea en: <www.partidodelau.com>).

²⁸³ Jaime Bermúdez. Entrevista con el autor.

En ese marco, los coordinadores del PU Juan Manuel Santos, Luis Guillermo Vélez y Óscar Iván Zuluaga dieron el puntapié inicial a un partido que intentaba ser el espacio de confluencia de todos los simpatizantes del presidente Uribe. En ese sentido, los partidos nuevos creados para apoyar al primer mandatario con anterioridad a esa fecha -Cambio Radical, Movimiento Colombia Siempre, Convergencia Ciudadana, Alas y Equipo Colombia- se fusionaron, luego de la elección de 2006, en el Partido de la U. En cambio, el PC, un aliado significativo del gobierno en algunas temáticas, no fue tentado con esa alternativa y mantuvo su apoyo táctico con autonomía al primer mandatario, con quien compitió en la mayoría de las elecciones regionales y parlamentarias, no así en las presidenciales.

El PU emergía como una estructura política singular en la historia colombiana, que desafió con éxito el bipartidismo tradicional y consiguió instalarse, como observaremos en el capítulo siguiente, como una fuerza política con capacidad de hegemonizar el proceso electoral. Sin lugar a dudas, el éxito de PU (en convocatoria y en la arena electoral) era indivisible de la popularidad del presidente Uribe, el RP de apoyo popular/ ciudadano que acompañó al primer mandatario a lo largo de sus dos gestiones. Una encuesta realizada por la empresa Gallup a mediados de 2005 reflejaba que el respaldo a Uribe orillaba el 69% de los entrevistados, “a pesar de que había disminuido la aceptación de sus políticas bandera, de lucha contra la guerrilla y contra la corrupción, lo mismo que de su política de negociación con los grupos paramilitares”²⁸⁴.

Al mismo tiempo que enhebraba acuerdos con la clase política colombiana, y a la par que mantenía una importante imagen positiva frente a la sociedad, Uribe avanzó con su proyecto de reforma constitucional para lograr la reelección, que se encontraba vedada por las leyes colombianas. La Constitución establecía la imposibilidad de reelección en todas sus formas (por un periodo o indefinida) y la historia del país imponía una tradición alejada de la repetición del mandato presidencial. A pesar de que durante meses el presidente

²⁸⁴ Diario El Tiempo, 14-5-05. Según la misma fuente “Más tarde, una encuesta realizada por tres empresas reconocidas, por encargo de la Fundación Colombiana de la Empresa Privada, arrojó que el 64,7% de los entrevistados apoyaba la labor realizada por el Gobierno, el 60,9% quería que se aprobara la reelección inmediata, el 58,5% opinaba que si se aprobaba la reelección debía permitirse que Uribe se presentara como candidato y el 69,6% consideraba conveniente que se continuara con las políticas del gobierno actual, independientemente de quien fuera el próximo presidente” (El Tiempo, 19-6-05).

evadió el tema, y en algunos casos fue terminante en la posición contraria²⁸⁵, finalmente en abril de 2004 dio un respaldo público a la propuesta reformista. Con ese aval, a fin de año el Congreso avanzó en la modificación de la Constitución para eliminar la prohibición de la reelección presidencial. Mediante el Acto Legislativo N° 2 de 2004 del 27 de diciembre, el Congreso aprobó la reforma de la Constitución para permitir que el presidente pudiera volver a presentarse, en forma inmediata, por una sola vez. La discusión por la reforma no estuvo exenta de polémicas²⁸⁶ pero significó, sin dudas, un nuevo RP para los intereses presidenciales.

La composición parlamentaria de apoyo a la reforma fue promovida por una generosa coalición compuesta mayoritariamente por nuevas agrupaciones políticas creadas con el objetivo de respaldar la administración Uribe. Según Botero y Vélez (2009: 14), el 56% de los congresistas que aprobaron la reelección pertenecían a estas nuevas agrupaciones que crecieron al calor de la gestión del líder antioqueño. Es cierto que parte de estos “nuevos” legisladores que se cobijaban bajo el ala uribista eran antiguos congresistas de los partidos tradicionales que, aprovechando la alta popularidad del presidente, fundaron nuevos movimientos en sintonía con sus necesidades electorales, pero como se observa el apoyo partió desde espacios transversales.

La negociación por el proyecto de reelección presidencial implicó para Uribe volver a congeniar acuerdos con esa partidocracia que tanto había vilependiado durante su primer año de gobierno. La lucha “contra la corrupción y la politiquería” volvió a ubicarse en un segundo plano y las necesidades del presidente se orientaron a concertar con el parlamento un proyecto que viabilizase la posibilidad de un segundo mandato consecutivo, como sólo había existido una sola vez en la historia colombiana²⁸⁷.

²⁸⁵ Uribe señalaba, en mayo de 2002, que “la reelección inmediata no me convence porque entonces puede ponerse el gobierno a buscarla”; luego, en agosto de 2004: “no soy partidario de la reelección inmediata por que le introduce más politiquería al ejercicio de las funciones de gobierno” (Tabares, 2006:56).

²⁸⁶ “La impresión que en diferentes círculos había sobre una posible repartición de beneficios a parlamentarios por parte del gobierno con el fin de lograr la aprobación del proyecto, se fortaleció ante lo ocurrido en el primer debate en la Cámara cuando el voto inesperado de la representante santandereana Yidis Medina y la ausencia del conservador Teodolindo Avendaño permitieron que el proyecto pasara el debate” (Osorio Villegas, 2007: 61). En la tercera parte de esta investigación analizaremos el escándalo político desatado luego de la autoacusación de la parlamentaria que dio lugar al fenómeno conocido en Colombia como la “Yidispolítica”.

²⁸⁷ “Durante todo el siglo xx, solamente una persona obtuvo su reelección, después de transcurrido el periodo de inhabilidad. Se trata del presidente Alfonso López Pumarejo, quien gobernó entre 1934 y 1938, y 1942 y 1945” (Jaramillo, 2005:12).

A la espera de la decisión de la Corte Constitucional al respecto de la legalidad de la reforma, el líder antioqueño advertía que “a los que se preocupan por la posibilidad de que la reelección presidencial rompa ese equilibrio, deben estar tranquilos. La reelección presidencial no reformó el origen de los órganos de control que trajo la Constitución del 91. La reelección presidencial es un desarrollo más del proceso democrático, de la elección popular de alcaldes, de la elección popular de gobernadores, que tanto nos demoramos para introducir a Colombia, y empieza a tener unas bondades”²⁸⁸.

Finalmente, la Corte Constitucional emitió, en octubre de 2005, un dictamen sobre la legalidad de la reforma de la Carta Magna autorizando la reelección presidencial inmediata. El presidente festejó la decisión reivindicando el importante paso dado para la institucionalidad del país, ya que de aquí en adelante “la reelección presidencial inmediata implica más responsabilidad con el pueblo que con la historia... Este es un país de instituciones; hay que respetar las tendencias de las mismas. El gobierno tiene que proceder dando ejemplo en materia de respeto a las instituciones con toda prudencia y seguir trabajando con infinito amor por Colombia”²⁸⁹.

En paralelo a la decisión de la Corte, Uribe daba un “volantazo” sobre su política frente a la guerrilla. En el contexto en que el proyecto de reelección se materializaba, el presidente, por intermedio del comisionado Restrepo, presentó a las FARC una propuesta de diálogo para hablar de la liberación de los 56 políticos (Íngrid Betancourt, entre ellos), soldados, policías y a los tres ciudadanos estadounidenses que mantenía secuestrados²⁹⁰. Esto implicaba un giro copernicano de la estrategia de no negociar un “canje humanitario” frente al terrorismo, ya que la propuesta implicaba, en los hechos, la oferta de una desmilitarización concreta y bajo supervisión internacional en dos áreas que eran reclamadas como posibles espacios de negociación por la guerrilla para el canje de los rehenes. A pesar de que Uribe evitaba utilizar la palabra “despeje” para referirse a esa zona de negociación, en los hechos la oferta existía. El presidente, sin embargo, manifestaba que “se sigue insistiendo en la zona de despeje. El Gobierno no puede hacer eso. Un país que se ha reencontrado con su Fuerza Pública, que reclama la presencia de la Fuerza Pública en

²⁸⁸ Ramírez Niño (2011: 151).

²⁸⁹ Tabares (2006: 57).

²⁹⁰ Restrepo, en ese sentido afirmaba que “si se necesitan algunos acompañantes nacionales o internacionales, para que esas condiciones de seguridad sean creíbles, estamos dispuestos a buscar esos acompañantes”. En Boletines de la paz (www.ideaspaz.org).

todos los sitios del territorio y a toda hora, es un país que no lo podemos maltratar con desmilitarizaciones... No podemos por esa razón: por el respeto a nuestra Fuerza Pública”. Pero, a la vez que negaba la posibilidad del “despeje”, abría una ventana de negociación a la guerrilla aceptando un encuentro con representantes de las FARC “para definir las condiciones de seguridad en el sitio de encuentro. Yo le dije: no tengo problema con eso... Reitero desde Barranquilla toda la decisión de buscar el acuerdo humanitario –como se lo dije al Comisionado esta mañana-, pero sin violar los principios”²⁹¹. Desde el gobierno se avanzó en la propuesta de negociación y se conformaron comisiones nacionales e internacionales con la finalidad de darle un formato más amplio a la propuesta de paz.

El acuerdo entre Uribe y la FARC en torno al intercambio humanitario parecía avanzar sin ripios (inclusive el Gobierno propuso como lugar de encuentro con los representantes de la guerrilla la zona del Valle del Cauca), pero a principios del año 2006 la guerrilla rechazó el diálogo con el presidente, ya que según las FARC, éste sólo pretendía “explotar electoralmente” la iniciativa. La oferta de diálogo fue reiterada por Uribe durante las semanas en que se desarrolló la campaña electoral, para caer en el olvido luego de la holgada victoria en las urnas en mayo.

Con la reelección en puerta, Uribe comenzó su campaña electoral sin grandes desafíos a la vista. El presidente avanzaba hacia una nueva etapa de profundización de su proyecto de Seguridad Democrática y Estado Comunitario, con numerosos recursos de poder en sus manos y con una oposición carente de recursos y competitividad electoral.

Resumiendo, el 2005 significó para el presidente el año de consolidación de su proyecto político en torno a la generación de dos recursos de poder: el de habilitar la reelección presidencial (RP de estrategia política) y el de construcción de una herramienta política (RP institucional) de unidad de las fuerzas propias: el Partido de la U.

En ese marco, el presidente, luego de negar sus ansias reeleccionistas, apoyó enfáticamente la reforma constitucional que a finales de 2004 aprobó el poder legislativo y en octubre de 2005 refrendó el poder judicial. El otro de los RP generado por el primer mandatario durante su gestión de gobierno fue, como se explicitó, la creación de la herramienta partidaria propia. Luego de la reforma política de mediados de 2003, y en el

²⁹¹ Boletines de la paz (www.ideaspaz.org).

marco de modificaciones internas en el interior de la coalición oficialista en el Congreso, Uribe decidió avanzar con el armado político de una estructura propia.

Una vez encaminado el proceso de continuidad gubernamental, el presidente decidió realizar un giro táctico en su política de seguridad planteándole a la guerrilla la alternativa de un acuerdo humanitario. Aunque se avanzó en forma parcial en la organización de “comisiones de la paz” con otros países, las FARC no aceptaron la invitación oficial del gobierno y la propuesta presidencial quedó trunca. Sin embargo, esta iniciativa oficial demostraba la plasticidad de Uribe para cimentar acuerdos con los grupos ilegales que se repetirán en el futuro.

5.3. La reelección de Uribe: un nuevo RP para la continuidad

Este ítem se concentra en el proceso electoral del año 2006. Se observan, en ese sentido, las dos elecciones que acontecieron ese año: las legislativas del 12 de marzo y la presidencial del 28 de mayo. Allí se analizan los porcentajes de votos obtenidos por las fuerzas del oficialismo y de la oposición en las elecciones parlamentarias, como así también la posterior composición de las cámaras legislativas y de qué forma se distribuyeron los apoyos para el presidente.

La victoria electoral del uribismo: un LP con recursos y fortalecido

El debut del Partido de la U fue en las elecciones legislativas del 12 de marzo de 2006. Como es tradicional en Colombia, las elecciones parlamentarias nacionales anteceden a la presidencial en dos meses y se convierten en un termómetro del sentir popular, ya que advierten a los protagonistas sobre las preferencias de voto del electorado. En el pasado, estas elecciones permitían a los partidos tradicionales, debido a su alcance nacional y a sus bastiones regionales históricos, posicionarse como las principales alternativas electorales para la presidencial. Es decir, tanto el PL como el PC solían obtener una numerosa representación que creaba las condiciones de triunfo para el bipartidismo predominante. Sin embargo, debe señalarse que luego de la irrupción política electoral de Uribe esta ecuación comenzó a modificarse de manera gradual.

La elección para senadores y diputados en Colombia se realiza mediante circunscripciones de magnitudes distintas. Los 102 senadores (100 por lista y 2 que corresponden a comunidades indígenas) se eligen en un solo distrito (M es igual a 100). Los 166 diputados se eligen en 33 distritos²⁹², en tanto la magnitud depende del tamaño de la circunscripción correspondiente. Los distritos más poblados son los que adjudican más bancas, ellos son Bogotá (18), Antioquia (17) y Valle del Cauca (13).

²⁹² “Actualmente hay 33 circunscripciones, que equivalen a los 32 departamentos más el Distrito Capital. Cada una tiene derecho a un mínimo de dos curules en la Cámara de Representantes, y una más por cada 365.000 habitantes, y de este número en adelante con una fracción mayor de 182.500. Es decir, se asignarán más curules a aquellos departamentos que tengan más población” (En base al sistema electoral colombiano, en Blanco Castro, 2011: 83).

A su vez, debe señalarse que estas elecciones legislativas fueron las primeras realizadas luego de la reforma política de mediados de 2003 (en octubre del mismo año fueron las regionales). Desde allí que en ambas elecciones (senadores y diputados) la aplicación de las distintas modificaciones tuvieron un impacto inmediato sobre el armado de las listas y sobre el sistema de partidos colombiano. Cómo se explicitó en el capítulo IV de esta segunda parte, las principales reformas realizadas apuntaban a culminar con la atomización partidaria y los micros emprendimientos políticos. La aprobación de las listas únicas (cada partido podía apoyar una sola lista) con “candidaturas preferentes”, es decir, en las que el elector puede incidir en el orden de la lista que seleccione mediante un sistema de preferencias²⁹³, sumadas al umbral del 2% a nivel nacional en las elecciones de senadores, funcionaron en la dirección deseada, ya que la representación partidaria se redujo, la fragmentación intra partido disminuyó y el fenómeno del “carrusel parlamentario”²⁹⁴ también lo hizo con estas modificaciones.

Los resultados electorales del PU en su debut electoral no pudieron ser más auspiciosos. Con menos de un año de existencia, el Partido se convirtió en primera fuerza electoral en las elecciones legislativas a nivel de senadores y obtuvo el segundo lugar en el de la Cámara de representantes (diputados). Con 1.591.775 de votos (es decir, el 17,3%), el PU se alzó con el primer lugar en la elección senatorial obteniendo 20 curules. Atrás quedaron el Partido Conservador y el Partido Liberal, ambos con 18, en el cuarto lugar arribó el aliado gubernamental Cambio Radical con 15 y en el quinto el Polo Democrático con 10 curules²⁹⁵. En la Cámara de Representantes, el PU obtuvo 1.453.353 de votos (es decir un 16,7%), consiguiendo 28 escaños legislativos y alcanzando el segundo lugar en la elección luego del Partido Liberal, que consiguió 31 escaños con el 19%. El tercer lugar

²⁹³ Según un estudio Franco Cuervo y Clavijo Romero, “del 100% de los votos válidos emitidos por partidos (9.117.763), el 94% (8.565.510) fueron votos preferentes y sólo 552.253, el 6% fueron votos de lista” (en Ramírez Peñaloza, 2010: 26).

²⁹⁴ Según López Jiménez: “El carrusel parlamentario puede definirse como aquellas prácticas mediante la cual los congresistas ceden temporal o definitivamente su curul a aquellos candidatos no electos que los suceden en las listas guiados por propósitos de distinto tipo: pago de favores electorales, mejoramiento de la situación pensional de los parlamentarios reemplazantes, dedicación exclusiva de los titulares de las curules a labores partidistas y/ o electorales, entre otros” (López Jiménez, 2007: 71).

²⁹⁵ Datos obtenidos en base a Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia. En línea en: <http://web.registraduria.gov.co/reselec2006/0312/index.htm>.

correspondió al Partido Conservador que obtuvo también 29 cargos, pero con el 15,8% y el cuarto puesto a Cambio Radical que con el 10,7% se llevó 21 escaños²⁹⁶.

Como se observa, en ambas elecciones primó una importante dispersión de las preferencias ciudadanas ya que ninguna de las fuerzas que obtuvieron cargos parlamentarios superó el 20% de los votos. En el caso del Senado, esto se observa en forma nítida, ya que a pesar de que el 83% de las bancas se concentraron en 6 partidos, se reflejaba un significativo corte con el pasado bipartidista colombiano y un aumento de los partidos con representación parlamentaria. En la Cámara de Representantes ocurría algo similar ya que entre siete partidos se distribuyeron el 83% de los escaños y 23 fuerzas obtenían representación parlamentaria²⁹⁷.

La particularidad que tuvo esta elección para el flamante Partido de la “U” fue que para la votación del senado, el partido realizó un concurso de méritos abierto a toda la ciudadanía para conformar el 40% de la lista (RP de estrategia política), mecanismo de selección que se diferenciaba de la tradicional forma de nominación partidaria. Debemos recordar que estas elecciones tenían como elemento innovador que los partidos tenían la potestad de seleccionar el voto preferente como forma de abrir sus listas (lo hicieron la mayoría de las agrupaciones políticas), y que la misma podía no ser necesariamente completada con la totalidad de los cargos en juego. Es decir, no todos los partidos completaron su lista con sus 100 candidatos. Sin embargo, los resultados finales demostraron que “los partidos que incluyeron en sus listas el mayor número de aspirantes obtuvieron un mayor número de curules... y las listas que optaron por incluir la figura del voto preferente tuvieron mayor éxito”²⁹⁸. El caso del PU mostró un dato peculiar ya que los votos a la lista del partido en el Senado fueron mayores a los obtenidos de manera preferencial²⁹⁹, evidenciando que en su mayoría los votantes lo hacía por la “marca PU” en un apoyo explícito al presidente.

La buena cosecha del propio partido del presidente y sus aliados a nivel parlamentario le ofrecía a Uribe un provechoso antecedente para la elección presidencial

²⁹⁶ Datos obtenidos en base a Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia. En línea en: <<http://web.registraduria.gov.co/reselec2006/0312/index.htm>>.

²⁹⁷ Datos obtenidos en base a Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia. En línea en: <<http://web.registraduria.gov.co/reselec2006/0312/index.htm>>.

²⁹⁸ Cardozo y Hernández (2006: 177- 178).

²⁹⁹ El voto a la lista fue de 229.484 frente a la candidata más votada, Dilian Francisca Toro que obtuvo 98.505 de los votos (Cardozo y Hernández, 2006: 176).

que se avecinaba, como así también un sólido respaldo a nivel legislativo. A esta buena performance electoral del PU se sumaban las del Partido Conservador y Cambio Radical, dos agrupaciones políticas aliadas, en la mayoría de los temas, del poder ejecutivo nacional. En este sentido, debe marcarse que la sumatoria de los escaños de los partidos aliados le brindaba al primer mandatario una nítida mayoría parlamentaria en ambas cámaras y presagiaba un contundente triunfo en las elecciones presidenciales. Sin dudas, se trataba de otro RP institucional en manos de Uribe que le permitiría continuar consolidando los cambios institucionales.

Nuevamente, bajo la bandera del movimiento “Primero Colombia”, Uribe se presentaba a la elección prevista para el 28 de mayo de 2006. Esta asociación política contaba con el apoyo del flamante creado PU, Cambio Radical, Alas Equipo Colombia, Convergencia Colombia (partidos menores que para la elección de diputados habían obtenido 8 bancas cada uno), Colombia Democrática (que había aportado a la mayoría parlamentaria presidencial con dos) y el importante sostén del Partido Conservador. El PC, al igual que en la elección presidencial del 2002, declinó su candidatura presidencial y volvió a brindarle a Uribe el apoyo de un partido con alcance nacional y dotado de importantes bastiones regionales.

Bajo el lema “Adelante Colombia”, el presidente iniciaba su campaña electoral, una experiencia inédita para Colombia, ya que por primera vez en su historia contemporánea se estrenaba la figura del “candidato- presidente”. Para evitar que este doble rol operase en la arena electoral como una ventaja para Uribe, la Corte Constitucional sancionó una “Ley de garantías electorales”, que le impidió al primer mandatario la transmisión en vivo y en directo de los Concejos Comunitarios (RP de estrategia política comunicacional generado por Uribe que le dio grandes dividendos) y lo obligó a recurrir únicamente a los canales de cable. Uribe aceptó dicha prohibición y expresó en referencia a la Corte que había abierto la posibilidad de la reelección: “Al buen pagador no le pesan las prendas”³⁰⁰.

Durante la campaña electoral, el candidato de la alianza “Primero Colombia” se aferró a sus líneas históricas de gestión alrededor de la PSD y el Estado Comunitario como forma eficaz de combatir el terrorismo de las FARC y de dotar al Estado del monopolio de la fuerza legítima en los territorios que se iban conquistando de las manos de las AUC y de

³⁰⁰ Tabares (2006: 58).

la propia guerrilla. En ese sentido, el presidente atizó en forma permanente la escisión existente entre el campo de la legalidad (de la cual su espacio político era la representación genuina) y los grupos ilegales, a los que denominó “narcoterrorismo”. Sin lugar a dudas, se trató del principal clivaje explotado por el presidente a lo largo de su primer mandato, el cual fue expuesto durante toda la campaña electoral.

Por otro lado, Uribe intentó, durante las semanas previas a las elecciones, explotar sus principales atributos en torno a un estilo propio de ejercer su poder que aquí denominados RP de estrategia política (de personalidad política). Este estilo se encontraba ligado a un modelo paternalista sustentado en una construcción mediática que lo mostraba como un trabajador incansable y cuya más importante preocupación era el bienestar social de su pueblo. Este argumento se evidenciaba cuando el presidente exaltaba la unidad nacional como requisito previo para vencer al terrorismo, utilizando, en la mayoría de los casos, “un lenguaje beligerante y provocador que lo acercaba a los sectores populares”³⁰¹.

Las fuerzas políticas de la oposición no lograron arribar a acuerdos electorales para presentar un único candidato para enfrentar al presidente Uribe, y tanto el ex embajador de Colombia en la OEA, el liberal Horacio Serpa, como el candidato del Polo Democrático Auténtico (PDA), Carlos Gaviria, presentaron sus fórmulas presidenciales por separado, restando posibilidades concretas de competitividad al campo opositor. Esta ausente unidad de fuerzas en la oposición política al oficialismo no hizo más que agrandar las posibilidades de triunfo de Uribe, quien pudo concentrarse en la elección sabiendo de la debilidad de la oferta antagonista. En ese sentido, continuó con su agenda de gobierno y fijó por la mañana el horario para las entrevistas radiales como candidato, ninguneando a la oposición al negarse a participar en todos los debates televisivos “argumentando que el debate era de cara al pueblo”³⁰².

Finalmente, el 28 de mayo de 2006 se realizaron las elecciones nacionales y el triunfo de Álvaro Uribe fue histórico y arrollador. El candidato de “Primero Colombia” obtuvo 7.397.835 de votos, lo que equivalía al 62.2% del total, por lo que no necesitó disputar una segunda vuelta, ya que superó holgadamente el requisito del 50,01% de los votos. En segundo lugar, y a más de 40% de diferencia, se ubicó el candidato del PDA,

³⁰¹ Galindo Hernández, (2007: 157).

³⁰² Escamilla y Holguín (2009: 171).

Carlos Gaviria, quien consiguió 2.613.157 de votos, es decir, el 22% de los sufragios, superando el piso histórico de la izquierda colombiana y dándole continuidad al éxito electoral de la alianza que ya había obtenido una buena performance en las regionales del 2003. El tercer lugar correspondió al liberal Serpa, con 1.404.235 de votos, lo que constituía un pobre 11,84% del total de sufragios³⁰³ y una de las peores elecciones del liberalismo durante toda su historia. La abstención electoral fue del 54,95%, una cifra dentro del promedio de las últimas elecciones presidenciales³⁰⁴. El triunfo del primer mandatario significó no sólo superar el record histórico de votación de un presidente colombiano, sino también un sólido respaldo a Álvaro Uribe para continuar y profundizar su política de Seguridad Democrática en el marco de la guerra frente a la guerrilla.

El lunes 7 de agosto, luego de repetir su cotidiana tarea de levantarse a las 4 de la mañana, desayunar con su familia y preguntar por el orden público, asistió a una ceremonia religiosa en la que oró frente a la imagen del Divino Niño, para más tarde dirigirse al Palacio para jurar por segunda vez consecutiva al frente del ejecutivo colombiano. Por primera vez en la historia, le tomó juramento una mujer, la presidenta del Senado, la uribista Dilian Francisca Toro, y el discurso de posesión respetó el tópico de los últimos años: prioridad a la seguridad, defensa del estado de derecho, reivindicación de los valores de la tolerancia, la búsqueda de la paz, entre los más importantes.

El líder Álvaro Uribe comenzaba su segundo mandato con poderes superiores a los que tenía al inicio de su primera presidencia en el 2002, fuertemente legitimado en las urnas y con recursos de poder suficientes para avanzar en su gestión de gobierno. El apoyo popular, el control sobre las Fuerzas Armadas, la mayoría parlamentaria, los altos grados de popularidad y una oposición con pobres recursos de poder institucionales eran las fortalezas más significativos del presidente en funciones.

³⁰³ Más lejos quedaron Antanas Mockus del Movimiento Alianza Social Indígena con el 1,23%, Enrique Parejo González del Movimiento Reconstrucción Democrática Nacional con el 0,35%, Álvaro Leyva Duran del Movimiento Nacional de Reconciliación con el 0,15% Carlos Arturo Rincón Barreto del Movimiento Comunal y Comunitario de Colombia con el 0,12%” (datos obtenidos en base a Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia. En línea en: <<http://web.registraduria.gov.co/reselec2006/0312/index.htm>>).

³⁰⁴ Las elecciones desde 1990 muestran resultados similares en cuanto a la participación ciudadana. La tasa de presentismo en 1990 fue de 43,4%, en 1994 de 43,3%, en 1998 fue de 51,1% y en el 2002 de 46,4. Datos obtenidos en base a Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia. En línea en: <<http://web.registraduria.gov.co/reselec2006/0312/index.htm>>.

Recapitulando, las elecciones de marzo de 2006 implicaron el debut exitoso del partido del presidente, el PU y mostraron que los apoyos al primer mandatario se mantuvieron en un nivel alto. Tanto el PU como los partidos aliados Uribe se convirtieron en mayoría en la sumatoria de escaños en el contexto de una elección fragmentada y con alta representación de partidos, consecuencia de la erosión del bipartidismo tradicional. Esta victoria oficialista le permitió al presidente aumentar los recursos de poder institucional y esperar con expectativas razonables de triunfo a la elección de mayo.

La votación presidencial fue un éxito rotundo para Uribe y marcó un record histórico para una elección presidencial. Con el 62% de los votos (recurso de apoyo popular/ ciudadano), el primer mandatario obtuvo la mayor cantidad de votos en la historia electoral colombiana y se convirtió en el segundo presidente en alcanzar la reelección (recurso de estrategia política) a lo largo de la democracia del país. Con un apoyo abrumador de votos, Uribe comenzó su segunda presidencia en un contexto marcado por la existencia de numerosos recursos en su haber y la confianza de vastos sectores sociales y políticos en su figura.

Conclusión

Los recursos de poder de Álvaro Uribe durante la primera parte de su presidencia fueron abundantes para avanzar en su estrategia frente a los grupos irregulares. En este sentido, el primer mandatario contó a nivel institucional con un compacto sostén parlamentario y de gobernadores (basado en una coalición transversal de partidos), con el apoyo de los medios de comunicación y empresarial, quienes bregaban al unísono por mayor seguridad para sus inversiones y negocios y con el sostén de las Fuerzas Armadas, a las cuales Uribe modernizó y le brindó apoyo financiero para su ofensiva militar contra la guerrilla. La negociación con los grupos paramilitares, se trató de otro de los dominios de Uribe que permitían comprender la fortaleza presidencial en estos años.

La economía durante este periodo, al igual que la mayoría de las sudamericanas, mostró un crecimiento importante en varios de sus índices productivos. La “confianza inversionista”, el lema de campaña del presidente, comenzaba a mostrar resultados al compás de los éxitos militares frente a las FARC y la desmovilización paramilitar, y daba lugar al crecimiento de la figura de Uribe como un estadista que debía continuar en sus funciones. La Constitución colombiana prohibía explícitamente la reelección presidencial, y luego de varios cabildos, los partidos y simpatizantes del presidente lanzaron la reforma constitucional para habilitar un segundo mandato presidencial. Uribe, que en un principio se mostró reacio a la iniciativa, dio finalmente la venia para avanzar en esa reforma.

La creación del PU, sin lugar a dudas, le significó al primer mandatario un recurso institucional necesario para unificar los apoyos en torno de su gobierno. En esa estructura política comenzaron a confluír los distintos grupos que apoyaban la gestión de gobierno del presidente y el impulso dado por éste al partido, le permitió cimentar una estructura de poder unificada y disciplinada en torno a su figura.

Otro de los recursos de poder obtenidos por el primer mandatario durante esta etapa fue la habilitación constitucional para presentarse a un segundo mandato presidencial (RP de estrategia política). La aprobación de la reforma constitucional con la finalidad de eliminar la cláusula que impedía la reelección contó con el apoyo transversal de partidos aliados al gobierno. Luego de evitar pronunciarse sobre el tema y de negar su voluntad de continuar por un nuevo periodo al frente del poder ejecutivo durante los primeros años de gobierno, Uribe avanzó en un apoyo decidido a la reforma reflejando un cambio de

posición que se sustentaba en que “cuatro años no son suficientes”³⁰⁵. La reforma fue aprobada a finales de diciembre de 2004 por el parlamento y refrendada por la Corte Constitucional en octubre de 2005.

El 2006 fue para Uribe el año de la consolidación de su gobierno en la arena electoral. Durante el primer semestre se realizaron las elecciones legislativas y presidenciales en el orden que estipulaba la constitución colombiana. La votación de representantes de Cámara y de senadores le reparó excelentes dividendos al presidente, ya que la suma de los votos del PU más la de los aliados le permitió garantizarse una mayoría legislativa suficiente para encarar su segundo mandato. A pesar de la dispersión de votos (el 20% fue el partido con mayor volumen de sufragios), el partido de Uribe logró una muy buena cosecha de votos, convirtiéndose, en su primera excursión electoral, en primera fuerza en el Senado y segunda en Cámara. La alta popularidad, un RP de apoyo popular/ciudadano del primer mandatario, tuvo una traducción directa en la cantidad de apoyos y escaños parlamentarios y que se convirtieron en recursos de poder institucionales para el segundo mandato del presidente.

La elección presidencial realizada en mayo de 2006 tuvo el resultado que casi todo el mundo imaginaba: Uribe triunfó de un modo rotundo e inobjetable. Con un porcentaje histórico superior al 60% y con una distancia mayor a 40 puntos del segundo, el líder antioqueño logró, por segunda vez en la historia política colombiana, una reelección que le permitió completar un periodo de ocho años en forma consecutiva en el gobierno.

El 7 de agosto de 2006, Álvaro Uribe juraba por segunda vez con un sostén abrumador de votos, con numerosos recursos de poder institucionales en sus manos y con índices de popularidad inéditos para un político colombiano. Con la bandera de la Seguridad Democrática, el Estado Comunitario y con una economía que se recuperaba de la crisis de fin de siglo, el líder antioqueño comenzaba su segundo mandato presidencial.

³⁰⁵ Tabares (2006: 37).

LAS SEGUNDAS PRESIDENCIAS

CAPITULO VI

EL PSUV: UN RP PARA LOS NUEVOS TIEMPOS (2007-2008)

“Yo les pido que ustedes me ayuden a conformar la vanguardia mía, la vanguardia no sólo del Partido Socialista que es lo más importante, también la vanguardia de Chávez para el trabajo político, allá directo en las comunidades, directo en la comuna”

Hugo Chávez (Caracas, 2007)

Introducción

Este capítulo se concentra en la construcción partidaria del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), un RP institucional creado por el primer mandatario con el fin de agrupar los apoyos oficiales detrás de su figura y en el proceso eleccionario desarrollado entre finales de 2007 y principios de 2009 examinando los recursos de poder que utilizó y generó Chávez para llevar adelante su gestión de gobierno en este contexto.

Luego del triunfo electoral de diciembre de 2006, Chávez propuso la unificación de todos los partidos que habían apoyado su gobierno desde el inicio del proceso en una única herramienta partidaria. En ese marco, en los primeros dos ítem se relata todo el proceso de constitución partidaria en los diferentes niveles y de qué forma los distintos partidos que sostuvieron desde el inicio a Chávez (PCV, PPT y Podemos) debieron ajustar sus organizaciones con la finalidad de fusionarse en el interior de esta flamante estructura partidaria. Asimismo se presta atención a los discursos del presidente (RP de estrategia política comunicacional), con el objetivo de visualizar de qué manera va a entender el líder venezolano la concepción partidaria del PSUV, como así también su rol en el interior de la misma.

En el último ítem se analiza todo el proceso del referendo anunciado por el presidente luego del triunfo electoral de diciembre de 2006, desde el proyecto enviado por el poder ejecutivo, las modificaciones y agregados realizados por la Asamblea y la elección del 2 de diciembre de 2007. A su vez, se examinan, por un lado, las razones de la derrota en dicha elección mediante un análisis de los datos y del comportamiento electoral, y por el otro, las rectificaciones que realizará el presidente para recomponer su gobierno luego de la primera caída electoral de su historia política.

6.1. La revolución bolivariana se institucionaliza

Este ítem analiza el proceso de conformación partidaria del PSUV observando, en primer lugar, las peripecias de la fusión de los partidos aliados al gobierno, y en segundo término las estructuras creadas para la construcción del PSUV. A su vez, se presta atención al discurso presidencial (RP de estrategia política) durante toda la etapa de organización partidaria con el fin de identificar la importancia que el primer mandatario le adjudica a la unidad de fuerzas en el interior del oficialismo gobernante.

Hacia la consolidación partidaria del chavismo: la fusión de los partidos

Luego del resonante triunfo electoral del 3 de diciembre de 2006, el octavo consecutivo desde que asumiera la presidencia, Hugo Chávez expresó su deseo de conformar un nuevo partido apoyado en la confluencia de todas las agrupaciones políticas que sustentaban, de distintas maneras, el proyecto bolivariano. La idea principal de esta iniciativa presidencial era la de articular la totalidad de los apoyos partidarios en una única estructura política. De esta forma, se le daba continuidad al “salto hacia adelante” de principios del año 2005 y se originaba una organización unificada en torno al primer mandatario y a su proyecto del socialismo del siglo XXI. Así lo declaraba el líder bolivariano: “por eso sostenemos que después del triunfo del 3 de diciembre, hemos recibido sin duda el mandato del pueblo para apretar el acelerador, para avanzar sin descanso en la vía hacia una Venezuela socialista, hacia un Estado de equidad y de justicia, con agilidad, transparencia y eficiencia en la administración del Gobierno”³⁰⁶

En el primer acto público desde el triunfo electoral, el líder venezolano expresaba que “necesitamos un instrumento político al servicio del pueblo y la revolución, al servicio del socialismo. Nosotros necesitamos, para esta nueva era que comienza, una estructura política, un instrumento político que se ponga al servicio, no de parcialidades ni de colores; sino al servicio del pueblo y la Revolución, al servicio del socialismo”³⁰⁷.

El discurso del 15 de diciembre, en el tradicional Teatro Teresa Carreño, será central para comprender los futuros pasos políticos de Chávez, ya que allí planteó con toda

³⁰⁶ Chávez (2007: 28).

³⁰⁷ Chávez, Discurso en el Teatro Teresa Carreño (2006, 2).

claridad cuáles serían las bases, la ideología y la constitución interna del partido a conformarse. En este sentido, emergían los componentes cardinales de la nueva organización política: la unidad y la fusión en derredor de un único partido, como propuesta para aunar criterios, metodologías y estrategias bajo una gran estructura nacional.

Con esa lógica lo expresaba Chávez: “Si bien es cierto que un frente político implica integrar en una unidad a varios partidos políticos que comparten un programa político común; sin embargo, esos partidos conservarían sus estructuras, su autonomía organizativa, sus propios comandos. No olvidemos la experiencia chilena. La Unidad Popular era un frente político y, mientras los enemigos del proceso se unían para atacarlo, las contradicciones entre los diversos partidos de esa coalición política, las líneas diferentes que se seguían dentro de un mismo ministerio, de acuerdo al color político de quien ocupaba cada cargo, debilitaron seriamente al gobierno del presidente Allende”³⁰⁸.

En el mismo sentido, el presidente venezolano advertía sobre las posibles resistencias que podría generar en los partidos aliados integrarse en este nuevo espacio político a costa de perder su identidad de filiación. Sin embargo, indicaba que la legitimidad de este proceso se encontraba en el liderazgo que lo conducía, por lo que manifestaba que “me preocupó cómo se estaba enfocando la discusión cuando vi en televisión a algunos diciendo [luego de las elecciones del 3 de diciembre]: ‘Nuestro partido sacó no sé cuántos votos y el otro sacó tantos’. Eso me preocupó porque sentí que esas palabras no ayudaban a la unidad del pueblo. ¡Esos votos no son de ningún partido, son de Chávez! ¡No dividamos al pueblo! ¡Unámoslo cada día más!”³⁰⁹.

En cuanto al proceso de integración que dotaría de una mayor unidad al espacio oficialista, Chávez se mostraba contrario a un armado frentista, ya que la idea de una alianza de partidos lastimaría la identidad política del espacio superior, generando mayores tensiones internas, multiplicando las divisiones ante cualquier temática. Por ello, sostenía que “el proceso revolucionario bolivariano necesita un partido; no una sopa de letras. Se necesita una conducción única, que apuntemos todos en la misma dirección. Necesitamos un instrumento político que una voluntades y que no se desgaste en luchas intestinas”³¹⁰.

³⁰⁸ Chávez, Discurso en el Teatro Teresa Carreño, (2006, 2).

³⁰⁹ *Ibíd.* (2006: 2).

³¹⁰ *Ibíd.* (2006: 5).

Una vez definida de manera nítida la necesidad de la unidad en torno de una estructura superadora, el líder bolivariano propuso la manera en la cual la fuerza debía constituirse internamente. El esquema organizativo planteado por Chávez para el nuevo partido debía ser similar al Comando Miranda durante la campaña electoral de 2006, conocido como de “Batallones y Pelotones”. El mismo consistía en un sistema de militantes de base organizados en agrupaciones que, a su vez, estaban integradas dentro de otras mayores. En este sentido, recordó cómo se había desarrollado este esquema durante la campaña electoral al conmemorar que el total de batallones activos había sido de once mil y el de pelotones unos treinta y dos mil, “y me consta que trabajaron, y a ustedes les consta más que a mí que trabajaron activamente todos esos días y noches, calle por calle y cómo batallaron el 3 de diciembre desde la madrugada, la logística, la votación, el cuidado de los votos, todo eso, ¡Hay que ver el esfuerzo organizativo que esto significó!”³¹¹.

Finalmente, y luego de arduos debates que incluyeron distintas posiciones en el interior de estos armados políticos, las fuerzas aliadas al chavismo decidieron fundirse en una sola agrupación política y denominarse como Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV). Los partidos que aceptaron la fusión fueron: el creado por el presidente Chávez para sus primeras elecciones y mayoritario MVR, el Movimiento Electoral del Pueblo (MEP), la Liga Socialista (LS), el Movimiento Tupamaro (MT), la Unidad Popular Venezolana (UPV), el Movimiento Independiente Ganamos Todos, la Corriente Marxista Revolucionaria (CMR), todos ellos partidos minoritarios.

El partido Patria Para Todos (PPT), el Partido Comunista de Venezuela (PCV) y el Partido por la Democracia Social (PODEMOS) tuvieron mayores debates internos y se fueron incorporando en los meses siguientes. Estas tres agrupaciones políticas que, entre

³¹¹ Chávez, Discurso en el Teatro Teresa Carreño, (2006, 5). Un interesante análisis del discurso realizado por Cortes, Materán y Méndez (2008: 6- 7) observa que del análisis del discurso pronunciado por el presidente venezolano el 15 de diciembre de 2006 los autores evidencian que de un total de 35 referencias realizadas al contexto histórico, electoral y político bajo el cual se basó el discurso, “18 corresponden a información positiva acerca del Chavismo y Chávez (51, 4%); 10 corresponden a información negativa sobre la Oposición y sus Líderes (28,6%); 4 corresponden a información positiva sobre la Oposición y sus Líderes (11,4%); y 3 corresponden a información negativa sobre el Chavismo y Chávez (8,5%)... (a su vez)... un total de 59 referencias, de las cuales 13 corresponden a Pasajes y Personajes Históricos (22%); 13 se refieren al PSUV y Socialismo (22%); 11 corresponden a Personalización (18,6%); 9 corresponden a Anécdotas Personales (15,3%); 8 están referidas a Política Internacional (13,6%); 4 corresponden a Religión (6,8%); y 1 se refiere a Reforma Constitucional (1,7%)”.

ellas, aportaron el 14,6% de los votos³¹² en la elección presidencial de 2006 y que acompañaron al gobierno desde los primeros años, tuvieron en su interior varios procesos de escisiones y crisis, para más tarde integrarse plenamente al PSUV³¹³. Según Jesús Azcargorta e Ivo Hernández, “el proceso de construcción del PSUV ha supuesto la puesta en marcha de una estrategia deliberada de debilitamiento de la estructura y la militancia de los partidos minoritarios más significativos de la coalición oficialista: Podemos, PPT y el Partido Comunista de Venezuela (PCV)”³¹⁴.

El periodo que se extiende entre el discurso fundacional del Chávez de diciembre de 2006 y agosto de 2007 será el lapso en el cual el PSUV conformará su fisonomía interna y que dará lugar al primer Congreso General de la flamante fuerza política. Podemos indicar que este proceso se desarrolló en tres fases: la primera se inició a partir de la inscripción de aspirantes a militantes (también conocidos como propulsores) del Partido; la segunda etapa comenzó con la conformación de los batallones del Partido y concluyó con la elección de delegados al Congreso fundacional; en tanto que la última fase se extendió desde el Congreso hasta la elección de la Dirección Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela. La nomenclatura elegida para nombrar a los integrantes del PSUV remitía a la formación militar de su creador y marcaba la concepción desde la cual dicho espacio partidario había sido fundado.

La primera etapa de conformación partidaria comenzó a mediados de enero con la elaboración de las planillas de inscripción para el proceso de registro de la militancia del PSUV. Con el objetivo de coordinar con los sectores políticos el método de creación del flamante partido, el 15 de febrero se conformó la Comisión Promotora, integrada por los principales cuadros políticos del chavismo³¹⁵. El 5 de marzo, el presidente dio inicio al

³¹² El Partido Podemos obtuvo 759.826, es decir, el 6,53%, el PPT 597.431, el 5,13% y finalmente el PCV 342.227, el 2,94%. Datos obtenidos en base al Consejo Nacional Electoral. En línea en: <www.cne.gov.ve>.

³¹³ El recorrido histórico de estos partidos lo describe López Maya (2008: 60): “En 2001 se dio una división en el MAS, yéndose del gobierno una parte y otra manteniéndose hasta 2006 con el nombre de Podemos, que luego también tomó distancia. El PPT rompió con Chávez en 2000 para en 2001 regresar y sellar una alianza estable... En 2007, ya en el segundo gobierno del Chávez, el PPT sufrió un significativo debilitamiento cuando una porción de su dirigencia se separó para incorporarse, a instancias del Presidente, en el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV). La mayoría de los otros partidos de la alianza, salvo el PCV, todos de poca significación electoral, y muchos de ellos creados para apoyar al Presidente en los años conflictivos de 2001-2004, se disolvieron en 2007 para integrarse al PSUV”.

³¹⁴ Azcargorta y Hernández, (2007: 20).

³¹⁵ La Comisión estaba integrada por Hugo Chávez, José Vicente Rangel, Luis Reyes Reyes, Titina Aguaje, Freddy Bernal, Francisco Arias Cárdenas, Diosdado Cabello, David Colmenares, William Farina, Pedro

proceso de formación del Partido, que tendría una duración de nueve meses. En esta primera fase se realizó la designación de los propulsores del PSUV y en un acto público, el 24 de marzo, se les prestó juramento a los primeros 2.398 militantes, cuya selección exigía no poseer militancia política previa.

En el segundo acto, realizado el 19 de abril en el Poliedro de Caracas, se le tomó juramento a un segundo grupo de propulsores compuesto por 16.786 personas. En ese escenario, el líder bolivariano expresó que uno de sus principales objetivos para el Partido, de cara a su definitiva conformación, era convertirlo en una estructura organizativa gigantesca: “Este partido, compañeros, compañeras, va a ser el más grande partido de la historia política de América, del continente americano, y no más grande por su tamaño -que va a ser un partido de gran tamaño-, sino el más grande por su conciencia, por su fuerza, por su capacidad para impulsar un verdadero proceso revolucionario; el más grande partido revolucionario, el más grande partido antiimperialista, el más grande partido socialista de la historia, no sólo de Venezuela sino del continente americano todo y de buena parte del mundo”³¹⁶.

Durante su alocución, el presidente venezolano planteó las principales actividades que darían origen al PSUV, y explicó que el partido debía nacer a través de un proceso que tendría en las bases a su principal fuerza motora. En este sentido, proponía extender hasta principios de junio la fecha tope para la inscripción de propulsores, para luego dar lugar a la creación de los batallones socialistas. El camino a seguir para el presidente sería el siguiente: “Luego que termine la inscripción, los 16 mil, casi 17 mil propulsores que somos debemos ampliarnos a una cantidad cercana a los 70 mil propulsores, vamos a llegar a casi 70 mil propulsores para una segunda ofensiva, una ofensiva desde las bases. Por todas partes, que no quede una calle, que no quede un pueblo, un caserío donde no llegue el impulso propulsor de la Revolución a través del Partido Socialista... Juramentaremos a ese conjunto mucho mayor para que salgan a conformar los 22 mil batallones socialistas por todo el país, que tendrá nuestra organización a nivel nacional, casi 70 mil propulsores para instalar las asambleas de los batallones socialistas que deben comenzar desde el mismo 2 de

Carreño, Guillermo García Ponce, Jorge Rodríguez Gómez, Roberto Hernández, Alí Rodríguez Araque, Alberto Muller Rojas, Jesús Paz Galárraga y Héctor Navarro.

³¹⁶ Discurso de Hugo Chávez en el Poliedro de Caracas, (2007: 13).

junio... Y desde el 2 de junio cuando termina el proceso de inscripción comienza, hasta el 7 de julio, el proceso de asambleas de batallones socialistas”³¹⁷.

Entre el 2 de junio y finales de julio se desarrolló la segunda etapa con el proceso de conformación de los batallones socialistas, el nombramiento de los voceros y voceras y la elección de delegados al Congreso fundacional del Partido. Una vez culminado el proceso de inscripción los propulsores desaparecían como figura partidaria y se incorporaban a los distintos batallones socialistas.

La mecánica de selección de autoridades, por lo tanto, volvía a tomar como principio a las bases del Partido. Estas fueron las encargadas de la constitución de los 22.000 batallones. Cada uno de estos batallones socialistas³¹⁸ se estructuraba con aproximadamente 200 militantes o aspirantes a militantes, y tenía como función el registro y censo de los futuros militantes, simpatizantes y cuadros (en barrios, campos, fábricas, liceos y universidades, entre otros espacios). A su vez, cada batallón elegiría, a través de sus distintas asambleas³¹⁹, a un representante denominado “vocero” para la Asamblea Regional. Estos 22.000 voceros, a su vez, seleccionarían mediante asamblea a los 2.200 delegados y delegadas para dar inicio, finalmente, al Congreso Fundacional del PSUV.

Este proceso de conformación, de la base hacia la pirámide partidaria, era graficado por Ali Rodríguez y Alberto Muller (2007: 120) de esta manera: “Son esas unidades, que han recibido la denominación militar de batallones, por ser este tipo de unidad castrense la que ejecuta las acciones tácticas, demandadas por la actividad política, y su correlato estratégico, las que generan los circuitos socialistas como espacios para su acción, y escogen directamente sus voceros, para mediante redes de acción, realizar actividades más profundas en tiempo y espacio. Mientras estos voceros en asamblea seleccionan sus

³¹⁷ *Ibíd.* (2007: 13).

³¹⁸ La estructura interna, de cada batallón está integrada por un vocero que oficia de conducción y por 4 comisiones (que cuenta con 1 comisionado por cada una de ellas) de índole política ideológica, organización y logística, propaganda y trabajo social. A su vez, cada diez batallones se conforma una circunscripción socialista.

³¹⁹ Cada batallón socialista realizó tres asambleas, cada una con un objetivo diferente. En la primera asamblea: se realizaron las jornadas de debate, selección del director de debate y del relator de la asamblea, y la apertura de la lista de aspirantes a militantes situados en el batallón socialista. En la segunda asamblea se realizó un debate para definir las bases ideológicas y estructurales del PSUV. Y en la tercera asamblea se realizó la elección de los voceros y comisionados del batallón.

delegados, para proporcionarle a la organización una dirección colectiva que oriente su acción política y estratégica en el contexto del Estado, e internacionalmente”³²⁰.

A finales de abril se inició la inscripción de los aspirantes a militantes, empezando en el Estado Lara y en el Distrito Capital, para luego ir desplegándose progresivamente en el resto de los estados. Este proceso culminó el 10 de junio de 2007, con la inscripción de 5.669.305 de aspirantes a militantes, cifra cercana al 80% de los votos obtenidos por Chávez en la elección presidencial del 2006. Esta cifra señaló la importancia y el éxito del primer mandatario en la convocatoria y el alto nivel de organización en la generación de este nuevo RP.

El proceso de organización partidaria contó con la asistencia técnica del Consejo Nacional Electoral (CNE) mediante la instalación de más de 10.000 máquinas en unos 3.700 centros distribuidos en todo el país, por lo que quedó asegurada la transparencia en la elección de autoridades. El líder bolivariano se expresaba en esa dirección “[Este proceso electoral] no va a ser así con un papelito que alguien anota o que levanten la mano y contamos, no. Con toda la tecnología, con el capta huellas, la identificación de cada quien y las votaciones. Nosotros afortunadamente hoy tenemos uno de los sistemas electorales más avanzados y transparentes de todo el mundo, el sistema electoral venezolano”³²¹. A su vez, reiteraba la misión que debería tener el próximo Congreso Fundacional y el papel que tendrían, en ese ámbito, los batallones socialistas ya que éstos “pasan a ser la base fundamental operativa del gran Partido Socialista y más nunca deben desactivarse los batallones socialistas en las comunidades, en las fábricas, en las escuelas, en las universidades, en los campos, en los sembradíos, en todas partes... [En el Congreso]... tendrá que decidirse todo, desde las siglas del partido, el nombre del partido, el programa del partido, el fundamento ideológico del partido, el plan de acción estratégica del partido, el plan de acción táctica del partido, el plan de acción internacional del partido. Y además habrá que afrontar con profundidad democrática la designación de la directiva del partido, la directiva”³²².

Dados los primeros pasos hacia la constitución del PSUV, Chávez lograba generar un nuevo RP institucional en vista a avanzar hacia el socialismo del siglo XXI con una

³²⁰ Rodríguez Araque y Muller Rojas (2008: 120).

³²¹ Discurso de Hugo Chávez en el Poliedro de Caracas, (2007: 26).

³²² *Ibíd.* (2007: 26).

estructura sólida, monolítica y disciplinada detrás de su LP. La necesidad de abrir nuevos horizontes en el desarrollo económico y social del país requería de un apoyo consolidado y unido en torno a su liderazgo.

Recapitulando, luego del triunfo electoral en las presidenciales de diciembre de 2006, el líder bolivariano postuló la necesidad de contar con un partido unificado detrás de su figura. En ese sentido, a través de los varios discursos realizados durante la primera parte de 2007, convocó a los partidos aliados a fusionarse en una estructura mayor: el Partido Socialista Unido de Venezuela. El objetivo de reunir los apoyos al gobierno en derredor de una estructura política propia era la prioridad marcada por el primer mandatario. La construcción del PSUV se desplegaría a partir de la creación de batallones y pelotones, que serían los cimientos del edificio partidario a partir del cual se desarrollaría la estructura.

La creación de esta herramienta partidaria significó para el primer mandatario la generación de un nuevo RP. La pretensión de Chávez de construir el partido más grande de Sudamérica iba de la mano de la necesidad de dotar de unidad interna a sus apoyos para los objetivos que se vislumbraban a futuro: una nueva reforma constitucional que habilite la reelección indefinida y la edificación de un nuevo proyecto de país, a partir de modificaciones sustanciales en la estructura económica y social de la nación.

6.2. Un nuevo RP: nace el PSUV, el Partido más grande de Sudamérica

Este ítem presta atención, por un lado, al nacimiento del PSUV luego de todo un proceso de selección de miembros partidarios a partir de las bases, y por otro a la influencia cada vez mayor de los militares dentro del proyecto chavista. En cuanto a la génesis del Partido de gobierno, se observa de qué manera se desarrolla el proceso final de selección de candidatos a la Junta directiva. En cuanto a los militares, se analiza el predominio que va obteniendo este RP institucional del primer mandatario, medido en cantidad de cargos e incentivos estatales. Por último, el ítem examina las peleas de Chávez con distintos líderes internacionales en un contexto conflictivo en el interior del país.

Un nuevo RP para el socialismo del Siglo XXI

Debido a la realización de la Copa América de Fútbol en Venezuela entre el 26 de junio y el 15 de julio, el proceso de conformación partidaria del PSUV tuvo que posponer los tiempos originales. Recién el 29 de septiembre de 2007 se realizó la elección de voceros en cada batallón, y cada circunscripción socialista eligió a un delegado para que la representara en el Congreso Fundacional. De esta manera, se iniciaba la última etapa que derivaría en la elección de la Comisión directiva del PSUV

Durante ese mismo mes, fue creado el Comité Disciplinario Provisional del Partido, que venía a ratificar el componente intransigente que debía ser motor en esta instancia de conformación partidaria. Las disidencias internas seguían emergiendo alrededor del proceso de fusión partidaria, ya que algunos partidos continuaban mostrándose reticentes (en especial los de mayor caudal de votos) al proceso de unificación, y el líder bolivariano declaraba, ante las críticas que suscitaba esta fundición, que “he pasado a Consejo Disciplinario a un dirigente nacional que aspira a ser del partido por andar hablando pistoladas. Voy a estar muy atento... El pensamiento crítico es fundamental para una revolución, pero eso es una cosa muy distinta a andar hablando mal del partido que no ha nacido, recogiendo firmas para presentarlas no sé dónde. El que quiera ser un anarquista váyase de aquí, no lo queremos, aquí se requiere una militancia creativa pero

disciplinada”³²³. Una vez más, el líder bolivariano resaltaba la disciplina como el vehículo que le daría solidez a la flamante estructura partidaria.

El 10 de octubre, durante un encuentro Nacional de Voceros y Voceras del Partido, el presidente recordó que el proceso de incorporación de militantes fue de “casi 6 millones de ciudadanos en edad de votar”. La cifra total representaba el 35,5% de los venezolanos inscritos en el Registro Electoral y un 75% de los votos obtenidos por Chávez en la última elección presidencial (Ellner, 2010: 32). La composición interna de los afiliados del PSUV mostraba un componente mayoritariamente joven y proveniente de sectores populares y medios. Según la página oficialista Aporrea, “de los casi 6 millones 56% son mujeres. Y 44% son hombres. El promedio de edad es de 35 años. Grado de instrucción 37% educación básica, 31% educación media (bachilleres), 17% profesionales universitarios y 4% técnicos medios”³²⁴.

Finalmente, el 12 de enero de 2008 se realizó -en el Cuartel San Carlos- el Congreso Fundacional del PSUV. Los 1.681 delegados presentes, elegidos desde las bases partidarias, fijaron como principales objetivos la realización de la declaración de principios, la definición de los estatutos, la formulación del programa, los mecanismos de selección de los candidatos a cargos de elección popular y la elección de las autoridades transitorias del Partido. Comenzaba la última etapa del proceso de creación del partido, un nuevo RP generado por el primer mandatario venezolano para la nueva etapa que se avecinaba pletórica de iniciativas oficiales (la reelección indefinida y la construcción del socialismo del siglo XXI).

Durante los meses de enero y marzo se realizaron seis jornadas plenarios que abarcaron toda la problemática partidaria. En las dos primeras, se inició la discusión sobre la declaración de principios del partido y se debatieron temáticas como la forma de derrotar la pobreza, el ejercicio de poder, el contenido del programa del partido, la construcción del socialismo y la defensa de la revolución. Durante la cuarta jornada, el Presidente Chávez le solicitó al Congreso Fundacional sancionar a aquellos aspirantes a militantes que, sin esperar a que se desarrollara el reglamento para las primarias partidistas, hubieran iniciado campañas políticas anticipadas con vista a las elecciones regionales del 2008, ya que “hay

³²³Trasnational Institute, en línea en: <http://www.tni.org/detail_page.phtml?act_id=17342#4a>.

³²⁴Aporrea en línea en: <<http://www.aporrea.org/ideologia/n102853.html>>.

que acusarlos de traidores a la revolución, porque están detrás de proyectos personales... los que andan con candidaturas prematuras se convierten en contrarrevolucionarios, porque lo que están aflorando es una ambición personal”³²⁵.

En la quinta jornada se eligió como presidente del PSUV a Hugo Chávez, y se decidió que la Asamblea de delegados y delegadas, que había dado génesis al Congreso Fundacional, fuera la máxima autoridad del Partido. A su vez, se resolvió que la cantidad de autoridades transitorias del PSUV sería de 69 candidatos (para lo cual cada delegación de los 23 estados presentó a tres candidatos), entre los cuales fue elegida la Junta Directiva transitoria del Partido compuesta por 15 integrantes. Sin embargo, “la lista [fue] sometida a consideración de Hugo Chávez para que le dé aprobación”³²⁶. En la sexta y última jornada del Congreso Fundacional se aprobaron los estatutos del Partido y se estableció la elección de la Junta Directiva Nacional para la segunda semana del mes de marzo de 2008.

Finalmente, el 9 de marzo, 87.467 electores (voceros, comisionados y directivos) en 600 mesas electorales de todo el país dieron vida a la Junta Directiva provisoria del PSUV. Los quince candidatos con mayor cantidad de votos, elegidos para ser autoridades transitorias durante un año, fueron: Adán Chávez, Vanesa Davies, Carlos Escarrá, Erika Farías, Cilia Flores, María Cristina Iglesias, Aristóbulo Istúriz, Elías Jaua, María León, Antonia Muñoz, Nohelí Pocaterra, Alí Rodríguez Araque, Héctor Rodríguez, Jorge Rodríguez y Mario Silva. El vicepresidente designado del partido, Alberto Müller Rojas, expresó que “el PSUV será un partido de multitudes, con tres tareas fundamentales:

³²⁵ Agencia Venezolana de Noticias, en línea en: <http://www.abn.info.ve/go_news5.php?articulo=118216&lee=18>.

³²⁶ El Tiempo de Venezuela, en línea: <<http://www.eltiempo.com.ve/noticias/default.asp?id=141129>>. El “dedo” de Chávez a la hora de conformar la Directiva Provisoria del PSUV remite a los escritos de Flavia Freidenberg sobre la informalidad en el funcionamiento de los Partidos Políticos en América Latina. A continuación extraigo un párrafo aleccionador en la materia: “A pesar de la extensa literatura sobre el papel de las redes personales, el patronazgo y el clientelismo, las visiones contemporáneas sobre los partidos raramente toman en cuenta las estructuras informales que hay dentro de ellas. Debido a que los análisis realizados en el marco de esa literatura se centran en los partidos europeos, muchos de los cuales están altamente formalizados, los estudiosos suelen dar por sentado la institucionalización formal. En otras palabras, asumen simplemente que los partidos están organizados en concordancia con lo que señalan los estatutos. Estas presunciones no viajan bien a América Latina. La distancia entre la manera en que los partidos están organizados en los estatutos y cómo luego ellos funcionan en la práctica es enorme”. (Freidenberg, Flavia y Steven Levistky, (2007: 540).

difundir el pensamiento socialista, formar cuadros políticos para el partido y para un gobierno dirigido por el partido, y movilizar a la sociedad”³²⁷.

La conformación definitiva del PSUV se presentó como otro de los recursos de poder que generó el presidente Chávez durante el ejercicio de su poder. Teniendo en el horizonte el cambio de estructuras económicas, políticas y sociales por intermedio del proyecto bolivariano del Socialismo del Siglo XXI, el presidente necesitaba de un partido compacto y unificado detrás de su figura. La creación de nuevos recursos será una marca registrada del líder bolivariano, actividad que le permitió mostrarse omnipresente en el paisaje cotidiano del pueblo venezolano.

Desde su anuncio de profundizar el proyecto bolivariano en una dirección socialista, uno de los aspectos que el líder venezolano se preocupó por cuidar fue la relación con las Fuerzas Armadas. Este actor, tal como se comentó a lo largo de esta investigación, fue uno de los principales recursos de poder institucional del primer mandatario. Antes de la asunción y ya desde el inicio del mandato, Chávez le ofreció a ese actor una especial atención, e intentó realizar una transformación perenne del rol de los militares en el interior de la sociedad venezolana. La constitución bolivariana les otorgó el derecho a votar (históricamente los militares tenían prohibida la actividad política), al tiempo “que amplió la autoridad de los militares en temas de armamento e incorporó formalmente la cooperación en el mantenimiento del orden interno y la activa participación en el desarrollo nacional a la lista de sus misiones”³²⁸.

Esto en los hechos implicó que el presidente haya utilizado a los militares en amplia variedad de tareas comunitarias relacionadas con la lucha contra la pobreza y la búsqueda del desarrollo del país. Entre esas iniciativas se encontraban los trabajos de reparación de escuelas y hospitales, la provisión de asistencia médica y la venta de alimentos a bajo precio en zonas pobres, en el marco de las numerosas MB desarrolladas desde el poder ejecutivo. Durante toda su presidencia, los militares cumplieron un rol clave, tanto en lo relativo a sus tareas sociales como así también en todo lo concerniente a los cuantiosos procesos electorales acaecidos durante estos años en el país. Asimismo, a partir del año

³²⁷ Telesur, en línea en: <<http://www.telesurtv.net/secciones/noticias/nota/25264/eligen-directiva-de-partido-socialista-unido-de-venezuela/>>.

³²⁸ Norden (2008: 181).

2005 y al calor de la disputa en el terreno de la diplomacia con EEUU, “contribuyeron a justificar la inversión creciente en la defensa territorial, mediante las compras de armamentos y el entrenamiento para el combate contra un invasor poderoso”³²⁹.

La importancia de los militares en el interior del proceso chavista se observaba también en las posiciones que ocupaban en la administración estatal, ya que su presencia abarcaba a todos los niveles institucionales: gobernaciones, alcaldías, entes nacionales y empresas estatales. En las elecciones regionales de 2004, ocho de los veinticuatro gobernadores electos provinieron del mundo militar, y en los gabinetes ministeriales de Chávez figuraron en aquellos años militares de la misma generación del Presidente (o de otras muy cercanas). En los niveles medios, los militares activos eran más numerosos, ya que hacia el año 2007 controlaban unos 18 ministerios (López Maya, 2008: 60), evidenciando la importancia que este RP presidencial tenía para el despliegue de este proceso de transformación de estructuras encabezado por el líder bolivariano.

Luego del fallido golpe militar de abril de 2002, como se explicitó en el capítulo II, el líder bolivariano pudo oxigenar internamente a este actor institucional (RP) de los sectores antichavistas, produciendo modificaciones internas en cuatro aspectos (Guerrero, 2013: 78): 1) multiplicación del presupuesto militar dedicado al gasto social y el reforzamiento físico y tecnológico de las cuatro fuerzas, 2) incorporación de una mayor cantidad de oficiales (de 11 del periodo 1999- 2002 a 39 después del golpe) a cargos de gobierno; 3) culturización política expresada en profesionalización académica (en el 2002 21 oficiales estudiaron posgrados en el exterior, en el 2010 eran 680) y extraacadémica de las Fuerzas Armadas.

Para abril de 2007, Chávez declaró que había terminado el tiempo de la neutralidad para los militares venezolanos, y que, por lo tanto, debían abrazar el socialismo. El presidente, dando paso a esta transformación de estructuras, expresaba que los oficiales “debían declararse cada día con más fuerza y radicalidad, a ser antiimperialistas, revolucionarios, bolivarianos y socialistas... El Ejército norteamericano es un instrumento para imponer el imperialismo, la Fuerza Armada venezolana es un instrumento para

³²⁹ Norden (2008: 181). Siguiendo a la autora, “así, en la medida en que los militares compartan la percepción de Chávez de una posible amenaza externa, la defensa nacional podría funcionar como un tema común que fortalezca la autoridad del gobierno frente a las Fuerzas Armadas” (Ibíd. 2008: 184).

establecer el socialismo”³³⁰. Dentro de la orientación ideológica de las Fuerzas Armadas, el nuevo eslogan militar, a partir de enero de 2007, sería “patria, socialismo o muerte”³³¹. El líder bolivariano, en su objetivo de acelerar los pasos hacia el socialismo, involucraba en forma directa a los militares como uno de los pilares decisivos en ese tránsito hacia una nueva sociedad. Este actor institucional devenía clave en el objetivo de llevar adelante el socialismo del siglo XXI en tierras venezolanas.

Para fines de mayo, y olfateando la oportunidad política que le brindaba el momento político, activo en contradicciones, el presidente no renovó la licencia del canal de televisión opositor más importante del país, Radio Caracas Televisión (RCTV), acusándolo de complicidad con el golpe de 2002³³². En su lugar ubicó una nueva señal, Televisora Venezolana Social, de clara orientación oficialista. A partir de ese momento, RCTV continuó transmitiendo por señales de cable y Globovisión quedó como el medio más opositor al chavismo, que vio aumentar su audiencia luego de la salida del aire de Radio Caracas Televisión (Becerra y Lacunza, 2012: 239). De esa manera, el primer mandatario cumplía la promesa realizada el año anterior, cuando anunció que no iba a renovar las concesiones para transmitir en señal abierta a ciertos canales de televisión que habían estado comprometidos con los sucesos de abril de 2002. A pesar de la grandilocuencia con la que presentó Chávez la decisión oficial, la medida estaba avalada por el derecho legal: el Estado podía negarle la renovación de una concesión del espacio radioeléctrico a una empresa que, según la perspectiva oficial, había violado las normas institucionales.

Los medios de comunicación tradicionales se habían convertido, desde el inicio de la gestión de Chávez, en uno de los principales recursos de poder de la oposición. El

³³⁰ Ibíd. (2008: 183).

³³¹ De acuerdo al Coronel Gustavo Insua: “Hay un nuevo pensamiento militar venezolano desde el mismo momento que el pueblo decide hacer una nueva constitución. Eso marca el cambio de todas las estructuras institucionales en este país. Inclusive la militar. Por ende tú no puedes mantener un esquema imperialista con una nueva constitución. Por eso nosotros lo que hicimos fue adaptar nuestro pensamiento bolivariano, nuestro pensamiento chavista hoy en día y lo hicimos doctrina militar (nosotros no vamos a combatir en compañía de imperios que es la filosofía de las fuerzas armadas imperialistas que los países pequeños trabajen con ellos en su forma de acción, el diseño de su estrategia). Nuestra filosofía es una filosofía defensiva, para defender lo nuestro, autodeterminar nuestro destino”. Coronel Gustavo Insua. Entrevista con el autor.

³³² En la presentación del Mensaje Anual a la Asamblea Nacional, el 13 de enero de 2007, Chávez había anunciado que la caducidad de la licencia se iba a realizar en el corto plazo: “A la concesión de RCTV le quedan: enero, unos días, febrero, marzo, abril, mayo. Chillen, pataleen, hagan lo que hagan, se acabó la concesión de ese canal fascista de RCTV. Llámenme como quieran, no me importa, se acabó. Que se diviertan estos días, insultándome, diciéndome lo que quieran. Si creen que voy a caer en provocaciones, ¡no!, no voy a caer en provocaciones, insultenme, digan lo que quieran, se acabó” (Chávez (2007: 74-75).

gobierno intentó condicionar el accionar de los medios a través de la promulgación de la Ley sobre Responsabilidad Social en Radio y Televisión (recurso de estrategia política), la cual introdujo restricciones horarias para la programación y reguló los contenidos televisivos. Por otro lado, las disposiciones gubernamentales obligaron a los medios a sumarse a las transmisiones en cadena o enlaces que ordenara la administración nacional y a las cuales era tan afecto el presidente.

Luego del intento de golpe de estado de abril de 2002, la estrategia del gobierno se orientó a incrementar la generación de medios afines con el objetivo de contrarrestar el poder de los tradicionales, aumentando, de esa forma, los recursos de poder de estrategia política comunicacionales. Desde el inicio de la gestión chavista, el oficialismo contaba con tres medios propios: el canal televisivo nacional (Venezolana de Televisión), la Radio Nacional de Venezuela y la emisora AM YVKE. Como se observó en la segunda parte de esta investigación, luego de abril de 2002 se sumaron Aporrea y Telesur, para más tarde crearse la Agencia Bolivariana de Noticias (luego, Agencia Venezolana de Noticias) en 2005, Asamblea Nacional Televisión (2005), Ávila Televisión (2005), Televisora Venezolana Social (2006) y en el 2009 el periódico Correo Orinoco. Según Guerrero (2010: 18), los medios públicos estatales y comunitarios tenían hacia mediados del 2007 el 22% de las estaciones de televisión, y para junio de 2009 se habían creado 1.368 medios comunitarios y alternativos.

A partir del momento en que el primer mandatario realizó la primera amenaza de clausura de RCTV, a finales de 2006, se produjeron protestas de los grupos empresariales (RP social de la oposición), organismos de derechos humanos, dando lugar a manifestaciones de distinto carácter en todo el país, “emergiendo un renovado movimiento estudiantil, que ha seguido jugando desde entonces un rol de peso como factor fortalecedor de sectores que se oponen al bolivarianismo”³³³. A este conglomerado de actores sociales se sumaron para oponerse a la clausura de RCTV, la Conferencia Episcopal Venezolana, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), Reporteros sin Frontera, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, a quien a partir de ese momento Chávez mencionó como “el insulso señor

³³³ López Maya (2008: 73).

Insulza”³³⁴. Este avance sobre los medios de comunicación tendrá una nueva ofensiva en el año 2010, cuando no se renueven varias licencias y se genere, en consecuencia, una fuerte oposición de los sectores universitarios al chavismo y de la comunidad internacional a favor de la libertad de expresión en el país.

Como corolario de un año intenso y de resistencias en los diferentes campos en los que Chávez intentó profundizar, a finales del 2007 las relaciones diplomáticas de Venezuela con Colombia se vieron perturbadas a partir del conflicto producido por la mediación del líder bolivariano en el acuerdo humanitario que se desarrolló en el marco de la “Operación Emmanuel”, en la que se encontraba indirectamente involucrada la ex candidata presidencial Ingrid Betancourt. Este incidente, que será analizado con mayor precisión en el capítulo correspondiente a Uribe, marcó una nueva fricción entre ambos presidentes, conflicto que se extenderá a marzo de 2008 luego de la incursión militar de las Fuerzas Armadas colombianas en territorio ecuatoriano.

Más tarde, y en coincidencia con el conflicto con el vecino país, durante la XVII Cumbre Iberoamericana se generó un roce diplomático con el gobierno español, a raíz de la acusación vertida por Chávez sobre el apoyo brindado por su colega español de aquel entonces, José María Aznar, al golpe militar de abril de 2002. Mientras el líder bolivariano hacía uso de la palabra fue interrumpido por el jefe de estado ibérico, el rey Juan Carlos, al grito de “¿por qué no te callas?”. Como consecuencia del incidente, el gobierno de Chávez anunció un congelamiento de las relaciones con España, las cuales fueron reanudadas meses más tarde, previo pedido de disculpas de ambas partes.

En ese contexto de avance del presidente bolivariano sobre la arquitectura mediática de la Venezuela tradicional y de los pleitos con Colombia y España, Chávez encaraba el referendo que le habilitaría la posibilidad de la reelección indefinida. A pesar de los conflictos internos y externos de los últimos meses, el primer mandatario profundizaba el antagonismo social con la propuesta reeleccionista que, de aprobarse, le daría las herramientas constitucionales indispensables para avanzar con la radicalización política de los últimos años. Con numerosos recursos de poder en sus manos, y con la seguridad de la imbatibilidad en las urnas, Chávez comenzaba a caminar los últimos pasos hacia la estación del socialismo del siglo XXI. Allí lo esperaba el primer rechazo electoral de su historia.

³³⁴ Becerra y Lacunza (2012: 238).

Resumiendo, la creación del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) significó la generación de un nuevo RP institucional por parte del presidente Chávez. Durante esta etapa, el primer mandatario anunció públicamente que el proceso de radicalización política que se avecinaba tendría como horizonte el socialismo del siglo XXI. En ese sentido, los militares serían en el corto plazo el RP que el presidente hará jugar para consolidar el proyecto de transformación de la sociedad venezolana. La ocupación de lugares institucionales en el Estado, su protagonismo durante el año 2007 marcaban que el grado de importancia otorgado por el primer mandatario a este actor institucional.

Durante el 2007 emergieron nuevas protestas opositoras en torno a la política presidencial en relación con los medios. La clausura legal de RCTV y la amenaza permanente de sanciones oficiales frente a los medios críticos, generó diversos reproches en el ámbito nacional e internacional. Los roces con Colombia y España, también evidenciaron que la tensión política durante ese año no proporcionaría buenos resultados para el primer mandatario. A finales de 2007, en un contexto de conflicto interno y externo se realizaría el referendo reeleccionista. De esto trata el próximo ítem

6.3. Los recursos de poder históricos le dan la espalda a Chávez

Este ítem detiene la atención en el proceso electoral del referendo impulsado por Chávez para transformar la estructura socioeconómica venezolana y lograr la reelección indefinida. En este sentido, se observa todo el proceso de conformación del referendo, las leyes sujetas a reforma impulsadas por el primer mandatario, los agregados realizados por la Asamblea y la elección realizada en un contexto de fuerte polarización política y social. A su vez, se examinan los resultados de la votación (en términos de análisis de datos, pérdida de votantes, etc.) y la reacción del oficialismo frente al fracaso electoral.

La derrota del referendo: ¿Un triunfo de la oposición o una derrota del chavismo?

Al mismo tiempo que se organizaba la herramienta partidaria para unificar los distintos apoyos al chavismo en una sola organización política, en un contexto marcado por el predominio político del líder bolivariano sobre una oposición debilitada por los reiterados traspiés electorales, Chávez decidió acelerar a fondo con una propuesta de reforma constitucional. La idea tras la generación de estos dos recursos de poder (de estrategia política) era comenzar a construir los principales cimientos del proyecto socialista a partir de modificar la Constitución en los aspectos más centrados en la propiedad y el rol del Estado, como así también asegurar la permanencia del primer mandatario en forma indefinida.

Para el líder bolivariano, la construcción del socialismo del siglo XXI se edificaría a partir del despliegue de cinco motores constituyentes (López Maya, 2010: 210). El primero fue que la Asamblea delegara al poder ejecutivo la capacidad de elaborar leyes por un tiempo limitado, algo que el presidente denominó “ley de leyes revolucionaria, madre de las leyes”. En el marco de esta delegación, llamada “ley habilitante” (que Chávez ya había utilizado en diferentes etapas de su gobierno), el presidente reformó artículos en diez ámbitos de la administración pública durante un año y medio. El segundo motor apuntaba a una reforma integral y profunda de la Constitución bolivariana con el objetivo de modificar diversos artículos políticos y económicos concernientes a impulsar en forma acelerada la transición hacia el socialismo. El tercero, denominado “jornada de moral y luces”,

apuntaba a celebrar una campaña de educación en todos los espacios de la sociedad. El cuarto motor buscaba una descentralización de tinte socialista a partir de una distribución de los poderes político, económico, social y militar sobre el espacio nacional, para generar sistemas de ciudades y territorios federales que el primer mandatario denominó “la geometría del poder”. El último motor presidencial tenía como objetivo la “explosión revolucionaria del poder comunal”, con la conformación de un Poder Popular que cambiaría la naturaleza del Estado en una dirección socialista.

Una vez definidos los lineamientos para los años sucesivos, Chávez concentró sus esfuerzos en convertir el poder electoral otorgado por la ciudadanía a fines de diciembre de 2006 en cambio institucional y consolidación del poder presidencial. Esta traducción se extendería, a partir de un proceso reformista que asegurara, por un lado, la continuidad del gobierno en la figura de su presidente, y por el otro la aceleración del camino hacia la construcción de una economía mixta, incorporando elementos socialistas y colectivistas a la CB.

En ese sentido, el 15 de agosto de 2007 (a tres años de la victoria en el referendo revocatorio), el presidente venezolano presentó oficialmente ante la AN su proyecto de reforma constitucional. La idea capital de esta reforma, limitada a treinta y tres artículos del texto constitucional, conformaba un conjunto de transformaciones en el que se advertían avances en la definición de la forma de gobierno venezolano como socialista. A principios de noviembre, la Asamblea Nacional entregaba al CNE una propuesta de reforma constitucional, en la que se añadían treinta y seis artículos más al original presentado por el poder ejecutivo³³⁵.

El total de artículos que conformaban la propuesta reformista eran sesenta y nueve y se votarían en dos bloques, como dos reformas diferentes³³⁶. Entre los cambios más significativos propuestos en la reforma en lo relativo al fortalecimiento del poder presidencial se destacaban: la reelección indefinida para el Presidente y un aumento del

³³⁵ Lissidini Alicia (2009: 26).

³³⁶ Según Viciano y Martínez (2008: 111-112): “Lo eran sustancialmente, pero no en cuanto a la estrategia y el objetivo... en principio –y este resultado no estuvo tan lejos de ocurrir como en un primer momento pudiera parecer– el “sí” podría haber vencido en uno de los bloques –el presidencial, en todo caso, que recabó más apoyos que el parlamentario–, y el “no” en la opción alterna; de esta manera, sólo hubiera triunfado la parte de la reforma votada mayoritariamente a favor. Pero lo cierto es que, aunque formalmente se decidía sobre dos reformas, frente al electorado sólo existían dos opciones: la del gobierno bolivariano, encabezado por el presidente Hugo Chávez, a favor del “sí”, en general, a la reforma, y la de la oposición, defensora del “no”.

período presidencial de seis a siete años (Art. 230); la potestad del primer mandatario para crear regiones especiales con fines estratégicos y nombrar autoridades especiales con el fin de garantizar la soberanía y defensa del territorio en situaciones de contingencia o desastres (Art. 11); la potestad del Presidente para nombrar los vicepresidentes que estimara necesarios (Art. 125).

En cuanto a las modificaciones en el área social, la reforma apuntaba a la reducción de la jornada laboral a seis horas diarias y treinta y seis semanales (Art. 90); la creación de un fondo de seguridad social para trabajadores por cuenta propia (Art. 87); la institucionalización de las MB como una segunda administración pública paralela a la tradicional (Art. 141), el derecho al voto desde los 16 años, entre los más importantes.

En cuanto a los institutos de democracia directa, se estipulaba la elevación de todos los porcentajes de firmas necesarios para activar los distintos mecanismos de participación popular (Arts. 72, 74 y 348), con lo cual los hacía prácticamente inviables (dando marcha atrás en el espíritu de la Constitución de 1999); la creación del Poder Popular como una nueva forma del poder público, conformado a partir de las “comunidades”, núcleo espacial del Estado socialista (Art. 16).

En lo militar se propusieron varias reformas, incorporando un nuevo componente de la Fuerza Armada, la Milicia Nacional Bolivariana, cambiando el nombre de la Fuerza Armada Nacional por Fuerza Armada Bolivariana y otorgando a los militares actividades de seguridad interna (Art. 329).

Otras propuestas reformistas serían la sustitución del Consejo Federal de Gobierno por un Consejo Nacional de Gobierno; la eliminación de la autonomía del Banco Central de Venezuela (Art. 318); la denominación sin clara conceptualización de cinco tipos de propiedad: social directa e indirecta, pública, mixta, privada y colectiva; la eliminación del texto que indicaba que el Estado garantiza el “derecho” a la propiedad y “reconoce” tal derecho (Art. 115); el reemplazo de la ciudad como unidad político primaria de organización territorial en vez del municipio (Art. 16).

La propuesta de reforma oficial, como se explicitó, apuntaba a legitimar mediante el sufragio popular la reelección indefinida del presidente y acelerar los caminos hacia una nueva estructura económica social adecuando las instituciones del Estado a un modelo socialista que se presentó como inédito y “endógeno” (López Maya, 2008: 60). Sin

embargo, la propuesta radical de cambio no fue acogida por igual en el interior del chavismo, ya que desde allí también surgieron disidencias. En ese sentido, el rechazo a los contenidos reformistas, en especial lo relativo a los cambios en la arena económica y social, provino de importantes dirigentes del chavismo como el general Raúl Isaías Baduel y del partido Podemos.

El caso de Baduel fue significativo, porque se trataba de uno de los generales (y ministro de Defensa hasta julio de 2007) que había acompañado a Chávez desde el inicio del proceso y había resultado una pieza clave para el retorno del primer mandatario en abril de 2002. Esto evidenciaba ciertas grietas en el interior del apoyo castrense, RP institucional clave del presidente. La oposición expresada por el propio militar a la propuesta y su llamado a votar en contra de la reforma significó una fisura en el homogéneo apoyo de las Fuerzas Armadas a Chávez en esa circunstancia.

En cuanto a Podemos, partido hasta ese momento aliado al presidente, dejaba trascender que en “la propuesta quedaba confuso el derecho a la propiedad privada, se acentuaban rasgos estatistas quitándole poder al pueblo, era poco democrática y los tiempos para la discusión eran insuficientes para conocerla a fondo. En el debate adelantado en la AN sus diputados se opusieron a la propuesta de reforma de 36 artículos adicionales y terminó sumándose al bloque del NO”³³⁷. A partir de ese momento, Podemos inició un camino de divorcio del proceso chavista, al tiempo que surgieron algunas disidencias internas que mantuvieron su filiación oficialista.

A pesar de la oposición que emergía desde el seno mismo del elenco oficialista, Chávez, aprovechando la mayoría especial con la que contaba en la Asamblea, avanzó en el proyecto reformista. La garantía de renovar los guarismos electorales de los años anteriores, los cuales de repetirse le asegurarían la aprobación del referendo sin grandes dificultades, le auguraban al líder bolivariano un nuevo triunfo, que se encadenaría a la senda exitosa de las últimas elecciones. Al igual que en el año 2004, bajo una atenta mirada de los organismos internacionales y por intermedio del voto electrónico, el 2 de diciembre de 2007 se realizó el referendo sobre la reforma constitucional.

El chavismo, al no contar en ese momento con la personería legal del PSUV, se inscribió ante el CNE como adherentes al Bloque del SÍ desde un conjunto de

³³⁷ López Maya (2008:61).

organizaciones de base llamadas Batallones Socialistas por la Reforma Constitucional, divididas en BataSos (Batallones Socialistas) de vanguardia y apoyo, gran BataSos y “Barre Bases”. Estos últimos fueron pensados para “que ningún votante se quede sin que los abordemos, en primer lugar se van casa por casa para buscar a los aspirantes inscritos en el batallón y luego a los votantes”³³⁸ A su vez, el aporte brindado por los Partidos, que hasta ese momento mantenían sus siglas, sirvió también de soporte para el apoyo a la reforma³³⁹.

Finalmente, la propuesta de reforma constitucional presentada por el presidente fue ganada por la oposición al chavismo, nucleada en la opción del NO por 4.504.354 de apoyos (50,7%) contra 4.379.392 (49,29%) en el bloque A, que reunía las propuestas formuladas por Chávez más algunas agregadas por el parlamento. En el bloque B³⁴⁰, que incluía propuestas de reforma presentadas por la Asamblea Nacional, la derrota fue más abultada, ya que el NO obtuvo 4.522.332 de votos (51,05%) y el SÍ, 4.335.136 (48,94%)³⁴¹. Sin embargo, debe advertirse que la derrota del proyecto reformista no implicó una fuga de votos a la opción opositora al presidente venezolano, ya que “en perspectiva comparada, el voto en apoyo al bolivarianismo sufrió una merma de 14 puntos porcentuales, casi tres millones de votos, con respecto a los resultados electorales de la contienda presidencial de 2006 y la oposición, por su parte, aumentó su votación en apenas 211.000 votos”³⁴².

La abstención electoral alcanzó el 45%³⁴³, veinte puntos más que en las elecciones presidenciales de diciembre de 2006, dato que evidenciaba que “muchos de los votantes que apoyaron en aquella ocasión la candidatura de Hugo Chávez prefirieron abstenerse

³³⁸ Canal Vive, en línea en: <http://www.vive.gob.ve/inf_art.php?id_not=5350&id_s=6&id_ss=1&pag=6>.

³³⁹ El Bloque por el “Sí”, por su parte, quedó conformado por los Batallones Socialistas por la Reforma Constitucional, Partido Comunista de Venezuela (PCV), Movimiento de Conciencia de País, Movimiento Liberal del Pueblo Unido, Partido Socialista Organizado en Venezuela, Patria Para Todos (PPT), Movimiento Bastión Revolucionario 200 4-F, Movimiento Social de Participación Nacional, La Llama de Venezuela, Organización Nacional Independiente, Dignidad Patriótica, Redes de Respuestas de Cambios Comunitarios, Juventud Organizada de Venezuela, Activo Movimiento Ambiental de Ordenación Sustentable, Juventud Unida en Acción Nacional con Bimba y Partido Independiente Democrático de Respuesta Avanzada (Piedra). En Venevisión, en línea en:

<http://www.noticierovenevision.net/index_not.asp?id_noticia=20071108001501&id_seccion=01>.

³⁴⁰ Datos obtenidos en base al Consejo Nacional Electoral, en línea en: <www.cne.gov.ve>.

³⁴¹ *Ibíd.*

³⁴² López Maya Margarita (2008).

³⁴³ Datos obtenidos en base al Consejo Nacional Electoral, en línea en: <www.cne.gov.ve>.

antes que apoyar una propuesta de reforma que, a todas luces, no les convencía”³⁴⁴. Es decir, no se trataba, en términos cuantitativos, de un avance de la oposición, sino de un retroceso electoral en las filas del chavismo. En ese sentido, el oficialismo perdió muchos de los votos que habían acompañado al presidente en la elección de diciembre de 2006 (en las que el primer mandatario encabezaba la alternativa gubernamental), y ello emergía como el principal factor explicativo del fracaso presidencial.

Por primera vez en su historia política, Hugo Chávez era derrotado en las urnas. En las horas posteriores a la consulta popular, la oposición se envalentonó con los guarismos a boca de urna que daban ganador al NO y exigió inmediatos datos al CNE, que se estaba demorando en las primeras proyecciones. Los dirigentes opositores desfilaban a esas horas por los medios de comunicación y denunciaban un posible fraude. La distancia estrecha entre las dos opciones daba lugar a especulaciones de todo tipo y generaba un clima de tensión sobre la marcha de la compulsa electoral.

En la madrugada del lunes 3 de diciembre, el primer mandatario reconoció su primera derrota electoral. Pese a que la distancia era apenas superior a un punto de diferencia, el líder bolivariano aceptó el triunfo opositor y rememorando la tradición comenzada en la derrota militar del 4 de febrero de 1992, expresó: “No pudimos... por ahora...”. Al mismo tiempo que advertía: “Que haya votado 49% por el proyecto socialista es un gran paso. ¡Seguimos en la batalla construyendo el socialismo en el marco de la Constitución! Esta propuesta sigue viva... hemos sabido convertir aparentes derrotas en victorias morales que después se convierten en victorias políticas”³⁴⁵.

Dos días después de la derrota, sin embargo, un Chávez menos reflexivo soltó insultos a sus oponentes: "Sepan administrar su victoria, porque ya la están llenando de mierda. Es una victoria de mierda y la nuestra, llámenla derrota, pero es de coraje". Luego

³⁴⁴ Viciano y Martínez (2008: 112). E insistían (Ibíd. 113) en que “una parte significativa del bolivarianismo político no se alineó con su máximo dirigente a favor de la reforma. Los resultados se preveían a la luz de los acontecimientos: el partido socialdemócrata Podemos, además de diversos académicos y algunos de los sectores más a la izquierda, aliados desde el principio al proyecto de cambio liderado por Hugo Chávez, se posicionaron en contra de la reforma constitucional. Y también lo hicieron personajes que en otras ocasiones habían apoyado el proceso, y que marcaban distancias de esta manera. Los primeros fundamentaban su oposición en la confluencia en el objetivo de generar un modelo socialista; los segundos, en el rechazo al proyecto socialista. Pero el objetivo era común: solicitar el voto NO del electorado y, con ello, impedir la propuesta de reforma de la Constitución de 1999”.

³⁴⁵ Diario La Jornada de México, en línea en:
<<http://www.jornada.unam.mx/2007/12/03/index.php?section=mundo&article=034n1mun>>.

amenazó con volver a llevar a cabo en el corto plazo un nuevo referendo, ya que la derrota electoral no significaba que la propuesta de transformación social encarnada en el socialismo del siglo XXI estuviera superada. En ese sentido, el líder bolivariano enunciaba que “nosotros vamos de nuevo a la ofensiva. Yo lo vuelvo a repetir. Lanzamos la primera ofensiva para la gran reforma constitucional, pero no crean que se acabó. Prepárense, porque vendrá una segunda ofensiva rumbo a la reforma constitucional... Si se recogen firmas, esa reforma se puede someter a referéndum de nuevo en otras condiciones, en otro momento, en este mismo lugar que se llama Venezuela”³⁴⁶.

La derrota en el referéndum, de todas maneras, no implicó una marcha atrás en el proceso de transformaciones económicas y sociales del chavismo, ya que muchas de las reformas propuestas en la compulsa electoral fueron aprobadas mediante el recurso institucional de la “Ley habilitante” o por intermedio de reformas a diversas leyes por parte de la AN. El camino emprendido por el primer mandatario hacia el socialismo del siglo XXI continuaba avanzando a pesar del fracaso electoral y evidenciaba que la utilización de recursos institucionales por parte de Chávez configuraba una característica propia del ejercicio de poder del líder bolivariano. El control prácticamente total del parlamento le permitió al presidente llevar adelante un conjunto de leyes que implicaban cambios sustanciales en la estructura productiva del país.

En donde el fracaso del referéndum tuvo consecuencias directas fue en el interior de la coalición política del chavismo. La ausencia de debate interno y la carencia de autocrítica que caracterizó la etapa “ganadora” electoral se modificó a partir del 3 de diciembre de 2007. En la militancia del PSUV se comenzaron a oír críticas, como así también entre la intelectualidad que apoyaba al gobierno. Según Ellner (2010: 34), los primeros centraron su análisis en las tácticas equivocadas, así como en el exceso de confianza en la victoria (pensada como continuidad de las anteriores) y en los errores de comunicación. Los segundos, por otra parte, hicieron hincapié en las implicaciones del fracaso en errores de estrategia en cuanto a la elección de los tiempos en que se desarrolló el referendo y a que los funcionarios chavistas electos a nivel local y estadual no lograron garantizar la eficiencia de su gestión. Los núcleos intelectuales oficialistas también insistían

³⁴⁶Diario El Mundo de España, en línea en:
<<http://www.elmundo.es/elmundo/2007/12/06/internacional/1196897757.html>>.

en que miembros de la tendencia moderada del chavismo habían trabajado clandestinamente contra la aprobación del referéndum.

Lo que parecía una quimera para la dirigencia opositora, finalmente se hizo realidad y Hugo Chávez fue derrotado en las urnas. A pesar de que la diferencia fue minúscula, el líder bolivariano no puso excusas y aceptó el fracaso electoral. En ese sentido, a principios del año 2008 comenzó un proceso de redefinición de su estrategia de poder, que incluyó autocríticas, rectificaciones y un audaz proceso de profundización de las medidas de gobierno, que a la postre le permitieron recuperarse en el plano electoral e insistir con el proyecto de reelección indefinida.

Recapitulando, en agosto de 2007 Chávez envió un proyecto de reforma constitucional (RP de estrategia política) que fue apoyado, previo agregado de una treintena de artículos, por la Asamblea monocolor venezolana (RP institucional), y que para diciembre de ese año se expuso a la sociedad para ser aprobado. El objetivo central del referendo en su articulado apuntaba a producir un cambio sustancial de la estructura productiva venezolana y, fundamentalmente, la reelección sin restricción temporal del primer mandatario.

La derrota chavista en la elección implicó, no sólo ser la primera luego de ocho años de gobierno, sino también un freno a la voluntad de Chávez de avanzar a pasos agigantados hacia un nuevo edificio económico de características novedosas para la historia de Venezuela. A pesar de ser una diferencia mínima la que le dio el triunfo al NO (menor al 2%), los resultados electorales se explicaban a partir de la pérdida de votos por parte del oficialismo, más que de un crecimiento opositor.

Conclusión

Como se observó a lo largo del capítulo, la construcción partidaria del PSUV, un RP institucional generado por Chávez, demandó un extenso lapso de tiempo. El propósito político del líder bolivariano, al fusionar a las distintas agrupaciones políticas que lo apoyaban en una única herramienta partidaria, fue contar con una estructura de apoyo monolítica para poder afrontar los nuevos objetivos que se abrían luego del triunfo electoral de finales de 2006. La constitución interna del PSUV tuvo su génesis en las bases del partido, quienes generaron, a partir de la selección de candidatos, nuevas instancias organizativas que tendría como puerto final la constitución de la Junta de conducción del PSUV. Este armado partidario evidenciaba una construcción piramidal de poder que en su vértice tendría al presidente Chávez. La constitución de este nuevo RP implicó una fuerte movilización de las bases (recurso de apoyo popular/ ciudadano) y una estructura disciplinada en control del presidente.

La nueva etapa que se avecinaba a partir de la radicalidad que iba adoptando el proceso de transformación chavista requería de la unificación de los apoyos políticos en torno al presidente. En ese sentido, uno de los recursos de poder principales del gobierno eran las Fuerzas Armadas. Como se observó a lo largo de toda esta investigación, los militares se convirtieron en uno de los principales puntales del gobierno y, por lo tanto, la ocupación de espacios institucionales en el estado fue la consecuencia directa del grado de importancia otorgado por el primer mandatario a este actor indispensable para cualquier proceso de cambio de los pilares centrales de la estructura económica venezolana.

La radicalización del ciclo político dio lugar a la clausura del espacio mediático de la RCTV. Acusada de ser cómplice del golpe de abril de 2002 por brindar una cobertura antichavista, la señal televisiva debió dejar su espacio, generando fuertes críticas de diversos actores nacionales e internacionales. El avance del primer mandatario sobre los medios opositores permitió el desarrollo de nuevas señales afines al gobierno. A partir de la generación de nuevos recursos de poder de índole comunicacional (RP de estrategia política), el primer mandatario encontró una forma de combatir en el plano de la información el discurso de los canales tradicionales.

Para finales del año 2007, el primer mandatario se encontró en condiciones de plasmar en el texto constitucional los cambios operados en la arena económica-social con el

agregado de la posibilidad concreta de extender su mandato en forma permanente. En ese sentido, para agosto de 2007 el presidente envió un proyecto de reforma constitucional (RP de estrategia política) a la AN, que abarcaba una amplia transformación de estructuras económicas del país en concordancia con el anunciado propósito político del socialismo del siglo XXI, y que contemplaba la alternativa de la reelección indefinida del primer mandatario. El legislativo adicionó una treintena de artículos en una dirección similar que la propuesta por Chávez, y para diciembre de ese mismo año se sometió el proyecto al electorado. La seguidilla de victorias del chavismo (recursos de poder de apoyo popular/ ciudadano), junto a una desarticulada oposición hasta ese momento invicta en derrotas, hacía prever un triunfo seguro por parte del oficialismo. Sin embargo, las grietas que emergieron en el interior de la coalición gobernante, debidas a la resistencia de un grupo menor de militares y de partidos aliados a Chávez al referendo (dos recursos de poder institucional) y una poco solidificada comunicación hacia el interior de la masa chavista (RP de apoyo popular/ ciudadano) jugaron un papel importante en el escenario electoral de aquel domingo de diciembre de 2007

La derrota del gobierno, no sólo fue la primera luego de ocho años, sino que implicó una barrera momentánea a los deseos de Chávez de permanecer indefinidamente en el gobierno y de avanzar hacia el socialismo del siglo XXI. La mínima diferencia que le dio el triunfo a la oposición enrolada en el NO (apenas superior al 1%) y el análisis de la cantidad absoluta de votos de cada una de las opciones, reveló que el resultado final se explicaba a partir de la pérdida de votos por parte del oficialismo más que a raíz de un crecimiento opositor.

Las explicaciones de la derrota en el interior del chavismo se resumían en que las estrategias, tanto de comunicación como de elección del momento, no habían sido las más eficaces. A su vez, se advertía que una excesiva confianza en la victoria (como extensión lógica de los anteriores triunfos) había atentado contra la posibilidad de realizar una campaña acorde a lo que estaba en juego. Por último, otras voces se alzaban frente al escaso apoyo brindado por los sectores más moderados de la coalición de gobierno, que desconfiaban de la radicalización económica-social enmarcada en el socialismo del siglo XXI y que retacearon presencia y apoyo electoral al referendo.

CAPÍTULO VII

RECUPERANDO LOS RECURSOS DE PODER HISTÓRICOS (2008-2010)

“Exprópiése...”

Hugo Chávez (Caracas, 2009)

Introducción

Este capítulo se concentra, en primer término, en las razones que dieron lugar a la recuperación electoral del chavismo en las elecciones regionales de 2008. En este sentido, se analizan los RP generados en base a la estrategia política adoptada por el gobierno durante ese año y cómo ese triunfo electoral (RP de apoyo social/ ciudadano) impactó en forma directa en la táctica del gobierno de insistir en el referendo constitucional del año siguiente. Asimismo, se describe el proceso de nacionalizaciones (RP de estrategia política) promovido por el primer mandatario y los principales problemas económicos que surgieron en dicha etapa luego de la crisis internacional de los años 2008 y 2009, observando de qué forma reacciona y qué recursos utiliza el gobierno frente a ese escenario esquivo.

En segundo lugar, el capítulo analiza el impacto de la crisis financiera internacional, que tuvo como epicentro a la economía norteamericana en el último trimestre de 2008, y de qué forma reacciona el gobierno venezolano ante ese escenario adverso. Aquí se observan, mediante el análisis de datos, las principales consecuencias de la crisis en la economía local y las medidas adoptadas (a partir de la generación de recursos de poder) por el primer mandatario venezolano en este nuevo contexto.

En tercer término se describen las elecciones parlamentarias de septiembre de 2010, observando las principales propuestas políticas del oficialismo y la oposición y el rol jugado por Chávez, que a pesar de no ser candidato, se involucró en forma directa en la contienda electoral. Asimismo, se analizan los votos obtenidos por el gobierno y el antichavismo y de qué forma quedó compuesto el nuevo parlamento.

Por último, se examinan los índices económicos y sociales luego de doce años de gobierno chavista. En ese sentido, se intenta comprender las razones de la fortaleza electoral del LP de Chávez a partir de un análisis de los resultados obtenidos en las principales áreas de contenido social, como eran la educación, la salud, la pobreza, la vivienda y el empleo.

7.1. Las nacionalizaciones chavistas, mayores recursos de poder para el presidente

Este ítem concentra su atención en las razones que dieron lugar a la recuperación electoral del chavismo (RP) en las elecciones regionales de 2008, y en cómo ese triunfo se tradujo en forma directa en la estrategia del gobierno de insistir en el referendo para habilitar la reelección indefinida (recurso de estrategia política). A su vez, se describen las medidas macroeconómicas del gobierno en el marco de la crisis internacional de los años 2008 y 2009, como fueron el proceso de nacionalizaciones y estatizaciones y las decisiones adoptadas en torno a la política comercial promovidas por el primer mandatario.

Una cosa que empieza con R: Revisión, Rectificación y Relanzamiento

La derrota electoral en el referendo le permitió a Chávez modificar algunos de los aspectos de su gestión y reorientar las decisiones de gobierno en un sentido menos confrontativo. En ese sentido, el líder bolivariano firmó una amplia ley de amnistía por la cual quedaron libres de juicios la mayoría de los participantes de las acciones golpistas de los años 2002 y 2003. Estos cambios también se extendieron a su gabinete ministerial, “que obedecieron al objetivo de mostrar mayor eficiencia en la gestión de políticas de seguridad, abastecimiento alimentario, vivienda, comunicaciones y relaciones con las organizaciones populares, que fueron debilidades de la gestión que afectaron los resultados electorales”³⁴⁷.

A principios de 2008, durante una alocución en el programa *Aló, Presidente*, Chávez apostó a un proceso de cambios que denominó con tres R: Revisión, Rectificación y Relanzamiento. Su percepción como líder revolucionario fue que, a pesar de la derrota, “el socialismo está sembrado en Venezuela y ya nada lo detendrá”, aunque confesó la existencia de un hiato importante entre lo que el gobierno comunica y la manera en que los venezolanos examinan la gestión en la vida cotidiana. Durante el programa, el presidente asumió la responsabilidad en dicha carencia y mencionó como los principales déficit “a la inseguridad, el desabastecimiento, la falta de planificación, la situación en las cárceles, la impunidad, la corrupción, la pesadez burocrática de la administración pública, todo ello ha

³⁴⁷ López Maya (2008: 75).

venido haciendo perder la confianza del pueblo en su gobierno”³⁴⁸. Poniendo en juego los recursos de estrategia política (personalidad política), el primer mandatario se hacía cargo del déficit político de su gestión y prometía cambios en el interior de la propia administración gubernamental

Luego de indicar las falencias oficiales, el líder bolivariano señaló que la administración que él conducía debería abocarse, durante el año 2008, a mejorar la gestión pública a partir de un manejo más eficiente de sus recursos, pero sin alterar su horizonte socialista. Y por último, amenazó a la oposición, que cuestionaba su manera de ejercer el poder, con un nuevo referendo que incluyera la posibilidad de reelección indefinida y la revocación de su mandato³⁴⁹.

La derrota electoral, lejos de desmembrar el embrionario Partido Socialista, lo vitalizó en términos de oxigenación interna. En respuesta a la derrota del referendo, el presidente Chávez invitó al PSUV a volcarse en la campaña de las tres R. Durante los meses de mayo y junio de 2008 se produjo el proceso de selección de candidatos y candidatas para las elecciones de Alcaldes y Gobernadores de 2008. Esto representaba una novedad para las fuerzas chavistas, ya que implicaba la participación directa de su militancia en la designación de representantes electivos, que lo alejaba de los acuerdos de cúpula o de la decisión unilateral del primer mandatario.

La postulación y selección de candidatos se desarrolló por intermedio de tres fases: en un primer lugar, la inscripción de candidatos mediante un proceso automatizado que incluyó el acceso a la página web del CNE; un segundo momento, en el cual los candidatos difundían sus propuestas a través de las distintas actividades organizadas por el Partido, y para lo que “se organizaron debates, foros, mesas de trabajo, charlas e intervenciones, moderados por los Vicepresidentes, los miembros de la Dirección Nacional destacados en las distintas regiones para tal fin y los Equipos Estadales de Trabajo Político, quienes velaron por otorgar igualdad de condiciones a todas las candidatas y candidatos”³⁵⁰.

³⁴⁸ López Maya (2008: 75).

³⁴⁹ En ese discurso, expresó “que, si la oposición no lo hace, convocará en 2010 un referendo revocatorio en su contra con dos preguntas: 1) ¿Está usted de acuerdo con que Hugo Chávez siga siendo presidente de Venezuela? Y, 2) ¿Está usted de acuerdo en hacer una pequeña enmienda en la Constitución para permitir la reelección indefinida? (con carácter vinculante)” (En López Maya (2008: 76).

³⁵⁰ Página del PSUV: en línea en: <<http://www.psuv.org.ve/?q=primarias>>.

A continuación, en la tercera y última fase, se realizó propiamente la elección interna de candidatos. De dicha compulsa participaron 2.973.495 afiliados del PSUV, es decir, un 52% de la cantidad total de miembros del Partido, quienes debieron seleccionar, mediante un complejo sistema electoral³⁵¹, a 350 postulantes para la elección regional de los 4.882 precandidatos oficializados. Según James Petras (2008: 4), “este proceso permitió a la elección de nuevos líderes de partido, a una disminución de los paternalistas jefes de la vieja guardia en el liderazgo del PSUV, y a un rechazo del sectarismo hacia otros partidos pro Chávez y una revitalización del activismo de base”³⁵².

En ese contexto de organización partidaria para el combate por el socialismo del siglo XXI, el primer mandatario comenzó un proceso de nacionalizaciones entre los años 2007 y 2009 que abarcó a empresas de distintas actividades económicas del país que se encontraban en manos extranjeras, lo que constituyó la generación de un nuevo RP de estrategia política. En este sentido, se pueden enumerar las siguientes: la Compañía Anónima Nacional de Teléfonos de Venezuela (CANTV), la mayor telefónica del país y su filial de telefonía celular Movilnet; la empresa de Electricidad de Caracas (EDC) y sus filiales; la mayor parte del sector cementero con la compra de las unidades locales de la mexicana Cemex; la suiza Holcin y una filial de la francesa Lafarge; a cuatro mejoradores de crudo pesado en la Faja Petrolífera del Orinoco operados por petroleras extranjeras y valorados en 30.000 millones de dólares; a las estadounidenses Exxon Mobil y ConocoPhillips; a la empresa Sidor, filial en Venezuela del conglomerado internacional Ternium; a las dos principales cafeteras del país y algunas empresas menores en el sector

³⁵¹ “Sería candidato del PSUV quien obtuviera una votación superior a un piso preestablecido (50% + 1) o quien sin obtener la votación del 50% + 1, obtuviera una diferencia de al menos 15% respecto al candidato que hubiera obtenido la segunda votación.

En caso de no cumplirse alguno de estos requisitos, la Dirección Nacional, de manera automática y de una lista conformada por los 3 candidatos y candidatas más votados, considerará otros aspectos para la selección, entre los que se incluyeron las condiciones éticas y revolucionarias, el trabajo político, el desempeño, la lealtad y las condiciones estratégicas implicadas en el evento electoral” (PSUV, en línea en: <<http://www.psuvs.org.ve/?q=primarias>>).

³⁵² Y añadía el mismo autor, un estudioso del proceso bolivariano, que “para que el PSUV tenga éxito como organización política es preciso que les retire el poder a las maquinarias políticas clientelistas locales construidas alrededor de algunos de los funcionarios estatales, regionales y municipales chavistas. Debe también superar la tendencia a designar líderes y candidatos desde arriba, y profundizar el control de las bases sobre las decisiones y los líderes. Ya durante el congreso de fundación del PSUV, algunas delegaciones criticaron el proceso de elección del liderazgo nacional, por dejar de lado la representación popular y sobrecargarla con funcionarios fuertemente criticados” (En Petras, James y La Haine “Venezuela: Democracia, socialismo e imperialismo en <http://www.lahaine.org/b2-img08/petrasdemo.pdf>, p. 4).

de alimentos; a la planta arrocera de la estadounidense Cargill, tras exigir a la compañía vender el producto más barato; a una plantación de eucaliptos propiedad del fabricante de papel irlandés Smurfit Kappa, y a una de las principales entidades financieras del país, el banco español Santander. La extensión en cuanto a cantidad de empresas y de rubros marcaba que el proceso de transformación chavista comprendía a una gran parte del entramado económico venezolano.

Durante todo este proceso de nacionalizaciones, la economía local sufrió los embates de la crisis internacional y obligó al primer mandatario a realizar reajustes en las variables macroeconómicas más importantes. La elevada dependencia de las importaciones extranjeras, junto a una capacidad instalada que se encontraba operando al 90% (en contraste con el 60% de cuatro años atrás) (Ellner, 2010: 42), implicaron problemas estructurales para la economía venezolana. El presidente debió asumir las carencias del entramado productivo local y las consecuencias que dicha insuficiencia generaba en la política comercial.

En un discurso ante la Asamblea Nacional, a principios de 2008, el primer mandatario reconoció que la escasa producción nacional y el clima de poca inversión privada³⁵³ generaron problemas importantes en la economía venezolana. El desfase entre la capacidad productiva nacional y el ritmo de incremento de la demanda se tradujo en un aumento de la inflación, que alcanzó el 22,5% para 2007, el 30,9% en 2008 y el 25% en 2009 (López Maya, 2010: 217). El gobierno, en ese marco, comenzó a limitar las importaciones en las áreas no prioritarias y asignó un mayor porcentaje de dólares preferenciales (vendidos a una tasa de cambio menor) para la importación de alimentos y medicina a expensas de los automóviles y otros productos no esenciales. Asimismo, la estrategia de la empresa estatal PDVSA para satisfacer los requerimientos industriales, en este contexto de restricción, fue la creación de PDVSA Industrial y PDVSA Servicios, con el objetivo de facilitar el suministro de componentes y de equipo para la industria petrolera, dando lugar a nuevos recursos de estrategia política generados por Chávez.

La crisis financiera mundial afectó, por otro lado, al principal RP financiero del gobierno, como era PDVSA ya que durante esta etapa se observó una importante

³⁵³ Según Ellner (2010: 42), “el Índice de Libertad Mundial, que clasifica a las naciones en gran medida sobre la base de las libertades económicas, bajó el ranking de Venezuela de la posición 135 a 141, e hizo especial referencia a la regulación estatal del trabajo, crédito y precios”.

inestabilidad en los precios petroleros. Aunque desde la administración chavista auguraban que la economía, al iniciarse el camino hacia el socialismo, estaría blindada contra los ataques especulativos, los desajustes fiscales comenzaron a hacerse visibles en la postergación de pagos y en demoras para cumplir compromisos por parte del Gobierno (López Maya, 2010: 223). Al inicio del año 2009, la empresa PDVSA anunció postergaciones de sus planes de expansión en el exterior (como las anunciadas refinerías en los países aliados, Ecuador, Nicaragua y Cuba) y una reducción de su programa de inversiones durante ese año de 40% con respecto al plan original. El contexto socioeconómico, como factor externo a la dinámica política, daba lugar a rectificaciones en el interior de la estrategia de gobierno.

Mientras el oficialismo resolvía con políticas económicas autónomas los efectos de la crisis internacional, el PSUV consolidaba su fisonomía interna y se preparaba para las elecciones regionales de agosto de 2008. Se trataba de las primeras luego de la derrota en el referendo e implicaban una prueba de fuego para certificar si este fracaso significaba un encadenamiento posterior de derrotas electorales. Como se desprendía del análisis del referendo, el resultado electoral de diciembre de 2007 se explicaba a partir del no acompañamiento a la reforma de una porción importante de votos del chavismo que había tomado el camino de la abstención.

Las elecciones del 28 de noviembre de 2008 ponían en juego 22 de los 23 gobernadores de las entidades federales venezolanas, 325 alcaldes, 233 diputados de las asambleas legislativas de los estados, el alcalde mayor de Caracas y los 13 concejales de la Alcaldía Metropolitana. El PSUV pudo desquitarse de su primer esquivo bautismo electoral, triunfando en forma categórica en 17 de los 22 estados en disputa (77% de las gobernaciones) y se consolidó como el partido más votado a nivel nacional con el 52,7% de los votos³⁵⁴. En cuanto a alcaldías, el PSUV ganó aproximadamente el 80% de los municipios del país: era la primera vez que un partido político obtenía esa cantidad de ejecutivos locales (ni AD en sus mejores tiempos lo había logrado). Además mejoró los resultados del 2004, ya que el PSUV obtuvo 265 alcaldías frente a las 224 de la elección municipal de aquel año³⁵⁵. En términos absolutos la elección regional arrojaba que el

³⁵⁴ Datos obtenidos en base al Consejo Nacional Electoral, en: < www.cne.gov.ve>.

³⁵⁵ Revista *Semana de Venezuela*, en línea: <<http://semana.com.ve/article.php?id=3075>>.

chavismo aumentó su caudal electoral en más de 1.137.320 votos con relación a los obtenidos en la derrota del referendo de 2007, con un total de 4.404.626 votos (López Maya, 2008). Esto significaba que, aunque no igualaba la performance electoral de la elección presidencial del 2006, recuperaba una buena parte de los votos perdidos en la última elección. A pesar del contexto restrictivo en lo económico de esa elección, el voto chavista, aunque en menor medida, continuaba acompañando al oficialismo.

La oposición, por su parte, con el 41,7% de los votos conservó sus dos gobernaciones y ganó tres nuevos ejecutivos provinciales. Con este incremento de recursos de poder institucional el antichavismo volvía a recuperar el número de gobernaciones que había obtenido en el 2000. En términos absolutos, la sumatoria de los votos de candidatos a gobernadores opositores alcanzó un total de 4.225.103, lo que significó, en términos comparativos, una merma de 296.391 sufragios en relación con los obtenidos en el referendo de 2007, cuando el antichavismo alcanzó los 4.521.494 de voluntades (López Maya, 2010: 215). Por lo tanto, a pesar del aumento de gobernaciones, la oposición perdía en cantidad de votos frente a la última elección. En cuanto a las alcaldías, las fuerzas opositoras triunfaron en cuatro de las cinco de la Zona Metropolitana de Caracas, ganando, asimismo, la Alcaldía Mayor. Sin embargo, según López Maya, “su desempeño a nivel local aparte de Caracas fue pobre, pues sólo obtuvieron predominio en 53 alcaldías de las 337 en disputa. Otras 19 quedaron bajo control de fuerzas disidentes del oficialismo (8), independientes (2), de otras fuerzas locales (9). Estos datos revelan que si bien algunos candidatos a gobernadores de la oposición se posicionaron en espacios regionales importantes, y Caracas favoreció candidatos opositores, el oficialismo salió mucho más fortalecido en esta contienda que la oposición, tanto porque creció en términos absolutos, como porque ahora controla casi el 80% de los alcaldes”³⁵⁶.

Este triunfo en las elecciones regionales le permitió al líder bolivariano recuperar una parte del caudal de votos históricos y la posibilidad de insistir con su proyecto de reforma constitucional para permitir la reelección indefinida. Para ello, envió el proyecto a la Asamblea con la intención de reformar un único artículo, el número 230, que eliminaba las limitaciones a la reelección presidencial. Sin embargo, luego de que Chávez admitiera la necesidad de que la propuesta de referendo saliera con mayor consenso de la AN, amplió a

³⁵⁶ López Maya (2010: 215).

cinco la cantidad de artículos a modificar, extendiendo, en uno de ellos, la posibilidad de reelección indefinida a la totalidad de los cargos electivos del país.

El 14 de enero, el parlamento aprobó la convocatoria al referendo para enmendar cinco artículos de la Constitución bolivariana y un mes más tarde el CNE convocó el referendo para el 15 de febrero de 2009.

La importancia de la compulsa electoral conminó a la militancia del PSUV a protagonizar este nuevo desafío de su líder, y entre los meses de diciembre y enero de 2009 se volcó a las calles con el objetivo de concretar el “tercer ciclo de la revolución”. El presidente también puso el cuerpo en la campaña electoral mejorando la comunicación sobre las intenciones del referendo y permitiendo que el mensaje llegara a la masa chavista, una de las falencias estructurales, según el propio oficialismo, del fracaso electoral anterior. La polarización en torno al “Chávez Sí” o Chávez No” (Guerrero, 2009: 105) volvió a conformar el escenario confrontativo de los últimos años en el país del que el líder bolivariano siempre salió fortalecido. La acentuación de este clivaje permitió poner en acción nuevamente a la movilizadora tropa chavista en pos de un objetivo nítido: la posibilidad de permanencia indefinida de Chávez en el gobierno.

La campaña electoral del referendo simbolizó para el primer mandatario una de las compulsas más importantes de su vida política. Un rechazo en las urnas, el segundo en poco más de un año, hubiese representado el fin de los deseos presidenciales de permanecer indefinidamente en el poder. Así también lo entendió el propio chavismo, ya que siguiendo a López Maya (2010: 216), el oficialismo utilizó los recursos públicos con una importante parcialidad política³⁵⁷, incluyendo el uso de los organismos del Estado. En ese sentido, según la autora citada, “el 7 de enero desde un acto del Comando Simón Bolívar transmitido por cadena nacional de radio y televisión, la ministra del Poder Popular para el Desarrollo Social exhortó a instancias participativas como las mesas técnicas y los CC a abandonar las obras y dedicarse, de lleno, a buscar los votos para que se impusiese la

³⁵⁷ En su informe sobre el referendo del 15 de febrero, Ojo Electoral, asociación independiente de observación electoral nacional, registró múltiples y variadas violaciones de las regulaciones emitidas por el CNE. Destacan la abusiva participación de diferentes organismos públicos en la promoción de la opción impulsada por el Presidente: contabilizó que el 16% de toda la propaganda fue pauta por dichos organismos; calculando los costos en publicidad en medios impresos, según sus tarifas comerciales, Ojo Electoral determinó que el 71% de la publicidad fue pauta por el bloque del SÍ, el 15% por organismos públicos con publicidad indirecta favorable al SI y sólo el 14% por el bloque del NO (Ojo Electoral, 2009, en López Maya, 2010).

propuesta del Presidente de permitir la reelección en todos los cargos”³⁵⁸. La nueva apuesta de Chávez se desarrollaba en un contexto diferente y con el control de los históricos recursos de poder chavistas (sin disidencias en el interior de las Fuerzas Armadas y con una eficaz comunicación con su electorado) a la compulsa de diciembre de 2007.

El 15 de febrero de 2009, finalmente, Chávez pudo vencer en forma holgada en el referéndum Aprobatorio de la Enmienda Constitucional³⁵⁹ y, de esta manera, mantener su hegemonía en el interior del sistema político venezolano, extendiendo la posibilidad de reelegirse ilimitadamente. La opción por el SÍ obtuvo, esta vez, 6.310.482 de votos (54,85%) contra los 5.193.839 de votos (45,15%) del NO³⁶⁰, logrando aprobar la enmienda que reformó la Constitución en 5 artículos y que eliminó la restricción en el número de veces que una persona podía ser reelegida en su cargo en todos los niveles de la gestión pública.

Este éxito implicaba que el chavismo vencía en su segunda elección luego de su primera derrota de diciembre de 2007, recuperando una porción importante de votos que con anterioridad había elegido el camino de la abstención. También debe señalarse que la oposición chavista, por primera vez en su historia, lograba superar el techo de los 5 millones de votos, aunque seguía mostrando que la ausencia de un candidato unificador era el denominador más común de la suma de derrotas electorales. La abstención del 29,6%³⁶¹ mostraba a las claras la importancia que la sociedad venezolana le otorgaba a esta elección en donde la fuerte polarización reaparecía en toda su dimensión luego de varios años. El chavismo volvía a ser la fuerza imbatible de antaño y la recuperación de millones de votos era la nota saliente del día de la elección. Este dato, por último, exponía la credibilidad de una de las hipótesis de esta investigación, que mostraba que cuando Chávez era candidato la abstención solía ser menor que cuando el líder bolivariano no formaba parte la votación.

³⁵⁸ López Maya (2010, 216).

³⁵⁹ La pregunta del referéndum se formulaba de la siguiente forma: “¿Aprueba usted la enmienda de los artículos 160, 162, 174, 192 y 230 de la constitución de la república, tramitada por la Asamblea Nacional, que amplía los derechos políticos del pueblo, con el fin de permitir que cualquier ciudadano o ciudadana en ejercicio de un cargo de elección popular, pueda ser sujeto de postulación como candidato o candidata para el mismo cargo, por el tiempo establecido constitucionalmente, dependiendo su posible elección, exclusivamente, del voto popular?” (En Santos Villarreal, 2009: 20).

³⁶⁰ Datos obtenidos en base al Consejo Nacional Electoral, en: <www.cne.gov.ve>.

³⁶¹ *Ibíd.*

Resumiendo, luego de la derrota en el referendo, que implicaba la posibilidad de acelerar los pasos hacia un cambio de estructura económica en el país y de la reelección indefinida en diciembre de 2007, Chávez anunció un proceso de rectificación que implicó modificaciones a nivel ministerial y de la gestión cotidiana de gobierno. En este sentido, el primer mandatario se abocó a dar respuestas a la crisis internacional mediante una fuerte intervención del Estado en la arena económica que incluyó la nacionalización de parte del entramado productivo local y la restricción de productos importados (recursos de estrategia política) para estimular la producción venezolana.

El triunfo en las elecciones regionales de 2008 le permitió a Chávez no sólo mantener sus recursos de poder institucionales regionales (en gobernadores y en incremento de alcaldías), sino también insistir con su proyecto de reelección indefinida. La recuperación de la caída electoral junto al retorno de más de un millón de votos (recurso de apoyo popular/ ciudadano), que anteriormente habían adoptado la abstención, convencieron al primer mandatario de que las posibilidades de una nueva convocatoria al referendo reeleccionista volvía a ser posible. Luego de la aprobación por parte de la Asamblea, el proyecto de reforma, que esta vez contó con pocos artículos y se orientó enfáticamente a la reelección indefinida, fue finalmente aprobado por la población en febrero de 2009. Con ello, el líder bolivariano agregaba a su poder la generación de un nuevo RP como era la posibilidad concreta de reafirmarse en el gobierno sin límites temporales.

7.2. La generación de recursos chavistas ante la crisis internacional

Este ítem examina el impacto de la crisis financiera internacional del último trimestre de 2008 y sus consecuencias en la economía venezolana a partir del año 2009. En ese sentido, se observan los datos de desaceleración en la producción local y las respuestas que dio el gobierno de Chávez en esa coyuntura utilizando los diferentes recursos de poder que ostentaba. Por otra parte, se observan los resultados de las elecciones parlamentarias realizadas en septiembre de 2010 y su efecto en las relaciones entre el poder ejecutivo y legislativo.

Entre expropiaciones y nacionalizaciones: hacia una nueva estructura económica social

Luego del triunfo electoral en el referendo de febrero de 2009, el primer mandatario comenzó un proceso de profundización de las medidas orientadas a superar los desequilibrios productivos, que afectó en forma directa los pilares en los que se sostenía la economía venezolana. Este proceso se desarrolló en paralelo a un contexto de crisis económica mundial que repercutió de manera directa en la totalidad de los países sudamericanos. Como se explicitó en el ítem anterior, a pesar de que la economía venezolana se había protegido de los vaivenes del comercio internacional, la crisis financiera mundial impactó de lleno en ese proceso de transformación en el que Chávez encaminaba la estructura económica del país.

En ese marco, el presidente dispuso una batería de medidas para reaccionar frente al adverso escenario internacional. Reajustó el presupuesto de 2009, lo que supuso una reducción del gasto de 6,7% y la elevación del Impuesto al Valor Agregado (IVA) de 9 a 12 puntos. También se promulgó una ley de emolumentos para la administración pública cuyo objetivo era poner límites a los salarios percibidos por los funcionarios de más alto rango.

El proceso de estatizaciones y nacionalizaciones continuó al compás del agravamiento de la crisis internacional y como consecuencia de la aprobación del referendo que le dio carta libre a Chávez para profundizar el proceso económico-social hacia el pregonado socialismo del siglo XXI. Durante todo el año 2009 el gobierno generó diversos recursos de poder de estrategia política modificando el entramado productivo local por

intermedio de intervenciones públicas sobre diversas compañías extranjeras. En ese sentido, se puede mencionar, siguiendo a López Maya (2010: 221), una extensa lista de medidas gubernamentales que afectaron en forma directa a un conjunto de firmas internacionales, entre ellas: la intervención, con control militar, de empresas arroceras (febrero) bajo la acusación, por parte de Chávez, de ser responsables del desabastecimiento del producto; la conversión en propiedad social de la aerolínea Aeropostal (marzo); la nacionalización de sesenta empresas de actividades petroleras complementarias (transporte, inyección de agua, vapor o gas) en el lago de Maracaibo (mayo); la expropiación de 10.000 hectáreas de latifundios en distintas partes del país para fomentar la producción de alimentos (mayo); la expropiación de cuatro empresas de transporte de combustibles que operaban en los Estados Zulia y Lara (septiembre); la adquisición del complejo turístico de la cadena Hilton en la isla de Margarita (octubre); la nacionalización de la empresa procesadora de café Fama de América (noviembre), entre las más importantes.

Todo este proceso de expropiaciones y estatizaciones generó un aumento del aparato del Estado, lo que dio lugar a una acentuación de su insuficiente capacidad de gestión. Este déficit se potenciaba por una política presidencial basada en una constante rotación de los miembros del gabinete (RP de estrategia política), que obedecía más a criterios de lealtad al primer mandatario que a la búsqueda de capacidades profesionales (López Maya, 2010: 222). A pesar de que crecían los recursos de poder financieros del presidente, luego del control de varias empresas productivas, también con ello aumentaban las dificultades para gestionarlas con un nivel acorde a las exigencias que dichas compañías generaban en su gestión cotidiana.

Las crecientes denuncias de corrupción que afectaban a la administración pública, y que el mismo presidente había advertido luego de la derrota electoral de 2007, generaron un profundo malestar en diversos grupos sociales que involucraba a los propios simpatizantes y base de apoyo del presidente. Entre los hechos más importantes se encontraban los que se revelaron durante la crisis bancaria a finales de 2009, y que involucraron a un grupo de empresarios locales, y los denunciados en mayo de 2010 relacionados con el abandono y descomposición de toneladas de productos comestibles importados en las aduanas oficiales. La crisis bancaria implicó la clausura de siete pequeños bancos privados, que representaban el 9% de la captación de dinero en el circuito financiero, por desórdenes administrativos e

irregularidades en su gestión bajo el amparo del Estado. En cuanto al abandono de productos comestibles, se acusó a la Productora y Distribuidora Venezolana de Alimentos (PDVAL) de desechar alimentos presentes en los contenedores importados durante el año 2008, entre los que se encontraban 169.901 toneladas de arroz, 166.262 toneladas leche en polvo y 96.209 toneladas de pollo.

Este proceso de cuestionamiento a la burocracia estatal, que superaba la frontera chavista, se desplegaba en un contexto de crisis económica interna. La caída del PBI durante el año 2009 y principios de 2010, debido a causas locales e internacionales, evidenciaba que las iniciativas del gobierno no alcanzaban a solucionar los problemas estructurales de la economía venezolana (en especial la dependencia de los vaivenes internacionales del precio del petróleo) y amenazaban con convertirse en un boomerang para las elecciones de septiembre de 2010. En ese sentido, el gobierno tomó nota del peligro de la situación y adoptó medidas en varios flancos para evitar el agravamiento de las variables macroeconómicas.

Para enero de 2010, ante la evidencia de que la economía no lograba volver al círculo virtuoso de los años anteriores, el gobierno impulsó cambios en la política cambiaria y devaluó la moneda local en un 20% para importaciones gubernamentales y en el 100% para importaciones del sector privado. En ese sentido, la administración chavista debió implementar dos tipos de dólar: uno básico con un precio de 2,30 bolívares, y otro ligado a la política petrolera a 4,30. Estas dos clases de divisas eran proporcionadas por la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI): con la primera se podían comprar alimentos, materiales de salud, maquinaria y equipos para el desarrollo económico, ciencia y tecnología y útiles escolares; con la segunda, el resto de los bienes y servicios que no contemplaba el primer tipo de cambio.

El propósito de la medida fue poner freno a los gastos suntuarios que desequilibraban la balanza comercial sin afectar la capacidad de maniobra del Estado. El incremento del parque automotor, que en menos de diez años aumentó en un 113% (Ramírez, 2012: 39), permitió a los sectores medios y populares acceder, a precios moderados, a la adquisición de automóviles mediante programas especiales de financiamiento a bajo interés, con eliminación del impuesto al valor agregado y con precios nacionales subsidiados para la gasolina. La preocupación del gobierno por limitar las

importaciones suntuosas (para el año 2007 se vendieron alrededor de 491.899 automóviles, de los cuales un 68,4% fueron importados, (El Troudi, 2010: 63) llevó a Chávez a expresar que “no podemos estar gastando nuestras reservas internacionales en Hummers”³⁶². Más tarde, y ante la insistencia de la población por adquirir la divisa norteamericana en un contexto de incertidumbre por el valor de la moneda, el gobierno suspendió la comercialización de dólares clausurando algunas casas de cambio que trabajaban con moneda extranjera y persiguió a sus propietarios bajo la acusación de especular en contra del país.

Según el especialista Norberto Bacher, el conjunto de medidas adoptadas por el gobierno se inscribían dentro de una lógica que descansaba en hacer frente a los embates de la economía internacional con el menor costo social. En ese sentido, la economía venezolana contaba “con una reserva monetaria adecuada al tamaño de su economía, sin exigencias importantes de deudas internacionales en dólares, sin necesidad de recurrir al mercado externo de capitales para financiarse y con un alto porcentual de financiamiento para las nuevas obras de infraestructura... A esa situación se sumaron medidas de contingencia que básicamente fueron a) reducción del gasto burocrático del Estado sin afectar los planes sociales que se mantuvieron a pleno; b) moratoria de hecho con los acreedores del Estado (contratistas en su mayoría), cuyas deudas estaban nominadas en moneda interna (bolívares); c) postergación de algunos proyectos de gran envergadura y d) mayor restricción para asignar divisas a los importadores en rubros suntuarios (electrodomésticos, autos, etc.). En esa coyuntura el flanco más débil fue la excesiva dependencia externa de alimentos que se importaban y que exigieron una fuerte salida de divisas por el alza mundial de sus precios”³⁶³.

En este contexto de recesión económica producto del impacto de la crisis internacional y de la caída de los precios del petróleo, el gobierno de Chávez comenzó a utilizar los recursos institucionales de poder para neutralizar las voces opositoras que se multiplicaban a partir de este nuevo escenario económico. En enero de 2010. La Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) ordenó la salida del aire de “RCTV Internacional” ya que el canal, que durante el año 2007 había visto caer su licencia local, se

³⁶² Ramírez (2012: 40).

³⁶³ Norberto Bacher. Entrevista con el autor.

resistía a emitir las cadenas nacionales obligatorias realizada por Chávez, alegando que gran parte de su producción tenía lugar en Miami. La persecución contra los medios opositores al gobierno fue durante estos años frecuente e implicó también a las emisoras de radio. A partir de instrumentos legales (recursos de poder institucionales), el gobierno dictaminó el cierre de treinta y cuatro emisoras críticas de la administración chavista bajo la acusación de que funcionaban de manera ilegal. Según la decisión del primer mandatario, esas radios fueron sacadas del aire y traspasadas sus frecuencias “a emisoras nuevas que se van a crear... no son para dárselas a la burguesía, hay que crear una radio popular en manos del pueblo”³⁶⁴.

Por otra parte, también esta persecución a los medios opositores se corporizó en las detenciones de periodistas. Los casos como el del director del diario *Tal Cual*, el veterano ex dirigente del MAS, Teodoro Petkoff, que fue procesado por atentado a la seguridad del Estado, de Rafael Poleo, director del diario *El Nuevo País* y del periódico *Zeta*, quien se exilió en Miami luego de emitir en un programa de Globovisión referencias comparativa entre el dictador italiano Benito Mussolini y el presidente venezolano, y de Francisco Pérez, columnista del diario *El Carabobeño* quien fue sentenciado a 3 años y 9 meses de prisión e inhabilitado profesionalmente por difamación e injuria a un funcionario público, fueron algunos de los más salientes. Estos hechos se sumaban a los anteriormente protagonizados por el periodista de *El Estado* de Táchira Gustavo Azocar (por corrupción y desvío de fondos) y por Ibeysuce Pacheco de *El Nacional* de Caracas³⁶⁵.

El endurecimiento de la política oficial frente a las protestas se acentuó durante estos años y dio lugar al surgimiento de nuevos actores contestatarios ante las decisiones gubernamentales. En ese marco, la aparición de las protestas sindicalistas y estudiantiles como emergentes de una nueva etapa de resistencia a los cambios incrementó los recursos de la oposición al mismo tiempo que surgían cuestionamientos frente a la política de profundización del socialismo del siglo XXI del gobierno.

En el marco de la radicalización del proceso chavista y la profundización de la democracia participativa como vehículo para concretar una nueva forma de enlazar los

³⁶⁴ López Maya (2010: 223).

³⁶⁵ Esta información proviene del “Informe Anual de la SIP. 2010” (<http://es.scribd.com/doc/41476049/Informe-de-La-SIP-Caso-Venezuela>), el Informe Bienal de Instituto Prensa y Sociedad “Medios en asfixia: La libertad de Prensa en Venezuela 2008-2010” y del libro de Becerra y Lacunza (2012: 230-231).

vínculos entre estado y sociedad, el primer mandatario anunció su deseo de promover los consejos de trabajadores como parte de la constitución del Poder Popular. Es decir, la constitución del socialismo del siglo XXI llevaba como herramienta principal a la democracia participativa enmarcada en el concepto de poder popular. En ese formato de construcción popular, los sindicatos perdían su peso e importancia, en especial aquellos que mostraban una posición crítica frente al gobierno de Chávez. Según la organización el Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (PROVEA), la violencia en el ámbito sindical aumentó en forma significativa, y en el año 2009 se registraron los homicidios de 46 dirigentes sindicales la mayoría en enfrentamientos por la obtención de puestos de trabajo. Esta cifra “constituyó un aumento del 58,6% con respecto al período anterior, y es la segunda cifra más alta en los diez años de gobierno del presidente Chávez”³⁶⁶.

Otro de los sectores afectados por las políticas oficiales fueron los estudiantes, quienes desde el episodio de RCTV en mayo 2007 venían movilizándose en contra de las políticas del primer mandatario. Durante los años 2009 y 2010, los estudiantes se convirtieron en el principal antagonista del gobierno en las calles y en más de una oportunidad el líder bolivariano se refirió a ellos en términos despectivos y amenazantes. En ocasión de un *Aló, presidente* de principios de 2009, Chávez amenazó con echarles “gas del bueno” y apresarlos “si no se cumple con mi orden me raspo al que desobedezca, guarimbaii que pretenda montarse debe ser disuelta de inmediato, sin diálogo ni nada ¡cómo va a haber diálogo! Nada de ‘por favor’ ¡méntanle la ballena señores!... Doy esta orden al comandante de la PM, si no, lo quitamos ¡cómo van a estar los policías como unos pendejos, a que les escupan la cara! El Chávez pendejo se quedó en 2002, no voy a permitir que cuatro pelagatos burguesitos embochinchen al país. Ministro del Interior: eche gas lacrimógeno, lance las ballenas y el rinoceronte”³⁶⁷. Este nuevo actor social estudiantil será

³⁶⁶ PROVEA. Informe Anual 2009. En línea: <<http://www.derechos.org.ve/informes-anales/informe-anual-2009/>>.

³⁶⁷ Montero (2009: 365). Según la autora, *Guarimba* es una palabra que proviene de un juego infantil en el cual varios niños o niñas corren mientras los persigue otro. La guarimba es el refugio en el cual no pueden ser tocados por quien persigue, convirtiéndose en nuevo o nueva perseguidora. En 2002 la palabra fue usada por los opositores del gobierno del presidente Chávez para indicar los refugios donde no pudiesen ser alcanzados por las fuerzas represoras durante los disturbios de la crisis gubernamental. La *Ballena* es un carro cisterna cuya agua es disparada a presión sobre manifestantes, a fin de disolver la manifestación. El *Rinoceronte* es un vehículo de ataque, blindado.

otro de los recursos de poder social de la oposición en esta última etapa de investigación, dotando de dinamismo a la protesta antichavista y desafiando, en el plano de la movilización activa, el apoyo popular del gobierno.

A pesar de los últimos movimientos de los grupos opositores y del impacto social de la crisis internacional en el país (el desempleo aumentó del 7,4% de febrero de 2009 al 8,6% del mismo mes de 2010), el primer mandatario continuó con el proceso de radicalización política en el marco del socialismo del siglo XXI. En ese sentido, Chávez avanzó hacia una reforma en los Concejos Comunales (CC, recurso de estrategia política) para dotarlos de mayores funciones que incluían actividades de planificación y organización para impulsar la propiedad social en coordinación con las milicias bolivarianas. Para ello, en noviembre de 2009 la AN aprobó la Ley Orgánica de los Consejos Comunales (LOCC), con la finalidad de construir un modelo de sociedad socialista. En ese marco se creó una nueva figura, las “comunidades”, que tendrán mayores atribuciones y prioridad por sobre los municipios y las entidades federales en la transferencia de servicios públicos. En dicha ley se estableció que toda organización comunitaria debía regirse por la LOCC, y que las comunas no necesitarían seguir el ordenamiento territorial del Estado constitucional, ya que tendrán la potestad para delimitarse por encima de los límites del ordenamiento territorial.

Para García Guadilla (2009: 297), los CC eran organizaciones sociales creadas por iniciativa presidencial que encarnaban un nuevo actor comunitario con dos tipos de funciones: la autogestión y la resolución de los problemas de la comunidad. En los hechos, dicha propuesta oficial emergía como una estructura paralela, pero con mayores poderes, a la existente. La elección de las comunas, como en los CC (siguiendo una tradición de representación propia de experiencias socialistas del siglo XX), se realizaba a través de mecanismos de democracia directa y de Asamblea, siendo nombradas las instancias superiores por elecciones de segundo, tercer y cuarto grado (López Maya, 2012: 24). La creación de este nuevo RP institucional, a su vez, apuntaba hacia el control por parte del poder ejecutivo nacional de segmentos de decisión regional.

El desarrollo de esta nueva herramienta de poder popular es para Norberto Bacher el principal aporte de los CC, ya que “una democracia necesita romper con el tradicional

molde institucional de lo representativo, que en la práctica se traduce en las formas individuales que asume la política republicana, sea a través del delegado, el puntero, el líder barrial o distrital o el caudillo. Pero también se necesita superar la cultura política del representado que alimenta a la anterior, porque espera la resolución de sus necesidades sin involucrarse en las tareas y dificultades para que eso se materialice”. Sin embargo, para el mismo Bacher los riesgos de la implementación de esta nueva modalidad de entender la relación entre el Estado y la sociedad en torno a la democracia directa existe porque “dar este paso no es nada sencillo y las experiencias son variadas y con disímiles resultados, tanto de éxitos como de fracasos, porque en muchos casos se reproduce la vieja práctica, donde algunos grupos se apropian de la representación del colectivo mediante diversas maniobras. Incluso al amparo de funcionarios estatales que son los encargados de impulsar esta organización puedan recibir los recursos necesarios para su gestión comunitaria en las más diversas áreas, que se extiende desde las obras de calle hasta la seguridad, la construcción de viviendas y múltiples emprendimientos productivos o comerciales. No hay duda Chávez que es motor principal y crítico riguroso de estas nuevas experiencias”³⁶⁸.

La estrategia de los CC, al igual que las MB, se enmarcaba en una lógica de construcción de una nueva institucionalidad que se edificaba por fuera de lo constitucionalmente existente. Es decir, la construcción del socialismo del siglo XXI será para Chávez una tarea que no podrá realizarse por intermedio de la institucionalidad vigente, y por ello estimulaba la generación de nuevos recursos de poder institucional con la fundación de novedosas estructuras, ajenas a la antigua forma de comprender el Estado y su relación con la sociedad. A su vez, como se dijo anteriormente, este RP institucional le daba al líder bolivariano mayor control e información sobre la distribución presupuestaria de las distintas regiones en donde funcionaban estos consejos.

En ese proceso de modificaciones institucionales en un contexto de crisis económica internacional, se producía un auge de las protestas en las calles y se evidenciaban señales de una creciente reorganización de las fuerzas políticas opositoras, en vista a las elecciones legislativas de septiembre de 2010. La oposición, que no había participado del acto electoral del 2005, dejando una Asamblea Nacional monocolor chavista, encaró esta votación parlamentaria con una nueva estrategia política. El esquema de las fuerzas

³⁶⁸ Norberto Bacher. Entrevista con el autor.

antichavistas descansaba, por un lado, en la presentación de candidatos únicos por regiones y aspirantes independientes y, por el otro, en la oferta de un mensaje que se alejara de la polarización política de los años anteriores y que escasos resultados brindó a las fuerzas opositoras durante esta década.

Este desafío del antichavismo convirtió a las elecciones legislativas en el test más importante para el gobierno, ya que implicó tomar nota de tres aspectos que ponían en riesgo el mantenimiento de la hegemonía electoral: en primer lugar, el desgaste que iba sufriendo la administración en un contexto de dificultades económicas; en segundo término, la nueva correlación de fuerzas existentes entre oficialismo y oposición, que se alejaba del encuadre anterior, y por último, el impacto que dicha votación tendría en la constitución parlamentaria del oficialismo para que el presidente continuara gobernando con herramientas delegadas por el propio congreso venezolano. Es decir, esta elección definiría de qué forma Chávez prolongaría los recursos de poder institucionales basados en mayorías especiales o por mayorías absolutas.

A pesar de que los efectos más importantes de la crisis económica se habían superado y el PBI había vuelto a tomar una curva ascendente desde el segundo trimestre de 2010, según datos del Banco Central venezolano³⁶⁹, los problemas estructurales de la economía local continuaban ejerciendo una presión sobre el modelo productivo chavista. La crisis de electricidad, junto a la mayor sequía de las últimas cuatro décadas, se convertía en nuevas carencias sociales que preanunciaban que las elecciones que se avecinaban serían de las más reñidas de los últimos doce años. El impacto de las dificultades sociales sobre uno de los principales apoyos gubernamentales como eran los sectores populares, la reorganización opositora (que había demostrado, luego de la victoria en el referendo de diciembre de 2007, que Chávez podía ser derrotado electoralmente) y la ausencia del líder bolivariano en la oferta de candidatos a votar, ubicaba a esta elección legislativa entre las más difíciles desde 1998.

Para mediados de año, y en el marco del tradicional programa *Aló, presidente*, el primer mandatario se refería a la situación económica por la que transitaba el país e indicaba que “el Producto Interno Bruto en Venezuela era de 90 mil millones de dólares cuando llegamos al gobierno; el año pasado [por el 2009] terminó por encima de 300 mil

³⁶⁹ Datos obtenidos en base al Banco Central de Venezuela, en línea en: <<http://www.bcv.org.ve>>.

millones de dólares... luego de la Cuarta República, el PIB experimentó un incremento significativo, y registró un promedio de 2,5% de crecimiento en los últimos 10 años... en los últimos seis años el PIB del país aumentó en un 7,8%, y sólo China le superó en este período”³⁷⁰. Por otro lado, la recuperación de la economía venezolana en esos meses venía de la mano del aumento de los precios del petróleo, que luego de la abrupta caída del crítico año 2009 (35 dólares) aumentó a 70 dólares el barril (Méndez Delgado y Lloret Feijóo, 2010: 4) aliviando la situación de la economía local en el contexto del inicio de la campaña de la elección legislativa.

El debate electoral fue definido, tanto por el gobierno como por la oposición, como una confrontación entre dos modelos de sociedad (Lander, 2010: 1). Para el oficialismo, la votación legislativa implicaba la profundización del modelo que llevaría al socialismo del siglo XXI, mientras que para la oposición la lucha era frente al “estatismo comunista”, la defensa de la democracia y el derecho de propiedad. La novedad del panorama electoral se encontraba en que la oposición había logrado la unidad de sus fuerzas y proyectaba en la elección legislativa obtener una importante bancada con el objetivo de impedir que el líder bolivariano alcanzara las dos terceras partes de la Asamblea, mayoría especial (o calificada). Las expectativas del antichavismo, en ese sentido, eran mayores a otras contiendas, ya que el impacto internacional de la crisis en un periodo de desgaste gubernamental, junto a un contexto de votación en donde Chávez no era candidato, se transformaban en alicientes para una oposición necesitada de recuperar recursos de poder institucionales.

Para Chávez la elección fue planteada en los mismos términos que las contiendas anteriores, y a pesar de que el primer mandatario no fue candidato tuvo un protagonismo estelar en la contienda. A lo largo de toda la campaña electoral su presencia en afiches, programas de radio y TV fue superior a la de sus candidatos a la Asamblea. En uno de los discursos previos a la elección, el primer mandatario marcó la trascendencia de dicha votación, ya que el carácter de la misma suponía la supervivencia, no sólo del proyecto socialista, sino también de su propio liderazgo. Así lo hacía saber: “Exijo lealtad absoluta a mi liderazgo... No soy un individuo, soy un pueblo. Estoy obligado a hacer respetar al

³⁷⁰ Programa *Aló, Presidente* N° 359 en línea en:
<http://www.alopresidente.gob.ve/informacion/7/1731/programa_alupresidente_359.html>.

pueblo. Los que quieran patria, vengan con Chávez... Aquí en las filas populares, revolucionarias, exijo máxima lealtad y unidad. Unidad, discusión libre y abierta, pero lealtad... Cualquier otra cosa es traición... No me importa lo que piense o diga la oposición. Ya ustedes saben cómo les respondo, pero en las filas revolucionarias, Lealtad” (Lander, 2010: 18).

Para el oficialismo, el objetivo principal de la elección era mantener no sólo el control de la AN, sino obtener la mayoría calificada de las dos terceras partes de la misma. Este tipo de mayoría se conseguía con 110 diputados y permitía, entre otras importantes potestades, la aprobación y derogación de leyes orgánicas, la aprobación final de reformas constitucionales, el sometimiento a referendo nacional de proyectos de ley, la creación o supresión de Comisiones Permanentes de la AN, como así también el nombramiento de los integrantes del Tribunal Supremo de Justicia, del Poder Electoral, y del Poder Ciudadano (Contraloría, Defensoría del Pueblo y Ministerio Público o Fiscalía). La otra mayoría de las tres quintas partes del cuerpo (99 miembros) permitía objetivos más limitados como la aprobación de “Leyes Habilitantes” mediante las cuales el parlamento puede delegar parte de sus funciones al Presidente.

Las fuerzas opositoras, atentas a la consecuencia de la crisis económica del país y los cambios de humor político³⁷¹, lograron presentar candidaturas unificadas (la mayoría por consenso, y el resto a través de elecciones primarias) en todos los distritos electorales (recurso de estrategia política). La coalición antichavista (RP institucional) se congregó en torno a la “Mesa de Unidad Democrática” (MUD), alianza que estaba integrada por Primero Justicia, AD, Causa R, Proyecto Venezuela, Copei, Convergencia, Un Tiempo Nuevo, entre las organizaciones partidarias más importantes.

Estas elecciones parlamentarias se realizarían bajo un nuevo sistema electoral, luego de que la AN aprobara durante el año 2009 una “Ley Orgánica de Procesos Electoral”. El debut de la nueva ley en el marco de las legislativas implicaba cambios en los circuitos electorales y en la propia elección de candidatos. Los 165 diputados que componen la AN se elegiría mediante circunscripciones uninominales (113) y por lista (52) en circuitos

³⁷¹ Según Latinobarómetro, los índices de aprobación de la gestión de Chávez se ubicaron en los años 2009 y 2010 en los números más bajos de los últimos siete años. En esos años, el líder bolivariano concitó un nivel de adhesión del 45% para el año 2009 y del 47% para el 2010. En línea en: <<http://es.scribd.com/doc/70688598/INFORME-DE-LATINOBAROMETRO-2011>>.

donde la sobrerrepresentación de las zonas menos pobladas otorgaba una ventaja indudable al chavismo. Estos circuitos electorales poseen más diputados en relación al número de votantes de las zonas urbanas y más pobladas, por lo que la reforma benefició al oficialismo, ya que como se observó en el capítulo anterior, allí se encontraba la mayor parte de sus apoyos. El voto electrónico, que no provocaba cuestionamientos opositores, se mantenía como el mecanismo de selección y el voto continuaba siendo optativo.

Finalmente, el 26 de septiembre de 2010 se realizaron las elecciones legislativas y el oficialismo venció por una mínima ventaja. El PSUV obtuvo 5.423.324, es decir, el 48,13% de los votos frente a la alianza opositora, el MUD, que consiguió el 47,2% con 5.320.364 de las preferencias electorales. La diferencia a favor del gobierno fue de sólo 102.960 votos, es decir menos del 1% del total de los votos válidos (Lander, 2010: 3). En tercer lugar, muy lejos de ambas alianzas partidarias, se encontraban los disidentes del chavismo, el PPT, con 353.979 votos (3,14%). A pesar de que el objetivo principal del gobierno era alcanzar la mayoría calificada de 110 diputados, el PSUV obtuvo 98 escaños, frente a los 65 del MUD y los dos del PPT. La exigua diferencia de votos y la amplia de bancas mostraba que la reforma electoral de 2009 benefició claramente al oficialismo en el reparto de escaños.

La victoria chavista, en condiciones económicas adversas y con una oposición unificada detrás de candidatos únicos, marcaba nuevamente que la adhesión al presidente, más allá del desgaste de gobierno, continuaba siendo mayoritaria en la sociedad venezolana (recurso de apoyo popular/ ciudadano). A pesar de encontrarse a un voto de la obtención de la mayoría calificada de las tres quintas partes, el resultado electoral fue sumamente auspicioso, ya que la posibilidad de realizar acuerdos con los diputados del PPT dejaba al oficialismo en condiciones concretas de gobernar con esa alternativa especial de mayoría.

En cuanto a la evolución del voto, el oficialismo perdió en términos absolutos y por estados si se compara con las elecciones precedentes³⁷². El PSUV ganó en dieciséis estados, mientras que la oposición lo hizo en siete. La mínima ventaja del chavismo en la elección se explicaba en que los dieciséis estados ganados por el oficialismo representaban el 46% de la población, mientras que los ocho obtenidos por la oposición constituían el 54% e

³⁷² El oficialismo perdió alrededor de 860.000 votos en relación al referéndum de 2009, y casi 1.800.000 respecto de las elecciones presidenciales de 2006. Datos obtenidos en base al Consejo Nacional Electoral, en línea en: <www.cne.gov.ve>.

incluían a los de mayor cantidad de habitantes (Zulia, Miranda y Carabobo³⁷³) y una alta proporción de las principales ciudades del país (Lander, 2010: 6).

La elección parlamentaria se asemejó al referéndum del año 2007, en donde un casi empate técnico definió la elección, pero la traducción de votos en cargos de esta votación le permitió al oficialismo lograr una nítida mayoría absoluta de votos y a la oposición volver a tener representación parlamentaria (RP institucional) luego del fracaso del intento de deslegitimación del año 2005. A su vez, a pesar de la reñida compulsa electoral, la misma se desarrolló en un contexto de tranquilidad ciudadana y ambas partes aceptaron los resultados sin objetarlos.

Recapitulando, luego del triunfo electoral en el referendo de febrero de 2009, Chávez continuó con el proceso de nacionalización de la economía venezolana (RP de estrategia política) que había iniciado durante el segundo semestre de 2007. En ese sentido, el primer mandatario adoptó una serie de medidas de restricción económica para limitar las importaciones suntuarias y corregir distorsiones en la balanza de pagos, que tuvo como consecuencia una desaceleración económica que impactó en el humor social de la población.

El control y uso de los recursos de poder institucionales y de estrategia política durante esta etapa le permitieron a Chávez superar los coletazos de la crisis internacional con políticas activas y la movilización de grupos estudiantiles disconformes con las políticas del gobierno. Sin embargo, a pesar de neutralizar los episodios de protesta de los grupos opositores, el antichavismo pudo avanzar en acuerdos preelectorales en vista a las elecciones legislativas de septiembre de 2010, presentando una oferta competitiva en un comicio en donde se ponía a prueba el desgaste gubernamental luego de 12 años y la ausencia de Chávez como candidato electivo. Sin embargo, el gobierno logró superar por un porcentaje ínfimo el test electoral, logrando mantener la mayoría absoluta en la Asamblea Nacional venezolana, controlando un RP institucional valioso para continuar el proceso de transformaciones económico-sociales enunciado por el primer mandatario durante los últimos años de gobierno.

³⁷³ En los distritos más poblados de Zulia, Miranda y Carabobo, se elegían 12, 9 y 7 diputados respectivamente, frente a una media que oscila entre 4 y 6 diputados. Datos obtenidos en base al Consejo Nacional Electoral, en línea en <www.cne.gov.ve>.

7.3. Luego de 12 años de chavismo

Este ítem concentra su atención en el análisis de los índices económicos, políticos y sociales luego de doce años de mandato de Chávez. En ese marco, se intenta hilvanar las razones de la fortaleza del LP del líder bolivariano a partir de la performance social obtenida en áreas como educación, salud y empleo.

La fortaleza del liderazgo presidencial de Hugo Chávez: la ampliación de derechos sociales

Como se comentó a lo largo de esta investigación, los recursos de poder con los que contó Chávez a lo largo de sus dos presidencias fueron particularmente el fuerte apoyo popular/ciudadano (en especial de los sectores económicos más pobres) y de las Fuerzas Armadas. El análisis sobre el LP de Hugo Chávez desde la perspectiva teórica que trabaja esta investigación incorpora al contexto socioeconómico como variable externa a la dinámica política, ya que ésta impacta de forma positiva o negativa en la acción del presidente (Ollier, 2008: 77). A lo largo de los doce años de análisis, este contexto socioeconómico fue uno de los elementos que permite comprender el apoyo popular de Chávez, como así también los reiterados fracasos de la oposición en intentar derribar, en sus múltiples formas, al chavismo gobernante. Es decir, a pesar de que esta investigación no tiene como objetivo central dar una respuesta a qué causas explican la fortaleza de ambos LP, sino analizar y describir los recursos de poder que ambos utilizaron durante el ejercicio de sus mandatos, aquí se intenta entender las razones que subyacen al por qué de ese apoyo ciudadano.

Desde el punto de vista económico podemos observar que la economía venezolana tuvo un comportamiento positivo en el tiempo histórico en que se despliega esta investigación. Si se examinan los índices económicos en el periodo 1999-2007, se observa que la tasa de crecimiento del PIB experimentó una suba promedio del 2,6% interanual, lo que puede calificarse como crecimiento de grado intermedio (Santeliz Granadillo, 2008: 85). Sin embargo, y siguiendo la misma fuente, si tomamos en cuenta los años que van desde 2003 a 2007 fue de 10,0%, un crecimiento extraordinario que muestra un grado de recuperación

notable de la economía venezolana. Es decir, como no ocurría desde el quinquenio 1972-1977, la economía local completó 20 trimestres de crecimiento económico ininterrumpido.

El extraordinario crecimiento económico de aquellos momentos contrasta, como se advirtió, con lo sucedido en años anteriores al inicio de la recuperación. Los años 2002 y 2003, caracterizados por una fuerte inestabilidad política, tuvieron su correlato en los principales índices económicos. Según datos del Banco Central venezolano, “la variación porcentual del PIB de 2002 respecto del año anterior fue de -8,9% y en 2003 de -7,8%. El PIB petrolero se redujo -14,8% y -1,9%... el PIB del sector petrolero no rentístico real sufrió en 2002 una reducción porcentual de -38,1%”³⁷⁴. La tasa de desempleo en el crítico año 2003 alcanzó el 16,8%, y en 2004 13,9% (López Maya, 2010: 209).

Se tornaba evidente que las consecuencias del sabotaje petrolero tuvieron un impacto directo sobre la política económica del periodo, pero a su vez dicha crisis le permitió al gobierno, luego de recuperar este RP financiero, reconvertir la empresa y aumentar la capacidad de producción de la misma. La expansión económica, luego de que el Estado pasó a tener el control de PDVSA permitió “que el PIB real (corregido por la inflación) se haya incrementado por casi el doble, al crecer en un 94,7 por ciento en 5,25 años, lo que equivale a un ritmo anual de 13,5 por ciento”³⁷⁵. Luego de superar los vaivenes políticos de esos críticos años, la economía venezolana volvió a enderezarse y con ello los principales índices sociales. La tasa de desocupación tuvo un descenso significativo al pasar del 13% de 2005 al 10% de 2006, para alcanzar el 7,9% en el primer trimestre de 2009 en el contexto de crisis internacional. Las reservas internacionales también crecieron al compás de la recuperación de la economía, al pasar de 21.366 millones de dólares en el 2003 a 31.917 en el primer trimestre de 2006 (López Maya, 2010: 209).

Este crecimiento económico, que como indican los datos se da con mayor fuerza desde 2003, le permitió al gobierno generar un RP de estrategia política en torno a las MB invirtiendo en el campo de lo social y garantizando un piso mínimo de bienestar a los sectores que vienen acompañando al chavismo desde los primeros años de vida política. Según datos oficiales, durante la expansión económica 2003-2008³⁷⁶, la tasa de pobreza se

³⁷⁴ López Maya (2008: 65).

³⁷⁵ Weisbrot, Ray y Sandoval (2009: 1).

³⁷⁶ “Si consideramos el crecimiento desde el primer trimestre de 2003, el PIB real creció en un 94,7 por ciento durante 5,25 años, lo que significa un ritmo anual de 13,5 por ciento. Según cualquier comparación

redujo en más de la mitad, desde un 54% de hogares en el primer semestre de 2003 hasta el 26% a finales del año 2008. La pobreza extrema disminuyó en un 72%, el porcentaje de hogares en condiciones de pobreza se ha reducido en un 39% y el que se encuentra en extrema pobreza en más de la mitad (Weisbrot, Ray y Sandoval, 2008:1). Por lo tanto, los hogares que viven en la pobreza bajó del 55,1% de 2003 a 24,2% en el 2009, en tanto los hogares que viven en extrema pobreza disminuyó del 25% de 2003 al 6,6% de 2009 (López Maya, 2010: 217), marcando un claro descenso de las personas y hogares pobres en la Venezuela Bolivariana de Chávez.

La desigualdad, medida a través del índice de Gini, también experimentó una disminución sustancial al caer del 48,1% en 2003 al 39% en el 2009 (López Maya, 2010: 217). El gasto de hogares (medido en millones de bolívares) se incrementó desde el año 2004 de 24.266.534 a 42.223.375; el déficit nutricional en menores de cinco años disminuyó desde 2003 a 2008 de 5,19 a 4,18, el índice de prevalencia de subnutrición bajó de 18% a 8% (López Maya y Lander: 2009).

Los indicadores relativos al gasto social también han registrado avances sustanciales en estos años. El gasto social real por persona aumentó en 218,3%, la mortalidad infantil disminuyó más de un tercio del 21,4 al 13,7 por mil, el acceso al agua potable y saneamiento se ha expandido desde la elección de Chávez en 1998 desde el 80% al 92% en el 2007, en tanto el servicio de saneamiento alcanzaba en 1998 al 62% para pasar al 82% en el año del frustrado referendo de 2007. En números concretos, según la fuente aludida, esto significaba que “en comparación con el año 1998, aproximadamente cuatro millones de venezolanos más tienen ahora acceso a agua potable y más de cinco millones más a servicios de saneamiento. Estos avances han sido facilitados por una gran expansión en el acceso a los cuidados médicos”³⁷⁷.

Por otro lado, avances de igual magnitud se registran en el campo de la salud. Entre los años 1999 y 2007, y en el marco de las distintas MB descriptas en el capítulo III de esta investigación, el número de médicos de atención primaria en el sector público aumentó más de doce veces, de 1.628 a 19.571, ofreciendo una atención médica anteriormente ausente a

histórica o internacional, esto representa un ritmo extremadamente rápido de crecimiento económico. En términos del crecimiento por persona, fue de 78,8 por ciento, o de 11,7 por ciento al año” (Weisbrot, Ray y Sandoval, 2009: 6).

³⁷⁷ Ibid. (2009:13).

millones de venezolanos en situación de pobreza. Según la misma fuente, en 1998 el país contaba con 417 salas de emergencia, 74 centros de rehabilitación y 1.628 centros de atención primaria, en comparación con las 721 salas de emergencia, los 445 centros de rehabilitación y los 8.621 centros de atención primaria (incluyendo las 6.500 clínicas populares, generalmente en barrios de escasos recursos) que se registraba para febrero de 2007 (Weisbrot, Ray y Sandoval, 2008: 13).

En cuanto a la educación las cifras son elocuentes. El incremento en la escolarización primaria fue del 8,6% en niños entre 5 y 14 años de edad, lo que en números significó medio millón de niños inscritos en las escuelas de ese nivel. El índice de educación básica completa pasó de 81% en 1999 al 95,4 en el 2010. El aumento en la educación secundaria fue del 14,7% (alrededor de 400.000) de adolescentes entre 15 y 19 años. Sin embargo, y de acuerdo con la misma fuente, los avances más significativos se han desarrollado en la educación superior, ya que “entre los años escolares 1999-2000 y 2006-2007, la escolarización aumentó en un 86 por ciento; estimaciones para el año escolar 2007-2008 indicaban que el incremento había sido de un 138 por ciento desde el año base 1999-2000”³⁷⁸.

En estos avances en el ámbito de la educación y la salud una herramienta central de inclusión fueron sin dudas las MB, uno de los recursos de poder de estrategia política generado por el líder bolivariano durante la primera gestión de gobierno. Entre los años 2003 y 2008, las mismas sumaban veintitrés, financiadas principalmente por la empresa estatal petrolera PDVSA. Era evidente que el aumento sostenido del precio del petróleo, junto con una economía que como la sudamericana creció durante esta década a grandes tasas, permitió que el gobierno pudiera llevar adelante un proceso de transferencia de beneficios a los sectores populares, inédito para la historia venezolana. El aumento de los precios internacionales del petróleo (el principal recurso financiero del gobierno) fue desde un promedio de 19,3 dólares por barril en 1999 hasta 99,7 dólares por barril en 2008 (con un pico en julio de ese año de 122,40), y configuró un escenario altamente propicio para estas reformas³⁷⁹. En ese marco, un 89% del dinero destinado por PDVSA fue hacia las MB

³⁷⁸ Weisbrot, Ray y Sandoval (2009: 14).

³⁷⁹ Según los mismos autores hay que resaltar también que “el ingreso no petrolero como porcentaje del PIB también registró un importante incremento a lo largo de la década, desde un 11,7 por ciento del PIB en 1998 hasta 14,2 por ciento del PIB en 2007... Este incremento se debe a una mejor recaudación de impuestos... Los

más importante como eran las de la red médica, Barrio Adentro y Mercal. Siguiendo a Santeliz Granadillo (2008), “si se comparan con 2006, en el caso de la primera, el aporte creció 60%, mientras que para la red de mercados populares el alza en la cantidad de dinero otorgado fue de 92,5%”³⁸⁰. El MERCAL ha sido una de las MB de mayor impacto, ya que dicha iniciativa oficial distribuía alimentos a precios subsidiados y estaba dirigida a satisfacer la necesidad básica de alimentación dentro de la política de seguridad alimentaria llevada a cabo por la administración chavista. En este sentido, los datos reflejan una sostenida expansión en el mercado de consumo alimentario del país, ya que para el 2003, la tonelada métrica³⁸¹ tenía un volumen de 382.860, para pasar al año 2008 a 1.492.263 (López Maya, 2010: 218), casi cuadruplicando su distribución.

En palabras de Norberto Bacher, este control de la renta petrolera por el Estado permitió al gobierno utilizarla para múltiples finalidades, entre las que resaltan tres: “La inversión para ampliar la explotación de los extensos e inexplorados yacimientos de petróleo y gas (plan Siembra Petrolera) sin depender de las multinacionales, el retorno al pueblo de gran parte de esa renta, estimado en estos años en casi 500.000 millones de dólares, bajo la forma de inversión social directa (las Misiones) para satisfacer las necesidades especialmente de los sectores más pobres y no menos importante, como fuente de financiamiento para el impulso de infraestructura y otras ramas de producción que permitan a mediano plazo diversificar la economía nacional y hacerla menos dependiente del mercado petrolero... Es obvio que esta nueva distribución de la renta petrolera tiene enormes consecuencias sociales (redistribución del ingreso nacional), económicas (creación de un nuevo modelo productivo) y político-institucional (base material para ensayar una nueva forma de distribución del poder, a través del incipiente poder comunal)”³⁸². Esta extensa cita permite comprender en toda su dimensión las implicancias de la recuperación de un RP financiero estratégico como era el control de la renta petrolera, por intermedio de PDVSA.

ingresos aumentaron desde 17,4 por ciento del PIB en 1998 hasta 28,7 por ciento del PIB en 2007. El gasto también aumentó, de 21,4 a 25,7 por ciento del PIB durante ese mismo periodo. El gobierno obtuvo un superávit fiscal del 3 por ciento del PIB en 2007 (Weisbrot, Ray y Sandoval, 2009: 18).

³⁸⁰ Santeliz Granadillo (2008: 105).

³⁸¹ Una tonelada métrica es igual a 1.000 kilogramos.

³⁸² Norberto Bacher. Entrevista con el autor.

Sin embargo, y a pesar de los esfuerzos oficiales para lograr la independencia de la economía venezolana de los vaivenes del comercio mundial, el gobierno no avanzó en la concreción de una economía menos dependiente. En cuanto a la política alimentaria, hay que señalar que el componente importado del total de toneladas distribuidas continuaba siendo muy superior al componente nacional, revelando el carácter aún rentista de la economía petrolera y su dependencia del ingreso fiscal (López Maya, 2010: 217). Es decir, la fuerte dependencia de la importación alimentaria continuaba en el país a pesar del estímulo del gobierno para evitarla. En ese sentido, las iniciativas gubernamentales aún no han permitido superar este enclave productivo. El fomento a la “revolución agraria” considerada estratégica para el proceso de transformación en esa área, junto al combate al latifundio y la búsqueda de un desarrollo rural integral a través de la provisión de obras de infraestructura, insumos, créditos, servicios de capacitación y asistencia técnica, en el marco del fuerte alza de precios petroleros de 2008, no han dado los resultados esperados. En términos de financiamiento esto representó una inversión estatal de 3.709 millones de bolívares a 6.519 en el 2004 a 6.519 de esa misma moneda en el año 2008 (López Maya y Lander, 2009: 14)³⁸³.

En algunos casos, el Gobierno intentó romper con el control monopólico de la industria alimenticia a través de la apropiación de compañías pequeñas que se encontraban quebradas o por intermedio de intervenciones oficiales debido a los aumentos de precios de mercancías considerados injustificados. En ese marco, y en el esfuerzo por generar la competencia para evitar la escalada de precios, “el Estado se hizo cargo de varias empresas en 2009 que incluyeron a la productora de café Fama de América y la procesadora de sardinas La Gaviota. En este último caso, se les dio a los trabajadores participación en la toma de decisiones de la compañía”³⁸⁴.

La crisis internacional de finales de 2008 y 2009, por otra parte, impactó de manera directa en la economía venezolana. Esto se observa en la caída del PBI en el año 2009 (-3,3%), la disminución de las reservas internacionales, que bajaron de 43.127 millones de dólares a 29.273, la tasa de desocupación, que aumentó del 7,4% del año 2008 al 7,9%, y

³⁸³ Según Modesto Guerrero, bajo el gobierno de Chávez “se han recuperado 3.800.000 hectáreas en manos de empresarios y del Estado para los pequeños productores. Esta fue diez veces superior a la reformas realizadas entre 1960 y 1998” (Modesto Guerrero. Entrevista con el autor).

³⁸⁴ Ellner (2010: 40).

la disminución del precio del barril del petróleo, que luego del último trimestre de 2008 tuvo un descenso pronunciado hasta alcanzar el precio de 31,55 para diciembre de 2008, según datos del Banco Central Venezolano³⁸⁵. Sin embargo, y a pesar de este difícil contexto externo, continuaron disminuyendo la cantidad de hogares pobres (28,5% en 2007, 27,5% en 2008 y 24,6% en 2009) y los hogares de extrema pobreza (7,9% en 2007, 7,6% en 2008 y 6,6% en 2009)³⁸⁶. Es decir, pese a la crisis, el gobierno venezolano continuó mostrando importantes rendimientos en los índices sociales y en el proceso de distribución de riqueza de los últimos años, lo que explica en gran parte el apoyo popular de los sectores más vulnerables hacia el gobierno.

Estas transferencias a los hogares más pobres, sin lugar a dudas, impactaron de manera favorable en la situación de bienestar de estas familias, ya que la misma permitió liberar parte del ingreso monetario de los años 2003-2008 para la satisfacción de las necesidades más complejas. Según los principales resultados de la III Encuesta de Presupuestos Familiares, publicados por el BCV en 2007, se observa que el 48,3% de la población se ha beneficiado de al menos una Misión bolivariana (Santeliz Granadillo, 2008: 105), evidenciando la importancia de este RP creado por Chávez para el fortalecimiento de su poder. A su vez, estos datos reflejan cómo el primer mandatario hace uso de un RP financiero vital como es el petróleo para realizar un proceso de ampliación de derechos sociales y económicos inédito en el país y que se convierte en uno de los factores explicativos más importante de la fortaleza electoral, medidos en términos cuantitativos, de su acción de gobierno.

Los altos índices de aprobación de la gestión de Chávez³⁸⁷ (recurso de apoyo popular/ ciudadano) provienen, lógicamente, de las políticas implementadas durante estos

³⁸⁵ Datos obtenidos en base al Banco Central de Venezuela, en línea en: <www.bcv.gob.ve>.

³⁸⁶ López Maya (2010.: 217). Los datos obtenidos por la autora fueron en base a INE, CEPAL y BCV

³⁸⁷ A pesar de la baja de los últimos años, Chávez ha mantenido índices de aprobación superiores al 60% durante los años 1998- 2008, según Latinobarómetro (Corporación Latinobarómetro, Informe 2011 En línea: <<http://es.scribd.com/doc/70688598/INFORME-DE-LATINOBAROMETRO-2011>>). De acuerdo a Datanálisis, la imagen positiva de Chávez alcanzó el 71% en el año 2006, 61, 5% en el 2007, 56,6% en el 2008, siendo el 53,3% en el 2009 la más baja hasta ese momento (en línea <<http://www.slideshare.net/plumacandente/escenarios-datanalisis-julio-2010>>). Los datos de Datanálisis coinciden con Latinobarómetro en que los índices de aprobación del primer mandatario promedian el 60% y resultan similares a sus niveles electorales, durante los años de estudio de esta investigación. La imagen presidencial alcanza valores superiores al 80% durante los tres primeros años, descendiendo a la mitad entre los años 2002 y primer semestre de 2003, para repuntar a partir de ese momento hasta el año 2007 con un promedio de 66% (en línea <<http://www.slideshare.net/plumacandente/encuesta-datanalisis-mayo-2010>>).

años, en los cuales la mayoría de los indicadores económicos experimentaron avances significativos, en especial en el campo de lo social. Las MB, la intervención del Estado en la economía con una orientación distributiva y una matriz productiva que incentivaba la propiedad social, le conferían al líder bolivariano una fuente de recursos de poder que le permitieron incrementar su popularidad.

En ese sentido, como líder generador de recursos de poder de estrategia política de manera permanente, Chávez logró que las reglas constitucionales no se conviertan en un escollo a sortear para continuar en el poder y hacer uso permanente del mismo. El cambio de estructuras que venía cabalgando desde el inicio de su mandato se sostenía en un fuerte apoyo popular movilizado y en el resguardo institucional que le proveía el apoyo de los militares, los dos recursos de poder más importantes, junto al financiero PDVSA. Sin lugar a dudas, dichos apoyos derivan de una fuerte presencia del Estado en el fomento del bienestar de esos sectores, que se expresa en el aumento de los índices de educación, salud y trabajo de los grupos más desprotegidos de la sociedad. Los datos indican que luego de diez años de chavismo, los sectores populares obtuvieron beneficios concretos y tangibles que les permitieron aumentar la calidad de su vida cotidiana.

Este camino de transformación social construido por las políticas chavistas se desarrolló en el marco de un intenso proceso electoral. En la etapa estudiada, el oficialismo venció en 12 elecciones (presidenciales, legislativas, regionales y referendos) y fue derrotado sólo en una, lo cual evidenciaba el poderío de Chávez en las urnas. A pesar de las quejas puntuales de la oposición, la disputa política en Venezuela se realizó bajo un marco de legalidad, y así lo atestiguaron las diferentes organizaciones que formaron parte de los distintos procesos electorales. El país ocupa el 5° lugar en cuanto al índice de confianza en las elecciones dentro de Sudamérica (Alcántara y Tagina, 2011: 7) y de acuerdo con Latinobarómetro el 84% de los venezolanos (según datos del año 2010) apoyan la democracia y la prefieren a un gobierno autoritario, que recogió la adhesión del 14% en dicha muestra³⁸⁸. La principal demanda ciudadana, según este estudio, se encontraba en la necesidad de disminuir los índices de corrupción (49%). Según la Asociación

³⁸⁸ Según esta investigación, este apoyo a la democracia en el país se mantiene desde hace varios años. Los niveles de adhesión en los años precedentes fue de 81% en 2007, 84% en el 2008 y el mismo porcentaje en el 2009 (Corporación Latinobarómetro, Informe 2011 En línea en: <<http://es.scribd.com/doc/70688598/INFORME-DE-LATINOBAROMETRO-2011>>).

Transparencia Internacional, Venezuela se encontraba en el puesto 162° en el ranking de países medido según el Índice de Percepción de Corrupción (IPC)³⁸⁹.

La evidencia sostenida en los datos demuestra que en Venezuela se ha producido una ampliación de derechos sin igual para la historia del país. Los avances oficiales en los índices de pobreza, de extrema pobreza, de acceso a la educación, a la vivienda y a la salud y de los niveles de ocupación, demuestran que se ha producido un importante proceso de inclusión social. La popularidad del primer mandatario (en términos de niveles de adhesión medida a través de estudios y en términos de resultados electorales) resulta una muestra fehaciente al respecto. Los sectores populares venezolanos, los más favorecidos en este proceso de transformación social, han votado en forma sistemática al líder bolivariano y han sido el principal sostén, en términos de movilización activa, en los momentos de mayor incertidumbre política (golpe de estado de 2002, crisis de PDVSA en 2003, referendo revocatorio de 2004, entre los más importantes) transitados por el proceso chavista en estos doce años.

Sin embargo, esta ampliación de derechos sociales implementada por el gobierno venezolano se ha desarrollado en paralelo a una restricción de derechos civiles, que importantes segmentos de la población ha sufrido en estos años de análisis. Según se observó a lo largo de esta investigación, luego de la reelección presidencial Chávez ha encarado un proceso de transformación económico-social embanderado en el socialismo del siglo XXI, que implicó, necesariamente, un conjunto de medidas que lesionaron derechos consustanciados con los principios liberales. Las políticas chavistas desarrolladas durante la crisis internacional de 2008, que implicaron un proceso de expropiación de empresas nacionales e internacionales, afectaron derechos de propiedad. Las restricciones a las marchas opositoras y el control del Estado en vastos ámbitos de la vida política resultaban atentatorios frente a una buena parte de la sociedad que no se considera oficialista.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA y la organización no gubernamental con sede en Nueva York Human Rights Watch (HRW) han detectado en el país una serie de condiciones que evidenciaban la falta de una efectiva separación e independencia de los poderes públicos y que impedían la garantía de derechos

³⁸⁹ Transparencia Internacional. En línea en:
<http://can.pcm.gob.pe/files/03_%20cpi_2009_presskit_complete_es.pdf>.

civiles. En ese sentido, según la CIDH, “se está utilizando el poder punitivo del Estado para intimidar o sancionar a personas en virtud de su opinión política”, y aunque en relación con los derechos económicos, sociales y culturales, “reconoce los logros del Estado relacionados con la progresiva vigencia de estos derechos... las restricciones a la libertad de expresión y a la protesta pacífica, la existencia de un ambiente hostil para el libre ejercicio de la participación política en disenso y para la actividad de monitoreo por parte de las organizaciones de derechos humanos” continúan existiendo en el país³⁹⁰.

HRW advertía, a su vez, sobre la vulneración de los derechos sindicales, las listas negras que impedían a los opositores a Chávez ser parte de la administración pública nacional, la discriminación en el interior de la empresa PDVSA, entre otras restricciones a la libre opinión en el país³⁹¹. En línea con el informe de CIDH, se reiteraba que uno de los principales déficit de la gestión chavista era la alta concentración de poder en el primer mandatario. Esto se evidenciaba en que “quienes ocupan cargos claves que la Constitución define como no partidistas, como el Fiscal General, el Contralor Nacional y la mayoría de los miembros del Consejo Nacional Electoral, han sido claramente identificados con el chavismo” (Ellner, 2010: 30). Luego de las denuncias presentadas por esta organización, que alegaban un “debilitamiento del sistema democrático”, el director de HRW para las Américas, José Miguel Vivanco, fue expulsado de Venezuela “por inmiscuirse en los asuntos internos” del país.

En síntesis, el proceso de ampliación de derechos sociales en Venezuela emerge como el principal factor explicativo de la fortaleza electoral del primer mandatario³⁹². Esta generalizada extensión de derechos se realizó en forma paralela a una restricción de derechos civiles, pero para el imaginario social esta ampliación continúa siendo más fuerte,

³⁹⁰ Comisión Interamericana de Derechos Humanos OEA, Doc. 54, 30 diciembre 2009, en línea en: <<http://www.cidh.org/countryrep/Venezuela2009sp/VE09.indice.sp.htm>>.

³⁹¹ Informe Human Rights Watch sobre Venezuela, “Una década de Chávez. Intolerancia política y oportunidades perdidas para el progreso de los derechos humanos en Venezuela”, en línea en: <<http://www.acnur.org.ar/biblioteca/pdf/6688.pdf?view=1>>.

³⁹² A pesar que el 2010 fue el año en que la imagen positiva y de aceptación del gobierno de Chávez fue el más bajo de los últimos seis años, en los sucesivos la popularidad del primer mandatario venezolano volvió a los niveles de los años 2005- 2007. Es decir, a partir del tercer trimestre de 2010 se observó un aumento de los índices de aprobación presidencial, que según IVAD era para junio de 2011 de 62,4%, de Datanalisis de 52% y de Hinterlaces de 55% (en línea en: <<http://www.slideshare.net/plumacandente/anlisis-del-pas-poltico-julio-2011>>).

en términos electorales y de fortaleza del LP de Chávez, que la restricción que el mismo líder generó en la propia acción de gobierno.

Recapitulando, el proceso de transformación social desarrollado a lo largo de la primera década del siglo XXI en Venezuela permite entender la fortaleza electoral mantenida por Chávez a lo largo de los dos mandatos de gobierno. El aumento del empleo, el descenso de la pobreza y de la extrema pobreza a más de la mitad de la que se encontraba al inicio de la administración, el incremento de la matrícula escolar en los tres niveles, el acceso a la salud y a la vivienda para un amplio conjunto de venezolanos, fueron producto de una política oficial que apuntó a ampliar derechos sociales de un importante sector anteriormente ajeno a esos beneficios. Este proceso de inclusión social se realizó en el marco de las MB, un RP de estrategia política generado por el líder bolivariano durante su ejercicio de poder, que dependieron, en su ejecución, en forma directa de la propia presidencia.

Esta ampliación de derechos sociales, tangibles para buena parte de la ciudadanía, se desarrolló en paralelo a un proceso de restricción de derechos civiles. El proceso de expropiaciones iniciado por el gobierno durante de la crisis del 2008 que afectaba derechos de propiedad, los límites marcados a la libertad de expresión y de los periodistas críticos, las restricciones a las protestas sociales opositoras, los casos de corrupción fueron algunas de las decisiones gubernamentales que afectaron derechos consustanciados con los principios liberales.

Conclusión

Durante los años 2008 y 2009, Chávez logró, mediante medidas de fuerte intervención del Estado (RP de estrategia política), sortear la crisis internacional de aquellos años y triunfar en los siguientes test electorales (RP de apoyo popular/ ciudadano). En ese sentido, el gobierno inició un proceso de nacionalizaciones de diversos sectores de la economía local con la finalidad de hacer frente a un comercio internacional que se reducía e impactaba de forma directa en la economía local. El dominio de los recursos de poder institucionales, como era la mayoría parlamentaria calificada, le permitió a Chávez tomar decisiones económicas, en el marco de las “leyes habilitantes”, que habían sido derrotadas en el referendo de 2007.

Luego del triunfo electoral en las regionales, el primer mandatario se encontró en condiciones de insistir en su proyecto de reelección indefinida. En ese sentido, envió un proyecto a la Asamblea con el objetivo de convocar a un nuevo referendo para aprobar esta enmienda constitucional que implicaba modificar sólo el artículo que ponía límites a la reelección presidencial. Más tarde, a instancia de los partidos aliados y con la finalidad de hacerle un guiño político a la oposición, extendió esta posibilidad a todos los cargos electivos del país, al sumar al referendo cuatro nuevos artículos.

El referendo se realizó a mediados de febrero del 2009 y el triunfo del presidente fue contundente. La recuperación electoral del chavismo devenía de un proceso de aceitar la relación con las bases a nivel comunicacional y de no encontrar disidencias al interior de las Fuerzas Armadas (como en el referendo de 2007), ambos recursos de poder históricos del presidente. De esta manera, el primer mandatario generaba un último recurso de estrategia política, uno de los más trascendentales, como era la posibilidad de reelegirse en forma indefinida en su cargo

A partir de ese triunfo, Chávez profundizó el proceso de expropiaciones iniciadas durante el 2008. La obtención de este RP dio lugar a un aumento de la intervención del Estado en la economía que se tradujo en una batería de medidas orientadas a mantener el equilibrio macroeconómico y superar las consecuencias de la crisis financiera internacional. La transformación del entramado productivo hacia un horizonte socialista requirió, en ese sentido, de la presencia del Estado en distintas actividades, lo que dio lugar a un

agrandamiento del aparato estatal, y con ello la ampliación de los recursos de poder y de los grados de discrecionalidad oficial ante las diferentes cuestionamientos opositores. La abrumadora mayoría parlamentaria, la mayoría de las gobernaciones (ambos RP institucionales), el PSUV movilizado (RP institucional de tipo partidario) y el control sobre las Fuerzas Armadas y del apoyo popular/ ciudadano (los RP históricos) le aseguraron al líder bolivariano que las protestas sociales se mantuvieran en los márgenes debido al control oficial. La avanzada oficialista sobre los medios de comunicación televisivos y radiales generó, además, diversas movilizaciones protagonizadas por sectores estudiantiles, lo cual constituyó una novedad en el paisaje político venezolano.

La victoria electoral del chavismo por un porcentaje muy exiguo de votos en la legislativa de septiembre de 2010 evidenciaba en primer lugar, que a pesar del desgaste gubernamental la propuesta chavista aún seguía siendo hegemónica; en segundo término, que pese a la mejora en los índices electorales la oposición no lograba convertirse en mayoritaria, y por último, que la reforma electoral de 2009 había logrado su objetivo, ya que a pesar del escaso margen de ventaja del oficialismo, el PSUV logró un tercio más de las bancas que la propuesta opositora.

Durante los doce años de estudio, Hugo Chávez ha gozado de altos niveles de popularidad que se han expresado en distintas encuestas y en la imbatibilidad del líder bolivariano en la arena electoral. La transformación social realizada en este lapso se expresó en el descenso de la pobreza y de la extrema pobreza, en el aumento del empleo, en el incremento de la matrícula escolar en los tres niveles, en el acceso a la salud para un conjunto generalizado de venezolanos, lo que implicó una ampliación de derechos sociales para una gran porción de la población del país, en especial la más vulnerable. Esta inclusión social promovida por el gobierno se desplegó en el marco de las iniciativas presidenciales de las MB, uno de los principales recursos de poder generados por Chávez durante su primer mandato. De todas formas, esta ampliación de derechos sociales desarrollada por el primer mandatario se desplegó en forma paralela a un proceso de restricción de derechos civiles. La limitación a la libertad de expresión y de empresa, la demarcación de la protesta opositora, la amplia injerencia del Estado afectando derechos consustanciados con los principios liberales, fueron algunos de las acciones oficiales que evidenciaban los límites impuestos por la política chavista.

CAPÍTULO VIII

ENTRE TROPIEZOS Y TRIUNFOS POLÍTICOS (2006- 2008)

“Y a mí, mis voticos me los respeten,
que yo no me los he conseguido ni con
la guerrilla, ni con los paramilitares, sino
en un diálogo permanente, afectuoso,
con el pueblo colombiano”

Álvaro Uribe (Radio Caracol, 2007)

Introducción

Este capítulo se concentra en los primeros dos años de gobierno, luego de la reelección presidencial de agosto de 2006. En este contexto, pueden marcarse dos momentos bien diferenciados a lo largo de esos dos años. Por un lado, la emergencia del escándalo desatado luego de las revelaciones de los vínculos entre el paramilitarismo y dirigentes políticos del uribismo, conocido como el fenómeno de la “Parapolítica”. Por el otro, los éxitos militares de la PSD frente a las FARC (RP de estrategia política) y el triunfo electoral del gobierno en las regionales de octubre de 2007 (recurso de apoyo popular/ ciudadano).

En cuanto al proceso judicial de la “Parapolítica”, se observa de qué manera se despliega en el ámbito judicial y cómo es su impacto a nivel político y en la popularidad del presidente Uribe. A su vez, se repasa en cómo naufraga el proyecto oficial de desmovilización paramilitar en el marco de la “Ley de Justicia y Paz”, y de qué manera la pérdida de control por parte del gobierno afecta a sus estrategias políticas de negociación con dicho grupo ilegal.

Este capítulo también se detiene en los triunfos en la arena militar frente a las FARC, en especial en lo relativo a la captura de los principales líderes de la guerrilla, que fue la estrategia (RP) encarada por el gobierno en el marco de la fase de consolidación, y a la liberación de los secuestrados en manos de este grupo, en especial el de Ingrid Betancourt.

Por último, se observa de qué forma dichas acciones aumentan los recursos de poder de apoyo popular llevando la popularidad del primer mandatario a niveles históricos, en un contexto caracterizado por los interrogantes en torno a la resolución de las investigaciones judiciales de la “Parapolítica”.

8.1. La Parapolítica, pone a prueba los recursos de poder uribista

Este ítem analiza el proceso conocido como la “Parapolítica” en Colombia, dando cuenta del inicio de la investigación por parte de la justicia, la reacción de los involucrados y de qué forma Uribe responde ante el primer desafío concreto a su gobierno por parte de un RP institucional del cual no poseía el control. A su vez, se examinan los efectos de esta investigación judicial sobre el sistema político del país y sus consecuencias hacia el interior del propio gobierno.

El paramilitarismo y su relación con la política, un desafío al LP de Uribe

A partir del 8 de agosto de 2006 parecía abrirse para el reelegido presidente Álvaro Uribe un panorama altamente satisfactorio. Convertido en el segundo presidente reelegido en la historia del país, con una popularidad histórica (RP de apoyo popular/ ciudadano) para un dirigente político que bordeaba el 75% de apoyo, dueño de vastos recursos de poder institucionales y financieros para continuar con su prédica militarista en el marco de la consolidación de su PSD, el líder antioqueño se encaminaba hacia un segundo turno gubernamental sin grandes conflictos en el corto plazo.

Sin embargo, y a pesar de las señales positivas del entorno económico y político, el conflicto con el paramilitarismo se volvió a hacer presente a fin de año. Como se observó en el capítulo IV, la “Ley de Justicia y Paz” promovida por el gobierno para la desmovilización de las AUC transitó con varios sobresaltos, pero le permitió a Uribe controlar a un relevante actor de veto armado. A pesar de que los avances en la desmilitarización paramilitar fueron importantes en lo que hace a la entrega de los principales cabecillas y de sus armas, el proceso presentó desde sus inicios debilidades en lo relativo a las penas y la reparación de las víctimas.

Para mediados del año 2006, la Corte Constitucional anuló varios de los puntos polémicos de la “Ley de Justicia y Paz”, entre los que se encontraba el artículo que equiparaba al paramilitarismo con la sedición. Esta condición era la que le permitía a este grupo ilegal mantener alejada de su situación procesal la posibilidad de ser extraditados a los EEUU, alternativa que continuaba en suspenso por orden presidencial. A su vez, en

dicho fallo la Corte esgrimía que para acceder a los beneficios judiciales los jefes paramilitares debían realizar “una confesión plena y sincera, revelar la ubicación de los cuerpos de los ‘desaparecidos’ y pagar reparaciones económicas a sus víctimas con sus bienes legales y no sólo con los bienes ilícitos que ellos voluntariamente elijan entregar estableciendo que quienes no cumplan con estas condiciones y vuelvan a delinquir perderían los beneficios de dicha ley”³⁹³.

El endurecimiento de la aplicación de la Ley, sumado al traslado de los jefes paramilitares a una cárcel de alta seguridad en Antioquia al que éstos se opusieron al considerarlo ajeno a la negociación, dio lugar a que los principales cabecillas de estos grupos comenzaran un proceso de confesión de delitos que incluían vínculos con la clase política colombiana. Luego de estas decisiones judiciales, el presidente perdió un importante RP de estrategia política como era el control de la negociación entre los paramilitares y el gobierno. Por otro lado, luego de esta decisión de la justicia, y por el riesgo que implicaba ser extraditados en el corto plazo, algunos jefes paramilitares “desengañados por lo que consideraban una traición del gobierno que les había prometido una reinserción tranquila... se retiraron del proceso, así como buena parte de los mandos medios que se había acogido a la ley de justicia y paz”³⁹⁴.

En ese contexto de indefiniciones oficiales en cuanto a los alcances de la Ley y de los acuerdos “caídos” en el marco de los compromisos entre el gobierno y los paramilitares, se iba a desatar, en noviembre de 2006, el escándalo político conocido con el nombre de la “Parapolítica”³⁹⁵. En un lapso de escasos meses, los principales cabecillas de estos grupos

³⁹³ Pronunciamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la aplicación y el alcance de la Ley de Justicia y Paz en la República de Colombia, Doc. 15, 1 de agosto de 2006. En línea en:

<http://www.cidh.org/pdf%20files/Pronunciamiento%20Ley%20de%20Justicia%20y%20Paz.pdf> >.

³⁹⁴ Valencia (2010: 77).

³⁹⁵ El fenómeno de la “Parapolítica” se inicia luego de varias investigaciones periodísticas que mostraban los vínculos entre el paramilitarismo y parte de la clase política colombiana a partir de un artículo de la periodista Claudia López en la Revista semana de noviembre de 2005. En forma simultánea a esta denuncia periodística, la Corporación Nuevo Arco Iris, analizó el mapa político electoral luego de las elecciones de 2002 y observó “que en las listas para Senado y Cámara de la mayoría de los partidos políticos de la coalición de gobierno, junto con las del Partido Liberal, los paramilitares colocaron una parte importante de sus aliados” (Valencia y Sevillano (2009: 87).

El avance de la justicia sobre este tema se profundizó luego de que las autoridades encontraron una computadora perteneciente a alias “Jorge 40”, uno de los principales jefes de las AUC, con información sobre los nexos de la clase política con los paramilitares. En ese sentido, Uribe respondía ante los cuestionamiento de que el gobierno intentaba acallar el escándalo político, que “el computador de ese señor a quien conocen con el nombre de Jorge 40, ese computador no lo trajo el Espíritu Santo... se decomisó gracias a la política de seguridad de este gobierno” (Tabares, 2006: 113).

ilegales comenzaron un proceso de confesiones que daría lugar a un escándalo político en donde los propios actores revelarían los vínculos entre políticos de distintas fracciones partidarias, mayoritariamente ligadas a la coalición de gobierno, y los paramilitares.

Según las investigaciones realizadas por la Fiscalía General de la Nación (FGN) y la Corte Suprema de Justicia (CSJ), varios dirigentes políticos y funcionarios estatales se habrían beneficiado de la acción de estos grupos (intimidación, financiamiento, información y acciones armadas) para conquistar diversos puestos políticos como alcaldías, espacios legislativos en el ámbito nacional y provincial y gobernaciones, a cambio de que, una vez obtenidos esos cargos, pudieran tener vía libre para realizar sus negocios. Esto implicaba, en los hechos, tanto la desviación de dinero para financiar a los escuadrones ilegales, como la colaboración en los crímenes perpetrados dotando de información y acordando con estos grupos sobre quiénes debían ser eliminados o secuestrados.

La justicia llamó a indagatoria a decenas de legisladores provinciales y nacionales, proceso que luego dio lugar a la realización de arrestos y encarcelamientos por sospechas fundadas de actuaciones delictivas. Entre los primeros detenidos y procesados penalmente estaba el senador Álvaro Araujo Castro (de la agrupación partidaria aliada al gobierno, “Alas Colombia”) y hermano de la canciller María Consuelo Araujo. A pesar de que el presidente sintió de cerca la presión de la justicia en este caso, apostó hasta el último momento por sostenerla en el cargo, para más tarde sucumbir a las presiones estadounidenses: pidió su renuncia el 19 de febrero de 2007.

Las acusaciones de varias organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales, y de los grupos opositores sobre los vínculos entre el paramilitarismo y los diferentes poderes del estado, no fue una novedad para el sistema político colombiano. Antes de llegar al gobierno, el propio Uribe había sido señalado como un aliado histórico de los grupos ilegales y de haber financiado por intermedio de las empresas Convivir a grupos paramilitares. Sin embargo, nunca se había avanzado a judicialmente sobre dichas denuncias, como sí iba acontecer luego de estas primeras investigaciones.

En ese marco de cuestionamientos generalizados sobre diferentes figuras políticas, el 17 de noviembre de 2006 el presidente hizo mención al escándalo de la “Parapolítica” al expresar que “lo que está apareciendo ahora es la verdad judicial oculta durante tantos años, porque la seguridad no estaba al servicio de la justicia y porque el crimen crecía y la

justicia era impotente”. En el mismo discurso de Conmemoración de los 120 años de la Corte Suprema de Justicia, el líder colombiano llamó a los congresistas y funcionarios públicos que tuvieran nexos con los paramilitares a “decir la verdad” y desafió a quien lo acusaban de vínculos con estos grupos al afirmar que “si hay alguno de los treinta mil paramilitares que puedan decir que el Presidente de la República ha sido cómplice, que lo digan”³⁹⁶. Una semana más tarde, desafió a los congresistas a “que mientras no estén en la cárcel, a votar las transferencias, a votar la capitalización de ECOPETROL, a votar la reforma tributaria”³⁹⁷.

El proceso judicial que comenzó a finales de 2006, y que tuvo un impacto político local e internacional inmediato, se prolongó durante todo 2007 y gran parte de 2008. En abril de 2007 la investigación judicial alcanzó al primo del presidente, Mario Uribe, a quien se acusaba de tener vínculos con uno de los principales líderes del paramilitarismo, Salvatore Mancuso, hasta ese momento preso en la cárcel de máxima seguridad de Itagüí. Luego de emitida la orden de detención en su contra, se dio a la fuga y se refugió en la Embajada de Costa Rica en Bogotá, donde solicitó asilo político. Su pedido fue denegado, y debió entregarse a la justicia sin condiciones.

La reacción del presidente fue inmediata, y en una entrevista con Radio Caracol acusó a quienes hacían resurgir viejas acusaciones de connivencias familiares con los grupos ilegales y defendió la honorabilidad de su primo Mario, quien recibió un gran apoyo electoral gracias al aporte de su figura³⁹⁸. En ese marco de cuestionamientos, emergió la investigación que pesaba sobre su hermano, Santiago Uribe, de haber conformado un antiguo grupo paramilitar conocido como los “Doce Apóstoles” y que había operado en la zona de Antioquia durante los noventa, en pleno apogeo de este grupo ilegal. Luego de la sospecha deslizada por el senador por el PDA Gustavo Petro, Uribe contestó que dicha acusación no había podido comprobarse y calificó a algunos opositores como “terroristas vestidos de civil”³⁹⁹.

³⁹⁶ Diario *El Tiempo* 17/11/2006. En línea: < <http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS3330329>>.

³⁹⁷ Tabares (2006: 113).

³⁹⁸ Entrevista Radio Caracol: En línea: < <http://www.caracol.com.co/noticias/exclusivo-caracol-el-presidente-alvaro-uribe-habla-del-escandalo-de-la-parapolitica-y-el-caso-de-su-primo/20080423/nota/583705.aspx>>.

³⁹⁹ Aporrea, en línea en: <<http://www.aporrea.org/internacionales/n90145.html>>. En mayo de 2010, el arrepentido mayor Juan Carlos Meneses declaró en Buenos Aires ante el premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, Carlos Zamorano, de la Liga Argentina por los derechos humanos, Eduardo Freiler juez de la Cámara Federal de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de Buenos Aires y el periodista de *Página /12*

En otra de las entrevistas radiales que dio Uribe por esos días, aseguró enfáticamente que “si vamos a hablar de paramilitares, le quiero decir esto: en mi carrera política jamás me he reunido con ellos, jamás mandé emisarios, jamás he hablado con ellos por teléfono, jamás me he mezclado con delincuentes... la única presión que hubo en las elecciones del año pasado fue la presión de las FARC contra mi gobierno. ¿Y estos paras, a donde están la inmensa mayoría? En la cárcel. ¿A cuántos les hemos dado de baja? A más de 1.700... Muchos ignoran que estos congresistas que están siendo hoy investigados, muchos eran del oficialismo liberal en el 2002. No me apoyaron a mí, que hice la campaña en contra y a pesar de ellos”⁴⁰⁰. El presidente hacía jugar los distintos recursos de poder (institucionales y de estrategia política) para defenderse de las acusaciones que pesaban sobre su entorno.

Otro de los conflictos suscitados durante ese mes fue con la Corte Suprema de Justicia. Las investigaciones que la justicia había comenzado a realizar en torno a su primo Mario, junto a la negativa de la CSJ a modificar el status jurídico de los políticos involucrados en el escándalo de la “Parapolítica”, desataron la ira presidencial. El primer mandatario acusó a la CSJ de “sesgo ideológico”, a lo que ésta respondió rechazando las declaraciones presidenciales, pues “tales manifestaciones constituyen una injerencia indebida e inaceptable en la actividad judicial, toda vez que ellas no se pretenden más que usurpar la facultad interpretativa de la que gozan los jueces de la República”⁴⁰¹.

La intervención directa del presidente sobre un miembro de la justicia sucedió cuando el primer mandatario se comunicó telefónicamente con el coordinador de las investigaciones de la “Parapolítica”, Iván Velásquez, para confirmar el rumor que lo

Santiago O’Donnell, que “hay unos casos concretos, hay unas reuniones en la hacienda La Carolina directamente con Santiago Uribe, donde el me pide, pues, a raíz de que ya nos conocemos algo que suscita unos incidentes. Voy a detallar uno a uno para que ustedes los conozcan. Son asesinadas personas y yo le presto la colaboración a Santiago para que el grupo, del que él es jefe, pudiera operar en la región, poder actuar y cometer sus asesinatos sin que la policía se les pusiera en el camino” (Behar, Olga, 2011: 242). La respuesta de Uribe fue la de descalificar la declaración de Meneses y acusarlo de vínculos con el narcotráfico en su gestión como comandante de Policía en Buda y tratar “idiotas útiles de criminales” a quienes participaron de la denuncia (Behar, Olga, 2011: 272).

Las notas de Santiago O’Donnell en *Página 12*, en línea, son las siguientes:

<<http://www.pagina12.com.ar/diario/elmundo/4-148377-2010-06-27.html>>.

<<http://www.pagina12.com.ar/diario/elmundo/4-146193-2010-05-23.html>>.

<<http://www.pagina12.com.ar/diario/elmundo/4-146194-2010-05-23.html>>.

⁴⁰⁰ Palabras de Uribe en entrevista del programa Radio sucesos de RNC Radio en Tabares (2006: 114- 115).

⁴⁰¹ Ramiro Guzmán en “Las perlas uribistas. Reveladora radiografía del gobierno de Álvaro Uribe” (2010: 15-16).

involucraba con el paramilitarismo⁴⁰². A partir de ese momento, Uribe inició una agresiva campaña mediática sobre el magistrado que extendió luego a la Corte Suprema, a la que acusó de “clientelista, farsante, golpista contra el Estado de Derecho”.

Sin lugar a dudas, el proceso de la “Parapolítica” involucró a personajes cercanos al presidente Uribe y le causó al gobierno conflictos a internacionales con el Congreso de EEUU y con diferentes organizaciones de derechos humanos en el país y en el exterior⁴⁰³. Luego de un encuentro en Washington con la presidenta del Congreso norteamericano, Uribe debió escuchar de boca de la congresista que el gobierno colombiano tendría que mostrar “más resultados y condenas y menos palabras”, a raíz de las denuncias de los paramilitares, y un enfriamiento del Tratado de Libre Comercio, objetivo principal del viaje del líder colombiano a EEUU⁴⁰⁴.

Mientras se desarrolló este proceso, las relaciones del gobierno colombiano con su homólogo de EEUU continuaron siendo cordiales, aunque la aprobación del TLC siempre fue un elemento de presión del Congreso estadounidense sobre la administración Uribe. A pesar de los esfuerzos realizados por el líder antioqueño en lo que se refiere a la desmovilización militar, la presión de la potencia mundial siempre estuvo dirigida hacia la posibilidad de que los líderes de los grupos ilegales fueran extraditados a su país. En ese sentido, Uribe intentó que esta negociación siempre se mantuviera dentro de la fronteras de Colombia, en tanto las autoridades de los EEUU “poco interés tienen en los derechos humanos y menos aún en los debates sobre la Parapolítica... [Ya que]... para ellas se está negociando con narcotraficantes y lo que verdaderamente está de por medio es la extradición”⁴⁰⁵.

La presión de los senadores demócratas sobre el gobierno colombiano, por otro lado, se manifestó públicamente en dos ocasiones durante ese año (junio y noviembre de

⁴⁰² El rumor era que “el apresado delincuente ‘Tasmania’, con el fin de obtener rebajas de pena, aseguraba que Uribe lo había contratado para asesinar a otro bandido, apodado René, jefe militar del sureste antioqueño (Guzmán, 2010, 18).

⁴⁰³ La organización de derechos humanos Human Rights Watch ha conminado al gobierno de Estados Unidos a expresar su preocupación por ese mismo tema y ha realizado informes al respecto. En línea en: <<http://www.elespectador.com/articulo84636-el-informe-de-human-rights-watch>> <<http://www.hrw.org/es/news/2009/06/26/colombia-obama-debe-expresarle-uribe-preocupaci-n-por-derechos-humanos>>.

⁴⁰⁴ Revista La Semana, 3 de mayo de 2007. En línea en: <<http://www.semana.com/on-line/nancy-pelosi-exige-alvaro-uribe-condenar-militares-tengan-nexos-paramilitares/102945-3.aspx>>.

⁴⁰⁵ Caballero (2009: 99).

2007). La mayor preocupación de los congresistas se encontraba en la acción del gobierno colombiano en relación a la política de derechos humanos, su posición frente a los periodistas y medios de comunicación y en relación a los múltiples asesinatos de sindicalistas a manos de los paramilitares (Botero y Méndez, 2008: 129). Ante la presión norteamericana hacia el gobierno a nivel internacional, Uribe intentó congraciarse con el sector demócrata del parlamento norteamericano nombrando en el gabinete a Paula Moreno como Ministra de cultura. Esta designación apuntaba a incorporar a una afrodescendiente ya que el país del norte lo acusaba por la ausencia de representantes de raza negra en la cúpula de gobierno.

Durante los años 2007 y 2008 se produjeron diversas detenciones de personajes políticos que hasta ese momento ocupaban importantes espacios de poder a nivel nacional y provincial. En este sentido, durante 2007 se pueden mencionar las detenciones de Trino Luna Correa, gobernador del departamento de Magdalena, de los senadores Miguel de la Espriella, Juan Manuel López Cabrales, Reginaldo Montes, José de los Santos Negrete y William Montes, de la ex representante Eleonora Pineda por ser firmante del “Pacto del Ralito” y del gobernador del Cesar, Hernando Molina Araújo, entre los más importantes. Al año siguiente, las detenciones mostraban políticos de renombre como los senadores Ciro Ramírez Pinzón, Rubén Darío Quintero, Luis Fernando Velasco, Miguel Pinedo Vidal, Guillermo Gaviria Zapata, Humberto Builes Correa, Ricardo Elcure Chacón, quien había reemplazado a Mario Uribe Escobar tras su renuncia. A su vez, en el segundo semestre de 2008 fueron detenidos Carlos García Orjuela, presidente del “Partido de la U” y ex presidente del Congreso, y de la entonces presidenta del Senado, Nancy Gutiérrez.

Luego de dos años de investigación judicial había 73 parlamentarios vinculados con el escándalo de la “Parapolítica”. La mayoría de los imputados pertenecían a la coalición de gobierno (31 entre el PU y el PC), a partidos menores afines al gobierno (31) y al Partido Liberal (11)⁴⁰⁶. Asimismo, este proceso tuvo a más de 30 congresistas (18 senadores y 12 representantes) en las cárceles de La Picota y El Buen Pastor (incluidos 3 ex presidentes del congreso), y alcanzó a la mayoría de los partidos políticos colombianos con la excepción del PDA (a quien se le sindicaban vínculos históricos con las FARC).

⁴⁰⁶ Pachón (2009: 353). La fuente de la autora es “Congreso Viable”.

El gobierno reaccionó al reclamo de varios sectores que hacían hincapié en los vínculos entre la administración Uribe y los paramilitares: publicó una investigación a cargo del asesor presidencial, José Obdulio Gaviria⁴⁰⁷, que apuntaba a responder a las críticas formuladas por la “Corporación Arco Iris” sobre la ruta de la expansión paramilitar, los acuerdos políticos y la responsabilidad del presidente en el crecimiento del grupo ilegal. El libro de Gaviria resultaba un recurso importante del gobierno, ya que allí se expresaba el pensamiento presidencial y la justificación de la política del poder ejecutivo frente a las AUC. En ese sentido, según el asesor presidencial el paramilitarismo era un fenómeno que ya tenía décadas en Colombia sin que el Estado lo enfrentaran (“los 12 años de avasallamiento” de los gobiernos de Pastrana, Samper y César Gaviria) hasta la emergencia del presidente Uribe, quien “tomó el toro por los cuernos”. El líder antioqueño, según esta visión, no sólo derrotó al paramilitarismo, sino por que también logró desmovilizarlo, y a quienes no se acogieron o no cumplieron las obligaciones de la Ley de Justicia y Paz les ordenó su extradición. En respuesta al proceso de la “Parapolítica”, Gaviria respondía que “el objetivo no era la justicia, sino el desprestigio de un Presidente querido y respetado por el pueblo y la desestabilización de la coalición política mayoritaria en el Congreso”⁴⁰⁸.

El escándalo de la “Parapolítica” no representó para Uribe pérdidas en términos de popularidad. A pesar de investigarse a un conjunto de políticos de su coalición de gobierno, y a una parte de sus personas de confianza, incluido dos familiares, los índices de apoyo a su figura y a su gobierno se mantuvieron durante este proceso en niveles parecidos a los anteriores⁴⁰⁹. Es decir, la sociedad colombiana continuó apoyando su política de Seguridad Democrática y la crisis política acaecida en el sistema político no afectó a su gobierno, que siguió manteniendo un apoyo significativo en la población. Las razones de la manutención de este RP de apoyo popular/ ciudadano, tuvieron que ver con los logros obtenidos por el líder antioqueño en su lucha contra las FARC. A su vez, el RP de estrategia política de personalidad política (honestidad, trabajo, sinceridad) lo blindaba frente a las críticas opositoras.

⁴⁰⁷ Gaviria, José Obdulio (comp., 2008).

⁴⁰⁸ Declaraciones de José Obdulio Gaviria en línea en: <<http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-3113645>>.

<http://latekhne.itm.edu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=296:parapolitica-verdades-y-mentiras-el-libro-mas-vendido-en-colombia&catid=32&Itemid=90>.

⁴⁰⁹ Entre los años 2007 y 2008 Uribe osciló entre una aprobación del 65% al 80%, sin grandes picos entre las altas y las bajas. Fuente: Gallup, en Pachón (2009: 337).

Las razones de este apoyo fueron, según Jaime Bermúdez, que “como sucede en la mayoría de los países de Sudamérica, muchos políticos terminan en la cárcel... En ese sentido, Uribe contaba con la confianza de ser el presidente que más hizo por la desmovilización. Ahí hay una lectura que dice: ‘Que más allá de su gente, no necesariamente tiene que ver con Uribe’. Además, había cierta condescendencia con el paramilitarismo, cuando el Estado estuvo ausente en muchas regiones (especialmente las vinculadas con el agro) fue la oposición a la guerrilla”⁴¹⁰. Es decir, según el futuro canciller de Uribe, los motivos de ese apoyo se encontraban en que el presidente había sido, hasta ese momento, el principal responsable de la mejora de los índices de seguridad y de la desmovilización paramilitar.

En el mismo sentido se expresaba Paola Holguín al señalar que “el tema de la parapolítica no afectó al presidente, porque todos los colombianos sabían que el paramilitarismo estaba vivo en el país desde hacía varias décadas y que ningún mandatario, salvo él, había tenido el coraje para enfrentarlo, la ‘Ley de justicia y paz’, que permitió desmovilizar más de 35 mil paramilitares y unos 20 mil integrantes de organizaciones guerrilleras... fueron la mejor muestra de la independencia de Uribe frente a todas las organizaciones criminales”⁴¹¹.

Por otro lado, el senador opositor Camilo Romero explicaba el despegue de Uribe frente a la Parapolítica a partir de “su forma de gobierno, su estilo unipersonal de gobernar, lo mostraba limpio y sin ningún nexo con cualquier organización ilegal, mucho más si él se presentaba a sí mismo como el emblema contra la ilegalidad... El fenómeno de la parapolítica, soporte del Uribismo, se edificó sobre líderes políticos de regiones con predominio rural. Hoy se puede hablar de ‘parauribismo rural’, que es la clase política tradicional, ganadera y terrateniente, que se opone a la restitución de tierras y a la misma ley de víctimas”⁴¹².

Aquí se observa de qué manera juegan los recursos de poder como paraguas de seguridad del primer mandatario. Los altos índices de aprobación de Uribe provenían de su propio estilo de gobernar basado en la consigna “trabajar, trabajar y trabajar” (recurso de estrategia política) y en que los propios datos evidenciaban que los problemas históricos de

⁴¹⁰ Jaime Bermúdez. Entrevista con el autor.

⁴¹¹ Paola Holguín. Entrevista con el autor.

⁴¹² Camilo Romero. Entrevista con el autor.

la inseguridad colombiana, como eran la violencia, la libre circulación de carreteras, las vastas porciones territoriales en manos de grupos ilegales, iban disminuyendo.

Sin embargo, los problemas para Uribe continuaron durante este primer semestre de gobierno. Para febrero de 2007, en pleno proceso de la “Parapolítica”, la Corte Suprema de Justicia ordenó la captura del ex director del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), Jorge Noguera, el organismo de inteligencia del Estado colombiano que cumplía funciones de policía secreta. El pedido de detención se realizaba en el marco de una investigación que le adjudicaba a Noguera estrechos vínculos con los paramilitares, y la figura acusatoria era la de concierto para delinquir y homicidio agravado. La pesquisa de la Justicia se había iniciado en el año 2005 y había obligado al director a renunciar a su cargo en medio del escándalo. A pesar de que Uribe declaró “poner las manos en el fuego” por el funcionario, éste debió dejar el DAS y fue nombrado cónsul en Milán. Luego del pedido de captura de Noguera, el funcionario regresó al país y por una artimaña judicial pudo salir de prisión, aunque la pesquisa continuó en curso. Más tarde, la investigación pasó a la órbita de la Fiscalía General de la Nación y el ex director del DAS fue recapturado en julio de 2007 y destituido, cuatro meses más tarde, por la Procuraduría General de la Nación al ser encontrado responsable de colaborar con grupos armados al margen de la ley, incrementar de manera injustificada su patrimonio y adulterar la base de datos del organismo para favorecer a narcotraficantes y paramilitares⁴¹³.

Luego de que el escándalo de la “Parapolítica” escapara del control del gobierno, Uribe intentó dos maniobras (RP de estrategia política) para dilatar el proceso y lograr que los congresistas detenidos por la justicia no pagaran sus penas en la cárcel. Para abril del 2007, el primer mandatario redactó, junto a los miembros de su bancada, una suma de fórmulas legislativas que les permitía a los congresistas detenidos salir de la cárcel cambiando la tipificación de los delitos que se les imputaban declarándolos delitos excarcelables o modificando sus consecuencias judiciales (Valencia y Sevillano, 2009: 94), aunque dicha iniciativa no prosperó por el rechazo opositor en la propia Cámara.

⁴¹³ Procuraduría General de la Nación. En línea en:

<http://www.procuraduria.gov.co/html/noticias_2007/noticias_470.html>.

Finalmente, Noguera fue condenado el 15 de septiembre de 2011 a 24 años de prisión, en línea:

<<http://www.lasillavacia.com/historia/por-que-nombro-uribe-jorge-noguera-en-el-das-27693?page=9>>.

Una segunda iniciativa presidencial fue la encomendada por Uribe al flamante Ministro del Interior y Justicia, Fabio Valencia Cossio, conocida como la doble instancia para los congresistas involucrados, para que los procesos penales fueran separados en dos etapas, una de investigación y otra de juzgamiento. La idea del gobierno según su ministro, era “hacer respetar el fuero de congresista que es otorgado por la voluntad popular... así en el momento de apertura de un proceso judicial, los congresistas ya no tendrían que renunciar a su curul pues de todos modos serían investigados por los fiscales y ya no por los magistrados de la Corte Suprema. Para el caso de la pérdida de investidura la primera instancia sería responsabilidad del Tribunal Administrativo Cundinamarca, y la segunda de la Sala Plena del Concejo de Estado”⁴¹⁴. Finalmente, esa idea tampoco prosperó debido a la oposición de la propia bancada oficialista y el proceso continuó por las vías judiciales.

A pesar del avance del proceso de la “Parapolítica” en los estrados judiciales, el fenómeno paramilitar aún se mantuvo vigente luego de esos años, aunque en una menor dimensión. La prensa reveló que a pesar de estar confinados, los líderes de estos grupos ilegales continuaban activos e incidiendo en las regiones en donde anteriormente ejercían el poder. El gobierno, por otro lado, insistió en que el paramilitarismo había culminado en el país y que el auge de la violencia (que tendrá un importante pico durante el año 2009) era un fenómeno temporal, fruto de una nueva forma de subversión enmarcada en las denominadas Bandas Criminales al servicio del Narcotráfico (Bacrim), una realidad totalmente distinta a la Autodefensas Unidas de Colombia.

Resumiendo, el comienzo del segundo mandato encontró a Uribe jaqueado por las investigaciones en torno al fenómeno de la “Parapolítica”. Luego de que se conocieran las primeras pesquisas examinadas por la justicia que hablaban de un vínculo estrecho entre políticos cercanos al oficialismo y los paramilitares, Uribe por primera vez se encontró sin el control de la situación política en torno a este grupo ilegal.

Sin embargo, la popularidad de Uribe (recurso de apoyo popular/ ciudadano) no disminuyó sustancialmente en ese marco de indagaciones, y la sociedad no cuestionó al presidente ni a su política de seguridad a pesar de que la situación lo comprometía en forma directa. Hasta ese momento, el presidente había sido el primero en enfrentar de manera

⁴¹⁴ Valencia y Sevillano (2009: 93).

frontal al fenómeno paramilitar (RP de estrategia política) con el acuerdo de ley 975 de 2005. A pesar de los cuestionamientos recibidos a su figura, el presidente mantuvo intactos los recursos de poder generados en esos años, lo cual impidió a la oposición política e institucional avanzar contra su persona por intermedio de mecanismos constitucionales.

8.2. Uribe hace jugar sus recursos: triunfos frente a las FARC y elección regional

Este ítem examina los éxitos del gobierno frente a las FARC durante el año 2007 y cuáles fueron sus consecuencias para la estrategia de la guerrilla frente al avance de las fuerzas militares. En ese sentido, se observa cómo el conflicto se internacionaliza con la intervención de distintas figuras en el marco del acuerdo humanitario y de qué forma el gobierno logra capitalizar la generación de nuevos recursos de poder ante la opinión pública. Por último, se analizan las elecciones regionales de octubre de 2007 donde se observa la recuperación del gobierno en el terreno electoral (RP de apoyo popular/ciudadano).

Los recursos de poder uribista acuden a la recuperación política del presidente

Luego de los sinsabores políticos del escándalo institucional de la “Parapolítica”, el primer mandatario logró retomar la iniciativa a mediados del año 2007, en dos recursos de poder en donde la capacidad presidencial tenía la mayor fortaleza: la guerra contra las FARC (RP de estrategia política) y las elecciones (RP de apoyo popular/ ciudadano). En ese marco, el líder antioqueño priorizó durante el primer año desde su reelección al combate contra los grupos ilegales a partir de diferentes estrategias, ya que observaba que “el año 2007 es un año crucial... Para derrotar a los cabecillas de la guerrilla, para capturar aquellos cabecillas del paramilitarismo que están fuera de la cárcel. Un año crucial para rescatar secuestrados”⁴¹⁵.

En el contexto signado por la aparición de evidencia de nexos entre la clase política colombiana y el fenómeno paramilitar, el presidente se encontraba urgido por contar con éxitos inmediatos frente a la guerrilla. En ese sentido, se pueden apreciar durante este año dos hechos centrales y paradójicos en referencia a la guerrilla: en primer lugar, se trató del año en que el gobierno le infligió a la FARC la mayor cantidad de bajas en su conducción y, en segundo término, se trató del año en que se realizaron los mayores acercamientos entre la administración Uribe y la propia guerrilla en torno a la problemática del secuestro y

⁴¹⁵ Uribe en la Cumbre de Comandantes de Policía Nacional, Bogotá 30 de enero de 2007. En Tabares (2006:90).

del acuerdo humanitario que había sido abandonado luego del fracaso del “Caguán” en el 2002.

La instalación de esta problemática a nivel mundial derivó de la presencia de distintos actores internacionales con intereses directos en la temática y que le dieron visibilidad a una cuestión que involucraba la supervivencia de los secuestrados en poder de la guerrilla. El gobierno, en ese sentido, mostró una estrategia dual frente a las FARC: por un lado apuntaba a su exterminio por intermedio de la fuerza militar de sus principales figuras, haciendo foco en el corazón de su formación y, por el otro, avanzaba, por la presión mundial, en acuerdos humanitarios incorporando figuras internacionales al conflicto.

Esta doble estrategia puede visualizarse en dos declaraciones realizadas por Uribe a principios de año, en las cuales el líder antioqueño expresaba que “la lucha de estos grupos [por la guerrilla] es contra la democracia. Son sicarios de la democracia, además alimentados por el narcotráfico... En Colombia ellos hoy desprecian la financiación internacional. No la necesitan. Son muy ricos por el narcotráfico, por eso se nos dificulta mucho la paz y por eso tenemos que derrotar al narcotráfico”. Para luego de tres semanas asumir que la oferta de un acuerdo con la FARC había mostrado un resultado negativo: “Autorizamos una gestión de buena voluntad y lo que hemos recibido es una amenaza, por lo tanto la reacción del gobierno es esta:... ¡arreciar para derrotar estos bandidos!”⁴¹⁶.

Mientras el primer mandatario lograba mostrar equilibrio frente a las demandas nacionales e internacionales para avanzar en acuerdos humanitarios que darían un final al calvario de los secuestrados, el gobierno lanzaba la segunda etapa de la PSD, denominada “la fase de consolidación”. Según la administración Uribe, esta política se dividía en tres fases (Botero y Méndez, 2008: 126) que tenían, en primer lugar, el objetivo de recuperación de zonas con poca presencia institucional donde los grupos ilegales mantenían control político; en segundo término, la pretensión de asumir el control territorial; y por último, la búsqueda de la consolidación de ese control con la participación de las instituciones estatales y la promoción de inversión privada.

En el transcurso del 2007, los golpes contra las FARC mostraron al gobierno que el fin de la guerrilla no era un camino imposible de transitar. La evidencia de este hecho se

⁴¹⁶ La primera de las declaraciones de Uribe fue realizada ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en San José de Costa Rica el 26 de enero de 2007 (Tabares, 2009: 90). La segunda fue formulada en el aeropuerto militar Catam, el 22 de febrero de 2007 (Ibíd., 2009: 98).

encontraba en el descenso de las operaciones de la guerrilla y en la eficacia gubernamental a la hora de abatir a sus principales cabecillas. Siguiendo a Pecaute (2008: 127) la actividad de las FARC disminuyó de aproximadamente setecientas acciones en 2002, a menos de doscientas en 2007. Asimismo, fueron abatidos los comandantes más destacados, como por ejemplo los casos de Milton Sierra, alias “J.J.”, quien dirigía un frente en el Valle de Cauca; Tomás Medina Caracas, alias “el negro Acacio”, figura clave del tráfico de drogas en el Guaviare y el Vaupés, y Gustavo Rueda Días, alias “Martín Caballero”, líder histórico del Frente 37 y miembro del Estado Mayor del Bloque Caribe de la guerrilla. Otros lograron eludir de milagro el acoso gubernamental, como Luis Lozada Gallo, alias “Carlos Alberto Losada”, del Estado Mayor del Bloque Oriental, quien escapó de un bombardeo dejando su computadora portátil con valiosa información sobre los planes de corto y largo plazo de la guerrilla.

Las formaciones que perdieron sus jefes producto de las acciones militares no lograron sobrevivir a la desaparición física de sus cabecillas y se disolvieron, perdiendo la guerrilla bloques militares de importancia. Otro de los logros del gobierno durante estos meses será la captura de Diego Montoya, alias “Don Diego”, máximo cabecilla del Cartel del Valle, a cargo de uno de los ejércitos privados al servicio del narcotráfico en el país. A su vez, según informes de la policía (Botero y Méndez, 2008: 127) fueron capturados más de seiscientos desmovilizados por actividades delictivas, perdiendo los beneficios a los que accedían por la Ley de Justicia y Paz.

En ese marco de éxitos militares por parte del gobierno, se va a instalar en la opinión pública nacional la problemática del acuerdo humanitario en torno a los secuestrados en manos de la guerrilla. En ese sentido, durante el año 2007, como se explicitó, se desarrollaron los mayores avances en dicha temática, a partir de las distintas noticias que se conocían sobre el destino diverso de los rehenes en manos de las FARC. Los casos de un ex ministro de Pastrana Fernando Araujo, liberado luego de una operación de las Fuerzas Armadas en enero, y del intendente de Policía John Frank Pinchao, quien logró fugarse de manos de la guerrilla en mayo, tuvieron una extraordinaria repercusión. Este último había estado secuestrado en el mismo campamento en que se encontraba Ingrid Betancourt, y fue el que confirmó el nacimiento en cautiverio del hijo de otra de las secuestradas, Clara Rojas, ex candidata a vicepresidente de la política franco-colombiana.

Sin embargo, las noticias que llegaban a los familiares de secuestrados por parte de quienes lograban escapar de manos de la guerrilla, y que alimentaban su ilusión, se iban a ver frustradas luego de uno de los hechos más impactantes que, por la brutalidad y ferocidad, puso a la guerrilla en el plano de los acusados. El 18 de junio de 2007 fueron asesinados diez de los once ex diputados de la asamblea departamental del Valle secuestrados por la FARC en abril de 2002. La sanguinaria acción fue justificada por la guerrilla debido al fuego cruzado con una fuerza militar no identificada. Sin embargo, más tarde las propias FARC debieron reconocer su responsabilidad, lo que motivó un repudio generalizado que los volvió a alejar del reconocimiento político que habían demandado durante años. La conmoción de la opinión pública fue tan fuerte que el 5 de julio se produjeron grandes manifestaciones de repudio en el país.

Esto permitió que la temática del intercambio humanitario adoptase una centralidad absoluta en la agenda de la política colombiana. El involucramiento del presidente francés, Nicolás Sarkozy, preocupado por la suerte de su connacional Betancourt, y de Hugo Chávez, llevado por las FARC a convertirse en un facilitador en la entrega de secuestrados, marcaban los pasos inmediatos de Uribe en una dirección acuerdista. La excarcelación de 193 presos de la guerrilla entre los que se encontraba el ex “canciller de las FARC”, Rodrigo Granda, tenía como objetivo iniciar un proceso de mediación que implicaba a la Unión Europea, un actor reacio a las políticas uribistas. La “razón de estado” esgrimida por el gobierno para justificar dicha decisión no estuvo exenta de críticas por parte de la bancada oficialista, y las FARC rechazaron la medida argumentando que se trataba de una cortina de humo para distraer la atención del escándalo de la “Parapolítica”⁴¹⁷.

El involucramiento de Hugo Chávez en el conflicto colombiano, quien se propuso como mediador en lo relativo al intercambio humanitario, también generó una presión al presidente Uribe hacia una orientación pacifista. El gobierno colombiano, en ese sentido, aceptó la propuesta venezolana y el 15 de agosto nombró a la senadora liberal Piedad Córdoba como interlocutora en la política de contactos con la guerrilla. Luego de meses de gestión, y ante los pobres avances, Uribe fijó –en forma unilateral- el 31 de diciembre como fecha tope para que se produjeran resultados. Sin embargo, luego de unos contactos directos, a mediados de noviembre, entre el presidente venezolano y uno de los

⁴¹⁷ Botero y Méndez (2008:129).

comandantes de las fuerzas armadas colombiana, el gobierno decidió cancelar la mediación debido al incumplimiento del acuerdo por parte de Chávez. En un comunicado, el poder ejecutivo destacaba que “el gobierno de Colombia no puede permitir que terceros involucren a militares colombianos en el tema, porque atenta contra nuestras tradiciones democráticas de unidad en las Fuerzas Armadas”⁴¹⁸.

Luego del enojo de Chávez por ser excluido en su papel de mediador en el acuerdo humanitario, Uribe reaccionó contra el líder venezolano al caracterizarlo como un legitimador del terrorismo, ya que “sus palabras, sus actitudes, dan la impresión que usted no está interesado en la paz de Colombia, sino en que Colombia sea víctima de un gobierno terrorista de las FARC. La verdad presidente Chávez, es que nosotros necesitamos que nos ayuden a superar esta tragedia del terrorismo, pero que no se aprovechen de la necesidad del acuerdo humanitario para invocar la ayuda a Colombia y venir a Colombia simplemente a intervenir en ella, para fomentar un proyecto expansionista”⁴¹⁹.

La pérdida de control de la negociación por parte del gobierno colombiano, sumado a la exigencia por parte de la guerrilla del despeje de los municipios de la Florida y la Pradera, puso a Uribe en una situación comprometida en lo político. Por un lado, la fuerte presión de los familiares de los secuestrados, quienes exigieron la continuidad del acuerdo con la presencia del presidente venezolano, y por el otro, la necesidad de Uribe de no quedar ante la escena internacional como un presidente obstinado e intransigente, obligaron al líder antioqueño a realizar una apertura hacia la negociación. Desde allí que el primer mandatario decidió a finales de 2007 transmitir una propuesta a la guerrilla que implicaba una “zona de encuentro” de 150 kilómetros por 30 días.

En ese marco, las FARC, quienes a partir de la estrategia del acuerdo humanitario encontraron la fórmula para salir de su aislamiento político, anunciaron en un comunicado la decisión de liberar y entregar a Chávez a tres de los secuestrados: Clara Rojas, su hijo Emmanuel nacido en cautiverio fruto de una relación con un guerrillero, y Consuelo González de Perdomo. El presidente venezolano aceptó la propuesta a pesar de que la guerrilla no había enviado las pruebas de vida solicitadas por Chávez y coordinó la forma de entrega junto a la Cruz Roja y varias personalidades sudamericanas, entre los que se

⁴¹⁸ Botero Campuzano (2008: 216).

⁴¹⁹ Palabras de Uribe en Magdalena el 25 de noviembre de 2007 (Botero Campuzano, 2008: 216).

encontraban el ex presidente Néstor Kirchner e incluía al cineasta Oliver Stone. Sin embargo, la dilatación de la entrega de las coordenadas por parte de las FARC para que los helicópteros de la Cruz Roja llegaran a destino, frustró el Operativo Emmanuel.

La guerrilla acusó al presidente Uribe de mantener un asedio militar en la zona de entrega como excusa para la cancelación, y el primer mandatario anunció que la verdadera razón tras la anulación del operativo obedecía a que el hijo de Clara Rojas no se encontraba en manos de la guerrilla, sino en un hogar de niños. A principios de enero de 2008, se conocieron los exámenes de ADN del niño que certificaron la filiación con Rojas, lo que constituyó un nuevo traspie para las FARC y otro triunfo de Uribe ante la opinión pública internacional, un nuevo RP generado por el presidente mediante una eficaz estrategia política.

Finalmente, el 10 de enero la guerrilla liberó a ambas mujeres en su poder y culminó con éxito una operación que dejó como saldo el desprestigio de las FARC luego del fiasco que significó el affaire Emmanuel y el congelamiento de las relaciones entre Venezuela y Colombia. Para el presidente Uribe, la culminación de la operación marcó un punto de tensión con el gobierno venezolano que sólo pudo compensarse con un nuevo triunfo ante la opinión pública sobre la guerrilla.

A pesar de tratarse de un año de definiciones y de tensión en cuanto al porvenir de los grupos ilegales, y de que los conflictos políticos en relación con este tema se encontraban instalados en la opinión pública generando un clima de incertidumbre, la economía colombiana mostró un muy buen desempeño. Además de tratarse del quinto año consecutivo de crecimiento del PBI, ya que durante el 2007 alcanzó el 7% (DANE: 2008), la economía local evidenció datos alentadores en varios aspectos. La expansión de la industria manufacturera, el alto consumo de los hogares, junto a un aumento sostenido de la inversión del capital fijo fueron las razones principales que explicaban este crecimiento. El índice de Confianza del Consumidor llegó a su registro más alto, y el desempleo disminuyó de 13% a 11,6%, según Cepal (Botero y Méndez, 2008: 130-131), configurando un escenario de serenidad económica en un contexto marcado por la incertidumbre en la resolución de los conflictos con los grupos ilegales. El contexto socio-económico, como factor externo a la dinámica política, continuaba jugando en términos favorables para el gobierno, y le permitía a Uribe mostrar índices auspiciosos en el marco de un conflicto

político que tocaba muy de cerca al primer mandatario. Sin embargo, los efectos de las investigaciones judiciales sobre integrantes de su coalición de gobierno afectaron muy poco la popularidad del líder antioqueño, y esto se verificó en la primera compulsa electoral luego de los sucesos de la parapolítica.

Las elecciones regionales de octubre de 2007 representaban otro de los hechos salientes del año 2007. Los cargos en juego eran los de gobernador (32 departamentos), diputados departamentales, alcaldes (1099 municipios), consejeros municipales y ediles para la Junta Administradoras locales. A pesar de tratarse de una elección provincial, la misma se revelaba significativa ya que sería la primera luego de la emergencia del escándalo de la “Parapolítica”. A su vez, al tratarse de una elección regional, se esperaba con mucha expectativa la respuesta social ante el desmembramiento de los grupos paramilitares que había tenido una importante influencia en la mayoría de los territorios en donde se realizaba la votación.

El 28 de octubre, los colombianos fueron a las urnas en una elección que registró la menor cantidad de alteración al orden público de los últimos diez años. Solamente en dos municipios (Argelia-Cauca y Castilla la Nueva-Meta) no pudieron llevarse a cabo los comicios, en comparación con los nueve en los que no habían podido realizar las últimas elecciones regionales del 2003. Las razones de esta disminución fueron fundamentalmente la desmovilización paramilitar y la debilidad de las guerrillas luego del acoso de la política presidencial de los últimos años. Según la Fundación Seguridad y Democracia, “durante el 2007 se han presentado la mitad de los homicidios políticos que se presentaron en 1997, al pasar de 133 a 64, se han presentado 36 veces menos secuestros políticos, pasando de 434 a 12, y ha habido 3,5 veces menos municipios afectados, al pasar de 211 a 62. Se puede decir que la situación de seguridad electoral ha mejorado sustancialmente durante los últimos 10 años... En efecto, los homicidios han disminuido un -108% con relación al período de elecciones de 1997, un -44% con relación al 2000 y un -32% con relación al año 2003. Los secuestros han disminuido un -3,517% con relación a 1997, un -91% con relación al 2000 y un -66% con relación al 2003”⁴²⁰.

⁴²⁰ Revista *Semana*, “Las elecciones menos violentas en 10 años” En línea en <http://www.semana.com/documents/Doc-1547_20071031.pdf>.

Las elecciones a gobernador y alcaldes de octubre de 2007 mostraron que el presidente Uribe continuó teniendo una clara hegemonía frente a la oposición política. De los 32 gobernaciones en disputa, la coalición de gobierno uribista consiguió 17 (el Partido de la U obtuvo 7, el Partido Conservador 6, Cambio Radical 3 y Alas Colombia 1), mientras que el resto de los ejecutivos provinciales se repartieron entre la oposición, de la cual el Partido Liberal fue la agrupación que más gobernaciones obtuvo, alcanzando el triunfo en seis de ellas (nueve si se suman los partidos aliados)⁴²¹. Sin embargo un análisis comparativo con las elecciones de 2003 arrojaba por resultado que el principal partido opositor al uribismo y sus aliados disminuyó la cantidad de gobernaciones de 15 a 9, mientras los partidos que respaldaban la gestión de gobierno pasaron de 9 a 17, evidenciando un aumento significativo de los recursos de poder institucionales para el primer mandatario a nivel regional.

En cuanto a la elección de alcaldes los resultados se presentaron similares a los de gobernadores, ya que fueron los partidos nacionales los que logran obtener la mayor cantidad de votos y de municipios. El Partido Conservador (PC) consiguió 237 municipios del país (22%), el Partido Liberal ganó en 203 (19%), el PU obtuvo 126 (12%) mientras que Cambio Radical 109 (10%). El PDA volvió a triunfar en Bogotá, aunque no pudo repetir los éxitos de 2003 y 2006. De estos resultados, el más interesante de reflejar es el del PC, que logró el 22% de las alcaldías con tan sólo el 10% de los votos⁴²² y la coalición de gobierno se convirtió, en esta categoría, en quien obtuvo la mayor cantidad de espacios de gobierno a nivel departamental. Al igual que la elección a gobernador, el uribismo aumentó exponencialmente la cantidad de alcaldías de 439 a 558, y fueron las agrupaciones PU (de 0 a 123 ya que en el 2003 no había participado) y Cambio Radical (31 a 112) quienes más crecieron frente a los partidos del bipartidismo tradicional⁴²³.

Las consecuencias judiciales de la “Parapolítica” no afectaron a Uribe en términos electorales. Su partido logró capitalizar zonas que anteriormente dominaban los

⁴²¹ Datos obtenidos en base a la Registraduría Nacional del Estado Civil, en <<http://www.registraduria.gov.co>>. Según Botero y Méndez (2008: 134), en la elección de gobernadores, el uribista Partido de la ‘U’ ganó en 7 de las 32 gobernaciones en disputa (22%) con un total de 1.329.003 votos (13%), mientras que el Partido Liberal (PL) obtuvo 6 gobernaciones (19%) con un total de 2.636.997 votos (25%). Así, con 1,3 millones menos, la ‘U’ obtuvo una gobernación más que el PL porque ganó en departamentos menos poblados.

⁴²² Los datos obtenidos son en base a <<http://www.registraduria.gov.co>>. y Botero y Méndez (2008: 134).

⁴²³ Los datos obtenidos son en base al trabajo de Araujo Muñoz (2009).

paramilitares, ganando las gobernaciones de Sucre, Magdalena, Meta, Casanare, Chocó, Guainía y Vichada. A su vez, según Claudia López “las alianzas de los 6 partidos más vinculados a la ‘Parapolítica’ perdieron en las Alcaldías de las ciudades capitales, pero ganaron más alcaldías municipales y sustituyeron unas gobernaciones por otras. Perdieron la Gobernación de Cesar, Bolívar, Santander, Meta y Casanare, pero ganaron la de Antioquia y conservaron la de Magdalena, Córdoba y Sucre. La del Valle del Cauca quedó en manos de una alianza con caudalosa financiación de origen no plenamente establecido y alianzas políticas con Convergencia Ciudadana, que también ganó la gobernación de Amazonas”⁴²⁴.

La abstención electoral se situó en el 43%, siendo Cali (58%) el mayor porcentaje entre las ciudades más importantes del país, en tanto que en Bogotá fue del 52,64%, en Barranquilla del 53%, en Cartagena del 52%⁴²⁵ y en Medellín del 49%, demostrando que a pesar de la incertidumbre que generó la compulsa política luego del escándalo judicial, afectó en menor medida a las zonas más ligadas al paramilitarismo. En ese sentido se manifestaba el primer mandatario, al resaltar que “quienes recorrieron el país en este proceso electoral, afectos o desafectos al Gobierno que presido y a las ideas que agito, deben saber y deben decir –si no decirlo por lo menos aceptarlo- que en ese recorrido no encontraron bandas privadas de criminales combatiendo la guerrilla, sino un Estado que ha recuperado el monopolio de usar las armas de la República, para combatir cualquier organización criminal”⁴²⁶.

El triunfo electoral del gobierno (RP de apoyo popular/ ciudadano) en estas elecciones ratificaba que la PSD de Uribe no se veía afectada por los conflictos de la “Parapolítica”. La recuperación del monopolio legítimo de la violencia física por parte del Estado a través de esta política brindaba la garantía del ejercicio de las libertades individuales, ampliando de esta forma los derechos civiles que con anterioridad el brazo estatal no podía garantizar por el control que ejercían los grupos ilegales sobre vastos territorios en el país. En ese sentido, siguiendo a Pecaute (2008, 66), “lo que convence a la

⁴²⁴ Claudia López, en Revista *Semana*: “Elecciones con resultados agrídulces” Para la Bitácora Electoral de *Semana.com* en línea <http://www.semana.com/documents/Doc-1546_20071030.pdf>.

⁴²⁵ Los datos de la abstención electoral en esta elección fueron obtenidos en base a: Diario *El Tiempo*, en línea en: <http://www.eltiempo.com/elecciones-2011/gobernaciones-2011/restodelpais/ARTICULO-WEB-NEW_NOTA_INTERIOR-10671845.html>.

⁴²⁶ Palabras del Presidente Uribe en el Aniversario 28 del Parlamento Andino. Bogotá, Noviembre 1 de 2007.

mayoría de los colombianos del éxito de la Seguridad Democrática son los hechos que han mejorado su vida cotidiana: además de la disminución de los homicidios, la seguridad de los principales ejes viales, el fuerte descenso del número de los secuestros, la reducción de la extorsión y la ruptura del cerco que las FARC habían establecido alrededor de las grandes ciudades”.

En el seno de la propia coalición de gobierno empezaron a surgir, luego de las elecciones regionales, especulaciones en torno a una nueva reforma constitucional para habilitar otro mandato presidencial. El propio Uribe al ser consultado sobre esa alternativa, respondió que sólo prosperaría en caso de que se presentara una “hecatombe” y que tal circunstancia se daría en caso de que los partidos que lo apoyaban no lograsen ponerse de acuerdo en torno a un candidato para reemplazarlo en el 2010⁴²⁷. Sin embargo, las condiciones para ir en búsqueda de un nuevo mandato se harán presentes el año siguiente, en el cual la PSD dará un nuevo hito en su lucha frontal a la guerrilla.

Recapitulando, luego de un primer semestre asediado y a la defensiva producto del escándalo de la “Parapolítica”, Uribe logró retomar la iniciativa en el terreno que más éxitos le había dado a lo largo de esos años: la guerra contra las FARC. Durante esta segunda parte, el gobierno logró abatir y apresar a varios de los cabecillas de la guerrilla en el marco de una estrategia (RP) que apuntaba a consolidar los avances realizados en materia de recuperación de territorios y de desmembramiento del Estado Mayor de las FARC.

Sin embargo, en forma paralela a los éxitos de las fuerzas estatales frente a los grupos irregulares, se instaló en el país la problemática del acuerdo humanitario en torno a los secuestrados. El caso de Ingrid Betancourt, secuestrada en el 2002, se convirtió en un ícono de esta problemática que involucró a varios primeros mandatarios de otros países, como Chávez y Sarkozy. En ese marco, Uribe permitió la mediación internacional en torno al acuerdo humanitario a cambio de mostrarse como un presidente flexible en la guerra frente a la guerrilla. Luego de la Operación Emmanuel, el líder colombiano desenmascaró las falsedades de las FARC alrededor del niño secuestrado y licuó cualquier alternativa de negociación. Esto le permitió al primer mandatario colombiano posicionarse exitosamente

⁴²⁷ Radio Caracol, en línea en: <<http://www.caracol.com.co/noticias/actualidad/crece-el-debate-en-colombia-por-frase-de-uribe-sobre-una-segunda-reeleccion/20071101/nota/501185.aspx>>.

ante la opinión pública (RP de estrategia política) logrando aislar a la guerrilla y aumentando su popularidad (RP de apoyo popular/ ciudadano) en el interior del país.

Las elecciones regionales de octubre de 2007 le permitieron a Uribe incrementar los recursos de poder institucionales en gobernaciones y alcaldías, y consolidar la iniciativa política que ya había recuperado luego de los traspies de la “Parapolítica”.

8.3. La PSD, un RP que consolida la estrategia militar de Uribe

Este ítem analiza los éxitos militares de la PSD del gobierno frente a las FARC durante el 2008. En ese sentido, se describen los dos recursos de poder de estrategia política generados por el primer mandatario durante la primera parte del año: el abatimiento de Raúl Reyes (y las consecuencias que tuvo la acción a nivel internacional) y la liberación de Íngrid Betancourt en una histórica acción que no implicó la utilización de armas de fuego. A su vez, se presta atención a los conflictos suscitados entre el presidente y la Corte Suprema y las decisiones de Uribe en torno al fenómeno de la Parapolítica.

¿El triunfo final frente a la guerrilla?

El 2007 culminaba con buenos augurios para la gestión de Uribe en relación con la PSD. Luego del fracaso del Operativo Emmanuel, en la cual la guerrilla no pudo cumplir su promesa de devolver a los secuestrados por no tener al niño que había prometido entregar, las FARC aumentaron su desprestigio de cara a la sociedad. Los errores de la guerrilla se convertían en forma automática en logros para el primer mandatario, que veía legitimar, en los hechos, uno de los principales recursos de poder en el ámbito de la seguridad. Es decir, los errores de la FARC devenían de una estrategia oficial de enfrentamiento frontal que le había permitido al gobierno mostrar resultados concretos, tanto en la disminución de homicidios y secuestros, como en el descenso del número de ataques de la guerrilla (Pachón, 2008: 329).

Desde principios del año 2008 el compromiso de la guerrilla frente a los acuerdos humanitarios prometidos fue sistemáticamente cuestionado por la opinión pública nacional e internacional, y las movilizaciones en todo el país fue la respuesta ante el discutido accionar de las FARC. La primera de las marchas, realizada el 4 de febrero, fue convocada por las redes sociales por ciudadanos sin adscripción partidaria y logró que más de 10 millones de personas se movilizaran por las calles y plazas del país.

Ante el fuerte cuestionamiento que recibía por parte de la opinión pública, la guerrilla continuó con su política de entregas unilaterales de secuestrados, como ya había realizado a principios de enero con Rojas y González. El 28 de febrero fueron liberados

cuatro ex congresistas: Jorge Eduardo Gechem, Luis Eladio Pérez, Gloria Polanco y Orlando Beltrán Cuéllar, quienes llevaban más de seis años en manos de sus captores. El caso de Ingrid Betancourt volvía a salir a luz pública luego de que los liberados hicieran mención al estado “crítico” de salud de la política franco-colombiana y el aumento de la presión internacional por una salida humanitaria se incrementaba en forma permanente, convirtiendo a su figura en un ícono del conflicto interno en Colombia.

A pesar de la presión mundial al gobierno, la política emprendida por Uribe desde el año anterior de apuntar a los cabecillas de las FARC (RP de estrategia política) continuaba dando sus frutos. El 26 de febrero, el ejército colombiano capturó a Hely Mejía Mendo, alias “Martín Sombra”, otro de los integrantes del Estado Mayor de la guerrilla, reconocido por su cercanía con el jefe de las FARC, alias Manuel Marulanda⁴²⁸. La sangría del secretariado de la guerrilla no se detendría, y tres días después de la captura de Mejía, en una operación a 1.800 metros de la frontera entre Ecuador y Colombia, pero dentro de suelo ecuatoriano, las fuerzas militares colombianas abatieron a Luis Edgar Devia Silva, alias “Raúl Reyes”, segundo al mando del Secretariado de las FARC.

El gobierno reconoció que el líder guerrillero fue abatido con un misil guiado muy sofisticado (Pecaut: 2008: 127) cuando pernoctaba en un campamento en la frontera norte del Ecuador⁴²⁹. Luego del operativo militar, las Fuerzas Armadas colombianas recuperaron una computadora con valiosos datos de la guerrilla, lo que implicó uno de los golpes más duros provocados a las FARC hasta ese momento. El guerrillero asesinado era el encargado de mantener los contactos internacionales y había sido una de las principales figuras de la guerrilla por su cercanía con Manuel Marulanda, por los contactos internacionales que poseía y por ser el encargado de los acuerdos humanitarios.

Las circunstancias que rodearon al “Operativo Fénix” generaron fuertes cuestionamientos por parte de los presidentes de Ecuador y Venezuela, quienes alertaron sobre la violación de soberanía que constituía la incursión en territorio ecuatoriano sin ninguna autorización previa para operar militarmente. La ruptura de las relaciones

⁴²⁸ Según el Diario *El Tiempo* el padre del detenido había sido jefe del líder de las FARC, en línea en: <<http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-3975309>>.

⁴²⁹ Según Uribe “las municiones inteligentes nos permitieron mejorar en gran medida la precisión de nuestros ataques. La primera vez que utilizamos armas inteligentes fue en un exitoso ataque aéreo realizado contra Tomás Medina Caracas, alias “el Negro Acacio”, jefe de las FARC, quien desempeñaba un papel protagónico en sus actividades de narcotráfico” (Uribe: 2012: 243).

diplomáticas de esos países (a los que se sumó más tarde Nicaragua) con Colombia fue la consecuencia inmediata de la acción militar.

Ante las críticas que recibía por la audaz acción militar, el presidente sostuvo a los protagonistas de la misma rechazando cualquier pedido de renuncia a los mandos de las Fuerzas Armadas involucradas en el bombardeo. Ante la insistencia por parte de grupos aliados preocupados por las consecuencias de este incidente con los países vecinos, Uribe expresaba “quizás esa renuncia podría resolver la situación diplomática. Sin embargo, le haría un gran daño al país. Perderíamos la confianza de las Fuerzas Armadas y sin ella no tendríamos la suficiente seguridad para lanzar operaciones futuras que nos puedan librar del terrorismo... Se trata de un asunto de lealtad. La lealtad nos permitió llegar a este punto, y ella nos llevará hacia adelante”⁴³⁰. Este importante RP era custodiado por el propio presidente hasta las últimas consecuencias.

A la semana del bombardeo en territorio ecuatoriano, se realizó en República Dominicana la XX Cumbre del Grupo Río, en la que se debatió el incidente entre ambos países. En un ambiente cargado de tensión, el primer mandatario colombiano debió poner a prueba su manejo discursivo (RP de estrategia política) ante el cuestionamiento de un conjunto de países que habían hecho causa común con Ecuador y acusaban a Colombia de vulnerar la soberanía de un país limítrofe. Al inicio de su alocución, Uribe concentró sus respuestas en las acusaciones del presidente ecuatoriano quien sostuvo, con mapas y documentos mediante, que las explicaciones del gobierno colombiano eran una gran mentira. El líder antioqueño reconoció la violación de soberanía, ya que ingresaron fuerzas terrestres y helicópteros, pero aseguró que el bombardeo se realizó desde territorio colombiano sin previo aviso al gobierno de Correa. En consecuencia, expresaba que “en efecto yo reconozco que no le informé del operativo. Reconozco que no le informé del operativo por una razón de menos peso, y por otra de más peso. La de menos peso. No le informé del operativo, porque era el sexto operativo contra “Raúl Reyes”. Estos operativos uno no sabe si se pueden dar o no, finalmente habíamos fracasado en los cinco anteriores operativos. Y segundo, no le informé del operativo porque no hemos tenido cooperación del Gobierno del presidente Correa, en la lucha contra el terrorismo”⁴³¹.

⁴³⁰ Uribe (2012:280).

⁴³¹ Botero Campuzano (2008: 239).

El presidente colombiano, por otra parte, defendió su posición frente a las acusaciones vertidas a su gobierno en la Cumbre, al declarar que su país también estaba sometido a bombardeos constantes desde territorio ecuatoriano. En ese sentido, Uribe expresaba que “el operativo tuvo en cuenta la necesidad militar. ¡Por Dios, era contra uno de los más tenebrosos terroristas de la historia! No estábamos bombardeando al pueblo ecuatoriano, estábamos bombardeando un sitio donde no había población civil, un campamento tenebroso terrorista. A eso se limitó... A mí me sorprende, que se ha hablado en estos días de la incursión colombiana en territorio de Ecuador, pero no se habla de los permanentes ataques de las FARC desde el territorio de Ecuador al pueblo colombiano”⁴³².

Luego de asegurar que tras el bombardeo se encontraron cuatro computadoras pertenecientes al guerrillero abatido, enumeró seis cartas en las que los líderes guerrilleros mencionaban con palabras elogiosas, y en las que se evidenciaba un trato regular, a dos de sus principales acusadores, Chávez y Correa. Desde allí que dirigiéndose al líder ecuatoriano, Uribe comentara que “la primera reacción del gobierno de Ecuador fue que no habían tenido relaciones con las FARC. Después dijeron que sí, pero que era para buscar el acuerdo humanitario, la liberación de Ingrid Betancourt y de otras doce personas... Y después el mismo gobierno ecuatoriano contestó que sí estaban en la búsqueda del acuerdo humanitario, y que no le había consultado al gobierno de Colombia porque no creían en Uribe y que Uribe los bombardeaba. Y entonces viene aquí el argumento: ninguno de aquellos representantes de instituciones, o de aquellas personas que con autorización del gobierno de Colombia han buscado el acuerdo humanitario, han sufrido trampas del Gobierno de Colombia”⁴³³. Finalmente y tras los chispazos verbales entre ambos mandatarios, Correa aceptó el pedido de disculpas de Uribe y la Cumbre finalizó con un resultado auspicioso para el líder colombiano, aunque las relaciones entre ambos países tardaron en cicatrizar.

A pesar de la crisis internacional con los países vecinos, la sociedad colombiana respaldó a su presidente en el operativo exitoso y la popularidad de Uribe (RP de apoyo

⁴³² Ibid. (2008: 242).

⁴³³ Botero Campuzano (2008: 239).

político/ ciudadano) alcanzó un record histórico del 84% (según Gallup⁴³⁴), pese a las reservas de los familiares de los secuestrados, quienes veían alejarse la posibilidad inmediata de liberación. El principal de los recursos de poder de estrategia política generado por el primer mandatario para responder al desafío guerrillero le permitió a Uribe sortear la crisis diplomática con los países que mantienen frontera con Colombia, con bajos costos políticos a nivel interno.

Una semana después del Operativo Fénix, el mando mayor de la guerrilla iba a sufrir nuevamente importantes bajas en su formación. El 8 de marzo, Manuel Muños, alias Iván Ríos, fue asesinado por su escolta para cobrar la recompensa que existía en caso de su captura, y una semana después, alias “Karina”, comandante del Frente 47, se entregó a las autoridades. Estos dos casos evidenciaban que la moral en el interior de la guerrilla se encontraba en un grado importante de decaimiento ante los avances exitosos de la fuerza pública. Un nuevo acto en donde se probaba el desmoronamiento de la FARC fue la entrega del guerrillero alias “Isaza”, quien hasta ese momento custodiaba a su secuestrado, el senador Tulio Lizcano. La desertión en las filas guerrilleras fue un fenómeno que se incrementó durante el 2008. Según fuentes oficiales, hasta el último trimestre fueron 2.559 los combatientes que se desmovilizaron en este contexto de presión castrense⁴³⁵.

El 24 de mayo, el gobierno, en manos de su ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, anunció al país que el máximo líder de las FARC, el comandante Manuel Marulanda, alias “Tirofijo”, pronto a cumplir los ochenta años, había fallecido de causas naturales. Con la ausencia de su líder histórico, las FARC continuaban con su proceso de descomposición que tendrá a principios de julio uno de los golpes más espectaculares sufridos por la inteligencia de la guerrilla a lo largo de su historia.

Como se había explicitado en el ítem anterior, la mediación de varios líderes mundiales en torno a la problemática del secuestro se había instalado a partir de las imágenes que brindaban los videos en los que se observaba a los retenidos por la guerrilla

⁴³⁴ Se trató de un nuevo record de popularidad de Uribe desde el inicio de su gestión en el año 2002. En línea en: <<http://www.marthacolmenares.com/2008/03/13/un-record-popularidad-de-uribe-segun-encuesta-de-gallup/>>.

⁴³⁵ Revista *Semana*, del 27 de octubre de 2008, “El descontrol de las FARC”. En línea en: <<http://www.semana.com/noticias-conflicto-armado/descontrol-FARC/117129.aspx>>.

en un estado de salud por demás precario. El caso de Ingrid Betancourt se había convertido, por su importancia a nivel internacional, en un ícono del sufrimiento que en forma cotidiana llevaban adelante los secuestrados por las FARC. La intervención del presidente francés Nicolás Sarkozy apenas iniciado su mandato instaló en la opinión pública nacional e internacional la suerte de la política franco-colombiana. Las entregas unilaterales de las FARC durante los primeros meses del año alimentaban una rápida solución a la situación de Betancourt. Sin embargo, las bajas de la guerrilla desde el primer trimestre de 2008, junto a las deserciones sufridas y la muerte de su líder, habían abierto un paréntesis en la negociación, que un golpe maestro del gobierno despertó del silencio en que se encontraba inserto.

El 2 de julio de 2008 se llevó adelante la “Operación Jaque”, la máxima hazaña militar hasta ese momento, por la cual fueron rescatadas, sin necesidad de lanzar un solo disparo, quince secuestrados que se encontraban en poder de la guerrilla, entre ellas la ficha de negociación más importante de las FARC, Ingrid Betancourt. En el grupo liberado se encontraban también tres contratistas americanos (Keith Stansell, Marc Gonsalves y Thomas Howes) que llevaban más de cuatro años en poder de la guerrilla y formaban parte de la preocupación del gobierno de EEUU.

La “Operación Jaque” constituyó un trabajo de inteligencia militar (recurso de estrategia política) llevado adelante por las Fuerzas Armadas colombianas que, por intermedio de equipos de informativa especializados y mediante una exhaustiva indagación, que incluyó información obtenida por parte de desertores de la guerrilla, lograron engañar a los encargados de la seguridad de los secuestrados. Este audaz engaño electrónico tuvo por finalidad interceptar las operadoras del alias “Mono Jojoy” con sus cinco frentes, en los que se encontraba el del alias “César”, quien tenía a los secuestrados. Como relata el libro de Juan Carlos Torres (2008), “teniendo en cuenta esta forma de operación en las comunicaciones la propuesta era penetrar y aislar las comunicaciones de la operadora de César en el frente primero, haciéndole creer que hablaba con la operadora del Mono Jojoy y ordenarle que cambiara de frecuencia, desde la cual, en adelante y sin saberlo, se comunicaría con una operadora falsa, que realmente sería una agente de inteligencia. Como en el programa radial intervenían las operadoras de los otro cuatro frentes, había que recrear también las voces para que se creyera que la situación era completamente

normal”⁴³⁶. Una vez logrado este primer objetivo, el segundo era el propósito central de la operación, que descansaba en hacerles creer a quienes tenían en sus manos a los secuestrados que iba a desarrollarse un traslado a otro frente de la guerrilla que involucraba el grupo de los 15 retenidos por el Frente Primero. Luego de varias idas y vueltas, finalmente se decidió por conformar una supuesta misión humanitaria internacional para efectuar, con veeduría internacional, un movimiento de secuestrados en el interior del país. El plan se llevó a cabo sin que la guerrilla descubriera el engaño y el 2 de julio se desarrolló a la perfección, originando un duro golpe a la FARC.

Para Uribe, esta impecable acción militar fue posible gracias a las computadoras confiscadas a “Raúl Reyes” luego del “Operativo Fénix” unos meses atrás. En ese sentido, el primer mandatario expresaba que “nosotros teníamos los computadores de Reyes y en ellos encontramos abundante información sobre los métodos de comunicación interna de las FARC; esto sin contar que nuestras agencias de inteligencia llevaban varios años trabajando para descifrar el código secreto de este grupo”⁴³⁷

El éxito de la operación significó un incremento de los recursos de poder del gobierno al dejar en evidencia la superioridad, en los equipos y aparatos de inteligencia, que las fuerzas de seguridad mantenían sobre la guerrilla. La popularidad de Uribe (RP de apoyo popular/ ciudadano) volvió a aumentar, y de acuerdo con los sondeos, el 90% de la población encuestada (Pachón, 2009: 331) se mostraba favorable al manejo que el primer mandatario le estaba proporcionando a la cuestión de la guerrilla. Según la propia involucrada en el rescate, Ingrid Betancourt, se trató de una operación perfecta: “Yo soy testigo de lo que fue eso, la operación fue absolutamente impecable; las personas que hicieron el operativo lo hicieron de manera impecable; nosotros no sabíamos lo que estaba pasando, no se disparó un solo tiro, no se mató nadie; nos sacaron con grandeza”⁴³⁸.

Tres meses más tarde era abatido Aicardo de Jesús Agudelo Rodríguez, alias “El Paisa” en otra acción que combinaba el poderío alcanzado por las Fuerzas Armadas en cuanto a inteligencia (infiltración en el interior de la guerrilla) y armamento (bomba de precisión). El jefe del Frente 34 de las FARC en Antioquia había sido partícipe del secuestro de Guillermo Gaviria y Gilberto Echeverri en mayo de 2003, lo que representó un

⁴³⁶ Torres (2008: 80).

⁴³⁷ Uribe (2012: 291).

⁴³⁸ Holguín (2009: 186).

motivo de satisfacción presidencial ya que se trataba de uno de los responsables del asesinato de dos de los amigos entrañables del primer mandatario colombiano⁴³⁹.

Los éxitos frente a la guerrilla compensaban los conflictos que el gobierno transitaba luego de las revelaciones de los jefes del paramilitarismo que vinculaban a gran parte de la bancada oficialista (y rozaba al propio presidente) con los grupos ilegales. En ese marco de incertidumbre, en cuanto a la definición de la condición legal de estos grupos y el avance de la justicia en la investigación de la “Parapolítica”, una audaz decisión gubernamental (RP de estrategia política) intentó frenar el proceso que involucraba a una buena porción de la clase política colombiana. El 13 de mayo de 2008, el gobierno de Uribe extraditó sorpresivamente a 14 cabecillas paramilitares a Estados Unidos, cuya justicia los reclamaba por narcotráfico, lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. Entre los jefes paramilitares puestos a disposición de los agentes norteamericanos de la DEA, se encontraban los principales líderes del grupo ilegal como eran Salvatore Mancuso, Rodrigo Tovar Pupo, alias “Jorge 40”, Diego Fernando Murillo Bejarano, alias “Don Berna”, Manuel Enrique Torregrosa, Francisco Javier Zuluaga Lindo, alias “Gordolindo”, Eduardo Enrique Bengoechea, Juan Carlos Sierra, alias “el Tuso”, Guillermo Pérez Alzate, alias “Pablo Sevillano”, Ever Veloza, alias “HH” entre los más importantes⁴⁴⁰ y que en esos momentos se hallaban en distintas cárceles de máxima seguridad del país. El presidente justificó la decisión en base a que los cabecillas habían incumplido los compromisos asumidos durante los acuerdos entre estos grupos y el gobierno en el marco del proceso de “Justicia y Paz”.

La movida realizada por el primer mandatario, en un contexto de fuertes cuestionamientos a su figura por parte de organizaciones de derechos humanos⁴⁴¹, políticos de la oposición y algunos medios de comunicación que acusaban a Uribe de connivencia con estos grupos ilegales, dio lugar a distintas especulaciones en el plano de la opinión pública. Desde el gobierno se respondió que con esta medida se alejaban los fantasmas que involucraban al propio presidente con el paramilitarismo. La administración Uribe, en ese

⁴³⁹ Al recordar esta acción militar, Uribe afirmó que “como dice el dicho popular, que mi madre citaba con frecuencia ‘La constancia vence lo que la dicha no alcanza’ (Uribe, 2012: 40)

⁴⁴⁰ Diario *El Espectador*. En línea: <<http://www.elespectador.com/node/13431/>>.

⁴⁴¹ Entre ellas, la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ), la Corporación Regional para la defensa de los Derechos Humanos (CREDHOS), Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE), la Fundación Manuel Cepeda, La Comisión Interclesial de Justicia y Paz (CIJP), la Corporación Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CCAJAR)

sentido, culminaba el proceso que alentó mediante la “Ley de Justicia y Paz” acusando a los paramilitares extraditados de continuar cometiendo delitos en forma reiterada y de mentir en las declaraciones realizadas a la justicia⁴⁴².

La decisión oficial de extraditar a los principales cabecillas del paramilitarismo se encontraba asociada a la necesidad del presidente de remover los obstáculos existentes, hasta ese momento, para ratificar el TLC con los EEUU frenado por el Congreso por la falta de resultados en la lucha contra los grupos ligados al narcotráfico. Es decir, la estrategia presidencial de congraciarse con uno de los recursos de poder más importantes del gobierno a nivel internacional subyacía en la sorpresiva y veloz decisión gubernamental. El apoyo brindado por la coalición de gobierno a la medida no logró acallar las críticas que la decisión adoptada por Uribe concitó en la Corte Suprema de Justicia, quien solicitó una inmediata explicación, y en las organizaciones de derechos humanos y ligadas a las víctimas del paramilitarismo, quienes alertaron a la opinión pública que la medida del gobierno podría conformar una excusa para desistir de la realización de los juicios por crímenes de lesa humanidad en el país⁴⁴³. Esto constituía un riesgo, según los detractores de la política oficial, ya que podría conllevar a la impunidad de los paramilitares por los delitos más atroces cometidos en el país. El gobierno respondió que sería la justicia norteamericana la que mejor asegurara la continuidad del proceso de versiones libres realizadas por los cabecillas a la justicia colombiana.

El conflicto alrededor de la extradición en el marco de la investigación judicial generó una nueva disputa entre el poder ejecutivo y la Corte Suprema de Justicia, el órgano dentro del poder del Estado que más situaciones de choque le acarreó al presidente. Este conflicto tuvo dos puntos nodales. El primero, cuando Uribe decidió iniciar una querrela por calumnias e injurias al presidente de la Corte Suprema, César Julio Valencia Copete,

⁴⁴² Según Uribe, “algunos de ellos habían reincidido en el delito después de su sometimiento a la Ley de Justicia y Paz, otros no cooperaban debidamente con la justicia y todos incumplían con la reparación de las víctimas al ocultar bienes o demorar su entrega”. En el Diario *El Espectador*, en línea en:

<<http://www.elespectador.com/noticias/politica/articulo-corte-suprema-pide-uribe-explicaciones-extraditar-ex-jefes-paramilitares>>.

⁴⁴³ Según la Corte Suprema de Justicia, “la extradición, además de impedir el relato de los crímenes del postulado a través de la versión libre, dejaría huérfanas de protección a las víctimas y sus familiares”. El Colectivo de abogados José Alvear Restrepo se expresaba en el mismo sentido al señalar que “el objeto de la decisión de extradición fue evadir la jurisdicción nacional, en lo que a crímenes se refiere, y a privilegiar la extrajera, garantizar silencio, alimentar la impunidad y, en definitiva, extraditar la verdad o cualquier posibilidad de conocerla”. Ambas declaraciones en Colectivo de abogados José Alvear Restrepo (2009: 103-104).

luego de que el cortesano acusara a Uribe de llamarlo por teléfono para interiorizarse por el llamado a indagatoria de su primo Mario por sus presuntos vínculos con paramilitares y no rectificarse luego de la solicitud presidencial⁴⁴⁴. El segundo foco de conflicto fue la propuesta del ejecutivo de crear un nuevo tribunal con facultades para juzgar al presidente, congresistas y magistrados, que ante la oposición de la mayoría de los juristas de las altas cortes se archivó, evidenciando la incomodidad del presidente con este poder del Estado. La presión del gobierno a la Corte Suprema no rindió sus frutos, y la justicia continuó investigando los crímenes de los grupos ilegales con fuertes cuestionamientos al poder ejecutivo.

El otro poder del Estado que se vio afectado de forma directa por el proceso de la “Parapolítica” fue el parlamento. Allí era donde se encontraban la mayoría de los políticos investigados por la justicia y en donde el gobierno mantenía un control a partir de una coalición de partidos que le garantizaba la mayoría. Sin embargo, la continuidad de la investigación judicial le trajo al gobierno conflictos con su bancada, ya que la mayoría de los investigados provenían de esas filas y, en consecuencia, le impedía el normal funcionamiento de ese cuerpo. La aprobación de leyes en esos primeros años de gobierno fue muy pobre y el presidente utilizó muy pocas veces el parlamento con la finalidad de modificar el status que legal.

El proyecto más importante enviado por el ejecutivo durante el año 2008 fue la reforma política, que también fue conocida como el nombre de “Silla Vacía”. Este proyecto apuntaba a realizar modificaciones en el sistema político e incluía establecer sanciones a los partidos a los que se les comprobaran vínculos con los paramilitares o con la guerrilla. Este acto legislativo tenía por finalidad establecer nuevas penas para los legisladores a los que se les demostrasen tener acuerdos con los distintos grupos ilegales del país, aplicando sanciones que iban desde la imposibilidad del reemplazo (perdiendo, de esa manera, la banca el propio partido) hasta la pérdida de la personería jurídica cuando el 50% de sus integrantes, tanto en Cámara como en el Senado, fueran condenados. A su vez, la reforma, que preveía el aumento de umbral del 2% al 5% para conservar la personería jurídica, entre otros puntos, actuaría de forma inmediata sobre el parlamento en ejercicio.

⁴⁴⁴ Diario *El Espectador* en línea: <<http://www.elespectador.com/noticias/politica/articulo-uribe-demandara-injuria-y-calumnia-presidente-de-corte>>.

Luego de haber sido promovido por el gobierno y por parte de la oposición, el proyecto, finalmente, naufragó. El primer mandatario, persuadido de que las bondades de la reforma serían menores que las pérdidas ocasionadas por su implementación, se vio conminado a dar marcha atrás con el proyecto. Esta coincidió con el encuentro mantenido por el presidente en abril de 2008 con los líderes de los partidos de su propia bancada, en el que se analizaron las distintas alternativas. La posibilidad de que el gobierno perdiera su mayoría parlamentaria (RP institucional) debido a que varios de sus representantes se encontraban con procesos en la justicia (y que según el proyecto no serían reemplazados) exhortó al primer mandatario a crear por decreto una comisión de cinco expertos para diseñar un ajuste integral a la Constitución. De esta manera, se retrasaba la posibilidad de reforma inmediata y se evitaba enviar un mensaje al exterior (en momentos en que se bregaba la aprobación del TLC con los EEUU) de un parlamento que veía disminuir su composición debido a los vínculos entre los políticos y los grupos ilegales en el país.

El Congreso, constituía uno de los RP institucional controlado por el primer mandatario en este contexto de judicialización de la política. El proyecto de reforma política, que en un primer momento fue alentado por el gobierno con el fin de dar respuesta a los cuestionamientos recibidos, en los hechos se convertía en una maniobra que atentaba contra el propio control de tal recurso institucional. Los éxitos frente a las FARC propinados por las Fuerzas Armadas durante el primer semestre de 2008 le permitió al presidente aumentar su popularidad (RP de apoyo popular/ ciudadano) y acallar las voces que cuestionaban su política de Seguridad Democrática y sus vínculos pasados (no comprobados en la arena judicial) con el paramilitarismo. En ese sentido, el apoyo sostenido por parte de la población hacia la estrategia del gobierno frente a la guerrilla, a la cual le habían propinado durante el 2008 los golpes más fuertes de su historia, le permitió a Uribe especular con la generación de un nuevo RP como era la posibilidad de una nueva reelección presidencial.

El segundo semestre del año comenzaba con la liberación de Betancourt, la extradición de una veintena de jefes paramilitares a EEUU y una popularidad presidencial en niveles histórico (RP de apoyo popular/ ciudadano). Cuando se aventuraba que la PSD se encaminaba hacia mayores éxitos en la arena militar, al primer mandatario le

comenzarían aparecer más piedras en el camino de su estrategia de eliminación del fenómeno guerrillero. De eso trata el próximo capítulo.

Resumiendo, el año 2008 comenzó con muy buenas noticias para el gobierno de Uribe. Las entregas unilaterales de una desgastada guerrilla (luego del fracaso de finales de 2007) y la caída de dos de los principales líderes de las FARC, entre ellos del alias “Raúl Reyes” en territorio ecuatoriano, marcaban que la PSD, el RP de estrategia política generado por el presidente, continuaba manteniendo su eficacia. A pesar del conflicto internacional suscitado con Ecuador y Colombia por la espectacular acción en el vecino país y solucionado luego en el marco del Grupo Río, la popularidad de Uribe volvía a aumentar de manera significativa. Este RP de apoyo popular/ ciudadano se volvió a incrementar luego de la liberación de Ingrid Betancourt, tras seis años de cautiverio, en una acción que no necesitó recurrir a la utilización de armas de fuego. Se trató de un trabajo de inteligencia militar, producto de la modernización de los equipos y transmisores de comunicación (otro RP generado por el primer mandatario) y que permitió que la liberación se convirtiera en un acto teatral de importantes consecuencias para el desmantelamiento de la guerrilla.

Las peripecias de la “Parapolítica” continuaron durante el año y el presidente recurrió a la extradición de los principales cabecillas de las AUC (RP de estrategia política) como forma de solucionar el cuestionamiento opositor y de los organismos de derechos humanos en torno a la Ley de Justicia y Paz.

Conclusión

El año y medio que transcurre entre el inicio del segundo mandato presidencial de Álvaro Uribe, en agosto de 2006, y la liberación de Ingrid Betancurt, puede observarse desde dos momentos. Por un lado, la aparición del fenómeno de la “Parapolítica” en octubre de 2006 con sus secuelas judiciales durante el 2007. Por el otro, los éxitos del presidente frente a la guerrilla y la victoria en las elecciones regionales, en el segundo semestre del segundo año de gobierno.

La “Parapolítica” afectó al primer mandatario en el sentido de que Uribe carecía, por primera vez, del control del proceso de negociación con las AUC. El RP generado en torno de esta problemática fue la creación de la “Ley de Justicia y Paz”. Sin embargo, luego de las declaraciones ante la justicia de los principales cabecillas del paramilitarismo, que involucraban a centenares de políticos, la Corte Suprema y la Fiscalía comenzaron una investigación judicial que revelaría los nexos existentes entre la clase política colombiana (en mayor medida de uribistas) y este grupo ilegal. La familia del presidente se vio involucrada en esas declaraciones y tanto el hermano como un primo del primer mandatario fueron alcanzados por el brazo judicial a raíz de sus lazos con las AUC.

A pesar de las denuncias que salpicaron a la Uribe, su popularidad (RP de apoyo popular/ ciudadano) se mantuvo en los niveles históricos. La realidad del paramilitarismo, como un emergente en la lucha contra la guerrilla, los éxitos presidenciales ante las FARC, el proceso que el propio gobierno había llevado adelante frente a las AUC y la construcción de un RP de estrategia política como la personalidad política en torno al primer mandatario, pueden explicar este fenómeno. Por otro lado, al haber sido Uribe el presidente que más éxitos había obtenido frente a la guerrilla, y el que había comenzado un proceso de desmovilización paramilitar, hacía factible que la sociedad, ansiosa de paz y tranquilidad, pudiera tolerar las relaciones puestas en evidencia por la justicia. Por último, la personalidad política de Uribe, como un líder que “se hacía cargo” y que exponía su propia vida en el objetivo de dotar de paz y tranquilidad a Colombia, oficiaba como otra de las razones de la perdurabilidad del apoyo popular.

Luego de un primer semestre de 2007 ajetreado alrededor de la problemática de esta investigación judicial, el presidente pudo mostrar resultados significativos frente a la guerrilla. La decisión oficial de priorizar la captura o el abatimiento de los principales

cabecillas de la guerrilla comenzó a rendir sus frutos durante este año, y obligó al despliegue de las FARC ante el avance de la fuerza pública, obligándola a guarecerse en la estrategia del acuerdo humanitario con la participación de otros líderes mundiales en el conflicto. La frustrada Operación Emmanuel de finales de diciembre de 2007 le permitió a Uribe un nuevo triunfo ante la opinión pública sobre la guerrilla. A pesar del compromiso de entregar a las políticas Consuelo González, Clara Rojas y su hijo nacido en cautiverio, las FARC suspendieron el operativo cuando el presidente colombiano reveló que la entrega del niño sería imposible ya que se encontraba en un Hogar de niños. El descubrimiento fue un severo revés para la guerrilla ante la opinión pública y generó un aumento en la popularidad presidencial (RP de apoyo popular/ ciudadano). Ésta ya se había corroborado en la elección regional de dos meses atrás, cuando el primer mandatario logró aumentar sus recursos de poder institucional en gobernaciones y alcaldías. Su partido, el PU (que participaba por primera vez de la contienda regional), y sus aliados lograron obtener más del 70% de los espacios ejecutivos a nivel provincial y local.

Luego de las entregas unilaterales de Clara Rojas y Consuelo González por parte de las FARC a principios de 2008, el gobierno continuó con el acoso militar dando de baja al alias “Raúl Reyes”. Tras bombardear el campamento guerrillero ubicado a 1800 metros de la frontera colombiana, en territorio de Ecuador, las Fuerzas Armadas lograron dar un golpe a la guerrilla, que sería el prolegómeno de los meses siguientes. Los RP generados por Uribe en torno a su PSD aumentaban su poder interno y la legitimación de las eficaces acciones militares, a pesar de que generaban polémicas por los medios utilizados.

La muerte natural del líder de la guerrilla, Manuel Marulanda, alias “Tiro Fijo”, fue otro golpe sufrido por este grupo, que se iba a ver nuevamente sacudido por el espectacular rescate de Ingrid Betancourt y otros secuestrados el 2 de julio de 2008. Luego de un trabajo de inteligencia militar, que evidenciaba los avances en ese campo desarrollados por las fuerzas armadas colombianas, se pudo liberar, sin necesidad de acudir a la violencia, a un grupo importantes de secuestrados de inmenso valor para la guerrilla. Esto probaba que la modernización de los equipos y transmisores de comunicación (otro RP generado por el primer mandatario) había alcanzado un poder de efectividad que podía producir importantes daños a la guerrilla. Luego de la liberación de Betancourt, la popularidad de Uribe (RP de apoyo popular/ ciudadano), alcanzó niveles históricos.

CAPÍTULO IX

UN LP CON RECURSOS, PERO SIN RE- REELECCION (2009-2010)

“Estoy cargado de tigre”

Álvaro Uribe
(Diario *El Tiempo*, 2006)

Introducción

Este capítulo concentra la atención en los sucesos políticos desarrollados desde el último semestre de 2008 hasta principios de 2010.

En ese marco, se analiza, en primer lugar, los dos sucesos que salpicaron de forma directa al gobierno y a dos de los recursos de poder generados por Uribe: la emergencia de los “falsos positivos” y la “Yidispolítica”. En el primero de ellos, se examinan las controversias desatadas en torno a la aparición de este fenómeno que cuestionaba seriamente el accionar del Ejército en la lucha contra los grupos ilegales y la eficacia en cuanto a la contabilidad de bajas en combate. En el segundo, se relata las peripecias de la denuncia realizada por la ex congresista Yidis Medina en relación a la compra de su voto para habilitar el segundo mandato de Uribe. En ambos casos, se presta atención a cómo el presidente responde a esos nuevos desafíos que lo involucran de manera inmediata y de qué forma hace jugar sus recursos de poder para neutralizarlos.

En segundo término, se observan las denuncias políticas y judiciales en torno al espionaje efectuado por el DAS a diferentes dirigentes opositores del gobierno. Aquí se examinan de qué forma Uribe responde a las acusaciones y cómo hace jugar sus recursos de poder para sortear las controversias originadas por las “Chuzadas”.

Luego, se describen los convenios militares de cooperación realizados con los EEUU y los conflictos suscitados con los países vecinos en relación a esta temática. En ese sentido, se observa la Cumbre extraordinaria del Unasur realizada en Argentina, en donde el presidente colombiano puso en juego los recursos de poder de estrategia política (comunicacional) para zanjar el diferendo ocasionado luego del anunciado proyecto. Estos últimos sucesos se desarrollan en paralelo al proceso de aprobación del referendo reeleccionista que el primer mandatario intentó llevar adelante para habilitar un nuevo turno

electoral. Aquí se examinan los recursos de poder puestos en juego por Uribe para la sanción del referendo y las falencias del propio proyecto que lo tornaron inviable.

Finalmente, la última parte del capítulo se concentra en el análisis de los índices económicos, sociales y de seguridad luego de los ocho años de gobierno uribista intentando comprender la fortaleza de dicho liderazgo presidencial.

9.1. Los cuestionamientos hacia los RP uribista

Este ítem analiza la segunda parte del año 2008, caracterizada por las controversias provocadas por la PSD en torno a los “falsos positivos” y la revelación de la “YidisPolítica”. En ese sentido, se observa cómo ambos sucesos impactaron en forma directa en la gestión del gobierno y de qué forma el primer mandatario respondió a estos cuestionamientos y con qué recursos de poder. Por otro lado, se describen los conflictos suscitados entre el poder ejecutivo y el judicial en torno a estas dos temáticas.

Las controversias alrededor de la PSD y la reelección presidencial

Luego del espectacular rescate de los secuestrados por parte de las fuerzas militares, entre los que estaba Ingrid Betancourt, el gobierno de Uribe se encontraba en el cenit de su popularidad (85%, según Gallup)⁴⁴⁵. Recuperado de las secuelas de la “Parapolítica”, el primer mandatario podía mostrar ante la opinión pública resultados exitosos en el combate frente a los grupos ilegales. La PSD del presidente Uribe pasaba por su mejor momento desde el inicio de su implementación en agosto de 2002. Sin embargo, se iban a producir durante la última parte de 2008 dos sucesos que comprometerían a dos de los recursos de poder de estrategia política contruidos por el primer mandatario durante sus mandatos: las estadísticas exitosas frente a la guerrilla, que incluía un cuestionamiento al accionar de las Fuerzas Armadas, y la aprobada reelección presidencial de 2004.

A mediados de septiembre, el país se vio conmovido por la aparición de 19 cadáveres de jóvenes oriundos de los municipios de Soacha, en las afueras de Bogotá y de Ciudad Bolívar, que se encontraban desaparecidos y habían sido dados como bajas por el Ejército. Luego de una investigación realizada por el personero municipal de Soacha, Fernando Escobar, y que contó con la colaboración de Clara López, secretaria de gobierno de Bogotá, se pudo conocer que dichos jóvenes fueron reclutados, trasladados a diversos lugares del país, para más tarde ser asesinados por las fuerzas militares. Tras esta denuncia,

⁴⁴⁵ Diario *El Tiempo*. En línea en: <<http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-4497711>>. Un interesante estudio realizado por la empresa Ipsos Public Affairs luego de la liberación de Ingrid Betancourt se encuentra en línea en <<http://www.slideshare.net/saulhb/gran-encuesta-ipsosnapolen-franco-julio-de-2008-colombia>>.

los casos de desaparición de personas (en su mayoría jóvenes) que se reportaban en los departamentos de Antioquia, Boyacá y Sucre, entre otros, se multiplicaron y llevaron a una crisis institucional en el interior de uno de los recursos de poder de Uribe como eran las Fuerzas Armadas.

Desde el inicio de la denuncia, el gobierno evitó hablar del tema. Luego de la aparición de nuevos casos en otros municipios, Uribe se refirió a la cuestión negando que los hechos hubieran ocurrido, ya que no creía que “esos muchachos irían a recoger café” (Zuleta Lleras, 2010: 57) evitando de esa forma cuestionar a la fuerza militar involucrada. El ministro de Defensa, Juan Manuel Santos negaba, en la misma línea, que el Ejército estuviera implicado y denominó como “falsos positivos” a los delitos de lesa humanidad cometidos por integrantes de la fuerza pública. A partir de ese momento, en los medios de comunicación se denominó de esa forma a los asesinatos cometidos por los militares y anotados como bajas en combate. Finalmente, el escándalo no pudo disimularse y obligó al poder ejecutivo a tomar medidas ante el cuestionamiento que surgía en la opinión pública por la revelación de otros casos, que impactaban en forma directa en uno de los pilares de la PSD, como era el método de medición del éxito de la fuerza pública en el combate a la guerrilla.

La resolución 29 del 17 de noviembre de 2005, que autorizó el pago de recompensas por la información que condujera a la captura de los miembros o grupos al margen de la ley, se encontró cuestionada de raíz frente al accionar militar. El afán por reportar bajas guerrilleras por parte del Ejército tenía como razón principal el otorgamiento de estímulos, como podrían ser días de vacaciones y puntaje para la promoción interna. Esto dio lugar a la práctica del secuestro de jóvenes de barrios de las periferias urbanas, para más tarde reportarlos como caídas guerrilleras durante combates ficticios. Según una investigación del Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP), “al finalizar el año 2008, el recuento de hechos de falsos positivos resulta preocupante, ya que se consolidó un importante incremento en el número de falsos positivos ocurridos en el año. Con relación a los casos que reportamos en septiembre pasado para el primer semestre del 2008 (26 casos y 54 víctimas), se ha producido un aumento del 34% en el semestre comprendido entre julio y diciembre de 2008, con un total de 35 casos de “falsos positivos” y un total de 69 víctimas. A ello se suman las actualizaciones que se hicieron a los datos del primer

semestre en razón de las denuncias crecientes que se presentaron, entre ellas las de los jóvenes de Soacha. Por tanto, se agregan 34 casos más y 52 víctimas, para un gran total en todo el año 2008 de 95 casos y 175 víctimas. Ello implica un descenso en los 149 casos que se presentaron en el 2007, pero un incremento con respecto a los 68 casos registrados en el 2006”⁴⁴⁶.

La emergencia de los “falsos positivos” puso al descubierto prácticas sistemáticas de homicidios de jóvenes convocados con la falsa promesa de encontrar empleo, y que después eran reportados como miembros del paramilitarismo o la guerrilla según la situación y el caso, para incrementar los resultados en la lucha militar contra los grupos ilegales. Ante la evidencia de los hechos, el Ministerio de Defensa retiró del servicio a 22 oficiales (12 coroneles, 3 generales y 7 suboficiales), y el comandante del ejército de las Fuerzas Armadas, el General Mario Montoya, debió renunciar a su cargo para ser nombrado Embajador en la República Dominicana. La creación de un Comité Interinstitucional de Seguimiento, para investigar los “falsos positivos”, fue la respuesta dada por el gobierno a esta situación, que comprometió no sólo a las fuerzas de seguridad locales sino también el apoyo y el financiamiento de los Estados Unidos. El presidente debió dar explicaciones ante las denuncias sistemáticas y expresó que “nosotros somos los primeros en exigir que no haya falsos positivos, que haya total transparencia, pero tenemos que ser los primeros en denunciar que mucha gente amparada en el tema de los falsos positivos, lo que ha hecho es crecer las falsas acusaciones para tratar de paralizar la acción de la fuerza pública contra los terroristas”⁴⁴⁷.

El otro de los sucesos acaecidos durante el 2008 y que comprometió la credibilidad del primer mandatario fue lo que la opinión pública denominó como la “Yidispolítica”. Para abril de 2008, la ex representante Yidis Medina confesó ante las cámaras de televisión haber cambiado el voto decisivo que habilitó la reelección presidencial en diciembre de 2004, por contraprestaciones burocráticas (nombramientos de notarias oficiales y aportes económicos) prometidas por el gobierno. A pesar de haber sido investigada en aquel momento por la justicia colombiana, luego del giro copernicano realizado a pocos días de

⁴⁴⁶ Fuente: Informe Especial abril 2009 – Falsos Positivos: Balance del segundo semestre 2008, CINEP (en Pachón, 2009: 337).

⁴⁴⁷ Holguín y Escamilla (2009: 188).

anunciar públicamente su oposición al proyecto reeleccionista, la pesquisa no pudo determinar que el cambio de voto había obedecido a algún ilícito. En ese momento, Medina grabó un video secreto (con la finalidad de “blindarse” ante la posibilidad de algún atentado) en el cual contó los detalles de la propuesta del gobierno. Esta fue la cinta que, más tarde y con la autorización de la ex parlamentaria, salió en Noticias Uno TV y revolucionó la opinión pública del país con las acusaciones sobre la administración Uribe. Las razones que llevaron a la ex legisladora a auto incriminarse fueron que el gobierno no había cumplido con las promesas realizadas por la modificación del voto decisivo que dio lugar a la reelección.

La Corte Suprema de Justicia condenó a Medina a ocho años de prisión por el delito de cohecho y dio lugar a la apertura de investigaciones que vinculaban en la trama al entonces ministro del Interior Sabas Pretelt de la Vega, en ese momento embajador en Italia, al ministro de Protección Social, Diego Palacios, y al Secretario General del Palacio, Alberto Velásquez. Los detalles de la propuesta gubernamental realizada en un baño por parte del presidente están relatados en un libro de Medina, donde la ex congresista cuenta minuciosamente los entretelones del suceso que involucraba a la propia figura presidencial⁴⁴⁸.

El presidente, afectado por la denuncia, propuso la realización de un referendo para que fueran los propios votantes quienes dictaminaran sobre la legitimidad de su segundo mandato. Esta audaz respuesta al cuestionamiento acerca de la validez del acto legislativo del parlamento fue inmediatamente desechada, ya que según el ministro del Interior, Fabio Valencia Cossio, existía, de acuerdo a la Corte Constitucional, la intangibilidad del llamado “caso juzgado constitucional”. De todas maneras, el primer mandatario rebatió las acusaciones realizada en torno a la “Yidispolítica”, al advertir que a Medina no le compraron el voto para aprobar la reforma que permitió su reelección, sino que la propia ex congresista era quien se dedicaba al chantaje. En ese sentido, Uribe denunció las exigencias

⁴⁴⁸ “El presidente me toma del brazo izquierdo y me dice: ‘Vamos a hablar los dos solos, porque es algo trascendental’. Entonces me lleva hacia su baño privado... Entramos los dos por la puerta grande de madera; el presidente baja la tapa del inodoro y me pide: ‘Siéntese aquí’. Entonces se inclina y coloca su rodilla derecha contra el piso y la izquierda flexionada. Y me mira detenidamente. ‘Yo necesito que usted haga patria, que salve la patria. Yo quiero ser reelegido nuevamente. Mija querida, ayúdeme, si usted me ayuda, yo le ayudo en todos y cada uno de los puestos que tenemos allá en Barranca... Mija ayúdeme, mire que su voto es decisivo y es importante. Le voy a decir a Alberto Velásquez que le quite esos cargos a Serpa y se los demos a usted” (Medina, Yidis, 2010: 26- 27).

que recibió su hijo Tomás, ya que “la señora lo llamó insistentemente para pedirle que necesitaba hablar con su papá, porque iba a pasar algo muy grave”⁴⁴⁹. A pesar de que Medina negó conocer al hijo del presidente, las llamadas existieron y fueron asumidas por la propia involucrada en su libro donde denunciaba el cohecho (Medina, 2010: 137). La Justicia, finalmente, condenó a otros dos involucrados en la “Yidispolítica”: el legislador, Teodolindo Avendaño, quien se ausentó para permitir la viabilidad del proyecto de reelección presidencial y recibió prebendas a cambio, y a Iván Díaz Mateus, por haber ejercido presión sobre Medina para que ella votara a favor del acto legislativo reeleccionista.

Las investigaciones realizadas por la Corte Suprema no dieron lugar a nuevas sanciones, aunque provocaron un nuevo conflicto con el poder ejecutivo. Desde el gobierno se acusó a la Corte de vínculos con el narcotráfico⁴⁵⁰, en un duelo que aumentó los decibeles a lo largo de los últimos años. El ministro Diego Palacio, involucrado en las investigaciones de la justicia, denunció penalmente a la Sala Penal de la Corte porque las denuncias eran “falsas y lesivas a su honra y buen nombre”. En agosto del 2008, la Corte emitió un comunicado en el cual afirmó que el Presidente de la República habría emprendido una campaña de desprestigio contra el cuerpo judicial, que violentaba el Estado de Derecho y que era necesario reportar estos actos a organismos internacionales (Pachón: 2009: 340).

El Poder Judicial colombiano tiene en la cúspide a las “Altas Cortes” que constituyen las tres principales jurisdicciones, la ordinaria (Corte Suprema de Justicia), la constitucional (Corte Constitucional) y la contencioso- administrativa (Consejo de Estado), a la que se adiciona el Consejo Superior de Judicatura. Sin lugar a dudas, el gobierno mantuvo las relaciones más tirantes con la Corte Suprema (por ser el órgano al que arribaban las causas que más comprometían al poder ejecutivo), en contraposición a las otras en las cuales contó, durante sus mandatos, con relaciones de menor rispidez. En los hechos, fue precisamente la Corte Constitucional, como órgano encargado sobre la constitucionalidad de leyes y decretos, la que dio vía libre a la reelección presidencial.

⁴⁴⁹ Revista *Semana*, del 14 de junio de 2008, en línea en: <http://www.semana.com/wf_ImprimirArticulo.aspx?IdArt=112695>.

⁴⁵⁰ Diario *El Tiempo* 27 de junio de 2008, en línea: <<http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-4352512>>.

A pesar de los sucesos de los “falsos positivos” y la “Yidispolítica”, que impactaron en forma directa en el primer mandatario, la popularidad del presidente Uribe (RP de apoyo popular/ciudadano) se mantuvo inalterable durante el intenso año 2008. Según un estudio de Gallup, el promedio durante su segundo mandato fue de 73,5%, mientras que durante el 2008 ésta ascendió a 78% (Pachón, 2009: 337), evidenciando niveles de aceptación altísimos comparados con otros líderes mundiales. Sin dudas, este se trató de un RP generado por el propio Uribe, que le permitió sortear diversas situaciones comprometidas y que afectaron su propia gestión de gobierno.

Durante el año 2008, la economía colombiana sufrió los embates de la crisis internacional originada en los EEUU, y el PBI mostró una tasa de crecimiento anual del 2,5%, que contrastaba con el 7,5% del año anterior⁴⁵¹. La desaceleración de la economía local se produjo en el último trimestre que fue donde el impacto de la crisis financiera norteamericana se hizo sentir en la mayoría de los países del continente. Sin embargo, a pesar de que las consecuencias de la crisis fueron negativas para el entramado productivo colombiano, la caída del PBI obedecía, asimismo, al rendimiento negativo de la industria manufacturera (-1,8%) y la construcción (-0,3%), siendo la actividad minera (7,3%) y la contribución de los servicios financieros (5,6%), los mayores auxilios al crecimiento del producto (Rettiberg, 2010: 252). Según la Encuesta de Opinión Industrial Conjunta (EOIC), las ventas disminuyeron un 3,1% y la utilización de la capacidad instalada en diciembre de 2008 cayó a 75%, es decir, un 6% por debajo del nivel observado un año atrás, siendo el Índice de Confianza Industrial (ICI) un 28% menor que el medido en diciembre de 2007 (Acosta Medina, 2009: 61). El menor desempeño en la actividad productiva y en la demanda se reflejó en los indicadores de empleo y en el balance fiscal externo. Justamente, la tasa de desempleo alcanzó el 10,5% en el cuarto trimestre de 2008, 0,67 puntos porcentuales superior a la observada el mismo trimestre de 2007, y el balance en cuenta corriente fue negativo en un 2,8% (Pachón, 2009: 343). De todas formas, la evolución de la crisis económica recién impactó de forma directa en la economía colombiana en el año 2009, como se observará en el próximo capítulo.

El intenso 2008 culminó con una sensible modificación en el ámbito internacional, y que tendría consecuencias inmediatas para el gobierno de Uribe, como fue el triunfo

⁴⁵¹ Fuente: FMI, World Economic Outlook (WEO): Crisis and Recovery. Abril 2009. En: Pachón (2009: 343).

electoral de Barack Obama en las elecciones presidenciales de EEUU. Luego de ocho años consecutivos de gobierno republicano, arribaba al poder el primer presidente negro en la historia del país, encarnando la esperanza de cambio en relación con la guerra con Irak, el cierre de la prisión de Guantánamo y la recuperación de la economía. En ese marco, las excelentes relaciones políticas que George Bush mantenía con Uribe resultaron ser una preocupación para el gobierno colombiano, que advertía que la presencia del demócrata Obama en la Casa Blanca podría significar un giro o un congelamiento de las relaciones entre ambos países. El cambio de gobierno, en ese sentido, implicaba una redefinición en dos de los temas capitales para el gobierno de Uribe y que marcaban la relación entre ambos estados como eran el Plan Colombia y la aprobación del TLC.

A pesar de que el líder colombiano insistió, desde la llegada del presidente demócrata al gobierno, que su país establecía relaciones de Estado y no de gobierno, la preocupación en la definición de esos temas existía y marcó la agenda bilateral hasta el final del mandato. Los cuestionamientos del ala más progresista del partido demócrata a la política de seguridad de Uribe auguraban un camino de piedras en la relación entre ambos Estados, como venía siendo luego de que la oposición a Bush había retomado el control de las dos cámaras del Congreso bicameral norteamericano. Los antecedentes de las decisiones adoptadas por el parlamento norteamericano, dominado por los demócratas desde 2007, mostraban las dificultades que tendría Uribe en los últimos años de mandato en relación al financiamiento norteamericano en la lucha contra el narcotráfico en Colombia.

A mediados de 2008, el Congreso de EEUU rechazó una solicitud de ayuda por parte del gobierno de Bush “reduciendo el componente militar en 150 millones de dólares (la cuarta parte), reemplazando con 100 millones de dólares en nuevas ayudas económicas y sociales. Hubo una caída fuerte en el presupuesto para la fumigación aérea y los multimillonarios contratos que mantenían la flota de aeronaves entregadas a Colombia, a principios de la década”⁴⁵². El otro freno impuesto por el parlamento fue la no ratificación del TLC que los líderes de la cámara de senadores y de diputados demócratas no habían llevado al recinto legislativo por la oposición que el proyecto despertaba en una parte importante del parlamento (Isacson, 2010: 118). El cuestionamiento a la política de seguridad de Uribe, en especial en relación con la política de derechos humanos y de

⁴⁵² Isacson (2010: 117).

persecución sindical, era la principal razón de la oposición demócrata para incrementar la relación económica bilateral⁴⁵³. Tampoco ayudaron los encuentros del presidente colombiano con el binomio presidencial republicano (horas antes de la Operación Jaque con John McCain y luego con Sarah Palin), previos a la decisiva contienda electoral de noviembre de 2008.

Para el líder antioqueño, la victoria de Obama significó un enfriamiento de la histórica relación y con ello un distanciamiento de un RP a nivel internacional clave y que involucraban los RP financieros, para el gobierno colombiano. La crisis económica en EEUU ahondó esa indiferencia hacia el gobierno de Colombia y la presencia de Uribe en Washington, cuando se destapó el proceso de los “falsos positivos”, no colaboró en el acercamiento con los sectores que continuaron observando con desconfianza al presidente colombiano, a pesar de los éxitos militares frente a la guerrilla y la recuperación de los secuestrados.

A finales del año 2008 ya comenzaba a vislumbrarse la estrategia política de Uribe para el año siguiente: la generación de un nuevo RP, la re-reelección presidencial. Como se observó en el ítem anterior, luego de los éxitos frente a la guerrilla y el aumento de la popularidad del presidente que arribaba a niveles históricos (dos recursos de poder generados por Uribe), desde el seno del uribismo se comenzó a pergeñar un plan que descansaba en la realización de un referendo popular que habilitara una nueva reelección presidencial. Para llevarlo a cabo, la primera propuesta tenía como finalidad la presentación de un proyecto de acto legislativo (al igual que para la primera reelección) para encaminar la reforma. Sin embargo, luego del fenómeno de la “Parapolítica” y de la “Yidispolítica”, el parlamento no parecía ser el escenario adecuado para avanzar con el proyecto de reelección. A pesar de ser uno de los recursos de poder institucional en manos del presidente, la anterior paridad en el Senado para aprobar el acto legislativo en el 2004 dio

⁴⁵³ Según Adam Isacson (2010: 119), “no se ha captado la opinión de muchos demócratas tiene de la figura de Álvaro Uribe. La mayoría del partido viene de una base sindical, del activismo político, de la academia, de las iglesias cristianas y judías centroizquierdistas. Cuando piensan en América Latina, muchos de ellos rememoran su oposición a las políticas de Ronald Reagan en Centroamérica durante los años 80... Aunque parezca un estereotipo injusto, esa es la lente a través de la cual muchos demócratas ven a Álvaro Uribe. Infortunadamente Uribe cabe demasiadas veces dentro del estereotipo. Sus frecuentes ataques verbales en contra de los defensores de derechos humanos colombianos, tildándolos de “terroristas”, les recuerda a muchos demócratas veteranos de los años ochenta a personajes como Pinochet”.

lugar a negociaciones con cada uno de los congresistas con resultados poco óptimos para la salud institucional del país y la propia viabilidad de la propuesta.

De allí que la estrategia adoptada para llevar adelante el proyecto re-reeleccionista fuera la recolección de firmas con el objetivo de presentar el proyecto de referendo al Congreso, el cual para ser aprobado requería de una mayoría simple de votos del cuerpo legislativo. A finales de año, se intensificó el debate acerca del tercer periodo, puesto que el proyecto de referendo (con sus cuatro millones de firmas) comenzó su tránsito legislativo. A pesar de los cuestionamientos realizados por la oposición, que impugnó las inconsistencias en la financiación de la recolección de firmas y la violación a límite de financiación total que eran parte de los requisitos legales y constitucionales que debían cumplirse para poder llevarlo adelante, el proyecto continuó por el camino emprendido. El 2009 sería el año clave para la viabilidad del proyecto de re-reelección de Álvaro Uribe. De eso tratará el próximo ítem.

Recapitulando, luego de los éxitos obtenidos por el gobierno en la implementación de su PSD, la administración Uribe sufrió una embestida en dos los RP generados durante su acción de gobierno. Por un lado, la estadística en el combate contra la guerrilla, que se vio cuestionada por aparición de los “falsos positivos”, y por otro lado la controversia de la “Yidispolítica” en torno a la aprobación del acto legislativo de 2004, que dio lugar a la reelección presidencial. El escándalo originado alrededor de los “falsos positivos” hirió la credibilidad de los éxitos militares de la política oficial, aunque no afectó la figura presidencial. La popularidad de Uribe (RP de apoyo popular/ ciudadano) se mantuvo en los niveles históricos a pesar de que se iba conociendo las macabras acciones de algunos integrantes del ejército. La “Yidispolítica”, a su vez, generó una discusión en torno a la legitimidad de la reelección, pero la sociedad no vislumbró una acción ilícita por parte del primer mandatario quien desde un primer momento propuso la realización de un plebiscito para que el pueblo decidiera sobre el particular.

Por último, la asunción del presidente Obama en EEUU configuró un nuevo escenario político en la relación bilateral. Los encontronazos entre el Congreso norteamericano, dominado por los demócratas desde 2007, y el líder colombiano, habían alejado la concreción del TLC y puesto en suspenso la continuidad del financiamiento militar dentro de la lógica en que se había desarrollado hasta ese momento.

9.2. Un presidente con abundantes recursos de poder pero sin re-re

Este ítem analiza el año 2009 a partir de los sucesos previos al frustrado referendo reeleccionista. En este sentido, se observan, por un lado, las denuncias judiciales en torno al espionaje realizado por Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) y los convenios entablados con EEUU alrededor de las siete bases colombianas y su impacto a nivel regional. Por otro lado, se examinan las peripecias del proceso de reforma constitucional en vista a la aprobación legislativa y judicial del referendo para una nueva reelección presidencial.

Hacia la frustrada reelección

El 2009 fue para el presidente Uribe el año decisivo para la prolongación de su proyecto político. La inhabilitación constitucional que pesaba sobre su continuidad en el poder llevó al primer mandatario a insistir en la viabilidad de un referendo popular para que fuera la propia sociedad la que se expidiese a favor de un tercer mandato. La estrategia presidencial (RP) apuntaba a que el parlamento aprobase la iniciativa popular del referendo y que la Corte Constitucional diera el visto bueno para la realización del mismo. A pesar de que los tiempos entre la hipotética aprobación judicial y la elección de mayo de 2010 eran sumamente escasos, Uribe insistió en la propuesta de reforma constitucional para forzar un tercer mandato. Sin embargo, las peripecias políticas durante ese tiempo continuaron y la controversia de su PSD se instaló una vez más en la opinión pública.

El DAS, el principal centro de inteligencia estatal de Colombia volvía a ser noticias tras el affaire de octubre del 2005 que había implicado la renuncia de Jorge Noguera. Luego de una denuncia de la revista *Semana*⁴⁵⁴ sobre una intensa actividad de destrucción de documentos confidenciales, archivos de voces y grabaciones en la propia sede de la central de inteligencia, se inició un proceso judicial conocido como las “ChuzasDAS”. La investigación realizada por la justicia se inició luego de que se alertara sobre un intenso e inusual movimiento en el interior de la Dirección tras el anuncio del presidente Uribe de designar a Felipe Muñoz como nuevo director de la agencia. La información destruida o

⁴⁵⁴ Revista *Semana* 21 de febrero de 2009. En línea en: <<http://www.semana.com/nacion/das-sigue-grabando/120991-3.aspx>>.

llevada a la oficina de Contrainteligencia contenía datos sobre una gran variedad de personajes opositores al gobierno que se hallaban en la mira del DAS. Entre ellos, se encontraban magistrados de la CSJ, periodistas críticos del gobierno, integrantes de diversas organizaciones de derechos humanos, políticos de la oposición, en su mayoría del Polo Democrático, y militares, fiscales, y miembros del gobierno, quienes desde hacía varios meses se encontraban bajo el monitoreo del organismo de seguridad.

El escándalo desatado luego de esas revelaciones volvía a poner en el centro de la opinión pública al organismo creado por decreto 643 en el 2004, que tenía como función producir “la inteligencia del Estado”, y que en el pasado había sido señalado de servir de fuente de información para los carteles del narcotráfico y el paramilitarismo. Las investigaciones periodísticas, realizadas durante los años 2008 y 2009 habían revelado memorandos y órdenes ilegales de seguimiento a magistrados de la CSJ, así como transcripciones de conversaciones y correos electrónicos de periodistas y políticos que luego fueron corroboradas por la Fiscalía General de la Nación (FGN). En ese marco, la FGN encontró material producido en la propia DAS que confirmaba las tareas de interceptación de correos electrónicos, elaboración de informes biográficos completos de los investigados, que incluían su filiación política, hasta los aspectos más íntimos de las vidas personales. Se incluían, asimismo, reportes detallados de los bienes y cuentas bancarias de los implicados, que se habían intentado ocultar o eliminar (Rettberg, 2010: 266).

La destrucción de pruebas y el traslado a la oficina de Contrainteligencia entre el 19 y el 21 de enero, a tres días de la designación de Felipe Muñoz como nuevo director del DAS, se explicaba a partir de las graves anomalías que ya se habían filtrado en la opinión pública y que la nueva administración pondría en evidencia una vez iniciado su mandato. Además del temor que generaba la existencia dentro de la Dirección de sectores que proveían de datos a distintas bandas criminales, ciertos informes de prensa sugerían que desde la propia presidencia se estaba solicitando información. Las acusaciones sobre el primer mandatario fueron vertidas por la Corte Suprema, quien calificó al escándalo como “una empresa criminal dirigida desde la Casa del Nariño”⁴⁵⁵, en un nuevo round entre ambos poderes.

⁴⁵⁵ El Público, en línea en: <<http://www.publico.es/internacional/305801/el-supremo-acusa-a-uribe-de-espiar-a-jueces-y-politicos>>.

La FGN, luego de ordenar el allanamiento de las instalaciones del DAS para incautar elementos que brindaran información sobre las actividades delictivas del organismo, dictó diez ordenes de captura contra directivos que trabajaron en esa entidad desde el año 2004, entre ellos tres ex directores. A su vez, puso la lupa sobre más de 40 funcionarios del DAS y logró recuperar gran cantidad de información del Grupo Especial de Inteligencia G- 3, quien se encontraba cuestionado por su accionar delictivo. Al nuevo director del DAS no le quedó otra alternativa que entregar numerosas carpetas que se encontraban en algunas oficinas, evidenciando que desde la nueva administración se colaboraría con la justicia. Al referirse a lo encontrado durante la investigación, el fiscal Mario Iguarán expresó que le “causaba preocupación, en atención al hedor que él expide”⁴⁵⁶. De acuerdo a Orozco Tascon (2010: 107), uno de los hallazgos más escandalosos era el doble papel que cumplían los escoltas asignados a resguardar la vida de los reporteros dentro del Programa de Protección a Periodistas en el Ministerio del Interior, quienes terminaban siendo los encargados por sus jefes de espiar los movimientos de los “protegidos” y de filtrar los datos confidenciales que obtenían desde el lugar privilegiado que ocupaban como custodios.

El escándalo desatado en torno a las “Chuzadas” comprometió una vez más la credibilidad del gobierno de Uribe frente a los EEUU. El propio presidente debió concurrir a la embajada de ese país a dar explicaciones sobre el espionaje masivo a opositores, jueces y periodistas, prometiendo el reemplazo del DAS por una agencia más pequeña y eficaz. La preocupación norteamericana se encontraba en que varias de sus agencias de inteligencia (CIA, DEA, FBI, entre las más importantes) colaboraban activamente con el DAS, por lo que debieron en forma inmediata retirar el financiamiento a esa entidad. El debate alrededor de la supervivencia del DAS llevó al primer mandatario a anunciar la clausura de esa institución⁴⁵⁷. Luego del escándalo, las relaciones con EEUU volvieron a entrar en una meseta.

La administración Uribe había mantenido estrechas relaciones con EEUU durante toda la presidencia de Bush, especialmente en la política de seguridad, que luego del

⁴⁵⁶ Hollman Morris (2010: 169).

⁴⁵⁷ Finalmente, el 31 de octubre de 2011 el presidente Santos expidió el decreto 4057 mediante el cual se suprimió esa entidad.

ascenso de Obama a la Casa Blanca habían entrado en un *impasse* que se mantuvo hasta mitad del año 2009. A raíz de una propuesta formal de fortalecimiento de la cooperación militar con los Estados Unidos, la relación con el país del norte volvió a enderezarse en una dirección amistosa. El proyecto del gobierno colombiano de permitir la utilización de siete de sus bases por parte de los militares norteamericanos se afincaba en la lucha contra el narcotráfico y la delincuencia. Esto no implicaba, según el canciller Bermúdez, la creación de bases norteamericanas en el continente, ya que “hemos sido muy claros desde hace mucho tiempo y que no quepa duda: aquí no habrá un reemplazo ni habrá una nueva base militar... que se olviden los que quieren interpretar esto como algún riesgo [militar] para los países vecinos... Aquí lo que vamos es a luchar contra el narcotráfico”⁴⁵⁸.

A pesar de la propuesta al Departamento de Estado norteamericano, cuando Uribe volvió a Washington para conocer oficialmente al presidente estadounidense en junio de 2009, en su aparición pública con Obama en la Casa Blanca la distancia con el nuevo mandatario resultó evidente, y la respuesta inesperada de Obama sobre la reelección: “En nuestro país ocho años son suficientes”, fue el principal titular de la visita (Iscason, 2010: 121).

En agosto de 2009 se aprobó finalmente el acuerdo de cooperación entre EEUU y Colombia que permitió al primero realizar operaciones en siete bases militares: Malambo, en el departamento norteño del Atlántico; Apiay, en el departamento de Meta; la estratégica base Palanquero, en Magdalena Media; Bahía Málaga y Cartagena, en el Pacífico, y en los centros de entrenamiento de Larandia y Tolemaida en el departamento de Caquetá. En virtud de acuerdos rubricados con anterioridad, Colombia era de los pocos países del mundo que no habían firmado con Estados Unidos un acuerdo sobre “Estatus de las Fuerzas”, por lo que “reconocía el derecho del gobierno anfitrión de aplicar su jurisdicción, a diferencia de una inmunidad militar similar a la diplomática”⁴⁵⁹. La inversión de 40 millones de dólares en las bases daría también mayor capacidad a las Fuerzas Armadas colombianas durante los diez años prorrogables de la vigencia del acuerdo, incrementando en más de 6 mil millones de dólares la asistencia financiera de EEUU bajo el Plan Colombia (Rettberg, 2010: 269).

⁴⁵⁸ Revista *Semana*, 15 de abril de 2009. En línea en: <<http://www.semana.com/relaciones-exteriores/canciller-colombia-no-tendra-base-militar-eeuu/122865-3.aspx>>.

⁴⁵⁹ Leal Buitrago (2006: 13).

La decisión soberana del Estado colombiano provocó la oposición de varios de los países de la región, que observaban con preocupación la nueva “intervención” militar estadounidense en el hemisferio. En una reunión extraordinaria de la Unión de Naciones Sudamericanas (UNASUR) celebrada de forma urgente en Bariloche, Argentina, a finales de agosto de 2009, la medida colombiana fue criticada por los países integrantes del organismo por temor a que esas bases se convirtieran en una reproducción de la base de Manta, en Ecuador, que hacía poco tiempo había sido clausurada por el presidente Correa. A pesar de que Uribe explicó los términos del acuerdo con EEUU como una decisión soberana y que no acarrearía peligro para los países vecinos, en especial Venezuela y Ecuador, que comparten frontera con Colombia, la reacción de estos gobiernos fue la de una vehemente oposición. La posición de moderación brasilera impidió que aumentara la tensión del enfrentamiento y la Cumbre culminó sin inconvenientes, pero mostrando los distintos posicionamientos internacionales de los países de la región. En ese contexto, Uribe emergía como una figura alineada con los intereses de EEUU, uno de los recursos de poder del presidente colombiano a nivel internacional, y generaba una presencia incómoda en el conjunto de países sudamericanos que en mayor o menor medida no aplicaban el alineamiento incondicional con la Casa Blanca.

De regreso de la cumbre de UNASUR, el presidente colombiano contrajo el virus de la gripe AH1N1. Una vez recuperado, avanzó en nuevas medidas orientadas a apuntalar la relación con EEUU luego de superar las pruebas a las que fue sometido en el organismo regional. En ese sentido, se enmarcaba la decisión en septiembre de 2009 de certificar el empeño en derechos humanos de las Fuerzas Armadas colombianas (Iscason, 2010: 122) y el tratado firmado, finalmente, el 30 de octubre por el canciller colombiano Jaime Bermúdez y el embajador de Estados Unidos, William Brownfield.

En un contexto de mayor acercamiento bilateral, EEUU continuó siendo el principal inversor y el que mayores importaciones recibió de Colombia. En el marco de fuerte contracción que revelaba el comercio mundial durante el año 2009, la economía local pudo mostrar resultados satisfactorios en dos sectores en los cuales la inversión extranjera creció de manera notable: el de minas y canteras y el de servicios (Rettberg, 2010: 253). En ese sentido, según datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), “durante el año 2009 la economía colombiana creció 0,4% en relación con el año 2008. De

igual forma, en el cuarto trimestre el PIB creció en 2,5% comparado con el mismo trimestre del año anterior”, evidenciando que a pesar de la crisis financiera internacional, Colombia pudo mantener una inversión aceptable, “principalmente, en el sector de la construcción, que creció 12,8%, y el sector de minas y canteras, que creció 11,3%”⁴⁶⁰.

La confianza inversionista, uno de los pilares de la política económica y de seguridad del gobierno, tampoco se vio resentida. Según el DANE, “durante el año 2009, el resultado acumulado de los servicios de intermediación financiera, seguros y servicios conexos (enero a diciembre) respecto a 2008, presentó un aumento de 3,1%, explicado por aumentos de los servicios de intermediación financieros... de los servicios de seguros en 4,5%, de los servicios auxiliares de intermediación financiera en 16,9% y a la disminución de las comisiones y otros servicios de administración financiera en 11,9%”⁴⁶¹. En ese sentido, al analizar la crisis el primer mandatario advertía que “nosotros tenemos fortalezas y riesgos en esta crisis. Entre las fortalezas hemos aumentado las reservas, las coberturas bancarias, el seguro de depósito, los ahorros; tenemos confianza inversionista... veníamos creando empleo y formalizando empleo, pero ahora tenemos riesgos mayores en ese aspecto. Y por eso tenemos políticas anticíclicas”⁴⁶². La crisis, de todas formas, se sintió en la tasa de empleo que disminuyó en 0,5%, en la caída de las exportaciones y en la disminución del 74% del intercambio comercial con Venezuela (que junto a EEUU constituyen los dos mayores mercados de colocación productiva colombiana), esto último acentuado por los conflictos políticos entre ambos líderes.

A pesar de que la Legislatura del 2009 estuvo condicionada durante el año por la viabilidad del referendo que abriría las puertas a un tercer mandato presidencial, se aprobaron distintas reformas. Una de ellas fue el Acto Legislativo N° 1 de 2009, conocida como la Reforma Política, que incorporaba distintos elementos que tendrían consecuencias sobre los partidos. La reforma añadía la figura de la “silla vacía”, que no había podido ser aprobada en la legislativa anterior, y que apuntaba a la imposibilidad de reemplazo de la banca parlamentaria de quien fuera capturado por delitos ligados a la promoción de grupos armados ilegales, del narcotráfico o de crímenes de lesa humanidad. El Acto Legislativo,

⁴⁶⁰ Datos obtenidos en base a la Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas de Colombia, en línea en: <http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/pib/cp_PIB_IVtrim09.pdf>.

⁴⁶¹ Datos obtenidos en base a la Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas de Colombia, en línea en: <http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/pib/cp_PIB_IVtrim09.pdf>.

⁴⁶² Filmus (2010: 103).

por otra parte, aumentaba el umbral para la obtención de la personería jurídica para competir por la distribución de curules en el Senado del 2% al 3%. Además, se insistía en la prohibición de la doble militancia: quien siendo miembro de una agrupación política decidiera aspirar por otro partido a una banca en la siguiente elección, sería obligado a renunciar con doce meses de antelación a su curul (Castro Agudelo, 2011: 76-77). Y por último, la reforma contemplaba una modificación que tendría efectos directos sobre el sistema de partidos al permitir que, por un periodo de dos meses, que se extendía del 14 de julio al 14 de septiembre de 2009, todos los integrantes de los cuerpos colegiados de elección popular cambiaran de partido político.

Esto implicó una reconfiguración del sistema de partidos en el Senado y permitió a varias fracciones emigrar hacia los partidos de la coalición del primer mandatario. La lógica que imperaba en ese desplazamiento intra partidario se asentaba en la necesidad de esos parlamentarios, aspirantes a su reelección, de contar con el respaldo del presidente para el nuevo ciclo electoral de marzo de 2010, un RP de apoyo popular/ ciudadano generado por la propia popularidad del primer mandatario en la acción de gobierno. El Partido de la U, que incrementó su bancada en diez nuevos miembros (pasó de los 20 elegidos en la parlamentaria de 2006 a 30, luego de esta reforma) y el Partido Conservador (de 18 a 22), ambas agrupaciones que formaban la coalición uribista, fueron las estructuras partidarias que mayormente se vieron beneficiadas por esta alternativa. El aumento de los recursos de poder institucionales del presidente en cantidad de bancas durante esta última etapa ratificaba la popularidad de Uribe y las posibilidades concretas del primer mandatario de avanzar hacia una nueva reforma constitucional, o al menos la de ungir a un candidato con grandes posibilidades de victoria.

Luego de siete años de gobierno, el líder colombiano continuaba concitando una adhesión histórica en torno a su figura (RP de apoyo popular/ ciudadano) y a los éxitos de su PSD (RP de estrategia política). El estilo presidencial, basado en la concentración del poder y en la escasa delegación de funciones, como se observó a lo largo de esta investigación, le permitió acumular RP que lo llevaron a convertirse en un presidente con poder suficiente para pelear un histórico tercer mandato. Esta adhesión popular provenía, por un lado, de un ejercicio de poder basado en una escasa mediación institucional entre su persona y la sociedad, y, por el otro, de la eficacia en la lucha contra los grupos ilegales.

Los noventa Concejos Comunitarios realizados durante el 2009, superando los 300 efectuados hasta ese momento, fue otro de los recursos de poder de estrategia política de índole comunicacional utilizados por Uribe para acercar el Estado a las distintas regiones del país y a la ciudadanía, y convirtió al primer mandatario en una figura omnipresente en el escenario político nacional. Con el nítido objetivo de lograr un nuevo mandato presidencial, Uribe buscó capitalizar el RP de apoyo popular/ ciudadano con referencias a un “estado de opinión”, convertida en una suerte de estadio superior al constitucional. En ese sentido, el presidente expresaba que “diría que Colombia está en la fase superior del Estado de Derecho, que es el Estado de Opinión. Aquí las leyes no las determina el presidente de turno. Difícilmente las mayorías del Congreso. Todas son sometidas a un riguroso escrutinio popular, y finalmente a un riguroso escrutinio constitucional”⁴⁶³.

Para agosto de 2009, el Senado colombiano aprobó el proyecto de ley de referendo para habilitar un tercer mandato de Uribe. Luego de la aprobación de la Cámara Alta, el proyecto pasó a la Cámara de Representantes, y el 1° de septiembre se aprobó por 85 votos a favor (superando en dos la mayoría absoluta requerida) y 5 en contra, con la abstención de los dos principales partidos opositores, el PL y El Polo Democrático. El control de un RP institucional, como era el Parlamento, le permitió al presidente sortear en forma exitosa los requerimientos formales del legislativo para avanzar en su proyecto reeleccionista. La maratónica sesión de quince horas, que debió extenderse hasta la madrugada luego de un decreto presidencial convocando a sesiones extraordinarias, permitió que el texto fuese aprobado sin modificaciones. Es decir, la urgente necesidad del primer mandatario por una aprobación parlamentaria veloz, debido al poco tiempo existente entre la aprobación legislativa y judicial requerida y la propia elección presidencial, dio lugar a que el proyecto se sancionara en un contexto no exento de polémica (el decreto llevado por el ministro Valencia para que continuara con sesión generó rechazos de varios sectores sociales, no sólo partidarios) y con una fuerte oposición que observaba que el apuro presidencial entorpecía el debate y cualquier posibilidad de negociación. El referendo aprobado y por el que se sometería a consulta a la sociedad tenía el siguiente texto: “Quien haya sido elegido

⁴⁶³ Discurso del presidente Uribe durante la cena ofrecida en honor a los príncipes de Asturia. En línea en: <<http://web.presidencia.gov.co/sp/2009/mayo/27/22272009.html>>.

a la Presidencia de la República por dos periodos constitucionales, podrá ser elegido únicamente para otro periodo”.

Sin embargo, por tratarse de una enmienda constitucional, el proyecto reeleccionista requería para su realización efectiva de un pronunciamiento de la Corte Constitucional. A pesar de que con ese poder del Estado las relaciones políticas del ejecutivo eran mejores que las de la CSJ, no se esperaba una fácil habilitación constitucional. De hecho, el trámite del referendo había sido criticado por varias razones a pesar de su aprobación legislativa, y se preveía una votación reñida al interior de la Corte Constitucional. Las críticas al proyecto (Rettberg, 2010: 264) apuntaban, en primer lugar, a la financiación de la campaña mediante la cual se consiguieron los apoyos para la iniciativa popular que generó sospechas y dudas acerca de la necesaria transparencia de los orígenes, montos y motivaciones de los dineros. En segundo término, a la redacción del texto del referendo, el cual se prestó a interpretaciones ambiguas, llevando a la necesidad de convocar una Comisión Accidental de Conciliación. Y finalmente, el texto aprobado dejaba, por su propia ambigüedad en la redacción, la posibilidad de reelección para 2014 y no 2010, como era la preferencia del gobierno. A su vez, varios vicios de forma⁴⁶⁴ motivaron la denuncia penal presentada ante la Corte Suprema de Justicia por un legislador del opositor PD, alegando “prevaricato por acción”.

La necesidad de Uribe por convertir su pelea por un tercer mandato en una realidad anclada en la “opinión del soberano” como última instancia, le permitiría construir un argumento que ubicaba a la Constitución por debajo de los deseos de la ciudadanía. E insistía, como venía desarrollando en los meses previos a la aprobación parlamentaria, en que en “los Estados de opinión y yo creo que la característica más importante del Estado colombiano es que es un Estado de opinión- el control más importante es el de opinión. En

⁴⁶⁴ Eduardo Cifuentes (2009) resume los vicios de la siguiente manera: “(1) mientras que la Cámara “incorporó” en el proyecto de ley el mismo texto de referendo proveniente de la iniciativa ciudadana, el Senado “introdujo” un texto diferente, el cual además había sido previamente negado en la plenaria de la Cámara (C.P. art. 378); (2) en relación con el texto que tendría el referendo de origen ciudadano, no podrían surgir en estricto rigor “discrepancias” con el articulado aprobado en las dos Cámaras, lo que limita la competencia de las comisiones de conciliación y de las plenarios de las dos Cámaras (Ley 5ª de 1992, art. 186 y artículos siguientes); (3) el segundo debate del proyecto en la Cámara de Representantes se produjo a las 3 y 40 de la madrugada del día 17 de diciembre, luego de que se expidiera y leyera un decreto del presidente expedido veinte minutos antes de que expirara el día anterior, esto es, antes de que el Congreso entrara en receso y sin haberse publicado en el Diario Oficial (Decreto 2150 de 1995 y ley 489 de 1998); (4) el grado de “deliberación” de un proyecto de tanta significación ha sido inversamente proporcional a su importancia y, en ciertas etapas del trámite, incluso, inexistente (imposición de las mayorías al margen de toda discusión)”.

el Estado de leyes hay controles políticos de los congresos, las asambleas, los concejos, controles penales, controles administrativos, controles fiscales, y se ignora el más importante de todos, que es el control de opinión⁴⁶⁵. En ese marco, la actividad legislativa del último semestre de 2009 y principios de 2010 estuvo caracterizada por la espera en torno al pronunciamiento de la Corte Constitucional acerca de la constitucionalidad del referendo, y la mayoría de los congresistas centraron su actividad en organizar sus campañas en vistas a las elecciones legislativas de marzo del 2010.

Finalmente, el 26 de febrero de 2010, a escasos meses de la elección legislativa y presidencial, la Corte Constitucional declaró, por 7 votos a 2, inexecutable la tercera reelección, por vicios en su trámite. Los argumentos principales esgrimidos por la Corte para declarar anulado el referendo y no permitir su realización fueron entre otras razones, las violaciones de los topes de financiación (la existencia de aportes individuales superiores hasta casi 30 veces lo permitido, contribuciones estas realizadas por organizaciones no facultada para ello); el transfuguismo (cambio deliberado de Partido en torno a la reforma de 2009); la ilegalidad, por no haberse publicado con anterioridad, en el llamado a sesiones extraordinarias del mismo día de la aprobación en la Cámara baja; la modificación en el texto de la pregunta del referendo (ya que tal cambio entrañaba la posibilidad de proponerle al pueblo la segunda reelección inmediata, mientras que el texto original refería una reelección mediata o por periodo interpuesto); y la falta de certificación por parte del Registrador (la cual inhibía la creación del trámite legislativo y viciaba de inconstitucionalidad todo el procedimiento adelantado en el Congreso⁴⁶⁶).

Las abundantes irregularidades del trámite del referendo no pudieron superar la Corte Constitucional. Sin embargo, a pesar de la negativa de la justicia, el obstáculo al proyecto reeleccionista no provenía en soledad de la oposición política colombiana. En el interior de la coalición gobernante existían también voces que se oponían a una nueva reelección de Uribe (de aprobarse, hubiese sido la primera vez en la historia que un presidente constitucional colombiano obtenía una segunda reelección consecutiva). En ese sentido, en una entrevista con el autor de esta investigación, el entonces canciller Jaime

⁴⁶⁵ Discurso del presidente Uribe en el Congreso Colombiano de Publicidad. En línea en: <<http://web.presidencia.gov.co/sp/2008/octubre/01/22102008.html>>.

⁴⁶⁶ Los argumentos esgrimidos por la Corte se encuentran resumidos en el diario *El Tiempo* 26 de febrero de 2010. En línea en: <<http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-7310167>>

Bermúdez observaba que “muchos veían con malos ojos la segunda reelección, que de haberse realizado, por otra parte, le hubiera reportado el triunfo a Uribe. Yo creo que en instituciones significativas del país (la Corte, la Prensa, en el interior del gobierno) muchos estábamos en desacuerdo. De hecho, como en mi caso, el presidente sabía que yo no apoyaba la reelección”.

Culminaba entonces para el primer mandatario la posibilidad de un tercer mandato presidencial. Por primera vez en la historia el país se iniciaba la campaña más corta para una elección presidencial. Ya fuera del camino, Álvaro Uribe apoyó la candidatura de su ex ministro de Defensa, Juan Manuel Santos. Con una importante suma de recursos de poder, el líder colombiano dejaba, luego de 8 años, la Casa del Nariño con índices de seguridad y económicos sumamente alentadores.

Recapitulando, durante los primeros meses del año 2009 el gobierno sufrió los embates políticos y judiciales sobre el área de inteligencia del Estado. Las denuncias, primero periodísticas y luego judiciales, sobre el espionaje realizado por el DAS a grupos opositores, fue otro de los escándalos que debió superar el primer mandatario durante esta última etapa del gobierno. Por otra parte, la instalación de las siete bases norteamericanas en suelo colombiano generó otro conflicto con los países vecinos que el primer mandatario pudo sortear durante un encuentro regional en el marco de Unasur. En ambos casos, fueron los RP generados durante los ocho años de gestión, basados en una importante popularidad (RP de apoyo popular/ ciudadano) y un discurso efectivo y convincente (RP estrategia política –comunicacional-), los que acudieron en la solución de las controversias suscitadas.

Estos recursos presidenciales fueron puestos a prueba en vistas a la aprobación legislativa y judicial del referendo para una nueva reelección presidencial. Las dos cámaras parlamentarias aprobaron la posibilidad de llevar a la sociedad el referendo reeleccionista, pero fue la Corte Constitucional la que resultó una barrera de los deseos presidenciales. La Corte alegó un buen número de irregularidades para declarar inasequible al referendo e impidió que el primer mandatario, con recursos de poder suficientes y con un fuerte apoyo popular, pudiera volver a presentarse en la elección presidencial del 2010.

6.2. Luego de ocho años de uribismo

Este ítem se concentra en el análisis de los datos económicos, sociales y de seguridad luego de ochos años de mandato de Uribe, e intenta hilvanar las razones de la fortaleza del LP del mandatario colombiano a partir de los resultados obtenidos, fundamentalmente, en las áreas de seguridad (principal demanda ciudadana), de economía y en el plano de lo social

La fortaleza del liderazgo presidencial de Álvaro Uribe: la ampliación de derechos civiles

Luego de ocho años ininterrumpidos de gobierno, Álvaro Uribe se convirtió en el jefe de Estado colombiano que más tiempo permaneció en la presidencia de su país desde la independencia de España en 1831.

A lo largo de esta investigación, hemos identificado los principales recursos de poder con los que contó Uribe en el transcurso de sus dos mandatos como fueron las Fuerzas Armadas y el apoyo popular/ ciudadano (expresado en los importante índices de popularidad y el respaldo electoral), como así también su control sobre el parlamento bicameral colombiano, los medios de comunicación, la mayoría de gobernadores (recursos de poder institucional) y empresarios (RP social) y una parte del poder judicial, a excepción de la CSJ.

En este último capítulo analizaremos el contexto socioeconómico en donde se desarrolló la acción política de Uribe, además de los resultados obtenidos por el primer mandatario en la lucha contra los grupos ilegales que explican en gran parte la fortaleza de su LP. Como se expresó en el capítulo final correspondiente a Chávez, pese a que esta investigación no tiene como propósito dar una respuesta a qué causas explican la fortaleza de los dos LP estudiados, sino el de analizar y describir los RP que ambos utilizaron durante el ejercicio del poder, aquí se intenta entender las razones que subyacen al por qué del apoyo ciudadano.

Desde el punto de vista económico, Colombia tuvo, durante los años de gobierno de Uribe, un crecimiento ascendente en la mayoría de las variables analizadas. Si se observan detenidamente los principales datos durante el periodo 2002- 2010, podemos advertir que el PBI evidenció un importante crecimiento durante las dos presidencias de Uribe. La

recuperación de la actividad económica, luego de la crisis de 1999, fue incrementándose a lo largo del tiempo. En el año en que Uribe arribó al gobierno, el PBI creció un 2,5%, para pasar a 4,6% en el 2003, a 4,7% en el 2004, a 5,7% en el 2005 y a 6,9% en el año de la reelección presidencial. En el 2007 la actividad económica creció como no lo había hechos en los años previos, y el PBI se situó en el 7,5%, para descender en los años 2008 y 2009 al 2,4% y 0,4% respectivamente, como producto de la crisis mundial originada en los EEUU y que afectó en forma directa en la economía colombiana. Durante los años en los que el PBI descendió, fueron el cuarto trimestre de 2008 y los primeros tres trimestres del 2009 los periodos en los que la economía local experimentó tasas negativas de crecimiento (-1% en el último trimestre de 2008 y -0,5%, 0,3% y 0,2% en los del 2009)⁴⁶⁷. El PBI per cápita mostró una evolución promedio del 13,4% durante el tiempo de estudio, pasando de 2.247 a 5.990⁴⁶⁸.

La confianza inversionista, proclamada como uno de los pilares de la administración Uribe como una condición indispensable para el desarrollo del país, también mostró resultados positivos. Al inicio del gobierno de Uribe la inversión como porcentaje del PBI se encontraba en el 17,6%, para alcanzar en el año 2008 el 27,5%. Este aumento de la inversión en el país puede observarse, a su vez, si se toma en cuenta la extranjera en el periodo, que se incrementó, según el Banco de la República de Colombia, de 1.025 millones de dólares en el 2002 a 4.482 millones en el 2008, siendo la minería y el petróleo las actividades mas convocantes (Yamhure Fonseca, 2009: 109). Este resultado se explicaba no sólo a partir de cuestiones ligadas a la capacidad de inversión de los agentes económicos internacionales, sino también por una política de incentivo a la misma, basada en grandes exenciones, rebajas tributarias y disminución del impuesto a la renta.

Las “gabelas”, como fueron conocidas durante su presidencia esos “incentivos tributarios”, se incrementaron durante las dos presidencias de Uribe bajo la concepción de que cuanto mayor fuera la exención, más se aumentaría la inversión. En ese sentido, el líder colombiano asumía esta estrategia al declarar en una de las sesiones inaugurales en el Congreso que “el gobierno prefería recortes en el gasto público que producen sacrificios en

⁴⁶⁷ Datos obtenidos en base a la Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas de Colombia, en línea en: <www.dane.gov.co>.

⁴⁶⁸ Garzón Triana (2011: 73). Fuente: DANE, Banco de la República, FMI, cálculos DNP con información disponible a mayo de 2010.

el corto plazo, que bandazos tributarios que afectan a la inversión y derivan en sacrificios a mediano y largo plazo”⁴⁶⁹. La deducción del 40% para la adquisición de activos productivos (que más tarde en plena crisis se disminuyó al 30%), tarifas impositivas superiores al 15% a las empresas que tuvieran “zonas francas”, disminución del impuesto a la renta (perdiendo su progresividad) fueron parte del núcleo de las políticas tributarias del gobierno. El aumento de la inversión privada y extranjera en Colombia contrastaba con los años anteriores, y esto obedecía fundamentalmente al clima de seguridad que comenzaron a percibir los agentes económicos a partir de la llegada al gobierno de Álvaro Uribe. Sin lugar a dudas los éxitos obtenidos por el gobierno en el campo de la seguridad se observaban de manera nítida en cualquiera de los cuadrantes analizados.

Para el primer mandatario, la seguridad implicaba una condición necesaria para crear un clima de inversión. En ese marco, la prioridad del gobierno estuvo enfocada en resolver esta importante demanda ciudadana que durante décadas había invadido territorio colombiano y en la que los gobiernos precedentes al de Uribe, como se observó en el primer capítulo de esta investigación, habían obtenido pobres resultados.

La PSD desarrollada por el gobierno (RP de estrategia política) implicó la lucha frente a los dos grandes grupos ilegales que se encontraban desplegados por todo el territorio: las FARC y los paramilitares. Las estrategias políticas de la administración Uribe ante ambos grupos fueron disímiles, pero implicaron una sustancial reducción de la violencia. Si se toman en cuenta las estadísticas, podemos observar que los atentados terroristas, que en el año 2002 se encontraba en los 1.645, disminuyeron sistemáticamente año a año hasta alcanzar la cifra de 207 cuando Uribe entregaba el poder (Garzón Triana, 2011: 73). En tanto fuentes oficiales y no oficiales coinciden en afirmar que existió una importante disminución de la cantidad de homicidios, que van desde los 28.837 de 2002 a 16.296 en el 2009, una reducción de los homicidios políticos en un 69% y una disminución de las acciones bélicas en un 81%⁴⁷⁰. En tanto que los secuestros extorsivos, práctica

⁴⁶⁹ Discurso Presidencial de Álvaro Uribe en la inauguración de la Legislatura, 20 de julio de 2008. En Juan Camilo Restrepo (2009: 46).

⁴⁷⁰ Los datos pertenecen tanto a datos oficiales como no oficiales. De los primeros Departamento Nacional de Planeación “Logros del gobierno de presidente Uribe”, en (Yamhure, 2009: 105- 141) y de los segundos tomé como referencia los datos provisto por el Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP), en Vázquez, Teófilo (2010).

generalmente utilizada por la guerrilla, disminuyó de 2.882 del año 2002 a 215 del primer semestre de 2008 (Yamhure, 2009: 120).

Todos estos datos evidenciaban un sustancial retroceso de la violencia y las acciones armadas de la guerrilla, como así también un poder mayor por parte de la fuerza pública para controlar las acciones de estos grupos. En este sentido, se debe indicar el aumento de la inversión y de efectivos durante los ocho años de gobierno de Uribe, como uno de los recursos de poder generados por el primer mandatario en sus dos mandatos. A pesar de que durante el gobierno de Pastrana se evidenciaron importantes cambios en la modernización de armamento y de equipos electrónicos e inteligencia, la inversión realizada por la administración Uribe en este campo fue muy importante. En ese sentido, los datos son elocuentes: la inversión en defensa y seguridad se incrementó en un 80% desde el año 2002 (588 millones de dólares) al 2009 (10.500 millones de dólares), lo que equivalía al 5,2 del PBI, una cifra muy superior al promedio latinoamericano de 1,6% del PBI y sólo superado en el mundo por Israel y Berundi (Cabrera Galvis, 2009:32). En el mismo sentido, el aumento de efectivos de la fuerza pública se incrementó, durante el periodo de estudio, en un 41%: 441 828 miembros, de los cuales solo las fuerzas militares sumaban un total de 238.004 efectivos (Quiroga, 2010: 12), dato que pone de relieve la fortaleza de las fuerzas de seguridad colombiana durante toda la gestión del líder antioqueño. Por otra parte, según información oficial, la guerrilla contaba al inicio del gobierno de Uribe con 20.600 combatientes, para pasar en junio de 2010 a una cantidad menor a 10.000, reportando entre bajas y reinsertados 18.821 guerrilleros (Quiroga, 2010: 12). A pesar de que las FARC mostraron durante el periodo un alto nivel de regeneración (y que la anterior cifra evidencia), la eficacia del ejército también fue alta en términos de bajas guerrilleras.

El proceso de desmovilización paramilitar encarado por el gobierno desde el año 2003 también mostró resultados positivos en términos de disminución de combatientes. Además de las extradiciones a los EEUU de sus principales cabecillas, hasta el primer semestre de 2008 se habían desmovilizado 16.565 integrantes de este grupo irregular (Yamhure, 2009: 115), aunque su presencia, en algunas regiones y bajo nuevos rótulos aún continúa hasta la fecha. De todas maneras, la incidencia de estos grupos ilegales no

presenta paralelo con el despliegue en cuanto a fuerza y control territorial de los años precedentes⁴⁷¹.

La tasa de promedio anual de homicidios por candidato en los municipios con presencia de las autodefensas en 2002 antes de desmovilizaciones mostraba un promedio de 52,3 para el periodo 2002-2005, para bajar a 37,8 para el lapso 2006-2009 (Garzón Triana, 2011: 67). Según la misma fuente, los cultivos ilícitos como fuente de financiamiento no sólo del paramilitarismo, sino también de la guerrilla, disminuyeron durante estos años en un 33% al bajar el área sembrada de 102.000 en el 2002 a 68.000 en el 2009. A partir del proceso de desmovilización, desarme y reinserción, hasta marzo del 2010 alrededor de 300.000 personas habían radicado formularios de reparación individual por vía administrativa, cerca de un 30% de la población colombiana reportó haber sido víctima en el transcurso del conflicto armado, un cuarto de la ciudadanía ha perdido un familiar por causa del conflicto, un 20% tiene un familiar desplazado y entre 4 y 5% tiene uno exiliado (Rettberg, 2010: 270). En el último discurso frente al Congreso, Uribe anunció que, como producto de la PSD, “más de 53.000 integrantes de grupos terroristas [se han] desmovilizado... De acuerdo con la Fiscalía, se han esclarecido 25.177 hechos criminales, cuya confesión está concluida y permitió relacionar 30.167 víctimas. Se han exhumado 2.719 fosas”⁴⁷².

Luego de ocho años de gobierno de Uribe, los datos son elocuentes y permiten observar un proceso de ampliación de derechos civiles muy valorado por la población. El control por parte del Estado de vastos territorios que anteriormente se encontraban en manos de estos grupos ilegales se evidencia como el dato saliente de los dos gobiernos uribistas. El Estado colombiano ha recuperado la soberanía sobre todo el territorio nacional y ya no existen en el país municipios controlados por la guerrilla ni los paramilitares (Cabrera Galvis, 2009, 25). Sin lugar a dudas, la PSD junto a los CC, como RP de estrategia política, fueron las principales razones de la recuperación del monopolio de la fuerza legítima en la mayoría de las zonas del país. La primera, en tanto, necesidad de

⁴⁷¹ Según la revista *Semana* un 12% de los desmovilizados ha retomado a las armas en forma de bandas criminales, lo que representa un promedio bajo para las características del conflicto colombiano. Revista *Semana*, 8 de enero de 2010. En línea en: <<http://www.semana.com/justicia/12-ciento-bacrim-desmovilizados-policia-nacional/133427-3.aspx>>.

⁴⁷² Discurso de Álvaro Uribe durante la instalación del Honorable Congreso de la República, 20 de julio de 2010. En línea en: <<http://web.presidencia.gov.co/sp/2010/julio/20/13202010.html>>.

recuperación por intermedio de las armas del poder administrativo y coactivo del territorio, y la segunda en cuanto a la presencia corporal del presidente manifestando en lo material la unidad de la región al poder monopólico del Estado colombiano. Y aquí radica la importancia del éxito de Uribe en la recuperación de derechos como la integridad física, la protección de bienes y el derecho de circulación por todo el país, entre los más demandados por la población colombiana⁴⁷³.

En el despliegue de esa estrategia, el primer mandatario debió recurrir a un proceso de centralización del poder, mediante la utilización de un importante número de recursos de poder institucional, financiero, de estrategia política y de apoyo popular/ ciudadano, para la recuperación de extensos territorios dominados con anterioridad por los grupos ilegales que daba como resultado la sensación de un Estado fallido (Ramírez Niño, 2011: 105). La presencia del Estado, corporizado en la figura presidencial, en cada rincón del país resultó ser la táctica política del primer mandatario para hacer sentir la presencia activa del Estado colombiano a lo largo del territorio. Es decir, esta presencia estatal “que si bien comenzaba con que la fuerza pública retomara territorios de los cuales le habían despojado, también pasaba porque el presidente y su gabinete recurrieran a estos lugares, generando un cambio en el imaginario del ejecutivo que dirige desde la capital pero que no tiene ningún tipo de relación con la base popular”⁴⁷⁴.

La recuperación territorial del Estado se convirtió en una de las políticas del presidente Uribe que resultó más valorada por la ciudadanía. En ese sentido, se observaba de qué manera la sociedad reivindicaba este RP generado por el primer mandatario durante su acción de gobierno. La alta popularidad de Uribe (RP de apoyo popular/ ciudadano), cuyo índice de aceptación nunca fue menor al 70% durante sus dos gobiernos, provenía, en mayor medida, de los éxitos en el plano de la seguridad pública. El índice de satisfacción en esta arena de gobierno alcanzó el 83% (Botero y Tickner, 2011: 6) en el último año de su

⁴⁷³ Según Paola Holguín, “el Presidente fue capaz de plantear a los ciudadanos con sencillez el esquema de su Gobierno y los principios fundamentales de su conducción estatal. Siempre decía que cuando uno se está cansando de repetir es porque lo están empezando a escuchar, entonces, su discurso de un Gobierno que quería ganar confianza basado en tres pilares: la seguridad democrática, la confianza inversionista y la cohesión social, en un marco de un Estado Comunitario, es decir, gerencial, participativo y descentralizado, caló hondo en el corazón de los ciudadanos, después de repetirse durante los ocho años de Gobierno”. Paola Holguín. Entrevista con el autor.

⁴⁷⁴ Ramírez Niño (2011: 105).

administración y se mantuvo constante, como se observó a lo largo de esta investigación, aún en los momentos de mayores cuestionamientos.

Esta fortaleza en el ámbito de la seguridad también se advertía al visualizar el arribo de extranjeros a Colombia durante ambos gobiernos. Este índice mostró un significativo incremento, ya que en el año 2002 llegaron al país 1,1 millones de personas, mientras que en el 2009 lo hicieron 2,5 millones (Garzón Triana, 2009). La posibilidad de transitar las carreteras que conectan los puntos turísticos más importantes fue otra de las señales de un aumento en la seguridad ciudadana del país. En ese sentido, se expresaba el primer mandatario: “Quiero destacar dos cosas que son intangibles. Por un lado, el Estado colombiano ha recuperado el monopolio para combatir a los criminales. La justicia del Estado había sido usurpada, derogada de facto en muchas regiones. Antes los pleitos de familia, las peleas entre particulares, las lesiones personales, los homicidios y otras situaciones por el estilo se llevaban a la consideración del líder terrorista guerrillero o del líder terrorista paramilitar. Pero ahora la justicia ha venido recuperando su vigencia en todo el territorio... El otro aspecto es que cuando yo digo que Colombia ha venido practicando esta política de seguridad con valores democráticos no hay que hablar en forma etérea de libertades. Colombia ha desafiado, ha enfrentado al terrorismo más rico, más criminal, más peligroso del mundo, con legislación ordinaria, y sin legislación de Estado de Sitio”⁴⁷⁵

La estrategia gubernamental de los “tres huevitos”⁴⁷⁶ se completaba con la política social. Junto con los dos primeros pilares de seguridad democrática y confianza inversionista, postulados por el primer mandatario desde la génesis de su gobierno como salida al estancamiento político, económico, social y de seguridad en las que se encontraba el país, aparecía el tercer sostén de este tablero conformado por Uribe, como fue el de la

⁴⁷⁵ Filmus, (2010: 95-96). En línea con lo declarado, en entrevista con el autor de esta investigación, Uribe añadía que: “Recuerdo, en los días finales del gobierno, que un campesino de un municipio colombiano me dijo: ‘Presidente, usted dice que no corren ríos de leche y miel, pero ya no corren tantos ríos de sangre como en el pasado’. Claro que avanzamos, pero hoy con dolor de Patria, somos testigos de cómo el actual gobierno está dilapidando lastres buenas bases que heredó: la Seguridad Democrática, la confianza inversionista y la cohesión social”. Álvaro Uribe. Entrevista con el autor.

⁴⁷⁶ En referencia a la política de seguridad democrática, la confianza inversionista y la política social. En línea en: <<http://www.radiosantafe.com/2010/05/24/uribe-pide-a-los-colombianos-no-cambiar-los-tres-huevitos-de-prosperidad-que-deja-su-gobierno/>>.

En la misma línea en una entrevista con el autor de esta investigación, Uribe expresaba: “Yo no dejé al país en un paraíso, pero sí sembramos una buena semilla para seguir consolidando los avances que logramos en medio de tantas dificultades. Siempre repito que no dejamos pollos robustos, pero si tres huevitos fecundados”. Álvaro Uribe. Entrevista con el autor.

cohesión social. Desde un primer momento, el líder colombiano asumía que “hay un vínculo entre la seguridad y la cohesión social. La seguridad provee condiciones para la inversión, y esta permite que se alcancen objetivos sociales. La seguridad democrática es, por lo tanto, un medio para la erradicación de la pobreza”⁴⁷⁷. A pesar de postular que este objetivo podría desarrollarse a partir del despliegue de los dos anteriores, los resultados en esta materia no tuvieron la misma eficacia que los obtenidos en las dos primeras.

El desempleo mostró un descenso desde la llegada de Uribe al gobierno, aunque no acompañó el mismo nivel del crecimiento del PBI. El año 2003, el desempleo se ubicaba en el 17,4%, para alcanzar el 10,6% en el 2008, previo a la emergencia de la crisis financiera internacional, y para luego subir sensiblemente al 11,8 en el conflictivo 2009⁴⁷⁸. Es decir, el desempleo disminuyó durante los ocho años de Uribe, aunque la evidencia empírica revelaba que la pobreza y la desigualdad no tuvieron un resultado satisfactorio durante los dos mandatos presidenciales. A pesar de que la pobreza disminuyó del 53,7% al 45,5%, el nivel absoluto continuó siendo alto, ya que para el año 2009 el número de pobres se acercaba a los 20 millones (González Jorge, 2010: 32). Según la misma fuente, la brecha entre el índice de pobreza para el campo y la ciudad se ha intensificado comparando las 13 áreas metropolitanas donde el descenso fue del 40,3 al 30,6% con la del resto del país, la cual lo hizo desde el 69,3 a 64,3 (González Jorge, 2010: 32).

La principal política social del gobierno para luchar contra la pobreza, además de la ecuación oficial que derivaba la cohesión social de la seguridad democrática y la confianza inversionista antes mencionada, fue el Programa “Familias en Acción” (FEA). Como se comentó en el capítulo IV de esta investigación, el FEA era un programa oficial ejecutado desde la Consejería Presidencial para la Acción Social, que desde su creación en el año 2002 ha crecido desde las 320 mil familias en 620 municipios a 2.228.443 familias en 1.187 municipios de todo el país en abril de 2010⁴⁷⁹. A pesar de no aplicar un principio universalista y de no encontrarse vinculado al marco constitucional, se trataba de un programa de transferencia de efectivo a familias pobres que se encontraba condicionado a

⁴⁷⁷ Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010. 2010. En línea en: <<http://es.scribd.com/doc/22522200/plan-de-desarrollo-nacional>>.

⁴⁷⁸ Datos obtenidos en base a la Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas de Colombia, en línea en: <www.dane.gov.co>.

⁴⁷⁹ Departamento Administrativo para la Prosperidad Social. En línea en: <<http://www.accionsocial.gov.co/contenido/contenido.aspx?catID=204&conID=157&pagID=282>>.

los factores de escolaridad y asistencia a citas de control de crecimiento. Para acceder al “subsidio alimentario”, las familias debían comprometerse a llevar a los hijos a citas periódicas de control de desarrollo, así como asistir a actividades de capacitación para mejorar las condiciones alimenticias y nutricionales de los menores de 11 años. Este primer subsidio era otorgado por familia, indistintamente del número de hijos, e implicaba una suma de 25 dólares mensuales. Para acceder al “subsidio escolar” se debía asegurar la permanencia escolar de los niños entre 7 y 17 años de edad, y su valor oscilaba entre los 12 y 20 dólares mensuales.

Para los defensores del Programa, el mismo aseguraba que las familias pobres accedieran a educación y salud, superando condiciones de exclusión, y se trató de “una política social estructural que trasciende lo meramente asistencial, pues a través de la educación abre los caminos de movilidad social, esencia de la democracia”⁴⁸⁰. Para los críticos de esta política social del gobierno, el FEA terminó siendo asistencialista y ahogó medidas más estructurarles asociadas a una política de empleo e ingreso: según ellos, fue una suerte de versión moderna de la ley de pobres inglesa (González Jorge, 2010, 33). De todas maneras, el Programa implicó un aumento de la tasa de educación en un país como Colombia, en el cual la educación básica primaria aún no es gratuita. La sociedad colombiana expresaba su mayor disconformidad con el presidente en estas dos temáticas, ya que el 44% de los ciudadanos decía estar en contra de la política oficial frente a la pobreza, y el 37% hacía lo propio con la política educativa (Botero y Tickner, 2010, 5).

En cuanto a la desigualdad, el gobierno de Uribe mostró resultados poco auspiciosos. En ese sentido, Colombia continúa revelando una importante desigualdad en la distribución del ingreso (Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo, 2010, 6) medido por el coeficiente Gini, y el 27% de la población tiene las necesidades básicas insatisfechas (Coronado 2010 40). La política tributaria de los gobiernos de Uribe, como observamos en forma precedente, se basó en incentivos al capital como forma de generar circuitos productivos para el fomento de la inversión. De allí que la ampliación de la brecha entre los ricos y pobres haya aumentado (Garzón Triana, 2011: 37) del 0,57 del coeficiente de Gini al 0,58, lo que en términos simples quiere decir que durante sus ocho años de mandato la desigualdad entre ricos y pobres se mantuvo. En cuanto al

⁴⁸⁰ Palabras de Álvaro Uribe en “Logros del gobierno del presidente Uribe” en Yamhure Fonseca (2009: 95).

sector rural, el índice Gini muestra una desigualdad aún mayor para los sectores del capital, ya que el mismo alcanza el 0,87 (Novoa, 2012: 155), una cifra muy alta que evidencia que la problemática del campo continuó desatendida bajo los gobiernos de Uribe.

En cuanto a la política habitacional, los subsidios otorgados por el Estado no lograron incidir positivamente en la reducción del déficit de vivienda. Según datos de Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo, (2010: 12), 14,7% en déficit cuantitativo, 29,6% con carencia de servicios públicos básicos y 19% de las construcciones con precariedad de materiales (Coronado, 2010: 42) revelan que la política social del gobierno de Uribe, a pesar de no agravar las condiciones sociales precedentes, no mostraron un resultado similar a los de la seguridad pública. Los grandes avances logrados en ese aspecto no generaron las consecuencias deseadas en el campo social, ya que la confianza inversionista por sí sola no creó las condiciones para un desarrollo social más equitativo.

A pesar de lo poco alentadores resultados en el área social, los altos índices de aprobación de Uribe, que se mantuvieron inalterables a lo largo de sus dos mandatos, provienen de la implementación de la PSD⁴⁸¹. Esta herramienta de gestión se convirtió en el principal RP construido por el primer mandatario en el ejercicio del gobierno. La excepcionalidad de Uribe en la historia colombiana (González, Fernán, 2010: 14) deviene de una forma particular de llevar adelante el propio liderazgo presidencial, algo que le permitió mantener niveles de popularidad inéditos para la vida política colombiana moderna. El porcentaje de aceptación del primer mandatario a lo largo de sus dos mandatos promedió el 70% de acuerdo con varias investigaciones realizadas durante los ocho años de gobierno⁴⁸². El apoyo al referendo reeleccionista, luego frustrado por la decisión de la Corte

⁴⁸¹ Según Camilo Romero, senador del PDA y opositor a Uribe, la popularidad del líder colombiano derivaba la generación de “una sensación de seguridad nacional (sensación porque además de la militarización de territorios y carreteras, mantenía un gran saldo social con los territorios en conflicto), en medio de un ambiente de incertidumbre, que caló muy hondo en el alma nacional. A su vez, otra de las razones de su popularidad era que de manera muy hábil lograba callar a sus críticos, a través de la persecución mediática o judicial, ubicándolos siempre en el “lado enemigo” y asociándolos en forma directa con la guerrilla. Unanimismo mediático, más unanimismo político y los éxitos militares sobre la guerrilla fueron la clave de su popularidad”. (Camilo Romero. Entrevista con el autor).

⁴⁸² Según Latinobarómetro, el año 2003 fue de 64%, el 2004 de 75%, el 2005 de 69%, el 2006, de 70%, el 2007 de 68%, el 2008 de 75%, el 2009 de 72% y el 2010 de 75%, mostrando un promedio de 71% de aceptación a su figura (Corporación Latinobarómetro, Informe 2011 En línea en: <<http://es.scribd.com/doc/70688598/INFORME-DELATINOBAROMETRO-2011>>).

Constitucional, que concitaba el apoyo del 66% de los colombianos según algunas encuestas⁴⁸³, era una muestra más del fuerte apoyo social a la figura del presidente.

Este RP de Uribe provenía, sin lugar a dudas, de los éxitos obtenidos en el campo de la seguridad pública, que implicaron –durante sus años de gobierno– una importante ampliación de derechos civiles, que con anterioridad a la llegada del líder antioqueño al poder no estaban garantizados. En ese sentido, la recuperación por parte del Estado de vastos territorios previamente en manos de grupos irregulares, y la liberación de extensas carreteras del país que estaban en poder de guerrilleros y paramilitares, significaron importantes avances del gobierno en ese campo. Por primera vez en su historia, la guerrilla se vio conmovida por el asedio de la fuerza pública y fue reduciéndose tanto en fuerza militar, como así también en presencia territorial y número de combatientes. Por otro lado, el fenómeno de las AUC, a pesar de la reaparición de algunos grupos aislados, se fue evaporando, primero al calor del Proceso de “Justicia y Paz”, y luego por la extradición de sus cabecillas, a mediados del 2008. La PSD logró avances superlativos frente a ambos grupos ilegales, permitiéndole a Uribe gozar de una importante popularidad en base a la generación de recursos de poder que dieron lugar a la eficacia gubernamental en este campo.

Sin embargo, esta ampliación de derechos civiles garantizada por el gobierno uribista, se desplegó en paralelo con una restricción de derechos para una parte de la sociedad colombiana. Como se observó en los capítulos precedentes, los “falsos positivos”, las escuchas y espionajes por parte del DAS, los atentados, que a pesar de la disminución continuaba, a sindicalistas y miembros de ONG vinculadas a derechos humanos, se convertían en limitaciones para el libre ejercicio de los derechos fundamentales. Por otro lado, el fenómeno de las “personas desplazadas”⁴⁸⁴ del ámbito rural demostraba que dicha

Según Jorge Landoño, el promedio histórico del primer mandatario se ubicó en el 72% en los ocho años de mandato. En línea en:

http://www.elcolombiano.com/BancoConocimiento/L/la_de_uribe_una_historica_popularidad/la_de_uribe_una_historica_popularidad.asp. Según Gallup, la imagen más baja de Uribe en sus dos periodos de gobierno fue del 68% y la mayor del 85%. En línea en: <<http://www.slideshare.net/saulhb/gallup-poll-mayo-2009-colombia>>.

⁴⁸³ Según una encuesta de Ipsos Public Affaire, un 88% votaría a favor de que Uribe tuviera un tercer mandato, en línea en: <<http://www.slideshare.net/lasillavacia/encuesta-ipsos-20091002>>.

⁴⁸⁴ “Los hechos que provocaron el desplazamiento fueron principalmente las aspersiones aéreas de cultivos de uso ilícito en el marco de operativos militares, el reclutamiento forzado, la instalación de minas, la presencia de grupos paramilitares en 17 departamentos del país, los intensos combates entre el Ejército y la

ampliación convivía con elementos restrictivos en el desarrollo de la PSD. Según datos oficiales y no oficiales (Munevar: 2010), las estadísticas de Acción Social registraban alrededor de 3,5 millones de personas desplazadas, y la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES) elevaba la cifra a 4.915.579 de personas. Según esta última, el gobierno admitía “en su registro un total de 2.500.962 personas desde 1999, de las cuales, alrededor de 1.410.935, el 56.4%, fueron desplazadas durante el período de la llamada ‘Seguridad Democrática’”⁴⁸⁵. Para el año 2009 la Corte Constitucional reconoció algunos avances de la política de seguridad del gobierno, pero mantuvo su declaración de 2004 relativa a la persistencia de un “estado de cosas inconstitucional” (Garzón Triana, 2011: 40) en la medida en que no contribuyó considerablemente a la solución del problema del desplazamiento forzado en el país.

Resumiendo, la eficacia en la lucha contra los grupos ilegales (guerrilla y paramilitares) emprendida por el gobierno durante los ocho años de mandato (RP de estrategia política) permiten comprender los grados de popularidad (RP de apoyo popular/ ciudadano) que Uribe ha mantenido en forma sistemática en sus años de mandato. La disminución de homicidios, de secuestros extorsivos, de asesinatos masivos, junto a la recuperación por parte del Estado de territorios y carreteras configuró un proceso de ampliación de derechos civiles inéditos para las últimas décadas de un país que convivió de manera cotidiana con el fenómeno del narcotráfico, de los paramilitares y de las FARC. La PSD del gobierno fue la principal columna vertebral de esta estrategia de ampliación de derechos, la cual permitió el desarrollo de la confianza inversionista, el segundo de los puntales desde donde se sostuvo el proyecto uribista. En cuanto a la cohesión social, el tercero de los objetivos gubernamentales, los resultados no mostraron grandes avances.

guerrilla de las FARC que incluyen bombardeos y uso de armas de efectos indiscriminado, así como los enfrentamientos entre las FARC y el ELN en algunas regiones del país”. CODHES “¿Cohesión o fragmentación social? Resumen del informe sobre desplazamiento forzado, conflicto armado y derechos humanos CODHES, correspondiente al primer trimestre de 2008”.

⁴⁸⁵ ¿Cohesión o fragmentación social? Resumen del informe sobre desplazamiento forzado, conflicto armado y derechos humanos CODHES, correspondiente al primer trimestre de 2008”. En línea en: <<http://terranova.uniandes.edu.co/politpub/lineatiempo/Cohesion%20o%20fragmentacion%20social%20-%20CODHES.pdf>>.

Esta ampliación de derechos civiles, tangibles para gran parte de la ciudadanía, se desplegó en paralelo a un proceso de restricción de derechos. La irrupción de los “falsos positivos”, la “militarización de la justicia”, la persecución de organizaciones de derechos humanos y dirigentes opositores, fueron la muestra de un conjunto de acciones gubernamentales que impactaron contra derechos constitucionales. Sin embargo, para el imaginario de la sociedad colombiana esta restricción de derechos pareciera ser inferior a la ampliación de derechos civiles realizadas por el gobierno durante sus dos años de mandato.

Conclusión

El último semestre del año 2008 se caracterizó por fuertes cuestionamientos a los principales recursos de poder generados por Uribe en el campo de la PSD y en el de la reelección presidencial. El descubrimiento de la manipulación de estadísticas por parte de la fuerza pública generó controversias en cuanto a la cantidad verdadera de guerrilleros, delincuentes y paramilitares abatidos en combate. Este episodio apenas rozó a la figura del presidente, ya que Uribe mantuvo el apoyo popular/ ciudadano (RP) para la continuidad de la estrategia de guerra directa frente a las FARC. Es decir, los recursos de poder generados por el primer mandatario para combatir a los grupos ilegales y su éxito en dicha empresa blindaron a Uribe de la crítica situación y de sus imprevisibles consecuencias.

El otro conflicto que irrumpió en la opinión pública fue el de la “Yidispolítica”, que generó una discusión alrededor de la legitimidad de la reelección presidencial. A pesar de la emergencia de este hecho, Uribe no se vio cuestionado en forma directa, y la mayoría de la sociedad no visualizó al presidente como responsable del delito de cohecho. Nuevamente los recursos de poder generados por Uribe (en especial los RP de apoyo popular/ ciudadano y de estrategia política –personalidad política-) acudían para proteger al primer mandatario de la crítica.

El año 2009 estuvo dominado por la factibilidad de la realización del referendo que habilitaría una nueva reelección presidencial. Sin embargo, dos hechos sacudieron el panorama político local y regional poniendo a prueba los recursos de poder del primer mandatario. El fenómeno de las “Chuzadas”, como fue conocido en la opinión pública, implicó un nuevo cuestionamiento a la política de seguridad del gobierno y originó un nuevo conflicto con la CSJ. Las investigaciones realizadas por la Justicia, que inclusive acusó al presidente de estar al frente de este espionaje, dieron lugar a detenciones de funcionarios, entre los que sobresalían tres ex directores de la agencia.

El siguiente conflicto producido durante esta etapa derivó de la instalación de siete bases norteamericanas en suelo colombiano dentro del marco de un acuerdo de cooperación entre ambos Estados generando la oposición de los países vecinos, Venezuela y Ecuador. A pesar de encontrarse nuevamente bajo severos cuestionamientos, Uribe, mediante los

recursos de poder de estrategia política comunicacionales, logró sentar su posición política y sortear la controversia en torno a las bases militares en su país.

Luego de superados ambos episodios, el primer mandatario concentró sus energías en la aprobación legislativa y judicial del referendo para una nueva reelección presidencial. A pesar de contar en ese momento con una importante suma de RP, el primer mandatario no pudo sortear los impedimentos institucionales para un nuevo turno electoral. La oposición de gran parte de los partidos políticos locales, de la justicia, de algunos medios de comunicación afines y de sectores internos de su coalición de gobierno, impidieron la generación de un nuevo RP de estrategia política como era un nuevo turno electoral.

Durante los ocho años de gobierno, Álvaro Uribe ha gozado de RP de apoyo popular, que se han expresado en diversas encuestas y en la imbatibilidad del líder colombiano en la arena electoral. El apoyo popular/ ciudadano al líder colombiano durante su gestión de gobierno, sin dudas, provenía de la performance obtenida en el ámbito de la seguridad. La estrategia política de enfrentamiento frontal a la guerrilla y de negociación frente a los paramilitares le permitió al primer mandatario recuperar grandes porciones de territorio que anteriormente se encontraban dominadas por los grupos ilegales mencionados. Esto, en los hechos, implicó una sustancial ampliación de derechos civiles que les permitió a los colombianos recobrar derechos como el de circulación, el de las libertades individuales garantizados por el Estado, de defensa de la propiedad privada, de recuperación de la capacidad jurídica y de los contratos, entre las más importantes.

La ampliación de derechos civiles realizada por el gobierno de Uribe durante los ocho años de mandatos se desarrolló en forma paralela a un proceso de restricción de derechos como fueron la “militarización de la justicia”, la cual permitió que se vulneraran derechos de propiedad y de libertades individuales, los “falsos positivos”, entre la más salientes. Sin embargo, esta restricción de derechos, conocida por la sociedad colombiana, pareció ser visualizada como los costos a pagar para lograr mayores grados de seguridad. Es decir, para el imaginario social colombiano, la ampliación de derechos civiles realizada por el gobierno fue valorada en forma superior a la restricción de derechos que en la propia acción oficial, la administración Uribe haya generado.

CONCLUSION

Me consumo y me consumiré de por vida
al servicio pleno del pueblo venezolano.
Lo haré gustosamente. Me consumiré todo
lo que me quede de vida, así lo juro
y lo prometo delante de mis hijos y mis nietos

Hugo Chávez (Caracas, 2007)

Periodista: ¿Qué le gustaría que dijeran sus
hijos cuando en el futuro les
pregunten quién fue su padre?

Uribe: Ojala que lo mismo que yo pondrían
en mi lápida que nunca se rajó

Álvaro Uribe (Bogotá 2010)

El objetivo principal de esta investigación ha sido describir cuáles fueron los recursos de poder presidencial que los LP de Hugo Chávez y Álvaro Uribe generaron y utilizaron durante los años anteriores al ascenso al gobierno y durante sus dos presidencias, para luego dar paso a la comparación entre los mismos, que es el principal de los interrogantes planteados al inicio de esta tesis. Como demostraré a continuación, advierto que Chávez y Uribe comparten un similar ejercicio del poder, basado en la utilización de recursos de poder afines, a pesar de sus diferencias en los modelos económicos, políticos y sociales que llevaron adelante en sus países. A lo largo de esta investigación, quedó en evidencia que ambos LP ostentaron y crearon RP institucionales, de estrategia política (comunicacional, de maniobras políticas y discursiva) similares, y que contaron con un importante RP como era el apoyo popular/ ciudadano, expresado en las distintas elecciones acaecidas durante el periodo y en la alta popularidad mantenida a lo largo de los años de estudio. A continuación se justifica esta hipótesis a partir de un análisis comparativo de ambos LP en las tres etapas en las que se dividió esta investigación: contexto de asunción, primera presidencia y segunda presidencia.

En cuanto a las condiciones de llegada al gobierno de ambos líderes, se observó que tanto Chávez como Uribe emergieron en contextos de regímenes políticos democráticos de larga duración basados en sistemas partidarios en los que dos agrupaciones dominaban el escenario político sin haber sufrido interrupciones institucionales durante décadas. Estos

dos régimen democráticos basaron su estabilidad institucional en grandes acuerdos entre dos partidos por intermedio de pactos (Punto Fijo en Venezuela y Frente Nacional en Colombia), los cuales dotaron de estabilidad al sistema político durante más de cuatro décadas. En Venezuela, el predominio de AD y COPEI mediante un esquema institucional que desalentaba la conformación de terceras opciones se extendía a la arena social, ya que tanto AD como COPEI tenían una importante influencia sobre las organizaciones empresariales y sindicales. En Colombia, el PL y el PC acordaron durante décadas una alternancia ordenada y previsible luego de muchos años de violencia, logrando mantener un esquema sólido que pudo neutralizar los desafíos de la violencia hasta los años noventa, cuando la conjunción del predominio paramilitar, de la guerrilla y de los carteles de la droga amenazaron seriamente la supervivencia del sistema político del país.

Sin embargo, y a pesar de gozar de una estabilidad política sin parangón en la región, dichos acuerdos entre partidos no pudieron resolver las crisis política y social que generaron, dando lugar a situaciones de emergencia (económica en Venezuela y de seguridad en Colombia) que se encaminaban a erosionar la legitimidad del propio régimen democrático. Luego de décadas de dominio de dos partidos, con mayor hegemonía de AD para el caso venezolano, con una alternancia prefijada en un comienzo y con predominio del Partido Liberal luego, para el caso colombiano, ambos marcos institucionales basados en acuerdos partidarios, sucumbieron ante crisis de distinto origen, pero similar impacto, de las que emergieron líderes que lograron conectar con los anhelos populares.

En el caso venezolano, las marcas de la debacle económica comenzaron a emerger en los años ochenta, y será a partir del “Caracazo”, en febrero de 1989, cuando la protesta social brotará como el módulo disparador de un esquema institucional en vías de erosión. Los fallidos golpes militares del año 1992 incorporaron a un actor que será determinante en los años sucesivos: las Fuerzas Armadas. Los militares, quienes durante décadas se habían mantenido ajenos a los fragores de las luchas políticas, resultaron un RP institucional clave para el fortalecimiento del liderazgo de Chávez.

La emergencia de nuevos actores, la pervivencia de la protesta social y los hechos de corrupción denunciados precipitaron la caída de Carlos Andrés Pérez y el inicio de una transición que dio lugar a un nuevo proceso electoral. Las elecciones de 1993 fueron las primeras en las cuales no triunfó un candidato de las formaciones políticas tradicionales

(aunque provenía de uno de los dos partidos), evidenciando que el desgaste de AD y COPEI no se trataba solamente de un signo coyuntural. La continuidad de la crisis económica bajo el gobierno de Caldera, a pesar de algunas correcciones al modelo neoliberal implementado por Pérez, no paralizó la necesidad de la sociedad por un cambio radical encarnado en un nuevo liderazgo político.

En Colombia, la crisis de seguridad que afectó al país provino de diferentes puntos cardinales. Por un lado, del crecimiento de la guerrilla, quien a partir de nuevo equipamiento militar y de un fuerte descontento social vio aumentar su contingente armado. Por otro lado, de la presencia histórica de los carteles de la droga (en especial en las ciudades de Cali y Medellín), quienes durante de la década del noventa pusieron en jaque los cimientos de la democracia colombiana. Por último, de la presencia de los grupos paramilitares, que a partir de los ochenta y con mayor potencia en los noventa se fortalecieron como grupo de choque reactivo a la guerrilla.

La combinación de estos tres conjuntos armados hizo eclosión durante la presidencia del liberal Samper (quien fue acusado de recibir financiamiento por parte de uno de ellos) y configuró un escenario incontrolable para el régimen político colombiano. El intento de Pastrana por comenzar un proceso de paz frente a la guerrilla en Caguán al inicio de su mandato, resultó ser otro eslabón de fracasos gubernamentales y dio paso a un crecimiento exponencial de las posturas antiguerrilleras de Uribe, quien desde el inicio de su vida política sostuvo una posición de guerra permanente frente al fenómeno insurgente. Este RP de estrategia política generado por Uribe devino determinante y favorable para sus intereses políticos, en esa coyuntura crítica.

En ese contexto de crisis y de incertidumbres institucionales resultó evidente el surgimiento de figuras que se presentaron ante sus sociedades como la solución al conflicto que ambos regímenes políticos no pudieron resolver y convocaron a la mayoría de la población a refundar la institucionalidad erosionada. En ambos casos, emergieron liderazgos con recursos de poder suficientes para ofrecer a la ciudadanía salidas distintas y seguras a las planteadas por las dirigencias de los partidos tradicionales.

En ese marco, tanto Chávez como Uribe se convirtieron en emergentes de estas crisis y renegaron de los encuadres institucionales precedentes, a los que asociaron con la “miseria y la pobreza” en el caso venezolano, y con “la corrupción y la politiquería” en el

caso colombiano. Es decir, ambos líderes fueron fuertes críticos de los regímenes políticos anteriores (por su falta de eficacia en la solución de los problemas sociales) y propusieron nuevos formatos institucionales que tuvieron como propósito principal la creación de nuevos recursos de poder institucionales con la finalidad de emprender sus objetivos de gobierno. Sin lugar a dudas, se presentó más radical en el caso de Chávez, ya que implicaba la convocatoria a una Asamblea Constituyente, y menor en el caso de Uribe ya que el líder colombiano apuntó, desde sus comienzos, a un formato menos movilizante.

El contexto económico, político y social previo a la asunción de ambos mandatarios resultó ser clave para su emergencia como líderes políticos. Como se explicitó en el marco teórico, dicho elemento deviene crucial como factor externo a la dinámica política y puede favorecer o perjudicar a los líderes en el gobierno y en la oposición. En ambos casos, tanto Venezuela como Colombia tuvieron durante los años previos a la llegada de Chávez y Uribe contextos de crisis profundas que explicitan, pero lógicamente no determinan, la aparición de esta clase liderazgos. El contexto, sin lugar a dudas, se afirma como un factor que coadyuva a comprender las condiciones propicias al cambio existente en ambos países, pero son también los recursos de poder y las habilidades para leer la coyuntura y posicionarse frente a ella los elementos que permiten comprender en totalidad la fortaleza de ambos liderazgos. La capacidad de ambos líderes para intuir el momento histórico, junto con la creación de recursos de poder para conformar una estrategia política exitosa, resultan elementos explicativos indispensables para comprender en toda su dimensión estos LP. Es a partir de la propia habilidad para imaginar escenarios alternativos que Chávez y Uribe pudieron construir alternativas de poder viables y seguras para una sociedad que demandaba un pronto cambio político.

En cuanto a la utilización de los recursos de poder Chávez y Uribe los hacen jugar de manera frecuente y de forma abundante en la extensión de tiempo que antecedió a la llegada de ambos al gobierno. Los RP que ambos tenían al momento en que se encontraban en la oposición política, junto a los que generaron que a partir de su habilidad y destreza a lo largo de ese tiempo, resultan elementos clave para entender el camino de Chávez y Uribe hacia el gobierno teniendo en cuenta que el caso del líder bolivariano presenta rasgos comunes con el del líder antioqueño.

Los principales recursos de poder con los que contó Chávez se asentaban en el fuerte apoyo de los sectores populares (RP de apoyo popular/ ciudadano) y en las Fuerzas Armadas (RP institucional)⁴⁸⁶. Estos recursos le brindaron al líder venezolano, desde su salida a la opinión pública en febrero de 1992, apoyos indispensable para construir y consolidar su liderazgo. En el caso de Uribe, el apoyo popular/ ciudadano que se desplegó de forma ininterrumpida luego del fracasado proceso de paz entre en el gobierno de Pastrana y la guerrilla, junto al de las Fuerzas Armadas (RP Institucional) y los grupos empresariales (RP social), los cuales se convirtieron en sus principales recursos de poder para arribar a la Casa del Nariño. Ambos liderazgos contaron con un actor determinante para iniciar cualquier proceso de cambio: las Fuerzas Armadas y el amplio apoyo popular de sociedades necesitadas de cambios. Estos apoyos resultarán vitales para llevar adelante reformas en el área económica y social (para el caso de Chávez) y de seguridad (para el de Uribe) durante sus dos presidencias y que, en muchos casos, colisionarán frente al status quo anterior.

El apoyo popular/ ciudadano de ambos liderazgos en la oposición provenía, fundamentalmente, de presentarse como la cara antagónica del sistema político en el que venían a encumbrarse, y la utilización de este RP tendrá como propósito desmontar los resortes institucionales de los gobiernos anteriores. Es decir, la ardua tarea que les esperaba a ambos mandatarios (superior en el caso de Chávez por la radicalidad del cambio) pudo sortearse por el apoyo brindado por los militares. Sin embargo, estos RP y el contexto favorable descrito al comienzo del análisis de ambos liderazgos no alcanzan para explicitar por sí solos la emergencia de ambos casos. Tanto el líder bolivariano como el antioqueño crearon recursos poder suficientes para generar esos apoyos sociales. Las habilidades de ambos líderes para incrementar su autoridad y convertirse en factor de poder (RP de estrategia política), es también un elemento que permite comprender la fortaleza de los LP de Chávez y Uribe con anterioridad a su llegada a la presidencia.

El discurso político germinó como un RP de estrategia política comunicacional con el que contaron ambos dirigentes ya que el mismo resultó atractivo, consecuente y con

⁴⁸⁶ Ollier (2011) afirma que los militares son un RP que el líder venezolano conquista en el gobierno. En este trabajo se entiende el apoyo de las Fuerzas Armadas como un RP clave que Chávez consigue desde antes de la elección de 1998 y que le permitirá sortear exitosamente las turbulencias políticas, durante su primera gestión de gobierno.

gran poder de convencimiento y convocatoria. El papel que cumplió el discurso político en ambos líderes fue un factor singular que permitió comprender, por un lado, el nivel de adhesión y popularidad (RP de apoyo popular/ ciudadano) que concitaron en sus sociedades y, por el otro, de qué manera este RP de índole comunicacional fue institucionalizado como un canal permanente de relación directa con la población a lo largo de sus dos mandatos. En ambos casos, dicha lógica deviene clave para entender en toda su dimensión los grados de legitimidad obtenidos por ambos mandatarios en su acción de gobierno.

A su vez, tanto Chávez como Uribe contaron con otro RP, en este caso institucional de índole partidario, como ser jefes y fundadores de sus formaciones partidarias. En el caso de Chávez, era líder de su partido, el MVR, y a su vez titular de la alianza de partidos Polo Patriótico, sello electoral que le permitió obtener el pasaje al Palacio Miraflores. Uribe era también el líder de “Primero Colombia”, alianza de partidos que le permitió al antioqueño conformar un encuadre partidario para pelear las elecciones de mayo de 2002. A diferencia de Chávez, quien debió luchar en soledad con la desgastada, pero aún con capacidad de incidencia, maquinaria electoral de AD y Copei, Uribe pudo morder pedazos de los Partidos Liberal y Conservador (en mayor medida de este último), que apoyaron su candidatura a presidente.

Por último, ambos liderazgos apelaron a presentarse como la cara antagónica a los formatos bipartidarios anteriores, y recurrieron a imágenes que los exhibieron como candidatos *outsider* a la clase política tradicional. En el caso de Chávez, esto resultaba evidente, ya que su vida militar había vertebrado sus años de lucha, y desde ese mundo había irrumpido en la política a partir de 1992. La cárcel, su salida y el recorrido por todo el país previo a las elecciones significaron un itinerario particular para un político no tradicional. Sin embargo, como se observó en el capítulo correspondiente, este camino que recorrió el líder bolivariano fue el que le permitió sumar voluntades para acceder a la primera magistratura. En cambio, Uribe, quien enhebró su historial político en el interior de las diversas instituciones estatales colombianas, habiendo participado del poder ejecutivo local y provincial y del poder legislativo como senador, se presentó como un líder ajeno a la “corrupción y la politiquería” propia de la clase política colombiana liberal y conservadora.

En ese sentido, el esfuerzo de Uribe fue superior al de Chávez, ya que este último al provenir de las filas castrenses, no debió “limpiar” su trayectoria política anterior. En el

caso del líder antioqueño, esa construcción requirió de esfuerzo y “fortuna” para poder desplegarse. Sin lugar a dudas, el fracaso del Caguán significó un aliciente clave para proyectar la imagen de Uribe como un estadista capaz de predecir la estrategia correcta frente a la guerrilla. Mientras la clase política colombiana en su casi totalidad jugó por el proceso de paz, el líder antioqueño se ubicó en una oposición que a la postre le permitió presentarse como una figura ajena al deslegitimado régimen político colombiano. Esto resultó fundamental para los intereses del líder colombiano, quien debió sufrir, en un primer momento, críticas a su postura militarista. Luego del frustrado proceso, las miradas se dirigieron al candidato que había anticipado el aciago devenir, quién recogió en legitimidad social y votos los resultados de su arriesgada apuesta.

En ambos casos, tanto Chávez como Uribe construyeron su LP a partir de presentarse como candidatos *outsider* a la política tradicional de su países, e invitaron a sus sociedades a un nuevo contrato fundacional para recomponer la unidad nacional erosionada; en el caso venezolano debido a los alarmantes índices sociales que mostraban un proceso de exclusión social inédito, y en el caso del colombiano a partir de la recuperación de la soberanía estatal a lo largo del país y del retorno a la seguridad pública. Estos recursos de poder, que ya emergieron durante los años previos al ascenso al gobierno se verán fortalecidos durante sus dos presidencias y darán cuenta de una forma de gobernar de los presidentes Hugo Chávez y Álvaro Uribe.

Los recursos de poder presidencial con los que contó Chávez durante los primeros años de gobierno y que le permitieron llevar adelante un proceso de transformación institucional sin parangón en Venezuela, fueron, como se comentó en forma extensa, las Fuerzas Armadas y el apoyo popular/ ciudadano, fundamentalmente, en los sectores más bajos. Una vez en el gobierno, el líder bolivariano aumentó de forma sistemática los RP, tanto a nivel institucional, como financiero y mediante la estrategia política. Los recursos de poder presidencial con los que contó Uribe al inicio del mandato descansaban, sobre todo, en el apoyo popular/ ciudadano brindado a partir de su posición intransigente en la lucha frente a la guerrilla (y que aumentó exponencialmente luego del fracasado proceso de paz de “Caguán”), y en la buena sintonía que tenía con los grupos empresariales (RP social) y los

medios de comunicación, deseosos de la llegada de un orden que dotara de certidumbre a los negocios.

En ese marco, tanto Chávez como Uribe contaron al inicio de sus mandatos con importantes RP que les permitieron, en el caso de Chávez modificar una relación de fuerzas adversas en el ámbito institucional, y en el caso de Uribe llevar adelante modificaciones estructurales en la legislación constitucional para enfrentar al fenómeno guerrillero y paramilitar. Es decir, en su primer año de gobierno, ambos líderes implementaron políticas dirigidas a cumplimentar las demandas ciudadanas, en cuanto a Chávez de orden económico y social y en cuanto a Uribe, de seguridad.

En el caso venezolano, el líder bolivariano incrementó su poder a partir de la generación de nuevos RP concebidos en sus primeros años de gobierno. Luego del proceso de reformas constitucionales de 1999 y 2000, el primer mandatario aumentó los RP institucionales consiguiendo la mayoría parlamentaria y la mayoría de las gobernaciones. En este sentido, al encontrarse Chávez frente a un Congreso en minoría, producto de la composición parlamentaria adversa que provenía de las elecciones regionales realizadas previamente a la presidencial, inició un proceso de transformación de estructuras institucionales con la implementación de la prometida bandera histórica de su partido el MVR, la Asamblea Constitucional. Desde el inicio de la convocatoria a la reforma constitucional, comenzó en Venezuela un proceso de transformaciones institucionales (RP de estrategia política) que dio por resultado un fortalecimiento del poder de Hugo Chávez. Este proceso se realizó en el lapso de un año, en el cual el líder bolivariano encadenó una serie de triunfos electorales en tres convocatorias sucesivas que le permitieron modificar la estructura institucional venezolana. Con porcentajes superiores al 80%, Chávez consiguió aprobar un nuevo texto constitucional que daría lugar a un nuevo llamado a elecciones bajo la égida de la nueva Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y cambiaría la composición parlamentaria nacional y de los ejecutivos provinciales.

A mediados de 2000 se realizaron las elecciones de todos los cargos electivos del país, y Chávez fue reelecto bajo la nueva constitución, al tiempo que obtenía mayoría absoluta en la Asamblea unicameral, el único órgano legislativo luego de la reforma. Luego de estas modificaciones institucionales, el líder venezolano aumentó en forma ostensible sus RP al obtener numerosos gobernadores, alcaldes y una sólida mayoría parlamentaria.

De esa forma, y mediante la legitimidad que otorgaba el voto popular, Chávez consiguió modificar la composición institucional de todos los cargos electivos logrando en la arena institucional los cambios que le permitieron avanzar en las reformas económicas sociales que tuvieron su puntapié inicial en diciembre de 2001 con el paquete de las 49 leyes dentro del marco de la “ley habilitante”.

En el caso de Uribe, durante su primer año de gobierno el aumento de los RP institucionales a su favor provino de una serie de decretos que dieron lugar a medidas de excepción y que le permitieron al Estado incrementar su capacidad legal en su enfrentamiento con los grupos insurgentes. En ese marco, el líder colombiano, a partir de su propia gestión de gobierno y las estrategias políticas emanadas de ella, aumentó sus recursos de poder.

A pesar de que su alianza “Primero Colombia” no obtuvo una mayoría parlamentaria en las elecciones legislativas previas a la elección presidencial, una vez iniciado su mandato, y debido a la alta proyección de su imagen en la sociedad colombiana y una significativa aceptación que concitaron sus primeras medidas (RP de apoyo popular/ciudadano), pudo aumentar la bancada oficialista en un número mayoritario y generar un nuevo RP institucional. La traducción de su alta imagen positiva en una compacta mayoría parlamentaria favoreció sus posibilidades de gobernar mediante herramientas institucionales, en algunos casos, reñidas con las garantías constitucionales enmarcadas en la Constitución colombiana.

El LP novedoso que encarnaba el líder colombiano, asentado en una personalidad atípica para la historia del país, le proveía de recursos de poder y de apoyos políticos (que no querían quedar afuera de la mística del presidente en su forma de gobernar) y populares (que observaban a un presidente decidido a acabar con la inseguridad provocada por los grupos irregulares), que muchas veces no se detenían en las críticas a otros aspectos de dicha política de seguridad y que sostenían al presidente decidido a acabar con años de frustración social.

Por lo tanto, tanto Chávez como Uribe incrementaron, en sus primeros años de gobierno, sus RP institucional a partir del propio ejercicio de poder y de su voluntad de transformación. En el caso del venezolano, esta generación de nuevos recursos provino del llamamiento a una Asamblea Constitucional, que permitió modificar la composición

institucional adversa al comienzo del mandato. En tanto, Uribe, logró, a partir de su estilo de gobierno (RP estrategia política), y su alta popularidad (RP de apoyo popular/ciudadano), obtener una mayoría parlamentaria ad-hoc pero sólida que le permitió llevar adelante su política de seguridad sin grandes resistencias.

Durante los primeros años de gobierno, ambos presidentes lograron modificar, mediante la generación y utilización de los distintos RP, la composición parlamentaria y asegurarse con ello el control legislativo para poder avanzar en sus proyectos de transformación económica y social (Chávez) y de seguridad (Uribe). Es decir, esto les permitió a ambos líderes no contar con una fuerte oposición en el ámbito legislativo, ya que, mayoritariamente, tanto Chávez como Uribe suelen utilizar pobremente el Congreso, y se valen de herramientas de carácter “decisionistas” como decretos, “leyes habilitantes” y “estados de excepción” que les permiten pasar por encima del control legislativo. El parlamento, en ambos casos, ofició como un espacio poco utilizado y se convirtió en un órgano de poder custodiado por los dos presidentes desde un punto de vista más cercano al dominio de su poder de resistencia, que como un espacio de deliberación conjunto.

A su vez, ambos presidente mantuvieron, durante su primer mandato, un control de instituciones como la justicia que les permitió gobernar con escasa “*accountability* horizontal” (O’Donnell: 1997), ya que tanto el Tribunal Supremo de Justicia en Venezuela, ampliado por Chávez de 20 a 32 miembros⁴⁸⁷, como las tres Cortes en Colombia (la CSJ fue en ese sentido la más cuestionadora), se convirtieron en actores con escasa potencia para fiscalizar estos LP con gran apoyo popular y que realizaron una fuerte concentración del poder político.

Como se observó a lo largo de su primera presidencia, ambos líderes contaron con un RP vital como era el apoyo popular/ ciudadano aunque debe advertirse, sin embargo, una sustancial diferencia en cuanto al carácter del mismo. En el caso del venezolano, el apoyo popular a su figura era de carácter activo, es decir, este sostén político se expresó en forma dinámica, ya que implicaba un fuerte grado de movilización popular. Esto puede visualizarse en toda su dimensión durante la crisis de abril de 2002, además de ser un RP que Chávez utilizó de manera frecuente a la hora de implementar modificaciones al sistema

⁴⁸⁷ A su vez, el resorte judicial estratégico, el Fiscal General, único cargo con autoridad de juzgar al presidente, fue ocupado, durante parte de su mandato, por el vicepresidente.

político, o cuando encontró desafiado su poder⁴⁸⁸. En el caso de Uribe, este apoyo popular/ ciudadano tuvo otra particularidad ya que no se trataba, como en el caso venezolano, de un apoyo activo, sino que tenía características pasivas, ya que el líder colombiano no le dio a ese soporte popular un cariz movilizante.

Tanto Chávez como Uribe, a lo largo su primer mandato, han aumentado los recursos de poder en base a la alta popularidad (RP de apoyo popular/ ciudadano) que mantuvieron desde el inicio de sus gestiones. Esta popularidad se sustentaba y retroalimentaba en el efectivo manejo que realizaron de los medios de comunicación (RP de estrategia política). El formato de *Alo, Presidente* en el caso del venezolano, la televisación de los Consejos Comunales, en el del colombiano, les permitió dirigirse a la sociedad de manera directa y sin mediaciones. A partir de este novedoso canal, que ambos líderes generaron como RP, incrementaron su base de apoyo y llegaron a todos los hogares de sus sociedades con un discurso llano y popular. Desde estos eventos televisivos, tanto Chávez como Uribe han tomado decisiones de gobierno, han adelantado decretos, han expulsado ministros, han roto relaciones con otros países, han criticado a la oposición y han enviado mensajes a sus aliados y adversarios. En ese sentido, se evidenciaba que estos espacios emergieron como canales por los cuales ambos líderes afirmaron un estilo de gobierno personalista basado en el antagonismo y en el par “amigo- enemigo”. Para Chávez, los “escuálidos” (los grupos opositores ligados al viejo esquema político de “Punto Fijo” y los grandes medios de comunicación); para Uribe, el “narcoterrorismo”, los “bandidos” (para representar a la guerrilla y sus aliados políticos, a los que Uribe señalaba a las diferentes Organizaciones de Derechos Humanos, y que se convirtieron en los opuestos a vencer durante la primera presidencia)⁴⁸⁹.

⁴⁸⁸ Según Ellner (2010: 32): “Nunca en la historia de Venezuela había participado un número masivo de personas en marchas y mítines en un periodo tan prolongado como durante la presidencia de Chávez. De hecho, la clave para la supervivencia política de Chávez frente a las tácticas agresivas de calle de la oposición, que comenzaron a finales de 2001, ha sido su poder de convocatoria, que al principio era igual, y luego superior al de sus adversarios”.

⁴⁸⁹ En referencia a defensores de derechos humanos que representaban víctimas en casos jurídicos, el líder colombiano solía señalarlos en forma acusadora: “Hay un cúmulo de abogados pagados por organizaciones internacionales con sesgos ideológicos que les impiden examinar el cotejo de las conductas y el ordenamiento jurídico imparcialmente y que lo hacen con odio y carga ideológica”. Discurso realizado el 8 de mayo de 2009. “Uribe afirma que ONG extranjeras pagan para realizar “falsos imputaciones” en Colombia”, EFE, 8 de mayo de 2009.

En los dos casos, tanto Chávez, como Uribe, antagonizaron frente a una oposición que durante su primer mandato se encontraba, según el esquema oficial, en los bordes de la agresión institucional. En el caso venezolano, la oposición era considerada como golpista (de hecho fue la estrategia adoptada por estos grupos en abril de 2002 y enero de 2003) y cualquier crítica al gobierno era adjudicada a la posición antinstitucional de esos grupos. En el caso de Uribe, ante las críticas a su PSD, la oposición era defenestrada y culpabilizada de ser aliada de la guerrilla, en la clásica antinomia “uribistas” vs. “terroristas”, táctica presidencial que apuntaba a “polarizar y dividir a la sociedad [maniobra] que le ha dado réditos electorales”⁴⁹⁰. Es decir, en ambos casos la estrategia política de los dos líderes apuntaba a dividir a la sociedad entre los que estaban a favor del gobierno (chavistas-bolivarianos o uribistas) y los que estaban en contra (escuálidos o terroristas).

Las oposiciones políticas a Chávez y Uribe tuvieron RP distintos para enfrentarse a ambos mandatarios durante su primera presidencia. En el caso venezolano, los principales recursos de la oposición fueron los actores sociales empresariales y sindicales (RP sociales) y los medios de comunicación. En el caso colombiano, fueron a nivel partidario el PL y el PDA, las organizaciones defensoras de los derechos humanos y en el campo militar, la guerrilla. En ambos casos, la oposición al presidente se encontraba con pobres RP institucionales y con escasas posibilidades de desafiar en la arena electoral, la hegemonía de ambos líderes quienes ostentaron altos niveles de apoyo y popularidad.

Luego del surgimiento de ambos liderazgos, los sistemas bipartidistas precedentes mostraron una nueva configuración. En el caso de Venezuela, los partidos AD y Copei prácticamente desaparecieron de la escena política, y su lugar fue ocupado por actores sociales que no priorizaron, al menos durante esta primera presidencia, la disputa con Chávez en el plano partidario-electoral. En cuanto a Colombia, a pesar de que tanto el PC como el PL mantuvieron una presencia institucional en las cámaras del senado y de representantes, los porcentajes de votos y escaños mostraron un fuerte debilitamiento en su convocatoria. Por lo tanto, la competencia electoral en ambos países pareció girar, más que en una disputa entre Partidos (oficialismo y oposición), en una lógica antagónica que daba lugar al par presidente-oposición. En los dos casos la centralidad de los primeros mandatarios originó una disputa bipolar entre un presidente con abundantes recursos de

⁴⁹⁰ Nasi (2007: 178).

poder frente a una oposición carente de ellos para mantener una disputa competitiva con ambos líderes.

En cuanto a las votaciones acaecidas durante las primeras presidencias de Chávez y Uribe, se observa que el recurso de apoyo popular/ ciudadano de ambos líderes se vio reflejado en los fuertes respaldos electorales sucesivos. En cuanto al líder bolivariano, a lo largo de las nueve elecciones realizadas durante su primer mandato, Chávez y su partido se impusieron en la totalidad de las mismas. Es decir, tanto cuando el líder bolivariano se presentó como candidato (1998, 2000, 2004 y 2006), como cuando lo hicieron sus representantes (las tres de 1999, 2004 y 2005), las votaciones favorecieron claramente al oficialismo. En el caso de Uribe, en las cinco elecciones que se realizaron en su primera presidencia, el líder antioqueño y sus aliados vencieron en 4 de ellas y el presidente salió derrotado en una por no alcanzar el umbral del 25% del total de padrón en el referendo de octubre de 2003 a pesar de vencer holgadamente en la totalidad de las preguntas y superar la cantidad de votos de un año atrás.

Las elecciones realizadas en este primer periodo mostraban altos porcentajes de votos para las contiendas electorales en las que tanto Chávez y Uribe fueron candidatos (como se observó en los capítulos correspondientes, siempre superiores al 50%) y menores en las elecciones regionales o parlamentarias en las cuales las figuras protagónicas de ambos procesos no se hicieron presentes. Se advierte, además, que en los dos casos la abstención continúa en niveles superiores al 40%, disminuyendo en los momentos en que ambos líderes fueron candidatos y aumentando en los momentos que Chávez y Uribe no encabezarón las propuestas electorales.

En síntesis, se tornaba evidente que tanto el líder bolivariano como el colombiano, se convirtieron durante los años previos a su ascenso al poder en emergentes de crisis económicas y de seguridad, respectivamente, y que utilizaron, durante la primera presidencial, RP similares en su acción de gobierno, a pesar de sus marcadas diferencias ideológicas, su disímil orientación gubernamental, sus diferentes propuestas de gobierno y sus distintos aliados locales e internacionales. La pretensión de constituirse como un liderazgo a escala sudamericana y continental, era un proyecto que se encontraba más latente en Chávez que en Uribe durante esta primera presidencia. Luego de las victorias electorales de 2004 y 2005, el líder bolivariano decidió ampliar los márgenes de su

actuación política y por intermedio del lanzamiento de su proyecto del “socialismo del siglo XXI”, logró concitar la atención internacional y convertirse en un referente ineludible del núcleo ideológico de izquierda. A su vez, a partir de la consolidación de las bases estructurales de su gobierno, el presidente se encontró en condiciones de avanzar en el plano internacional con diferentes esquemas de integración con otros países. La creación del ALBA como una alternativa antagónica al alicaído, luego de los sucesos de Mar del Plata, modelo de integración del ALCA, sumado a las propuestas de integración económica y política con los países del MERCOSUR y de otros mercados no tradicionales para la historia de Venezuela, se convirtieron en las iniciativas más importante de la etapa y proyectaron a Chávez a nivel regional. En cuanto a Uribe, la pretensión de liderar un espacio mayor a la geografía colombiana, colisionaba frente a la escasez de aliados que Sudamérica le proveía en ese contexto histórico.

Por último, los mandatarios de Venezuela y Colombia, reformaron sus constituciones con la finalidad de reelegirse, creando, de esa manera, otro RP de estrategia política de cara a profundizar los cambios institucionales, que, en mayor o menor medida, ambos líderes llevaron adelante en sus naciones. En el caso de Chávez, esta posibilidad de reelección se habilitó a partir de la reforma constitucional del año 1999, que implicó modificaciones a todo un conjunto de aspectos legales en las que se incluyó la reelección por un periodo. En el caso de Uribe, esta derivó de una reforma específicamente llevada a cabo por el Poder Legislativo para habilitar la reelección presidencial y que fue refrendada por la Corte Constitucional. Previamente a la presencia de estos líderes, ambas constituciones vedaban la posibilidad de que un presidente se mantuviera por dos mandatos consecutivos.

Mediante la generación y utilización de los recursos de poder descriptos ambos liderazgos comenzaron desde su primer mandato con una importante ampliación de derechos que han sido históricamente la principal demanda ciudadana al sistema político precedente. En el caso de Chávez, esta ampliación de derechos económicos y sociales tuvo su punto neurálgico en la recuperación de la empresa estatal petrolera PDVSA (RP financiero) por parte del gobierno y con el inicio de las Misiones Bolivarianas (RP de estrategia política). Ambos sucesos le permitieron al presidente avanzar en un proceso de

redistribución del ingreso que le habilitó a los sectores más vulnerables a acceder a una vasta red de servicios sociales anteriormente vedados por los gobiernos precedentes.

Para el caso de Uribe, la ampliación de derechos civiles se podía observar a partir de la llegada del Estado a zonas que previamente se encontraban en manos de los grupos irregulares (en esta primera etapa mayoritariamente de las AUC), y en la posibilidad de transitar con seguridad las rutas que unen a las ciudades colombianas⁴⁹¹, ambos RP de estrategia política generados por el líder antioqueño. En ese sentido, la protección estatal para el libre tránsito de personas y mercancías tenía como simbolismo “el pulgar del soldado levantado, es decir: ‘estás protegido’. Era el signo de la seguridad. Antes las carreteras estaban desoladas, ahorita son seguras”⁴⁹².

Sin lugar a dudas que estos procesos de transformación encarados por Chávez y Uribe contienen en su retaguardia a un actor que se convierte en decisivo para poder llevar adelante estas estrategias de ampliación de derechos: las Fuerzas Armadas. En el caso de Chávez, ellas fueron, junto con los RP institucionales comentados (mayoría parlamentaria, la mayoría de gobernadores, control de la Justicia) y el fuerte apoyo popular/ ciudadano movilizado, uno de los principales resortes de este proceso durante su primera presidencia. El golpe de estado de 2002 y el paro en PDVSA fueron dos sucesos en los cuales la presencia de los militares fue determinante para la supervivencia del gobierno. En cuanto a Uribe, las Fuerzas Armadas se convirtieron en el ariete principal en la lucha contra la guerrilla y para garantizar la culminación exitosa del proceso de desmovilización de las AUC. En ese sentido, para ambos líderes la presencia protagónica de los militares les aseguró, durante este primer mandato, llevar adelante estas modificaciones institucionales y en consecuencia, se convirtieron en garantes de este incremento derechos ciudadanos.

En cuanto a las segundas presidencias Uribe y Chávez comenzaron su gestión de gobierno en un contexto caracterizado por el predominio de ambos mandatarios luego de haber triunfado en forma categórica en lo que fue su primera reelección presidencial, pero con importantes cuestionamientos que se expresaron en el ámbito electoral y judicial de sus

⁴⁹¹ De acuerdo a Uribe (2012: 178) “recuperar el control de las carreteras fue como la liberación en masa de un secuestro colectivo. Y tuvo un efecto multiplicador que superó nuestras expectativas más optimistas”

⁴⁹² Ángela Pinzón. Entrevista con el autor.

países. El presidente venezolano con la derrota en el referendo reeleccionista de diciembre de 2007, mientras que el líder colombiano debió sufrir el escándalo de la “Parapolítica”.

En el caso de Chávez, la derrota en el referendo significó el primer traspie electoral de la historia. Luego de nueve victorias consecutivas en distintas elecciones (presidencial, de gobernadores y parlamentarias), el líder bolivariano fue derrotado en un referendo que consultaba a la sociedad sobre la reelección indefinida y un conjunto de leyes que implicaba la transformación del esquema económico-social en una dirección socialista. Los datos electorales del referendo mostraron, sin embargo, que se trató de una derrota chavista más que una victoria opositora. Es decir, una pérdida sustancial de votos oficialistas (debida a la no movilización de la masa chavista, la ausencia de una eficaz comunicación y las disidencias internas al propio oficialismo) fue la explicación que determinó el resultado, ya que el antichavismo sólo creció en menos del 1% de los sufragios comparado con la elección precedente.

En cuanto a Uribe, el comienzo de su segundo mandato encontró al líder colombiano y a sus aliados en la lupa de la justicia. Las investigaciones producidas por la CSJ, un RP institucional no controlado por Uribe, revelaron las relaciones entre un conjunto de políticos, en su mayoría oficialistas y de distintas regiones del país, con los grupos paramilitares. Las indagaciones descubrieron que, a partir de estos lazos, el grupo ilegal pudo crecer y consolidarse en varios departamentos colombianos al amparo del sistema político regional. La familia del presidente también fue ubicada en el centro de las pesquisas, ya que Santiago y Mario Uribe, hermano y primo del primer mandatario, fueron investigados por sus nexos con el paramilitarismo.

La respuesta de ambos líderes ante la difícil coyuntura fue la de reafirmar su LP y retomar la iniciativa política poniendo en juego sus RP. En el caso de Chávez, luego de insultar a la oposición por su “victoria de mierda”, avanzó en la transformación económica y social de la estructura productiva venezolana. Poniendo en juego sus RP institucionales, como era la amplia mayoría parlamentaria (producto de la ausencia opositora en el recinto), el líder bolivariano promovió, mediante las herramientas que le brindaba la constitución, un conjunto de leyes con una clara orientación socialista. En el marco de un proceso que denominó con las tres R, Chávez activó los RP institucionales y comenzó un camino de expropiación de empresas extranjeras y de una fuerte intervención estatal en diferentes

ámbitos de la economía (RP de estrategia política). A pesar de perder en el referendo en el que puso a prueba la viabilidad de dichas medidas, el primer mandatario anunció que la economía venezolana comenzaba a caminar hacia el socialismo del siglo XXI. Es decir, a pesar de que sus propuestas de transformación económico social fueron derrotadas en las urnas, Chávez las implementó haciendo uso de sus vastos recursos de poder.

En tanto, Álvaro Uribe reaccionó de manera similar ante los cuestionamientos que se dirigían a su comportamiento político luego de las revelaciones “Parapolítica”. Los insultos proferidos a la CSJ, a la cual amenazó con llevar a juicio político acusándola de actuar “ideológicamente” frente al oficialismo, fueron parte de las respuestas del presidente ante esa coyuntura. Ante las controversias originadas en torno a las relaciones entre parte de su bancada parlamentaria y los paramilitares, el líder antioqueño mantuvo la iniciativa política (RP de estrategia política) y continuó su acoso militar a las FARC, produciéndole importantes bajas en su Estado Mayor. A mediados de mayo de 2008 extraditó a los principales cabecillas paramilitares (otro RP de estrategia política), dando por terminado los cuestionamientos en torno a su posición con ese grupo ilegal y las connivencias que pesaban sobre su actuación en el marco de la Ley de “Justicia y Paz”.

La respuesta de ambos líderes ante la difícil coyuntura que debieron asumir al primer año de su reelección fue la de poner en juego los RP que habían conquistado durante su primer mandato. Asimismo, esta recuperación política se trasladó al plano electoral, ya que tanto Chávez como Uribe lograron vencer en las elecciones regionales realizadas luego de estos momentos delicados. Ambas elecciones implicaron el estreno de los nuevos RP institucional (PSUV y PU) creados por los líderes para la disputa electoral y para unificar los apoyos alrededor de ambas figuras.

El triunfo en la votación regional de noviembre de 2008, la primera luego de la derrota del referendo reeleccionista, le permitió a Chávez mantener la iniciativa política en el terreno en donde el líder bolivariano resultaba ser imbatible. A pesar de no acrecentar los RP institucionales de gobernaciones y alcaldías, el flamante partido creado por el presidente debutó con una victoria que le permitía mantener la cantidad de ejecutivos regionales. El estreno victorioso del PSUV en las urnas dio lugar a que meses más tarde el primer mandatario insistiera nuevamente con su proyecto de reelección indefinida.

En el caso colombiano, el PU, la herramienta creada por el presidente para reagrupar los apoyos a su gobierno, debutó en la arena electoral con una muy buena performance. El triunfo del oficialismo en la elección regional de octubre de 2007 se consolidó a partir de la muy buena elección de su herramienta partidaria y de los partidos aliados, los cuales incrementaron los RP institucionales en cantidad de gobernaciones y alcaldías. Este triunfo electoral le permitió a Uribe continuar con el proceso de guerra frontal a la guerrilla con una mayor legitimidad en las urnas y acallar, momentáneamente, los cuestionamientos en torno al escándalo de la “Parapolítica”.

En ambos casos, esta recuperación política y electoral provino de la manutención de la iniciativa gubernamental (RP de estrategia política) y de poner en juego los RP obtenidos durante la primera presidencia. Esto también se pudo observar durante la crisis financiera que tuvo como epicentro a EEUU en el último trimestre de 2008 (factor externo a la dinámica política) y que impactó de manera directa en las economías sudamericanas, en mayor medida en el caso venezolano.

En el caso de Chávez, la crisis financiera internacional fue respondida con una batería de medidas (recurso de estrategia política) que tuvieron como denominador común la recuperación de diversas áreas productivas a partir de la profundización del proceso de estatizaciones que ya había dado comienzo en el año 2008. En ese marco, se produjo un agrandamiento del aparato estatal que le permitió al primer mandatario contar con una importante suma de RP financieros para hacer frente a la crisis mundial. La intervención del Estado en el ciclo económico fue otro de los pilares de la política llevada a cabo por Chávez para evitar la dependencia de los mercados internacionales, dando lugar a un conjunto de medidas de injerencia en el mercado cambiario y en la balanza de pagos.

En cuanto a Uribe, luego de la victoria electoral en octubre de 2007, continuó con el acoso a las FARC. Durante el año 2008, el gobierno mantuvo la decisión política en esa materia, produciendo dos hechos de gran impacto local e internacional: el abatimiento de Raúl Reyes y la liberación de Ingrid Betancourt. La audaz y polémica acción militar contra el segundo de las FARC en territorio ecuatoriano le generó al presidente colombiano conflictos regionales con los países vecinos, pero un aumento de la popularidad (RP de apoyo popular/ ciudadano) en el país. La liberación de la política franco-colombiana fue otro de los RP de estrategia política generados por Uribe, el cual le permitió asestar un

golpe significativo al aparato de inteligencia de la guerrilla. En ese marco de triunfos frente a la guerrilla, el gobierno adoptó medidas frente a la crisis financiera internacional, apostando a distintos incentivos a la inversión privada para recuperar la actividad económica local.

En ambos casos, tanto Chávez como Uribe han mantenido frente a la crisis internacional la iniciativa política a partir de la intervención gubernamental (RP de estrategia política) que se observa como mayor en el caso de Venezuela y menor en Colombia. A pesar de las diferencias ideológicas y de política estatal llevadas adelante por ambos gobiernos, el denominador común es una similar forma de gestionar la política que descansaba en la utilización al máximo de los RP. El rol del Estado, como garante de la inclusión social en el caso de Chávez, y como garante de derechos ciudadanos en el de Uribe, era en los dos casos una fuente genuina del poder político para ambos mandatarios. La presencia del Estado como conjunto de instituciones que se involucra en la vida cotidiana de las personas era, para los dos presidentes, un importante sostén de sus políticas de gobierno. En el caso de Chávez la utilización de las herramientas legales como la “ley habilitante” y otros institutos delegados por el poder legislativo le permitió al líder bolivariano traducir su proyecto de socialismo del siglo XXI en medidas concretas que apuntaron a la transformación de la estructura productiva venezolana. En el caso de Uribe, las herramientas legales generadas por el propio líder antioqueño durante sus gobiernos dieron lugar a que la fuerza del Estado predominara sobre los grupos ilegales a lo largo del territorio colombiano.

La personalidad política de ambos mandatarios fue otro de los RP (de estrategia política) que ostentaron Chávez y Uribe durante sus dos gobiernos. La intervención directa en los asuntos públicos en cualquiera de los niveles de gobierno y con escasas mediaciones institucionales, una delegación mínima de atribuciones a sus ministros y colaboradores y el control de la ejecución de la implementación de las políticas oficiales, configuraron las principales características de ambos mandatarios.

De acuerdo con el ex vice ministro de economía Carlos Rivero: “era muy violento para tomar decisiones, alguna la podía tomar en el mismo lugar sin haberla consultado con nadie, ahí mismo incluso mientras hacia el discurso. Me recuerdo que una vez, allá por el año 2006, siendo viceministro de economía paré el financiamiento que se estaba dando

mediante microcréditos. El presidente muy molesto me preguntó: ¿por qué está paralizado esto? Yo lo paré, le contesté, porque le entregamos a los mismos de siempre y no estamos construyendo socialismo. Me recuerdo que estábamos en un carro y que volteó la cabeza para el lado de la ventanilla y no me habló más. Yo pensé: `hoy nos botan a todos (incluso llamé al ministerio)`. Era muy fuerte de carácter, con las mujeres no, era implacable con los hombres. Bueno finalmente llegamos al acto de entrega y preguntó uno por uno si habían recibido con anterioridad el microcrédito y terminó repitiendo las mismas palabras que yo le había dicho”⁴⁹³.

En la misma línea se expresa la periodista acreditada en la Casa del Nariño, Ángela Pinzón para definir al líder colombiano: “Uribe no delegaba. No esperaba recibir las noticias, iba hacia ellas, es decir tomaba la información de la fuente directa. No esperaba a la línea de la información, no respetaba ese orden burocrático... Además, Uribe siempre te llamaba por el nombre, se acordaba de todo, tiene una memoria privilegiada. Y hablaba de todo, no tenía filtro, se mostraba siempre totalmente desestructurado a la hora de las declaraciones. Cuando no le gustaba la pregunta que le hacían o no quería responder, contestaba ‘Siguiente tema...’. A veces solía ser fuerte en la respuesta con algunos periodistas, no con las mujeres”⁴⁹⁴.

Este estilo presidencial, basado en la concentración del poder y en la escasa delegación de funciones, como se observó a lo largo de esta investigación, le permitió acumular RP de distinta naturaleza. Asimismo, el ritmo acelerado impuesto a las decisiones de gobierno, la asunción de las responsabilidades de gobierno en las diferentes coyunturas y una imagen presidencial asociada al trabajo incansable convirtieron a Chávez y a Uribe en dos líderes peculiares para las sociedades venezolana y colombiana.

Este estilo frontal de gobierno les generó a los presidentes RP que dieron lugar a índices significativo de popularidad. En ese sentido, según Bacher, “el estilo confrontativo de Chávez, que irrita a la burguesía y su prensa, se corresponde con estas líneas de su conducta política”⁴⁹⁵, y para Holguín “esas características de Uribe le hicieron ganar el

⁴⁹³ Carlos Rivero. Entrevista con el autor.

⁴⁹⁴ Ángela Pinzón. Entrevista con el autor.

⁴⁹⁵ Norberto Bacher. Entrevista con el autor. Según el docente de la “Escuela de Formación Socialista Manuel Taborda” de PDVSA, “lo señalado ejemplifica algunas características de la conducta y el discurso político de Chávez, que con el tiempo se han consolidado: asumir personalmente las responsabilidades en todas las coyunturas, especialmente las críticas; coherencia entre el decir y el hacer, opuesta y ajena a la tradición

respeto y el reconocimiento de los ciudadanos colombianos”⁴⁹⁶. Es decir, ambos líderes les imprimieron a sus gestiones de gobierno un ritmo vertiginoso, manteniendo la iniciativa política en forma permanente, confrontando de manera directa con oposiciones con escasos recursos de poder.

A su vez, el diálogo inmediato y sin mediaciones con la ciudadanía les otorgaba una centralidad política dentro del sistema político que no contaba con antagonistas de peso y con capacidad de desafiarlos en la arena mediática. En ese sentido, el excelente manejo de los canales de comunicación, como RP de estrategia política de índole comunicacional, les ha permitido a ambos líderes estar omnipresentes en el interior de sus sociedades y mostrarse como el centro de la política. En ese sentido, tanto el venezolano como el colombiano se convirtieron durante sus dos mandatos en faro de atracción para el sistema político y emergieron, en ese marco, como líderes ajenos a la “politiquería” y afincados en su voluntad de transformación social de un sistema injusto (Chávez) e inseguro (Uribe) del que ambos presidentes tuvieron la misión de salvar.

El discurso político de ambos mandatarios en esta etapa fue otro de los RP de estrategia política que hicieron jugar con la finalidad de generar corrientes de opinión favorables a sus proyectos políticos. Las largas emisiones de Chávez en cadena nacional y las conferencias de prensa en diferentes horarios de Uribe fueron también espacios de comunicación en donde ambos líderes les hablaban a sus bases de apoyo en un lenguaje llano y coloquial.

Las oposiciones de ambos gobiernos, durante este segundo mandato, debieron sufrir los embates verbales y políticos de los dos presidentes y no pudieron competir en forma exitosa en la arena electoral. A su vez, ambas oposiciones carecieron, durante el tiempo que abarca esta investigación, de RP significativos para convertirse en barrera de contención de dichos liderazgos presidenciales.

En el caso venezolano, el antichavismo no logró conformar una apuesta partidaria con posibilidades de competir con el líder bolivariano, ya que apostó durante los primeros

burguesa, que utiliza la duplicidad del discurso político para exponer “*lo políticamente correcto*” y encubrir sus programas concretos; diálogo real con el pueblo, que presupone la capacidad autocrítica.

⁴⁹⁶ Paola Holguín. Entrevista con el autor. Y agregaba que “Uribe combinaba la macro y la micro gerencia, no solo tenía la visión general sino que controlaba al detalle la ejecución de las políticas y programas de Gobierno, eso sumado a un trabajo incansable las 24 horas de los 7 días de la semana también formó parte de ese reconocimiento”.

años a deslegitimar al gobierno a partir del fallido golpe militar de 2002, de *lock out* patronal en PDVSA en el 2003 y de la ausencia en la elección legislativa del 2005. En consecuencia, la oposición venezolana no consiguió RP institucionales relevantes durante gran parte de la presidencia chavista, careciendo de posibilidades de enfrentarse en ese ámbito a la maquinaria bolivariana. A partir de la victoria electoral del referendo de 2007, el antichavismo apostó con mayor ahínco sus esfuerzos al campo electoral, aprovechando el desgaste gubernamental y la muestra fehaciente de que Chávez podía ser derrotado en las urnas. Para septiembre de 2010 logró constituirse como una alternativa viable al chavismo ofreciendo una propuesta superadora a la oficial que implicaba el reconocimiento de algunos logros en la gestión de gobierno y la selección, mediante internas abiertas, de sus candidatos únicos por región.

La oposición colombiana se enfrentó en el terreno electoral con muchos sinsabores pero con algunos éxitos. A diferencia del antichavismo, la oposición a Uribe se expresó en el plano institucional durante las dos presidencias, sin provocar momentos de tensión en el sistema político. El antiuribismo estuvo integrado básicamente por las agrupaciones políticas del PDA (previamente PDI) y el PL, quienes durante las dos gestiones de gobierno analizadas obtuvieron RP institucionales en el campo parlamentario y en algunos ejecutivos departamentales, en particular el de Bogotá en manos del primero. Las organizaciones de derechos humanos y la propia guerrilla de las FARC también formaban parte de la oposición a Uribe, aunque la incidencia durante esta segunda etapa del líder colombiano en la Casa del Nariño resultó más pobre. La potencia de las fuerzas opositoras no pudo incidir de manera sustancial en el devenir de la dinámica política colombiana dominada, mediante RP variados, por el líder antioqueño.

Durante sus segundas presidencias, y extendiendo el discurso de carácter fundacional de sus políticas de gobierno, ambos líderes enunciaron dos tipos de democracia alternativas a la representativa (RP de estrategia política). En el caso de Chávez, el llamado a la construcción de una democracia participativa desde el inicio de su gobierno, se sostuvo en esta segunda etapa a partir de los referendos reeleccionistas y la continua prédica por una democracia con valores socialistas. En cuanto a Uribe, en los últimos años de su gobierno alentó la constitución de una democracia basada en el “estado de opinión” como fase superior del Estado de Derecho y sostenido en el escrutinio popular expresado en el día

a día por los propios ciudadanos. Este “estado de opinión”, según el líder antioqueño, tendría rango superior frente a la constitucionalidad de las leyes, convirtiendo al pueblo en el soberano decisor de las políticas del Estado.

En esta última etapa, a su vez, ambos líderes han generado nuevos RP institucional de índole partidario: en el caso de Chávez, el PSUV; y en el caso de Uribe, el PU. A pesar de que las nuevas agrupaciones partidarias creadas por ambos presidente tuvieron objetivos similares en cuanto a unificar los apoyos en torno a una sola estructura, Chávez exigió que los aliados se integren al PSUV disolviendo sus partidos, en tanto Uribe no reclamó dicha actitud a sus socios políticos. Sin embargo, y a pesar de crear nuevos RP partidario, ambos líderes mantuvieron durante su ejercicio del poder una relación directa con sus sociedades. La generación de dicha estructura partidaria emergía como una herramienta de poder que tenía como propósito agrupar los respaldos políticos, más que officiar como un enlace entre el líder y sus seguidores. La relación entre ambos presidentes y sus sociedades siguió manteniendo los canales históricos (*Aló, Presidente*, en el caso de Chávez, los CC en Uribe) que fueron construidos durante el primer mandato.

Durante sus segundas presidencias, ambos líderes avanzaron, al igual que en la primera gestión, en reformas en el texto constitucional con la finalidad de extender sus mandatos. A pesar de que los resultados fueron distintos, el propósito de Chávez y Uribe fue perpetuar su poder a partir de reformas reeleccionistas. En el caso del venezolano, luego de la victoria electoral de diciembre de 2006 en la que obtuvo la primera reelección, Chávez, quien en ese momento contaba con abundantes RP institucionales como el dominio absoluto del parlamento y el control de la justicia, avanzó en una reforma constitucional que implicaba un conjunto de leyes que tenían como objetivo la implantación del socialismo del siglo XXI y la reelección indefinida. A pesar de los antecedentes que mostraban la imbatibilidad del líder bolivariano en el terreno electoral, Chávez no pudo conseguir la reforma propuesta, ya que fue derrotado en el referendo por un porcentaje inferior al 2%. Los datos evidenciaban, como se explicitó en forma precedente, que la derrota chavista provenía más de una sustancial merma en la cantidad de votos propios que de una inclinación general de la población hacia el archipiélago opositor. Sin embargo, luego de la recuperación en las elecciones regionales de 2008, el primer mandatario insistió con el referendo reeleccionista. Esta vez, con el propósito de no confundir a la sociedad, y

en especial a sus seguidores, circunscribió la propuesta a la reelección indefinida. A mediados de febrero de 2009 se realizó la compulsa con un claro triunfo del presidente quien, de esa manera, se aseguró un RP (de estrategia política devenido en institucional) indispensable para asegurar la permanencia de su LP.

Uribe, por su parte, llevó adelante un similar proceso reformista que no tuvo el mismo resultado que el de su par venezolano. La propuesta de referendo realizada por el presidente durante el 2009 apuntaba a aprobar una enmienda que habilitara una nueva reelección por cuatro años más, aunque no de manera indefinida, sino circunscripta a un solo periodo. Para ello, el proyecto debía sortear dos instituciones como eran el parlamento (RP institucional de Uribe) y la Corte Constitucional. Las dos cámaras del legislativo colombiano dieron el visto bueno, pero el poder de justicia vetó la posibilidad de realización del referendo arguyendo vicios en sus formas. De todas maneras, debe indicarse que, a diferencia de Chávez, Uribe no contaba para la reforma reeleccionista con la misma homogeneidad interna y el favor de los principales aliados internos y externos. Es decir, dentro de la coalición de gobierno del primer mandatario colombiano había sectores que se oponían a una nueva reelección. Ciertos países aliados, como EEUU, también se habían manifestado en contra de tal posibilidad.

Para finales de febrero de 2010, la Corte Constitucional, que ya había abierto la posibilidad para la reelección anterior de 2006, sepultó la alternativa de un nuevo mandato de Uribe. La justicia, en ese marco, se hacía eco de los resquemores que presentaba dicho intento de reforma constitucional en una buena parte de los actores de peso institucional y aliados al propio gobierno uribista. Es decir, a pesar de las diferencias en el instituto legal a modificar (reelección indefinida en el caso venezolano, reelección por dos períodos en el colombiano), la vocación de perdurar en el poder se asemejaba en ambos líderes. El resultado final del proceso determinó que Chávez pudiera acceder a la reelección indefinida y Uribe no, diferencia que se explicitaba a partir de las controversias que provocaba dicha reforma en el interior de la coalición de gobierno uribista. La homogeneidad respecto de la continuidad de Chávez en el interior del universo oficialista venezolano (ausente en el intento de 2007) diferencia dicha experiencia de la colombiana, donde al interior del propio uribismo se alzaban voces en contra de la reforma reeleccionista.

Esta voluntad presidencial de prolongar sus mandatos equipara las experiencias de ambos líderes y se explicita a partir de la manutención del RP de apoyo popular/ ciudadano que se expresaba en la popularidad medido a través de diversas investigaciones y encuestas de opinión, que tanto Chávez como Uribe concitaban en sus sociedades y del importante respaldo electoral (RP de apoyo popular/ ciudadano) entre sus sociedades, la que se vio reflejada en las distintas elecciones realizadas durante el periodo.

El líder venezolano contó con una adhesión popular que, de acuerdo con las distintas investigaciones efectuadas durante esos años, alcanzó un promedio superior al 60%⁴⁹⁷. De las 13 elecciones realizadas durante los años de estudio, Chávez y sus candidatos se impusieron en doce, perdiendo solamente el referendo reeleccionista de diciembre de 2007. Las victorias chavistas fueron en tres elecciones presidenciales (1998, 2000 y 2006), cuatro reformas constitucionales (tres consecutivas durante 1999 y una en el 2009), dos elecciones parlamentarias (2005 y 2010), dos elecciones regionales (2004 y 2008) y un referendo revocatorio (2004). En las tres elecciones en donde Chávez encabezó la elección como candidato a presidente, el triunfo del líder bolivariano mostró un promedio del 59% de los votos (56,2% en 1998, 59,7% en el 2000, 59,1% en el 2004 y 62,8% en el 2006)⁴⁹⁸, superior a la media de las elecciones ganadas por varios líderes sudamericanos contemporáneos.

En cuanto a Uribe, el líder antioqueño cosechó durante sus años de mandato una adhesión promedio del 71%⁴⁹⁹ que se mantuvo durante los ocho años de gobierno sin grandes altibajos como en el caso de Chávez. De las seis elecciones efectuadas durante su gobierno, el primer mandatario colombiano triunfó en cinco y sólo fue derrotado (no por los números absolutos obtenidos, sino por no superar el umbral requerido) en el referendo de 2003. En las dos elecciones presidenciales Uribe no necesitó de una segunda vuelta electoral, ya que en ambas votaciones superó el 50% necesario para acceder al cargo (53%

⁴⁹⁷Fuentes: Latinobarómetro en Corporación Latinobarómetro, Informe 2011. En línea en: <<http://es.scribd.com/doc/70688598/INFORME-DE-LATINOBAROMETRO-2011>>, Datanálisis, en línea en: <<http://www.slideshare.net/plumacandente/encuesta-datanalisis-mayo-2010>> y Ecoanalítica en línea en: <http://www.ecoanalitica.net/newsite/uploads/im_07_2009_08_es.pdf>.

⁴⁹⁸ Datos obtenidos en base al Consejo Nacional Electoral, en: <www.cne.gov.ve>.

⁴⁹⁹ La mayoría de las encuestas de opinión realizadas en el periodo muestra un nivel similar de popularidad de Uribe. Una de las fuentes es Latinobarómetro en Corporación Latinobarómetro, Informe 2011. En línea en: <<http://es.scribd.com/doc/70688598/INFORME-DE-LATINOBAROMETRO-2011>>.

en el 2002 y 62% en el 2006) convirtiéndose en el primer presidente democrático del país en lograrlo.

Ambos líderes han mantenido una importante popularidad (RP de apoyo popular/ciudadano) en el interior de sus sociedades que les ha permitido gobernar por más de un periodo. Los índices de aceptación social, superiores al 60% en ambos casos, y el porcentaje de votos obtenidos durante sus mandatos, evidencia que tanto Chávez como Uribe gozaron de una adhesión popular que resultaba superior, en cuanto a continuidad en el tiempo, a sus pares de Sudamérica. Es cierto que los niveles de abstención electoral mostraban un grado significativo de ausentismo (que también estaba presente en los años previos a la asunción de ambos mandatarios) y que en parte se explicaba debido a que en ambos sistemas políticos las elecciones son optativas, sin embargo la popularidad de ambos líderes se mantuvo compacta a lo largo de los años analizados. A pesar de que Uribe no logró obtener una nueva reelección, el apoyo social a su gobierno y a la reforma mostraba que la sociedad no hubiera resultado ser un escollo para su aprobación. Una diferencia que resultaba de ese apoyo social era que en el caso de Uribe se presentaba más pasiva que en el de Chávez, ya que el líder venezolano utilizó a este RP como una herramienta de movilización y presión frente a los históricos grupos de poder en su país.

El objetivo central de esta tesis fue describir de qué manera Chávez y Uribe generaron y utilizaron RP para llevar adelante sus gobiernos. En este sentido, observamos cómo ambos líderes usaron recursos de poder similares, a pesar de las diferencias ideológicas y de los modelos económicos-sociales que implementaron durante sus dos mandatos. A lo largo de sus dos presidencias, realizaron una importante concentración de poder basada en la permanente utilización de los RP institucionales, partidarios y financieros, y de la generación de nuevos RP (de estrategia política) vinculados a un modo particular de ejercer el poder basado en el contacto permanente y directo con la ciudadanía, la utilización de herramientas legales de corte personalista (como ser decretos, leyes habilitantes, estados de excepción) y una forma de gobernar sus países que los tornó omnipresentes a lo largo de los años de mandato. El poder de decisión en la cúspide del gobierno, la generación de RP de estrategia política que les ha permitido transformar ambas sociedades, reelegirse por más de un periodo y responder a las históricas demandas ciudadanas, junto a la generación de RP

de índole comunicacional como fueron *Aló, Presidente* y los Consejos Comunales, y la poca utilización de los otros poderes de Estado para llevar adelante planes de gobierno, formaron parte de un estilo de poder presidencial que asemeja a los LP de Chávez y Uribe.

El amplio respaldo electoral (RP de apoyo popular/ ciudadano) obtenido durante sus dos presidencias permitió que ambos liderazgos pudieran llevar adelante procesos de transformación, económicos y sociales para el caso de Chávez y de seguridad para el caso de Uribe. La eficacia de la acción de gobierno (RP de estrategia política), en ese sentido, configuraba otro de los elementos que permitía comprender la popularidad de ambos mandatarios.

En ambos procesos, la existencia de un actor que deviene decisivo en esta transformación, las Fuerzas Armadas, permite comprender la profundidad de estos cambios (superior en el caso de Chávez, como se observó) y la modalidad “restrictiva” en la que ambos se desarrollaron. El apoyo popular/ ciudadano, movilizadado en el caso de Chávez y pasivo en el de Uribe, se convirtió en otro de los sostenes fundamentales de estos dos procesos. De hecho, en el caso del bolivariano cuando sus dos RP más importantes (los militares y el apoyo popular movilizadado) no se encontraron alineados, Chávez sufrió derrotas en el campo institucional (11 y 12 abril de 2002) y en el electoral (diciembre de 2007).

Los dos primeros mandatarios contaron como RP institucionales con sus parlamentos, con la mayoría de las gobernaciones, con un control sobre el poder judicial (superior en el caso de Chávez) y con un partido conformado para unir fuerzas detrás de sus figuras, lo que les permitió gobernar con herramientas de carácter decisionistas y con escasas mediaciones institucionales. En ese sentido, y reforzando la idea de los párrafos precedentes, la modalidad de concentración de la autoridad política, como forma de ejercer el poder en ambos presidente, aflora como central para comprender este tipo de LP⁵⁰⁰. La necesidad de generar un nuevo tipo de institucionalización, que tuvo como propósito realizar un vasto proceso de ampliación de derechos (y que generó resistencia en el status quo anterior), dio lugar a la generación de una concentración del poder por medio de la cual ambos mandatarios pudieron transformar sus sociedades. Es decir, es a partir de esta

⁵⁰⁰ Según González Fernán (2010: 14): “La concentración personalista del poder en Uribe representa la ruptura con la anterior historia política del país, aunque con algunos rasgos de continuidad con el pasado basada en una rearticulación de poderes regionales y locales y de la fusión de estilos políticos”.

concentración (como modalidad de ejercer el poder) que tanto Chávez como Uribe lograron crear una nueva institucionalidad política asentada en una transformación de sus sociedades que afectaron intereses concretos (ya que restringieron derechos ciudadanos) y que fueron demandas históricas de sus poblaciones.

Recapitulando, ambos líderes utilizaron durante sus dos presidencias RP similares y generaron RP análogos para fortalecer su propio LP y llevar adelante importantes cambios en el interior del sistema político. La concentración de poder en sus manos, la escasa mediación institucional, la ampliación de derechos ciudadanos anhelados por décadas en sus países (todos RP de estrategia política) y los altos grados de popularidad (RP de apoyo popular/ ciudadano) expresados en las elecciones desarrolladas durante el proceso, se convierten en características que asimilan en su acción de gobierno a Chávez y Uribe. A pesar de sus diferencias ideológicas y de orientación de las políticas de gobierno y de sus distintos aliados locales e internacionales, ambos mandatarios comparten una similar forma de ejercitar el poder y de llevar adelante las transformaciones que las sociedades venezolana y colombiana anhelaban durante las últimas décadas. Otra característica que también los convierte en LP similares radica en la popularidad que gozaron durante su gestión de gobierno. A pesar de que indagar sobre cuáles fueron las razones que explicaron la fortaleza de ambos liderazgos y de su alta popularidad no fue el propósito de esta investigación, aquí se sugieren algunas conjeturas sobre los porqués de esta fortaleza.

A lo largo de esta investigación, hemos identificado que la popularidad, como RP de apoyo popular/ ciudadano de Chávez y Uribe, proviene fundamentalmente de un proceso de ampliación de derechos históricamente demandando por las sociedades venezolana y colombiana. En cuanto a Chávez, la ampliación de derechos sociales y económicos realizada a lo largo de los doce años de estudio se expresó en diferentes iniciativas y acciones gubernamentales. Sin lugar a dudas, las MB representaban el vehículo principal por el cual el líder bolivariano llevó adelante esta transformación social. Estas iniciativas oficiales, que dependen directamente del propio presidente para su implementación (un RP saliente en manos presidenciales), se convirtieron en estos años en el principal canal de distribución social por parte del Estado venezolano. El acceso a un amplio tejido de servicios sociales básicos (educación, salud y vivienda, entre las importantes), por parte de

una vasta población, explica los grados de apoyo popular. A partir del control de un RP financiero fundamental como era PDVSA, el primer mandatario pudo llevar adelante este proceso de reformas sociales históricas para Venezuela.

En el caso de Uribe, esta ampliación de derechos se realizó en el plano civil. La recuperación de la totalidad de los municipios del país, junto a la liberación de carreteras para el tránsito de personas y mercancías, la disminución de homicidios, de secuestros extorsivos y de asesinatos masivos, formaron parte de esta ampliación de derechos civiles demandados históricamente por un país acostumbrado a la presencia de grupos ilegales asociados al narcotráfico, al paramilitarismo y a la guerrilla. Este incremento de derechos ciudadanos fue producto de un mejoramiento de los equipos, del armamento, de la logística militar y de la voluntad política del presidente colombiano (todos RP de estrategia política) de avanzar sobre estos grupos que durante décadas ejercieron un significativo dominio sobre una vasta geografía del país. Este control territorial por parte del Estado dio lugar a un aumento de la inversión de empresas extranjeras y un incremento del turismo nacional e internacional, como hacía décadas no ocurría en el país.

Como se explicitó antes, para llevar adelante este proceso de ampliación de derechos ambos líderes tuvieron a su disposición abundante RP institucionales, financieros y partidarios que les garantizaron la materialización de estos cambios. En el caso venezolano, Chávez contó con el control de las Fuerzas Armadas, de los poderes legislativo (abrumadora mayoría en el segundo mandato) y judicial (luego del aumento de sus miembros en 2004), de la mayoría de las gobernaciones y alcaldías, en términos de poderes institucionales, del control de PDVSA, la principal fuente de financiamiento estatal del país y del PSUV, el principal partido político del país, del cual es su conductor.

En el caso de Uribe, los RP del líder antioqueño también se mostraron cuantiosos. En términos institucionales, contó con el control del parlamento (no con la misma comodidad que el venezolano), con la mayoría de las gobernaciones (junto a los partidos aliados), con las Fuerzas Armadas (pilar en la guerra contra la guerrilla), el PU a partir de su creación en el año 2005 y con una parte del poder judicial (con excepción de la CSJ y con idas y vueltas con la Corte Constitucional). A pesar de que no controlaba en soledad los recursos financieros del Plan Colombia, el líder antioqueño contaba con ese dinero para modernizar las fuerzas de seguridad.

A través de la utilización de estos recursos de poder, Chávez y Uribe iniciaron este proceso de incrementación de derechos ciudadanos. Sin embargo, en el transcurso de esta extensión, ambos gobiernos también generaron en forma paralela un proceso de restricción de derechos, que para el imaginario social de ambos países pareció presentarse como inferior al crecimiento de derechos obtenidos por la propia acción de gobierno.

En el caso de Chávez, esta restricción se expresó en la limitación de principios sustanciados con los valores liberales enmarcados dentro de un conjunto denominado de derechos civiles como la propiedad privada, la expropiación de empresas privadas, las restricciones a la libertad de expresión (cierre de medios opositores) y de marchas opositoras (con amenazas de represión), la injerencia del Estado en vastos ámbitos de la vida política, la restricción de derechos ligados al ámbito de la producción y el comercio, entre las más importantes⁵⁰¹. En el caso colombiano, esta restricción de derechos se observa en la militarización de la justicia, que se expresó en los “falsos positivos”, los allanamientos en casas particulares, el espionaje del DAS y de un conjunto de medidas de intervención sobre las libertades individuales que han generado protestas por parte de organizaciones de derechos humanos a nivel nacional e internacional.

Esta investigación intentó demostrar que dos liderazgos con disímiles modelos económicos, políticos y sociales, ideologías antagónicas, distintas bases de apoyo, diferentes aliados nacionales e internacionales, pueden tener una misma forma de ejercer el poder, mediante la utilización y generación de recursos de poder presidencial similares. Esta tesis planteó apenas un sendero por el cual transitar en el camino hacia la producción de un conocimiento académico en un área poco sistematizada de la ciencia política.

⁵⁰¹ Según Modesto Guerrero: “La existencia fáctica de un Partido Militar que desde adentro del régimen tiene una tentación al Bonapartismo tiende inevitablemente a la restricción de derechos. De todas formas esta manifestó castigando a los medios de derecha o izquierda que critican al gobierno desde 2008. Pero ¿cuánto casos? De 660 medios comunitarios hubo 74 casos y de 182 medios privados, fueron 17. Estos castigos implicaron que esos medios se vieron afectados en la publicidad oficial, en subsidios en derechos de financiamiento; en la competencia del espectro... Pero luego de un tiempo el gobierno se los devuelve”.

ANEXOS

CUADROS

CONDICIONES DE LLEGADA AL GOBIERNO		
VARIABLES	CHAVEZ	URIBE
Sistema de partidos previo a la asunción de ambos líderes	Bipartidista (Pacto de “Punto Fijo”)	Bipartidista (Pacto de “Frente Nacional”)
Partidos	Acción Democrática y Copei	Partido Liberal y Partido Conservador
Antecedente de populismo	No	No
Interrupción militar en los últimos 40 años	No	No
Contexto de asunción	Crisis económica- social / Caracazo / Golpe 1992	Crisis de seguridad / post 11/9/01 / Fracaso del Caguán
Coalición Opositora al sistema político	Polo Patriótico (alianza de partidos)	Primero Colombia (alianza de partidos)

LAS PRESIDENCIAS		
VARIABLES	CHAVEZ	URIBE
Color político del Parlamento	Mayoría Propia	Mayoría propia (con coalición)
Oposición	Partidos tradicionales/ Fedecamaras y CTV / Medios de comunicación tradicionales	Polo Democrático y Partido Liberal/ FARC
Apoyos internacionales	Rusia, China e Irán	EEUU
Apoyos regionales	MERCOSUR, ALBA, Unasur	Pacto Andino
Modificación a la constitución	Si, 2 veces (ambas incluyó la reelección)	Si, una vez (incluyó la reelección)
Referendos	Si 6 elecciones (5 triunfos -3 en 1999 y 2 en 2004 y 2009) y una sola derrota (2007)	Si 1 elección (2003) con derrota por no alcanza el umbral
Años de gobierno	1999- 2013	2002- 2010
Duración de Mandato	6 años con reelección indefinida y con revocatoria de mandato. Mayoría Simple	4 años con reelección inmediata y sin revocatoria. Mayoría Absoluta
Origen social del líder	Sector popular	Sector alto/ terrateniente
Antecedente	No tiene/ Militar/ Outsider	Partido Liberal/ luego Outsider

partidario del líder		
Base de apoyo	Sectores populares y Fuerzas Armadas	Sectores medios y altos, empresarios, Fuerzas Armadas

RECURSOS DE PODER (RP) EN LAS PRESIDENCIAS		
RP	CHAVEZ	URIBE
Institucional	<p><i>Parlamento y provincias</i> Asamblea Unicameral (mayoría absoluta (1999- 2005) y mayoría calificada (2006- 2010) Mayoría de gobernadores (desde 1999) Mayoría de alcaldías (desde 1999)</p> <p>FFAA (desde 1999)</p> <p><i>Partidarias</i> MVR (desde 1997) PP (desde 1998) PSUV (desde 2007)</p>	<p><i>Parlamento y provincias</i> Bicameralismo parlamentario (mayoría absoluta en ambas cámaras con aliados (desde 2002) Mayoría de gobernadores (desde 2003) Mayoría de alcaldías (desde 2003)</p> <p>FFAA (desde 2002)</p> <p><i>Partidarias</i> Primero Colombia (desde 2002) Partido de la U (PU) (desde 2005)</p>
Social	Movimientos Sociales Comunitarios Consejos Comunales	Empresarios de Comunicación tradicionales
Financiero	PDVSA (desde 2003) Nacionalizaciones (2008- 2009)	Plan Colombia (desde 2002) Plan Patriota (2005)
Estrategia política	<p><i>Comunicacionales</i> Aló Presidente (desde 2001) Aporrea (desde 2003) Telesur (desde 2003) Medios comunitarios (desde 2003)</p> <p><i>Maniobras políticas (reformistas)</i> Reforma constitucional (1999) Reelección inmediata (1999) Reelección indefinida (2009)</p>	<p><i>Comunicacionales</i> Concejos Comunales (desde 2002) Medios tradicionales (desde 2002)</p> <p><i>Maniobras políticas (reformistas)</i> Referendo “Antipolítica” (2003) Reelección inmediata (2005) Reelección por dos periodos (2010)</p>

Apoyo popular/ ciudadano	Total de elecciones durante el periodo: 13 (12 victorias -3 presidenciales, 2 legislativas, 2 regionales, 5 referendos- y 1 derrota en referendo)	Total de elecciones durante el periodo: 6 (5 victorias - 2 presidenciales, 1 legislativa, 2 regionales- y 1 derrota debido a no alcanzar el umbral electoral)
	Promedio de popularidad en el periodo: 60%	Promedio de popularidad en el periodo: 71%

Chávez

VARIABLES	1998	2009
Pobreza	44,7%	24,6%
Pobreza extrema	18,9%	6,6%
Desempleo	15,3%	7,9%
Índice Gini	0,5%	0,39
Educación básica completa	81%	95,4%
Salario mínimo (medido en dólares)	183	446
Índice de desarrollo humano	0,72	0,82
Mortalidad infantil (por mil nacimientos)	21,4	13,7
Impuesto al Valor Agregado (IVA)	16,5%	12%
Distribución de alimentos desde el inicio de la MB Mercal (Medido en toneladas métricas)	382.860 (2003)	1.492.263 (2008)
Acceso al agua potable y saneamiento	80%	92% (2007)

Datos elaborados a partir de: INE, CEPAL, BCV, El Troudi (2010) y López Maya (2010).

Uribe

VARIABLES	2002	2008
Numero de homicidios	28.837	16.140
Víctima de masacres	680	169
Número de secuestros	2.882	392
Atentados terroristas	1645	145
Homicidios por candidato en los municipios (anual)	52	37
Homicidios de sindicalistas	99	16
Homicidios de alcaldes y concejales	89	16
Cultivos ilícitos	102.000	68.000
Extranjeros que visitan Colombia (en millones)	1.100	2.500
Inversión extranjera directa (millones de dólares)	1.025	4.482

Datos elaborados a partir de: DANE, BRC, CICRI Dijin, Página de Presidencia, Garzón Triana (2011), Yamhure (2009).

PORCENTAJE DE VOTOS ELECCIONES CON CHAVEZ DE CANDIDATO	
ELECCIONES PRESIDENCIALES	PORCENTAJE
1998	56,2%
2000	59,7%
2006	62,8%

PORCENTAJE DE VOTOS ELECCIONES CON URIBE DE CANDIDATO	
ELECCIONES PRESIDENCIALES	PORCENTAJE
2002	53%
2006	62,3%

ABSTENCIÓN ELECTORAL PRESIDENCIAL EN VENEZUELA (1958-2006)	
PRESIDENCIAL	ABSTENCIÓN
1958	6,5%
1963	7,7%
1968	5,6%
1973	3,4%
1978	12,4%
1983	12,2%
1988	18,1%
1993	39,84%
1998	36,54%
2000	43,69%
2006	25,3%

ABSTENCIÓN ELECTORAL EN VENEZUELA DURANTE CHAVEZ	
REFERENDOS	ABSTENCIÓN
Convocatoria Asamblea Nacional Constituyente abril de 1999	62,1%
Elección de constituyentes, junio de 1999	53,7%
Reforma Constitucional, diciembre de 1999	54,7%
Revocatoria de mandato presidente Chávez agosto de 2004	30%
Referendo Constitucional de 2007	44,1%
Referendo Aprobatorio de la Enmienda Constitucional de 2009	29,6%

ABSTENCIÓN ELECTORAL PRESIDENCIAL EN COLOMBIA (1958-2006)
--

PRESIDENCIAL	ABSTENCIÓN
1958	42,1%
1962	51,2%
1966	59,9%
1970	47,5%
1974	41,9%
1978	54,9%
1982	50,2%
1986	53,7%
1990	56,6%
1994	66,3% (56,6% en 2° vuelta)
1998	48,9%
2002	53,5%
2006	54,9%

Todos los datos electorales se obtuvieron en base a: para el caso venezolano: www.cne.gov.ve y para el colombiano: www.registraduria.gov.co

ABREVIATURA

Venezuela

AC: Asamblea Constitucional

AD: Acción Democrática

AP: Aló presidente

CNE: Consejo Nacional Electoral

COPEI: Comité de Organización Política Electoral Independiente

INE: Instituto Nacional de Estadística

MB: Misiones Bolivarianas

MBR: Movimiento Bolivariano Revolucionario

MUD: Mesa de Unidad Democrática

MVR. Movimiento Quinta República

PDVSA: Petróleo de Venezuela Sociedad Anónima

PPT: Partido Patria Para Todos

PCV: Partido Comunista de Venezuela

PODEMOS: Partido por la Democracia Social

PSUV: Partido Socialista Unido de Venezuela

TSJ: Tribunal Supremo de Justicia (Venezuela)

Colombia

AUC: Autodefensas Unidad de Colombia

CC: Consejos Comunales

DAS: Departamento Administrativo de Seguridad

DANE: Departamento Administrativo Nacional de Estadística

FARC: Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia

FGN Fiscalía General de la Nación

FEA: Familias en Acción

NP: Nuevo Partido

PC. Partido Conservador

PDA: Polo Democrático Alternativo
PDI: Polo Democrático Independiente
PL: Partido Liberal
PP: Plan Patriota
PU: Partido de la “U”
PSD: Política de Seguridad Democrática
TLC: Tratado de Libre Comercio

BIBLIOGRAFÍA

Abal Medina, Juan Manuel (comp.) (2006): *“Los senderos de la nueva izquierda partidaria”*, Buenos Aires, Prometeo.

Acosta Medina, Amylkar (2009): “El estado del malestar” en *Por qué no volver a reelegir al presidente Uribe*, Bogotá, Fundación Oveja Negra

Acosta, Yorelis J (2007): *La Protesta Política en Venezuela (2001-2007)*, Psicología Segunda Época Volumen XXVI N° 2.

Alcántara Saez, Manuel (2008): “La escala de la izquierda. La ubicación ideológica de presidentes y partidos de izquierda en América Latina” en *Nueva Sociedad* N° 217, Buenos Aires.

Alcántara Sáez, Manuel y María Laura Tagina (2011). “Las elecciones del bicentenario: un análisis comparado”, en Alcántara Sáez y Tagina, eds., *América Latina: política y elecciones del bicentenario (2009-2010)*, Madrid: Centro de Estudios políticos y constitucionales.

Amorim Neto, Octavio (1998): *Cabinet Formation in Presidential Regimes: An Analysis of Latin American Countries*. Trabajo presentado en LASA, Illinois.

Aranguibel, Alberto (2007): *Reflexiones chavistas*, Caracas, El perro y la rana.

Araujo Muñoz, Gonzalo (2009): *Comportamiento electoral de las fuerzas políticas en Colombia, una mirada transversal 1991-2007*, Bogotá, Corporación siglo XXI.

Arbeláez Herrera, Angela María (2006) *Análisis de la efectividad de la política de defensa y seguridad democrática del presidente Álvaro Uribe Vélez*, Ciencias Políticas –UPB

Universidad Pontificia Bolivariana Centro Integrado para el desarrollo de la investigación – CIDI, Bogotá.

Arboleda Arango, María Alejandra y Clavijo Romero, Bibiana Andrea (2009): *Reforma Política y Reelección*, Departamento de Investigación y Análisis Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga Bogotá.

Arditi, Benjamín (2008): “Argumentos acerca del giro a la izquierda en América Latina ¿Una política post-liberal?”, *Latin American Research Review (LARR)*, Vol. 43, No. 3, pp. 59-81.

Arenas, Nelly (2006) “El proyecto chavista. Entre el viejo y el nuevo populismo”, *Desacatos*, N° 22, Caracas, pp. 151-170.

Azcargorta Jesús e Hernández Ivo (2007): “PSUV: ¿Partido Hegemónico o Partido Único?” *Temas de Coyuntura* N° 56, Caracas, pp. 7- 23.

Aznarez, Carlos (2000): *Los sueños de Bolívar en la Venezuela de hoy*, Tafalla, Txalaparta.

Azzellini, Darío:

- (2008): “¿Hacia dónde va Venezuela?”, *Metapolítica* N° 59

- (2008): “La Revolución Bolivariana: o inventamos o erramos. Claves para leer el proceso de transformación social venezolano” *Tema Herramienta* N° 36, Caracas.

Barber, James (1977): *The Presidential Character: Predicting Performance in the White House*. Englewood Cliffs: Prentice Hall.

Barrett y Daniel Chavez (eds.) (2005): *La nueva izquierda en América Latina. Sus orígenes y trayectoria futura*, Bogotá, Norma.

Behar, Olga (2011): *El clan de los doce apóstoles. Conversaciones con el mayor Juan Carlos Meneses*, Bogotá, Icono editorial.

Biardeau Javier:

- (2007): “¿El proceso de transición hacia el nuevo socialismo del siglo XXI?: Un debate que apenas comienza”, *Revista Venezolana de Economía y Ciencias Sociales*, Caracas, Vol.13 N° 2.
- (2009): Del árbol de las tres raíces al “Socialismo Bolivariano del Siglo XXI” ¿una nueva narrativa ideológica de emancipación?”, *Revista Venezolana de Economía y Ciencias Sociales*, Caracas, vol. 15, N° 1, pp. 57-113.

Biderbost, Pablo y de la Cruz Hermida, Giselle (2008): “Comportamiento electoral, exclusión social y propuestas constitucionales. El escenario político en Perú y Venezuela durante las reformas estructurales”, *Studia Politice* 15, Córdoba.

Bilbao, Luis (2002): *Chávez y la Revolución Bolivariana. Conversaciones con Luis Bilbao*, Buenos Aires, Capital Intelectual SA.

Blanco Castro Catherine (2011): *Análisis de la relación legislativo-ejecutivo durante el segundo período de Álvaro Uribe Vélez enfocado en el papel de oposición política del Polo Democrático Alternativo (2006-2010)*, Bogotá, Universidad Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, Facultad de Ciencia Política y Gobierno.

Blanco Muñoz, Agustín,

- (1998): *Habla el Comandante Hugo Chávez*, Caracas, Universidad Central Venezolana.
- (2003): *Habla Jesús Urdaneta Hernández. El comandante irreductible*, Caracas, Universidad Central Venezolana.

Bond, Jon y Fleisher, Richard (1990): *The president in the legislative arena. American politics and political economy*, Chicago, University of Chicago.

Bonilla-Molina Luis y El Troudí, Haiman (2004): *Historia de la Revolución Bolivariana. Pequeña crónica 1948- 2004*, Universidad Bolivariana de Venezuela, Caracas.

Botero, Felipe y Méndez, Lucía (2008): “¿Reír o llorar? El drama del conflicto y la resiliencia de la economía en Colombia, 2007”, en *Revista de Ciencia Política*, Vol. 29, N° 1, Bogotá, pp. 121- 145.

Botero, Felipe y Vélez Vieira, Cristina (2009): “¿Reelegir o no reelegir? Reforma del sistema de elección presidencial en Colombia” Ponencia elaborada para presentar en el congreso internacional de la Asociación de Estudios Latinoamericanos (LASA), Río de Janeiro, Brasil.

Botero, Felipe y Tickner, Arlene (2011): *Colombia y el mundo 2010. Opinión pública y política internacional*, Bogotá, Ediciones Uniales

Botero Campuzano, Libardo (comp.) (2008): *Los potros de bárbaros atilas. La razón de la inamovible del Presidente Uribe en el debate sobre el llamado “Acuerdo Humanitario”*, Bogotá, Fundación Centro de Pensamiento Primero Colombia.

Borón, Atilio (2007): *Reflexiones sobre el poder, el Estado y la revolución. El tema del poder en el pensamiento de izquierda en América Latina*, Córdoba, Espartaco.

Borón Atilio, Gambina, Julio y Minsburg (1999): *Tiempos Violentos. Neoliberalismo, globalización y desigualdad en América Latina*, Buenos Aires, Eudeba- Clacso.

Boersner Demetrio (2005): “Gobiernos de izquierda en América Latina. Tendencias y experiencias” *Nueva Sociedad* N° 197, Buenos Aires.

Bosoer, Fabián y Leiras Santiago (1999): "Posguerra fría, 'neodecisionismo' y nueva fase del capitalismo: el alegato del Príncipe-gobernante en el escenario global de los '90", en Borón, Atilio y otros (comp.) *Tiempos Violentos. Neoliberalismo, globalización y desigualdad en América Latina*, Buenos Aires, Eudeba- Clacso.

Britto García, Luis (2009): *Dictadura mediática en Venezuela. Investigación de unos medios fuera de toda sospecha*, Caracas, Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información.

Burchardt Hans Jurgen (2006): “La miseria social de Hugo Chávez: La política socioeconómica de la V República”, *Sociedad Hoy*, N° 10, Concepción.

Cabrera Galvis, Mauricio, Acosta Medina, Amylkar y López Caballero (2009): *Porque No volver a reelegir al presidente*, Bogotá, Editorial Oveja Negra.

Cardozo, Diana y Hernández (2006): “Las estrategias electoral en las elecciones legislativas del 12 de marzo de 2006”, *Colombia Internacional* N° 64, Bogotá, pp. 168- 181.

Castañeda, Jorge (2006): “Latin America’s Left Turn”. *Foreign Affairs*, Vol. 85, N° 3, pp. 28-43.

Castellanos, Rafael Ramón (2010): *Hugo Chávez Frías y la revolución bolivariana*, Caracas, Fundación Editorial El Perro y La Rana.

Cavarozzi, Marcelo y Abal Medina, Juan Manuel (2002): *El asedio a la política. Los partidos latinoamericanos en la era neoliberal*”, Rosario, Homo Sapiens.

Cceeu- Coordinación Colombia (2004): “El talante autoritario. Derechos civiles y políticos y DIH, *Reelección el embrujo continúa. El segundo año de gobierno de Álvaro Uribe*, Bogotá, pp. 187- 198.

Cepeda, Iván y Rojas, Jorge (2009): *A las puertas del Ubérrimo*, Bogotá, Debate.

Chávez, Hugo

- (2009) “El PSUV, la militancia y el papel de la Juventud”, *Alo Presidente Teórico* N° 3, Teatro Teresa Carreño, 25 de junio de 2009

- “Discurso en el Poliedro de Caracas, 19 de abril 2007”

- (2007): *Esta Revolución no tiene vuelta atrás*, Ministerio del Poder Popular para la comunicación y la información
- (2006): “Discurso en el Teatro Teresa Carreño, 15 de diciembre de 2006”
- (2005): *Discursos Presidenciales 1999* “Año de la Refundación de la República”, Caracas, Ediciones de la Presidencia de la República.
- (2005): *Discursos Presidenciales 2000* “Año de la relegitimación de poderes”, Caracas, Ediciones de la Presidencia de la República.
- (2005): *Discursos Presidenciales 2001* “Año de las Leyes Habilitantes”, Caracas, Ediciones de la Presidencia de la República.
- (2005): *Discursos Presidenciales 2002* “Año de la Resistencia Imperialista”, Caracas, Ediciones de la Presidencia de la República.
- (2005): *Discursos Presidenciales 2003* “Año de la contraofensiva revolucionaria y la victoria antiimperialista”, Caracas, Ediciones de la Presidencia de la República.
- (2005): *Discursos Presidenciales 2004* “Año de la gran victoria popular y revolucionaria”, Caracas, Ediciones de la Presidencia de la República.
- (2005): *Discursos Presidenciales 2005* “Año del salto adelante. Hacia la construcción del socialismo del siglo XXI”, Caracas, Ediciones de la Presidencia de la República.
- Entrevista a Hugo Chávez de Miguel Bonasso en el *Diario Página 12*, 1 de junio de 2003.
- Entrevista con Manuel Caviezes, abril de 2005. En *Altermedia Info*: http://es.altermedia.info/general/hacia-donde-va-usted-presidente-chavez_1477.html.

Cheibub, José María (2007): *Presidentialism, Parliamentarism and Democracy*. New York, Cambridge University Press

Cheresky, Isidoro (2006): “Elecciones en América Latina: poder presidencial y liderazgo político bajo la presión de la movilización de la opinión pública y la ciudadanía”, *Revista Nueva Sociedad*, N° 206, Buenos Aires.

Cheresky, Isidoro (comp.) (2007): *Elecciones presidenciales y giro político en América Latina*, Buenos Aires, Ediciones Manantial.

Cifuentes, Eduardo (2009): “La segunda reelección y su futuro examen constitucional”, *Revista EGOB de Asuntos Públicos*, N° 2, Bogotá.

Colectivo de abogados José Alvear Restrepo (2009): “Extradición y otros mecanismos de impunidad. Seguimiento a la Ley de Justicia y Paz, en *¿Continuidad o desembrujo? La seguridad democrática insiste y la esperanza resiste*”, Bogotá, pp.103- 109.

Constitución Política de Colombia 1991 (2008): Bogotá, Editorial Atenea

Contreras, Joseph y Garavito; Fernando (2002): *Biografía no autorizada de Álvaro Uribe Vélez. (El señor de las sombras)*, Bogotá, Editorial Oveja Negra.

Coromoto Varel, Luz (2004): “La oligarquía venezolana en el siglo XXI: del estereotipo al anacronismo”, *Revista de filosofía práctica Dikaiosyne* N° 13, Universidad de Los Andes, Mérida.

Coronado, Sergio (2010): “Política social (2002- 2010). Pocos avances, grandes interrogantes”, en *Revista Cien días vistos por CINEP/ PPP* N° 70, Cinep Programa para la paz, pp. 40- 43.

Cortés, R., Materán, R. y Méndez, M (2008): “Análisis de la estrategia discursiva de Hugo Chávez de cara a la creación del PSUV”. *Disertaciones*, Vol. 1, N° 1, Caracas.

Crisis Group (2005): “Perspectiva de política y política presidencial”, Informe sobre América Latina N°14.

D'Alessandro, Martín:

- (2006): “Liderazgo político”, en Luis Aznar y Miguel De Luca (comps.) *Política. Cuestiones y problemas*, Buenos Aires, Ariel, 2006

- (2004): “¿Qué es la personalización de la política? Algunos hallazgos en los medios gráficos, 1983-1995”, en *Revista Argentina de Ciencia Política*, N° 7-8, Buenos Aires, Eudeba.

Dávila, Luis Ricardo (2001): “Populismo e identidades sociales en Venezuela: la construcción del orden político”, *Centro de Estudios Políticos y Sociales de América Latina*, Universidad de Los Andes (Mérida, Venezuela) *Acta Científica Venezolana*, 52: 126–137.

De la Torre, Carlos.

- (1996): “¡Un solo toque!: Populismo y cultura política en Ecuador”. Quito: CAAP,

-. (1999): “Veinte años de populismo y democracia”, *ICONOS N° 9*, España, pp. 80-87.

Díaz Rangel, Eleazar (2006): *Todo Chávez. De Sabaneta al socialismo del siglo XXI* Caracas, Planeta.

Dieterich, Heinz (1999): *Hugo Chávez nace un nuevo proyecto latinoamericano*, Buenos Aires, Editorial 21.

Diniz, Simone (2005). “Interacoes entre os poderes Ejecutivo e Legislativo no processo decisório: Avaliando sucesso e fracasso presidencial”, en *Revista Dados*, Vol. 48, N° 1, Río de Janeiro, pp. 333-369.

Duncan, Gustavo (2006): *Los señores de la guerra. De paramilitares, mafiosos y autodefensas en Colombia*, Bogotá, Planeta.

Duzán, María Jimena (2004): *Así gobierna Uribe*, Bogotá, Planeta.

Echandía Castilla, Camilo “El conflicto armado colombiano en los años noventa: cambios en las estrategias y efectos económicos”, *Revista Colombia Internacional* 49- 50, Universidad de Los Andes, 2001.

El Troudi, Haiman (2010): *La política Económica Bolivariana (PEB) y los dilemas de la transición socialista en Venezuela*, Monte Ávila editores, Caracas.

Elgie, Robert (1995): *Political Leadership in Liberal Democracies*, London, McMillan Press.

Ellner Steve:

- (2004): “Hugo Chávez y Alberto Fujimori. Análisis comparativo de dos variantes de populismo”, *Revista Venezolana de Economía y Ciencias Sociales* Año 10 N° 1, Caracas.
- (2008): “Las tensiones entre la base y la dirigencia en las filas del chavismo”, *Revista Venezolana de Economía y Ciencias Sociales*, vol. 14 N° 1, Caracas.
- (2006): “Las estrategias «desde arriba» y «desde abajo» del movimiento de Hugo Chávez”. *CDC*, Vol.23, N°.62, p.76-95.
- (2010): “La primera década del gobierno de Hugo Chávez. Logros y desaciertos”, *Cuadernos del Cendes*, Año 27, N° 74, Caracas.
- (2011): “Venezuela’s Social-Based Democratic Model: Innovations and Limitations”, *J. Lat. Amer. Stud* 43 Cambridge University Press.

Escamilla, Carolina y Holguín, Paola (2009): *Uribe de carne y hueso*, Bogotá, Editorial Norma.

Fabbrini, Sergio (2009): *El Ascenso del Príncipe democrático. Quien gobierna y como se gobiernan las democracias*, Buenos Aires, FCE.

Falleti Tulia (2006): “Una teoría secuencial de la descentralización: Argentina y Colombia en perspectiva comparada”, *Desarrollo Económico* Vol. 46, N° 183. Buenos Aires.

Febres Cordero, María M. y Bernardo Márquez (2006), "A Statistical Approach to Assess Referendum Results: the Venezuelan Recall Referendum 2004", *International Statistical Review*, 74(3).

Feinsilver, Julie M (2008): “Médicos por petróleo. La diplomacia médica cubana recibe una pequeña ayuda de sus amigos”, en *Revista Nueva Sociedad* N° 216, Buenos Aires.

Filmus, Daniel (2010): *Presidentes. Voces de América Latina*, Buenos Aires, Editorial Aguilar.

Francia, Néstor (2013): *Puente Llaguno. Hablan las víctimas, Once años después*, Fundación Imprenta de la Cultura, Guarenas, Venezuela.

Franco Cuervo, Ana Beatriz y Romero Clavijo, Bibiana Andrea (2007): *Senado 2006: impacto de la reforma político-electoral*, Bogotá, Editorial Universidad del Rosario.

Freidenberg, Flavia y Steven Levistky (2007): “Organización Informal de los Partidos Políticos en América Latina, *Desarrollo Económico* Volumen 46, N° 184, Buenos Aires.

Galindo Hernández, Carolina:

- (2007): “Neopopulismo en Colombia: el caso del gobierno de Álvaro Uribe Vélez”, en *Revista Iconos*. N° 27, Quito, pp. 147-162.

- (2005): “De la seguridad nacional a la seguridad democrática: nuevos problemas, viejos esquemas”. *Revista Estudio socio- jurídicos*, Año 7, N° 99, Bogota.

Garay, Luis Jorge (2003): “Políticas públicas y garantía de los DESC” en *El embrujo autoritario. Reelección. El embrujo continúa. Segundo año de gobierno de Álvaro Uribe*, Bogotá, pp. 33- 44.

García Guadilla, María Pilar (2009): “La praxis de los Consejos Comunales ¿Poder popular o instancia clientelar?”, en Ayala, Mario y Quintero, Pablo (comps) *Diez años de revolución en Venezuela. Historia, balance y perspectivas (1999- 2009)*, Buenos Aires, Editorial Maipue.

Garrido, Alberto (2008): *Chávez plan andino y guerra asimétrica*, Bogotá, Intermedio Editores.

Garzón Triana, Laura María (2011): *Análisis de los tres principales objetivos estratégicos de la política de seguridad democrática: consolidación del control estatal del territorio, confianza inversionista y cohesión social*, Universidad Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, Bogotá.

Gaviria, José Obdulio (comp.) (2008): *Verdades y mentiras de la Parapolítica*, Bogotá, Planeta.

Giraldo Isaza, Francisco (2010): “Balance económico de la administración Uribe primer periodo: 2002- 2006”, *Apuntes del Cenes*, 1º semestre, Bogotá.

Golinger Eva:

- (2009): *Cronología de la guerra de cuarta generación de EEUU contra Venezuela*, Caracas, Ministerio del Poder popular para la comunicación y la información.

- (2006): *Bush vs. Chávez. La guerra de Washington contra Venezuela*, Caracas, Monte Ávila Editores.

- (2005): *El Código Chávez. Descifrando la intervención de Estados Unidos en Venezuela*, Caracas, Monte Ávila Editores.

González Cruz, Diego J (2009): “Venezuela ante la baja de los precios del petróleo”, en *Revista Nueva Sociedad* N° 221, Buenos Aires.

González, Fernán (2010): “Gracias, General Uribe, por salvar la patria”, en *Revista Cien días vistos por CINEP/ PPP* N° 70, Cinep Programa para la paz, pp. 14- 17.

González, Jorge Iván (2010): “Mas inversión, más pobreza y más desigualdad”, en *Revista Cien días vistos por CINEP/ PPP* N° 70, Cinep Programa para la paz, pp.31- 33.

Greenstein, Fred (1997). “El impacto de la personalidad en el liderazgo presidencial norteamericano”. En *Psicología Política*, N° 15, Universidad de Princeton, pp. 7-15.

Guerrero, Modesto:

- (2013): *Chavismo sin Chávez. La lucha por el poder en tiempos de la transición*, Buenos Aires, Ediciones B.
- (2010): *Medios y poder en Venezuela: aporrea y la prensa comunitaria*, Buenos Aires, ediciones de la cooperativa de trabajo Red ECO.
- (2009): *Venezuela 10 años después. Dilemas de la Revolución Bolivariana*, Buenos Aires, Herramienta Ediciones.
- (2007): *Quién inventó a Chávez*, Buenos Aires, Ediciones B.

Gutiérrez Sanín, Francisco (2005): “Ilegalidad y sistema político en Colombia: la agenda de Uribe Vélez”, *Revista Nueva Sociedad* N° 192, Buenos Aires.

Hakim, Peter (2003): Latin American’s Lost Illusions: Dispirited Politics, *Journal of Democracy*, 14: pp. 108-122.

Hargrove, Erwin (1998): *The President as Leader: Appealing to the Better Angels of our Nature*. Kansas: University Press of Kansas.

Herring, Pendleton (1940). *Presidential Leadership. The political relation of Congress al Chief Executive*. New York: Rinehart y Company.

Hochstetler, Kathryn (2008): “Repensando el presidencialismo: desafíos y caídas presidenciales en el Cono Sur”, *Ediciones Universidad de Salamanca América Latina Hoy*, 49, pp. 51-72

Human Rights Watch (2008): *Una década de Hugo Chávez. Intolerancia política y oportunidades perdidas para el progreso de los derechos humanos en Venezuela*, New York.

Isacson, Adam (2010): “Uribe en Estados Unidos: tan cerca, tan lejos”, en *Las perlas uribistas. Radiografía del gobierno de Álvaro Uribe*, Debate, Bogotá.

Iturriza López, Reinaldo (2007): *27 de febrero de 1989: interpretaciones y estrategias*, Caracas, Fundación Editorial el perro y la rana.

Kalmanovitz, Salomón (2005): “Recesión y recuperación de la economía colombiana” *Revista Nueva Sociedad* N° 192, Buenos Aires.

Katz, Claudio (2008): *Las disyuntivas de la izquierda en América Latina*, Buenos Aires, Ediciones Luxemburg.

Kenneth M. Roberts:

- (2008): “¿Es posible una socialdemocracia en América Latina? *Revista Nueva Sociedad* N° 217, Buenos Aires.

- (1995): “Neoliberalism and the Transformation of Populism in Latin America. The Peruvian Case”, *World Politics* 48, pp. 82-116.

Jaramillo, Juan Fernando (2005): “La reelección presidencial inmediata en Colombia”, *Revista Nueva Sociedad* N° 198, Buenos Aires.

Lacabana, Miguel (2006): “Petróleo y hegemonía en Venezuela. La construcción de un proyecto nacional democrático-popular en el siglo XXI”, en Basualdo, Eduardo M.; Arceo, Enrique *Neoliberalismo y sectores dominantes. Tendencias globales y experiencias nacionales*, Buenos Aires, Clacso.

La Fuente, S y Meza, A (2004): *El acertijo de abril*, Caracas, Random House Mondadori.

Lalander Richard (2004): “La descentralización venezolana y el chavismo: Transformaciones del sistema político partidista”, *Revista Venezolana de Ciencia Política* N° 26, Caracas.

Lalander Richard y García Samaniego Francisco (2006): “Chavismo y oposición en Venezuela: Exploraciones críticas sobre la democracia, descentralización y populismo”, *Ciudad Política*, 2006

Lander Edgardo:

- (2010): ¿Quién ganó las últimas elecciones parlamentarias en Venezuela? En Servicios Públicos y Democracia en línea en: <<http://www.tni.org/es/article/%C2%BFqui%C3%A9n-gan%C3%B3-las-elecciones-parlamentarias-en-venezuela>>.

- (2004): “El referéndum revocatorio en Venezuela” *La Chronique des Amériques* N° 28, Montreal.

Lander Luis y López Maya Margarita:

- (2005): “Referendo Revocatorio y elecciones regionales en Venezuela: geografía electoral de la polarización”, *Revista Venezolana de Economía y Ciencias Sociales*, Volumen 11 N° 2, Caracas.

- (2000): “Elecciones del 2000 en Venezuela. Implantación de una nueva hegemonía” *Anuario Social y Político de América Latina y el Caribe* N° 4, Flacso / Unesco / Nueva Sociedad, Caracas, pp. 9-17.

- (2000): “Venezuela. La hegemonía amenazada” *Nueva Sociedad* N° 167, Caracas.

- (1999): “Venezuela. La victoria de Chávez El Polo Patriótico en las elecciones de 1998”, *Nueva Sociedad* N° 160, Caracas.

Lanzano Jorge:

- (2008a): “La tercera ola de las izquierdas latinoamericanas: entre el populismo y la socialdemocracia”, *Revista Encuentros Latinoamericanos, Centro de Estudios Interdisciplinarios de América Latina*, Uruguay, Edición 116, Año II, N° 2.

- (2008b): “La socialdemocracia criolla” *Nueva Sociedad* 217, Buenos Aires.

Leal Buitrago Francisco (2006): “La política de seguridad democrática 2002-2005”, *Análisis Político* N° 57, Bogotá.

Levitsky Steven y Kenneth Roberts (Eds) (2011): *The Resurgence of the Left in Latin America*. Baltimore: The Johns Hopkins University Press.

Levitsky Steven y Way Lucan (2010): *Competitive Authoritarianism. Hybrid Regimes after de Cold War*, Cambridge University Press, New York.

Levitsky Steven (2004): “Elecciones sin democracia. El surgimiento del autoritarismo competitivo”, *Estudios Políticos* N° 24, Medellín, enero- julio, pp. 159- 176.

Linz, Juan J (1990): “Perils of Presidentialism”, *Journal of Democracy*, 1 (1): 51-69.

Lissidini Alicia (2009): “Democracia directa en Venezuela: ¿Participación política controlada?” en Welp, Yanina y Uwe Serdult (comp.) *Armas de doble filo. La participación ciudadana en la encrucijada*, Buenos Aires, Editorial Prometeo.

López Caballero, Juan Manuel (2009): *Álvaro Uribe: El caballo de Troya del neoliberalismo*, Bogotá, Editorial Oveja Negra.

López Jiménez, José Daniel (2007): “¿El fin del carrusel parlamentario en Colombia? Un balance de los reemplazos en el Congreso de la República a partir de la Reforma Política de 2003”, *Perspectivas Internacional Vol. 3, N° 1*, Cali, pp. 69- 84.

López Maya Margarita:

- (2012): *La expresión “poder popular” en la era de Hugo Chávez (1999- 2012)*, Congreso LASA, San Francisco.

- (2010): “Venezuela once años de gestión de Hugo Chávez y sus fuerzas bolivarianas (1999- 2010)”, *Revista Temas y Debates* año 14, N° 20, Rosario, pp. 197- 226.

- (2008): “Venezuela post-referendo” en *Revista Nueva Sociedad* N° 215, Buenos Aires.

- (2008): “Venezuela: Hugo Chávez y el bolivarianismo” *Revista Venezolana de Economía y Ciencias Sociales*, Vol. 14, N° 3, Caracas, pp. 55-82

- (2006): “Venezuela 2001-2004: actores y estrategias en la lucha hegemónica”. En Caetano, Gerardo: *Sujetos sociales y nuevas formas de protesta en la historia reciente de América Latina*. CLACSO, Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, Buenos Aires.

Lozada Mireya (2004): “El otro es el enemigo: imaginarios sociales y polarización”, en *Revista Venezolana de Economía y Ciencias Sociales*, Vol. 10 N° 2, Caracas, pp. 195-209

Lozano Wilfredo “La izquierda latinoamericana en el poder. Interrogantes sobre un proceso en marcha” Nueva sociedad 197 mayo- junio 2005

Mahoney, James y Dietrich Rueschmeyer (2003): *Comparative Historical Analysis in the Social Sciences*, Cambridge, Cambridge University Press.

Mainwaring, Scott y Shugart, Matthew (2002): *Presidencialismo y democracia en América Latina*, Buenos Aires, Editorial Paidós.

Mainwaring, Scott (2012): *From Representative Democracy to Participatory Competitive Authoritarianism: Hugo Chávez and Venezuelan Politics*, (Mimeo)

“Manifiesto Democrático 100 puntos Álvaro Uribe Vélez. La Colombia que quiero”. Presidencia de la República, 2002 en línea <www.presidencia.gob.co> consulta 24 de abril de 2008.

Marcano Cristina y Barrera Alberto (2005): *Hugo Chávez sin uniforme: Una historia personal*, Buenos Aires, Debate.

Márquez, Trino (2004): “Presidencialismo, autoritarismo y culto a la personalidad (Hugo Chávez y el ejercicio del poder)”, *Revista Venezolana de Análisis y coyuntura*, Vol. X, N° 2, Caracas.

Mascareño (coord.) (2000): *Balance de la descentralización en Venezuela*, Nueva Sociedad, PNUD, ILDES, Caracas.

Masi, Andrés (2011): *El liderazgo presidencial de Raúl Alfonsín: ascenso, auge y caída (1966- 1989)*, Tesis para optar por el título de Doctor en Ciencia Política, UNSAM, Buenos Aires.

Medina, Yidis (2010): *Confieso. De rodillas en el baño presidencial*, Bogotá, Ediciones B.

Méndez Delgado, Elier y Lloret Feijóo, María del Carmen (2010): "Desempeño socioeconómico de Venezuela en la última década" en *Observatorio de la Economía Latinoamericana* N° 140.

Migus Ramain y Collon Michel (2007): *Las elecciones democráticas del 4-D, otra víctima de la propaganda de guerra*, Caracas, Colección Temas de Hoy

Misiones Bolivarianas (2007), Ministerio de Comunicación e Información, Colección Temas de Hoy, Caracas.

Monedero, Juan Carlos (2008): "Hacia una filosofía política del socialismo del siglo XXI. Notas desde el caso venezolano", *Cuadernos del Cendes* año 25. N° 68.

Morris, Hollman (2010): "El DAS, una cacería criminal", en *Las perlas uribistas. Radiografía del gobierno de Álvaro Uribe*, Bogotá, Debate.

Narvaja de Arnoux, Elvira: "El discurso latinoamericanista de Hugo Chávez", Editorial Biblio., Buenos Aires, 2008.

Nasi, Carlos (2007): "Derechización "a la colombiana" en tiempos confusos: un ensayo especulativo", *Revista Colombia Internacional* 66, Bogotá, pp. 162 - 183

Neustadt, Richard E (1960): *Presidential Power: The Politics of Leadership*, New York: Wiley.

Norden, Deborah (2008): "¿Autoridad civil sin dominación civil? Las relaciones político-militares en la Venezuela de Chávez", *Nueva Sociedad* N° 213, Buenos Aires.

Novaro, Marcos:

- (1995) "El debate contemporáneo sobre la representación política", *Desarrollo Económico*, Vol. 35, N° 137, Buenos Aires.

- (1994): *Pilotos de tormentas. Crisis de representación y personalización de la política en Argentina (1989- 1993)*"), Buenos Aires, Letra Buena.

O'Donnell, Guillermo, (1997): "¿Democracia delegativa?", en O'Donnell, Guillermo, *Contrapuntos. Ensayos escogidos sobre autoritarismo y democratización*, Buenos Aires, Paidós.

Ollier, María Matilde:

- (2011a) "Weak Democratic Institutionalization and Different Types of Presidential Leaderships in Inverted Democracy", *Whatever Happened to North-South*, International Political Science Association (IPSA,) European Consortium for Political Research (ECPR), Joint Conference Hosted by Brazilian Political Science Association, University of Sao Paulo, Brazil.

- (2011b) "Centralidad presidencial y debilidad institucional en las democracias delegativas" en O'Donnell (comp.) "Democracia Delegativa", Buenos Aires, Prometeo.

- (2010): "El liderazgo presidencial: síntoma de un patrón democrático sudamericano. El caso argentino 2003- 2007), *XXIX Congreso Internacional de Latin American Studies Association (LASA)*, Toronto.

- (2008): "La institucionalización democrática en el callejón: la inestabilidad presidencial en Argentina (1999-2003)", *América Latina Hoy*, Ediciones Universidad de Salamanca.

Orozco Tascón, Cecilia (2010): "Entre el cebo y el garrote. La prensa en la era Uribe", en *Las perlas uribistas. Radiografía del gobierno de Álvaro Uribe*, Bogotá, Debate.

Osorio Villegas María Cristina (2007): “Estudio sobre la forma de gobernar de Álvaro Uribe Vélez en su primer período presidencial (2002-2006)”, *Universidad Andina Simón Bolívar*, Quito.

Pachón, Mónica (2009): “Colombia 2008: éxitos, peligros y desaciertos de la política de Seguridad Democrática de la administración Uribe”, en *Revista de Ciencia Política*, Vol. 29, N° 2, Bogotá, pp. 327- 353.

Panizza, Francisco (2009): “Populismo: ¿qué nos dice el nombre?”, en Panizza, Francisco (comp.) *“El populismo como espejo de la democracia*, Buenos Aires, F.C.E.

Paramio, Ludolfo (2006): “Giro a la izquierda y regreso del populismo”, en *Revista Nueva Sociedad N° 205*, Buenos Aires.

Parker, Dick (2003): “¿Representa Chávez una alternativa al neoliberalismo?”, *Revista Venezolana de Economía y Ciencias Sociales*, vol. 9, n° 3, Caracas, pp. 83-110

Patiño, Luis y Cardona, Porfirio (2009): “El neopopulismo: una aproximación al caso colombiano y venezolano”, *Estudios Políticos*, 34, Medellín, pp. 163-184.

Pastor, Roberto Viciano y Rubén Martínez Dalmau (2008): “Necesidad y oportunidad en el proyecto venezolano de reforma constitucional (2007)”, *Revista Venezolana de Economía y Ciencias Sociales*, vol. 14, N° 2, Caracas, pp. 102-132.

Pecaut, Daniel:

- (2004): “Tradición liberal, autoridad y autoritarismo”, *Revista Política N° 42*, Universidad de Chile, Santiago, 2004

- (2008): “Las FARC. ¿Una guerrilla sin o sin fines?”, Bogotá, Grupo Editorial Norma.

Pérez Baralt (2000): “Cambios en la participación electoral venezolana”, *Cuestiones Políticas N° 25*, Maracaibo, julio diciembre, pp. 9- 21.

Petkoff, Tehodoro (2005): “Las dos izquierdas”, *Nueva Sociedad* 197 Buenos Aires.

Petras, James y La Haine (2008) “Venezuela: Democracia, socialismo e imperialismo” en línea <http://www.lahaine.org/b2-img08/petrasdemo.pdf>.

Pierson, Paul (2004): *Politics in Time*, Introducción, págs. 1-16 y cap. 3, págs. 79-102.

Pizarro Leongómez, Eduardo (2004): “Una luz al final del túnel. Balance estratégico del conflicto armado en Colombia”, *Nueva Sociedad* 192, Buenos Aires, pp. 72-84.

Quiroga, Daniel (2010): “Algunos interrogantes sobre la política de seguridad democrática”, en *Revista Cien días vistos por CINEP/ PPP* N° 70, Cinep Programa para la paz, pp. 12- 13.

Ramírez Niño Magda Juliana (2011): *Álvaro Uribe Vélez y el liderazgo racional-carismático* Universidad Nacional de Colombia, Facultad de Ciencias Humanas, Maestría en Sociología Bogotá.

Ramírez Peñalosa, Álvaro Esteban (2010): “Análisis comparado de la situación política del Partido Conservador en los mandatos de Andrés Pastrana (1998-2002) y Álvaro Uribe Vélez (2002-2006)”, *Universidad Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, Facultad de Ciencia Política y Gobierno*, Bogotá.

Ramírez, Socorro (2005): “Colombia y sus vecinos”, en *Revista Nueva Sociedad* N° 192, Buenos Aires.

Ramírez Gallego Franklin (2006), “Mucho más que dos izquierdas”, en *Revista Nueva Sociedad* N° 205, Buenos Aires.

Ramírez Peñalosa (2010): “Análisis Comparado de la situación política del Partido Conservador en los mandatos de Andrés Pastrana (1998- 2002) y de Álvaro Uribe (2002-2006)” Universidad Colegio Mayor de Nuestra señora del Rosario, Bogotá.

Ramírez Roa, Rosaly (2004): “La investigación y el pensamiento Ciencias Sociales en Venezuela: Análisis de un país en transformación”, *Reseñas y Debates* No 42, Caracas, pp. 309-318

Ramos Jiménez, Alfredo (2007): “Venezuela: las elecciones presidenciales de 2006. Des élections pas comme les autres”, *Nuevo Mundo*, Cuestiones del tiempo presente.

Renshon, Stanley (1998). *The Psychological Assessment of Presidential Candidates*. New York: New York University Press.

Restrepo, Luis Alberto (2005): “La difícil recomposición de Colombia”, en *Revista Nueva Sociedad* N° 192, Buenos Aires.

Rettberg, Angelika (2010): “Colombia 2009, progreso e incertidumbre”, en *Revista de Ciencia Política*, Vol. 30, N° 2, Bogotá, pp. 249- 273.

Rincón, Omar (2006): “Uribe y los medios de comunicación: Una democracia espectáculo y una ciudadanía contemplativa”, en *Deshacer el embrujo. Alternativas a las políticas del gobierno de Álvaro Uribe Vélez*, Bogotá, pp. 15- 21.

Rockman, Bert (1997): “The performance of presidents and prime ministers and of presidential and parliamentary systems”. En: Von Mettenheim, Karl (1997). *Presidential Institutions and Democratic Politics*. Baltimore: The John Hopkins University Press.

Rodríguez Araque Ali y Muller Rojas, Alberto (2008): *El socialismo venezolano y el partido que lo impulsará*. Ideas para el diálogo y el debate. Documento Interno del Partido Socialista Unido de Venezuela.

Rodríguez Carrera, Roberto José (2009): *Análisis comparado entre comunitarismo y Estado Comunitario en el discurso político de Álvaro Uribe Vélez durante su primer período presidencial 2002-2006* Monografía de Grado, Facultad de Ciencia Política y Gobierno Universidad Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario.

Rodríguez Gavarito, César, Barrett Patrick y Chávez; Daniel (2007): *La nueva izquierda en América Latina*, Buenos Aires, Norma.

Romero Jiménez, Juan Eduardo:

- (2005): “Usos e interpretaciones de la historia de Venezuela en el pensamiento de Hugo Chávez” *Revista Venezolana de Economía y Ciencias Sociales* Vol. 11 N° 2, Caracas.

- (2005): “Cambios socio-políticos e institucionales de la democracia venezolana en el gobierno de Hugo Chávez (1998-2002)”, *Revista Internacional de Filosofía Iberoamericana y Teoría Social, Utopía y Praxis Latinoamericana*, Año 8, N° 22, pp. 7 - 43

Romero, María Teresa y Cardozo, Elsa (2002): “Aproximación a la propuesta internacional de Hugo Chávez. Las concepciones de democracia e integración”, *Revista Venezolana de Coyuntura*, Vol. VIII, Nro 1, Caracas.

Rosas, Alexis (2005): *La noche de los Generales. La verdad sobre el golpe del 11-A (11 de Abril)*, Caracas: Edición del autor.

Rovira Kaltwasser, Cristóbal (2011): “Presentación”, en *Revista América Latina Hoy*, Vol. 57, Universidad de Salamanca, pp. 11- 12

Sader, Emir (2009): *El nuevo topo. Los caminos de la izquierda latinoamericana*, Buenos Aires, Siglo XXI Editores.

Santana Elizabeth (2007): *Barrio Adentro: misión esperanza, misión vida*, Caracas, Fundación El Perro y la rana.

Santeliz Granadillo, Andrés (2008): “La economía en diez años de gobierno revolucionario 1999-2009” *Revista Venezolana de Economía y Ciencias Sociales*, Vol. 14, n° 3 (sept.-dic.), Caracas, pp. 83-119.

Santos Villarreal Gabriel Mario (2009): *Referéndum Constitucional de Venezuela 2009 15 de febrero de 2009*, Centro de Documentación, Información y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Política Exterior México.

Schamis, Hector E (2006): “A “Left Turn” in Latin America?”, *Journal of Democracy* Volume 17, Number 4.

Skocpol, Theda (1984). Los estados y las revoluciones sociales, México D.F.: Fondo de Cultura Económica. Capítulo I “*La explicación de las revoluciones sociales: otras teorías*”, págs. 19-82.

Seligman, Lester (1956): “Presidential Leadership: The Inner Circle and Institutionalization”. En *Journal of Politics*, August, pp. 410-426.

Serbín, Andrés (2008): “Tres liderazgos y un vacío. América Latina y la nueva encrucijada regional” *Anuario CEIPAZ*, N°. 2, 2008-2009 , pp. 141-158.

Suárez Molano, José Olimpo (2006): *Seguridad y territorio en Colombia 2002 – 2006 análisis de la efectividad de la política de defensa y seguridad democrática del presidente Álvaro Uribe Vélez*, UPB Universidad Pontificia Bolivariana Centro Integrado para el desarrollo de la investigación – CIDI Area de Ciencias Política.

Tabares, Juan Fernando (2006): *Estoy cargado de tigre. Frases de Álvaro Uribe* Bogotá, Intermedio Editores.

Tokatlian, Juan Gabriel (2002): “Colombia: más inseguridad humana, menos seguridad regional”, en Francisco Rojas Aravena y Moufida Goucha (eds.) *Seguridad humana*,

prevención de conflictos y paz en América Latina y el Caribe, Santiago de Chile: Unesco/Flacso.

Torres, Juan Carlos (2008): *Operación Jaque. La verdadera historia*, Bogotá, Planeta.

Uribe López, Mauricio (2010): “Colombia y Venezuela: ¿democracias delegativas o autoritarismos competitivos?”, en *Nueva Sociedad* N° 227, Buenos Aires.

Valencia y Sevillano (2009): “La “parapolítica” un fenómeno que se resiste a desaparecer” en *Continuidad o Desembrujo. La seguridad democrática insiste y la esperanza resiste. Siete años de gobierno de Álvaro Uribe*, Bogotá, pp. 87- 101.

Valencia, León (2010): “Lo que ocultó Uribe en la negociación con los paramilitares”, en *Las perlas uribistas. Radiografía del gobierno de Álvaro Uribe*, Bogotá, Debate.

Valenzuela, Arturo (2004): Latin American Presidencies Interrupted. *Journal of Democracy*, 15 (4): 5-19.

Vargas Meza, Ricardo (2005): “Drogas, conflicto armado y seguridad global en Colombia”, en *Revista Nueva Sociedad* N° 192, Buenos Aires.

Vargas Velásquez, Alejo (2005): “El gobierno de Álvaro Uribe: proyecto y resultados. Políticas, estrategias y doctrinas”, en *Revista Nueva Sociedad* N° 192, Buenos Aires.

Vargas Velásquez, Alejo y García Pinzón, Viviana (2008): “Seguridad ciudadana y gasto público: reflexiones sobre el caso colombiano”, *América Latina Hoy*, 50, Salamanca, pp. 37-51.

Vázquez, Teófilo (2010): “Colombia: La seguridad democrática de Uribe (2002- 2010): en *Revista Cien días vistos por CINEP/ PPP* N° 70, Cinep Programa para la paz, pp. 8- 11.

Vélez López, Ana Cristina (2007): “Análisis de una postura editorial: El caso de la reelección del presidente colombiano Álvaro Uribe”, *Revista Confines*, N° 5, Monterrey, México.

Vera, Leonardo (2008): “Políticas sociales y productivas en un Estado patrimonialista petrolero: Venezuela 1999-2007”, en *Revista Nueva Sociedad* N° 215, Buenos Aires.

Viciano Pastor, Roberto y Martínez Dalmau, Rubén (2008) “Necesidad y oportunidad en el proyecto venezolano de reforma constitucional (2007)”, *Revista Venezolana de Economía y Ciencias Sociales*, Vol. 14, n° 2, Caracas, pp. 102-132.

Villegas Poljak, Ernesto (2010): *Abril golpe adentro*, Caracas, Editorial Galac.

Weisbrot, Mark, Rebecca Ray y Luis Sandoval (2009): *El gobierno de Chávez después de 10 años: Evolución de la economía e indicadores sociales*”, Washington, Center for Economic and Policy Research.

Weyland, Kurt (1996): “Neopopulism and neoliberalism in Latin America: Unexpected affinities”, *Studies in Comparative International Development (SCID)*, Vol. 31, Number 3.

Whitehead, Laurence (2011): *Democratización. Teoría y experiencia*, México D.F.: Fondo de Cultura Económica. Capítulo VIII: *La comparación de los procesos de democratización*, págs. 256-290.

Yamhure Fonseca, Ernesto y otros (2009): *Porque Si volver a reelegir al presidente*, Bogota, Editorial Oveja Negra Quintero Editores.

Yates, Jeff y Whithford, Andrew (1998): “Presidential Power and the United States Supreme Court”. En: *Political Research Quarterly*, 51, pp. 539-550.

Yates, Jeff (2002): *Popular Justice. Presidential Prestige and Executive Success in the Supreme Court*. New York: University of New York Press.

Zuleta Lleras, Felipe (2010): “Los “falsos positivos” crímenes de lesa humanidad”, en *Las perlas uribistas. Radiografía del gobierno de Álvaro Uribe*, Bogotá, Debate.

FUENTES

Venezuela

Agencia Venezolana de Noticias <<http://www.abn.info.ve>>.

Alo Presidente <<http://www.alopresidente.gob.ve>>.

Aporrea <<http://www.aporrea.org>>.

Canal Vive <<http://www.vive.gob.ve>>.

Consejo Nacional Electoral de Venezuela <<http://www.cne.gov.ve>>.

El Tiempo de Venezuela <<http://www.eltiempo.com.ve>>.

La Semana de Venezuela: <<http://www.semana.com.ve>>.

Ministerio de Comunicación e Información <<http://www.minci.gob.ve>>.

Noticiero Venevisión <<http://www.noticierovenevision.net>>.

Partido Socialista Unido de Venezuela <<http://www.psuv.org.ve>>.

Telesur <<http://www.telesurtv.net>>.

Trasnational Institute <<http://www.tni.org>>.

Colombia

Boletines de la paz <www.ideaspaz.org>.

Colombia- International Crisis Group <www.crisisgroup.org>.

Comisión Interamericana de Derechos Humanos OEA <<http://www.cidh.org>>.

Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE) <<http://www.dane.gov.co>>

Departamento Administrativo para la Prosperidad Social <<http://www.accionsocial.gov.co>>

Diario El Tiempo de Colombia <<http://www.eltiempo.com>>.

Diario El Espectador <<http://www.elespectador.com>>.

Diario La Jornada de México <<http://www.jornada.unam.mx>>.
Diario El Mundo de España <<http://www.elmundo.es>>.
Human Rights Watch <www.hrw.org>.
La Haine proyecto de desobediencia informativa <<http://www.lahaine.org>>.
La Silla Vacía <<http://www.lasillavacia.com>>.
Partido de la “U” <www.partidodelau.com>.
Presidencia de la República <<http://www.presidencia.gov.co>>.
Procuraduría General de la Nación <<http://www.procuraduria.gov.co>>.
Registraduría Nacional del Estado civil <<http://www.registraduria.gov.co>>.
Revista La Semana de Colombia <<http://www.semana.com>>.
Slide Share <<http://www.slideshare.net>>.

ENTREVISTAS

Venezuela

Haiman El Troudi. Actual director del Metro de Caracas y ex ministro de Chávez
Modesto Guerrero. Biógrafo de Chávez
Norberto Bacher. Profesor y especialista en temas económicos de PDVSA.
Carlos Rivero. Sociólogo y ex viceministro de economía de Chávez
Gustavo Insua. Coronel de la República Bolivariana de Venezuela.

Colombia

Álvaro Uribe. Ex presidente de la República
Jaime Bermúdez. Ex canciller de Uribe
Camilo Romero. Senador del PDA
Paola Holguín. Biógrafa de Uribe
Ángela Pinzón. Periodista acreditada en la Casa del Nariño